La Gran Depresión en América Latina

PAULO DRINOT Y ALAN KNIGHT
(coordinadores)

HISTORIA

PAULO DRINOT es doctor en historia moderna por la Universidad de Oxford y economista especializado en historia por la London School of Economics, enfocado en la historia de Latinoamérica, particularmente de Perú. Actualmente es profesor titular de historia latinoamericana en el University College de Londres. Entre sus obras publicadas están *Más allá de la dominación y la resistencia: estudios de historia peruana, siglos XVI-XX* (2005), *Historiografía, identidad historiográfica y conciencia histórica en el Perú* (2006) y *The Allure of Labor: Workers, Race, and the Making of the Peruvian State* (2011).

ALAN KNIGHT es un reconocido historiador y profesor emérito de la Universidad de Oxford. Ha centrado sus estudios en aspectos de la historia social, económica y política de América Latina, especialmente en la historia del siglo XX en México, labor que lo ha convertido en uno de los especialistas más reconocidos en la materia. Sus temas de análisis comprenden aspectos muy diversos, como la historia latinoamericana, la historiografía, el populismo, las relaciones internacionales de México con Inglaterra y Estados Unidos, entre muchos otros. En 2010 le fue otorgada la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca y en 2012 el doctorado *honoris causa* por parte de la Universidad Veracruzana. Entre sus obras más importantes se encuentran *The Mexican Petroleum Industry in the Twentieth Century* (1992), *Mexico. From the Beginning to the Spanish Conquest* (2002), *Caciquismo in Twentieth-Century Mexico* (2005), *Revolución, democracia y populismo en América Latina* (2005), *La Revolución mexicana* (FCE, 2010) y *La Revolución cósmica* (FCE, 2015).

SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA

LA GRAN DEPRESIÓN EN AMÉRICA LATINA

Traducción
ALEJANDRO PÉREZ-SÁEZ

La Gran Depresión en América Latina

PAULO DRINOT
ALAN KNIGHT
Coordinadores

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Primera edición en inglés, 2014
Primera edición en español, 2015
Primera edición electrónica, 2015

Título original: *The Great Depression in Latin America*
© 2014, by Duke University Press

Diseño de portada: Paola Álvarez Baldit
Imagen: Marcelo Pogolotti, Paisaje cubano (1933),
óleo sobre tela, 73 × 92 cm.
Cortesía del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana

D. R. © 2015, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.
Empresa certificada ISO 9001:2008

Comentarios:
editorial@fondodeculturaeconomica.com
Tel. (55) 5227-4672

www.fondodeculturaeconomica.com

ISBN 978-607-16-3430-6 (ePub)

Hecho en México - *Made in Mexico*

SUMARIO

Agradecimientos
Introducción, Paulo Drinot

I. Repercusiones de la Gran Depresión en la sociedad argentina, *Roy Hora*

II. Los trabajadores chilenos y la Gran Depresión,1930-1938, *Ángela Vergara*

III. Cambio y continuidad: Brasil de 1930 a 1945, *Joel Wolfe*

IV. La Gran Depresión en Perú, *Paulo Drinot y Carlos Contreras*

V. El proteccionismo exportador y la Gran Depresión. Compañías multinacionales, élite doméstica y políticas de exportación de Colombia, *Marcelo Bucheli y Luis Felipe Sáenz*

VI. Transición política en una época de extremos: Venezuela en los años treinta, *Doug Yarrington*

VII. Dictadores indigenistas y los orígenes problemáticos de la democracia en Centroamérica, *Jeffrey L. Gould*

VIII. Carácter y repercusiones de la Gran Depresión en México, *Alan Knight*

IX. Cuba: Depresión, imperialismo y revolución, 1920-1940, *Gillian McGillivray*

X. Panorama general de la Gran Depresión en América Latina, *Alan Knight*

Acerca de los autores
Índice

AGRADECIMIENTOS

La idea de este libro se gestó en una conferencia organizada por Paulo Drinot en la School of Advanced Study de la Universidad de Londres, en julio de 2011. Los editores reconocen con gratitud el apoyo de Maxine Molyneux, entonces directora del Institute for the Study of the Americas de la Universidad de Londres, y de la School of Advanced Study instituciones que hicieron posible este proyecto. Agradecemos también a Peter Fearon y Laurence Brown, quienes contribuyeron con ensayos para la conferencia original, así como a Rory Miller, Colin Lewis y Rosemary Thorp, entre otros, quienes realizaron útiles revisiones de los ensayos de la conferencia. Agradecemos especialmente a Valerie Milholland y Gisela Fosado de la Duke University Press por el interés y apoyo brindados a este libro. Dos revisores anónimos aportaron muy valiosas sugerencias y contribuyeron a mejorar sustancialmente esta edición.

INTRODUCCIÓN

PAULO DRINOT

Eric Hobsbawm rememora en su autobiografía la atmósfera enrarecida que imperaba en el Berlín de la República de Weimar durante sus años de adolescencia: "Los jóvenes de la clase media estaban al tanto del colapso de la economía mundial a través de los medios escritos, pero no lo resentían en la experiencia cotidiana. La crisis económica mundial era como un volcán que generaba erupciones políticas (…) y éstas contaminaban el aire que respirábamos".[1] Es bien sabido que los conflictos políticos de Europa condujeron, aunque no directa ni inexorablemente, a la llegada de los nazis al poder y a la segunda Guerra Mundial. En América Latina, la crisis económica mundial de la década de 1930 también desató o avivó conflictos políticos desde Río Grande hasta Tierra del Fuego. En la mayoría de los países cayeron los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, y fueron remplazados, casi siempre, por gobiernos de oposición. En el Cono Sur, por ejemplo, el gobierno reformista de Arturo Alessandri en Chile remplazó al régimen militar de Carlos Ibáñez, y del lado opuesto de la cordillera, el gobierno reformista de Hipólito Yrigoyen en Argentina fue remplazado por la dictadura militar del general José F. Uriburu. Como en Europa, estos conflictos políticos en ocasiones provocaron enfrentamientos militares, como el Conflicto de Leticia entre Colombia y Perú (1932-1933) y, a mucho mayor escala, la Guerra del Chaco (1932-1935), en la que Bolivia perdió una extensión considerable de su territorio, que fue incorporada a Paraguay.[2] Nuevamente, igual que en Europa, las perturbaciones políticas provocaron o aceleraron las transformaciones económicas, sociales y culturales en la región latinoamericana, entre ellas y quizá la más importante, la del papel del Estado.

Este libro explora dichas transformaciones como parte de un análisis más amplio de las repercusiones de la Gran Depresión en América Latina. La crisis financiera global de hoy, iniciada en 2007, ofrece una nueva perspectiva para revalorar la historia de lo que hasta ahora ha sido la crisis económica más profunda de la era moderna, aunque esto tal vez podría cambiar en el futuro mediato.[3] Por tratarse de uno de los procesos históricos clave del siglo XX, no es de sorprender que, una y otra vez, desde la década de 1930, tanto historiadores como economistas y formuladores de políticas, en su interés por extraer conclusiones y formular respuestas políticas aplicables a las crisis económicas más recientes y futuras, hayan elegido analizar más a fondo la Gran Depresión.[4] De hecho, la interpretación tanto de las causas de la

Gran Depresión como de los factores que permitieron la recuperación forman parte esencial de los debates actuales entre monetaristas y keynesianos, que han adquirido un impulso renovado en el contexto de la llamada Gran Recesión.[5] Desde la década de 1930, tanto los historiadores económicos como los economistas con inclinaciones históricas, entre ellos algunas figuras clave en la crisis económica actual, como Ben Bernanke, quien fue presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (cuyo libro *Essays on the Great Depression* [Ensayos sobre la Gran Depresión] se encuentra en su quinta edición), han definido el curso fundamental de estos debates. Como Bernanke postula: "El Santo Grial de la macroeconomía es entender la Gran Depresión".[6]

Por su parte, los historiadores sociales, políticos e incluso culturales, quienes en gran medida aceptan el sitio central que ha ocupado la Gran Depresión en los procesos históricos globales desde la década de 1930, han buscado ampliar el enfoque más allá de la crisis económica en sí (o los debates sobre cómo se alcanzó la recuperación) para analizar sus consecuencias en los procesos sociales, políticos y culturales a nivel mundial. En el contexto europeo, por supuesto, la Gran Depresión tiene un papel central de las interpretaciones sobre las causas de la segunda Guerra Mundial y el establecimiento del Estado de bienestar de la posguerra.[7] La Gran Depresión ha sido objeto de incontables estudios y se ha examinado ampliamente en el contexto historiográfico de los Estados Unidos, en particular en los ámbitos regionales y locales. En contraste, la historiografía de la región latinoamericana es más fragmentaria, y a pesar de la fuerte influencia que ejerció la crisis en la historia económica y sociopolítica en la mayoría de los países de la región, las publicaciones de estudios sistemáticos sobre la Gran Depresión son muy escasas. De hecho, el libro de Rosemary Thorp sobre la historia económica de la Gran Depresión, aparecido en 1984, se mantiene como uno de los pocos estudios extensos que abordan explícitamente la Depresión en términos comparativos transnacionales.[8] Una recopilación anterior, editada por Pablo González Casanova, reúne estudios útiles sobre varios países donde la perspectiva de la historia económica se combina con un punto de vista político más amplio.[9] No obstante, en décadas recientes muchos investigadores han analizado, aunque en ocasiones de manera indirecta, tanto la historia económica como las consecuencias sociales y políticas más amplias de la Gran Depresión en Latinoamérica.[10]

De tal manera, los capítulos de este libro se respaldan en una abundante literatura sobre la Gran Depresión y abordan los procesos asociados con el tema que han recibido mucho menos atención sistemática en estudios comparativos transnacionales anteriores. Entre los historiadores existe un consenso general sobre el parteaguas que la Gran Depresión representa para América Latina. El impacto económico directo de la depresión mundial varió de un país a otro. Algunos países de la región, por ejemplo Chile, fueron particularmente afectados, como también muchas economías del Caribe y, en particular, Cuba; no obstante, hacia mediados de la década de 1930, la mayoría de los países recuperaron sus niveles del PIB anteriores a

1929.[11] Como Victor Bulmer-Thomas sugiere, la recuperación siguió patrones y ritmos distintos, pues los diversos sectores de la economía desempeñaron papeles muy distintos en la recuperación de cada país.[12] No obstante, como puede argumentarse, Latinoamérica entera supo enfrentar la Depresión mejor que sus vecinos del norte. Sobra decir que en los Estados Unidos el desplome fue catastrófico, pues provocó una disminución considerable del empleo y trajo como consecuencia un cambio significativo en las políticas económicas de Franklin D. Roosevelt, caracterizadas por la intervención del Estado (el *New Deal* [Nuevo Reparto]) y el proteccionismo (a través de la ley arancelaria de 1930, conocida como Ley Smoot-Hawley). Con el golpe significativo que representó la caída de los precios de los productos básicos, Canadá experimentó de igual manera un desempleo masivo que quizás afectó hasta a 50% de la población adulta y, al igual que su vecino del sur, adoptó reformas similares al *New Deal* para enfrentar el impacto de la Depresión. Sin embargo, todavía en 1939, ni los Estados Unidos ni Canadá habían logrado recuperar sus niveles del PIB anteriores a la recesión mundial.[13]

Al igual que en Europa y los Estados Unidos, en América Latina e incluso en África y Asia la Depresión puso en marcha o aceleró una serie de procesos que iban más allá del impacto económico.[14] Evidentemente, no es nada sencillo establecer la relación causal directa entre un fenómeno económico como la Gran Depresión y los procesos sociales, políticos e incluso culturales.[15] En el caso de África, los historiadores han argumentado sobre la medida en que la Gran Depresión incidió en un debilitamiento o fortalecimiento del sistema económico colonial en el continente (sobre todo en términos de la expansión de la producción de materias primas y productos de exportación *(commodities)* a expensas del sector agrícola "tradicional"), o bien, sobre si, debido a los intentos de las autoridades coloniales para generar mayores ingresos a través del aumento de la carga tributaria a sus súbditos en un momento de crisis económica, la recesión estimuló las protestas y aceleró el proceso de descolonización que ganaría impulso después de la segunda Guerra Mundial.[16] De igual manera, en el caso de Asia los historiadores han debatido sobre el grado de impacto que la crisis mundial pudo tener en el surgimiento del nacionalismo en la India y en gran parte del Sudeste asiático, donde la recesión afectó a la economía colonial y, como en África, agudizó las tensiones entre el gobierno colonial y sus súbditos.[17] En cuanto a Japón, los historiadores argumentan que el éxito relativo de las medidas contra la recesión bajo el modelo protokeynesiano tuvo lugar en el contexto de un creciente nacionalismo militarista disparado por la inminente bancarrota de las democracias liberales asociadas a la Gran Depresión.[18] En los debates sobre el impacto de la Gran Depresión en China, algunos autores sugieren que todas aquellas regiones desvinculadas de la economía mundial no fueron mayormente afectadas, en contraste con el impacto mucho más significativo de la Depresión en las ciudades costeras orientales, como Shanghái y Hong Kong, que se encontraban más firmemente insertadas en la economía mundial.[19] De manera más general y por encima del impacto de la

crisis mundial en sí, los historiadores tienden a atribuir las grandes transformaciones ocurridas en China después de la Depresión al impacto de la ocupación japonesa de Manchuria en 1931 y a la guerra sino-japonesa de 1937.

En los Estados Unidos, los historiadores por lo general concuerdan en que la Gran Depresión y su principal legado, el *New Deal*, provocaron importantes cambios políticos e institucionales. La depresión mundial indujo la creación de lo que Emily Rosenberg ha llamado el "Estado regulador", extendió los alcances del gobierno federal y fortaleció el poder ejecutivo.[20] Además, como Maldwyn Jones señala, la Gran Depresión impulsó una importante reestructuración política: "Al establecerse una coalición que incluía al Sur, a la maquinaria política de las grandes ciudades norteñas, el movimiento obrero organizado, la intelectualidad y los sectores menos favorecidos, se aseguró el remplazo de los republicanos por los demócratas como partido mayoritario". De esa manera, a pesar de que la riqueza y el ingreso no fueran afectados, Jones afirma que "el *New Deal* redistribuyó el poder entre el capital y el trabajo".[21] En resumen, la Gran Depresión y el *New Deal* transformaron a la sociedad estadunidense de manera profunda y perdurable. A fines de la década de 1980, Anthony J. Badger señaló: "No es de sorprender que los estadunidenses lleven impresos en la memoria los acontecimientos de los años treinta, pues sus vidas se desarrollan bajo una economía política en la que sigue perdurando el sello del *New Deal* impuesto por Franklin D. Roosevelt".[22] El recuerdo de esta experiencia se hizo particularmente evidente en los debates recientes sobre las iniciativas de políticas sociales propuestas por el presidente Barack Obama, en particular el plan de salud conocido como "Obamacare".[23] Más recientemente, Ira Katznelson ha sugerido que el *New Deal* fue un momento crucial no sólo de la historia moderna de los Estados Unidos, sino también de la historia moderna de la democracia liberal. Katznelson argumenta que el *New Deal* fue una reacción al temor que rodeaba tanto a los dictadores de derecha como de izquierda, y a su vez demostró que la democracia liberal tenía futuro a pesar del colapso de la economía capitalista: "Entre los numerosos logros del *New Deal*, ninguno fue más importante que haber demostrado que la democracia liberal (…) podía gobernar con eficacia frente a grandes peligros (…) y que no todos los intentos de reformas no revolucionarias estaban necesariamente condenados al fracaso".[24]

Los relatos generales sobre el impacto de la Gran Depresión en América Latina se inclinan de igual modo a considerar a la depresión mundial como un punto de inflexión tanto económico como político, caracterizado por un cambio en el ámbito económico del modelo de crecimiento basado en la exportación al modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), y en el ámbito político, del gobierno oligárquico al gobierno populista. En su estudio sobre el impacto global de la Depresión, por ejemplo, Dietmar Rothermund considera que la principal repercusión política de la crisis en la región latinoamericana fue el populismo.[25] Este punto de vista lo comparten Robert Findlay y Kevin O'Rourke en su reciente estudio sobre la economía mundial: "En gran parte de Latinoamérica la consecuencia

fue el populismo, donde los obreros urbanos unieron esfuerzos con los capitalistas para arrebatar el poder a las élites terratenientes tradicionalmente orientadas hacia las exportaciones".[26] En décadas recientes, los historiadores han revisado estas teorías planteadas inicialmente, aunque no exclusivamente, por científicos sociales bajo un enfoque que acusa la influencia de la teoría de la dependencia.[27] La Gran Depresión tuvo sin duda un impacto decisivo en el pensamiento económico de la región latinoamericana; el estructuralismo propuesto inicialmente en la década de 1940 por Raúl Prebisch a través de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) fue consecuencia directa de la interpretación que él mismo, entre otros, hizo de la depresión mundial.[28] No obstante, la recesión no influyó significativamente en el cambio del modelo de crecimiento basado en las exportaciones al de industrialización por sustitución de importaciones. Los historiadores de la economía han demostrado que en los pocos países en los que se implementó el ISI, normalmente hubo también un resurgimiento del sector exportador, y no un simple remplazo de éste.[29] De igual manera, los historiadores sociales y políticos han cuestionado la idea de que la historia política de América Latina después de la década de 1930 se pueda reducir al surgimiento de una política caracterizada por la cooptación o "incorporación" exitosa de fuerzas populares (del sector obrero y de la clase media en particular) por líderes populistas carismáticos como Lázaro Cárdenas en México, Getulio Vargas en Brasil y, una década después, Juan Domingo Perón en Argentina.[30]

En resumen, el ISI y el populismo no son la explicación adecuada para el conjunto de procesos generados o acelerados por la Gran Depresión. La crisis en efecto generó un contexto político y social propicio para el cambio, aunque, la orientación del cambio difirió de un país a otro. Es evidente que las interpretaciones contemporáneas de la Gran Depresión permiten discernir algunos patrones generales, sobre todo en lo referente a las implicaciones en el *statu quo,* lo cual ayuda a explicar los procesos políticos divergentes que conformaron a la región latinoamericana en el periodo posterior a la Depresión. Para los "detractores" del viejo orden, la Gran Depresión demostraba la profunda inestabilidad de los fundamentos de dicho orden y establecía las condiciones perfectas para llevar a cabo un cambio radical e incluso una revolución abierta. Para los "defensores" del viejo orden, la Gran Depresión obligaba a hacer una revaloración de las suposiciones y jerarquías que sustentaban su privilegio, aunque sólo fuera para evitar un cambio más drástico e incontrolable. Las perturbaciones sociales y la movilización de nuevas fuerzas políticas, en particular de la izquierda, que surgieron o cobraron ímpetu en el contexto de la Gran Depresión en toda la región latinoamericana, dieron como resultado tanto el establecimiento de regímenes autoritarios (como en Argentina, Brasil, Cuba y Perú) como el fortalecimiento de los gobiernos militares (como en la mayor parte de Centroamérica), y en algunos casos contados, el desarrollo de políticas reformistas dirigidas tanto a satisfacer las demandas sociales como a debilitar las alternativas políticas más radicales. En varios países se combinaron con cierto

éxito la represión y el reformismo (social).

De hecho, los historiadores suelen aceptar el fortalecimiento del Estado como una de las consecuencias más importantes de la Gran Depresión. Sin embargo, no se trató de un simple caso de proteccionismo progresivo. En todo el mundo, tanto en los contextos democráticos como en los autoritarios, el impacto de la Gran Depresión fortaleció la idea de que el Estado debía participar en el manejo de la economía y la sociedad.[31] De hecho, varios gobiernos latinoamericanos posteriores a la Depresión, igual que hiciera Franklin D. Roosevelt en los Estados Unidos, adoptaron políticas económicas y sociales que, sin importar cuán lento e inadecuado pudiera ser su proceso, marcaron una nueva dirección no sólo en la economía política sino, en términos más generales, en la construcción nacional y la formación del Estado.[32] De igual manera, en los países con gobiernos de derecha y de izquierda surgió un nuevo énfasis en la "participación del Estado", con políticas desarrolladas tanto por gobiernos progresistas, como los de Lázaro Cárdenas en México y Arturo Alessandri en Chile, como por gobiernos conservadores, como los de Getulio Vargas en Brasil y Óscar Benavides en Perú. Es obvio que dichos desarrollos, a los que Peter Temin se refiere como "socialismo en muchos países", no fueron exclusivos de América Latina o de los Estados Unidos de la época de Roosevelt.[33] En muchos sentidos, los países latinoamericanos reaccionaron y a la vez contribuyeron a la ola de nuevas "políticas sociales" que se extendió por gran parte del mundo en los años treinta. Si bien los historiadores han analizado el impacto de esta ola en las economías del Atlántico Norte, todavía es necesario estudiar con el mismo detalle el caso de la región latinoamericana o, de hecho, analizar de manera especial tanto la dimensión transnacional del proceso como la reacción inmediata de los diferentes países y su adopción de las nuevas políticas sociales propias del periodo posterior a la depresión mundial.[34]

Tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, las políticas sociales de los años treinta respondieron a la manera en que las élites nacionales percibieron su efecto en el empleo y, más ampliamente, en el bienestar social de la población latinoamericana; la Depresión era percibida como una que agudizaba los conflictos de clase y creaba las condiciones para un cambio político revolucionario, pues hacía más atractivos los movimientos políticos radicales. En muchos países, el impacto de la Gran Depresión en los obreros fue devastador, en particular para los que laboraban en las industrias de exportación que colapsaron, como en el caso de los trabajadores del salitre en Chile o los del azúcar en Cuba, sectores en los que se disparó la tasa de desempleo. Incluso en las sociedades con amplios sectores de subsistencia, como México, Perú y la mayor parte de Centroamérica, que aguantaron las crisis económicas anteriores gracias a la agricultura de subsistencia, el impacto de la recesión en el campo fue notorio. En las ciudades y en los enclaves de exportación desde México hasta Argentina, un amplio sector de la clase obrera de diversas industrias resultó sensiblemente afectado. Asimismo, un sector aún más diverso de trabajadores de clase media se vio igualmente afectado por la eliminación de puestos de trabajo, recortes salariales, y el

impacto de la crisis en sus estilos de vida.[35] En este contexto, los proyectos políticos radicales tanto de derecha como de izquierda, aunque particularmente de esta última, adquirieron un arraigo considerable en la mayoría de los países latinoamericanos y representaron una seria amenaza para el *statu quo*. Las políticas sociales de los años treinta, que consistieron principalmente en legislación social y programas sociales dirigidos a contrarrestar el impacto de la crisis en la población trabajadora, constituyeron, junto con la represión directa, un elemento al que las élites recurrieron para frenar el descontento popular y minar el atractivo que ejercían el comunismo y otros movimientos radicales presentes en toda la región. No obstante, las políticas sociales de los años treinta no fueron exclusivamente reactivas, sino también la expresión de cambios más amplios a nivel transnacional en la interpretación de las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Como en todo el mundo, el factor de género influyó directamente en el proceso de aplicación de las nuevas políticas sociales de Latinoamérica después de la Depresión. Hace algunos años, Linda Gordon sugirió que el cambio paradigmático de la asistencia social en los Estados Unidos del esquema asistencial al de la seguridad social —precipitado por la Gran Depresión y consolidado a través de la Ley de Seguridad Social de 1935 *(Social Security Act)* — se gestó a la par de un cambio retórico de las necesidades (asociadas con el ámbito privado y el activismo social de las mujeres) a los derechos (asociados con el ámbito público y la actividad legislativa promovida por los varones). Lo mismo ocurrió en varios países latinoamericanos, como Argentina, Chile y Perú, que en la década de 1930 comenzaron a establecer las bases de sus sistemas de bienestar social. En estos procesos, las nuevas instituciones estatales establecidas para proteger y "mejorar" a la población muchas veces absorbieron o marginaron las iniciativas de asistencia y protección social impulsadas años atrás por mujeres activistas. Otra característica común a dichas instituciones fue la adopción de una orden de género en el trabajo, ya que los reformistas sociales perseguían, bajo las formas operativas específicas de las nuevas instituciones, asegurar el establecimiento y bienestar del modelo tradicional del hombre como sostén económico de la familia y la mujer como ama de casa. Debido a la escasez de información, es difícil estimar el grado de incidencia que pudo tener la Gran Depresión en el índice de empleo entre hombres y mujeres (aunque hay evidencia que sugiere que las mujeres fueron las primeras en ser despedidas), pero también porque, con algunas excepciones como la industria manufacturera textil, no era frecuente encontrar hombres y mujeres laborando en los mismos sectores (o, dicho de otro modo, muchos sectores eran específicos para hombres o mujeres). Lo que sí es posible distinguir es el surgimiento de un nuevo discurso de género posterior a la Depresión, moldeado por las nuevas políticas sociales tanto en América Latina como en el resto del mundo, que buscaba situar al hombre en el trabajo y a la mujer en el hogar.[36]

Si la perspectiva de género se manifestó tanto en el impacto como en las respuestas a la Gran Depresión, también la cuestión racial fue un factor de peso. Igual que en los Estados

Unidos, donde durante la Depresión la tasa de desempleo entre la población afroamericana fue mucho más alta que entre la población blanca, y donde el racismo con frecuencia deterioraba la solidaridad laboral, en gran parte de América Latina la cuestión racial también influyó en la forma de enfrentar la crisis.[37] Los trabajadores migrantes negros provenientes de Jamaica, Trinidad, Haití y otras islas del Caribe fueron los primeros en ser despedidos de las industrias del azúcar y el banano. En Costa Rica, por ejemplo, "durante los años treinta, el racismo contra los negros prevaleció tanto en las exigencias de los trabajadores hispanos como en la postura de los dueños de las plantaciones de Costa Rica y se reflejaron directamente en la ley de 1934, que prohibía la contratación de 'gente de color' en las nuevas plantaciones de la United Fruit en la costa del Pacífico".[38] En Perú, la discriminación de la población asiática alcanzó niveles más altos y tuvo como consecuencia la implementación de leyes laborales que implícitamente desfavorecían a los trabajadores de ascendencia japonesa.[39] En México aparecieron leyes similares y explícitas en contra de los chinos; este racismo antichino, tanto de abajo arriba como en el sentido opuesto, culminó con la deportación de millares de chinos en 1931.[40] En gran parte de la región, el antisemitismo, siempre presente, se volvió más abierto y surgieron movimientos y partidos fascistas con programas racistas explícitos.[41] La Depresión económica fue también un proceso racial en tanto que las políticas sociales formuladas después de la crisis se basaron en políticas anteriores con claros tintes raciales e incluso eugenésicos, como en los casos de Europa y Norteamérica. En los Estados Unidos, por ejemplo, la Ley de Seguridad Social de 1935 excluía en gran medida a los afroamericanos.[42] En América Latina, la discriminación racial influyó también en las políticas sociales subsiguientes a la Depresión, aunque en grados distintos y con resultados diferentes en cada país.[43]

En resumen, aunque este libro reconoce la importancia del impacto económico de la recesión mundial, su enfoque se extiende más allá de la historia económica de la Gran Depresión tratada en libros anteriores y aborda la historia social, institucional y política de la Depresión, además de estudiar la interacción entre las transformaciones regionales y los procesos globales.[44] Este libro, en el que colaboran investigadores con amplia experiencia en la historia de diferentes países de América Latina, contribuye a profundizar en nuestro conocimiento de este momento crucial de la historia de la región. Los autores de los capítulos analizan bajo distintos enfoques las repercusiones de la Gran Depresión en los países estudiados. Asimismo, los periodos cubiertos en cada caso varían, algunos enfocados en los albores del decenio de 1930 y otros en una extensión mayor. Estas diferencias revelan tanto las áreas de conocimiento e interés de cada autor como el grado variable de repercusión de un país a otro. Lamentablemente, como suele ocurrir en libros de estas características, ha sido imposible incluir a todos los países de Latinoamérica. Entre las omisiones importantes figuran Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay, así como varios países centroamericanos (Panamá, Costa Rica, Honduras) y, con la excepción de Cuba, los países caribeños de habla hispana.

Por lo mismo, el análisis de la repercusión de la Gran Depresión en América Latina que presentamos queda inevitablemente incompleto. A pesar de estas omisiones y, por supuesto, sin dar por concluido el tema, los capítulos de este libro ofrecen perspectivas nuevas y útiles sobre la Gran Depresión de los años treinta que sin duda serán de interés para un amplio espectro de investigadores y no sólo para los historiadores de los países estudiados. Además, nuestra intención es proporcionar al lector una perspectiva comparativa oportuna sobre la crisis global de hoy. A continuación describiré brevemente cada capítulo.

Comenzamos con el análisis de Roy Hora sobre el efecto de la Gran Depresión en Argentina a través del estudio de dos perspectivas historiográficas opuestas de la crisis. El autor aborda inicialmente una primera historiografía que considera a la Gran Depresión como el punto de ruptura de la época de exportaciones y el inicio de un periodo de desarrollo industrial. Según este punto de vista, la crisis generó las condiciones para el surgimiento de un antagonismo fundamental entre el movimiento obrero urbano y las fuerzas conservadoras vinculadas con los gobiernos autoritarios de la Concordancia. Por el contrario, una historiografía más reciente hace hincapié en la continuidad entre los periodos de antes y después de la crisis. Hora sugiere que estas dos líneas historiográficas no se oponen sino se complementan y deben verse como parte de un proceso histórico general marcado por la creciente homogeneización de la sociedad argentina posterior al término de la inmigración masiva. Como Hora señala, no todos los sectores de la población argentina resintieron los efectos de la recesión de la misma manera. Para la clase media la repercusión de la recesión fue de corta duración: los cambios demográficos (reducción en el número de miembros de las familias), el acceso a la educación y los patrones de consumo sugieren un rápido restablecimiento de las tendencias de movilidad social que prevalecían antes de la Depresión. Por el contrario, la clase obrera se vio afectada por una caída pronunciada de los salarios y un aumento de la represión estatal. Hora argumenta que estos factores contribuyeron a la creciente influencia del comunismo en los sindicatos obreros y concluye su ensayo señalando que estos dos desarrollos explican la definición del carácter del peronismo, que se apoyó en los sindicatos y a la vez destacó los valores y aspiraciones de la clase media, que los obreros acabaron por adoptar como propios.

En el caso de Chile, Ángela Vergara, igual que Hora, se centra en el efecto de la Depresión en la clase obrera. La autora hace hincapié en el impacto devastador de la recesión sobre los obreros chilenos en diferentes partes del país y en particular en las salitreras del norte, donde el desempleo masivo (el número de trabajadores del salitre desempleados ascendía a 50 000 en 1932) fue consecuencia directa del desplome de la economía de exportación. Con un hincapié especial en la corporación de obreros, Vergara explora las respuestas de los trabajadores a la crisis a través de sus demandas para el cumplimiento de las leyes laborales y la impugnación de las políticas que restringían su movilidad durante el proceso de desalojo de las oficinas del salitre en el norte de Chile, como también su búsqueda de empleo en otras

partes. Analiza de manera similar el desarrollo de las negociaciones entre los obreros y los funcionarios gubernamentales en torno a los programas de asistencia social estatales y privados, como comedores y albergues para trabajadores desempleados. Por último, la autora estudia la corporación de trabajadores a través de la formación de sindicatos y la negociación colectiva. A diferencia de las interpretaciones que se centran en cómo la Gran Depresión permitió a los regímenes populistas absorber los movimientos obreros, Vergara recurre a estos estudios de caso para demostrar cómo, incluso en un contexto de devastación económica, desempleo masivo y represión política, los obreros chilenos fueron capaces de influir en la formación de un sistema de relaciones laborales que caracterizaría a las políticas chilenas por casi medio siglo.

De la misma manera que Vergara, Joel Wolfe destaca la capacidad limitada del régimen de Getulio Vargas para cooptar la mano de obra brasileña en los albores de la Gran Depresión. El autor cuestiona la percepción generalizada del éxito de Vargas en este rubro y argumenta que la mayoría de sus políticas dirigidas a la clase obrera fracasaron. Asimismo, destaca que otras políticas de construcción estatal, centradas en programas educativos y culturales, fueron menos eficaces de lo que suele aceptarse. Un Estado federal débil, más debilitado aún por el efecto de la Gran Depresión y confrontado por intereses de estados poderosos como São Paulo y Minas Gerais, no tuvo la capacidad para llevar a cabo reformas en un vasto país obstaculizado por una deficiente infraestructura de transportes. No obstante, Wolfe sugiere el éxito de Vargas en el establecimiento de los fundamentos de lo que más adelante se conoció como “desarrollismo”. Las políticas adoptadas durante la recesión, como el sistema de apoyo federal a los precios del café y la promoción estatal de nuevos sectores industriales como el del acero, el automotriz y, más adelante, el petrolero, así como la colonización del interior del país, representaron un cambio significativo en las ideas sobre las fuentes de prosperidad económica de Brasil y sobre el papel del Estado en la promoción del desarrollo económico.

En Perú, como en Brasil, la Gran Depresión creó las condiciones para la transformación del papel del Estado en los ámbitos económico y social, como lo demuestra el ensayo de Paulo Drinot y Carlos Contreras. El efecto de la Gran Depresión en el país fue contundente pero relativamente breve. La economía peruana, con una diversidad regional considerable, se recuperó rápidamente gracias al crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, la Depresión provocó perturbaciones económicas y tensiones sociales que generaron una mayor innovación e intervención del Estado. En el ámbito económico, los gobiernos peruanos de los años treinta, que carecían de crédito internacional, elevaron los impuestos con el fin de financiar programas de asistencia social, emitieron moneda fiduciaria, crearon un banco central y establecieron bancos de fomento para ampliar el crédito a los sectores agrícola, industrial y minero. En el ámbito social, se establecieron instituciones como comedores para obreros, vivienda popular y un fondo de seguridad social para obreros con el fin de contrarrestar la creciente influencia que en la clase obrera ejercían las fuerzas de la izquierda, como el

Partido Comunista Peruano y la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Los beneficios de estas políticas fueron marginales y no impulsaron una transformación radical ni de la economía ni de la sociedad peruanas; de hecho, contribuyeron a fortalecer el poder de la oligarquía, en ese tiempo aliada con los militares. No obstante, como Drinot y Contreras sostienen, estas políticas reflejaron desarrollos significativos en la construcción del Estado centrados exclusivamente en el sector "moderno", lo cual fue reflejo de la idea que prevalecía entre las élites peruanas sobre la incompatibilidad de la población indígena para el progreso nacional.

En el caso de Colombia, el efecto de la Gran Depresión, como en Perú, fue de corta duración y las exportaciones fueron el medio principal para alcanzar la recuperación económica. Como Marcelo Bucheli y Luis Felipe Sáenz señalan, la Gran Depresión contribuyó a un cambio político significativo, pues el Partido Liberal remplazó al de los conservadores, quienes habían ostentado el poder desde el inicio del siglo XX. No obstante, la Gran Depresión no provocó un cambio importante en las políticas económicas; de hecho, se continuó la política de "proteccionismo de las exportaciones", introducida en décadas anteriores, que fue fortalecida por los nuevos gobiernos liberales de los años treinta. Igual que en otros países de América Latina en el contexto de la Gran Depresión, el Estado colombiano también adoptó un papel activo en el manejo de la economía; sin embargo, como Bucheli y Sáenz demuestran, el proteccionismo de las exportaciones no operó de la misma manera en los diferentes sectores exportadores, conformados por diversas configuraciones entre burguesías locales y capitales extranjeros. En el sector cafetalero, el Estado trabajó estrechamente con los dueños de las plantaciones nacionales que controlaban el sector, a quienes otorgó líneas crediticias y apoyo para promover las exportaciones. En el sector bananero, el Estado tuvo que competir con la United Fruit Company, empresa con la que colaboró estrechamente en la protección de sus intereses en contra de los intereses locales de la zona bananera del Magdalena y sus propios trabajadores. Por último, en la industria del petróleo, en su mayor parte bajo el control de la Standard Oil, los gobiernos de la era de la Depresión abandonaron su antiguo antagonismo para apoyar activamente las inversiones y exportaciones.

En Venezuela el efecto económico de la Gran Depresión también fue leve. Como Doug Yarrington demuestra, Venezuela fue capaz de superar la crisis gracias a sus considerables ingresos procedentes del petróleo; no obstante, la economía agrícola de exportación, y en particular el sector cafetalero, no salieron tan bien librados y muchos venezolanos resintieron las consecuencias. Más que la Depresión en sí, fue la muerte del dictador venezolano Juan Vicente Gómez en 1935 lo que impulsó una nueva era en la política venezolana, aunque de hecho conformada indirectamente por el efecto general de la Depresión en la economía mundial. Como Yarrington argumenta, el sucesor de Gómez, Eleazar López Contreras, llevó a acabo una serie de reformas políticas y sociales moderadas dirigidas a cambiar el curso establecido durante las tres décadas de la dictadura gomecista, que generaron las condiciones

propicias para el florecimiento de fuerzas políticas de izquierda, centro y derecha y permitieron el retorno al país de los líderes políticos en el exilio. Bajo un clima que pronto se volvió altamente polarizado, en el que las tensiones locales y la manera en que el país asimiló conflictos internacionales como la Guerra Civil española constituyeron factores importantes, López adoptó una forma de democracia excluyente que limitó la participación de la izquierda comunista y desalentó las movilizaciones populares en general. Esta democracia excluyente, argumenta Yarrington, caracterizó la política venezolana en mayor o menor grado hasta la elección de Hugo Chávez.

Si la Gran Depresión provocó indirectamente el establecimiento de la democracia excluyente en Venezuela, en El Salvador, Guatemala y Nicaragua contribuyó al encumbramiento de las dictaduras militares que cooptaron a los grupos indígenas, como Jeffrey L. Gould demuestra. La pronunciada caída de los precios de los productos básicos de exportación, y del café en particular, golpeó de manera importante a Centroamérica. No obstante, como en el resto de América Latina, la recuperación fue bastante rápida. Aun así, el efecto de la crisis en una población empobrecida fue, en términos generales, devastador, lo que contribuyó a la movilización indígena y al apoyo de la naciente izquierda que condujeron al surgimiento de movimientos obreros y campesinos. Mediante planteamientos distintos pero relacionados entre cada país, Gould demuestra que tras la represión inicial de estos movimientos populares los regímenes militares de los tres países adoptaron y adaptaron ideologías de mestizaje e indigenismo e implementaron políticas —como el apoyo a las comunidades indígenas en sus conflictos de tierras con los ladinos— que lograron romper las alianzas entre las comunidades indígenas y la izquierda. Como Gould afirma, el establecimiento de relaciones clientelares entre las comunidades indígenas y los militares terminó por cooptar exitosamente a los indígenas y les permitió enfrentar la usurpación de sus tierras por parte de los ladinos. Estas relaciones fueron fuertes y duraderas y continuaron configurando la compleja trayectoria histórica de la democracia en Centroamérica en la segunda mitad del siglo XX.

Al norte del continente, las repercusiones de la Gran Depresión en México fueron profundas y en gran medida consecuencia de los estrechos vínculos de la economía mexicana con la de los Estados Unidos y la vulnerabilidad ante sus fluctuaciones. Alan Knight demuestra que en México, como en toda la región latinoamericana, la recesión se caracterizó por la caída de los precios de las exportaciones, la dramática reducción de los ingresos públicos y el creciente desempleo, agravado por la repatriación de millares de trabajadores mexicanos de los Estados Unidos. No obstante, igual que en toda la región latinoamericana, la recuperación de la economía mexicana fue relativamente rápida, en parte gracias a la diversificación de los productos de exportación del país y en parte porque el incipiente sector industrial de la nación supo aprovechar las oportunidades creadas por la caída de las importaciones, como también porque su amplio sector de subsistencia pudo absorber el exceso de mano de obra disponible.

Sin embargo, señala Knight, las políticas gubernamentales también desempeñaron un papel crucial en la recuperación del país, en particular a partir de la llegada de Alberto Pani a la Secretaría de Hacienda en 1932, quien adopto una serie de políticas protokeynesianas. En términos generales, Knight demuestra que la naturaleza revolucionaria del régimen mexicano influyó sobre el proceso de recuperación de México: las principales políticas de Cárdenas (1934-1940), entre ellas la reforma agraria, el fortalecimiento de las instituciones obreras y el nacionalismo económico pragmático (la nacionalización de industrias clave como el petróleo y los ferrocarriles), siguieron la lógica de una política de Estado radical que tuvo su origen en la Revolución, pero que recibió un nuevo impulso a raíz de las perturbaciones económicas creadas por la depresión mundial.

Junto con Chile, Cuba fue uno de los países de América Latina que más padeció con la Gran Depresión. Como en México, su suerte estaba cercanamente ligada a la de los Estados Unidos. El cambio al monocultivo de la caña de azúcar precipitado por la Independencia, a fines del siglo XIX, había dejado a Cuba particularmente vulnerable a las fluctuaciones desfavorables del precio de los productos básicos que precedieron a la depresión mundial y a la conmoción económica provocada por el desplome de 1929, especialmente en el contexto proteccionista de los Estados Unidos bajo la Ley SmootHawley. Como Gillian McGillivray demuestra, el impacto económico de la Depresión en Cuba no tardó en provocar protestas laborales a las que Machado respondió con represión. Tras la Revolución de 1933 que condujo al derrocamiento de Machado, el gobierno de Grau San Martín adoptó políticas que, según McGillivray, aumentaron significativamente la participación del Estado en la economía y en cierto modo favorecieron a algunos sectores de la población, como los trabajadores del azúcar, los afrocubanos y las mujeres, en un esfuerzo para contrarrestar los movimientos sociales y el activismo de la izquierda que comenzaban a incidir en el carácter de la sociedad cubana y en su forma de relacionarse con el capital estadunidense. Bajo el gobierno de Batista, las fuerzas populares fueron reprimidas cada vez con mayor intensidad; sin embargo, al menos hasta el golpe de Estado de 1952 y en especial durante el periodo de 1937 a 1944 en que Batista viró a la izquierda como respuesta a los procesos locales y globales, las fuerzas populares siguieron influyendo en las políticas nacionales y conquistando importantes beneficios. Después del golpe militar de Batista en 1952, las fuerzas populares sin duda fueron duramente reprimidas, pero, como es sabido por todos, resurgieron en 1959 con consecuencias de muy largo aliento.

En el capítulo final, Alan Knight emprende un análisis comparativo de los procesos de los países estudiados de manera individual en los capítulos previos. Knight concluye que la Gran Depresión fue sin duda un episodio crucial en la historia de América Latina, pero aunque se trató de un proceso único y trascendental, sus efectos variaron de un país a otro (y particularmente en los países grandes, de una región a otra, de un sector económico a otro, de una clase social a otra y así sucesivamente). Así, a pesar de encontrarse profundamente

insertada en la economía global que colapsó en 1929, en general la región latinoamericana enfrentó la crisis relativamente bien y se recuperó bastante rápido; algunos países resistieron mejor que otros y la mayoría, como se ha argumentado hasta aquí, lo hicieron mejor que los Estados Unidos, país que tardó mucho más tiempo en recuperarse. Asimismo, el proceso de recuperación varió de un país a otro y sólo algunos países adoptaron el modelo de sustitución de importaciones. En términos políticos hubo también considerables diferencias; no obstante, la inestabilidad política fue común a toda la región y en la mayoría de los casos la Depresión provocó la ruptura del *statu quo* (liberal o autoritario) y el remplazo por su antinomia. Sin embargo, en términos estructurales, Knight concibe la crisis como un acelerador, antes que un desarrollo *ab initio*, de los cambios políticos y sociales, como industrialización, urbanización, migración interna, la expansión del Estado y su papel tanto en la economía como en la sociedad, lo que tuvo consecuencias más amplias en la configuración política de la mayor parte de la región.

Para concluir, es interesante notar que, a diferencia de la Gran Depresión, la crisis actual no ha desatado perturbaciones políticas —al menos hasta ahora— en América Latina ni en otras partes del mundo como las que en los años treinta padecieron Eric Hobsbawm, sus contemporáneos del Berlín de la República de Weimar y la población latinoamericana. Podemos atribuirlo tentativamente al hecho de que en la mayoría de los países los políticos con conciencia histórica —quienes por conocer el pasado han evitado repetirlo— han adoptado políticas proactivas que han evitado caer en una crisis más profunda, o bien al hecho de que los elementos políticos (e ideológicos) que impulsaron las perturbaciones sociales de los años treinta no se encuentran presentes en el momento actual. Si bien la Gran Depresión se interpretó sencillamente como una crisis capitalista, la Gran Recesión suele interpretarse como la crisis de una "variante" particular del capitalismo (caracterizado por mercados financieros no regulados y gobiernos incompetentes). Asimismo, mientras que el efecto de la Gran Depresión incrementó los retos para la democracia liberal, tanto desde la izquierda como desde la derecha, existen pocos indicios de que pueda existir hoy un amplio consenso para el surgimiento de una alternativa a la democracia liberal, sea "convencional" o modificada con elementos participativos, a pesar de todos los llamados de la izquierda para formular un "replanteamiento radical" o del surgimiento y fortalecimiento de los movimientos neofascistas en varias partes de Europa.[45] Esta situación podría cambiar si la crisis actual llegara a extenderse (con la parálisis e incluso la desintegración del motor chino de la economía global) o a acentuarse todavía más (llevando al desplome del euro y a la disolución de la Unión Europea). Hasta ahora, América Latina ha enfrentado la crisis económica mejor que otras regiones, pero, como en los años treinta, el destino de la región se encuentra firmemente atado al del resto del mundo.

[1] Eric Hobsbawm, *Interesting Times: A Twentieth-Century Life*, Abacus, Londres, 2012, p. 47.

[2] La derrota en la Guerra del Chaco condujo a la revolución "nacionalista" de 1952 (una vez más, no directa ni inexorablemente, aunque la cadena de transmisión es claramente discernible). Véase Merilee S. Grindle y Pilar Domingo (eds.), *Proclaiming Revolution: Bolivia in Comparative Perspective*, Institute of Latin American Studies, Londres, 2003.

[3] Entre los ejemplos recientes están: Peter Temin, "The Great Recession and the Great Depression", *Daedalus* 139, núm. 4 (2010), pp. 115-124; Richhild Moessner y William A. Allen, "Banking Crises and the International Monetary System in the Great Depression and Now", *Financial History Review* 18 (2011), pp. 1-20; Miguel Almunia *et al.*, "From Great Depression to Great Credit Crisis: Similarities, Differences and Lessons", *Economic Policy*, CEPR, CES, MSH, 25 (2010), pp. 219-265, y la edición especial de *Oxford Review of Economic Policy* editada por Nicholas Crafts y Peter Fearon, "Lessons from the 1930s", 23, núm. 3 (2010). Un estudio anterior a 2007 es Harold James, *The End of Globalization: Lessons from the Great Depression*, Harvard University Press, Cambridge, 2002.

[4] Véase el interesante debate de Rick Szostak sobre las cambiantes descripciones macroeconómicas de la Gran Depresión desde los años treinta. Rick Szostak, "Evaluating the Historiography of the Great Depression: Explanation or Single-Theory Driven?", *Journal of Economic Methodology* 12, núm. 1 (2005), pp. 35-61.

[5] Véase el libro reciente de Robert Skidelsky sobre Keynes, entre otros. Robert Skidelsky, *Keynes: The Return of the Master*, Penguin, Londres, 2010.

[6] Ben Bernanke, *Essays on the Great Depression*, Princeton University Press, Princeton, 2004, p. 5. Toda una serie de estudios se centra en la historia económica de la Gran Depresión. Los principales son: Charles Poor Kindleberger, *The World in Depression, 1929-1939*, University of California Press, Berkeley, 1973; Peter Temin, *Did Monetary Forces Cause the Great Depression?*, Norton, Nueva York, 1976; Peter Temin, *Lessons from the Great Depression*, MIT Press, Cambridge, 1989; Barry J. Eichengreen, *Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1919-1939*, Oxford University Press, Nueva York, 1992.

[7] Como destaca Mark Mazower, "La gran crisis del capitalismo […] conllevó serias implicaciones políticas: existía o no una alternativa democrática al fascismo y el comunismo capaz de enfrentar los retos de los años treinta". Mark Mazower, *Dark Continent: Europe's Twentieth Century*, Penguin, Londres, 1998, p. 117.

[8] Rosemary Thorp (ed.), *Latin America in the 1930s: The Role of the Periphery in World Crisis*, Macmillan, Londres, 1984. Dietmar Rothermund dedica un capítulo y partes de otro a América Latina en su estudio sobre el impacto global de la crisis, donde resume en gran parte los capítulos del libro de Thorp. Véase Dietmar Rothermund, *The Global Impact of the Great Depression, 19291939*, Routledge, Londres, 1996, capítulos 10 y 14. Para estudios que sitúan a la Gran Depresión en una historia más amplia de las crisis financieras, véase Carlos Marichal, *Nueva historia de las grandes crisis financieras: Una perspectiva global, 1873-2008*, Debate, Madrid, 2010.

[9] Pablo González Casanova (ed.), *América Latina en los años treinta*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, México, 1977.

[10] Quizá sea innecesario ofrecer aquí una larga relación de títulos. Algunos ejemplos de esta literatura en inglés son, en el caso de Brasil y Chile, John D. French, *The Brazilian Workers' ABC: Class Conflict and Alliances in Modern São Paulo*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1992; Joel Wolfe, *Working Women, Working Men: São Paulo and the Rise of Brazil's Industrial Working Class, 1900-1955*, Duke University Press, Durham, 1993; Barbara Weinstein, *For Social Peace in Brazil: Industrialists and the Remaking of the Working Class in São Paulo, 1920-1964*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1996; Patrick Barr-Melej, *Reforming Chile: Cultural Politics, Nationalism, and the Rise of the Middle Class*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2001; Karin Alejandra Rosemblatt, *Gendered Compromises: Political Cultures and the State in Chile, 1920-1950*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2000; Thomas Miller Klubock, *Contested Communities: Class, Gender, and Politics in Chile's El Teniente Copper Mine, 1904-1951*, Duke University Press, Durham, 1998.

[11] Como Victor Bulmer-Thomas señala, "la combinación más desastrosa fue el alto grado de apertura, la pronunciada caída en el precio de las exportaciones y la drástica disminución en el volumen de las exportaciones. Por lo tanto, no es de sorprender que las repúblicas más seriamente afectadas hayan sido Chile y Cuba, donde el impacto externo se resintió con mayor intensidad". Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, p. 201.

[12] *Ibid.*, pp. 194-237.

[13] Robert Broughton Bryce, *Maturing in Hard Times: Canada's Department of Finance during the Great Depression*, McGill-Queen's University Press, Kingston, Ontario, 1986, p. 64; J. M. Bumsted, *A History of the Canadian Peoples*, Oxford University Press, Don Mills, Ontario, 2007, pp. 334-341.

[14] Algunos de estos procesos tuvieron un impacto de largo alcance. Como señala Carlos Marichal, la suspensión del pago de la deuda externa en gran parte de América Latina a principios de los años treinta, tras el drástico aumento en las tasas de interés reales, no sólo ayudó a atenuar el impacto de la crisis financiera y comercial, sino que "también redujo la dependencia financiera durante más de una década. Vale la pena recordar esta experiencia histórica". Carlos Marichal, *A Century of Debt Crises in Latin America: From Independence to the Great Depression*, Princeton University Press, Princeton, 1989, p. 228.

[15] Véase el capítulo X, de Alan Knight, en este libro.

[16] Véase Bogumil Jewsiewicki, "The Great Depression and the Making of the Colonial Economic System in the Belgian Congo", *African Economic History* 4 (1977), pp. 153-176; Jane I. Guyer, "The Depression and the Administration in South-Central Cameroon", *African Economic History* 10 (1981), pp. 67-79; Moses Ochonu, *Colonial Meltdown: Northern Nigeria in the Great Depression*, Ohio University Press, Athens, 2009.

[17] Como señala Dietmar Rothermund, "Mahatma Gandhi inició su famosa Marcha de la Sal en la primavera de 1930. Inicialmente no tuvo relación alguna con el impacto de la Depresión, pero cuando los campesinos del norte de la India se vieron afectados por la caída de los precios del trigo, se unieron a su campaña y le inyectaron un nuevo aliento de vida". Dietmar Rothermund, *An Economic History of India: From Pre-Colonial Times to 1991*, Routledge, Londres, 1993, pp. 98-99. Para una perspectiva revisionista sobre el impacto de la Gran Depresión en el Sudeste asiático, véase Peter Boomgard e Ian Brown (eds.), *Weathering the Storm: The Economies of Southeast Asia in the 1930s Depression*, KITLV, Leiden, 2000.

[18] Véase Myung Soo Cha, "Did Takahashi Korekiyo Rescue Japan from the Great Depression?", *Journal of Economic History* 63, núm. 1 (2003), pp. 127-144. Véase también Mark Metzler, *Lever of Empire: The International Gold Standard and the Crisis of Liberalism in Prewar Japan*, University of California Press, Berkeley, 2006.

[19] Este punto es sin duda relevante en gran parte del continente americano. Véase Tomoko Shiroyama, *China during the Great Depression: Market, State, and the World Economy, 1929-1937*, Harvard University Press, Cambridge, 2009; y Tim Wright, "Distant Thunder: The Regional Economies of Southwest China and the Impact of the Great Depression", *Modern Asian Studies* 34, núm. 3 (2000), pp. 697-738.

[20] Emily S. Rosenberg, *Spreading the American Dream: American Economic and Cultural Expansion, 1890-1945*, Hill and Wang, Nueva York, 1982, pp. 176-201.

[21] Maldwyn A. Jones, *The Limits of Liberty: American History, 1607-1992*, Oxford University Press, Oxford, 1995, p. 476.

[22] Anthony J. Badger, *The New Deal: The Depression Years, 1933-1940*, Macmillan, Houndmills, 1989.

[23] De acuerdo con Paul Krugman, por ejemplo, "El señor Obama asumió sus funciones en una nación con marcadas desigualdades entre el ingreso y la riqueza. Sin embargo, el *New Deal* tuvo un impacto revolucionario en tanto que empoderó a los trabajadores y creó una sociedad de clase media que duró cuarenta años, mientras que el *Big Deal* de Obama (alusión al comentario sarcástico de Joe Biden sobre las reformas de salud como 'a big fucking deal' [un tema muy importante]) se ha limitado a equilibrar políticas marginales". Paul Krugman, "The Big Deal", *New York Times*, 20 de enero, 2013.

[24] Ira Katznelson, *Fear Itself: The New Deal and the Origins of Our Time*, W. W. Norton, Londres, 2013, p. 6.

[25] Rothermund, *Global Impact of the Great Depression…*, *op. cit.*, pp. 140-144.

[26] Ronald Findlay y Kevin H. O'Rourke, *Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium*, Princeton University Press, Princeton, 2007, p. 468.

[27] Es posible que estos académicos, entre ellos los renombrados Fernando Henrique Cardoso, Andre Gunder Frank y Celso Furtado, hayan sido de los primeros que insistieron sobre la importancia que tuvo la Gran Depresión en la creación de condiciones para una forma más autónoma para el desarrollo impulsado por la industrialización. Véase Andre Gunder Frank, *Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil*, Monthly Review Press, Nueva York, 1967; Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, *Dependencia y desarrollo en América Latina*, Siglo XXI, México, 1969; Celso Furtado, *Economic Development in Latin America: Historical Background and Contemporary Problems*, Cambridge University Press, Cambridge, 1970.

[28] Como señala Joseph L. Love, "Los intereses de Prebisch en la industrialización como solución para los problemas económicos de América Latina surgieron inicialmente del deseo, compartido por muchos contemporáneos argentinos, de hacer a Argentina menos 'vulnerable', una vulnerabilidad dolorosamente manifiesta durante todo el periodo de 1930 a1945". Joseph L. Love, "Economic Ideas and Ideologies in Latin American since 1930", en Leslie Bethell (ed.), *Ideas and Ideologies in Twentieth Century Latin America*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 224. Sobre ECLA y Prebisch, véase también Joseph L. Love, *Crafting the Third World: Theorizing Underdevelopment in Rumania and Brazil*, Stanford University Press, Stanford, 1996. Véase también Valpy Fitzgerald y Rosemary Thorp (eds.), *Economic Doctrines in Latin America: Origins, Embedding and Evolution*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2005.

[29] Véase Thorp, *Latin America in the 1930s…*, *op. cit.*, y Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America…*, *op. cit.* Véase también Marcelo de Paiva Abreu, "The External Context", en Victor Bulmer-Thomas, John Coastworth y Roberto Cortés Conde (eds.), *The Cambridge Economic History of Latin America*, vol. 2, *The Long Twentieth Century*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pp. 104-118.

[30] Véase, *a fortiori*, Daniel James, *Resistance and Integration: Peronism and the Argentine Working Class, 1946-1976*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, y French, *The Brazilian Workers' ABC*, *op cit.* Para un interesante resumen de los debates sobre populismo en América Latina, véase Alan Knight, "Populism and Neo-Populism in Latin America, especially Mexico", *Journal of Latin American Studies* 30, núm. 2 (1998), pp. 223-248.

[31] Para esos mismos cambios en el contexto europeo, véase, por ejemplo, Philip Nord, *France's New Deal: From the Thirties to the Postwar Era*, Princeton University Press, Princeton, 2010.

[32] Como apunta Victor Bulmer-Thomas, muchos de los cambios en el ámbito económico no fueron planeados; no alcanzaron para desatar una "revolución intelectual". Las circunstancias obligaban a las autoridades a implementar reformas, sin embargo, éstas sentaron el camino y en cierta medida contribuyeron a un nuevo paradigma de la sustitución de importaciones, que entraría en vigor en décadas posteriores. Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America…*, *op. cit.*, p. 234. Véase también Rosemary Thorp, *Progress, Poverty and Exclusion: An Economic History of Latin America in the 20th Century*, Inter-American Development Bank, Washington, 1998, pp. 97-125.

[33] Véase Temin, *Lessons From the Great Depression… op. cit.*

[34] Véase, en particular, Daniel T. Rodgers, *Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1998.

[35] Sobre las clases medias en este periodo, véanse, entre otros, David S. Parker, *The Idea of the Middle Class: White-Collar Workers and Peruvian Society, 1900-1950*, Penn State University Press, University Park, 1998; Brian P. Owensby, *Intimate Ironies: Modernity and the Making of Middle-Class Lives in Brazil*, Stanford University Press, Stanford, 1999; Patrick Barr-Melej, *Reforming Chile: Cultural Politics, Nationalism and the Rise of the Middle Class*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2001. Véase también A. Ricardo López y Barbara Weinstein (eds.), *The Making of the Middle Class: Toward a Transnational History*, Duke University Press, Durham, 2012.

[36] Véase Linda Gordon, "Social Insurance and Public Assistance: The Influence of Gender in Welfare Thought in the United States, 1890-1935", *American Historical Review* 97, núm. 1 (1992), pp. 19-54; Donna J. Guy, *Women Build the Welfare State: Performing Charity and Creating Rights in Argentina, 1880-1955*, Duke University Press, Durham, 2009; Karin Alejandra Rosemblatt, *Gendered Compromises: Political Cultures and the State in Chile, 19201950*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2000; Paulo Drinot, *The Allure of Labor: Workers, Race and the Making of the Peruvian State*, Duke University Press, Durham, 2011.

[37] Sobre los afroamericanos durante la Gran Depresión, véase Cheryl Lynn Greenberg, *To Ask for an Equal Chance: African Americans in the Great Depression*, Rowman and Littlefeld, Nueva York, 2009.

[38] Laura Putnam, *The Company They Kept: Migrants and the Politics of Gender in Caribbean Costa Rica, 1870-1960*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2002, p. 73. Para leyes similares y más en general para el racismo en contra de los indios occidentales en toda la región circuncaribe, véanse, entre otros, Dario Euraque, "The Banana Enclave, Nationalism, and Mestizaje in Honduras, 1910s-1930s", en Aviva Chomsky y Aldo Lauria-Santiago (eds.), *Identity and Struggle at the Margins of the Nation-State: The Laboring Peoples of Central America and the Hispanic Caribbean*, Duke University Press, Durham, 1998, pp. 151-168, y Barry Carr, "Identity, Class, and Nation: Black Immigrant Workers, Cuban Communism, and the Sugar Insurgency 1925-1934", *Hispanic American Historical Review* 78, núm. 1 (1998), pp. 83-116.

[39] Véase el capítulo 4 de este libro.

[40] Gerardo Rénique, "Race, Region and Nation: Sonora's Anti-Chinese Racism and Mexico's Postrevolutionary Nationalism, 1920s-1930s", en Nancy P. Appelbaum, Anne S. Macpherson y Karin Alejandra Rosemblatt (eds.), *Race and Nation in Modern Latin America*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2003, pp. 211-236; Robert Chao Romero, *The Chinese in Mexico, 1882-1940*, University of Arizona Press, Tucson, 2011, pp. 155-190; Grace Peña Delgado, *Making the Chinese Mexican: Global Migration, Localism and Exclusion in the U.S.-Mexico Borderlands*, Stanford University Press, Stanford, 2012, pp. 157-189.

[41] Sobre antisemitismo en el contexto del surgimiento del nativismo y el antiinmigracionismo, así como sobre la implementación de políticas antijudías en Brasil en los años treinta, véase Jeffrey Lesser, *Welcoming the Undersirables: Brazil and the Jewish Question*, University of California Press, Berkeley, 1995, capítulos 2 y 3. Sobre el antisemitismo en el contexto del surgimiento de los movimientos fascistas en Argentina, Brasil y Chile, véase la parte 3 de Sandra McGee Deutsch, *Las Derechas: The Extreme Right in Argentina, Brazil and Chile, 1890-1939*, Stanford University Press, Stanford, 1999.

[42] Véase Robert C. Lieberman, *Shifting the Color Line: Race and the American Welfare State*, Harvard University Press, Cambridge, 2001, e Ira Katznelson, *When Affirmative Action Was White: An Untold History of Racial Inequality in Twentieth-Century America*, Norton, Nueva York, 2005.

[43] En Perú, por ejemplo, la ley de seguridad social de 1936 fue diseñada para excluir de cobertura a la población indígena. Véase Drinot, *The Allure of Labor…*, *op. cit.*, capítulo 6.

[44] Rosemary Thorp, *Latin America in the 1930s…*, *op. cit.*

[45] Sobre la necesidad de un "replantamiento radical" después de la "implosión" del "libremercado capitalista global" después de la crisis bancaria y el colapso crediticio de 2007-2008, véase Stuart Hall, Doreen Massey y Michael Rustin, "After Neoliberalism: Analysing the Present", consultado el 29 de abril de 2013, http://www.lwbooks.co.uk/journals/soundings/pdfs/s53hallmasseyrustin.pdf

I. REPERCUSIONES DE LA GRAN DEPRESIÓN EN LA SOCIEDAD ARGENTINA*

ROY HORA

DOS HISTORIOGRAFÍAS han encuadrado los estudios sobre el periodo que corre entre la crisis de 1930 y la aparición del coronel Juan Perón en el escenario público una década y media más tarde. La primera, dominante en las décadas de 1960 y 1980, subraya los aspectos excluyentes de esta etapa histórica. De acuerdo con esta perspectiva, el golpe de Estado liderado por el general Uriburu el 6 de septiembre de 1930, y luego el empleo sistemático del fraude electoral por parte de los gobiernos de la Concordancia (1932-1943), aseguraron la primacía de las fuerzas conservadoras, revirtiendo de esta manera la creciente marginación que estos grupos habían experimentado desde la primera mitad de la década de 1910, cuando la puesta en vigencia de un nuevo régimen electoral que favoreció la expansión de la participación popular convirtió a la Unión Cívica Radical en el actor predominante de la vida política. Por otra parte, esta interpretación enfatiza que la dictadura de Uriburu, y luego de sus herederos Justo y Ortiz, fue acompañada de iniciativas dirigidas a reforzar los privilegios de los grupos propietarios, afectados primero por los gobiernos radicales (1916-1930) y luego por las consecuencias de la Gran Depresión. De este modo, pues, la restauración conservadora tuvo un efecto negativo y generalizado sobre el bienestar popular, tanto en el campo como en la ciudad, afectando las mejoras alcanzadas en este terreno a lo largo de las décadas previas, y en particular durante los años de gobierno radical.

Esta manera de concebir la década de 1930 sostiene que este retroceso social y político corrió a la par de profundas transformaciones económicas. Como resultado de la contracción del mercado agrícola mundial, el sector exportador de Argentina perdió dinamismo. Cuando comenzó la recuperación económica, hacia 1933, el impulso principal provino del sector manufacturero dirigido al mercado interno. La recuperación se apoyó en políticas públicas que, como consecuencia del cambio en la base política del Estado, favoreció a la élite económica mucho más que durante la época democrática que finalizó en 1930. Después del golpe de Estado que depuso de su cargo a Yrigoyen, el país cayó bajo el gobierno de la Concordancia, una suerte de frente unificado de las fuerzas de centro y derecha que habían sido excluidas de la escena con el ascenso al poder de los radicales. La Concordancia

controló la política de 1932 a 1943, y para ello recurrió al fraude electoral sistemático en grados diversos, en particular en la provincia de Buenos Aires. Más favorable al mundo de los negocios que sus predecesores radicales, la Concordancia sirvió a los intereses de una élite empresarial conformada por poderosos terratenientes (cuyas fortunas se remontaban al periodo agroexportador) y, en menor grado, a los empresarios manufactureros y urbanos que se beneficiaron del crecimiento hacia adentro. La indiferencia ante las demandas populares por parte de la élite gobernante, la represión de los disidentes políticos y militantes obreros y la debilidad de los sindicatos explican por qué no hubo una reforma laboral o social en los años treinta, a pesar del descontento general. No fue sino hasta la llegada de Perón al gobierno que las reformas sociales ocuparon un sitio central en la política pública.[1]

Esta visión concibe a la década de 1930 como un periodo de ruptura con la etapa previa, pero sobre todo con la posterior. De hecho, gran parte del poder persuasivo de esta historiografía se basa en su capacidad para explicar el surgimiento del peronismo como consecuencia de las nuevas fuerzas que emergieron a la luz de los cambios económicos y sociales derivados de la Depresión, así como en respuesta al clima político reaccionario que prevaleció durante la Década Infame. Desde esta interpretación, el factor crítico para el surgimiento del peronismo —movimiento que a partir de ese momento ocupó un lugar protagónico en la política argentina— fue la tensión desplegada, a lo largo de los años treinta, entre un orden político excluyente y una sociedad transformada al calor del avance industrial y el crecimiento del proletariado industrial.

Esta interpretación ha sido cuestionada en los últimos 25 años. Los grandes procesos de cambio que han ocurrido desde la década de 1980, entre los que se destacan la desindustrialización, la erosión de la política obrera y las derrotas electorales y (aún más) las transformaciones programáticas y coalicionales del peronismo, han transformado sensiblemente la forma en que los historiadores actuales abordan los años treinta. Además, una mayor conciencia sobre la importancia del crecimiento industrial y el mejoramiento social durante la época impulsada por las exportaciones ha dado lugar a puntos de vista más equilibrados e incluso más empáticos respecto de la república oligárquica (1880-1916) y el desarrollo económico y social del país anterior a 1945. Por lo mismo, el surgimiento de la sociedad industrial ha perdido en gran medida su lugar como tema central en la historia de la Argentina de mediados del siglo XX. No sorprende, por tanto, que la historiografía que imagina a la Década Infame como un periodo signado por el crecimiento industrial y los dilemas del ascenso proletario haya sido desafiada por una visión alterna que destaca la continuidad con etapas previas. Los años treinta no se ven como un periodo de ruptura sino de continuación de los procesos económicos de crecimiento y diversificación y, más importante aún, del mejoramiento social que amplios sectores, incluidas las clases populares, experimentaron desde principios de siglo y que adquirieron impulso durante los prósperos años veinte. De esta manera, la Década Infame se localiza dentro del contexto del periodo más amplio de

entreguerras. De acuerdo con esta visión, una vez pasado el momento más dramático de la Depresión, la recuperación del crecimiento económico dio impulso a un nuevo ciclo de expansión de una sociedad abierta y móvil, cada vez más alfabetizada y más próspera, que tenía su epicentro en las grandes ciudades litorales. Suele señalarse que, aparte de la industria, el sector de servicios también experimentó un crecimiento significativo durante los años treinta, consolidando así una estructura económica no sólo más industrializada sino también más compleja y diversificada.

En este contexto de mejora individual y progreso social que se extiende a lo largo de todo el periodo de entreguerras, las formas contestatarias y clasistas de las identidades populares forjadas en los años del Centenario (cuando la influencia anarquista sobre los trabajadores estaba en su punto más alto) perdieron vigencia. Así, pues, donde los autores identificados con la primera interpretación advierten una aceleración del proceso de formación de una cultura e instituciones obreras como rasgos distintivos de la Década Infame, los segundos encuentran una gradual disolución de las formas de identidad contestatarias forjadas en el cambio de siglo y, en su lugar, apuntan a otra más inclusiva de "sectores populares". Esta categoría comprende un conjunto social de fronteras imprecisas, para cuya definición aspectos como cultura y patrones de residencia y de consumo pesan más que los vinculos a la inserción en el sistema productivo. En síntesis, allí donde los autores identificados con la primera interpretación resaltaban la alienación política de las nuevas masas obreras crecidas al calor del auge industrial, los segundos ponen de relieve la identificación de amplios segmentos de las clases populares con aspiraciones de ascenso social individual o familiar propias de las clases medias, y con propuestas políticas moderadas y reformistas como las voceadas por los radicales y los socialistas.[2]

Por último, esta segunda perspectiva considera los desarrollos políticos que pusieron fin a la Década Infame desde una perspectiva distinta. Las explicaciones del surgimiento del peronismo restan importancia explicativa al activismo sindical y a las demandas populares, que no fueron escuchadas por la élite dirigente de la Década Infame. En la sociedad más integrada y armoniosa retratada por los defensores de este argumento, las transformaciones económicas y sociales provocadas por el crecimiento industrial desempeñaron un papel menor en la aparición del peronismo. Las variables explicativas más importantes son la política y la ideología, más que los cambios sociales y económicos. De acuerdo con esto, las ideas nacionalistas autoritarias predominantes en las fuerzas armadas y la Iglesia católica; la movilización de los partidos de centro y de las clases medias en contra de los militares que tomaron el poder en junio de 1943, y la lucha del régimen militar por su supervivencia entre 1944 y 1945 fueron desarrollos más importantes incluso que el surgimiento del activismo de la clase obrera en la formación del ambiente político que llevó al coronel Perón al poder.[3]

Por su hincapié en el cambio o la continuidad, la exclusión o la integración, estas dos interpretaciones de los años de la Gran Depresión suelen considerarse como historiografías

alternas. Sin embargo, importantes divergencias derivan del hecho de que se enfocan en dos grupos diferentes: los obreros industriales en el primer caso, y las clases medias urbanas y los segmentos más integrados y prósperos de las clases populares urbanas en el segundo. De hecho, en este capítulo se argumenta que estas interpretaciones exploran dos realidades paralelas y, en cierto grado, complementarias, ambas de igual importancia para entender el desarrollo de Argentina durante los años treinta y el legado político de la Gran Depresión. Por lo tanto, a fin de lograr un mejor entendimiento de los años treinta, es preciso integrar las dos.

La primera sección del capítulo describe brevemente el efecto de la Gran Depresión. A continuación, se explora la manera en que la Depresión afectó a las clases medias y a los sectores más integrados y prósperos de los obreros urbanos. Por mi parte, argumento que durante ese periodo se encontraban en juego fuerzas de integración establecidas desde hace mucho tiempo que promovían la movilidad social y niveles más altos de bienestar. No obstante, en comparación con décadas anteriores, esta experiencia no estaba tan generalizada ni tenía tanta fuerza. La siguiente sección centra la atención en el mundo del trabajo. Se explora la manera en la que el desarrollo de la industria y las nuevas formas de organización laboral afectaron a los trabajadores; se señala cómo el deterioro de las condiciones de vida y una mayor hostilidad en contra del orden establecido contribuyeron a la aparición de las primeras organizaciones obreras por rama de actividad en el sector manufacturero, bajo el liderazgo comunista, y se evalúa la importancia a largo plazo de los cambios en la conciencia política de los trabajadores asociados con este proceso. Por último, en la sección final se resumen los temas centrales de este ensayo y se ofrece una orientación para integrar las historiografías antes descritas en una visión más compleja de la transformación que sufrió la sociedad argentina a raíz de la Depresión económica mundial.

Argentina en el contexto de la Depresión

La economía argentina, fuertemente integrada al comercio internacional y a los flujos financieros, se vio fuertemente afectada por la crisis mundial. Entre 1928 y 1932 las exportaciones cayeron de 1 000 millones de dólares a 335 millones. El PIB se contrajo en 14% entre 1929 y 1932. Las finanzas públicas también se vieron afectadas no sólo como consecuencia de la disminución de los ingresos (todavía fuertemente dependientes de los impuestos del comercio internacional) sino también por el agotamiento del crédito exterior. Con el fin de equilibrar el déficit comercial, el gobierno restringió las compras y remesas del exterior (devaluación del peso, control cambiario), incrementó los aranceles sobre los productos de importación e impuso restricciones cuantitativas sobre las importaciones.

Estas medidas estimularon el desarrollo de la producción doméstica mediante la industrialización por sustitución de importaciones y, en 1933, el sector industrial comenzó a

revivir. La estructura industrial de Argentina, la más avanzada de América Latina, se desarrolló en nuevas direcciones. Un modesto incremento en el valor de las exportaciones contribuyó al crecimiento, pero la recuperación económica se logró en gran medida gracias al incremento de la producción para el mercado interno, liderada por nuevos sectores como el textil, el químico y el metalúrgico. Entre 1933 y 1945, el PIB se incrementó a casi 4% anual en promedio, apenas un punto por debajo del ritmo de crecimiento de 1920 a 1929.[4] A pesar del débil desempeño del sector exportador a lo largo de la década, el efecto de la Gran Depresión fue menos intenso en Argentina que en Chile, Canadá o los Estados Unidos, países en los que el PIB descendió más de 20% y la recuperación fue más lenta y difícil.[5] No obstante, la recuperación en Argentina no fue tan rápida como en Brasil o México, probablemente porque los fuertes vínculos con Gran Bretaña y su más bien tímida política económica ortodoxa le impidieron canalizar más recursos hacia los sectores más dinámicos de la economía. El muy controvertido acuerdo bilateral Roca-Runciman, destinado a proteger las exportaciones de carne a Gran Bretaña, que obligó a los productores y consumidores argentinos a comprar productos británicos en lugar de los más baratos y útiles productos estadunidenses y alemanes, fue probablemente inevitable en un mundo que se inclinaba hacia el bilateralismo. Aunque menos polémico, el pago ininterrumpido del servicio de la deuda externa demostró ser poco benéfico, principalmente porque a pesar del buen comportamiento de Argentina, la entrada de préstamos e inversiones externos jamás se retomó. Por lo mismo, Argentina, en cierta medida, pagó un precio más alto por su política financiera que por su política comercial.[6]

La recuperación económica fue principalmente un fenómeno urbano impulsado por el desarrollo de las manufacturas y la expansión del sector de servicios.[7] El cambio en el patrón productivo contribuyó a redefinir el perfil de la élite económica, hasta entonces dominada por los grandes terratenientes pampeanos de la era agroexportadora. La caída de las exportaciones trajo consigo un drástico descenso del valor de los activos y del ingreso de este grupo. Los grandes estancieros sufrieron enormes pérdidas. En el curso de la década, un nuevo grupo de empresarios urbanos, con negocios vinculados a la industria y los servicios, comenzó a conquistar posiciones en la cima de la riqueza. Para principios de la década de 1940, menos de uno de cada seis de los 100 más grandes contribuyentes obtenían sus ingresos de negocios rurales. Sin embargo, la nueva riqueza se mantuvo alejada de la alta sociedad. Muy pocos de estos nuevos ricos urbanos provenían de los círculos de clases altas e incluso menos de ellos albergaban esperanzas de contraer matrimonio o mezclarse con los terratenientes establecidos. De tal manera, la renovación de los altos estratos del sector empresarial fue más profunda y abrupta que la declinación de la élite rural de principios de siglo. En el pensamiento popular, los terratenientes adinerados se mantenían como el grupo más poderoso del país. En un periodo de grandes dificultades populares, esto tuvo un costo. Durante los años treinta, la imagen pública del grupo más exclusivo de Argentina se fue volviendo cada vez más negativa. Percibida ampliamente como reaccionaria, explotadora de los trabajadores de la tierra y

nociva para los intereses nacionales, la oligarquía terrateniente se volvió objeto de intensas críticas.[8]

La hostilidad pública en contra de esta oligarquía terrateniente estuvo estrechamente relacionada con los problemas que enfrentaba la población rural. Si bien carecemos de un claro panorama de la repercusión de la Depresión en las provincias del interior, la evidencia sugiere que la brecha en los estándares de vida entre las provincias del litoral y del interior se agudizó todavía más.[9] Al menos, es lo que la mayoría de los contemporáneos pensaba. En un reconocido estudio sobre las condiciones sociales en las provincias noroccidentales publicado en 1938, Alfredo Palacios denunciaba "la falta de todo futuro para incontables niños argentinos", como consecuencia de todas aquellas "enfermedades provocadas por la miseria".[10]

La Gran Depresión tuvo efectos profundos y negativos en el bienestar popular en el campo pampeano, el corazón de la economía de exportación agrícola. La mecanización de la agricultura en los años veinte y el colapso de los precios de los granos y el ganado durante la Depresión condujeron a una doble contracción en la demanda laboral y el ingreso. Los grandes terratenientes vieron cómo se contraían sus activos y sus ingresos, pero su mayor poder de mercado les permitió transferir gran parte de esta caída a los agricultores y a los trabajadores asalariados. Una serie de importantes conflictos laborales y huelgas de agricultores estalló entre 1930 y 1933. Puesto que carecían de una organización sólida y se encontraban debilitados por la crisis económica, los trabajadores y agricultores fueron siempre derrotados. A partir de ahí, la migración se convirtió en una opción más viable que alzar la voz.[11]

La migración, una de las consecuencias más trascendentes de la depresión mundial, tuvo un profundo efecto demográfico. Entre 1930 y 1947, la población argentina creció de 11 a 16 millones de habitantes. Sin embargo, durante los años treinta, por primera vez en la historia del país, la población rural (asentamientos con menos de 2 000 habitantes) decreció hasta alcanzar un nivel similar al de 1914. Las personas que abandonaron el campo migraron principalmente a las grandes ciudades del litoral, en particular Buenos Aires y sus alrededores. Entre 1936 y 1943, esta metrópoli absorbió anualmente alrededor de 72 000 migrantes del interior; entre 1943 y 1947 dicho promedio se elevó a 117 000.[12] En poco más de una década, un millón de provincianos se instalaron en Buenos Aires. Este incremento continuo de la población urbana significó que, hacia mediados de la década de 1940, uno de cada cuatro argentinos residía en la capital federal y su periferia urbana. El creciente peso demográfico de esta gran metrópoli no pasó inadvertido. En los años cuarenta, puntos de vista como el de Alejandro Bunge y Ezequiel Martínez Estrada, quienes argumentaban que Argentina era un país con una inmensa cabeza y un mermado cuerpo, se habían vuelto bastante comunes.[13]

La migración de las provincias pampeanas dominó durante la primera mitad de la década de 1930 (cuando la crisis en la exportación agrícola alcanzó su apogeo) y sumó cerca de las

dos terceras partes del total de migrantes. En la segunda mitad de la década, no obstante, la migración de las provincias del interior se incrementó significativamente. Para los habitantes de lugares como Santiago del Estero, Catamarca o La Rioja, abandonar sus tierras no era una nueva experiencia, pues se remontaba a la época colonial. No obstante, durante gran parte del siglo XIX y hasta 1930 la gran magnitud de la migración europea hizo que la migración interna fuera prácticamente imperceptible. Además, gran parte de la migración interna anterior a 1930 se había dirigido hacia las áreas más desarrolladas y demandantes de mano de obra en el interior, como Mendoza o Tucumán. Este patrón se alteró drásticamente a raíz de la Depresión. La migración europea se detuvo (con la excepción de una breve reanudación en los primeros años de la posguerra) y un creciente número de provincianos de piel oscura se desplazó hacia las grandes conurbaciones del litoral. Entre 1914 y 1947, el número de habitantes de Buenos Aires nacidos en el extranjero cayó de 49.3 a 27.5% de la población total. En ese mismo periodo, el número de provincianos se elevó de 18 a 44% del total de la población local de la capital federal, y probablemente a más de 55% en la Gran Buenos Aires.

Esta transformación demográfica coincidió y reforzó el cambio cultural. En los años treinta, las ciudades del litoral perdieron parte de su carácter cosmopolita y adquirieron un sabor más local. Nuevas formas de imaginar la nación ganaron terreno; formas que redescubrían e idealizaban la Argentina anterior a la inmigración europea y se mostraban hostiles a las ideas europeizantes que habían cautivado el imaginario de la élite gobernante del país durante gran parte de la segunda mitad del siglo XIX. Este nativismo solía ir acompañado de una nueva apreciación de las raíces del legado cultural español, que en algunos casos conllevaba una crítica de la democracia y el liberalismo político. La retórica antiimperialista también se volvió más manifiesta. Los intereses económicos y políticos británicos se volvieron francos blancos de ataques, comenzando con la publicación, en 1934, de *La Argentina y el imperialismo británico*, de Julio y Rodolfo Irazusta.[14]

Estas visiones de una cultura argentina menos cosmopolita no sólo ganaron terreno en los círculos de la élite, sino que también atrajeron a las clases medias y populares, tanto a los viejos residentes urbanos como a los recién llegados. En las grandes ciudades que marcaban el rumbo de la vida política y cultural del país, el creciente peso demográfico de los provincianos contribuyó a la aparición de una atmósfera cultural más nacionalista e introspectiva. La primera y segunda generaciones de descendientes de inmigrantes europeos dieron la espalda a sus antepasados y se volvieron críticos abiertos de los europeos recién llegados.[15] El desarrollo de géneros musicales como el tango y el folclor, junto con el crecimiento de la industria de la radio y de una industria cinematográfica local, ofreció poderosos medios para la exploración de nuevos temas relacionados con esta Argentina criolla.[16]

El poder disruptivo de esta revalorización de la tradición preinmigratoria y del pasado criollo, y el peso del nuevo nacionalismo a ella asociado no deben exagerarse. En los años treinta, nuevas tensiones sociales y culturales que dividían a la Argentina europea blanca de su contraparte criolla contribuyeron a difundir visiones que elogiaban las virtudes de la tierra y satanizaban a la gran ciudad cosmopolita artificial que sólo miraba hacia Europa. Sin embargo, este camino raramente implicaba un rechazo de la modernidad urbana o una condena de la experiencia urbana como tal: para la mayoría de las personas, incluso los migrantes, la superioridad de la ciudad descansaba no sólo en el dinamismo de su mercado laboral sino también en las oportunidades que ofrecía para el ocio, el consumo, el acceso a la educación y a un mejor sistema de salud pública (todos ellos elogiados por la prensa popular, la radio y el cine). El ejemplo de la joven Eva Duarte, quien se trasladó del pueblo provincial Los Toldos a Buenos Aires para iniciar su carrera en la industria del entretenimiento, habla sobre el atractivo que la vida urbana tuvo para las clases populares del interior. En este contexto, no sorprende que incluso entre migrantes internos de origen criollo —el grupo más castigado por el proyecto de modernización de las élites liberales del siglo XIX, y el que sufrió más intensamente la discriminación por parte de los residentes urbanos de origen europeo— el deseo de incorporación haya sido primordial.[17] Los provincianos se desplazaron no sólo a causa de la pobreza sino también para aprovechar las mayores oportunidades sociales que ofrecían las prósperas ciudades del litoral. A diferencia del ciclo migratorio trasatlántico de 1850 a 1930, en el que casi la mitad de los migrantes llegados a puertos argentinos regresó a Europa, muy pocos de los migrantes internos de las décadas de 1930 y 1940 regresaron a sus provincias. La retórica que exhortaba a los provincianos a volver a sus raíces, como la nostálgica canción de Atahualpa Yupanqui (“si tú puedes, vuélvete / me dijo el río llorando / los cerros que tanto quieres / me dijo / allí te están esperando”), quizás ayudó a los migrantes a mantener viva la memoria de la belleza natural y los valores morales superiores de sus lugares de origen, pero no logró cambiar la forma de pensar de quienes buscaban emprender vidas nuevas en las grandes ciudades del litoral.[18]

Las estructuras demográficas y familiares ofrecen una perspectiva elocuente sobre las aspiraciones de integración y el atractivo de la idea de movilidad social que predominó durante las décadas de entreguerras. Los censos nacionales de 1914 y 1947 (los únicos censos a escala nacional del periodo) revelan una transformación significativa en los patrones reproductivos de la población, consecuencia de la simultánea reducción en las tasas de mortalidad y natalidad. La primera puede explicarse por un aumento del bienestar, del desarrollo de la infraestructura sanitaria (desde el acceso al agua corriente hasta los mejores sistemas de drenaje), más conciencia sobre la higiene y mayor acceso a los servicios de salud pública. Por otra parte, el descenso de la tasa de natalidad refleja la importancia del control

natal. Como consecuencia de la planeación familiar, el número promedio de hijos por mujer cayó de 5.3 a 3.2 entre 1914 y 1947. Esta tendencia fue más notable y generalizada en las provincias del litoral que en las del interior, y fue más común en las grandes ciudades. En Buenos Aires, por ejemplo, el número promedio de hijos se redujo de 3.5 a 1.5.

Esta notable reducción en el tamaño de la familia, que se llevó a cabo en un periodo muy corto, es prueba de la amplia difusión de las nuevas ideas sobre la familia, cercanamente vinculadas con las aspiraciones de respeto, movilidad social y mayor bienestar material. Una familia nuclear más pequeña quizá fue vista como algo bueno *per se*, pero también como una condición necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar y educación. De hecho, durante ese periodo la participación femenina en el mercado laboral alcanzó su nivel más bajo de todo el siglo XX, tal vez debido a que un mayor número de mujeres jóvenes de hogares relativamente solventes asistía a la escuela o permanecía en el hogar en lugar de ir a una fábrica o un comercio.[19] Es importante destacar que en las grandes ciudades esta transición demográfica influyó sobre una franja social más amplia que las emergentes clases medias, pues sólo quedaron verdaderamente exceptuados las clases altas tradicionales y los segmentos inferiores de las clases populares.[20] Entre estos dos extremos, el tipo de familia que con frecuencia se asociaba más con la clase media —una con pocos hijos, que valoraba el ahorro y la moderación, el trabajo duro y la educación— se diseminó mucho más allá de las indefinidas fronteras de ese grupo. La estridente retórica de los apologistas de la "tradición", muy importante entre ellos la Iglesia católica, poco pudo hacer para cambiar la creciente influencia de las nuevas ideas sobre la familia "moderna".[21]

Los patrones de comportamiento reproductivo y las actitudes hacia la familia son indicadores del grado en el que la movilidad social ascendente seguía siendo la meta principal para gran parte de la población después de la Depresión. Lamentablemente, la escasa información estadística dificulta determinar la magnitud de la influencia de la crisis en el bienestar y el mejoramiento social. En algunas áreas, sus efectos negativos parecen haber sido modestos. Las expectativas de vida muestran mejoras continuas en el bienestar: en la capital, la expectativa de vida promedio se elevó de 49 años en 1914 a 60 en 1936, y a 65 en 1947. Es imposible determinar con certeza qué parte de este incremento se debió a una mejora del bienestar biológico (alimentación, abrigo, calefacción, etc.) y cuánto al desarrollo de la infraestructura y la cultura sanitarias. No obstante, parece razonable concluir que, aunque a un ritmo lento, se logró un avance en la calidad de vida de los habitantes urbanos una vez que terminaron los peores años de la Depresión.[22]

El acceso a la educación señala en la misma dirección. Hacia 1930, dos terceras partes de la población en edad escolar asistían a escuelas primarias. Este porcentaje se incrementó a lo largo de la década de 1930, contribuyendo a reducir el analfabetismo de 48.5% en 1914 a 13.6% en 1947 (como parámetro de comparación, 56% de la población brasileña era analfabeta en 1940).[23] Hacia 1947, el analfabetismo se concentraba en las regiones periféricas

del país y en las generaciones más viejas que no se beneficiaron con la gran expansión que el sistema educativo experimentó desde principios de siglo. Los avances más significativos en educación, por lo tanto, se lograron en el nivel secundario. Entre 1930 y 1945, las inscripciones al nivel secundario aumentaron a una tasa anual de 8.8%, muy por encima de la tasa de crecimiento de la población (que era de sólo 2% anual). La cantidad de escuelas medias creció de 421 en 1930 a 762 en 1939.

El incremento en las inscripciones obedeció en parte a que, por primera vez, hubo una incorporación masiva de niñas de hogares relativamente solventes. En su mayoría excluidas de la política formal y del debate público hasta la ley de sufragio femenino de 1947, las mujeres incursionaron en la vida pública a través del sistema educativo. La gran mayoría de estas señoritas optaba por las escuelas del magisterio, donde se preparaban como maestras. Sin embargo, el hecho de que el número de inscritos en escuelas comerciales y técnicas haya crecido dos veces más rápido que en los más tradicionales Colegios Nacionales (que fueron el preámbulo a las universidades y las profesiones liberales), o en las escuelas del magisterio, sugiere que se estaba llevando a cabo una expansión de la educación hacia los estamentos más bajos de la sociedad.[24] Esto sentó las bases para un incremento posterior más acelerado durante la década peronista, cuando las inscripciones en la educación secundaria alcanzaron una tasa promedio anual de 11.4%. Las inscripciones a las universidades también crecieron entre 1930 y 1945, elevándose de 19 800 a 33 500, a un índice anual de 5.5%.[25]

Aunque a un ritmo más lento que en la década de 1920 y después de 1945, los logros en educación fueron un elemento clave en el largo proceso de mejoramiento social y bienestar que caracterizó al periodo más amplio que abarca de fines del siglo XIX hasta la década de 1970. El análisis de otros indicadores resalta un aspecto distinto de este proceso. Después de una contracción durante el peor momento de la depresión mundial, el consumo de productos como leche pasteurizada, bebidas alcohólicas, ropa y calzado comenzó a elevarse nuevamente.[26] En la segunda mitad de los años treinta, los argentinos consumían en promedio más carne (más de 100 kilogramos anuales por persona), más azúcar y mucho más queso y mantequilla que antes de la crisis.[27] La industria del ocio también creció. En 1929 había 972 cines en Argentina, cifra que para 1936 se elevó a 1 424. En 1942, el argentino promedio asistía al cine siete u ocho veces al año, para ver principalmente películas estadunidenses (a diferencia del comercio y la política financiera, en esta esfera la influencia de los Estados Unidos fue fundamental).[28] Las líneas telefónicas aumentaron a más del doble (de 200 000 en 1928 a 460 000 en 1941 y a 510 000 en 1945). La creciente democratización de la radio fue notable: entre fines de los años veinte y 1947, el número de aparatos radiofónicos aumentó a más del triple (de 520 000 a 1.8 millones), y la cifra correspondiente al número de habitantes por aparato de radio cayó de 20 a nueve.[29] En 1947, la mitad de los hogares tenía una radio. Aunque existieron algunas diferencias regionales, la distribución de los aparatos de radio fue más o menos homogénea en todo el país. En ese periodo, dos terceras partes de todos los

receptores radiofónicos de América del Sur se encontraban en Argentina.[30]

En resumen, a pesar de la falta de información estadística para analizar con mayor precisión el periodo entre 1930 y 1945, un estudio de factores como las estructuras familiares, los cambios demográficos, los logros educativos y los patrones de consumo sugiere que, después de la crisis, hubo una recuperación gradual del bienestar social que había caracterizado a otros periodos. El surgimiento de una clase media cada vez más notoria y populosa, cuyos valores y forma de vida servían como punto de referencia para amplios sectores de la clase obrera, fue una de las consecuencias más significativas de este proceso. El crecimiento de la economía de servicios, el aumento del empleo en el sector público y el administrativo, la expansión del sistema educativo y el desarrollo de grandes empresas manufactureras significa que las clases medias no sólo se incrementaron en número sino que se hicieron presentes en áreas de actividad cada vez más diversas.

Estos sectores medios estaban conformados en su mayor parte por familias inmigrantes europeas y sus descendientes, pero también por migrantes del interior que se habían integrado exitosamente al grupo de obreros urbanos mejor pagados, beneficiados con empleos gubernamentales o que administraban sus propios negocios, gracias a la creciente demanda de mano de obra calificada y servicios más especializados. No es fácil definir los contornos de este grupo amorfo y diverso, en parte porque los recién llegados se incorporaban continuamente a sus filas. Gino Germani calcula que en Buenos Aires la clase media se incrementó de 38% de la población en 1914 a 46% en 1936, y a 48% en 1947.[31] Sin importar las dudas que puedan existir sobre la exactitud de estas cifras, el hecho es que subrayan el grado de crecimiento alcanzado por este grupo durante ese periodo, aunque a un ritmo menor que en décadas previas. Por otra parte, determinar con exactitud el tamaño de este grupo no parece tan relevante como advertir que su influjo, proyectado por el cine, la prensa y la radio, se extendía sobre sectores muy vastos del mundo del trabajo. En este sentido, pues, la clase media y la ideología del ascenso social que este grupo encarnaba se convirtieron en una parte visible y de creciente importancia de la sociedad argentina de los años posteriores a la Depresión.[32]

La influencia social de la Depresión en las clases medias no debe ser subestimada. Como Lila Caimari ha señalado recientemente, las angustias provocadas por la terrible experiencia de la crisis económica hizo que los miembros de este grupo fuesen más cautelosos, tanto en términos sociales como políticos, lo que contribuyó a ampliar las bases populares de la reacción conservadora y, en algunos casos, antiliberal del periodo.[33] El incremento de la vagancia, el desempleo y la inseguridad laboral, así como de la triste realidad de un número considerable de familias que luchaban por su subsistencia ante el deterioro del ingreso, provocaron una mayor incertidumbre en los miembros de la clase media sobre el lugar que ocupaban en la sociedad. Así, una mayor conciencia de la fragilidad del bienestar individual y familiar, así como de los peligros que entrañaba la sociedad urbana, constituyó una nueva

realidad y un tema importante de la retórica política dirigida a despertar sentimientos conservadores en estos grupos. Este desasosiego contribuyó a la formación del clima político conservador tan característico de los años treinta, que el coronel Perón también se propuso explotar en su intento de obtener el apoyo de este grupo.[34]

LAS TRANSFORMACIONES DEL MUNDO OBRERO

Incluso cuando a muchos de sus miembros los dominaba una sensación de intranquilidad, el crecimiento de las clases medias, aunque más lento que en los años veinte, indica un patrón de cambio social caracterizado por una clara continuidad entre los periodos de antes y después de la Depresión. Cuando centramos la atención en el mundo del trabajo, la novedad es más evidente. Después de la Depresión, la clase trabajadora industrial ocupó un lugar más central en la vida económica del país y también más políticamente articulado. Un entendimiento más completo de este desarrollo requiere de una perspectiva más amplia.

Desde finales del siglo XIX, el sector manufacturero creció a un ritmo muy rápido.[35] Sin embargo, durante varias décadas los trabajadores del sector transporte (principalmente ferroviario y portuario) se encontraron entre los sectores más poderosos y mejor organizados de la fuerza de trabajo. En la mayor parte de las otras áreas, sólo los trabajadores calificados se encontraban organizados en pequeños sindicatos por oficio. El sector manufacturero careció de una organización significativa hasta la década de 1930, como también muchos otros sectores, en su mayoría conformados por trabajadores no calificados. En los albores de la primera Guerra Mundial, el promedio de trabajadores urbanos sindicalizados era probablemente menor a uno por cada 10. Los sindicatos, aunque mucho más fuertes que en cualquier otro país latinoamericano, fueron modestos en comparación con la Europa occidental industrializada, que contaba con una densidad sindical casi tres veces mayor que la de Argentina.[36]

Los historiadores han exagerado las dificultades organizativas sufridas por los sindicatos a raíz de las disputas ideológicas y políticas de este periodo (anarquistas contra socialistas contra sindicalistas). La principal limitación de las organizaciones gremiales en el periodo previo a 1930 tiene un carácter estructural. En gran medida, fue consecuencia de los problemas asociados con la organización de una fuerza laboral predominantemente extranjera que, en su mayor parte, no deseaba invertir demasiada energía en la formación de sindicatos. Es importante recordar que, igual que las clases medias, la gran mayoría de los trabajadores de las grandes ciudades del litoral eran extranjeros (en 1914, tres cuartas partes de todos los hombres adultos en lugares como Rosario y Buenos Aires habían nacido en Europa). Esos inmigrantes habían llegado a la Argentina animados por la aspiración del ascenso social y, por tanto, no para reafirmar sino para escapar a la condición proletaria. Eran, en promedio, más

individualistas y más ambiciosos (amén de más educados) que sus congéneres que quedaban del otro lado del Atlántico, y también que las clases populares nativas.[37] Incluso para los inmigrantes simpatizantes de la izquierda, fueran socialistas o anarquistas (menos que aquellos leales a la Iglesia católica), la idea de "hacer la América" ejercía un fuerte atractivo. Para quienes no habían logrado mejorar su condición de vida o no preveían lograrlo en el futuro cercano, regresar a Europa o desplazarse a otro lugar fue por lo general una opción que ejercía igual o mayor atractivo que la acción colectiva (como mencionamos antes, la mitad de los inmigrantes llegados en el periodo 1852-1930 finalmente partió). Además, la lealtad de clase que los activistas sindicales deseaban promover chocaba frecuentemente con otras influencias poderosas. En muchos comercios y fábricas, por ejemplo, las contrataciones solían tomar en cuenta el origen étnico, lo que favorecía las relaciones de colaboración y paternalismo entre supervisores, obreros y empleados. Igual que en los Estados Unidos, los inmigrantes crearon una poderosa red de instituciones étnicas que desviaban la atención de los trabajadores inmigrantes de los sindicatos y la política radical.[38] Por lo tanto, no fue fácil desarrollar la solidaridad y la identidad de clase. Cuando los activistas lograron superar estos obstáculos, los capitalistas —siempre reticentes a tolerar cualquier forma de organización laboral— se dieron a la tarea de sabotear los nacientes sindicatos.[39]

En términos generales, este contexto dio origen a dos tipos diferentes de organizaciones sindicales y a dos modelos distintos de acciones colectivas. Un tipo de sindicalismo negociador —que hacía hincapié en el diálogo responsable con patrones y empresarios— surgió en una etapa relativamente temprana dentro de las organizaciones más poderosas y permanentes, por lo general conformadas por trabajadores calificados, como en el sector ferroviario. Algo muy distinto puede encontrarse en los sectores donde predominaron los obreros no calificados y eventuales, en particular donde los trabajadores tenían muy escaso control sobre las condiciones laborales, las contrataciones y los despidos. En estos sectores con sindicatos débiles, las protestas fueron más esporádicas y poco capaces de asegurar el apoyo de los grandes sectores de la fuerza laboral; además, en parte como consecuencia, fueron frecuentemente más violentas. En general, la formulación de los reclamos obreros dependió de la iniciativa de pequeños pero aguerridos grupos militantes, entre los cuales se destacaron los anarquistas. En la primera década del siglo, esta minoría se convirtió en un motivo de gran preocupación tanto para los empresarios como para las élites gobernantes, y fue objeto de una dura represión.[40]

En la década de 1920 aumentó la importancia del sindicalismo, como también la predominancia de voces moderadas y reformistas dentro del movimiento sindical. Dos factores contribuyeron a estos desarrollos: el peso creciente de los trabajadores nacidos en Argentina dentro de la fuerza laboral y la democratización del sistema político impulsada por la reforma electoral de 1912-1916. El periodo comenzó con una fuerte ola de intranquilidad laboral que alcanzó su auge en 1917, justo al final de la primera Guerra Mundial. Pero una vez

que el polvo de esos años de empobrecimiento popular, violencia social y aspiraciones revolucionarias comenzó a disiparse, la mayoría de los trabajadores adoptó cada vez más una postura moderada y pragmática, evitando las políticas de confrontación propuestas por los anarquistas y, más adelante, por los comunistas. El dinamismo creciente de la corriente sindicalista moderada ejemplifica la magnitud de este cambio. Los sindicalistas centraron su energía en el fortalecimiento de los sindicatos y el mejoramiento de las condiciones laborales. Los dirigentes sindicalistas no mostraron reparos en dialogar y negociar con el empresariado. Más importante, también buscaron activamente el apoyo de las autoridades, con éxito creciente. La combinación de una democracia más profunda (consecuencia de la reforma de 1912) y una población obrera en la que se incrementaba el número de nativos con derecho a voto proporcionó un fuerte estímulo para quienes en el gobierno prestaban atención a las demandas de los trabajadores. Finalmente, la mejora del bienestar popular posterior a la crisis de la posguerra restó atractivo al extremismo político: un cambio favorable para los sectores del movimiento obrero más respetuosos del orden social y político.

Este sindicalismo apolítico y de negociación encontró un activo promotor en el gobierno radical (1916-1930), el primero surgido de elecciones amplias y participativas. Los radicales lo favorecieron no sólo porque les permitía dotarse de aliados en el mundo del trabajo sino también para estrechar el margen de maniobra de las declinantes organizaciones anarquistas y de los algo más dinámicos gremios orientados por uno de sus principales rivales políticos, el Partido Socialista. Por su parte, este partido, que creció en importancia con la democratización, también volcó sus recursos para favorecer la organización obrera, y alcanzó logros considerables, sobre todo entre los trabajadores calificados del sector servicios y entre los empleados públicos. No obstante, su influencia se limitó a la ciudad de Buenos Aires. Así, a fines de la década de 1920, los sindicatos ferrocarrileros, integrados desde 1922 en la Unión Ferroviaria, siguieron siendo la columna vertebral del movimiento obrero. Sin embargo, la combinación de un clima político más favorable y el aumento de los argentinos nativos entre la población trabajadora disparó el crecimiento de nuevos sindicatos. Se verificó un importante desarrollo de la organización sindical entre los empleados estatales y algunos gremios de servicios donde primaban los trabajadores calificados, como el telefónico, y entre empleados de comercio. En el sector manufacturero, por el contrario, los sindicatos no consiguieron mayores logros. En su conjunto, el movimiento obrero se caracterizó por un enfoque moderado y reformista. Tras la desaparición de los anarquistas, la única excepción a esta regla fue el reducido grupo vinculado con el Partido Comunista, un actor muy marginal en el mundo laboral.[41]

Este panorama cambió en los años treinta. Junto con el deterioro de los estándares de vida, la recesión desencadenó los niveles de desempleo más altos jamás vistos en el país. Argentina, antes importador de mano de obra europea, se encaraba repentinamente con una tasa de desempleo superior a 20%. La demanda laboral se recuperó en 1933 impulsada por el

crecimiento industrial. No obstante, los salarios permanecieron bajos a lo largo de la década de 1930, de manera particular en el sector manufacturero. En 1936, con cerca de tres años de iniciada la recuperación, el Departamento Nacional del Trabajo (DNT) calculó que el salario mensual promedio de un trabajador cabeza de familia podía cubrir tan sólo 77% de las necesidades básicas del hogar (la alimentación representaba cerca de 57% del gasto total).[42] El DNT concluyó también que los salarios reales no se incrementaron en absoluto entre 1932 y 1943.[43] La información disponible sobre la distribución del ingreso a partir de 1935 confirma este sombrío panorama. A pesar del crecimiento económico sostenido, la participación del trabajo en el ingreso nacional se contrajo entre 1935 y 1942.[44] Con el avance de la Década Infame, la desigualdad se agudizó y la riqueza se concentró en las clases más altas. Entre 1932 y 1943, 1% de la población más rica aumentó su participación en el ingreso nacional de 17 a 25%. En 1943, el nivel de concentración del ingreso en Argentina era muy alto en comparación con los estándares internacionales.[45] La década de 1930 fue un buen periodo para los ricos, en especial para los que obtenían sus ingresos de intereses urbanos e industriales.

Es probable que la marcada desigualdad económica haya afectado más a los trabajadores que a cualquier otro grupo de la sociedad urbana. La evidencia sugiere que los trabajadores manufactureros fueron de los más castigados. Desde mediados de la década, la industria se convirtió en el principal generador de nuevos trabajos (la fuerza laboral fabril aumentó en más del doble durante este periodo, de 400 000 en 1936 a 900 000 en 1946).[46] No obstante, estos trabajos se caracterizaron en su mayor parte por tener bajos salarios y pobres condiciones laborales. Esto fue consecuencia de las peculiares circunstancias bajo las cuales la industria se convirtió en el sector dominante de la economía posterior a la Depresión. La falta de actualización tecnológica y la contracción del financiamiento significaron que el crecimiento industrial dependiera de la mano de obra barata más que de las innovaciones tecnológicas y las mejoras de la productividad (de hecho, a pesar del significativo crecimiento industrial, en los años treinta las importaciones de bienes de capital decrecieron, en comparación con la década anterior, de 20 a 15% del total de importaciones). Este modelo desempeñó un papel central en la creación de un numeroso proletariado fabril que se encontraba en mayor desventaja que otros grupos urbanos subalternos.

Las estadísticas oficiales indican que los salarios del sector industrial estaban entre los más bajos del mercado laboral urbano. Entre el final de la primera Guerra Mundial y finales de los años veinte, los salarios reales casi se duplicaron; a partir de entonces, se estancaron por debajo de los niveles de 19181919 durante más de una década. Ciertos cálculos sugieren que los salarios reales de los trabajadores industriales estaban entre 10 y 15% por debajo de los salarios promedio.[47] En 1938, el DNT calculó que se requerían 165 pesos para cubrir las necesidades básicas de la familia de un trabajador. Esta cifra equivalía al salario promedio de los trabajadores de los sectores público y eléctrico. En cuanto a los trabajadores de otros

sectores, esta cifra estaba muy lejos de sus posibilidades: el salario promedio fluctuaba desde 113 pesos en las industrias de procesamiento de alimentos y de madera hasta 111 pesos en la de la construcción, 108 en la de productos químicos, 93 en la industria del vestido y tan sólo 84 pesos en la industria textil.[48] En cuanto a esta última industria, el sector manufacturero de mayor crecimiento a lo largo de los años treinta, los salarios fueron alrededor de 30% más bajos hacia finales de la década que en 1928-1929.[49] Es importante resaltar que éstos fueron los salarios promedio en algunas de las industrias más dinámicas en una época en la que ya había pasado la peor parte de la recesión. De tal manera, Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero parecen haber acertado cuando argumentaron en un estudio pionero que una de las consecuencias más significativas del crecimiento industrial durante los años subsiguientes a la Depresión fue la formación de una numerosa y desfavorecida fuerza laboral.[50] Para muchos de los recién llegados al mundo fabril en los años treinta, la vieja creencia de que Argentina siempre ofrecía un futuro más venturoso que el pasado o el presente dejó de ser válida.

Un análisis de los conflictos laborales ofrece nueva evidencia sobre el grado de privaciones al que estuvieron sujetos los obreros del sector industrial, como también algunas reflexiones indirectas sobre la manera en que los trabajadores percibían sus circunstancias. Durante la dictadura del general Uriburu (1930-1932), los activistas sindicales fueron criminalizados y perseguidos y las protestas fueron prohibidas. La represión, que incluía pelotones de fusilamiento y deportaciones, estuvo dirigida muy en particular hacia los comunistas y los anarquistas. Los empresarios aprovecharon la represión del Estado para reducir los salarios, modificar las condiciones laborales y despedir trabajadores. En la Unión Telefónica, una compañía estadunidense, los despidos comenzaron el mismo día en que Uriburu tomó el poder. La represión y las restricciones de la actividad sindical se relajaron al término de la dictadura.[51] En los primeros meses de la presidencia de Agustín P. Justo (1932-1938) se desató una ola de huelgas mediante las cuales los obreros buscaban recuperar lo que habían perdido. El hecho de que las primeras huelgas de 1932 ocurrieran en el punto más alto de la recesión y carecieran de apoyo gubernamental las condenó al fracaso. Prácticamente todas fueron derrotadas: la información oficial indica que más de 70% de las huelgas no logró obtener sus peticiones.[52]

A raíz de esta amarga experiencia, los obreros se volvieron más cautelosos. En los tres años siguientes, el número de huelgas decreció drásticamente. Debilitados por la crisis económica, los militantes sindicales buscaron nuevas maneras de promover sus demandas. Joel Horowitz ha demostrado que los más exitosos fueron quienes obtuvieron apoyo desde dentro del sistema político, en particular por sus vínculos con el Partido Socialista. La retirada de los radicales de las elecciones entre 1931 y 1935 hizo posible la victoria de la Concordancia, pero también dio un peso desproporcionado a la izquierda en el Congreso. Con 43 diputados —27% de la cámara baja y con siete u ocho veces más bancas que en los años veinte—, el Partido Socialista se volvió un representante activo de las demandas sindicales.

El apoyo socialista fue crucial para la aprobación de leyes en favor de los dependientes de comercios, que incluyeron jornadas de trabajo más cortas, mayor regulación de las condiciones de trabajo y protección en contra del despido. El principal vocero de los dependientes de tiendas fue Ángel Borlenghi, quien tenía fuertes vínculos con el Partido Socialista. Los trabajadores municipales —representados también por una figura cercana al Partido Socialista— alcanzaron derechos similares durante este periodo. Por el contrario, los sindicatos más cercanamente asociados con el sindicalismo padecieron con la declinación de los radicales. La Federación Obrera Marítima, que había sufrido importantes derrotas a fines de los años veinte, se siguió deteriorando. Para evitar un destino parecido, la Unión Ferroviaria, que seguía siendo el único sindicato nacional verdaderamente importante (con 70 000 miembros, casi la mitad de todos los trabajadores sindicalizados del país pertenecía a esta organización), cambió el liderazgo sindicalista a uno más cercanamente asociado con el socialismo en 1934. No es de sorprender que al año siguiente la Confederación General del Trabajo (CGT) haya caído bajo el control socialista.

Es preciso ubicar en su contexto los logros del Partido Socialista en el mundo sindical. Éstos sólo beneficiaron a una parte minoritaria de la fuerza laboral, principalmente conformada por obreros calificados en los sectores de servicio más prósperos y de largo arraigo, que disfrutaban de buenos salarios y que también habían estado sindicalizados durante algún tiempo. Por esta razón, el incremento del influjo sindical del socialismo terminó reafirmando su perfil de partido de clases medias, de trabajadores de cuello blanco y de obreros calificados.[53] Este tipo de crecimiento sindical dejó vacante la tarea de organización y sindicalización de los nuevos y crecientes contingentes de trabajadores industriales tras la Depresión. En años sucesivos, quienes la encararon con mayor determinación y éxito fueron los comunistas.

El Partido Comunista fue fundado en 1920 por un grupo disidente del ala izquierda del socialismo. Formado en un tiempo en el que el liberalismo y, por consiguiente, el reformismo político constituían poderosas fuerzas en la vida pública argentina, el comunismo no ejercía gran atractivo para los círculos intelectuales o el movimiento estudiantil.[54] Desde mediados de la década de 1920, el partido acentuó su perfil obrero, adoptó la organización celular y comenzó a implantar a sus militantes en talleres y fábricas.[55] Cuando terminaron los severos años del gobierno de Uriburu, consiguieron importantes logros. El avance comunista en el mundo obrero posterior a 1933 tuvo lugar en un periodo en el que, gracias a la expansión del empleo, el mercado de trabajo se volvió más equilibrado. En un contexto que ofrecía a los obreros mayores incentivos y medios de protesta, los militantes comunistas contribuyeron decisivamente a la organización laboral en el sector manufacturero. Entre 1936 y 1941, el número de afiliados a los sindicatos en conjunto se incrementó en alrededor de 18%, mientras que la filiación en los sindicatos industriales se duplicó. Esto se debió principalmente a los esfuerzos de los comunistas. En ese periodo de cinco años, el crecimiento de los cuatro

sindicatos más importantes liderados por los comunistas constituyó 95% del incremento total del sindicalismo. Por lo mismo, entre 1936 y 1941 el número de trabajadores sindicalizados creció de 15 a 20% dentro de la fuerza laboral industrial.[56]

En el sector alimentario, los comunistas vencieron la resistencia de las grandes empresas (las plantas empacadoras de carne fueron particularmente duras) y organizaron la poderosa Federación Obrera de la Alimentación, que contaba con 20 000 afiliados en 1940. El sindicato fue liderado por José Peter, oriundo de Entre Ríos y uno de los líderes comunistas más populares.[57] En la industria textil, donde las mujeres con bajos salarios constituían una parte considerable de la fuerza laboral, los militantes comunistas también establecieron las bases para un sindicato fuerte. Estos recién llegados al mundo sindical lograron su más notable triunfo en la industria de la construcción, cuyos trabajadores hasta entonces habían permanecido divididos en numerosos sindicatos por oficio (albañiles, yeseros, pintores, plomeros, etc.). En 1935 y 1936, los comunistas iniciaron una serie de huelgas que sentaron las bases para la poderosa Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC), una organización que "con cerca de 58 000 afiliados (de los cuales alrededor de 40 000 aportaban cuotas regulares) se convirtió en el segundo sindicato más grande del país, sólo superada en número de adherentes por la Unión Ferroviaria".[58] La FONC —que logró reclutar casi la mitad de sus afiliados en las grandes ciudades— fue como un milagro de organización sindical en una industria procíclica, también caracterizada por su diversidad de empresas en cuanto a tamaños y distribución geográfica.[59] Como consecuencia de su éxito en los sindicatos manufactureros, hacia fines de la década los comunistas habían surgido como una fuerza poderosa en el mundo sindical y compartían el liderazgo de la CGT con los socialistas.

Los comunistas poseían una visión más ambiciosa pero también más precisa de los desafíos que enfrentaba el desarrollo de la organización obrera que sus colegas y rivales socialistas y sindicalistas. Concentraron su energía en la formación, ya no de sindicatos por oficios o de fábricas, sino de grandes sindicatos por industria, esto es, sindicatos que comprendían a todos los trabajadores que se desempeñaban en una actividad, con independencia de su género, oficio y calificaciones.[60] Este nuevo tipo de sindicalismo desempeñó un papel clave en el mejoramiento del poder de negociación de los sectores más débiles de la fuerza laboral, que prácticamente carecían de organización. La formación de sindicatos de esta naturaleza requería de mucha energía, flexibilidad táctica y recursos. Un ejemplo de esta flexibilidad fue la actitud de los comunistas hacia las mujeres trabajadoras, un grupo de importancia creciente en el sector manufacturero. Los activistas comunistas promovieron un programa dirigido a asegurar los derechos para este grupo subpagado y sobreexplotado, que exigía una legislación sobre maternidad y una garantía de igual pago que los hombres trabajadores. Aunque operaban en sectores con muy poca o ninguna experiencia en organización, los comunistas aprovecharon los recursos de una reducida pero altamente disciplinada maquinaria del partido que, a diferencia de los socialistas, se centraba en la clase

trabajadora manufacturera. Por último, es importante destacar que el partido obtuvo sus mayores triunfos cuando abandonó la retórica de "clase contra clase" del Tercer Periodo y se alzó en favor de un Frente Popular de centro-izquierda en contra del fascismo (1936-1939). Durante esos años, los comunistas se presentaron como líderes responsables, comprometidos con la mejora de las condiciones de vida popular y con la institucionalización de las negociaciones entre capital y trabajo. Pese a que el mayoritario Partido Radical siempre se resistió a sumarse a un Frente Popular, el diálogo que los comunistas entablaron con fuerzas más moderadas amplió su universo de interlocutores y les dio mayor respetabilidad.

A pesar de su postura moderada, los comunistas jamás renunciaron por completo a sus metas revolucionarias y siguieron siendo críticos acérrimos no sólo del fascismo sino también del orden social y político argentino. El acta constitutiva de la FONC, por ejemplo, establecía que

> la propiedad privada de los medios de producción y de cambio son la causa permanente del hambre y la miseria de la clase obrera […] los monopolios extranjeros y las clases dominantes argentinas a ellos entregadas tienen a la clase obrera en condiciones inhumanas de vida y de trabajo, tratando de sumir a las masas populares en el terror fascista, para perpetuar este estado de cosas e impedir la organización independiente del proletariado.[61]

Todos los sindicatos liderados por los comunistas promovieron esta visión. Una y otra vez, en los talleres, en las esquinas de las calles y en reuniones, los militantes y la propaganda del partido hacían hincapié en la necesidad de construir un poder de clase y destruir el orden capitalista. Si consideramos que en los 20 años anteriores la mayoría de los trabajadores había adoptado tendencias reformistas, el éxito del Partido Comunista para atraer amplios apoyos entre los trabajadores se revela más notable. Esto, por supuesto, no se debió a que en los años treinta los comunistas disfrutasen de mayor libertad para organizarse; al contrario, durante ese periodo el temor al "peligro rojo" significaba que los activistas comunistas eran objeto de una persecución más sistemática que en el pasado (en 1937, por ejemplo, Guido Fioravanti, secretario general de la FONC, junto con varios militantes comunistas, fueron deportados a Italia, donde fueron encarcelados por el gobierno fascista). Asimismo, es importante destacar que, entre los obreros, el atractivo del comunismo no descansaba en el poder de su visión de una sociedad sin clases o, como solía ser el caso entre algunos círculos intelectuales, en la admiración de los logros alcanzados por la Unión Soviética. Algunos historiadores, por lo tanto, han argumentado que el éxito del sindicalismo comunista descansa más bien en las capacidades organizativas y en el compromiso de sus activistas, que transformaron al comunismo en un poderoso promotor de salarios más altos y mejores condiciones laborales.[62]

Destacar esta dimensión instrumental de la relación entre los comunistas y los trabajadores, sin embargo, corre el riesgo de colocar el problema en una perspectiva demasiado estrecha, podría decirse prethompsoniana, pues tiende a ignorar aspectos centrales

de la experiencia de los trabajadores de ese periodo que hicieron al comunismo más atractivo que en el pasado. Luego de la Depresión, la visión comunista de la sociedad argentina como una sociedad injusta y desigual coincidía, quizá más que en cualquier momento del pasado, con las percepciones y la experiencia de sectores muy amplios del mundo del trabajo. Antes que una adhesión intelectual al ideario de una sociedad sin clases, lo que el avance del comunismo puso de manifiesto fue el considerable grado de alienación política y de estrechamiento de los horizontes vitales que dominaba a las franjas más desprotegidas de los trabajadores industriales. Y ello nos indica no tanto un rechazo frontal a los valores de la clase media ni al ideario de la movilidad social, sino más bien la percepción de que, en las circunstancias de ese tiempo, muchos de los habitantes de las nuevas periferias urbanas consideraban que esos ideales eran inalcanzables.

La década de 1930 vista en perspectiva

¿De qué manera afectó la Gran Depresión a la sociedad argentina y cuáles fueron sus consecuencias? En una serie de estudios publicados desde la década de 1980 se argumenta que, conforme la crisis mundial fue retrocediendo, Argentina pudo retomar el camino de movilidad social y aumento del bienestar que había caracterizado a su desarrollo durante las primeras tres décadas del siglo XX. A lo largo de la Década Infame, las clases medias continuaron su expansión y, con mayor fuerza, también incrementaron su peso cultural. En esos años, las clases altas tradicionales no sólo perdieron parte considerable de su riqueza de origen rural sino que también vieron mermar su ascendiente social. En una sociedad más hostil hacia los privilegios de las élites tradicionales, y en la que se produjo una considerable renovación de los grupos económicamente predominantes, las referencias centrales de la vida social giraron hacia el mundo de las clases medias. Los estilos de vida, los modelos familiares y los patrones de consumo asociados con ese grupo adquirieron mayor difusión, y sirvieron de modelos de referencia para segmentos cada vez más amplios de las clases populares. Este proceso se desarrolló de manera paralela a la formación de una sociedad nacional más homogénea e integrada culturalmente, consecuencia de la expansión de la educación primaria y secundaria; el crecimiento de la prensa popular, el cine y la radio, y el desarrollo del consumismo y el deporte profesional.

El final de la migración trasatlántica y el surgimiento de la migración interna —esta última como consecuencia no sólo del declive rural durante la Depresión sino también del atractivo de la vida urbana— también fueron factores que profundizaron el proceso de homogeneización cultural. La migración interna generó nuevas tensiones sociales. No obstante, para el final de este periodo, cuando dos terceras partes de la población del país habitaban en la región del litoral (y casi un cuarto de la población total radicaba en Buenos Aires), el número de

descendientes de inmigrantes europeos y de la primera generación de migrantes del interior había aumentado su integración simbólica y física a la nación. En 1945, la sociedad argentina había perdido gran parte de su condescendencia con sus élites tradicionales, era más homogénea y estaba mejor articulada.

Estos procesos de cambio social e integración cultural encontraron límites que las historiografías que privilegian la continuidad con décadas pasadas suelen pasar por alto. La crisis económica de principios de los años treinta tuvo un fuerte efecto en las clases medias. Una mayor conciencia de la fragilidad de la movilidad social ascendente volvió a este grupo más inseguro y conservador. Asimismo, el progreso, en su mayor parte, no se extendió hacia las regiones más pobres del interior, en especial las provincias noroccidentales: todo cambio importante en el estilo de vida de los habitantes de esas áreas marginales fue consecuencia de la emigración. De manera similar, las grandes ciudades del litoral también experimentaron conflictos y tensiones que tuvieron repercusiones políticas mucho más serias.

La visión historiográfica centrada en la clase obrera ha señalado que el crecimiento del sector industrial durante la década de 1930 contribuyó al incremento de la fuerza de trabajo industrial carente de muchos de los beneficios de la vida urbana que disfrutaban sectores más prósperos e integrados de la sociedad. Ni las élites de gobierno ni las principales fuerzas de oposición —los principales actores en el escenario político fraudulento de la Década Infame — pusieron gran atención a este grupo, y ambos se mostraron reacios a promover un programa de reforma social capaz de incorporar sus demandas. Deseosa de revertir el revés económico, la coalición en el poder gastó mucha energía en asegurar la recuperación de la recaudación impositiva e inyectar nueva vida al sector exportador y al mercado doméstico. Cuando el pico de la Depresión pasó, los proyectos estatales más ambiciosos se orientaron hacia la renovación y expansión de infraestructura, en primer lugar a través de la construcción de edificios públicos y caminos. Más preocupada por la recuperación económica que por la reforma social, la Concordancia relegó muchas de las iniciativas de bienestar que sus predecesores radicales habían emprendido en los años veinte, por ejemplo, la vivienda (el programa de rentas urbanas congeladas fue descontinuado).[63] Asimismo, fueron muy escasas las acciones encaminadas a proporcionar mejor asistencia médica, regular las condiciones laborales o aumentar los derechos de los trabajadores. El conservadurismo creciente en amplios sectores de la población urbana significó que existía menor presión desde abajo para avanzar en una dirección reformista. A diferencia de Chile o México, que viraron a la izquierda como consecuencia de la depresión mundial, Argentina optó por la derecha, no sólo a causa del golpe de Estado de Uriburu y el fraudulento régimen de Concordancia, sino también porque este programa podía contar con apoyos no sólo en los grupos de élite sino también en amplios sectores de las clases medias.

Faltos de interlocutores en el Estado pero también entre los actores más establecidos del mundo político y sindical (socialistas y sindicalistas), los sectores más desprotegidos del

mundo del trabajo urbano se volvieron permeables a interpelaciones radicales. El comunismo fue el más beneficiado con esta situación. Durante los años treinta, esta fuerza política hizo importantes incursiones en el mundo en expansión del sindicalismo industrial. Resulta irónico que precisamente en el mismo momento en el que el nacionalismo de las masas iba ganando terreno (en 1936, el himno nacional se cantó por primera vez en la celebración del Día del Trabajo), los activistas sindicales más dinámicos fueron seducidos por el comunismo revolucionario internacional. En el sector industrial, el avance de los comunistas fue rápido y profundo y la brutal represión estatal no logró contenerlo. El triunfo comunista no transformó al movimiento sindicalista de la noche a la mañana, pero a principios de la década de 1940 se consolidaron varios sindicatos industriales y los trabajadores sindicalizados representaron alrededor de 20% de los trabajadores no agrícolas del país. Si bien esta cifra equivale a la mitad de la tasa sindicalista del núcleo industrial europeo del momento, sin duda fue la más alta de toda Latinoamérica.

El éxito del sindicalismo comunista también resultó acotado en un segundo sentido, referido al proceso de formación de clase, pues el discurso clasista de los militantes comunistas no logró alterar de manera duradera las convicciones más profundas de los trabajadores sobre el orden social deseable, que sin duda se hallaban influidas por visiones tradicionales de viejo arraigo, pero también por los modelos de buena vida ofrecidos por las clases medias y la ideología del ascenso social. En consecuencia, la formación de un universo proletario más articulado en la década de 1930 puso de relieve, más que en una crítica a estos valores de amplia difusión, un conjunto de frustraciones producto de las dificultades para alcanzarlos. Resultado de las destrezas organizativas más que de la adhesión popular a los ideales revolucionarios promovidos por los militantes comunistas, el ascenso de esta fuerza testimonia el considerable grado de desafección política que experimentaban importantes sectores de la fuerza de trabajo industrial pero también la fragilidad de los lazos identitarios que unían a los obreros del común con sus nuevos líderes clasistas. Los observadores que entendieron el ascenso comunista como el resultado de una nueva conciencia obrera, completamente hostil al orden establecido, se equivocaron. Ello contribuye a explicar por qué pocos años más tarde, cuando el coronel Perón impulsó un programa que ampliaba los derechos de los trabajadores y reivindicaba la importancia de la organización obrera, pero también combatía a las organizaciones de izquierda, recibiría apoyos populares masivos, que incluían entre sus principales baluartes a los gremios en los que la influencia comunista había sido más poderosa.

[*] Deseo agradecer los comentarios de Lila Caimari y de los ponentes de la conferencia "Great Depression in the Americas and Its Legacies", celebrada en el Institute for the Study of the Americas de Londres el 20 de junio de 2011.

[1] Este relato clásico es de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, *Estudios sobre los orígenes del peronismo,* Buenos Aires, Siglo XXI, 1971. Véase también David Tamarin, *The Argentine Labor Movement, 1930-1945: A Study in the Origins of Peronism,* University of New Mexico Press, Albuquerque, 1985.

[2] Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero, *Sectores populares, cultura y política: Buenos Aires en la entreguerra,* Sudamericana, Buenos Aires, 1995. Véase también Francis Korn y Luis Alberto Romero, "Introducción", en Francis Korn y Luis Alberto Romero (eds.), *Buenos Aires/Entreguerras: La callada transformación,* Alianza, Buenos Aires, 2006, pp. 9-33. Evaluaciones críticas de este enfoque se encuentran en Matthew B. Karush, "The Melodramatic Nation: Integration and Polarization in the Argentine Cinema of the 1930s", *Hispanic American Historical Review* 87, núm. 2 (2007), pp. 293-326, y Hernán Camarero, "Consideraciones sobre la historia social de la Argentina urbana en las décadas de 1920 y 1930: clase obrera y sectores populares", *Nuevo Topo: Revista de Historia y Pensamiento Crítico* 4 (2007), pp. 35-60.

[3] Véase, por ejemplo, Loris Zanatta, *Perón y el mito de la nación católica: Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo (1943-1946),* Sudamericana, Buenos Aires, 1999.

[4] Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, *El ciclo de la ilusión y el desencanto: Un siglo de políticas económicas argentinas,* Ariel, Buenos Aires, 1998, pp. 463-464.

[5] Angus Maddison, *Monitoring the World Economy, 1820-1992,* OBCD Development Centre, París, 1995; Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence,* Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. 218-222.

[6] Rosemary Thorp, *Progress, Poverty and Exclusion: An Economic History of Latin America in the 20th Century,* Inter-American Development Bank, Washington, 1998, p. 116.

[7] Arturo O'Connell, "Argentina into the Depression: Problems of an Open Economy", en Rosemary Thorp (ed.), *Latin America in the 1930s: The Role of the Periphery in World Crisis,* Macmillan, Londres, 1984.

[8] Roy Hora, *Los terratenientes de la pampa argentina: Una historia social y política, 1860-1945,* Siglo XXI, Buenos Aires, 2005, pp. 279-351; Gerchunoff y Llach, *El ciclo de la ilusión…, op. cit.,* p. 140; Roy Hora y Leandro Losada, "Clases altas y clases medias en la Argentina, 1880-1930: Notas para la definición de una agenda de investigación", *Desarrollo Económico* 50, núm. 200 (2011), pp. 611-630.

[9] Ricardo D. Salvatore, "Stature, Nutrition, and Regional Convergence: The Argentine Northwest in the First Half of the Twentieth Century", *Social Science History* 28, núm. 2 (2004), pp. 297-324.

[10] Alfredo Palacios, *El dolor argentino,* Claridad, Buenos Aires, 1938.

[11] Hora, *Los terratenientes de la pampa argentina…, op. cit.,* pp. 325-333.

[12] Gino Germani, *Estructura social de la Argentina,* Raigal, Buenos Aires, 1955, pp. 75-76; David Rock, "Argentina, 1930-1946", en Leslie Bethell (ed.), *Argentina since Independence,* Cambridge University Press, Cambridge, 1993, p. 198.

[13] Para una evaluación reciente de estos cambios, véase Lila Caimari, "Población y sociedad", en Alejandro Cattaruzza (ed.), *Argentina: Mirando hacia dentro (1930-1960),* Mapfre-Taurus, Madrid, 2012, pp. 191-244. Los debates intelectuales sobre el crecimiento de Buenos Aires se exploran en Anahí Ballent y Adrián Gorelik, "País urbano y país rural: La modernización territorial y su crisis", en Alejandro Cattaruzza (ed.), *Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política,* Sudamericana, Buenos Aires, 2001, pp. 180-184.

[14] Véase, entre otros, Tulio Halperin Donghi, *La república imposible (19301945),* Emecé, Buenos Aires, 2007; David Rock, *Authoritarian Argentina: The Nationalist Movement, Its History and Its Impact,* University of California Press, Berkeley, 1992; Beatriz Sarlo, *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930,* Nueva Visión, Buenos Aires, 1998.

[15] Véase Fernando Devoto, *Historia de la inmigración en la Argentina,* Sudamericana, Buenos Aires, 2001.

[16] Elina Tranchini, "El cine argentino y la construcción de un imaginario criollista, 1915-1945", *Entrepasados* 9, núms. 18/19 (2000), pp. 113-143; Karush, "The Melodramatic Nation…", *op. cit.,* pp. 293-326; Andrea Matallana, *Locos por la radio: Una historia social de la radiofonía en la Argentina, 19231947,* Buenos Aires, Prometeo, 2006.

[17] Sobre discursos raciales de discriminación en contra de personas de piel oscura, véase Enrique Garguin, "'Los argentinos descendemos de los barcos': The Racial Articulation of Middle-Class Identity in Argentina (1920-1960)", *Latin American*

and Caribbean Ethnic Studies 2, núm. 2 (2007), pp. 161-184.

[18] Sobre Atahualpa Yupanqui, véase Sergio Pujol, *En nombre del folclore: Biografía de Atahualpa Yupanqui*, Emecé, Buenos Aires, 2008, pp. 177-178.

[19] Catalina Wainerman, "Mujeres que trabajan: Hechos e ideas", en Susana Torrado (ed.), *Población y bienestar*, vol. 2, Edhasa, Buenos Aires, 2007, p. 333.

[20] Susana Torrado, *Historia de la familia en la Argentina moderna (18702000)*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2003, pp. 323-369.

[21] Estos cambios son analizados en Caimari, "Población y sociedad", *op. cit.*

[22] Un estudio sobre el acceso a la vivienda, no obstante, nos ofrece un panorama menos alentador. El censo de 1947 muestra que sólo 17.5% de las viviendas en Buenos Aires y 43.3% en la Gran Buenos Aires estaban ocupadas por sus propietarios. En vísperas del ascenso de Perón al poder, la posibilidad de adquirir una casa propia —que desde principios de siglo se había convertido en uno de los principales síntomas del mejoramiento social— estaba fuera del alcance para la mayoría de los habitantes urbanos. Sin embargo, no queda claro si esta situación empeoró durante los años treinta. De hecho, la vivienda en las grandes ciudades había sido un problema desde el siglo XIX, ya que el constante incremento de la población ejercía una presión constante en la disponibilidad de viviendas. Anahí Ballent, "La casa para todos: grandeza y miseria de la vivienda masiva", en Fernando Devoto y Marta Madero (eds.), *Historia de la vida privada en la Argentina*, vol. 3, Taurus, Buenos Aires, 1999.

[23] Fernando Devoto y Boris Fausto, *Argentina-Brasil, 1850-2000: Un ensayo de historia comparada*, Sudamericana, Buenos Aires, 2008, p. 244.

[24] Juan Carlos Tedesco, "La crisis de la hegemonía oligárquica y el sistema educativo argentino, 1930-1945", en Juan Carlos Tedesco (ed.), *Educación y sociedad en la Argentina (1880-1945)*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008, p. 236; Ministerio de Educación y Justicia, Departamento Estadístico, Enseñanza Media, *Enseñanza Media, Tomos I y II, 1914-1963*, Buenos Aires, 1964, pp. 58-59 y 283, citado en Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza, "La democratización del bienestar", en Juan Carlos Torre (ed.), *Los años peronistas (1946-1955)*, Sudamericana, Buenos Aires, 2002, p. 298.

[25] Juan Carlos Tedesco y Alejandra Cardini, "Educación y sociedad: proyectos educativos y perspectivas futuras", en Torrado, *Población y bienestar*, *op. cit.*, vol. 2, p. 465. Véase también Pablo Buchbinder, *Historia de las universidades argentinas*, Sudamericana, Buenos Aires, 2005.

[26] Fernando Rocchi, "La americanización del consumo: las batallas por el mercado argentino, 1920-1945", en María Inés Barbero y Andrés Regalsky (eds.), Americanización: Estados Unidos y América Latina en el siglo *XX*: Transferencias económicas, tecnológicas y culturales, Eduntref, Buenos Aires, 2003.

[27] El consumo de alimentos importados (como café y té) permaneció estancado o decreció, lo que sugiere que en esta área operaba la sustitución por importaciones. Véase *Revista de Economía Argentina* 24, núm. 286 (abril de 1942), p. 98, y 24, núm. 287 (mayo de 1942), p. 128.

[28] Karush, "The Melodramatic Nation…", *op. cit.*, p. 299.

[29] Matallana, *Locos por la radio…*, *op. cit.*, apéndices 1 y 2.

[30] *Ibid.*, p. 36.

[31] Germani, *Estructura social de la Argentina…*, *op. cit.*, pp. 139-225.

[32] Caimari, "Población y sociedad…" *op. cit.*

[33] Lila Caimari, *Mientras la ciudad duerme: Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2012.

[34] Ezequiel Adamovsky, *Historia de la clase media argentina: Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003*, Planeta, Buenos Aires, 2009, pp. 245-250.

[35] Fernando Rocchi, *Chimneys in the Desert: Industrialization in Argentina during the Export Boom Years, 1870-1930*, Stanford University Press, Stanford, 2006.

[36] Para comparaciones de tazas de sindicalización en otros grandes países de América Latina, véase Brian Loveman, *Chile: The Legacy of Hispanic Capitalism*, Oxford University Press, Oxford, 2001, p. 205; Joel Wolfe, *Working Women, Working Men: São Paulo and the Rise of Brazil's Industrial Working Class, 19001955*, Duke University Press, Durham, 1993, pp. 78-83. Para niveles de sindicalismo en Europa, véase Geoff Elley, *Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850-2000*, Oxford University Press, Nueva York, 2002, p. 70.

[37] Roy Hora, *Historia económica del siglo XIX en Argentina*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2010, pp. 174-182.

[38] John Laslett, *Reluctant Proletarians: A Short Comparative History of American Socialism*, Greenwood, Westport, 1984.

[39] El desarrollo de políticas laborales en este periodo es analizado en Ricardo Falcón, "Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión social en Argentina, 1890-1912", *Anuario*, Universidad Nacional del Litoral, Rosario, 1986-1987, pp. 365-389; Roberto Korzeniewicz, "The Labour Movement and the State in Argentina, 1887-1907", *Bulletin of Latin American Research* 8, núm. 1 (1989), pp. 25-45; Jeremy Adelman, "Socialism and Democracy in Argentina in the Age of the Second International", *Hispanic American Historical Review* 72, núm. 2 (1992), pp. 211-238; Hernán Camarero y Carlos Miguel Herrera, "El Partido Socialista en Argentina: nudos históricos y perspectivas historiográficas", en Hernán Camarero y Carlos Miguel Herrera (eds.), *El Partido Socialista en Argentina: Sociedad, política e ideas a través de un siglo*, Prometeo, Buenos Aires, 2005, pp. 9-73.

[40] Sobre la relación entre los anarquistas, el movimiento obrero y el Estado, véase Ruth Thompson, "The Limitations of Ideology in the Early Argentine Labour Movement: Anarchism in the Trade Unions", *Journal of Latin American Studies* 16 (1984), pp. 81-99; Korzeniewicz, "The Labour Movement…", *op. cit.;* Juan Suriano, *Trabajadores, anarquismo y Estado represor: De la Ley de Residencia a la Ley de Defensa Social (1902-1910)*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1988 (Conflictos y Procesos de la Historia Argentina Contemporánea); Eduardo Zimmermann, *Los liberales reformistas: La cuestión social en la Argentina 1890-1916*, Sudamericana / Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 1995.

[41] Para un estudio más detallado de las políticas laborales durante el periodo radical, véase Joel Horowitz, *Argentina's Radical Party and Popular Mobilization, 1916-1930*, Penn State University Press, University Park, 2008. Véase también David Rock, *El radicalismo argentino, 1890-1930*, Amorrortu, Buenos Aires, 1975, pp. 146-156; Tulio Halperin Donghi, *Vida y muerte de la República verdadera (1910-1930)*, Emecé, Buenos Aires, 2000, pp. 131-142; Juan Carlos Torre, "¿Por qué no existió un fuerte movimiento obrero socialista en la Argentina?", en Claudia Hilb (ed.), *El político y el científico: Ensayos en homenaje a Juan Carlos Portantiero*, Siglo XXI/UB, Buenos Aires, 2009, pp. 33-49; Ricardo Falcón y Alejandra Montserrat, "Estado, empresas, trabajadores y sindicatos", en Ricardo Falcón (ed.), *Democracia, conflicto social y renovación de ideas (19161930)*, Sudamericana, Buenos Aires, 2003, pp. 151-194.

[42] Departamento Nacional del Trabajo, División de Estadística, *Condiciones de vida de la familia obrera*, Buenos Aires, 1937, p. 28.

[43] Joel Horowitz, *Los sindicatos, el Estado y el surgimiento de Perón, 19301946*, Eduntref, Buenos Aires, 2004, p. 55.

[44] Secretaría de Asuntos Económicos, *Producto e ingreso de la República Argentina en el periodo 1935-54*, G. Kraft, Buenos Aires, 1955, pp. 63, 120-121; Sebastián Galiani y Pablo Gerchunoff, "The Labor Market", en Gerardo Della Paolera y Alan M. Taylor (eds.), *A New Economic History of Argentina*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p. 152.

[45] Facundo Alvaredo, "The Rich in Argentina over the Twentieth Century",MIMEO, 2008, p. 14.

[46] *Censo Nacional de 1947*, vol. 3, pp. 26-27.

[47] Tamarin, *The Argentine Labor Movement…*, *op. cit.*, p. 32.

[48] Departamento Nacional del Trabajo, División de Estadística, *Investigaciones sociales, 1938*, Buenos Aires, 1939, p. 19.

[49] Roberto Cortés Conde, "Los comienzos de la industrialización argentina", en R. Cortés Conde (ed.), La economía argentina en el largo plazo: Ensayos de historia económica de los siglos *XIX* y *XX*, Sudamericana, Buenos Aires, 1997, p. 220.

[50] Murmis y Portantiero, *Estudios sobre los orígenes del peronismo…*, *op. cit.*, p. 76.

[51] Tamarin, *The Argentine Labor Movement…*, *op. cit.*, pp. 84-85.

[52] Departamento Nacional del Trabajo, División de Estadística, *Estadística de las huelgas*, Buenos Aires, 1940, p. 20; Horowitz, *Los sindicatos…*, *op. cit.*, p. 111. Véase también Roberto Korzeniewicz, "Las vísperas del peronismo: Los conflictos laborales entre 1930 y 1943", *Desarrollo Económico* 33, núm. 131 (1993), pp. 324-325.

[53] Juan Carlos Portantiero, "Imágenes de la crisis: el socialismo en la década de 1930", *Prismas* 6 (2002), pp. 231-241.

[54] Andrés Bisso, "De *Acción Democrática* a la *Unión Democrática:* El civismo antifascista como prédica política y estrategia partidaria del socialismo argentino (1940-1946)", *Prismas* 6 (2002), pp. 257-264; Ricardo Pasolini, "El nacimiento de una sensibilidad política: Cultura antifascista, comunismo y nación en la Argentina: entre la AIAPE y el

Congreso Argentino de la Cultura, 19351955", *Desarrollo Económico* 45, núm. 179 (2005), pp. 403-433.

[55] Sobre los comunistas, véase José M. Arico, "Los comunistas y el movimiento obrero", *La Ciudad Futura* 4 (1987), pp. 15-17; Jorge Cernadas, Roberto Pittaluga y Horacio Tarcus, "La historiografía sobre el Partido Comunista de la Argentina: Un estado de la cuestión", *El Rodaballo* 4, núm. 8 (1998), pp. 3039; y Hernán Camarero, *A la conquista de la clase obrera: Los comunistas y el mundo del trabajo en la Argentina, 1920-1935*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008.

[56] Tamarin, *The Argentine Labor Movement…*, *op. cit.*, p. 149.

[57] Sobre Peter, véase su autobiografía, *Crónicas proletarias*, Esfera, Buenos Aires, 1968.

[58] Hugo del Campo, *Sindicalismo y peronismo: Los comienzos de un vínculo perdurable*, CLACSO, Buenos Aires, 1983, p. 96.

[59] Celia Durruty, *Clase obrera y peronismo*, Cuadernos de Pasado y Presente, Córdoba, 1969; Korzeniewicz, "Las vísperas del peronismo…", *op. cit.*, pp. 333-334.

[60] Tamarin, *The Argentine Labor Movement…*, *op. cit.*, p. 148; Korzeniewicz, "Las vísperas del peronismo…", *op. cit.*, pp. 333-334.

[61] Departamento Nacional del Trabajo, División de Estadística, *Organización sindical: Asociaciones obreras y patronales*, Buenos Aires, 1941, p. 31.

[62] Tamarin, *The Argentine Labor Movement…*, *op. cit.*, p. 152; Korzeniewicz, "Las vísperas del peronismo…", *op. cit.*, p. 335.

[63] Anahi Ballent, "Políticas de la vivienda, arquitectura doméstica y cultura del habitar", en Torrado, *Población y bienestar*, *op. cit.*, 2, p. 420.

II. LOS TRABAJADORES CHILENOS Y LA GRAN DEPRESIÓN, 1930-1938

ÁNGELA VERGARA

EN NOVIEMBRE de 1930, Jacinto Vera solicitó al gobernador de Mataquito un boleto de tren para viajar a Talca o Santiago. Después de perder su empleo como cocinero en la Oficina Alianza, una salitrera ubicada a unos 100 kilómetros al sureste de Iquique, en octubre de 1930, Vera había llegado a la pequeña población sureña de Curepto, en el Valle de Mataquito. Había viajado más de 1 600 kilómetros y, como muchos otros trabajadores del salitre, había abordado un buque de vapor en el puerto de Iquique como pasajero de tercera clase en cubierta, tomado un tren de Valparaíso a Santiago y aguardado en la estación Alameda por un tren que lo llevara al sur. Puesto que probablemente había llegado al norte como "enganchado", la Asociación de Productores del Salitre cubrió sus gastos de viaje de Iquique a Curepto, y las autoridades nacionales habían registrado sus movimientos con detalle. Sin embargo, Vera no logró encontrar trabajo en su ciudad natal, por lo que decidió trasladarse nuevamente para probar suerte en Talca (capital provincial) o Santiago.[1] Igual que Vera, Berta Campos también deseaba viajar junto con su hijo de dos años. Tras ser abandonada por su esposo en Iquique, Campos vivía en uno de los numerosos albergues de emergencia instalados por el Ministerio de Bienestar Social en esa empobrecida ciudad. No tenía un historial de empleo formal ni esperanza de encontrar trabajo en Iquique, por lo que decidió solicitar ayuda económica a las autoridades para trasladarse a Valparaíso, donde pretendía alojarse con algunos parientes.[2]

Las historias de Vera y Campos, así como su incierto futuro, reflejan el efecto devastador de la Gran Depresión en la economía chilena y en los trabajadores, así como algunas de sus estrategias individuales para enfrentar la crisis. Desde fines de 1929, chilenos como Vera y Campos sufrieron las dramáticas consecuencias del colapso del mercado internacional, que golpeó en primera instancia, con particular intensidad, a las industrias del salitre y la minería ubicadas en el norte del país. Como consecuencia de la caída internacional de los precios y del sector exportador, el país no podía pagar importaciones ni tenía acceso a préstamos externos, por lo que la crisis se extendió rápidamente a otros sectores económicos. La deflación de los precios y el creciente déficit estatal predominaron durante los primeros años

de la depresión mundial (1929-1931), y en julio de 1931 el Estado chileno se declaró insolvente para pagar su deuda externa, apoyar obras públicas o pagar los salarios de los empleados públicos. Ante el colapso inminente de la economía nacional y las protestas generalizadas, el presidente Carlos Ibáñez del Campo, general populista autoritario que había ascendido al poder en 1927, se vio obligado a renunciar.[3]

A lo largo de 1932, la creciente inestabilidad política, las políticas económicas erráticas, los cambios en las políticas monetarias y el gasto público cada vez mayor para la disminución del desempleo y al apoyo a obras públicas provocaron que la deflación se convirtiera en una inflación incontrolable.[4] Ese año se distinguió también por la radicalización de la política: los líderes de la República Socialista (de junio a septiembre de 1932) prometieron a los chilenos una "república de trabajadores y no de esclavos, de trabajadores dignos, libres y conscientes".[5] Las manifestaciones, protestas y mítines, así como la presencia cada vez mayor de pobres en los espacios públicos de las principales ciudades chilenas contribuyeron a la efervescencia de aquellos meses, creando temor y ansiedad entre la élite. Si bien los 100 días simbólicos del socialismo no lograron resolver la crisis ni consolidar su poder, dejaron una fuerte huella en la izquierda chilena.[6] El presidente Arturo Alessandri Palma, electo en 1932 y respaldado por una amplia coalición política de centro-derecha, implantó medidas estabilizadoras estrictas y apoyó el proceso en marcha de la sindicalización, pero también reprimió severamente los movimientos sociales que estaban fuera del marco de la ley. En 1933, la economía chilena inició su recuperación, pero los precios internacionales de las exportaciones mineras no mejoraron sino hasta 1935, el empleo en el sector minero jamás recuperó el nivel anterior a la Depresión y los salarios de los trabajadores se mantuvieron bajos.[7]

Este capítulo analiza el impacto de la Gran Depresión en los trabajadores y la respuesta de los órganos públicos a la crisis social y económica, centrándose en el periodo que abarca de 1930 al triunfo del Frente Popular en 1938. Como en otras partes del mundo occidental, las repercusiones sociales y económicas de la Depresión generaron mayor conciencia sobre la necesidad de tener un Estado fuerte e intervencionista, con la capacidad de subsidiar y promover programas sociales, implementar y supervisar derechos laborales, regular la economía nacional y promover la industrialización del país.[8] De esa manera, el Estado reaccionó ante el trágico empobrecimiento de las familias trabajadoras chilenas e incorporó las sensibilidades políticas y sociales de una nueva generación de estudiantes y jóvenes profesionales (médicos, trabajadores sociales, abogados), hombres y mujeres que se unieron con entusiasmo a las filas del servicio público y contribuyeron a la construcción, y final transformación, de los servicios de bienestar social y del Estado.[9] Para comprender las repercusiones de la Gran Depresión y la relación entre los órganos estatales y los obreros, este capítulo aborda tres temas principales: el desempleo y el trabajo público, la asistencia social, y los derechos y las luchas sindicales durante esos años críticos.

En un cuestionamiento de la imagen tradicional que ha visto en los años treinta una época en la que las leyes sociales y laborales absorbieron al movimiento sindicalista radical y militante, este capítulo demuestra que los trabajadores fueron capaces de resistir, negociar y adaptarse a las condiciones económicas y políticas cambiantes.[10] Los trabajadores chilenos no permanecieron pasivos, sino que participaron activamente en mítines y protestas políticas, negociaron mejores condiciones laborales y mejores salarios, protegieron los pocos trabajos existentes, se organizaron en numerosos albergues y comenzaron a afiliarse a los sindicatos legales recién formados. Pero, por encima de todo, no permanecieron inmóviles, pues abandonaron las regiones más golpeadas por la crisis en busca de trabajo en el campo, en la construcción de caminos, vías férreas y presas, en las minas de oro e incluso en las minas de estaño bolivianas y en las estancias del sur de Argentina. A todos estos sitios llevaron consigo sus propias experiencias políticas, organizativas y laborales que sembraron temor entre los terratenientes y las autoridades políticas de los pueblos y ciudades más pequeños.

La relación entre los cesantes y los órganos estatales de asistencia social fue compleja. Los años de la Gran Depresión ilustran las tensiones entre un Estado que intentó manipular los servicios públicos, los programas de asistencia y las leyes del trabajo para controlar y cooptar los esfuerzos de los trabajadores y sus familias y, finalmente, interpretar y utilizar esos servicios y leyes para mejorar las condiciones a su manera.[11] En los años subsiguientes, como han demostrado claramente los investigadores del Frente Popular chileno y del populismo latinoamericano, los trabajadores y las organizaciones sindicales vivieron una realidad compleja en la que encontraron formas para negociar, adaptar y transformar los significados de la asistencia social y las leyes del trabajo, y redefinir así los significados del Estado de bienestar.[12] En este contexto, las profundas transformaciones que ocurrieron a principios de los años treinta establecieron las reglas que determinaron las luchas futuras para el empoderamiento político y económico de los trabajadores chilenos.

Cesantía y movilidad geográfica

Las repercusiones de la Gran Depresión en la economía y los trabajadores chilenos y las tremendas dificultades del país para alcanzar la recuperación fueron consecuencia de las características de la materia prima más importante del país: el salitre o nitrato. Los historiadores económicos argumentan que la fuerte dependencia de Chile en el mercado externo y la producción del nitrato explican el efecto devastador que tuvo la depresión mundial en el país. Desde el fin de la Guerra del Pacífico (1879-1883), el salitre, repartido a lo largo de todo el desierto de Atacama, se había convertido en el motor de la economía chilena, pues generaba considerables ingresos para el Estado, financiaba la inversión pública en infraestructura y proporcionaba un mercado para bienes de consumo e industriales baratos,

así como productos agrícolas. A través del tradicional sistema de "enganche", miles de trabajadores chilenos que habían emigrado al norte tuvieron que enfrentar muy severas condiciones de trabajo, inseguridad en el empleo y precarias instalaciones de vivienda.[13] Hacia finales del siglo XIX, en los campos salitreros, cuna de la identidad y la cultura laboral proletaria, los trabajadores del nitrato comenzaron a organizar una serie de huelgas generales que se convirtieron en los fundamentos de un movimiento del trabajo nacional y radical que acabó por colocar la cuestión laboral al frente de la política nacional.[14]

Como en el caso de muchas otras materias primas, el mercado del nitrato era muy inestable, y el Estado chileno, junto con la economía nacional, se había vuelto particularmente sensible a estos ciclos internacionales. Tras el estallido de la primera Guerra Mundial, el nitrato sufrió la crisis más profunda, lo que para muchos representó el principio del fin de la era del salitre.[15] En ese tiempo, la mayoría de las "oficinas" salitreras cerró y miles de trabajadores del sector emigraron de vuelta a Santiago, Valparaíso y el Valle Central, lo que obligó al Estado y a las instituciones privadas a implementar una serie de programas de asistencia social. El Servicio de Colocación, por ejemplo, abrió sus puertas en 1914 bajo la supervisión de la Dirección del Trabajo. "Que ante la gravedad extraordinaria de la crisis general del trabajo —declaró el gobierno— consideraciones superiores de interés público y de previsión social aconsejan al Gobierno adoptar […] todas aquellas medidas útiles para regularizar la distribución y colocación de los obreros desocupados."[16] El Servicio de Colocación fue una especie de bolsa de trabajo que registró y colocó a los obreros cesantes en trabajos agrícolas, obras públicas e industrias a lo largo de todo el país. Por otra parte, las autoridades locales, las instituciones privadas de beneficencia y las parroquias católicas se entregaron a la tarea de organizar comedores y albergues para obreros migrantes y cesantes.[17] Muchos de estos programas constituyeron la principal respuesta pública a la crisis desencadenada por la Gran Depresión a principios de los años treinta.

A fines de los años veinte, un breve momento de prosperidad económica ocasionó el flujo de nuevas olas de migrantes hacia el norte, que normalmente arribaron a los puertos de Antofagasta e Iquique; con ello, los "enganches" se reanudaron. Las enormes minas recientemente abiertas de Potrerillos (Atacama) y Chuquicamata (Calama), propiedad de extranjeros, ofrecieron abundantes oportunidades de trabajo para trabajadores mineros y de la construcción, y atrajeron tanto a peones chilenos como bolivianos y peruanos. Sin embargo, esta prosperidad económica fue breve. En diciembre de 1929, las autoridades locales de los puertos salitreros norteños en Iquique y Antofagasta informaron sobre el cierre de sus oficinas, y, una vez más, muchos trabajadores se enfrentaron con la amenaza del desempleo.

Aunque esta recesión resultó ser mucho más severa, generalizada y duradera que las crisis económicas anteriores, los trabajadores de la época de la Gran Depresión tuvieron más derechos, recursos políticos y experiencia para sobrevivir y negociar tanto con los empresarios como con las autoridades locales y nacionales. En las primeras décadas del siglo

XX, los niveles crecientes de movilización social y laboral, así como una conciencia o temor ante los peligros sociales y laborales, condujeron a la implementación de las primeras leyes sociales.[18] El movimiento en favor de las leyes sociales tuvo un lento avance, y sólo tras las presiones militares (mejor conocidas como "ruido de sables") encabezadas por el general Carlos Ibáñez del Campo en 1924, el Congreso Nacional aprobó un amplio paquete de leyes, como el derecho a sindicalizarse, contratos laborales, comisiones de arbitraje, indemnizaciones por accidente y seguridad social.[19] En los años subsiguientes, y en especial durante la administración de Ibáñez (1927-1931), el Estado vigiló de cerca el cumplimiento de las nuevas leyes e intentó controlar y cooptar tanto a los trabajadores como al escéptico y radicalizado movimiento obrero representado por la Federación Obrera de Chile (FOCH).[20]

A pesar de su cumplimiento relativo hasta finales de 1930, las leyes del trabajo proporcionaron a los obreros algunos derechos para enfrentar despidos y ofrecieron a los funcionarios públicos una manera para administrar y regular el desempleo durante la Depresión. En ese sentido, la Dirección del Trabajo, a través de sus oficinas distribuidas a lo largo de todo el país, desempeñó un papel importante en la organización de la respuesta a la Depresión, atendiendo los reclamos de los trabajadores por salarios y beneficios sociales no percibidos o por despidos masivos. De hecho, cuando a principios de los años treinta se comenzaron a cerrar las oficinas del nitrato, la Dirección del Trabajo envió a tres funcionarios adicionales a Tarapacá para supervisar que los patrones "despidan a los obreros de sus puestos de manera correcta".[21] Con la firme creencia de que una distribución bien organizada de los obreros en diferentes sectores económicos y regiones del país evitaría la agitación social, los funcionarios públicos ejercieron mecanismos para controlar los despidos de los obreros, en tiempo y forma, y negociar con los empresarios sobre los términos y el ritmo de los cierres. Asimismo, el ministro de Bienestar Social instruyó a todos los funcionarios locales para impedir las "desocupaciones sorpresivas" exigiendo a los empresarios dar aviso con 20 días de anticipación sobre cualquier despido de más de 50 trabajadores.[22] Mientras que muchos autores consideran los años de la Gran Depresión como una época regresiva en cuanto a leyes laborales, la valiosa documentación de la Oficina del Trabajo muestra una gran actividad de los funcionarios públicos que, a pesar de las restricciones económicas e institucionales, lucharon por hacer cumplir la ley.[23]

Mientras que las autoridades del trabajo se esforzaron por mantener el control del mercado laboral en un tiempo de crisis, la cuestión de movilidad y migración de trabajadores se complicó de manera particular. La Gran Depresión obligó una vez más a los trabajadores del salitre y a sus familias a movilizarse. Este hecho demuestra tanto la fragilidad de la economía de exportación chilena como la importancia de la movilidad geográfica como estrategia de supervivencia para los obreros, y llevó la realidad de la pobreza y el desempleo a las calles de las principales ciudades chilenas.[24] Entre septiembre de 1930 y febrero de 1931, 46 459 personas (22 415 hombres, 9 072 mujeres y 14 972 niños) abandonaron los campos salitreros

de Antofagasta e Iquique y se trasladaron en barcos de vapor a Santiago y otras ciudades más pequeñas de la provincia.[25] Las autoridades públicas intentaron controlar y supervisar el proceso de migración inversa y organizaron la distribución uniforme de los trabajadores a lo largo del país para evitar la peligrosa concentración de desempleados en grandes ciudades como Santiago y Valparaíso. De acuerdo con las instrucciones de la Dirección del Trabajo, los trabajadores del nitrato cesantes debían ser enviados a sus lugares de origen (siempre y cuando confirmasen que tenían parientes para apoyarlos) o bien donde hubiese oportunidades de trabajo.

Las demandas de los trabajadores del salitre cesantes en la provincia de Tarapacá en 1930 han servido para ilustrar algunos de los debates sobre la migración de trabajadores, así como los esfuerzos gubernamentales para controlarla. En los primeros meses de 1930, cuando todavía no existía una conciencia clara de la magnitud y extensión de la depresión económica, las compañías salitreras de Tarapacá intentaron reubicar trabajadores dentro de la misma industria del nitrato, cambiándolos de las oficinas que cerraban a aquellas que todavía operaban. No obstante, de acuerdo con el intendente de Tarapacá, a su oficina llegaban diariamente trabajadores que exigían ser enviados al sur, donde creían tener mejores oportunidades de vida y trabajo. La ambigüedad de la situación condujo a diferentes interpretaciones de los derechos y obligaciones de los productores del salitre.[26] La Dirección del Trabajo y la Intendencia de Tarapacá acordaron que si bien las compañías probablemente tenían derecho legal para reubicar a los trabajadores dentro de los distritos del nitrato, puesto que no podían garantizar las condiciones básicas de vida y trabajo, en particular para los trabajadores con familia, los contratos debían considerarse terminados y los patrones debían pagar los gastos de traslado de los trabajadores.[27]

A pesar del control estatal y la falta de recursos económicos, la movilización de trabajadores chilenos continuó durante los primeros años de 1930, en un reto a las políticas estatales. De tal manera, esta movilidad ejemplificó tanto el esfuerzo del Estado para reubicar y distribuir a los trabajadores como las estrategias individuales de supervivencia de los propios trabajadores. Como denunció el intendente de la provincia de Cautín en noviembre de 1930, muchos de los cesantes que arribaron a esa provincia del sur no tenían conexión alguna con la región, o bien una muy lejana, y carecían de medios de subsistencia.[28] La llegada de estos "forasteros" a las ciudades provinciales menores generó temor y frustración entre las autoridades locales y los miembros de la élite, quienes en su mayoría consideraban que no era responsabilidad suya ocuparse de ellos. "Existen en esta Provincia mil cesantes —explicó el intendente de Coquimbo— que recorren pueblos y casas en busca de alimentos, produciendo alarma vecindaria."[29] En esas pequeñas ciudades y pueblos regionales, el temor generado por el arribo masivo de cesantes se agravó por la falta de oportunidades de empleo y de una infraestructura pública para prestar ayuda a los migrantes.

El movimiento de trabajadores desempleados y sus familias se volvió más difícil y

controvertido a causa de la extensión e intensidad de la recesión, y las autoridades públicas se esforzaron por controlar la movilidad geográfica de los trabajadores a pesar de sus derechos legales y elecciones personales. Cuando a fines de 1930 el intendente de Magallanes anunció que la temporada de esquila de ovejas en la ciudad tendría que enfrentar el reto de reubicar a alrededor de 5 000 trabajadores desocupados, el Ministerio de Bienestar Social le ordenó enviar trabajadores sólo a Puerto Montt y Talcahuanco, y abstenerse de enviarlos a Santiago. Debido a la situación desesperada en Magallanes, el intendente de Puerto Montt suspendió los "enganches" en esa región como una medida para disuadir a los trabajadores de su provincia de trasladarse allí. Puesto que los trabajadores, y en especial los de la isla de Chiloé, insistieron en trasladarse a Magallanes, a falta de mecanismos legales para evitar su desplazamiento, los funcionarios públicos obligaron a todo trabajador que se dirigiera a Magallanes a firmar un documento de renuncia a sus derechos de asistencia pública.[30] Dicho de otro modo, se permitió a los trabajadores trasladarse a Magallanes pero bajo su propio riesgo.

Conforme la crisis se extendió a lo largo de todo el país y la movilización continuó, registrar y supervisar a los hombres, mujeres y niños desempleados y encontrar oportunidades locales de empleo para ellos se convirtió en un reto mayúsculo. El ministro de Bienestar Social asignó a los carabineros locales la tarea de registrar a las personas en las oficinas regionales de la Dirección del Trabajo, donde se les entregaba un carné de registro que confirmaba su estatus como cesantes.[31] Durante los primeros dos años de la crisis, la Oficina de Colocaciones registró minuciosamente el número de trabajadores desocupados y llevó a cabo grandes esfuerzos para distribuirlos en las áreas agrícola, minera y de obras públicas (como proyectos de mejoramiento urbano, vías férreas, caminos, presas y canales). No obstante, como puede apreciarse en el cuadro II.1, el número de trabajadores colocados por esta dependencia siempre fue menor que el número de trabajadores registrados en busca de trabajo, que probablemente fue también un reducido porcentaje del total de los desempleados en el país.

CUADRO II.1. *Mercado laboral: reporte mensual*

Mes y año	*Número de personas en busca de trabajo*	*Número de personas colocadas*	*Diferencia*
Diciembre de 1929	5734	1679	4055
Enero de 1930	1414	1051	363
Febrero de 1930	1507	852	655
Marzo de 1930	1666	1147	519
Abril de 1930	1332	830	502
Mayo de 1930	927	280	647
Junio de 1930	885	321	564
Septiembre de 1930	1730	180	1550
Octubre de 1930	4300	2749	1551
Noviembre de 1930	4339	1375	2964

FUENTE: Oficina de Colocaciones, ARNAD, Dirección General del Trabajo, volúmenes 213, 214, 215, 216, 220 y 222.

Las oportunidades de trabajo se limitaron a la agricultura, obras públicas y minas de oro, pero incluso éstas se volvieron cada vez más escasas a medida que la crisis fue afectando a prácticamente todos los sectores de la economía chilena en 1932.[32] En el verano de 1930 seguía existiendo una fuerte demanda de trabajo en los campos agrícolas, pero temporal y de breve duración; los funcionarios del trabajo reconocían que las condiciones y los salarios estaban por debajo de las expectativas de los trabajadores, causa por la que muchos se rehusaban a aceptar esos trabajos. En San Felipe, en el Valle de Aconcagua, había 300 hombres desempleados, la mayoría de ellos llegados de las salitreras. Mientras que algunos trabajaron en la construcción de un nuevo hospital en el pueblo de Putaendo, la mayoría trabajó en la agricultura (plantaciones de cáñamo y viñedos).[33] En abril de 1930, al final de la temporada de verano, no sólo muchos se enfrentaron nuevamente al desempleo, sino que además los 110 trabajadores que habían trabajado para una de las bodegas locales, Viña Errázuriz Panquehue, se quejaron ante la Dirección del Trabajo de no haber recibido sus salarios.[34] Al año siguiente, una combinación de condiciones climatológicas, bajos precios y falta de crédito provocó una reducción de 20% en la producción agrícola, y las tasas de desempleo se dispararon en las provincias agrícolas de Chillán, Los Ángeles y Cautín.[35]

Igual que durante la crisis salitrera de la primera Guerra Mundial, los funcionarios públicos procedieron a colocar a los trabajadores cesantes en obras de construcción. Las obras públicas abarcaban un amplio rango de trabajos de construcción como vías férreas, caminos rurales, canales, infraestructura portuaria y edificios públicos. Durante todo 1930 y principios de 1931, la construcción constituyó una de las fuentes de empleo más importantes, y la Dirección del Trabajo, junto con las autoridades regionales, intentaron controlar la

colocación de trabajadores, negociar con empresas y contratistas privados de la construcción y regular las condiciones laborales. En marzo de 1931, por ejemplo, la ciudad de Rancagua anunció que comenzaría a pavimentar las calles de la ciudad y planeaba contratar alrededor de 200 personas. Con este fin, el gobierno municipal instaló una oficina de la Dirección del Trabajo en la ciudad para el registro de trabajadores. Las autoridades locales pretendían cubrir todas las vacantes con cesantes locales; sin embargo, los funcionarios regionales temían justificadamente que arribara a Rancagua un número considerable de "forasteros" en busca de trabajo.[36] En términos generales, mientras que trabajar en proyectos urbanos de construcción era relativamente atractivo, el trabajo en regiones aisladas en vías férreas, caminos y canales resultaba muy duro y poco atractivo para la mayoría de los desempleados.

A lo largo de 1931, con el incremento del déficit público y la merma en la capacidad del país para importar, muchas obras públicas importantes se suspendieron o desaceleraron.[37] En abril de 1931, la empresa Fernández, Vallejos y Cía. desaceleró la construcción del camino entre Valdivia y La Unión y cesó a 300 trabajadores, mientras que Dyckerhoff y Widmann suspendieron las obras portuarias en Puerto Montt con el despido de 110 obreros.[38] En mayo, se suspendieron los proyectos de construcción de caminos en la provincia de Aysén y lo mismo ocurrió con las obras del ferrocarril Corte Alto-Maullín en Valdivia.[39] En los trabajos que permanecieron abiertos, los salarios y las condiciones se deterioraron. El director general de obras públicas y el Ministerio de Bienestar Social permitieron a los contratistas pagar los salarios cada dos meses y adelantar parte del salario en "fichas" (vales) para la tienda de la compañía.[40] En muchos casos, las empresas constructoras no pagaban a tiempo, como fue el caso de los 500 obreros contratados para la construcción del camino de la provincia de Aysén. Sin sus salarios, algunos trabajadores tomaron la decisión de aguardar en el pequeño pueblo de Puerto Aysén, donde habían gastado todo su dinero en alojamiento y comida, mientras que otros optaron por regresar a la isla de Chiloé con un simple recibo en las manos. A pesar de que el contratista había hecho las deducciones obligatorias de seguridad social, ninguno de estos trabajadores de la construcción había recibido ni visto siquiera su "libreta" de seguridad social.[41]

El oro fue una de las pocas actividades mineras que se mantuvieron activas en un país que había basado su prosperidad económica en la extracción de minerales y nitrato, lo que atrajo a un número importante de ex trabajadores de la minería radicados en el norte. En un esfuerzo por aumentar la producción aurífera del país y crear trabajos, el gobierno de Ibáñez promovió la actividad del lavado de oro y ofreció crédito, suministros y asistencia a un reducido grupo de empresarios mineros. A cambio, estos contratistas se obligaban a vender toda su producción al Estado.[42] Durante 1932, la minería del oro apareció en los discursos gubernamentales como una solución eficaz para el desempleo y la crisis general. "La llamada Campaña del oro —explicó Víctor Navarrete, ministro de Fomento durante la República Socialista— fue una respuesta ante un pueblo que moría de hambre por la falta de trabajo."[43]

A pesar de las promesas gubernamentales de proporcionar alrededor de 40 000 trabajos en la extracción del oro, su producción tuvo un efecto limitado en la reducción del desempleo y la recuperación económica. Además, las condiciones laborales, reconocía la Dirección del Trabajo, eran *sui generis*. La Dirección General de Cesantía fue la dependencia responsable de llevar a los trabajadores a los sitios de lavado del oro —absorbiendo los costos de transportación—, pero la contratación de los trabajadores estaba a cargo de un contratista privado. Puesto que no existían contratos laborales, la Dirección del Trabajo sólo exigía a los contratistas entregar documentos que especificaran los acuerdos de trabajo, métodos de pago y condiciones de alimentación y alojamiento. El contratista también tenía la obligación de proporcionar asistencia médica en caso de accidentes y de realizar pagos regulares al fondo de seguridad social de los trabajadores, sin embargo, como el trabajo se consideraba temporal, no hubo un esfuerzo real para construir campos de trabajo permanentes.[44]

Conforme las autoridades públicas luchaban para colocar a los obreros cesantes en los muy escasos trabajos disponibles en agricultura, extracción de oro y obras públicas, aumentaba su preocupación por las repercusiones del desempleo. La posibilidad de obtener trabajo fue la columna vertebral de las reformas sociales y laborales de las primeras tres décadas del siglo XX, y como la regularización y formalización del trabajo eran cada vez mayores, también garantizaban a los obreros el acceso a servicios sociales básicos (salud, seguridad social y protección). No obstante, el desempleo masivo de largo alcance amenazaba seriamente la viabilidad de este modelo e incluso la supervivencia de instituciones fundamentales como la Caja de Seguro Obrero (fondo de seguridad social).[45] Desde 1924, Carlos Contreras Labarca, destacado político miembro del Partido Comunista, había argumentado que el desempleo forzoso constituía el mayor peligro para las "colectividades sociales", e hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y los sindicatos con el fin de diseñar programas eficaces para prevenir y mitigar sus consecuencias.[46]

Otros sectores más conservadores estaban particularmente preocupados por las masas de desempleados sin medios para su sustento y por el riesgo de que pudiesen volverse individuos peligrosos, social y políticamente. Si las mujeres y los niños necesitaban ser protegidos y alimentados, los hombres necesitaban trabajar y ser productivos para evitar su deterioro social. También se volvía imprescindible poner a trabajar a los hombres sanos para reactivar la economía, y pronto fue evidente que el Estado consideraba menos importante el monto del salario que la experiencia y disciplina del trabajo regular. Por ello, la mayoría de los funcionarios públicos pusieron todo su empeño para sacar a los hombres de los albergues, convencidos de que en esos lugares se volvían holgazanes acostumbrados a la ayuda caritativa.

Cuando la Prefectura de Cautín decidió colocar a algunos obreros cesantes en la construcción de caminos en 1931, creyó que "con este procedimiento y pagando salarios bajos, suficientes para la alimentación de los individuos, se les procuraría ayuda económica y

se evitaría que se pierdan en ellos los hábitos de trabajo y tengan tiempo de desarrollar actividades subversivas".[47] Ante la negativa de los obreros a trabajar en esas condiciones, los alarmados carabineros procedieron a eliminar sus nombres de las listas de cesantes, con lo cual perdían sus derechos para recibir beneficios u ocupar otros trabajos en el futuro. En Linares, los funcionarios públicos enfrentaron una situación similar. Cuando el terrateniente local Miguel Bustamante ofreció contratar a 40 hombres con una paga de ocho centavos diarios y alimentación, los cesantes que se encontraban en los albergues se rehusaron a aceptar. Como represalia por lo que consideraba una reacción irracional, el indignado representante de la Dirección del Trabajo ordenó la suspensión de las raciones de comida para esos hombres.[48]

Como estos ejemplos sugieren, a pesar de la pobreza generalizada y la coerción estatal, los funcionarios públicos enfrentaron muchas dificultades en su intento de persuadir a los obreros cesantes de aceptar salarios bajos y malas condiciones laborales, por lo que muchos desocupados optaron por la movilidad y los trabajos ocasionales. Los inspectores del trabajo, las autoridades regionales, los empresarios y los carabineros se quejaban constantemente de los obreros que se negaban a aceptar trabajos o los abandonaban a los pocos días. En algunos casos, hombres y mujeres cesantes pusieron gran empeño en la negociación de mejores condiciones salariales y laborales, lo que sugiere la existencia de una tradición de militancia laboral. En Coronel, poblado carbonífero, por ejemplo, los obreros cesantes decidieron conformar un comité de negociaciones ante la Dirección del Trabajo. Con la ayuda de la FOCH, de acuerdo con un reporte de los carabineros, los trabajadores acordaron lo siguiente:

> 1) No aceptar el salario de $4, sino de $5, trabajando al día y no a trato; 2) que el pago sea semanal, en dinero efectivo y no en víveres […]; 3) se acordó pedir un anticipo de $20, como mínimo, para cada familia, con objeto de que no queden abandonadas sin recursos; 4) la Inspectoría del Trabajo debe entenderse directamente con el Comité cuando necesite trabajadores, a objeto de controlar en forma quiénes son los más necesitados de trabajar; 5) no aceptar ninguna clase de trabajo, sin que antes se hayan aceptado estas peticiones.[49]

A pesar de estos recursos de resistencia laboral, en 1932 más de 50 000 trabajadores del nitrato habían perdido sus trabajos y la mayor parte se había trasladado a otras partes del país en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, tanto en fábricas y campos agrícolas como en obras públicas y de construcción se resentía el impacto de la Depresión. En 1931, de acuerdo con la Dirección del Trabajo, había 56 000 obreros y 1 300 empleados particulares desempleados. Hacia finales de 1932, las cifras habían aumentado a 98 000 obreros y 25 200 empleados.[50] Las leyes del trabajo implementadas durante las primeras décadas del siglo XX, por una parte, y la creciente politización y militancia de los trabajos sociales y su tradicional movilidad, por otra, moldearon las formas iniciales de respuesta de los obreros chilenos a la crisis económica. No obstante, dadas las enormes dificultades para encontrar trabajo y para la subsistencia diaria, la mayoría de las familias dependientes de cesantes tuvo que sostenerse de

algún tipo de ayuda pública o privada.

Ocupación de espacios públicos: albergues y comedores para pobres

Como en muchos otros países golpeados por la Depresión, la imagen de la pobreza y el efecto que ésta tuvo en los obreros y sus familias fueron objeto de preocupaciones públicas y privadas. Los niños y las mujeres necesitaban comida, los obreros migrantes no tenían un lugar para dormir o bañarse, y las masas de desempleados representaban un peligro para el orden, la salud pública y la estabilidad política. Si bien los programas no diferían mucho de las respuestas anteriores a las crisis económicas y el desempleo, la generalización de la Gran Depresión demostró rápidamente la necesidad de ampliar la asistencia social y diseñar acciones a nivel nacional.[51] Como en las crisis económicas anteriores, una mezcla de instituciones de beneficencia pública, privada y religiosa organizó comedores y programas de distribución de comida y abrió los primeros albergues en la mayoría de las ciudades. La voluntad de solidarizarse con los necesitados se entrelazó con el temor social, por lo que la mayoría de los programas de asistencia intentaron tanto asistir como controlar a los cesantes.

Las formas de respuesta de las instituciones estatales y privadas a las necesidades de los desempleados fueron una clara consecuencia de los profundos cambios que la asistencia social había sufrido. Desde finales del siglo XIX, tanto instituciones privadas como públicas habían intentado definir a los "pobres" para proporcionar ayuda sólo a quienes realmente lo necesitaran (es decir, niños, ancianos, incapacitados, mujeres abandonadas). Congruentes con esta percepción, las instituciones intentaron registrar, evaluar y medir las "necesidades" de los pobres, con lo que sentaron las bases para la profesionalización del trabajo social en las primeras décadas del siglo XX. A su vez, la ayuda se volvió cada vez más racional, y los trabajadores sociales, médicos y enfermeras desarrollaron nociones de cuál era la comida, el albergue o la atención "correctas" que los pobres necesitados debían recibir. Las mujeres, en especial las trabajadoras sociales y las enfermeras, se encontraban al frente de los servicios sociales, lo que demuestra no sólo la incorporación de las mujeres al Estado, sino también la profesionalización creciente del papel y trabajo tradicional de las mujeres.[52]

Las condiciones en el puerto norteño de Coquimbo muestran las formas características de apoyo a las que recurrieron las autoridades fuera de Santiago para prestar ayuda a las familias desempleadas. En los primeros meses de 1931, Coquimbo registraba 509 familias necesitadas de algún tipo de ayuda. En febrero, con el apoyo de los negocios locales y los hacendados rurales, la ciudad fue capaz de entregar tan sólo 350 raciones de comida, pero en marzo, la cifra aumentó a 1194 raciones: los panaderos locales proporcionaron 20 raciones diarias de pan, y la alcaldía organizó la entrega diaria de 90 raciones de leche. Además, alrededor de 30 familias locales recibieron en sus hogares a familias desempleadas para el almuerzo o la cena.

No obstante, en abril los donativos privados cayeron drásticamente y, aunque la entrega de pan y leche continuó, las raciones de comida para las dos primeras semanas del mes se redujeron a 200. En dos meses, la alcaldía gastó 1 369.70 pesos en asistencia para cesantes, de los cuales, 441.50 provenían de donativos privados.[53] Ya que Coquimbo no contaba con albergues, la mayor parte de la gente necesitada fueron residentes locales o trabajadores cesantes del salitre y las minas con familia en la ciudad.

Las dificultades enfrentadas por las autoridades de Coquimbo también son emblemáticas de que la respuesta de la administración de Ibáñez a la crisis no contó con una estructura centralizada coherente y descansó principalmente en las instituciones y los recursos locales. En los albores de la caída de Ibáñez, la mayoría de las ciudades no podía seguir apoyando los albergues y los comedores, mientras que el gobierno alentaba la organización de comités regionales capaces de organizar una rápida respuesta a la crisis y hacer uso de recursos locales disponibles. Los llamados Comités Pro-Auxilio de Cesantes estuvieron conformados por representantes de diferentes grupos e instituciones locales y trabajaron junto con el gobierno regional. En Iquique, por ejemplo, el comité estaba integrado por el intendente, el obispo, un representante de la industria (el director general de los ferrocarriles), el presidente de la Cámara de Comercio, un representante de los empleados particulares desempleados, un representante de los obreros y el director regional del Ministerio de Bienestar Social. En ese puerto norteño, el comité estaba a cargo de administrar los recursos; proveía 24 000 raciones diarias de comida (se ocupaba de comprar, cocinar y distribuir los alimentos) y mantenía tres albergues que daban asilo a 563 personas en total.[54]

La Iglesia católica, en la continuidad de su tradición histórica de ayudar a los pobres, desempeñó un papel importante en la organización de los comedores, la prestación de servicios y la colaboración con el Estado. En 1931, el arzobispo de Santiago, Horacio Campillo, recomendó a todas las parroquias abrir comedores e hizo un llamado especial a las familias ricas para proteger “siquiera a un pobre, un hermano suyo, que contribuyan con dinero a remediar el hambre y el frío de los que padecen”.[55] Otras agrupaciones católicas, como la Sociedad de San Vicente de Paul, organizaron la distribución diaria de comidas y ropa, y muchas mujeres católicas de inmediato se ofrecieron como voluntarias en los albergues.[56] Si bien algunas de estas acciones respondieron a los valores cristianos tradicionales (la caridad), en otros casos representaron una transformación mayor en el pensamiento social católico. Particularmente significativa fue la influencia de intelectuales católicos como Juan Enrique Concha y Francisco Vives. Este último, un sacerdote jesuita, regresó a Chile en 1931 tras pasar más de una década en Europa. En plena crisis económica y política, Vives fue consejero de grupos estudiantiles y sindicatos católicos, entre los que difundió las encíclicas vaticanas *Rerum Novarum* (1891) y *Quadragessimo Anno* (1931), y denunció los peligros tanto del capitalismo como del comunismo.[57]

Las causas de la ayuda pública y privada fueron complejas, moldeadas por la intención de

ayudar, controlar y transformar a las comunidades pobres. Para salvar a los cesantes del deterioro social, físico y moral al que habían sido empujados por la recesión, trabajadores sociales, voluntarios católicos y funcionarios de los carabineros ofrecieron albergue, comida sana y espacios recreativos seguros. Igual que en el tema de la migración y la colocación laboral, las expectativas y demandas de los obreros chocaron con el discurso de control y la intervención de las autoridades públicas. En muchos casos, la asistencia social y la intervención se mezclaron con discursos y prácticas de control social, lo que ayudó a borrar la distinción entre los cesantes necesitados y los peligrosos. En los albergues y comedores, por ejemplo, los asistentes públicos y el voluntariado no sólo proveían asistencia sino que también inculcaban nociones de higiene, nutrición y ética laboral. Por esas mismas razones, las autoridades se opusieron a los intentos de los trabajadores para organizar y controlar la asistencia, pues constituía un reto a las soluciones de arriba abajo. En el barrio obrero de San Miguel en Santiago, por ejemplo, el gobierno municipal de inmediato rechazó las peticiones del Comité de Obreros Cesantes de la Población La Legua para la recolección de alimentos y dinero, bajo el argumento de que no era seguro autorizar a personas desconocidas a remplazar al Estado.[58]

Para algunos, como lo sugiere el siguiente caso de Valparaíso, la asistencia institucional fue una forma eficaz para prevenir lo que se percibía como la radicalización de los obreros cesantes. En ese puerto, por ejemplo, el gran número de obreros desempleados que llegaba diariamente de las salitreras fue una gran preocupación para las autoridades de la ciudad. Las autoridades locales manifestaron que los obreros cesantes habían formado un Comité de Cesantes que recibía apoyo de un sindicato local con “ideas anarquistas”, el cual les había ofrecido refugio en el local del sindicato. El Comité había intentado negociar mejores condiciones laborales en obras públicas y otros trabajos ocupados por cesantes, hasta el punto en que, de acuerdo con un informe de la ciudad, los empresarios y contratistas dejaron de aceptar a obreros cesantes llegados del puerto. La ciudad respondió ejerciendo mayor control sobre los cesantes, y en un intento por deshacer la solidaridad entre los obreros salitreros cesantes, los trabajadores portuarios locales y los activistas políticos, la Intendencia abrió un albergue especial bajo la estricta supervisión del funcionario regional del Ministerio de Bienestar Social y de los carabineros.[59]

Conforme la recesión se profundizó, aumentaron las preocupaciones sobre cómo el desempleo y la pobreza incidirían en el tejido social y en la estabilidad del país. Los albergues se volvieron especialmente problemáticos y fueron identificados como sitios de deterioro moral y físico. Adriana Izquierdo, asistente social católica, explicó en 1932 que los albergues ya no eran sitios de “desorden, organización de resistencia, subversión, comités con relaciones comunistas y armas políticas en contra del gobierno”.[60] Por lo mismo, los albergues estuvieron siempre bajo la estricta vigilancia de los carabineros. En Puerto Montt, el albergue fue establecido en un viejo edificio de la policía, y sus operaciones fueron controladas y

supervisadas por los carabineros. En Santiago, por ejemplo, mientras que la Cruz Roja y su comprometido voluntariado femenino se ocuparon de administrar los tres albergues (Santa María, Bascuñán y El Salto) que operaban en la ciudad a fines de 1931, los carabineros estuvieron a cargo de su seguridad. Debido a este estricto control policial, la expulsión o no aceptación de hombres en los albergues fue frecuente, acusados constantemente de beber, delinquir o comportarse mal en espacios públicos.

En el albergue El Salto, ubicado en un barrio obrero al norte de Santiago, los carabineros informaron que constantemente encontraban hombres desocupados consumiendo alcohol y cometiendo "excesos" en el barrio. Los carabineros ordenaron a los residentes del albergue que debían encontrar trabajo y anunciaron que "no aceptarán por ningún motivo que [los cesantes] anden pululando por las calles de la ciudad y por los alrededores del albergue en referencia [El Salto]".[61] De igual manera, en el albergue de la calle Bacuñán, ubicado en el barrio de Estación Central de Santiago, en julio de 1931 seis obreros fueron expulsados y acusados de llegar borrachos (tres de ellos) y de robo (otros tres). Los expulsados no tardaron en reaccionar y denunciaron que habían sido víctimas de una decisión arbitraria, por lo que el presidente del comité del albergue asistió a una reunión en La Casa del Pueblo; con el apoyo de los integrantes de la asamblea, denunciaron la brutalidad policiaca y recibieron el apoyo de tres miembros del Congreso Nacional.[62] Los líderes del refugio de Bascuñán también denunciaron retrasos en la distribución diaria de leche, pues generalmente no llegaba sino hasta la hora de la comida y los niños se quedaban sin desayuno.[63]

Debido a que los albergues eran demasiado estrictos o simplemente no tenían cupo suficiente, un gran número de necesitados optó por ocupar los espacios públicos, situación que confrontó a los habitantes chilenos con la imagen cotidiana de hombres, mujeres y niños sin hogar, sucios y hambrientos. La prensa, por ejemplo, describió las malas y precarias condiciones de vida en un asentamiento irregular de más de 500 personas en Cerro Blanco, un pequeño cerro con muchas cuevas ubicado cerca del Cementerio Nacional al norte de Santiago, y advirtió que sus ocupantes representaban una abierta amenaza a la salud y el orden públicos.[64] Ante el aumento de ocupación de las cuevas, la Dirección del Trabajo ordenó su inmediato desalojo y los ocupantes fueron enviados a la Casa de Limpieza, "donde fueron sometidos a una especial higiene, siendo todos bañados, afeitados y haciéndoseles un corte general de pelo". Sus ropas también fueron lavadas y desinfectadas y las asistentes sociales les proporcionaron mudas adicionales. Tras esta "higienización", que recuerda los métodos usados durante las epidemias de fines del siglo XIX, a los hombres se les trasladó en camión para trabajar en obras públicas, mientras que las pocas mujeres del grupo fueron diagnosticadas con algún tipo de enfermedad mental o física para poderlas enviar a un hospital público.[65] El destino diferente que enfrentaron mujeres y hombres sugiere la influencia de cuestiones de género en la visión pública del desempleo y la asistencia social.

En 1932, el peor año de la Depresión, el desempleo, la pobreza y el hambre se extendieron

a lo largo de todo el país, lo que obligó a los políticos a ampliar la ayuda pública. La inestabilidad política generalizada que había seguido a la caída de Ibáñez en julio de 1931 y el surgimiento de la República Socialista también crearon condiciones políticas propicias para introducir cambios en las políticas monetarias e incrementar el gasto público. Como se reconoció en el informe anual de 1932 del Banco Central, "el hecho de que el Gobierno de entonces consideró imposible adoptar medidas enérgicas para reducir los gastos" obligó al Banco Central a aumentar el flujo monetario para financiar "las necesidades del Estado".[66] Por ejemplo, en abril de 1932, el Congreso Nacional autorizó al presidente Juan Antonio Montero un presupuesto adicional de 152 millones de pesos para cubrir gastos gubernamentales, obras públicas y asistencia para los cesantes; para ello, autorizó al gobierno la impresión de papel moneda y "vales de Tesoro".[67] Esta nueva fuente de financiamiento permitió aumentar la asistencia pública. En julio de 1932, los comedores proporcionaron alrededor de 100 000 comidas diarias en todo el país; solamente en Santiago, había 27 comedores que proporcionaban más de 60 000 comidas diarias.[68] En cuanto a Santiago, donde el alojamiento se había vuelto un verdadero problema, el gobierno autorizó a las familias desempleadas a ocupar casas desocupadas y lotes en la población de San Eugenio Nuevo.[69]

Tras el triunfo electoral del presidente Arturo Alessandri, en octubre de 1932 la Dirección del Trabajo absorbió bajo su jurisdicción a los múltiples comités y servicios de cesantía, en un nuevo intento por centralizar la asistencia pública. Esta reorganización tuvo como finalidad ejercer mayor control de las personas que recibían asistencia del Estado, supervisar el gasto y destino de los recursos públicos y comenzar a cerrar algunos albergues. Los inspectores del trabajo se quejaban de que en sus múltiples visitas a lo largo de todo el país muchas de las personas que recibían ayuda pública no deseaban trabajar pese a estar perfectamente capacitadas para ello. En Huasco, el inspector denunció

> el enorme abuso que existía al racionarse a gentes que no eran ni obreros ni empleados cesantes, sino solamente indigentes voluntarios que jamás en su vida le han trabajado a nadie. Agruéguese a esto un apreciable número de mujeres que, antes de existir los comedores, trabajaban en lavados, en la agricultura o como empleadas domésticas.[70]

Ante una situación similar en La Serena, el inspector informó que muchos de los hombres que recibían raciones de comida "no deseaban trabajar".[71]

En 1933, cuando la mayoría de los albergues y comedores habían cerrado y las tasas de desempleo comenzaron a disminuir, los obreros tuvieron que enfrentarse a las estrictas medidas económicas del gobierno de Arturo Alessandri (1932-1938) y su llamado "ministro del hambre", Gustavo Ross. Los altos índices inflacionarios siguieron siendo una amenaza para el ingreso de los trabajadores, y puesto que la industria salitrera jamás alcanzó una verdadera recuperación de los niveles anteriores a la crisis, muchos de ellos permanecieron en Santiago y las ciudades grandes luchando por encontrar trabajo y vivienda fija y lidiando con los altos costos de la vida. Por mediación de los sindicatos recientemente formados,

muchos de los desocupados que tuvieron que hacer grandes sacrificios durante los peores años de la Depresión exigieron una participación legítima por su trabajo.

Mejores condiciones laborales en medio de la crisis y la inflación

Como se ha dicho antes, tras la promulgación de los instrumentos más importantes de la legislación laboral en Chile en 1924, los obreros y las autoridades del trabajo realizaron importantes acciones para implementar la ley, sindicalizar y entablar negociaciones colectivas.[72] La forma en la que los trabajadores lograron organizar, entablar reclamos y defender sus trabajos en un tiempo de profunda recesión económica, inestabilidad política y represión es una historia apasionante que demuestra la influencia del movimiento obrero chileno, su larga tradición de lucha y su enorme capacidad para entender y hacer uso de la legislación laboral y establecer alianzas políticas. En medio de la más profunda recesión económica del siglo XX, el lugar de trabajo chileno fue un espacio polémico. Las pequeñas luchas locales por salarios, beneficios y horas de trabajo con el tiempo empoderaron al movimiento obrero y le otorgaron una presencia importante no sólo en la vida cotidiana de los trabajadores sino en la historia política de Chile.

En vísperas de la Depresión, como señaló la mayoría de las autoridades del trabajo a lo largo del país, las oficinas no se daban abasto para atender las quejas presentadas por obreros tanto urbanos como rurales, pues la falta de financiamiento hizo cada vez más difícil satisfacer las demandas de ayuda y llevar a cabo inspecciones meticulosas de los lugares de trabajo. A fines de los años veinte, los inspectores del trabajo lucharon incansablemente para promover leyes de seguridad social y accidentes laborales, y alentaron a los empresarios a proporcionar contratos laborales escritos a todos sus empleados y a mantener reglamentos internos claros. De la misma manera, los inspectores pusieron particular atención en las panaderías con la intención de evitar los abusos en un sector comercial que normalmente requería de turnos nocturnos y muchas horas de trabajo. Una parte importante de los reclamos provino de los trabajadores rurales y de los trabajadores agrícolas, quienes, a pesar de la oposición de los terratenientes, denunciaron los incontables abusos que se cometían en el campo.[73] En muchas ocasiones, reconocieron los funcionarios, su trabajo consistía principalmente en instruir sobre el funcionamiento de las nuevas leyes para hacer frente a los numerosos problemas de los empresarios y los obreros.

Como han señalado los investigadores del campo chileno, la ejecución de la legislación laboral en las comunidades rurales fue un reto particular: las largas distancias, el aislamiento y la oposición de los empresarios limitaron el beneficio directo de las leyes del trabajo. Los empresarios rurales no cesaron en su empeño por dificultar la ejecución de las leyes laborales. En 1930, por ejemplo, el gobernador de Victoria reconoció:

> pero hay ciertos agricultores rebeldes que, sin olvidar aquella época en que eran dueños de vidas y haciendas, y las autoridades no se atrevían a juzgar sus actos, ahora, cuando se les cita a un comparendo para responder a un reclamo, o no vienen a la Gobernación o, si comparecen, es para manifestar que no aceptan ningún arreglo.[74]

De la misma manera, los terratenientes de Los Ángeles exigieron la suspensión de la Ley 4054 en el campo (ley de seguridad social que obligaba a los patrones a hacer contribuciones al fondo social de los trabajadores), con el argumento de que resultaba demasiado costoso contratar a los trabajadores y que sin la "carga" de esa ley, tendrían la posibilidad de ofrecer algunos trabajos pequeños y esporádicos.[75]

Durante el gobierno de Ibáñez (1927-1931), se puso de manifiesto que las nuevas leyes podían utilizarse como instrumentos poderosos para controlar a los trabajadores, evitar la radicalización del movimiento obrero y marginar a los activistas más viejos vinculados con grupos anarquistas y de izquierda.[76] En 1930, por ejemplo, el gobernador de El Loa, Carlos Vegas, supervisó de cerca la organización de un sindicato y las elecciones de sus dirigentes en la mina de cobre de Chuquicamata, con la intención de "limpiar" la organización, evitar el empoderamiento de "caudillos" y sólo permitir la afiliación de "buenos trabajadores".[77] De la misma manera, el secretario de Bienestar Social de Valparaíso reconoció que algunos de los líderes del sindicato local estaban involucrados en actos "subversivos" de carácter político, por lo que de inmediato fueron removidos de sus cargos.[78] Cerca de Santiago, en La Calera, los inspectores del trabajo y los carabineros temían que la influencia comunista se pudiese filtrar entre los trabajadores del cemento de la planta El Melón, quienes planeaban realizar una marcha en noviembre de 1931. La Dirección del Trabajo respondió con la designación de un nuevo inspector para "calmar los ánimos de los obreros".[79] A pesar de la represión, explica el historiador chileno Jorge Barría, se formaron alrededor de 85 sindicatos legales durante el gobierno de Ibáñez, con una representación de alrededor de 25 000 miembros.[80]

Conforme se agravaba la recesión, los inspectores del trabajo y los obreros se centraron en los problemas de salarios caídos y despidos, y el asunto de la sindicalización quedó temporalmente pospuesto. Hubo muchas situaciones particularmente extremas, y por lo general los funcionarios de la Dirección del Trabajo no trataban con obreros sindicalizados ni con organizaciones obreras formales. En la provincia sureña de Magallanes, por ejemplo, el inspector del trabajo y el intendente tuvieron que intervenir para encontrar una solución para los 40 trabajadores mineros contratados en la isla Diego de Almagro, quienes no habían recibido sus salarios y se encontraban abandonados a su suerte desde hacía 11 meses.[81] En los casos en que había sindicatos, los obreros, para mantener su trabajo o cuando menos una parte de éste, negociaban principalmente con los empresarios y con la Dirección del Trabajo. Si bien en ocasiones estas conversaciones formaron parte del proceso colectivo regular de negociación colectiva y de los intentos de los empresarios para redefinir el contrato laboral, la mayoría de las veces fueron acuerdos temporales entre obreros y empresarios con la

intermediación de los inspectores de trabajo locales. Más significativo aún, estas iniciativas fueron importantes en el establecimiento de una relación entre los obreros y los funcionarios de la Dirección del Trabajo, dependencia en la que recayó la principal responsabilidad de la ejecución de las leyes del trabajo en el ámbito local.

A pesar de los esfuerzos de los inspectores del trabajo para arbitrar y prevenir el desempleo, no siempre se aceptaron nuevas condiciones, como la reducción en el horario de trabajo o modificaciones salariales. Al parecer éste fue el caso cuando las medidas fueron impuestas por los empresarios y no como consecuencia de conversaciones con los representantes de los trabajadores. En la mina de Potrerillos de la empresa Anaconda, por ejemplo, la compañía impuso en diciembre de 1931 dos medidas para enfrentar la recesión económica: una reducción de 10% en sueldos y salarios, y una semana laboral de cuatro días. En enero de 1932, más de 400 trabajadores rechazaron las nuevas propuestas laborales y alrededor de 806 personas —410 trabajadores y 396 mujeres y niños— abandonaron Potrerillos. Los trabajadores y sus familias fueron trasladados a Copiapó en un vagón de tren pagado por la empresa Andes Copper, lo que aumentó "la lista de los cesantes, con perjuicios especialmente de sus familias, porque carecen de alimento para ellos".[82] En Chuquicamata, los trabajadores del cobre enfrentaron problemas similares. En 1932, Burr Wheeler, director general de Chuquicamata, anunció también una reducción salarial de 10% para todos los obreros.[83] Estos rechazos sugieren también la manera en que los trabajadores y sus familias probablemente sopesaron diferentes posibilidades y oportunidades para tomar decisiones importantes sobre su futuro.

Con la recuperación de la economía nacional, los inspectores del trabajo enfrentaron nuevamente el reto de la sindicalización. Durante su primer periodo de gobierno, Arturo Alessandri (1920-1924) realizó enormes esfuerzos para promulgar reformas laborales, las cuales toparon con la fuerte oposición del Congreso Nacional y sólo fueron aprobadas bajo la presión de los militares. Aunque el Alessandri que regresó al poder en 1932 claramente había dejado atrás el estilo popular característico de su primer gobierno y las políticas fiscales conservadoras que afectaron a las familias trabajadoras, su gobierno demostró su compromiso para institucionalizar las relaciones laborales a través de poderosos instrumentos como sindicatos y negociaciones colectivas para incorporar y controlar el movimiento obrero. De hecho, entre 1932 y 1938, la afiliación sindical creció de alrededor de 54 000 miembros a más de 125 000.[84] Los registros de la Dirección del Trabajo revelan también la existencia de una gran diversidad de sindicatos, casos y reclamos, lo que habla de una importante influencia de la legislación laboral en todo el país. Más importante aún, el proceso de sindicalización fue particularmente significativo en las ciudades, donde las industrias se recuperaron a un mayor ritmo que la industria minera, y donde los obreros contaron con la ayuda de inspectores del trabajo y apoyo tanto del Estado como de partidos políticos de izquierda cada vez mejor organizados.

Si bien hubo una expansión del proceso de sindicalización, las ganancias materiales de los trabajadores fueron menos claras. Durante la Depresión, en muchas fábricas, minas y construcciones los obreros hicieron enormes sacrificios para mantener la producción, aceptando reducciones en salarios y beneficios. Una vez iniciado el proceso de recuperación, la inflación siguió golpeando los ingresos y los trabajadores se sentían con derecho a demandar incrementos salariales. Las dificultades legales para convocar a una huelga (el número de huelgas legales y el porcentaje de trabajadores involucrados en ellas seguía siendo bajo), el escaso apoyo de los funcionarios de la Dirección del Trabajo y la férrea oposición de los empresarios dificultaron de manera particular el avance de las demandas económicas de los trabajadores.[85] Los impedimentos fueron más evidentes en el campo, donde los terratenientes lograron impedir la ejecución del Código del Trabajo. Con la persistente ambigüedad de los derechos legales de los trabajadores rurales y la falta de apoyo del Estado, el sindicalismo rural se vio seriamente comprometido durante los siguientes 30 años. En junio de 1934, la violenta represión en contra de la comunidad rural de Ranquil (Alto Bío-Bío) por su demanda de tierras demostró que el gobierno de Alessandri había formado una alianza con los terratenientes y protegía su poder tradicional.[86]

Durante 1935 y 1936, el gobierno de Alessandri reprimió una huelga ferrocarrilera nacional, huelgas de maestros y de solidaridad en Santiago, una clara demostración de que su gobierno estaba dispuesto a utilizar métodos especiales para controlar el movimiento obrero. La creciente frustración de los obreros consolidó su compromiso con el cambio político radical, la alianza entre sindicatos locales y partidos políticos de izquierda y, finalmente, su apoyo al Frente Popular.[87] En 1936, los obreros sindicalizados se agruparon en la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), que desempeñó un papel decisivo en la campaña y en el triunfo del Frente Popular e integró a los sindicatos locales y dispersos en una organización nacional. Como establecían claramente los estatutos de la CTCH: “para derrotar al fascismo y llevar adelante el progreso económico y social del país, la clase obrera debe establecer alianzas con otros sectores y encabezar la lucha de todas las fuerzas democráticas”.[88] Más importante aún, las experiencias de la Gran Depresión y los obstáculos impuestos por el gobierno de Alessandri confirmaron el compromiso de los obreros con las luchas económicas locales (negociación colectiva) y los cambios políticos radicales.

Conclusiones

La Gran Depresión tuvo un efecto devastador en la economía chilena y, en particular, en los obreros y sus familias. El nivel brutal de desempleo, la inestabilidad económica, la caída de los salarios y, después de 1932, la incontenible inflación, deterioraron las condiciones de vida y trabajo. Para muchos, la asistencia pública y privada fue la única posibilidad de

supervivencia, por lo que las obras públicas, los albergues y los programas de distribución de alimentos se volvieron una fuente importante para las miles de personas que habían perdido sus trabajos y se veían obligadas a moverse y migrar por todo el país. Sin embargo, como este capítulo demuestra, si bien la asistencia pública surgió de la creencia de que la intervención del Estado era imprescindible para evitar una catástrofe social, también fue un instrumento para ejercer control sobre los obreros y, como muchos funcionarios públicos argumentaron, para evitar su inminente radicalización. La historia de los subsidios de cesantía, los albergues y el sindicalismo de los años treinta muestra las tensiones entre el proyecto de bienestar del Estado y las demandas y expectativas de los trabajadores. Asimismo, la historia de la Depresión en Chile muestra con claridad las diferentes formas en las que los trabajadores y sus familias lograron enfrentar y adaptarse a la Depresión; esta visión cuestiona la imagen tradicional del desempleado pasivo.

En medio de esa devastadora crisis económica e inestabilidad política, los chilenos construyeron un sistema de relaciones laborales que definió los derechos laborales por casi medio siglo. A principios de los años treinta, los obreros y los inspectores del trabajo recurrieron a las leyes para proteger el trabajo y el salario, lo que demostró la importancia crítica de poseer y aprender a usar esos derechos. En los años siguientes, los trabajadores industriales y mineros organizaron sindicatos, entablaron negociaciones colectivas y presentaron incontables quejas en contra de sus empleadores. No obstante, los trabajadores comprendieron de inmediato que la efectividad de la ley se veía obstaculizada por la falta de compromiso del Estado, y que mejorar las condiciones económicas requería de reformas políticas mayores. En 1938, la recién formada Confederación del Trabajo, la CTCH, se unió al Frente Popular, y los obreros de todo el país demandaron “pan, techo y abrigo”.

[1] Curepto, 26 de noviembre, 1930. Archivo Nacional de la Administración del Estado (en adelante ARNAD), Fondo Dirección del Trabajo (en adelante DT), vol. 218.

[2] Iquique, 20 de mayo, 1931. ARNAD, DT, vol. 242.

[3] Para un resumen de la historia política general de este periodo, véase Brian Loveman, *Chile: The Legacy of Spanish Capitalism,* Oxford University Press, Nueva York, 2001.

[4] La historia económica de la Gran Depresión en Chile ha sido estudiada a fondo. Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, *La historia económica de Chile, 1830-1930: Dos ensayos y una bibliografía,* Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid, 1982; J. Gabriel Palma, "Chile 19141935: De economía exportadora a sustitutiva de importaciones", *Colección Estudios* CIEPLAN 12 (1984), pp. 61-88; Manuel Marfán, "Políticas reactivadoras y recesión externa: Chile 1929-1938", *Colección Estudios* CIEPLAN 12 (1984), pp. 89-119; Michael Monteón, *Chile and the Great Depression: The Politics of Underdevelopment, 1927-1948,* Arizona State University Press, Tempe, 1998; Óscar Muñoz Gomá, *Chile y su industrialización: pasado, crisis y opciones,* CIEPLAN, Santiago, 1986; Luis Riveros, *La Gran Depresión (1929-1932) en Chile,* documento de trabajo, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, 2009.

[5] Eugenio Matte Hurtado, "La República Socialista de Chile (1932)", consultado el 26 de enero de 2014, www.memoriachilena.cl

[6] La República Socialista ejerció una influencia particular en la fundación del Partido Socialista (1933) y en la elaboración de una serie de leyes (como la de control de precios) que fueron utilizadas más adelante por los gobiernos del Frente Popular. Sobre el Partido Socialista y la influencia de la República Socialista y su líder Marmaduke Grove, véase Paul W. Drake, *Socialism and Populism in Chile,* University of Illinois Press, Urbana-Champaign, 1978.

[7] Riveros, *La gran depresión (1929-1932) en Chile, op. cit.*

[8] Durante los años de los gobiernos del Frente Popular (1938-1942) y del Partido Radical (1942-1952), Chile emprendió un ambicioso proyecto de industrialización. Creada en 1939, la Corporación de Fomento Fabril (CORFO) —un órgano estatal de desarrollo encargado de supervisar, proporcionar asistencia técnica y financiar proyectos de industrialización— se convirtió en el símbolo de las iniciativas de importación por sustituciones durante las dos décadas siguientes. Algunos de sus logros más emblemáticos fueron el molino de hierro de Huachipato en Concepción, una refinería de petróleo en Con-Con y una fundición de cobre en Paipote, Copiapó, CORFO también prestaba dinero a importantes industrias privadas, como Manufactura de Metales (MADEMSA) y Manufactura de Cobre (MADECO). Óscar Muñoz, *Chile y su industrialización…, op. cit.*

[9] Para una discusion sobre esta generación y el papel de la mujer, véase el trabajo de Karin A. Rosemblatt, *Gendered Compromises: Political Cultures and the State in Chile, 1920-1950,* University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2000. Sobre la clase media y los intelectuales de la época, véase Patrick BarrMelej, *Reforming Chile: Cultural Politics, Nationalism and the Rise of the Middle Class,* University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2001. Salvador Allende fue representativo de esta generación. Se graduó de la escuela de medicina en 1926, participó en la fundación del Partido Socialista en 1933 y fue ministro de salud pública bajo el gobierno del Frente Popular en 1938. Su obra sobre salud pública es representativa de esta forma de pensar. Salvador Allende, *La realidad médico-social chilena,* Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, Santiago, 1939.

[10] Nuevos estudios sobre la historia laboral chilena han demostrado las acciones de los trabajadores chilenos en los años treinta y durante el gobierno del Frente Popular. El trabajo más reciente dentro de este enfoque es Jody Pavilack, *Mining for the Nation: The Politics of Chile's Coal Mining Communities from the Popular Front to the Cold War,* Penn State University Press, College Park, 2011.

[11] Silvia M. Arrom, *Containing the Poor: The Mexico City Poor House, 17741871,* Duke University Press, Durham, 2000, ofrece un panorama de largo aliento sobre el caso de México.

[12] Sobre el Frente Popular chileno, véase Pavilack, *Mining for the Nation…, op. cit.,* y Rosemblatt, *Gendered Compromises…, op. cit.* Sobre la relación entre el populismo latinoamericano y el trabajo, véase Paulo Drinot, *The Allure of Labor: Workers, Race, and the Making of the Peruvian State,* Duke University Press, Durham, 2011; John French, *The Brazilian Workers' ABC: Class Conflict and Alliances in Modern São Paulo,* University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1992, y *Drowning in Laws: Labor Law and Brazilian Political Culture,* University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2004; Daniel James, *Resistance and Integration: Peronism and the Argentine Working Class, 1946-1976,* Cambridge University Press, Nueva York, 1993; Matthew Karush y Óscar Chamosa, *The New Cultural History of*

Peronism: Power and Identity in Mid-Twentieth Century Argentina, Duke University Press, Durham, 2010. Para un panorama general sobre populismo, véase la obra clásica de Michael Conniff *et al.*, *Populism in Latin America*, University of Alabama Press, Tuscaloosa, 1999.

[13] Desde la década de 1880, el "enganche" proporcionaba trabajadores a los empresarios mineros, lo que hizo posible una migración laboral que durante generaciones se había desplazado de los valles agrícolas del sur hacia el norte. No obstante, el "enganche" estuvo marcado por constantes denuncias de abuso y explotación que, junto con otros mecanismos de control social y laboral, ayudaron a forjar un movimiento obrero sólido y militante. Como consecuencia, en las leyes sociales y laborales de los años veinte, el "enganche" se reguló e institucionalizó, con lo cual los trabajadores obtuvieron algunos derechos y garantías. Michael Monteón, "The *Enganche* in the Chilean Nitrate Sector, 1880-1930", *Latin American Perspectives* 6, núm. 3 (1979), pp. 66-79.

[14] Existe una rica historiografía general sobre la industria salitrera, Algunos de los trabajos académicos más importantes son Harold Blakemore, *British Nitrates and Chilean Politics, 1886-1896: Balmaceda and North*, Athlone Press, Londres, 1974; Sergio González, *Hombres y mujeres de la pampa: Tarapacá en el ciclo del salitre*, LOM, Santiago, 2002; Michael Monteón, *Chile in the Nitrate Era: The Evolution of Economic Dependence, 1880-1930*, University of Wisconsin Press, Madison, 1983; Thomas O'Brien, *The Nitrate Industry and Chile's Crucial Transition, 1870-1891*, New York University Press, Nueva York, 1982; Julio Pinto, *Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera: El ciclo del salitre y la reconfiguración de las identidades populares (1850-1900)*, Universidad de Santiago, Santiago, 1998.

[15] Luis Riveros argumenta que la crisis de la posguerra debilitó considerablemente a la economía chilena y agravó el déficit gubernamental, la deuda externa y las presiones inflacionarias. En 1930, la crisis golpeó a una economía que comenzaba a recuperarse lentamente de una fuerte recesión. Riveros, *La Gran Depresión (1929-1932) en Chile…*, *op. cit.*

[16] Ministerio de Industria y Obras Públicas, "Servicio de Colocación", 18 de agosto, 1914, en Moisés Poblete Troncoso, *Legislación social obrera chilena* (*Recopilación de leyes vigentes sobre el trabajo y la previsión social)*, Imprenta Santiago, Santiago, 1924, pp. 182-183. Otra medida para contrarrestar el efecto de la crisis de la primera Guerra Mundial (que también se aplicó durante la Gran Depresión) fue la iniciativa del Estado para formar cooperativas agrícolas a través de la colocación de cesantes y obreros en tierras públicas y el otorgamiento de créditos. Decreto, 23 de mayo, 1916, en Poblete Troncoso, *Legislación social obrera chilena…*, *op. cit.*, pp. 214-217.

[17] Para un debate sobre algunas de estas iniciativas públicas y privadas, véase Juan Carlos Yáñez Andrade, *La intervención social en Chile, 1907-1932*, Ril Editores, Santiago, 2008.

[18] La historia laboral chilena de este periodo es particularmente rica, véase, por ejemplo, Peter DeShazo, *Urban Workers and Labor Unions in Chile, 1902-1927*, University of Wisconsin Press, Madison, 1984; Elizabeth Q. Hutchison, *Labors Appropriate to Their Sex: Gender, Labor, and Politics in Urban Chile, 1900-1930*, Duke University Press, Durham, 2001; Thomas Miller Klubock, *Contested Communities: Class, Gender, and Politics in Chile's El Teniente Copper Mine, 1904-1951*, Duke University Press, Durham, 1998; Julio Pinto, *Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera: El ciclo del salitre y la reconfiguración de las identidades populares (1850-1900)*, Universidad de Santiago, Santiago, 1998; Julio Pinto y Verónica Valdivia, *¿Revolución proletaria o querida chusma? Socialismo y Alessandrismo en la pugna de la politización pampina (19111932)*, LOM, Santiago, 2001; Jorge Rojas, *La dictadura de Ibáñez y los sindicatos (1927-1931)*, Centro de Investigaciones Barros Arana, Santiago, 1993.

[19] Para una relación completa de la legislación social y laboral promulgada antes de 1924, véase Moisés Poblete Troncoso, *Legislación obrera chilena (recopilación de leyes y disposiciones vigentes sobre el trabajo y la previsión social)*, Imprenta Santiago, Santiago, 1924. Para un panorama general de las leyes sociales aprobadas en este periodo, véase Yáñez Andrade, *La intervención social en Chile, 1907-1932*, *op. cit.*

[20] Jorge Rojas ha estudiado a fondo este periodo y la relación entre el movimiento obrero y el general Ibáñez. Rojas, *La dictadura de Ibáñez…*, *op. cit.*

[21] Intendencia de Tarapacá, s. f., ARNAD, SD, vol. 215.

[22] Santiago, 19 de agosto, 1929, ARNAD, SD, vol. 214.

[23] Véase, por ejemplo, José Pablo Arellano, *Políticas sociales y desarrollo en Chile, 1924-1984*, CIEPLAN, Santiago, 1985.

[24] La movilidad de trabajadores chilenos comenzó a mediados del siglo XIX; la movilidad geográfica constituía una estrategia de supervivencia importante. Para Sergio González, por ejemplo, la capacidad de movilidad caracterizó la identidad de los trabajadores del nitrato. "En la pampa, el enganche junto con la migración independiente", explica González, "produjo una

especie de mentalidad basada en la movilidad y la libertad que definía el carácter del pampino y de sus organizaciones laborales". De la misma manera, Juan Carlos Yáñez argumenta que la capacidad de movilidad "fue el mecanismo natural para adaptarse a la naturaleza temporal de las actividades productivas". González, *Hombres y mujeres de la pampa…*, *op. cit.*, p. 151; Yáñez Andrade, *La intervención social en Chile, 1907-1932*, *op. cit.*, p. 193.

[25] "Resumen estadístico de la paralización, movilización y ocupación de los obreros de la región salitrera", ARNAD, DT, informes varios de 1932.

[26] El núcleo del debate sobre el futuro y los derechos de los trabajadores cesantes de las minas y los campos salitreros chilenos fue el contrato de trabajo que, entre otras cosas, también reguló y limitó el sistema de "enganche". De acuerdo con la ley que regulaba los contratos de trabajo, los empresarios estaban obligados a pagar a los trabajadores "los gastos razonables de ida y vuelta" cuando debían trasladarse para trabajar. *Ley 4053 sobre contrato del trabajo*, Imprenta Nacional, Santiago, 1924.

[27] Iquique, 23 de enero, 1930, ARNAD, DT, vol. 215.

[28] Temuco, 15 de noviembre, 1930, ARNAD, DT, vol. 222.

[29] La Serena, 9 de febrero, 1931, ARNAD, DT, vol. 238.

[30] Puerto Montt, 18 de marzo, 1931, ARNAD, DT, vol. 239.

[31] El cuerpo de Carabineros es la policía uniformada nacional de Chile y uno de los cuatro brazos de las fuerzas armadas del país, con un fuerte carácter militar. Santiago, 16 de febrero, 1931, ARNAD, DT, vol. 238. Por su amplia presencia en todo el país, los carabineros jugaron un papel central en la respuesta del Estado frente a la crisis. Los empresarios por lo general daban aviso a la comisaría de Carabineros más cercana sobre cualquier despido significativo.

[32] Los datos sobre el desempleo y el tamaño de la fuerza laboral son, de acuerdo con la mayoría de los economistas, muy poco confiables, y proporcionan apenas un atisbo de la magnitud del problema. De acuerdo con Luis Riveros, en el sector minero, el más afectado por la Depresión, la caída del empleo fue de alrededor de 60% en 1931-1932; sin embargo, el porcentaje de los trabajadores mineros dentro de la fuerza laboral fue muy bajo y permaneció así. Por el contrario, el desempleo en los sectores agrícola e industrial sólo fue grave entre 1931 y 1932. Por ello, Rivero afirma que para comprender el problema es esencial hacer una descripción cualitativa de las condiciones sociales y laborales del momento. Riveros, *La gran depresión en Chile…*, *op. cit.*

[33] San Felipe, 31 de abril, 1931, ARNAD, DT, vol. 241.

[34] Telegram, Valparaíso, 17 de abril, 1931, ARNAD, DT, vol. 242.

[35] Marfán, "Políticas reactivadoras y recesión externa…", *op. cit.*

[36] Rancagua, 13 de marzo, 1931, ARNAD, DT, vol. 239.

[37] Para un resumen de los proyectos de obras públicas de esa época véase Teodoro Schmidt, *Los trabajos públicos y la cesantía 1931-1934*, Imprenta Nascimento, Santiago, 1934.

[38] Valdivia, 21 de abril, 1931, ARNAD, DT, vol. 241; Puerto Montt, 24 de abril, 1931, ARNAD, DT, vol. 243.

[39] Aysén, 13 de mayo, 1931, y Valdivia, 25 de mayo, 1931, ARNAD, DT, vol. 243.

[40] Santiago, 2 de mayo, 1931, ARNAD, DT, vol. 243.

[41] Puerto Aysén, 11 de junio, 1931, ARNAD, DT, vol. 245.

[42] Banco Central de Chile, *Séptima memoria anual presentada a la Superintendencia de Bancos, Año 1932*, Imprenta Dirección General de Prisiones, Santiago, 1933, p. 37.

[43] *Oro*, agosto, 1932, p. 1.

[44] Santiago, 15 de septiembre, 1932, ARNAD, DT, vol. 309.

[45] El financiamiento de la Caja y las prestaciones provenía de la contribución de los obreros, los empresarios y el Estado. Los altos índices de desempleo amenazaban la viabilidad económica de este sistema, y muchos argumentaron que la Caja comenzó en quiebra y se mantuvo así.

[46] Carlos Contreras Labarca, *La defensa del proletariado contra el riesgo profesional de la desocupación*, Imprenta del Inst. de Sordomudos y Ciegos, Santiago, 1924. Este debate se mantuvo en el foco de atención, sobre todo porque Chile no desarrolló un seguro ni beneficios de desempleo.

[47] Santiago, 14 de julio, 1931, ARNAD, DT, vol. 248.

[48] Telegram, Linares, 21 de diciembre, 1931, ARNAD, DT, vol. 293.

[49] Santiago, 5 de diciembre, 1931, ARNAD, DT, vol. 258.

[50] Banco Central de Chile, *Séptima memoria anual…, op. cit.* Las cifras son particularmente problemáticas en este periodo, pues no existen datos consistentes sobre el volumen de la fuerza laboral.

[51] Contreras Labarca explica que durante la crisis salitrera de 1914 y 1921 el gobierno se centró en la reubicación y transportación de obreros desempleados, en la organización de los trabajadores públicos, en la distribución de comida y en la instalación de albergues. Estas mismas medidas se aplicaron en 1930-1932. Contreras Labarca, *La defensa del proletariado…, op. cit.*

[52] Sobre la historia de esta transición y el incremento de la profesionalización de la asistencia social en Chile, véase María Angélica Illanes, *Cuerpo y sangre de la política: La construcción histórica de las visitadoras sociales, Chile 1887-1940,* LOM, Santiago, 2006, y Macarena Ponce de León Atria, *Gobernar la pobreza: Prácticas de caridad y beneficencia en la ciudad de Santiago, 1830-1890,* Editorial Universitaria, Santiago, 2012. Para un panorama general sobre este tema, véase Robert Castel, *La métamorphoses de la question sociale,* Fayard, París, 1985.

[53] Coquimbo, 22 de abril, 1931, ARNAD, DT, vol. 242.

[54] Santiago, 24 de diciembre, 1931, ARNAD, DT, vol. 305.

[55] Adriana Izquierdo Phillips, *Cómo se organizó la ayuda a los cesantes y la participación que en ella correspondió a la Escuela de Servicio Social Elvira Matte de Cruchaga,* tesis, Escuela de Servicio Social Elvira Matte Cruchaga, 1932.

[56] *Memoria de la Sociedad de San Vicente de Paul año 1931,* Dirección General de Prisiones, Santiago, 1932.

[57] El padre Vives está considerado como uno de los precursores del catolicismo social en Chile; tuvo una fuerte influencia en los estudiantes y los obreros. Se convirtió en el mentor de personalidades como el padre Alberto Hurtado, también jesuita, y de gran parte de las juventudes católicas del Partido Conservador que más adelante formaría la Falange Nacional y el Partido Demócrata Cristiano. Rafael Sagredo, *Escritos del padre Fernando Vives Solar,* DIBAM, Santiago, 1993.

[58] San Miguel, 16 de septiembre, 1931, ARNAD, DT, vol. 251.

[59] Valparaíso, 25 de abril, 1931, ARNAD, DT, vol. 242.

[60] Izquierdo Phillips, *Cómo se organizó la ayuda a los cesantes…, op. cit.,* Santiago, 1932.

[61] Santiago, 28 de septiembre, 1931, ARNAD, DT, vol. 251.

[62] Santiago, 20 de julio, 1931, ARNAD, DT, vol. 246.

[63] Santiago, 31 de octubre, 1931, ARNAD, DT, vol. 254.

[64] "Reminiscencias de la edad primitiva: Los desheredados del Cerro Blanco", *Zig-Zag,* 7 de mayo, 1932, pp. 24-25.

[65] "Higienización de los cesantes," *Zig-Zag,* 7 de mayo, 1932, pp. 42-43.

[66] Banco Central de Chile, *Séptima memoria anual presentada a la Superintendencia de Bancos, año 1932,* Dirección General de Prisiones, Santiago, 1933, p. 13.

[67] Ley 5105, 18 de abril, 1932, en Banco Central de Chile, *Séptima memoria anual…, op. cit.,* pp. 63-74.

[68] "Organización de la mendicidad", *Zig-Zag,* 30 de abril, 1932, pp. 43-44.

[69] "Comedores para alimentar cesantes", *Zig-Zag,* 2 de julio, 1932, pp. 29-30.

[70] "Informe de los servicios de Cesantía del Departamento del Huasco (Vallenar)", Santiago, 22 de noviembre, 1932, ARNAD, DT, vol. 365.

[71] "Informe de los servicios de Cesantía del Departamento de La Serena", Santiago, 22 de noviembre, 1932, ARNAD, DT, vol. 365.

[72] Aunque la administración de Ibáñez no sobrevivió a la Gran Depresión, fue capaz de promulgar el primer Código del Trabajo (mayo de 1931, Decreto Fuerza de Ley 178), que moldeó el futuro de los trabajadores y del movimiento obrero chileno. El Código del Trabajo dio a los trabajadores el derecho de sindicalizarse, entablar negociaciones colectivas y huelgas. Como la mayoría de los códigos del trabajo de América Latina, separaba a los obreros y los empleados en dos sindicatos: el sindicato industrial (fabril o industrial) y el sindicato profesional (profesiones u oficios calificados). Los obreros de las plantas industriales con más de 25 trabajadores tenían derecho a sindicalizarse. Cuando 55% de la fuerza laboral de una fábrica aprobaba la formación de un sindicato, automáticamente quedaban afiliados todos los trabajadores. Lo mismo ocurría para empleados organizados por oficio, también con un mínimo de 25 miembros. Todos los trabajadores sindicalizados elegían democráticamente al directorio, participaban en asambleas y pagaban cuotas mensuales. El código

establecía los procedimientos para las negociaciones colectivas y exigía ejecutar el arbitraje a través de juntas de conciliación tripartitas, integradas por trabajadores, empresarios y autoridades estatales. Un sistema nacional de cortes laborales y oficinas regionales de la Dirección del Trabajo supervisaba la ejecución de las leyes laborales y sociales a nivel local. Alfredo Gaete Berrios, *Código del Trabajo (concordado y anotado)*, Ercilla, Santiago, 1945; Moisés Poblete Troncoso, *El derecho del trabajo y la seguridad social en Chile*, Editorial Jurídica, Santiago, 1945.

[73] Para la historia de los trabajadores rurales chilenos y el impacto de la legislación laboral en el campo, véase Brian Loveman, *Struggle in the Countryside: Politics and Rural Labor in Chile, 1919-1973*, Indiana University Press, Bloomington, 1976.

[74] Victoria, 1º de noviembre, 1930, ARNAD, DT, vol. 221.

[75] *Las Noticias* (Los Ángeles), 6 de julio, 1931, en ARNAD, DT, vol. 246.

[76] Para un debate sobre los efectos de la dictadura de Ibáñez en el movimiento obrero, véase DeShazo, *Urban Workers…*, *op. cit.;* Rojas, *La dictadura de Ibáñez…*, *op. cit.*

[77] Carlos Vega para intendente de Antofagasta, Calama, 18 de octubre, 1930, Archivo Nacional, Fondo Intendencia de Antofagasta, vol. 80.

[78] Valparaíso, 11 de julio, 1931, ARNAD, DT, vol. 248.

[79] Calera, 11 de noviembre, 1931, ARNAD, DT, vol. 255.

[80] Jorge Barría, *El movimiento obrero en Chile*, Universidad Técnica del Estado, Santiago, 1971.

[81] Santiago, 16 de octubre, 1930, ARNAD, DT, vol. 221.

[82] A "410 obreros se les dio sus pases en Potrerillos", *El Progreso* (Chañaral), 2 de enero, 1932.

[83] Calama, 30 de abril, 1930, Archivo Nacional, Fondo Intendencia de Antofagasta, vol. 115.

[84] Loveman, *Chile: The Legacy of Hispanic Capitalism*, *op. cit.*, p. 205.

[85] Mario Garcés, *Movimiento obrero en la década del treinta y el Frente Popular*, tesis, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1985; Hernán Venegas Valdebenito, "Crisis económica y conflictos sociales y políticos en la zona carbonífera. 1918-1931", *Contribuciones Científicas y Tecnológicas, Área Ciencias Sociales y Humanidades*, núm. 16 (1997), pp. 124-152.

[86] Thomas M. Klubock, "Ranquil: Violence and Peasant Politics on Chile's Southern Frontier", en Greg Grandin y Gilbert Joseph (eds.), *A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence during Latin America's Long Cold War*, Duke University Press, Durham, 2010.

[87] Formado en 1936, el Frente Popular chileno se inspiró en la iniciativa internacional para formar una coalición más amplia en contra del avance del fascismo e inicialmente incluyó a los partidos comunista y radical. De cara a las elecciones presidenciales de 1938, el frente se amplió con la incorporación del Partido Socialista, el CTCH en representación de la organización laboral y el movimiento estudiantil. Con Pedro Aguirre Cerda al frente, el Frente Popular triunfó en las elecciones de 1938 y permaneció en el gobierno hasta 1941. Pedro Milos, *Frente Popular en Chile. Su configuración: 1935-1938*, LOM Ediciones, Santiago, 2008. Para la historia de cómo los trabajadores concibieron y se involucraron en el Frente Popular, véase Pavilack, *Mining for the Nation*, *op. cit.*

[88] CTCH, *Declaración de principios y estatutos de la Confederación de Trabajadores de Chile*, Imprenta Yungay, Santiago, 1943, p. 1.

III. CAMBIO Y CONTINUIDAD: BRASIL DE 1930 A 1945

JOEL WOLFE

UNA CRISIS política sin relación con el comienzo de la Gran Depresión provocó en Brasil la llamada Revolución de 1930. El presidente Washington Luís, consumado político paulista, se extralimitó al nombrar como su sucesor a Julio Prestes, entonces gobernador de São Paulo. Minas Gerais, rival de São Paulo en la política de *café com leite* (café con leche), como se definía la gestión de los gobernadores durante la República Vieja, pretendía reclamar el poder presidencial al apoyar a Getúlio Vargas, gobernador de Rio Grande do Sul en las elecciones de 1930.[1] Tras el triunfo de Prestes, los opositores de São Paulo tomaron el poder con medios militares. Con más golpes de sables que disparos, Vargas tomó el poder con el respaldo de gran parte del ejército. Inicialmente asumió el poder como presidente provisional de Brasil de 1930 a 1937, pero después eliminó toda aspiración democrática como dictador del Estado Novo de 1937 a 1945. Fue elegido también como presidente en 1950 y ejerció el mando desde 1951 hasta su suicidio en agosto de 1954.[2]

Antes de 1930, los desacuerdos entre políticos paulistas y mineiros condujeron a un breve interregno, tiempo en el que el gobernador de algún otro estado estuvo a cargo hasta que los líderes de São Paulo y Minas Gerais acordaron nuevamente los términos para llevar a cabo la rotación presidencial. La llegada de Vargas al poder cambió este acuerdo e inició un nuevo estilo para las elecciones presidenciales, que finalmente falló y terminó con la toma militar del poder en 1964 y sus más de dos décadas de gobierno.[3]

El discurso convencional sobre los años de Vargas en el poder hace hincapié en el éxito de su régimen para transformar la economía, la estructura social y la política de Brasil. Se dice que su triunfo más vistoso y obvio fue la integración de los obreros en un sindicalismo estructurado como sistema gerencial bajo el control del Estado.[4] Su éxito para centralizar el poder en la capital del país, Rio de Janeiro, suele asociarse con la movilización sindicalista popular. Se dice también que ese reto a la larga tradición del federalismo extremo en Brasil impulsó los programas nacionales educativos y culturales que expandieron el poder nacional del Estado y centralizaron aún más el poder en Rio. Si bien es incuestionable que los años de Vargas representaron una ruptura radical con el pasado y pusieron fin a la influencia política de los gobernadores en las elecciones nacionales, la visión convencional de su gobierno sin duda sobreestima sus logros, en particular en relación con la centralización laboral y política.[5]

La economía de los años treinta, con la fuerte contracción del mercado internacional y la simultánea caída en la demanda del café brasileño, redujo los ingresos federales, pero también ofreció a Vargas una oportunidad única para enfocarse en el desarrollo interno. A pesar de esta oportunidad, la capacidad de Vargas para transformar Brasil quedó circunscrita a la débil capacidad del Estado, que esperaba superar mediante dicha transformación, y a la oposición de la élite paulista, que llegó al extremo de desencadenar una guerra civil en 1932. Los militares fueron un poderoso aliado de Vargas, pero ni siquiera la más poderosa institución del Brasil logró actuar en toda la nación, lo que limitó seriamente el ámbito de acción del régimen.[6] Con un débil apoyo institucional y una resuelta oposición, Vargas, astutamente, modificó el rumbo entre principios y mediados de la década de 1930. Sin embargo, no centralizó el poder político y económico en Rio, no integró a los trabajadores en un robusto sistema gerencial ni integró a la desigual población del país mediante programas educativos y culturales. Al cambiar el rumbo, se las ingenió para sentar los fundamentos de un programa desarrollista que transformó Brasil de manera fundamental y lo convirtió en una nación más integrada física, económica y culturalmente en el largo plazo. Hacia fines de los años treinta, Vargas también dio los primeros pasos para modificar las políticas de gobierno atendiendo lo que a su juico eran los intereses reales de la mayoría de los brasileños. Al prestar más atención a las demandas populares, que por lo general se dirigieron directamente a su persona por diferentes medios, Vargas comenzó a adoptar una incipiente política de masas. Estos cambios, que proporcionaron la infraestructura institucional y el vocabulario político del desarrollismo y los primeros estímulos de la política de masas, fueron logros reales de Vargas a partir de los años treinta.[7] Además, la Gran Depresión proporcionó el contexto necesario para ese cambio fundamental.

En muchos sentidos, el discurso dominante sobre Vargas y el trabajo es el más claro ejemplo de cómo la historiografía ha distorsionado nuestra comprensión de las repercusiones de la Gran Depresión en Brasil. El debate central de los ensayos sobre el tema se centra en el proceso de empoderamiento de los trabajadores. Algunos ven en Vargas al gobernante que otorgó a los trabajadores nuevos derechos y poderes con el establecimiento de un sistema laboral gerencial en los años treinta, que posteriormente plasmó en las Leyes Consolidadas de Trabajo (LCT) de 1943. Se les conoce como *outorga* (otorgar o garantizar), ya que Vargas otorgó derechos a los trabajadores.[8] Otros argumentan que los obreros, en particular los líderes laborales astutos, aprovecharon la oportunidad para tomar el control de la estructura incipiente creada por Vargas.[9] Ambas interpretaciones asumen que Vargas aprovechó las condiciones de emergencia provocadas por la Gran Depresión para presidir un Estado central activista y poderoso. Sea cierto o no que “el padre de los pobres”, como la maquinaria propagandística se refería a Vargas, haya otorgado esos derechos a los trabajadores o que ellos los hayan reclamado para sí, la historiografía común sobre el tema presupone que esos derechos existieron, que operaba una burocracia del trabajo y que el gobierno nacional logró

penetrar en las áreas industriales urbanas de Brasil con más que sólo capital de Estado.

Los registros históricos ponen en duda estas presunciones. La mayoría de las políticas laborales de Vargas falló entre los trabajadores. Esto fue particularmente obvio en el ámbito macropolítico. Cuando los militares lo derrocaron en 1945, no hubo manifestaciones de apoyo en su favor. No obstante, los obreros se manifestaron masivamente para demandar salarios más altos mediante extensas huelgas ilegales en las áreas urbanas en 1945 y 1946. Cientos de miles de trabajadores tomaron las calles de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre y otras ciudades para exigir aumentos salariales tras padecer años de inflación durante la guerra y bajos salarios que la burocracia del trabajo de Vargas no había modificado.[10] Esas huelgas violaron directamente la ley del trabajo —todas las disputas salariales debían resolverse en tribunales de conciliación tripartita en las oficinas del Ministerio del Trabajo— y fueron una crítica obvia de los sindicatos patrocinados por el Estado que colaboraron con los empresarios y el gobierno para mantener la paz laboral en los años treinta y durante la segunda Guerra Mundial.[11]

Cuando llegaron a su fin los años de represión y amenazas de represión del Estado Novo, los obreros tomaron las calles. El temor a la represión del Estado no se había disipado. A lo largo del primer periodo de gobierno de Vargas, los trabajadores brasileños simplemente ignoraron la nueva burocracia del trabajo. La sindicalización fue un proceso que se desarrollaba en dos etapas. Primero, todos los obreros debían pagar un *imposto sindical* obligatorio, que sirvió para financiar tanto al Ministerio del Trabajo como a los sindicatos locales. Después, para afiliarse a un sindicato, los trabajadores debían someterse al proceso de estar *sindicalizados*, lo que implicaba un simple sondeo de lealtad al régimen, o al menos demostrar neutralidad ideológica, seguido del pago de cuotas adicionales para el impuesto sindical. São Paulo, la ciudad más grande de Brasil y el mayor centro industrial del país, contaba con una estructura sindical formal ligada al Ministerio del Trabajo, pero sólo un reducido número de trabajadores se tomó el trabajo de afiliarse. La densidad sindical (el porcentaje de trabajadores que pagaba impuesto sindical y las cuotas adicionales para estar sindicalizado) era extremadamente baja: cuando mucho, 2.58% de los trabajadores textiles, el grupo de obreros industriales más grande de la ciudad, se afilió al sindicato en ese tiempo, y el índice más alto de trabajadores sindicalizados del sector metalúrgico fue de 5.10% en 1936, número que decreció durante el Estado Novo.[12]

El fracaso más egregio de Vargas en el ámbito del trabajo fue en São Paulo. En todo Brasil, el nuevo Ministerio del Trabajo intervenía, en la medida de sus posibilidades, en los asuntos y los tribunales sindicales, pero tuvo una mínima intervención en la industria y en la relación de ésta con los trabajadores, que no iba más allá de mantener los salarios contraídos durante una época de elevación de precios. Sin sindicatos eficaces o una burocracia competente en la cual confiar, los trabajadores optaron por manifestar sus quejas ante los patrones, los políticos locales e incluso ante el gobierno nacional dirigiéndose directamente a

Vargas. Cartas y peticiones, redactadas con la retórica habitual del régimen, exhortaban al dictador a cumplir las promesas propias del "padre de los pobres". En ocasiones el gobierno respondió otorgando al trabajador una ayuda económica o de otro tipo, pero el régimen finalmente no respondió a los intereses colectivos de los obreros con incrementos salariales o mejoras en las condiciones de trabajo en las fábricas. Los primeros intentos de Vargas por forjar una especie de alianza con los trabajadores a principios de 1943 fueron en parte una respuesta a esas cartas. También constituyeron su primera jugada ante la posibilidad de convocar a elecciones tras el fin de la segunda Guerra Mundial.[13]

La economía de Brasil durante la época de Vargas se circunscribió a lo que el régimen podía lograr. A pesar de sus grandes dimensiones y la diversidad geográfica, cuando ocurrió la Depresión Brasil dependía económicamente —y por lo tanto políticamente— del café. En 1931, los precios de este grano se encontraban a la mitad del promedio alcanzado a mediados de los años veinte. Los ingresos por exportación cayeron de 445.9 millones de dólares en 1929 a 180.6 millones en 1932. Asimismo, el colapso del mercado mundial y la consiguiente deflación de los precios pusieron fin a la entrada de capitales extranjeros al Brasil.[14] Pronto, el gobierno de Vargas se vio obligado a devaluar la moneda y a renegociar la deuda externa. También se movilizó con rapidez para apoyar al sector cafetalero, que había proporcionado más de 70% de ingresos por exportaciones antes de la crisis. La intervención nacional en el sector agrícola no tuvo precedentes. De hecho, en 1906 las plantaciones paulistas habían solicitado apoyo gubernamental para implementar un programa de valorización de precios, que les fue denegado. Los intereses de São Paulo en el café les permitieron implementar el programa por su cuenta, sin embargo, en los años treinta su situación financiera les impidió sustentar los precios. Esto llevó a Vargas a crear, en mayo de 1931, el Conselho Nacional do Café (CNC). La intervención federal en la agricultura abrió nuevas posibilidades y la CNC de inmediato desplazó los tan pobremente financiados programas estatales de sustentación de precios.[15]

Con el aumento de los precios de los productos básicos a través del CNC, Vargas también buscó expandir la demanda de productos mediante el establecimiento del primer salario mínimo de Brasil. Aunque la Constitución de 1934 exigía la figura del salario mínimo, Vargas no lo implementó hasta 1943, a la par de la promulgación de sus Leyes Consolidadas del Trabajo. La CNC y el salario mínimo resaltan las limitaciones políticas enfrentadas por Vargas en los años treinta. Llegó al poder tras desplazar al representante de la oligarquía paulista. Los plantadores estatales, aunque desconfiaban del poder nacional, estaban deseosos de tolerar al CNC porque ponía dinero federal en sus bolsillos. Por otra parte, los empresarios industriales paulistas no estaban interesados en que los políticos y burócratas de Rio dictasen lo que debían pagar a sus trabajadores. Cuando Vargas finalmente estableció el salario mínimo en 1943, ya era demasiado tarde para los trabajadores brasileños, que jamás simpatizaron con los intentos de Vargas de reunirlos bajo una coalición populista. Como demostraron las huelgas de

1945 y 1946, las políticas de Vargas no habían logrado otorgar apoyo directo a los trabajadores brasileños (como incrementos salariales), ni tampoco ayuda indirecta (a través de servicios sociales de carácter sindical) durante una época de incrementos constantes en el costo de vida.

Estas fallas del Estado Novo tuvieron su origen en los primeros años de la administración de Vargas. Desde 1931, Vargas había intentado mediar en las relaciones industriales e incrementar el salario de los trabajadores. La creación del Ministerio del Trabajo y la intervención en las primeras huelgas sugieren una orientación hacia los trabajadores, pero la presión constante de los empresarios industriales paulistas puso un alto súbito a estas políticas y evidenció las limitaciones estructurales de los planes de Vargas.[16]

Las intervenciones de Vargas a principios de los años treinta en lo que los paulistas consideraban política interna fueron una fuerza motriz para la decisión tomada por São Paulo de iniciar la guerra civil de julio de 1932. Como parte de su centralización inicial, Vargas había remplazado a la mayoría de los gobiernos de los estados con "interventores" designados que rendían cuentas a Rio en lugar de representar los intereses de las élites paulistas. João Alberto Lins de Barros, el interventor pernambucano de São Paulo, no tardó en colocarse en el centro de la compleja labor política de ese estado. En plena depresión económica de 1930, ordenó a los propietarios de las fábricas otorgar a sus trabajadores una semana laboral de 40 horas (en 1930, muchas fábricas trabajaban menos de la mitad de esas horas) y aumentar 5% los salarios de los obreros. Tras esta acción de gobierno sin precedentes, João Alberto intentó conciliar las disputas salariales entre los trabajadores textiles de São Paulo y los empresarios industriales. Esto enfureció a las élites paulistas, que argumentaban que sus trabajadores no estaban en huelga, cuando de hecho lo estaban. Entonces, los empresarios industriales paulistas prefirieron simplemente cerrar sus fábricas antes que someterse a los mandatos y la mediación del gobierno.

La intervención en la forma de administrar sus negocios y en el trato que daban a sus trabajadores constituía el último y más grande insulto al orgullo paulista. La sola presencia de Vargas en el Palacio de Catete representaba una afrenta para las élites de São Paulo, que habían asumido que Julio Prestes daría continuidad al dominio que este estado tenía de la política nacional. Ante la intromisión de Rio en sus asuntos y en nombre de la autonomía estatal, el 9 de julio de 1932 los paulistas iniciaron una guerra civil sorprendentemente efectiva en contra del gobierno de Vargas, que terminó el 2 de octubre de ese mismo año. Los 10 000 efectivos de la Força Pública Paulista enfrentaron bien al ejército brasileño, aunque perdieron varias oportunidades para lograr victorias significativas.[17] Finalmente, los paulistas perdieron la guerra, pero obtuvieron una enorme victoria política, pues después de los acontecimientos de 1932, Vargas dejó prácticamente en paz a São Paulo y permitió a las élites manejar sus propios asuntos con mínima intervención de Rio. La guerra civil arruinó las pretensiones de Vargas de centralizar el poder en Rio y dio fin a su coqueteo con el grupo de

trabajadores más grande de Brasil. Después de 1932, toda la legislación laboral nacional sería manejada en São Paulo por el Departamento Estatal del Trabajo, dirigido por el magnate textil paulista Jorge Street. Ningún otro estado recibió esa autonomía y ninguno contaba con tantas fábricas y obreros.

La guerra civil, igual que la recesión económica mundial, limitó seriamente el espacio de maniobra de Vargas durante gran parte de los años treinta. En muchos sentidos estaba imposibilitado para hacer algo más que simplemente apoyar la economía del café a través del CNC. No obstante, este proceder resultó ser mucho más heterodoxo de lo que Vargas y sus críticos pudieron imaginar. La innovación más evidente fue la intervención del gobierno federal en la agricultura local. El aspecto menos obvio de esta innovación fue la naturaleza keynesiana inadvertida del programa de sustento a los precios. Vargas logró incrementar la demanda en toda la economía, no sólo inyectando dinero al sector cafetalero, sino mediante un préstamo gubernamental elevadísimo. Sin planearlo, Vargas recurrió al gasto deficitario para crear demanda, lo que a su vez impulsó la expansión de las manufacturas domésticas.[18]

Desde la fundación del CNC en 1931 hasta 1937, la producción industrial creció, aunque lo hizo principalmente a través de la ampliación de la capacidad existente. La expansión industrial de los años veinte proporcionó esa capacidad, de modo que el consumo de insumos, como acero y cemento, no rebasó los niveles de los años veinte sino hasta 1937.[19] Dicho de otro modo, el único y más efectivo instrumento político de Vargas para la recuperación de la economía brasileña hasta 1937 fue el apoyo económico del café financiado con la deuda. Ninguno de los elaborados planes para la centralización de la autoridad política o la regulación del trabajo industrial tuvo un efecto real en la economía. De hecho, en términos políticos, no lograron más que enajenar a la élite paulista.

A mediados de los años treinta, antes de la declaración formal de la dictadura del Estado Novo en noviembre de 1937, Vargas modificó su programa. Con la centralización política fuera de su alcance, Vargas optó por reforzar la idea de Brasil como una nación unificada a través de programas educativos y culturales. La administración de Rio tuvo un éxito relativo en la estimulación del patrimonio nacional tanto en Rio como en Ouro Preto, el centro minero colonial de Minas Gerais. El gobierno de Rio promovió una interpretación original de la vida en Ouro Preto y destacó los elementos considerados como protonacionalistas en el surgimiento de Inconfidência Mineira en 1789.[20] A través de museos y turismo, Vargas buscó ejercer una especie de poder blando para alentar a los brasileños a pensar en términos altamente nacionalistas y abandonar el pensamiento chauvinista con el que juzgaban a sus estados.[21] El programa tuvo todo el éxito previsto. Introdujo una nueva narrativa histórica de Brasil que atrajo sin reparos a los intelectuales, quienes durante mucho tiempo habían deseado la unificación nacional y un fuerte sentido nacionalista. Debido al precario sistema de comunicaciones que dificultaba el traslado de la población a Ouro Preto o Rio y a la pobreza de la mayoría del pueblo brasileño, la influencia de la promoción del nacionalismo a través

del turismo fue muy débil.

Vargas ideó otra serie de políticas destinadas a promover tanto el nacionalismo cultural como la integración física y económica del país. Una serie de políticas educativas a nivel nacional podía, en teoría, tender puentes sobre las grandes brechas culturales de Brasil, elevar el nivel cultural de la amplia mayoría de la población y colocar al gobierno federal en los numerosos municipios del país. La reforma educativa de Vargas, no obstante, cargaba con las mismas debilidades del gobierno central y las ideologías de raza y clase existentes en todas las políticas públicas de Brasil. El Ministerio de Educación tuvo una influencia muy limitada fuera de Rio, y sus políticas reprodujeron los discursos de raza dominantes a pesar del enfoque nacionalista del régimen de Vargas, que en ocasiones promovía los intereses de la población afrobrasileña con mayor intensidad que en cualquier otra época anterior.[22] Igual que en su flirteo con el trabajo, las políticas educativas de Vargas resintieron la extremadamente limitada capacidad del gobierno nacional, en particular su incapacidad para la recaudación de impuestos. Los estados podían gravar a sus ciudadanos con mayor facilidad y eficiencia que el gobierno de Rio, por lo que controlaron sus propios presupuestos para la educación. Las escuelas, como la gran mayoría de las instituciones gubernamentales con las que interactuaban los brasileños fuera de Rio, se encontraban atadas a sus gobiernos locales y estatales.[23]

Los registros históricos demuestran que el comienzo de la Depresión económica y la Revolución de 1930 no bastaron para quebrantar el dominio que los estados ejercían sobre el gobierno nacional, por lo que Brasil permaneció altamente federalizado. Dentro de este marco político y económico, Vargas adoptó políticas que tanto sus principales aliados institucionales (los militares) como sus detractores (la élite paulista y otras élites regionales) apoyaron, o bien, en el peor de los casos, no obstaculizaron. Eligió lo que en el periodo posterior a 1945 se conoció como *desarrollismo*.[24]

La intervención gubernamental estratégica en la economía para superar obstáculos y fomentar nuevas industrias había sido un elemento central, aunque controversial, de la identidad brasileña desde finales del siglo XIX.[25] La República fue fundada en 1889 bajo el lema de “Orden y Progreso” por militares de pensamiento positivista, muchos de ellos ingenieros, con creencias casi religiosas —la religión positivista— sobre el poder de transformación del Estado.[26] Su capacidad de recurrir al poder estatal para fomentar el desarrollo estaba limitada por la presencia de un gobierno nacional débil y por los estados del país que mantenían fuertes identidades regionales, así como por las poderosas milicias. Entonces, en retrospectiva, no es de sorprender que Prudente José de Morais e Barros, abogado líder del Partido Republicano de São Paulo, haya resultado electo presidente en 1894 tras los resentimientos y levantamientos regionales provocados por las administraciones de dos generales, Deodoro da Fonseca (1889-1891) y Floriano Peixoto (1891-1894).

Si bien los valores del liberalismo económico dominaron durante la Vieja República (1889-1930), tanto el gobierno nacional como los gobiernos estatales intervinieron para dar su

apoyo a empresas específicas. Una tarifa de 1890 buscó estimular a las industrias nacionales mediante un impuesto a los productos importados, pero con una reducción en el costo de los equipos industriales. La tarifa de 1901 se dirigió específicamente a la industria textil algodonera y desempeñó un papel clave en el rápido crecimiento de esa industria.[27] Una de las intervenciones más espectaculares en el mercado fue rechazada por el gobierno federal por considerarla demasiado activista, pero fue implementada solamente en un estado. Los plantadores paulistas solicitaron directamente un préstamo a banqueros extranjeros para financiar la Valorización del Café de 1906, que tuvo éxito al establecer precios más altos para su principal exportación.[28] Estas intervenciones gubernamentales en el mercado estuvieron ligadas en última instancia al café, producto que dominó la economía brasileña desde la década de 1840 hasta al menos el estallido de la segunda Guerra Mundial. De hecho, incluso la industria algodonera produjo en sus inicios costales de yute para el café, y más adelante el paño de algodón se convirtió en un distintivo de la vestimenta del *colono*. La valorización se hizo directamente sobre los precios del café. De tal manera, las políticas económicas menos liberales de Brasil se debieron a su extraordinario éxito en el orden económico liberal: el país produjo 75% del café mundial en 1900-1901.

El éxito de Brasil como exportador de materias primas fue debilitando cada vez más su dependencia de una economía *laissez-faire* y de un federalismo político extremo. Las vías de comunicación estaban al servicio del sector exportador a expensas de la integración nacional. A diferencia de la experiencia de los Estados Unidos, donde los ferrocarriles por lo general se construyeron para estimular los asentamientos y el desarrollo de nuevas regiones, los ferrocarriles y caminos de Brasil tendieron a conectar a las regiones cafetaleras y los puertos para facilitar la exportación.[29] Las élites comenzaron a percatarse del problema que esto significaba cuando adoptaron la moda europea de poseer un automóvil. Podían trasladarse en él dentro de Rio o São Paulo, pero no de una ciudad a otra.[30] Los militares se percataron de las deficientes vías de comunicación desde la Guerra de Canudos en 1893-1897.[31] Enfrentaron serias dificultades para trasladar al ejército a Salvador y el traslado tierra adentro hacia Canudos sobrepasó sus capacidades logísticas. Este problema se repitió en la década de 1910 en la región centro-sur del país, supuestamente desarrollada. La Guerra del Contestado (1912-1916) demostró una vez más lo poco que el país había logrado penetrar aun en el cercano límite interior de Santa Catarina y Paraná. Incluso las campañas militares para mejorar las comunicaciones internas, como los intentos de Cândido Mariano da Silva Rondon para construir estaciones telegráficas en una parte del Amazonas, fueron demasiado complejas como para completarse.[32]

Las incursiones militares en el interior de Brasil no fueron sino intentos frustrados por controlar vastas extensiones aparentemente desocupadas. El ejército pronto se percató del componente social implícito en el desarrollo profundamente desigual de Brasil, que los pensadores militares relacionaron con la economía liberal de exportación del país. Los

empobrecidos nordestinos de Canudos y los aparentemente fanáticos milenarios de la región del Contestado se encontraban desconectados por completo de la sociedad brasileña y con frecuencia daban la espalda a la economía. Los indígenas encontrados por Rondon estaban mucho más alejados cultural, social y económicamente. Fue dentro de este contexto de principios del siglo XX que los militares de Brasil adoptaron una serie de políticas que más adelante se conocieron con el nombre de *desarrollismo.*[33]

El interés del ejército por la integración y el desarrollo nacionales tiene mucho sentido, en particular dentro del contexto brasileño. Tras la caída del imperio en 1889, simplemente no existían otras instituciones nacionales significativas. Más significativo es quizá que la élite paulista haya adoptado ideas similares. Los plantadores de São Paulo tenían la ventaja de seguir a los productores de café del estado de Rio de Janeiro, lo que explica su particular visión a futuro. Los cariocas habían sembrado café prácticamente en todos los lugares posibles y con ello destruyeron la capacidad productiva de sus tierras. Además, habían dependido exclusivamente de la mano de obra esclava.[34] São Paulo, que había sido bendecido con tierras de cultivo aparentemente inabarcables, supo manejar las cuestiones medioambientales y avanzó hacia el trabajo libre asalariado. El gobierno estatal estableció servicios de ampliación de la agricultura y financió la investigación agrícola. Tras la abolición de la esclavitud en 1888, el gobierno del estado de São Paulo financió el traslado a los asentamientos del interior de millones de inmigrantes que se convirtieron en *colonos* del café.[35] Este activismo del estado ayuda a poner en el contexto correcto el papel de São Paulo en la Valorización del Café de 1906, y explica por qué los paulistas llevaron a cabo el proyecto después de que los gobiernos de Minas Gerais y Rio de Janeiro se retiraron a raíz de que el gobierno nacional se rehusó a otorgar su apoyo.

Los paulistas apoyaron las intervenciones de su estado en la economía. Su desconfianza en el gobierno nacional, incluso a pesar de que ellos lo controlaban, derivaba del temor de que podrían terminar financiando proyectos de desarrollo, particularmente en el empobrecido nordeste del país. De hecho, los ingresos del estado por exportación de café sirvieron para pagar las extensas campañas para combatir la sequía en el nordeste durante el gobierno de Epitácio Pessoa (1919-1922).[36] Los paulistas no estaban dispuestos a continuar el juego figurado de ser la locomotora que arrastraba los vagones vacíos de otros estados de Brasil, de manera que se rehusaron a invertir sus riquezas en la elevación del nivel de los otros estados. Las élites de São Paulo deseaban que las élites de los demás estados las emulasen en el desarrollo de sus propias regiones.[37]

Así, cuando Vargas cambió al desarrollismo tras sus reveses iniciales, no sólo guardaba la profunda creencia en la necesidad de una fuerza central poderosa que pudiese establecer el orden necesario para el progreso, sino que también se dirigió a las tan esperadas metas, tanto de sus aliados del ejército como de sus opositores en São Paulo. Debido al complejo ambiente político que siguió a la Guerra Civil de 1932, Vargas se vio obligado a elaborar un programa

para atraer a los generales y a la élite paulista sin infringir su tan preciado sentido de autonomía. La manera más simple para ello fue recurrir al gobierno federal para producir algo que ambos grupos deseaban, pero sin inversión de su parte.

El crecimiento del sector industrial de la economía había sido impulsado principalmente por el apoyo al precio del café y por el dramático desplome del mercado mundial y de la producción industrial de los Estados Unidos y Europa Occidental. Conforme la industria ganó fuerza a mediados de los años treinta, tuvo que enfrentar obstáculos importantes en cuanto a insumos y transportación. Este tipo de problemas fueron los que el mercado no podía ni estaba dispuesto a atender. Asimismo, la orientación predominantemente rural del gobierno estatal de São Paulo, a pesar de su estatus como el principal centro industrial de Brasil, significaba que sólo el gobierno federal podía intervenir para estimular una mayor producción industrial. El tema del desarrollismo surgido a lo largo de los años treinta estaba hecho a la medida para Vargas.

La Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), fundada por Vargas en 1941 en una plantación cafetalera inactiva en el interior del estado de Rio de Janeiro, fue un proyecto desarrollista casi perfecto. Sin el sacrificio de ningún sector privado, el gobierno federal estableció la industria nacional del acero que proporcionó los insumos necesarios para todo, desde construcción urbana hasta maquinaria de manufactura avanzada. La presencia de una industria nacional del acero también respondía directamente a los intereses estratégicos del ejército en cuanto a armamento. El complejo del acero fue instalado en Rio cerca de la frontera con Minas, específicamente para protegerlo de cualquier enemigo, posiblemente el ejército argentino.[38] Los industriales paulistas y los desarrolladores de bienes raíces se beneficiaron con el suministro nacional de acero para la manufactura y la construcción. El sector en crecimiento de partes automotrices de São Paulo se vio particularmente favorecido por el acero de producción nacional. La presencia y el crecimiento de la industria del acero no sólo proporcionó materias primas para la industria paulista, sino que también hizo más factible el establecimiento de una industria automotriz nacional, que São Paulo respaldaba resueltamente.[39] Además, con la ubicación de la CSN en Volta Redonda, Vargas complacía también los intereses de las élites cercanas de Mineiro, pues, después de São Paulo, Minas Gerais era el segundo estado más poderoso, económica y políticamente, de Brasil. Minas también aportó una cantidad significativa de mineral de hierro para Volta Redonda.

La creación de una fábrica de motores de avión financiada por el Estado durante la segunda Guerra Mundial fue un vínculo progresivo lógico y significativo para la CSN. Oficiales militares de los Estados Unidos ayudaron al gobierno brasileño en la instalación de la Fábrica Nacional de Motores (FNM), que representaba una fuente adicional de motores para cazas y bombarderos durante la guerra. La planta de Rio, de la que 99% era propiedad del gobierno brasileño, no estuvo lista a tiempo para prestar ayuda en la guerra. Tras el armisticio, de inmediato realizó la transición para fabricar camiones diseñados por la empresa italiana

Isotta-Fraschini.[40] Aunque no resultaba tan inspirador, en el ámbito cultural o personal producir automóviles para el consumo individual y la fabricación de camiones en Brasil complementó un elemento más del desarrollismo del régimen: la "Marcha hacia el Occidente" *(Marcha para o Oeste)*. A principios de 1937, Vargas anunció el apoyo del gobierno para poblar amplias regiones del interior del país. Su meta fue transformar la región centrooccidental (los estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Toantins) y el norte o región del Amazonas (que abarcaba los actuales estados de Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia y Roraima) en zonas desarrolladas económicamente a la par de la región centrosur (Minas Gerais, Rio de Janeiro y São Paulo). Los camiones y los caminos asfaltados fueron la clave para la Marcha hacia el Occidente, pues permitieron la llegada de personas y la salida de productos de esas regiones.[41]

Volta Redonda y la Marcha hacia el Occidente fueron grandes y llamativos proyectos con profundas raíces en la idiosincrasia brasileña. Trasladarse de la costa hacia el interior había fascinado a los brasileños desde mucho tiempo atrás, e incluso fue un elemento central de la Inconfidência Mineira [conspiración minera] de finales del siglo XVIII, que hizo un llamado explícito para trasladarse a la capital del país, lejos de la costa. Asimismo, con el espíritu nacionalista y el surgimiento del modernismo en los años veinte, los bárbaros cazadores de esclavos de la época colonial y de inicios del periodo nacional, los *bandeirantes*, fueron revalorados como pioneros nacionalistas que llevaron la civilización a las regiones del interior, las cuales se consideraban deshabitadas. Igual que la industria nacional del acero, este esquema de colonización respondía al interés creciente de los intelectuales nacionalistas y modernistas en la diversificación de la economía brasileña principalmente agrícola, sin costo alguno para los poderosos plantadores y los intereses comerciales del país.

En el desarrollismo de Vargas hubo también iniciativas menos conocidas. El aparentemente insignificante Decreto-Lei 3651 del 25 de septiembre de 1941 establecía el Código Nacional de Tránsito, una de las primeras leyes promulgadas en Rio que afectaron la vida cotidiana de todos los rincones de Brasil, con el que el gobierno dio inicio al proceso de incluir la transportación dentro de los temas nacionales. Consistía de un detallado reglamento de tránsito de 70 páginas que sirvió también para el diseño de calles y carreteras. A pesar de su naturaleza mundana, el Código Nacional de Tránsito ignoraba explícitamente todos los reglamentos estatales y locales para conducir. A ningún estado o municipalidad le fue otorgada la exención recibida por São Paulo para la implementación de las leyes laborales.[42] Sin embargo, a diferencia de otros intentos de Vargas para ejercer control en Rio, con este código lo consiguió.

Ningún grupo tenía que ceder su poder político o económico al aceptar un reglamento de tránsito general, de modo que el efecto inmediato de esa ejecución del poder nacional fue limitado. De hecho, su influencia en el largo plazo también fue limitada. La importancia del Código Nacional de Tránsito fue haber constituido la mayor afirmación del poder federal

sobre las autoridades estatales. Un elemento mucho más llamativo del desarrollismo de Vargas prácticamente no tuvo efecto en su tiempo, pero igual que la industria nacional del acero la Marcha hacia Occidente e incluso el reglamento de tránsito, proporcionaron la infraestructura gubernamental e intelectual para la profundización del desarrollo industrial de Brasil. La LCT de 1943 codificó la estructura del trabajo corporativo que, a lo largo de más de 20 años, no se aplicó sino esporádicamente.

Varios gobiernos utilizaron elementos de la LCT, pero el sistema corporativo no quedó establecido por completo sino hasta el golpe militar de 1964. De manera particular al inicio de la dictadura, pero también después de las huelgas de 1968, los militares usaron en su favor todos los aspectos del código del trabajo que aumentaban el control central y limitaban la autonomía de los trabajadores. No obstante, los sindicatos no fueron neutralizados ni se volvieron instrumentos fieles al Estado. Los militares recurrieron a la LCT para evitar que los sindicatos se volvieran instituciones de oposición y para mantener los salarios bajos, mientras la industria brasileña se concentraba en las exportaciones de los mercados domésticos en expansión. Los sucesivos presidentes militares rechazaron el fordismo estatal imaginado por Vargas e implementado por Juscelino Kubitschek (1956-1961) para, en su lugar, servirse del Estado para mantener los salarios bajos y a los trabajadores en sus fábricas.[43]

Otra iniciativa del Estado Novo que repercutió por largo tiempo tras el fin de la dictadura fue el Consejo Nacional del Petróleo, que emprendió un estudio sobre el papel que debía seguir el gobierno en la exploración y refinación del petróleo. Los elevados aranceles de importación del petróleo y la ausencia de yacimientos superficiales limitaron las actividades del Consejo; sin embargo, las críticas nacionalistas contra las compañías extranjeras, la balanza de pagos en deterioro y el crecimiento sostenido del sector automotriz cambiaron el cálculo político sobre la intervención estatal. A través de la campaña popular “El petróleo es nuestro”, Vargas prometió crear un monopolio nacional del petróleo y Petrobras fue fundado en octubre de 1953.[44] La compañía petrolera nacional hizo poco en sus primeros años más allá de satisfacer las demandas populares de acción. No obstante, a pesar de no haber descubierto yacimientos petrolíferos importantes, Petrobras desempeñó un papel cada vez más importante en la coordinación de una política energética nacional durante la dictadura militar, y fue el centro de atención en el desarrollo del programa de etanol lanzado por el régimen militar en la década de 1970.

En retrospectiva, el desarrollismo de Vargas no reflejó ningún tipo de plan maestro ni para mantener el poder político ni para la economía de Brasil. A lo largo de sus 15 años en el mando en las décadas de 1930 y 1940, Vargas enfrentó restricciones financieras y políticas importantes. El único elemento constante de su época fue su deseo por mantenerse en el poder, primero como presidente provisional de Brasil y después como dictador. Durante los años del Estado Novo, Vargas combinó el autoritarismo con un compromiso protopopulista con los trabajadores y los pobres. Sin embargo, no comprendió que sus intentos de manipulación de

las clases populares condujeron a los primeros cambios en las políticas nacionales. Vargas llegó al poder en 1930 con un golpe que buscó meter en cintura la política de los gobernadores de los estados. Los líderes políticos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul y otros estados reaccionaron en contra de la extralimitación paulista e iniciaron la Revolución de 1930. Tras la destitución de Vargas en 1945, Brasil emprendió sus primeros intentos para establecer elecciones nacionales que no reflejaran el poder independiente de los estados. De hecho, el propio Vargas fue electo para el Senado como representante tanto de Rio de Janeiro (el estado con el que estuvo asociado como jefe de la nación de 1930 a 1945) y Rio Grande do Sul (su estado natal del que había sido gobernador). Eligió como sede de su servicio a Rio Grande do Sul, en parte como preparación para las elecciones presidenciales de 1950.

Sin advertirlo, Vargas aceleró el paso hacia una política de masas en Brasil. Su extenso uso de la radio y la prensa para promoverse a sí mismo y al régimen, junto con un discurso unificador de Brasil, alentó a la población a ver más allá de la política provincial de los líderes locales. Los trabajadores brasileños coincidían cada vez más directamente con Vargas en su búsqueda de una respuesta a sus demandas específicas.[45] Los programas de desarrollo nacional, las campañas de radio y prensa a nivel nacional y un discurso abierto sobre la unificación física, social y económica de Brasil durante el curso de la Gran Depresión y la segunda Guerra Mundial lograron su cometido de poner fin a la política de los gobernadores. A partir de las elecciones de diciembre de 1945, los votantes de las clases medias y obreras eligieron candidatos provenientes de partidos políticos de reciente formación. De 1945 a 1962, los tres principales partidos, el Partido Social Democrático (PSD), la União Democrática Nacional (UDN) y el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), representaron cerca de las tres cuartas partes de los integrantes de la Cámara de Diputados.[46] A pesar de que esta incipiente forma de política de masas iniciada por Vargas se mantuvo altamente limitada por las restricciones sobre el derecho al voto, logró poner fin a la política de patronazgo de los gobernadores que había favorecido a los grandes intereses agrícolas, en especial en São Paulo y Minas Gerais.

Vargas, ex gobernador de un poderoso estado, no pretendió en un inicio transformar las elecciones brasileñas, sino que las condiciones que tuvo que enfrentar durante la Gran Depresión fueron las que lo llevaron a impulsar una serie de políticas que modificaron sustancialmente la política brasileña tradicional. Los experimentos de populismo y nuevas formas de intervención estatal en la economía son muy frecuentes en la historia de América Latina durante la Gran Depresión.[47] Desde Cárdenas en México hasta los gobiernos del Frente Popular en Chile, las soluciones liberales de izquierda sobre cuestiones de tenencia de la tierra, propiedad extranjera de empresas estratégicas y el tema general de la justicia social ocuparon el centro de atención. Algunas innovaciones políticas significativas, como la fundación de Pemex en México, tuvieron consecuencias duraderas en el desarrollo ulterior. En Chile, las alianzas políticas iniciales de las décadas de 1930 y 1940 siguieron moldeando las

políticas electorales hasta la toma del poder por los militares en 1973. Durante la primera mitad de la década de 1940, Argentina vivió en cierto modo el ejemplo más espectacular de un aparente cambio radical que afectó a la economía y la política nacionales desde el siglo XX hasta la actualidad. En todos estos casos, los cambios iniciados en esa época mantuvieron un fuerte arraigo en las identidades nacionales y siguen siendo invocados, directa o indirectamente, en las elecciones nacionales, a pesar de que las reformas y los cambios políticos hayan sido obstaculizados por gobiernos posteriores o bien cortados de tajo por las despiadadas dictaduras militares.

En Brasil, el discurso oficial sobre Vargas como forjador del movimiento obrero moderno y como primer líder después de Pedro II (1841-1889) que logró centralizar el poder en la capital nacional es más ficción que realidad. Vargas intentó hacer ambas cosas, pero el poder de la élite paulista y la débil capacidad del Estado que heredó obstaculizaron sus ambiciosos planes. Los verdaderos logros de Vargas fueron menos visibles. Forjó la infraestructura burocrática; el discurso económico, político y social del desarrollismo, y la política de masas que más adelante, en sus formas más democráticas y materialistas, se asociaron con Kubitschek, y en su forma más autoritaria y orientada hacia la industria básica tuvieron resonancia en los generales que gobernaron Brasil, en particular Ernesto Geisel (1974-1979).

Una gran ironía del régimen de Vargas es que tal vez fue el líder más exitoso de América Latina en su tiempo, pero no por las razones que muchos han argumentado a lo largo de los años. Fracasó en la mayoría de las cosas que pretendió llevar a cabo. Asimismo, fracasó en su intento por conservar el poder protopopulista en 1945 y, aunque tuvo éxito como candidato a la presidencia en las elecciones democráticas de 1950, su fracaso de gobierno fue tan grande que optó por el suicidio como única salida. Lo que resulta imposible ignorar desde el punto de vista del siglo XXI es el legado desarrollista de Vargas. Más que las importantes empresas como Volta Redonda y Petrobras, Vargas instauró en Brasil un pensamiento de desarrollo nacional, diversificación económica y estado participativo. Durante los años de la Gran Depresión, cambió la orientación del discurso nacional basado en un excesivo liberalismo económico y su orientación *laissez-faire* de mercado hacia una relación más diversificada y matizada entre el Estado y los mercados.[48] Sus resultados dentro del liberalismo político, en términos de democracia y transparencia de gobierno, fueron mixtos. Vargas hizo frente al largo legado de exclusión política de Brasil a través de sus iniciales intentos por incorporar a los trabajadores a su gobierno. Esta medida trajo cambios políticos, como ocurrió con sus rasgos populistas de 1945, pero sus fracasos en el ámbito del trabajo acabaron por profundizar las tradiciones antidemocráticas de Brasil.[49] A pesar de ello, el sistema político implementado más adelante constituyó el primer intento de una política electoral de masas.

Una ironía final de la manera en que Vargas sorteó el complejo ámbito político de la Gran Depresión es el espacio económico y social abierto por su desarrollismo para la creación de los cuestionables discursos iniciales de la democracia en las décadas de 1970 y 1980. Aunque

por lo general no se consideran como parte del legado de la Gran Depresión, las transformaciones provocadas por el fomento de la industrialización, la integración física del país y la lenta centralización del poder, que finalmente se consolidó con la fundación de Brasilia en 1960 y fue drásticamente acelerada por la dictadura militar de 1964-1985, cambiaron la percepción de los brasileños sobre su país y el sitio que en éste les correspondía. El desarrollismo cimentado en las políticas de Vargas alteró la percepción que los brasileños tenían de sí mismos, pues se consideraban más brasileños que pertenecientes a sus estados o regiones de origen. Los habitantes comenzaron a sentirse más ciudadanos que súbditos. Vargas, sin realmente pretenderlo, derrumbó el orden económico liberal que había heredado y que inicialmente había intentado reforzar apuntalando el sector cafetalero, y sentó las bases para el posterior establecimiento del liberalismo político. Aunque no sea éste el principal recuerdo que los brasileños suelen tener de Vargas, es quizás el legado final de los cambios que introdujo en el país durante la Gran Depresión.

[1] Ya que el jefe de gobierno supuestamente debía rotar entre el gobernador de São Paulo (el mayor productor de café) y el de Minas (el principal productor de lácteos), los mineiros asumían que les correspondía el turno para ejercer la presidencia.

[2] La obra de Boris Fausto, *A Revolução de 1930: Historiografia e História,* Brasiliense, São Paulo, 1970, se mantiene como una de las mejores interpretaciones del significado político del ascenso de Vargas al poder. Véase también, Maria Celina Soares d'Araújo, *A Era Vargas,* 2ª ed., Editora Moderna, São Paulo, 2004.

[3] El estudio de Thomas E. Skidmore, *Politics in Brazil, 1930-1964: An Experiment in Democracy,* Oxford University Press, Nueva York, 1967, ofrece el mejor contexto político de esta época. Un buen análisis de los fundamentos de las políticas durante la Vieja República se encuentra en la obra clásica de José Maria Bello, *A History of the Republic, 1889-1964,* Stanford University Press, Stanford, 1966.

[4] La obra de Luiz Carlos Bresser Pereira, *Desenvolvimento e Crise no Brasil: História, Economia e Política de Getúlio Vargas a Lula,* 5ª ed., Editora 34, São Paulo, 2003, es una de las obras más recientes sobre este tema. Véase también Boris Fausto, *História do Brasil,* EDUSP, São Paulo, 1994. Incluso Thomas E. Skidmore en *Brazil: Five Centuries of Change,* 2ª ed., Oxford University Press, Nueva York, 2010, pp. 114-118, reduce el riesgo de apostar por la efectividad de Vargas para transformar las relaciones sociales durante el Estado Novo.

[5] Abundan obras sobre la legislación del trabajo de Vargas. Una de las mejores sobre las intenciones de sus programas es la de Angela Maria de Castro Gomes, *A Invenção do Trabalhismo,* Vértice, São Paulo, 1988. Un estudio clásico que ubica su legislación en un marco coherente es la obra de Luiz Werneck Vianna, *Liberalismo e Sindicato no Brasil,* Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1976.

[6] Fue precisamente en esta época cuando los militares comenzaron a cuestionar cómo podía de hecho convertirse en una institución nacional más poderosa. Véase Frank D. McCann, *Soldiers of the Patria: A History of the Brazilian Army, 1889-1937,* Stanford University Press, Stanford, 2004, y Cláudio Moreira Bento, "Getúlio Vargas e a evolução da doutrina do exército, 1930-1945", *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro* 339 (1983), pp. 63-71.

[7] Con base en la posición de Vargas dirigiéndose a los viejos sueños de los intelectuales modernistas, desarrollo este argumento en *Autos and Progress: The Brazilian Search for Modernity,* Oxford University Press, Nueva York, 2010. Para el desarrollismo de Vargas en el contexto histórico y regional, véase Joel Wolfe, "Populism and Developmentalism", en Thomas H. Holloway (ed.), *A Companion to Latin American History,* Blackwell, Malden, 2008, pp. 347-364.

[8] Un ejemplo clásico de esta escuela de pensamiento es Ricardo Antunes, *Classe Operária, Sindicatos e Partido no Brasil: Da Revolução de 30 até a Aliança Nacional Libertadora,* Cortez, São Paulo, 1982.

[9] Un excelente ejemplo de esta perspectiva es John D. French, *The Brazilian Workers' ABC: Class Conflict and Alliances in Modern São Paulo,* University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1992.

[10] El gran fracaso del intento de intervención de Vargas en las relaciones industriales se encuentra detallado en Joel Wolfe, "The Faustian Bargain Not Made: Getúlio Vargas and Brazil's Industrial Workers, 1930-1945", *Luso-Brazilian Review* 31, núm. 2 (invierno 1994), pp. 77-96. Un excelente análisis del deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora se encuentra en John J. Crocitti, "Vargas Era Social Policies: An Inquiry into Brazilian Malnutrition during the Estado Novo (1937-1945)", en Jens R. Hentschke (ed.), *Vargas and Brazil: New Perspectives,* Palgrave Macmillan, Nueva York, 2006.

[11] Para una clara explicación de cómo el sistema corporativista de trabajo debía ignorar la necesidad de las huelgas, véase Kenneth S. Mericle, "Conflict Resolution and the Brazilian Industrial Relations System", tesis de doctorado, University of Wisconsin, Madison, 1974.

[12] Joel Wolfe, *Working Women, Working Men: São Paulo and the Rise of Brazil's Industrial Working Class, 1900-1955,* Duke University Press, Durham, 1993, pp. 78, 83.

[13] Joel Wolfe, "'Father of the Poor' or 'Mother of the Rich'? Getúlio Vargas, Industrial Workers, and Constructions of Class, Gender, and Populism in São Paulo, 1930-1954", *Radical History Review* 58 (invierno de 1994), pp. 80-111.

[14] Werner Baer, *The Brazilian Economy: Growth and Development,* 2ª ed., Praeger, Nueva York, 1983, pp. 43-44.

[15] Departamento Nacional do Café, *Relatório apresentado ao Consehlo consultivo pelo seu president Jaime Fernandes Guedes,* Departamento Nacional do Café, Rio de Janeiro, 1941.

[16] Wolfe, *Working Women, Working Men, op. cit.,* pp. 49-58.

[17] Para una justificación fascinante y exhaustiva de la guerra civil escrita 30 años después del levantamiento, véase Aureliano Leite, "Causes e Objetivos da Revolução de 1932", *Revista da História* 25, núm. 51 (julio-septiembre de 1962), pp. 139-

144. Para un análisis crítico de los motivos paulistas, véase Barbara Weinstein, "Racializing Regional Difference: São Paulo versus Brazil, 1932", en Nancy P. Applebaum (ed.), *Race and Nation in Modern Latin America*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2003, pp. 237-262.

[18] Celso Furtado planteó este argumento en su obra hoy clásica *Formação Econômica do Brasil*, Editôra Funda de Cultura, Rio de Janeiro, 1959. Una prueba económica más formal de esta medida la proporciona Simão Silber en su estudio "Análise da Politica Econômica", en Flávio R. Versiani y José Roberto Mendonça de Barros (eds.), *Formação Econômica do Brasil: A Eperiência da Industrilização*, Saraiva, São Paulo, 1977.

[19] Baer, *The Brazilian Economy…*, *op. cit.*, p. 45. Véase también Tamás Szmrecsányi y Ruis Guilherme Granziera, *Getúlio Vargas e a economia contemporânea*, 2ª ed., Hucitec, Campinas, 2004.

[20] Daryle Williams, *Culture Wars in Brazil: The First Vargas Regime, 19301945*, Duke University Press, Durham, 2001, pp. 123-124, 130-132. La *Inconfidência Mineira* es considerada ampliamente como el primer intento para independizarse de Portugal.

[21] Para apreciar un punto de vista contemporáneo fascinante de la ofensiva cultural de Vargas escrito a través de una perspectiva crítica y erudita, véase Karl Lowenstein, *Brazil under Vargas*, Macmillan, Nueva York, 1942, pp. 285-314.

[22] Sobre la compleja relación entre Vargas y la comunidad afrobrasileña de São Paulo, véase George Reid Andrews, *Blacks and Whites in São Paulo, 18881988*, University of Wisconsin Press, Madison, 1991, pp. 147-156. Sobre la manera en que Vargas modificó las políticas estatales en el estado nordestino de Bahía y abrió nuevas oportunidades culturales y políticas para los afrobrasileños de Salvador, véase Scott A. Ickes, "Adorned with the Mix of Faith and Profanity That Intoxicates the People: The Festival of the Senhor do Bonfim in Salvador, Bahia, Brazil, 1930-1954", *Bulletin of Latin American Research* 24, núm. 1 (abril de 2005), pp. 181-200.

[23] Dos estudios sobresalientes sobre educación y los intentos de reforma educativa bajo el régimen de Vargas son Jens R. Hentschke, *Reconstructing the Brazilian Nation: Public Schooling in the Vargas Era*, Baden-Baden, Nomos, 2007, y Jerry Dávila, *Diploma of Whiteness: Race and Social Policy in Brazil, 1917-1945*, Duke University Press, Durham, 2003.

[24] La crítica más ambiciosa del desarrollismo, que ubica sus orígenes en la época de la Guerra Fría, se encuentra en Arturo Escobar, *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*, Princeton University Press, Princeton, 1995.

[25] El estudio de Steve Topik, *The Political Economy of the Brazilian State, 1889-1930*, University of Texas Press, Austin, 1987, se mantiene como una de las mejores obras que cuestionan el conocimiento tradicional sobre la excesiva naturaleza *laissez-faire* de la economía durante la Vieja República.

[26] Sobre el positivismo y sus implicaciones religiosas para muchos de los ingenieros de las fuerzas armadas, véase Todd A. Diacon, *Stringing Together a Nation: Cândido Mariano da Silva Rondon and the Construction of a Modern Brazil, 1906-1930*, Duke University Press, Durham, 2004, pp. 79-99.

[27] Véase Stanley J. Stein, *The Brazilian Cotton Manufacture: Textile Enterprise in an Undeveloped Area, 1850-1950*, Harvard University Press, Cambridge, 1957, y Wilson Suzigan, *Indústria Brasileira: Origem e Desenvolvimento*, Brasiliense, São Paulo, 1986.

[28] Thomas H. Holloway, *The Brazilian Coffee Valorization of 1906: Regional Politics and Economic Dependence*, State Historical Society, Madison, 1975.

[29] Para un análisis más optimista sobre el lugar de los ferrocarriles en el desarrollo interno, véase William Roderick Summerhill, *Order against Progress: Government, Foreign Investments, and Railroads in Brazil, 1854-1913*, Stanford University Press, Stanford, 2003.

[30] Wolfe, *Autos and Progress…*, *op. cit.*, pp. 13-32.

[31] La apreciación de Canudos en este contexto ayuda a explicar la neurótica descripción hecha por Euclides da Cunha sobre las condiciones físicas dentro y fuera de Canudos. Véase Euclides da Cunha, *Rebellion in the Backland* (1903), trad. Samuel Putnam, University of Chicago Press, Chicago, 1944.

[32] Todd A. Diacon, *Millenarian Vision, Capitalist Reality: Brazil's Contestado Rebellion, 1912-1916*, Duke University Press, Durham, 1991, y Diacon, *Stringing Together a Nation*, *op. cit.*

[33] Sobre las frustraciones militares en el interior del país, véase Todd A. Diacon, "Bringing the Countryside Back In: A Case Study of Military Intervention as State-Building in the Brazilian Old Republic", *Journal of Latin American Studies* 27,

núm. 3 (octubre de 1995), pp. 569-592, y "Searching for a Lost Army: Recovering the History of the Federal Army's Pursuit of the Prestes Column in Brazil, 1924-1927", *Americas: A Quarterly Review of Inter-American Cultural History* 54, núm. 3 (enero de 1998), pp. 409-436. Véase también Frank D. McCann, "The Formative Period of Twentieth-Century Brazilian Army Thought: 1900-1922", *Hispanic American Historical Review* 64, núm. 4 (noviembre de 1984), pp. 737-765, y *A Nação Armada: Ensaios sobre a História do Exército Brasileiro*, trad. Sílvio Rolim, Editôra Guararapes, Recife, 1982.

[34] El estudio de Stanley J. Stein *Vassouras: A Brazilian Coffee County, 18501900,* Harvard University Press, Cambridge, 1957, se mantiene como el mejor análisis de la destrucción del medio ambiente en esta región.

[35] Warren Dean, "The Green Wave of Coffee: Beginnings of Tropical Agricultural Research in Brazil, 1885-1900", *HAHR* 69, núm. 1 (febrero 1989), pp. 91-115, y Thomas H. Holloway, *Immigrants on the Land: Coffee and Society in São Paulo, 1886-1934*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1980.

[36] Linda Lewin, *Politics and Parentel in Paraíba: A Case Study of Family Based Oligarchy in Brazil,* Princeton University Press, Princeton, 1987, pp. 91-92.

[37] Joseph Love, *A Locomotiva: São Paulo na federação brasileira, 1889-1937,* Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1982.

[38] John D. Wirth, *The Politics of Brazilian Development,* Stanford University Press, Stanford, 1970, pp. 71-129. Véase también Oliver J. Dinius, *Brazil's Steel City: Developmentalism, Strategic Power, and Industrial Relations in Volta Redonda, 1941-1964,* Stanford University Press, Stanford, 2011, pp. 14-38.

[39] Caren Addis, *Taking the Wheel: Auto Parts Firms and the Political Economy of Industrialization in Brazil,* Penn State University Press, University Park, 1999.

[40] José Ricardo Ramalho, Estado-Patrão e Luta Operaria: O Caso *FNM*, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1989, pp. 31-57, y Helen Shapiro, Engines of Growth: The State and Transnational Auto Companies in Brazil, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. 62-63.

[41] Getúlio Vargas, *A Nova Política do Brasil,* José Olympio, Rio de Janeiro, 1938, vol. 5, pp.124-126. Véase también Wolfe, *Autos and Progress…, op. cit.,* pp. 104-105.

[42] República dos Estados Unidos do Brasil, *Coleção das Leis de 1941,* vol. 5, *Atos do Poder Executivo, Decretos Leis de Julho a Setembro,* Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1941, pp. 335-405. Hasta el golpe militar de 1964, las autoridades locales fueron responsables de la aplicación del código de tránsito. Tras el golpe, la policía militar asumió la responsabilidad principal incluso de estas leyes.

[43] Un análisis de la transición de las relaciones laborales a partir de una débil relación con las leyes federales en la década de 1950 y principios del decenio de 1960, hacia su estricta implementación después del golpe, se encuentra en António Luigi Negro, *Linhas de Montagen: O Industrialism Nacional-Desenvolmimentista e Sindicalização dos Trabalhadores,* Boitempo, São Paulo, 2004.

[44] Maria Augusta Tibirica Miranda, *O Petroleum É Nosso: a Luta contra o "Entreguismo" pelo Monopolio Estadual, 1947-1953,* Vozes, Petrópolis, 1983; Laura Randall, *The Political Economy of Brazilian Oil,* Praeger, Westport, 1993, pp. 9-12; Wirth, *Politics of Brazilian Development…, op. cit.,* pp. 160-183.

[45] Peticiones específicas de los trabajadores se detallan en Wolfe, "'Father of the Poor'…", *op. cit.*

[46] E. Bradford Burns, *A History of Brazil,* 2ª ed., Columbia University Press, Nueva York, 1980, p. 440.

[47] Hago una síntesis de estas tendencias de Argentina, Brasil, Chile y México en Wolfe, "Populism and Developmentalism…", *op. cit.*

[48] De hecho, un momento de la formulación sin obstáculos de políticas liberales en los años subsiguientes a Vargas ocurrió en los primeros años posteriores al golpe de 1964. La tremenda impopularidad de estas medidas obligó a los militares a cambiar el rumbo de inmediato e intervenir en la planeación y la economía en general. El estudio de Peter Evans, *Dependent Development: The Alliance of Multinational, State, and Local Capital in Brazil,* Princeton University Press, Princeton, 1979, es el mejor análisis existente sobre este proceso.

[49] Esto fue sugerido inicialmente por Ruth Berins Collier en un análisis comparativo con México en las décadas de 1920 y 1930. Argumenta que en México los obreros obtuvieron beneficios con la incorporación, pero en el largo plazo esto debilitó su movimiento; por su parte, los obreros no obtuvieron beneficios del Estado, pero en el largo plazo ganaron fuerza política al no estar sujetos al gobierno ni a un partido político en particular. Véase su ensayo "Popular Sector Incorporation and Political Supremacy: Regime Evolution in Brazil and Mexico", en Sylvia Ann Hewlitt y Richard S. Weinert (eds.), *Brazil and Mexico: Patterns in Late Development*, Institute for the Study of Human Issues, 1982.

IV. LA GRAN DEPRESIÓN EN PERÚ*

PAULO DRINOT
CARLOS CONTRERAS

LA DESCRIPCIÓN predominante en la historiografía sobre la repercusión de la Gran Depresión en Perú es que fue relativamente severa pero breve.[1] Como consecuencia, y en comparación con otros países de América Latina, Perú no experimentó una transformación fundamental en su estructura económica (de ser una economía fundamentalmente minera y agrícola a transformarse en una economía industrial) ni en sus políticas económicas (del crecimiento basado en las exportaciones a una industrialización por sustitución de importaciones); la visión predominante de la experiencia peruana durante la Gran Depresión es que, al menos en lo que a la economía se refiere, hubo una continuidad notoria entre el periodo que precedió a la depresión mundial y el siguiente. De tal manera, Perú se considera atípico en relación con otros países de medianas y grandes economías, pues se caracteriza en la región por su diversidad de productos de exportación; implícitamente es consistente con los procesos históricos asociados con las pequeñas economías monoexportadoras de Centroamérica y además, como formula acertadamente Carlos Díaz Alejandro, fue más pasivo que reactivo durante la crisis.[2] A la vez, la ausencia de una ruptura fundamental en la orientación económica del país como consecuencia de la Gran Depresión se entiende normalmente como la expresión del poder económico y, por extensión, político de las élites. Con el poder derivado del control de los dinámicos sectores exportadores, esas élites fueron capaces de absorber los efectos económicos y políticos de la crisis y de seguir obteniendo beneficios de su supremacía económica y política a través de la continuación de la naturaleza exportadora de la economía peruana hasta el golpe militar de 1968.

Por otra parte, los historiadores que se han centrado en el ámbito político concuerdan ampliamente en que el periodo de finales de los años veinte a principios de los treinta fue fundamental para la historia peruana. El surgimiento de los partidos políticos de izquierda, en concreto el Partido Comunista Peruano (PCP) y, más importante, la Alianza Popular Revolucionaria América (APRA), definió radicalmente la escena política peruana.[3] Ninguno de estos partidos logró alcanzar el poder en el contexto aparentemente favorable de la crisis política que golpeó al país al término de los siete años de gobierno de Augusto B. Leguía en

1930. Sin embargo, los gobiernos de Sánchez Cerro (quien dirigió la insurrección militar que depuso a Leguía y en las elecciones de 1931 derrotó al candidato del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre) y Óscar Benavides (quien estableció una dictadura [1933-1939] después del asesinato de Sánchez Cerro por un simpatizante del APRA) se preocuparon y, de hecho, se enfocaron prioritariamente en contener a las fuerzas sociales (la fuerza laboral urbana, los trabajadores de las industrias de exportación y algunos sectores de la emergente clase media) por las que el PCP y el APRA contendían para representar y liderar. De acuerdo con varios investigadores, la contención del APRA, y del PCP en menor grado, emprendida por una alianza entre los militares y la oligarquía, siguió moldeando y, al parecer, definió la política peruana hasta el golpe militar de 1968 por el general Juan Velasco Alvarado (1968-1975). En este capítulo, no cuestionamos esas historiografías; sin embargo, pretendemos hacer hincapié en un aspecto de esos amplios procesos que no ha recibido la atención que merece: los desarrollos del manejo económico y social del Estado en el contexto de la Gran Depresión.[4]

Argumentamos que la crisis generó las condiciones favorables para el establecimiento de instituciones cuya función fue manejar la economía sin alterar en lo fundamental su orientación principal y atender las cuestiones sociales sin poner en riesgo las estructuras de dominio social imperantes. Estos desarrollos en los ámbitos económico y social tuvieron claros antecedentes, sobre todo en los años veinte durante el régimen autoritario de Leguía. No obstante, la crisis aceleró cambios tanto en la concepción del Estado (de hecho, sobre la idea de un Estado como forma de poder) como en su capacidad para intervenir en la economía y la sociedad. Perú se recuperó de la Depresión mediante una serie de instituciones económicas, como el banco central autónomo, el papel moneda y los bancos de desarrollo creados para proporcionar créditos a los sectores agrícola, industrial y minero que consolidaron el poder económico de las élites. De la misma manera, el poder político de las élites se fortaleció con la aparición de una serie de instituciones sociales, como viviendas para los obreros, cocinas populares a cargo del gobierno y una caja de seguro social obrero, destinadas a neutralizar la influencia de las políticas radicales en los obreros urbanos y de las industrias de exportación. Es importante destacar que dichas instituciones no sólo reflejaron la creencia entre la élite de que el Estado debía disciplinar a los actores sociales rebeldes, sino que también ayudaron a la población a “mejorar”, o más bien, a ciertos sectores específicos de la población. Al final de este capítulo analizamos brevemente cómo dichos desarrollos ayudaron de manera implícita, y en ocasiones explícitamente, al fortalecimiento de una visión racial de las fuentes de “progreso” y “retroceso” en Perú.

Las repercusiones económicas de la Gran Depresión

El efecto económico de la Gran Depresión en Perú necesita compararse con los desarrollos

del país en décadas anteriores, en particular con la de 1920.[5] El periodo de reconstrucción que siguió a la Guerra del Pacífico (1879-1884), y en especial el de la guerra civil de 1895, se caracterizaron por la creación de una economía abierta centrada en la exportación de productos básicos. A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, las exportaciones peruanas fueron altamente diversificadas: azúcar, algodón, caucho, lana, petróleo y metales (en especial cobre, pero también plata y oro), junto con otros productos como café y cocaína. Estos sectores exportadores, que nutrieron la expansión de la economía sostenida durante las primeras décadas del siglo XX, normalmente se vincularon con economías regionales específicas: azúcar y algodón en la costa; lana principalmente en las montañas del sur; caucho en el Amazonas; petróleo en el extremo norte del país y metales en las montañas del centro. Hasta la década de 1910, el valor de retorno de las exportaciones fue relativamente alto.[6] Gracias en parte a la creciente disponibilidad de nuevas fuentes crediticias (en su mayor parte capital mercantil, principalmente británico, estadunidense y alemán), una élite económica abierta y capaz de diversificarse, formada por peruanos y empresarios inmigrantes recién arribados al país (italianos en particular), comenzó a invertir las ganancias del mercado de exportación en nuevos sectores como el financiero y bancario y el naciente sector industrial, con las industrias textil y de alimentos procesados en primer lugar.[7]

En las décadas siguientes, como han demostrado convincentemente Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram, el índice relativo de precios y la privatización de los sectores de exportación minero y petrolero redujeron el valor de retorno de las exportaciones y desaceleraron e incluso revirtieron el proceso de industrialización del periodo anterior. Las exportaciones agrícolas, como algodón, azúcar y lana, que habían predominado en el volumen de las exportaciones y estaban en su mayoría en manos peruanas, fueron desplazadas por las exportaciones mineras, en particular cobre y petróleo, aunque también plomo y cinc, recursos que normalmente se encontraban en manos extranjeras, principalmente estadunidenses, aunque el algodón mantuvo un sitio fundamental en la economía debido al enorme número de productores que tenía el país. Este proceso se dio a la par de la creciente influencia de los Estados Unidos como fuente de capital, en cartera y directo, y como socio comercial; también por la decreciente influencia de otras economías de mercado fundamentales, en especial la británica.[8] Durante el régimen autoritario de Augusto B. Leguía (19191930), la fuerte reducción del retorno de valor del sector exportador, en particular, coincidió con un igualmente fuerte aumento del endeudamiento gubernamental en los mercados financieros internacionales. Entre 1920 y 1928, la deuda externa fue de 105 millones de dólares. Gran parte de este capital se invirtió en grandes proyectos de infraestructura, como construcción de carreteras, irrigación y modernización urbana, generalmente a cargo de compañías estadunidenses, por lo que en cierto modo, en palabras de Paul Drake, “los préstamos de los Estados Unidos se utilizaban para pagar a compañías de los Estados Unidos”.[9] No obstante,

una cantidad significativa se desvió a través de las redes de corrupción que giraban en torno a Leguía y su familia, mientras que los proyectos de infraestructura por lo general fueron mal planeados y rara vez concluidos.[10] Asimismo, en la segunda mitad de la década de 1920, una proporción considerable de los préstamos externos se destinó al pago del servicio de la deuda.[11]

Leguía declaró que tenía como objetivo, nada más y nada menos, reconstruir a la nación y forjar una "Patria Nueva". La ideología de esta Patria Nueva compartía muchas de las suposiciones y propuestas de otros proyectos similares de "modernización autoritaria" en América Latina, como el Porfiriato en México.[12] Igual que esos otros proyectos, la Patria Nueva se caracterizó por una expansión nominal de la capacidad del Estado (tanto en términos cognitivos como coercitivos, como se reflejó, entre otras cosas, en el aumento exponencial del número de empleados públicos entre 1920 y 1930, y en el establecimiento de una fuerza policial "moderna"), aunque también de la idea misma de Estado, en concreto, de los ámbitos considerados susceptibles a la intervención y el diseño de éste: económico, administrativo, social, cultural, etc.[13] Por ejemplo, una de las características fundamentales del régimen de Leguía fue la creciente centralización del poder político y económico en Lima, con lo que se eliminaron los niveles de representación a nivel local y regional. Otra fue la compleja relación entre los sectores ejecutivos y los subordinados, como el indígena y el sindical, caracterizados por una combinación de institucionalización —mediante el establecimiento de dependencias de gobierno como la Sección del Trabajo y la Sección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Fomento, que supuestamente debían promover los intereses de los subordinados y de una constitución (1920) que reconocía y garantizaba a los trabajadores y los indígenas una serie de derechos sociales y económicos particulares— y represión, que fue selectiva pero sistemática (con algunas excepciones notables, como en el contexto de los levantamientos campesinos en el sur del país a principios de la década de 1920), que fue encomendada a la nueva fuerza policial.[14] Si bien Leguía destinó considerables recursos a las fuerzas armadas, a las que pretendía "modernizar", como ocurrió en tantos otros países, también supo apartar a los militares bajo el pretexto de solucionar la disputa territorial con Chile por las provincias del sur de Tacna y Arica surgida a raíz de la Guerra del Pacífico.[15]

La expansión del aparato estatal bajo Leguía reflejó el creciente número de agentes económicos y sociales que los burócratas estatales debieron enfrentar. Como sugiere Drake, bajo el régimen autoritario de Leguía, "la articulación del Estado respondió a la creciente necesidad de lidiar con el capital extranjero, el crecimiento económico, la urbanización y las nacientes clases medias y trabajadoras".[16] Sin embargo, estos desarrollos en las funciones del Estado tuvieron una genealogía más larga, y más compleja, y correspondieron a desarrollos transnacionales que conectaron al Perú de principios del siglo XX con corrientes y procesos ideológicos de formación del Estado en la mayor parte del mundo. Como ha demostrado Daniel T. Rodgers en su estudio magistral *Atlantic Crossings*, el proceso por medio del cual

las contradicciones del capitalismo propiciaron una creciente intervención del Estado en la economía y la sociedad fue un proceso transnacional que vinculaba inherentemente las economías del Atlántico Norte de finales del siglo XIX y principios del XX[17] y que, evidentemente, no se circunscribió sólo a dichas economías. Durante este periodo, en América Latina también surgieron nuevas ideas sobre el Estado y la sociedad moldeadas por corrientes ideológicas particulares, entre ellas el catolicismo social y el positivismo, que cuestionaron algunas de las ideas liberales dominantes del siglo XIX y crearon nuevas áreas para la intervención del Estado.[18] En el caso de Perú, dichos desarrollos se distinguen claramente desde la década de 1880, cuando economistas políticos tales como Luis Esteves, como ha demostrado Paul Gootenberg, comenzaron a argumentar en favor de un mayor involucramiento del Estado en la economía y de la promoción de la industria como una opción a la dependencia del país en las exportaciones de guano.[19] En resumen, la "expansión" del Estado bajo Leguía se entiende mejor como la consolidación de una idea particular del Estado y su papel, con una larga y amplia genealogía, en el manejo económico y social y, a su vez, como una reacción a las demandas crecientes de varios agentes económicos y sociales.

Los historiadores disienten sobre el grado en el que las políticas de Leguía realmente transformaron a la sociedad peruana durante los años veinte. Pero la mayoría reconoce que sus pecados de comisión y omisión generaron antagonismos en diversos frentes. Sus detractores se unieron momentáneamente a fines de 1930 para destituirlo. La "revolución" que derrocó al régimen, dirigida por un joven comandante del ejército, Luis Sánchez Cerro, originada en Arequipa, fue respaldada por las élites provinciales y ganó de inmediato un amplio apoyo popular. Fue un golpe de Estado sin derramamiento de sangre. Nadie intentó defender al viejo régimen. El manifiesto promulgado por los revolucionarios atacaba al régimen de Leguía por su corrupción y "tiranía", su centralismo y sus políticas económicas, que comprometían la independencia económica del país. El nuevo líder, un mestizo, se volvió un héroe popular casi de inmediato, y muy pronto logró consolidar su popularidad a través de una serie de medidas. Estableció un tribunal especial, el Tribunal de Sanción Nacional, para llevar a juicio a reconocidos compinches de Leguía y a supuestos servidores públicos corruptos.[20] Tres semanas después de asumir el poder, ordenó la distribución de raciones de comida para los pobres de la ciudad en las estaciones de policía. La abolición de la Ley de Conscripción Vial contribuyó a aumentar la popularidad de Sánchez Cerro, particularmente en las provincias. El régimen de Leguía había creado esa ley con el fin de proporcionar mano de obra barata para proyectos de construcción, en especial de caminos. Muchos se opusieron a la ley argumentando que contribuía a fomentar un sistema de trabajos forzados. Aunque éste no fue siempre el caso, su abolición fue ampliamente bienvenida.[21]

La crisis fue sólo uno de los factores de la caída de Leguía, como se sugiere arriba. Fue transmitida a Perú a través de la dramática caída del valor del dólar en sus exportaciones, de 132 millones de dólares en 1929 a 38 millones en 1932. Las exportaciones de minerales, en

volumen y valor, fueron particularmente afectadas como consecuencia del drástico descenso de los precios internacionales: los precios del cobre, el plomo y el cinc cayeron a menos de la mitad entre 1929 y 1933. A los precios de las exportaciones agrícolas, como el azúcar y el algodón, no les fue mejor.[22] Como tal, el efecto de la crisis se resintió principalmente en aquellos sectores de la economía que habían experimentado un crecimiento considerable en los 30 años anteriores impulsados por la demanda de productos básicos, y que habían establecido exitosamente, aunque de manera gradual, fuerzas laborales estables (formadas en su mayoría por migrantes de la sierra que se trasladaron a la costa), como lo demostraban las haciendas azucareras costeras, las minas de sierra central y los campos petroleros del norte. Cayaltí, una hacienda azucarera en Lambayeque "fue transformada de un campo de trabajo a una comunidad de familias, más grande que la mayoría de los pueblos de ese departamento", y su fuerza de trabajo aumentó de 900 trabajadores en 1896 a 1 421 en 1932.[23] Las contrataciones en la mina Cerro de Pasco, propiedad estadunidense, se duplicaron de 7 840 mineros en 1920 a 13 000 en 1929. No se trataba de simples campos de trabajo: los trabajadores contratados por las compañías formaban un porcentaje relativamente pequeño de la población total. Un censo de 1932 de los campos petroleros de Talara y Negritos revela que de una población total de alrededor de 19 000 habitantes, los trabajadores del petróleo representaban tan sólo 17%. Sus familias contabilizaban cerca de la mitad de la población de esos campos. Los comerciantes y un grupo de "gente ajena" (llegados de fuera) representaban otro 22%.[24] En 1923, el número de personas no trabajadoras en Cayaltí (principalmente mujeres y niños) representaba cerca de 57% de la población total.[25] El crecimiento de esos nuevos centros de población alteró los patrones de asentamiento que databan del periodo colonial, caracterizados principalmente por ciudades "blancas" y haciendas y pueblos indígenas, que todavía fueron notorias en el censo de 1876.[26]

Igual que los enclaves de exportación de la costa norte y la sierra central (que, en ciertos aspectos, no fueron nada por el estilo), Lima y, en menor grado, algunas ciudades de la provincia experimentaron una rápida expansión y un considerable crecimiento demográfico bajo el estímulo de la economía de exportación.[27] Para la década de 1930, la capital había adquirido el aspecto de una metrópoli moderna, con nuevos y fastuosos bulevares, fábricas y anchas avenidas recorridas por tranvías, taxis y autobuses. Entre los rasgos más notorios de la ciudad estaba la naciente fuerza trabajadora urbana, diferente tanto de la élite como de una creciente clase media de empleados gubernamentales y particulares.[28] La migración interna, estimulada por las políticas de construcción de caminos de Leguía en los años veinte, fue la principal responsable por el volumen del crecimiento demográfico en las ciudades y sobre todo por el espectacular crecimiento de Lima. Entre 1919 y 1931, 65 000 "provincianos" se instalaron en la capital del país. Aunque las ciudades provinciales también crecieron durante ese periodo a raíz de la migración del interior de sus regiones, fueron a su vez fuentes de migración hacia Lima. Como ejemplo, entre 1876 y 1916, la población de Arequipa aumentó

de 33 000 a 48 000 habitantes. Sin embargo, en la década de 1920, Arequipa, junto con los departamentos de Junín, Ayacucho y Ancash, fueron la fuente de 80% de todos los migrantes llegados a Lima. Aunque esta cifra aplica al departamento de Arequipa, no a la ciudad, lo cual no deja de ser sugerente. La migración no fue un fenómeno estrictamente rural-urbano, pues los habitantes de las ciudades de las provincias fueron en gran medida responsables de la migración hacia Lima durante los años veinte.[29]

A la par del crecimiento de las ciudades, los trabajadores comenzaron a representar una proporción cada vez más alta de la población urbana total. En 1931 Lima tenía alrededor de 110 000 obreros, en comparación con sólo 66 000 en 1920. Mientras que los obreros contabilizaron 58% del total de la población trabajadora de la ciudad, en 1931 esa cifra aumentó a 68%.[30] Aunque no existe esa misma información sobre las principales ciudades de provincia, queda claro que mientras Cuzco, Arequipa o Trujillo no experimentaron el mismo grado de crecimiento que la capital, también fueron afectadas por esos procesos y adquirieron una fuerza laboral urbana considerable. Si bien un número cada vez mayor de trabajadores urbanos laboraba en las nuevas fábricas (las textiles en particular) y en los sectores del transporte (ferrocarriles, tranvías, taxis y autobuses), a principios de los años treinta la mayor parte de la población urbana de Perú seguía desempeñando trabajos no industriales, como el servicio doméstico (14% de la fuerza trabajadora urbana de Lima en 1931), sastres y costureras (11%) y la construcción (8%). En Lima había también alrededor de 1 314 vendedores de mercados y 253 vendedores de lotería, dos ejemplos de trabajos poco calificados que formaban la columna vertebral de la economía urbana. El centro de trabajo urbano, por lo tanto, no fue la fábrica sino más bien los talleres artesanales, o incluso más comúnmente los hogares y las calles.[31]

Los trabajadores de los sectores exportadores y de las ciudades fueron golpeados severamente por la crisis, pues los empresarios despidieron a una parte de su fuerza laboral e intentaron recortar los salarios. Pero también fueron afectadas las clases medias de Perú, para las que la crisis económica significó no sólo un deterioro de sus niveles de vida sino también, como argumenta David Parker, un descenso de estatus social, ya que cada vez fue más difícil para los dependientes de tiendas o los médicos mantener el tipo de comportamiento de clase, dependiente del consumo de bienes materiales y culturales, que constituía la diferencia básica con la clase trabajadora.[32] A diferencia de las crisis anteriores, cuando los trabajadores de la caña de azúcar o el sector minero que fueron despedidos pudieron ser reasimilados en la agricultura de subsistencia, en los años treinta esta opción ya no fue tan viable. Se calcula que en 1930 la población duplicaba la cifra arrojada por el censo nacional de 1876. El crecimiento demográfico estimado en los años treinta fue de entre 1.5 y 2% anual, una tasa de crecimiento que corresponde al inicio de la transición demográfica del país. La población total había alcanzado los cinco millones, equivalentes, de acuerdo con algunos estimados, a los niveles poblacionales máximos alcanzados antes de la catástrofe demográfica provocada

por la conquista española.[33] Dos terceras partes de la población se concentraban en la sierra, donde durante las primeras décadas del siglo XX el recurso de la tierra era cada vez más escaso, mientras que el trabajo aumentaba como consecuencia no sólo del cambio demográfico sino también por los conflictos por la tierra, en ocasiones violentos, entre los campesinos indígenas y las élites que buscaban producir para el mercado de exportación. Esto explica por qué se dificultó cada vez más la capacidad de los campesinos para combinar el trabajo en las áreas de productos de exportación con la agricultura de subsistencia que los había caracterizado durante las décadas anteriores y la mayor parte del siglo XIX.[34]

Como consecuencia, el desempleo en las ciudades y en los sectores de exportación se convirtió por primera vez en un importante problema social y político en el contexto de la crisis de los años treinta. No existen cifras del desempleo "nacional" de este periodo, pero la información existente sugiere una caída en los trabajadores del campo en el sector de la caña de azúcar de aproximadamente 26 000 en 1928 a 20 000 en 1932 (en Perú, el empleo en el sector cañero fue menos temporal que en cualquier otra parte del continente). El empleo obrero y administrativo en el sector minero cayó de 25 000 a 13 000 y de 3 000 a 1 000, respectivamente, en el mismo periodo.[35] Las cifras reunidas por la Junta Pro-Desocupados de Lima, una dependencia gubernamental establecida en 1931 cuyas funciones fueron proporcionar trabajo a los trabajadores desempleados, son meramente sugerentes, pues simplemente indican el número de trabajadores registrados en ésta. De acuerdo con la Junta, entre 1931 y 1934 fueron registrados alrededor de 22 151 trabajadores. De éstos, 9 230 eran de Lima, 1 380 de Junín, 1881 de Arequipa, 1 540 de Ancash y 355 de Cuzco.[36] Las cifras de desempleo arrojadas por el censo de Lima de 1931 han demostrado no ser confiables. De acuerdo con el censo, alrededor de 31 139 hombres de entre 14 y 69 años de edad, es decir 25% de la población trabajadora, estaban desempleados. Especialmente desfavorable resultó la situación de los trabajadores de la construcción, de los cuales 70% estaba desempleado. Resulta significativo que los trabajadores de industrias altamente sindicalizadas, como la textil, al parecer salieron mejor librados que los trabajadores industriales no sindicalizados. El desempleo en la industria textil con fuerte peso sindical, por ejemplo, se mantuvo en 12%.[37]

La evidencia anecdótica proporciona un cuadro más detallado sobre el desempleo a principios de los años treinta. Algunas empresas, como la International Petroleum Company (IPC) de Talara, inició los despidos relativamente pronto. El número de obreros empleados en la IPC cayó de alrededor de 4 000 en 1928 a 1 740 en 1932. Al contrario de los argumentos de observadores contemporáneos, como Edwin Kemerer, quien encabezó una "misión" estadunidense de expertos económicos para estabilizar la economía peruana, y algunos historiadores, existe evidencia de drásticos recortes salariales en algunos sectores, que en el caso de la IPC, de acuerdo con un estimado, sufrieron una caída promedio de 3.04 a 1.34 soles entre 1928 y 1931.[38] La mayoría de las compañías mineras y varias haciendas azucareras

simplemente cerró a la espera de tiempos mejores. El cierre de las minas de Cerro de Pasco en noviembre de 1930 tuvo efectos negativos tanto en las industrias relacionadas como en la economía regional. En el mismo mes, los Ferrocarriles Centrales, que transportaban el mineral producido por la compañía minera de Cerro de Pasco al puerto de Callao, redujeron su semana laboral a cuatro días, o 32 horas, y advirtieron que harían nuevos recortes en caso de no mejorar la situación.[39] Cuando Cerro de Pasco reinició sus operaciones a fines de 1931, impuso una nueva escala salarial. Algunos salarios sufrieron una reducción hasta de 40%. Los "enmaderadores", por ejemplo, vieron su salario reducirse de 5.50 a 4.00 soles. Los mineros reclamaron que su seguridad estaba siendo comprometida, pues la compañía se negaba a proporcionar ropa impermeable a los que trabajaban en las áreas húmedas y frías de la mina. Además, como uno de los trabajadores señaló, Cerro de Pasco ahora estaba contratando indios que trabajaban por cualquier salario que se les ofreciera y en las peores condiciones.[40] Los trabajadores que no aceptaban los nuevos salarios o las condiciones de trabajo eran despedidos.[41]

Lo anterior sugiere que la crisis creó condiciones favorables para el surgimiento de partidos políticos, como el PCP y el APRA, que afirmaban representar y buscaron guiar a los sectores de la población más afectados por el revés económico. En términos absolutos, los trabajadores urbanos y los de los sectores exportadores representaban una pequeña proporción de la gente trabajadora de Perú; la vasta mayoría eran campesinos de subsistencia que normalmente complementaban los ingresos derivados de una labor agrícola a baja escala con la producción artesanal y el comercio en muy pequeña escala. No obstante, los trabajadores urbanos y de los sectores exportadores (no más de 200 000 en un país de cinco millones de habitantes en 1930) cobraron importancia en la política y las políticas del Estado, desproporcionada en relación con su número. Esto se debió en parte al hecho de que dichos trabajadores, fundamentales para las industrias estratégicas de exportación y la producción industrial urbana, fueron lanzados al frente de la política con el surgimiento de los partidos políticos de izquierda en los años treinta.[42] También se debió a que las élites buscaron contener y manipular el peligro que estos partidos representaban para el orden establecido mediante la cooptación o incorporación de dichos trabajadores, neutralizando con ello la influencia de los partidos. Sin embargo, también contó el hecho de que dichos trabajadores fueron identificados, tanto por la élite como por las nuevas fuerzas políticas, como agentes del progreso nacional. Esto se debió a la identificación altamente racial de "el trabajador" como una categoría diferente de otro tipo de trabajadores de los indígenas y, por lo general, de manera implícita aunque también explícitamente.[43] Como se analiza a continuación, esta prominencia ayuda a explicar el enfoque particular adoptado en el manejo gubernamental de la sociedad en los años treinta.

En los meses siguientes a la caída del régimen de Leguía el país vivió un momento de libertad política sin precedentes que evolucionó en un grado de inconformismo social también sin precedentes, pues tanto los trabajadores urbanos como los trabajadores de los sectores exportadores emprendieron emplazamientos a huelga con el fin de resistir ante los crecientes intentos de los empresarios de transferir la crisis a su fuerza de trabajo. Bajo el liderazgo de Eudocio Ravines, el PCP emprendió una estrategia de franca confrontación contra el régimen de Sánchez Cerro, al que etiquetó como dictadura fascista, y buscó transferir esa confrontación a las disputas laborales en desarrollo. Gracias a su control de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), a la confederación del trabajo, y al trabajo de sus cuadros en los sindicatos, el PCP desempeñó un importante papel en la radicalización de varias huelgas, más notablemente en los campos mineros de la sierra central en noviembre de 1930 y durante la huelga general de mayo de 1931. A pesar de la eficaz represión de las protestas laborales por parte del gobierno, estas huelgas contribuyeron a crear un sentido generalizado de caos social.[44] En este contexto, los sectores de la élite que habían respaldado la insurrección de Sánchez Cerro en contra de Leguía comenzaron a retirar su apoyo (en particular las élites de las provincias, cuyo interés en revertir la centralización de la década anterior fue prácticamente ignorada por Sánchez Cerro), mientras que los sectores populares comenzaron también a expresar su creciente descontento por el fracaso del nuevo gobierno para contrarrestar los efectos de la crisis.

En marzo de 1931, Sánchez Cerro abandonó el cargo y fue remplazado por una junta provisional de gobierno encabezada por David Samanez Ocampo. Además de supervisar gran parte de la reestructuración económica y financiera que contribuyó a la rápida recuperación de la crisis, la junta de Samanez Ocampo desempeñó un papel decisivo en la organización de las primeras elecciones “populares” de Perú. A diferencia de las elecciones anteriores en el siglo, que habían sido disputadas entre partidos políticos que representaban fundamentalmente los intereses de los sectores de la élite o a los caudillos militares, en las elecciones de octubre de 1931 se enfrentaron dos movimientos políticos, el APRA de Haya de la Torre y la Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro; los dos partidos estuvieron respaldados por una “masa” electoral formada principalmente por los trabajadores urbanos y los sectores medios.[45] Cierto es que fue todavía una elección que excluía tanto a las mujeres como al grupo de la población indígena. No obstante, como lo demostraron las manifestaciones y los mítines previos a las elecciones en favor de uno u otro partido, el proceso electoral de 1931 inauguró una nueva época de política de masas populares en el Perú.[46] Sánchez Cerro ganó esas elecciones relativamente libres y justas, pero el APRA se rehusó a aceptar el resultado. Las tensiones entre los dos partidos se incrementaron después de las elecciones, pues el APRA quedó relegado a la clandestinidad, desde donde buscó derrocar al presidente mediante una serie de

conspiraciones y rebeliones. La represión del APRA por parte de Sánchez Cerro alcanzó su punto más alto en la ciudad norteña de Trujillo en 1932, cuando, después de una rebelión liderada por partidarios del APRA, las fuerzas armadas empezaron un bombardeo para después asesinar a un cuantioso número de militantes.[47] En 1933, en el contexto de un conflicto más amplio con Colombia sobre el puerto fluvial de Leticia que Perú había cedido, un militante del APRA asesinó a Sánchez Cerro. Su remplazo, Óscar Benavides, también militar, inicialmente siguió una política de acercamiento con el APRA, pero para 1934, y en particular después de su decisión de anular las elecciones de 1936, en las que el candidato respaldado por el APRA reclamó la victoria, su política de "paz y concordancia" cedió paso a la represión.

No es de sorprender que los historiadores tiendan a ver este periodo como el momento en el que se estableció el carácter de la "política" peruana del siglo XX, como tal hasta la década de 1960 y con ciertas variantes hasta la década de 1980; esto es, una política dominada por el conflicto entre el APRA por una parte y la oligarquía en alianza con los militares por la otra. Fue una política caracterizada por la represión sistemática, aunque selectiva, de la oposición política (que frecuentemente terminó en el exilio), combinada con intentos para neutralizar a los sectores populares que habían emergido en el curso de los años veinte y que demostraron su poder político en las elecciones de 1931 mediante políticas que los cooptaron o incorporaron. Dicho de otra manera, los historiadores han sido propensos a ver las políticas sociales adoptadas por los gobiernos de los años treinta —que discutiremos en la siguiente sección— como recursos políticos para debilitar a la oposición, principalmente al APRA. Existen ciertas dudas de que éste haya sido el propósito de esas políticas. No obstante, las políticas en sí, independientemente de su propósito, señalan algo que ha recibido muy escasa atención por parte de la mayoría de los historiadores: el hecho de que la Gran Depresión contribuyó a un cambio significativo en la concepción del papel del Estado en relación con lo social y, más específicamente, en cuanto a las ideas dentro de los ámbitos sociales susceptibles a la gestión del Estado. Por supuesto, como ya hemos señalado, estas ideas ya se encontraban presentes antes de los años treinta; son evidentes en los años veinte y desde antes; sin embargo, como señalamos más adelante, se fueron volviendo cada vez más dominantes: formaron parte integral de la ideología aprista y de su programa político, pero también del proyecto de gobierno de Sánchez Cerro y, muy particularmente, del de Benavides.

Manejo de la economía por parte del Estado

Antes de estudiar de qué manera la Depresión mundial contribuyó a los cambios en el manejo de lo social por parte del Estado, vale la pena examinar cambios similares, aunque quizá más discretos, en la esfera económica. Como señalamos antes, a través del déficit en la balanza de pagos, la crisis mundial alcanzó a economías como la peruana, especializada en la exportación

de productos básicos y cuyas finanzas públicas dependían de estas exportaciones y de préstamos de los bancos estadunidenses. La situación de la reducción de la entrada de divisas como consecuencia de la caída de las exportaciones y la falta de nuevos préstamos se vio agravada con la salida de capital (ya que los inversionistas extranjeros repatriaron sus capitales) y las presiones de los bancos extranjeros que exigían a Perú el pronto pago de su deuda externa. En marzo de 1931, igual que en muchos otros países latinoamericanos, el gobierno peruano suspendió el pago de la deuda como una medida de emergencia para enfrentar la balanza de pagos deficitaria. Esta decisión fue tomada mientras que la misión de Kemmerer, que había recomendado continuar con los pagos del servicio de la deuda, se encontraba en el Perú, lo que puede verse como una clara demostración, o al menos como un intento de reafirmar la autonomía frente a los acreedores internacionales y, discutiblemente, a los Estados Unidos (aunque, como señaló Carlos Díaz Alejandro hace algunos años en el estudio de las políticas en el contexto de la Gran Depresión, existe el riesgo de atribuir autonomía a "una serie de acciones improvisadas más o menos forzadas por las circunstancias, y cuya lógica puede ser más clara *ex post* que en el momento de su adopción").[48] Perú no reinició el pago de su servicio de deuda internacional sino hasta después de la segunda Guerra Mundial. Esta situación obligó a los gobiernos peruanos de los años treinta a otorgar facilidades de crédito interno y nuevas fuentes de ingresos fiscales que remplazaron el capital que antes se obtenía a través de los mercados crediticios internacionales.

En general, igual que Colombia, Perú no intentó encontrar una salida a la crisis económica, como otros países de la región, y sin embargo, lo logró. El gasto público se redujo significativamente tras el derrumbe de Wall Street, e incluso en 1937 permaneció por debajo del nivel de 1928 en términos monetarios.[49] Los incrementos aislados en el gasto público, como el realizado por Sánchez Cerro con las reservas del país para pagar a burócratas y militares, o durante el conflicto fronterizo de Leticia con Colombia, no fueron concebidos como políticas proactivas para reactivar la recuperación económica de Perú.[50] Por el contrario, la recuperación de Perú, lograda en términos del PIB en 1934, se alcanzó principalmente gracias al sector exportador, con el algodón en particular, aunque también con minerales como plomo, cinc y en especial oro, cuyos precios se vieron beneficiados después de 1932, cuando los países, entre ellos el Perú, se vieron obligados a abandonar el patrón oro. Como indicamos en la introducción de este capítulo, Perú fue más pasivo que reactivo en términos políticos, y la estructura económica del país a fines de los años treinta no fue muy distinta de la de principios de los años veinte. No obstante, los gobiernos peruanos de los años treinta, como veremos más adelante, implementaron medidas políticas sociales que reflejaron una acción transnacional más amplia para aumentar el manejo gubernamental de la economía y la sociedad, una estrategia común entre sistemas políticos divergentes, e incluso opuestos, como el *New Deal* de Roosevelt, la Italia fascista de Mussolini y la Unión Soviética de Stalin. Algunas de esas medidas fueron consecuencia de las recomendaciones de la misión económica

encabezada por Ewin Kemmerer, que tuvo como objetivo el mantenimiento, o la reafirmación, de la ortodoxia económica en la región andina.[51] Sin embargo, hubo otras medidas interesantes contrarias a las recomendaciones de Kemmerer.

Durante gran parte del siglo XIX y las primeras décadas del XX, Perú mantuvo "una carga tributaria excepcionalmente baja", como lo han sugerido Thorp y Bertram.[52] Los gobiernos peruanos de principios del siglo XX incrementaron modestamente su sistema tributario y dependieron de éste para sus ingresos en los momentos en que escasearon otras fuentes de ingresos fiscales, o bien, cuando se disparó el gasto público de la Patria Nueva de Leguía. Bajo el régimen de Leguía, los ingresos tributarios directos e indirectos aumentaron 129% entre 1919 y 1929, pues la estrategia de financiamiento de la deuda fue incapaz de generar capital suficiente para cubrir el crecimiento de la burocracia estatal y el pago del servicio de la deuda y las obras públicas.[53] En el contexto de la crisis mundial, la junta de Samanez Ocampo introdujo un nuevo tributo temporal "pro desocupados". Se estableció mediante pequeños incrementos de uno o dos puntos porcentuales a los impuestos existentes, como los de exportación e importación, los impuestos sobre las ganancias comerciales y los capitales móviles, e incrementos más significativos de 10 a 25 puntos porcentuales a los impuestos en el consumo de tabaco y el registro de automóviles. Se financió también a través de nuevos gravámenes a los juegos de apuestas y los salarios que excedían los 200 soles mensuales.[54] Este impuesto temporal, que generó nuevos ingresos sustanciales para el gobierno y supuestamente debía durar hasta el 31 de diciembre de 1931, se mantuvo hasta el fin de la segunda Guerra Mundial. Cuando finalmente fue suprimido, se mantuvieron algunos gravámenes como parte de los impuestos sobre la renta.[55]

Con el fin de legitimar el nuevo gravamen, los recursos procedentes del impuesto de desempleo no fueron manejados por el gobierno, sino por las Juntas Pro-Desocupados creadas en cada unidad de administración territorial o departamento (brevemente analizado antes). Las juntas debían estar integradas por personas respetables (a la cabeza de la junta de Lima estaba el historiador y político conservador José de la Riva Agüero) designadas por el gobierno como aliados después de la caída del régimen de Leguía. Estas juntas debían emprender una serie de obras públicas, como la construcción de escuelas, prisiones, carreteras, puentes, obras hidráulicas y de drenaje, viviendas para los trabajadores, mercados y proyectos menores de irrigación. Una entidad central, la Comisión Distribuidora, asignaba el presupuesto correspondiente a cada junta departamental. Algunas de estas juntas tuvieron a su disposición cantidades sustanciales de dinero. Los recursos de la junta de Lima entre 1931 y 1934 ascendían a alrededor de siete millones de soles, de los cuales se gastaron dos en caminos y puentes, 1.11 en hospitales y viviendas para trabajadores, 1.6 en pavimentación y sanidad, y 1.22 en la construcción de escuelas.[56] Las juntas también proporcionaban trabajo a los desempleados. Entre 1931 y 1934, en la junta de Lima se registraron 32 018 trabajadores que recibieron ayuda con trabajo en obras públicas.[57] Las juntas también proporcionaron

formas de solidaridad más inmediata. A finales de abril de 1933, la cocina popular de la junta de Lima alimentaba alrededor de 500 personas cada día.[58] Asimismo, la junta de Lima ayudó a un número considerable de provincianos que no tenían la posibilidad de encontrar trabajo en Lima a regresar a sus lugares de origen: 8 060 entre 1931 y 1934; 1 957 entre 1935 y 1936; 615 entre 1937 y 1938, y 836 entre 1939 y 1941.[59]

Estas juntas para el desempleo formaron parte de una estrategia más amplia para aplacar a los trabajadores, y en cierto grado para integrarlos al trabajo en un contexto en el que, como veremos más adelante, los partidos radicales de la izquierda que pretendían representar los intereses de la clase trabajadora urbana y de los trabajadores de las industrias de exportación al parecer estaban en ascenso.[60] También reflejaron tendencias transnacionales más generales determinadas por el nacionalismo y la xenofobia en los albores de la Depresión. Se aprobó una serie de leyes que beneficiaron a los trabajadores a expensas de empleadores y compañías extranjeras. La ley 7704 obligaba a las compañías mineras, la mayor parte en manos extranjeras, a depositar los jornales y salarios no pagados a los trabajadores en los últimos 10 años en una cuenta especial en la Caja de Depósitos y Consignaciones. Este dinero se destinó al establecimiento de asistencia social para los mineros. Otra ley, la 7519, obligaba a las compañías petroleras, también en su mayoría de propietarios extranjeros, a proporcionar educación gratuita a la población en sus campos y a contratar a maestros calificados, a quienes se les otorgaba el estatus de funcionarios.[61] La ley 7505 destaca entre las leyes aprobadas en ese periodo. Establecía dos disposiciones principales. Los establecimientos industriales y comerciales estaban obligados a contratar a una fuerza de trabajo constituida por 80% de ciudadanos peruanos. Además, los trabajadores debían recibir 80% de sus jornales y salarios totales. Por otra parte, la ley establecía un periodo vacacional de 15 días al año para los obreros. La ley se decretó en abril de 1932 y fue enmendada subsecuentemente en varias ocasiones. La primera parte apuntaba casi exclusivamente hacia los negocios chinos y japoneses, y pretendía ganar el respaldo de los artesanos y pequeños comerciantes, quienes eran los más afectados por lo que se consideraba una competencia asiática desleal en un contexto marcado por un creciente ambiente de xenofobia y racismo en contra de los asiáticos. Como el ministro británico señaló, “la legislación en realidad fue diseñada para evitar la infiltración japonesa en el Perú”.[62] En mayo de 1935, un comunicado de prensa informaba que la mayoría de los empresarios multados por el incumplimiento de esta ley eran japoneses o chinos.[63]

Además del aumento de impuestos, un segundo mecanismo utilizado por los gobiernos de la época de la Depresión para enfrentar la falta de acceso a fuentes crediticias externas fue el establecimiento de un sistema monetario basado en dinero fiduciario. Desde los tiempos de la Independencia, Perú había sido reacio a utilizar papel moneda, en particular después de su desastrosa experiencia de los años 1873-1888 que llevó a la bancarrota a un número considerable de personas. La adopción del patrón oro en 1897 se hizo con una masa monetaria

de oro y plata. Durante la primera Guerra Mundial comenzaron a circular los "cheques circulares" emitidos por bancos privados, que después de 1922 fueron remplazados por papel moneda emitido por el Banco de Reserva respaldado por el gobierno y creado en ese mismo año. A partir de ese momento se empezó a aceptar el papel moneda que dio a los gobiernos de la época de la Depresión cierto espacio de maniobra durante la crisis. De hecho, al principio de la crisis el gobierno declaró la inconvertibilidad al oro de esos billetes. Las recomendaciones de la misión de Kemmerer en relación con el servicio de la deuda fueron ignoradas; sin embargo, el gobierno peruano adoptó sus recomendaciones para la creación de un Banco Central de Reserva con mayor control estatal y de una Superintendencia de Bancos. Estas dos instituciones permitieron a los gobiernos subsiguientes a la Depresión determinar la cantidad de dinero circulante en la economía.[64]

Por último, los gobiernos de la época de la Depresión innovaron en lo que se refiere al crédito financiero. La bancarrota del Banco del Perú y Londres a raíz de la crisis económica mundial y el colapso del mercado internacional habían dejado a los agroexportadores de Perú con muy limitado acceso al crédito.[65] En agosto de 1931, la junta de Samanez Ocampo aprobó la creación del Banco Agrícola del Perú, cuya función fue otorgar créditos provenientes de los fondos disponibles del Banco Central de Reserva a los agroexportadores peruanos. La creación de este banco de desarrollo del Estado fue una medida de emergencia ante la inaccesibilidad al crédito en un contexto en el que existía el riesgo de perder la cosecha de algodón de 1932. No obstante, su creación tuvo implicaciones en el largo plazo para la agricultura costera.[66] Cinco años después, el gobierno de Benavides estableció el Banco Industrial del Perú con la intención de promover la producción industrial. Pocos años más tarde se estableció también el Banco Minero. Estos bancos de desarrollo sirvieron para canalizar préstamos a bajo interés, normalmente por debajo del índice inflacionario, a los sectores de la oligarquía. El Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Bancos y los bancos de desarrollo del gobierno fueron tres de los legados más importantes de la Gran Depresión en la esfera económica. Los bancos de desarrollo sobrevivieron hasta la década de 1990, cuando finalmente fueron eliminados por las reformas neoliberales de Alberto Fujimori. Su establecimiento no representó una desviación importante en términos de política económica. No correspondieron y ni siquiera fueron elementos menores de un cambio político hacia la industrialización por sustitución de importaciones, como ocurrió en otros países latinoamericanos; sin embargo, significaron un cambio en términos del manejo de la economía por parte del gobierno, logrando la expansión, de muchas maneras, de sectores de la economía considerados susceptibles a la intervención y promoción del Estado, así como a los mecanismos que permitieron al gobierno ejercer su influencia en otros sectores.

Manejo de lo social por parte del Estado

Los gobiernos de la época de la depresión mundial adoptaron también una serie de políticas sociales que de igual manera representaron un cambio en términos de las funciones del Estado. Entre esas medidas —que replicaron los desarrollos de Latinoamérica y, de hecho, de Europa y los Estados Unidos— estaban la creación de esquemas de trabajo para los desempleados (tema ya antes analizado), proyectos de viviendas para trabajadores y cocinas populares del gobierno que proporcionaban comida barata a los obreros, así como una nueva legislación laboral. Más importante aún, en 1936 el gobierno de Benavides creó un sistema de seguridad social para obreros. Como la historiografía sugiere, y de acuerdo con los argumentos de la crítica contemporánea sobre estas medidas, las políticas sociales de los gobiernos de Sánchez Cerro y de Benavides tuvieron claras intenciones políticas. Tanto el APRA como el PCP afirmaban que las políticas sociales gubernamentales eran estrategias veladas para debilitar la influencia política de sus partidos en el sindicalismo. El APRA, en particular, sostenía (con cierta justificación) que muchas de las políticas adoptadas por el gobierno de Benavides habían sido tomadas del programa electoral de 1931.[67] Es probable que el "préstamo" del gobierno del proyecto del APRA sea evidencia de la fuerza relativa de la alianza y la debilidad relativa del gobierno: ante lo poco que tenía el gobierno para ofrecer no podía sino recurrir a lo que proponía la oposición. No obstante, las ideas del proyecto del APRA fueron más ampliamente compartidas de lo que esta crítica del partido al gobierno podría sugerir.

Un discurso de Benavides pronunciado en marzo de 1939 quizás ayude a ilustrar algunas de las ideas que apuntalaban la política social de su régimen. Benavides comenzó destacando que el Perú atravesaba por un proceso de cambio que iba más allá del ámbito material: había ocurrido un cambio verdadero en el ámbito moral. Gracias a su intervención, el pesimismo, "nuestro más incurable mal", cedía el paso a un optimismo "fundado en la potencialidad de nuestras riquezas, de nuestra capacidad para explotarlas, en la fe profunda y cierta que conduce hoy al peruano hacia la gran realidad del Destino".[68] Una de las piedras angulares de este nuevo optimismo fue una nueva aproximación a los problemas sociales. Benavides sugería que quienes creían que las justas aspiraciones al bienestar y el mejoramiento de la clase trabajadora podrían posponerse indefinidamente o ser sólo en parte satisfechas eran cómplices del sectarismo (es decir, del APRA). Los problemas sociales, reflexionaba, estaban íntimamente ligados a cuestiones de seguridad y progreso. Aunque se aseguró de hacer hincapié en que quienes manipulaban las legítimas aspiraciones de la clase trabajadora por ambición personal no merecían sino el repudio, Benavides declaró:

> Dije una vez: "No sé, ni me interesa saber, si soy o no soy socialista. Pero soy, sobre todo, humano". Sin que esto deba interpretarse como una rectificación de mi propio pensamiento, quiero decir hoy que si socialismo es justicia social, elevada, comprensiva y amplia, dentro de Supremo interés de la Nación y la autoridad intangible de Estado, yo no sólo comparto estos principios; los he puesto en práctica, con profunda fe, en estos cinco años de gobierno. Y no con palabras vacías o fáciles promesas. Con leyes que rigen y forman ya parte inseparable de nuestra existencia colectiva, armonizando los legítimos intereses de todas las clases; con obras útiles y duraderas, cuya realidad no puede ser desmentida ni desfigurada ante mis conciudadanos.[69]

Si “la secta” (APRA) hubiese llegado al poder en su lugar, recalcó Benavides, ninguna de las acciones sociales que él había emprendido existiría y el Perú se habría hundido en el caos.

Si bien Benavides atribuía los logros del régimen a sus acciones personales, también destacaba la importancia del Estado en la consecución de lo que él daba en llamar “equilibrio social”. Sugería que el incremento de la riqueza a expensas del capital humano representaba una amenaza a la nación. Asimismo, un encarecimiento excesivo del trabajo reduciría la capacidad empresarial y desencadenaría la fuga de capitales, sumiendo al país en una crisis económica que provocaría un aumento en el desempleo. Gracias a sus vastos recursos naturales, el Perú podía aspirar a muchos siglos de prosperidad y creciente bienestar colectivo. Sin embargo, Benavides daba a entender que esta prosperidad sólo se podría alcanzar si la lucha de clases diera paso a la cooperación de clases. Nuevas fuentes de capital impulsarían el desarrollo de la industria y el comercio y crearían nuevas fuentes de trabajo. No obstante, la clave de la grandeza nacional residía en la protección del capital humano: “Con una clase laboriosa deficientemente alimentada, obligada a habitar en viviendas insalubres, sin posibilidad de dar instrucción a sus hijos, a la que la enfermedad condenaba a la miseria, y la invalidez y la ancianidad al más completo desamparo, no era posible crear ese estado de confianza, de fe, de permanente seguridad que es indispensable para el progreso de los pueblos”.[70] Benavides aseguraba que estos problemas sociales habían sido atendidos por la acción social del Estado a través de los restaurantes populares, los barrios obreros y la ley de seguridad social de 1936, entre otras medidas.[71] En términos más generales, el Estado había iniciado “una era de solidaridad entre las clases (…) infundiendo la conciencia de sus responsabilidades y de sus deberes frente a la Nación”.[72]

Esto confirma que el propósito de sus políticas fue combatir al APRA abordando los problemas que el trabajo urbano enfrentaba a causa de la Gran Depresión. No obstante, de igual importancia, las políticas en sí expresaban una nueva idea de “lo social” y del Estado. Esta idea es evidente en la Constitución de 1933, de manera particular en los artículos relacionados con el trabajo, donde se reproducían y desarrollaban los aspectos principales de la Constitución de 1920.[73] De tal manera, el artículo 46 establecía el poder del Estado para legislar sobre la organización y la “seguridad general” del trabajo industrial, la duración de la jornada de trabajo y el establecimiento del salario mínimo. Los artículos 48, 49 y 50 señalaban el papel del Estado como garante de la salud pública y proveedor de seguridad social, decretando que “La ley establecerá un régimen de previsión de las consecuencias económicas de la desocupación, edad, enfermedad, invalidez y muerte, y fomentará las instituciones de solidaridad social, los establecimientos de ahorros y de seguros, y las cooperativas”, y otorgaba al Estado el poder de “abaratar” las subsistencias. Aunque la Constitución de 1933 no mencionaba el arbitraje obligatorio en las disputas laborales (un aspecto de la Constitución de 1920), no obstante incluía toda una serie de innovaciones. El artículo 43, posiblemente inspirado en la Carta del Lavoro italiana de 1927, de corte

gerencial, establecía que el Estado legislaría sobre los contratos colectivos de trabajo, aunque el artículo 44 prohibía la inclusión en los contratos colectivos de cualquier restricción a los derechos civiles, políticos y sociales. Por último, el artículo 45, posiblemente basado en el artículo 123 de la Constitución Mexicana de 1917, establecía que el Estado favorecería el sistema de participación en las utilidades para los trabajadores.[74]

Aunque el APRA y los gobiernos de la época de la Depresión de Sánchez Cerro y Benavides se encontraron claramente en polos opuestos del espectro político, compartieron en grado considerable un entendimiento común sobre el papel de "lo social" y del Estado. La Constitución de 1933, en cuya redacción participaron congresistas del APRA, contenía y reflejaba las ideas expresadas por Benavides en su discurso: la necesidad de proteger el "capital humano" —término usado por el presidente—, con el fin de impulsar el "progreso de las naciones"; una nueva manera de concebir "lo social" y su atención por parte del Estado, y una acción gubernamental que cada vez se consideraba más necesaria. Estas ideas, evidentemente, existían antes de la Gran Depresión: se encuentran en la Constitución de 1920, en la sustancia ideológica que subyace en algunas de las políticas perseguidas por Leguía, y en una serie de tratados y tesis sobre cuestiones sociales que comenzaron a aparecer en el Perú de fines del siglo XIX. Pero la Gran Depresión, tanto en el Perú como en otros países, contribuyó a establecer el creciente consenso sobre el papel que el Estado debía asumir desde ese momento en adelante en el manejo y la regulación de "lo social". Esto implicaba también un entendimiento particular de aquellos sectores de la población considerados como susceptibles a la regulación y la administración del Estado, puesto que "lo social" se limitaba en términos estrictos a los sectores "modernos" de la sociedad peruana, como la clase trabajadora urbana, los trabajadores de las industrias de exportación y los sectores medios emergentes, y excluía a la mayoría indígena de la población de Perú.[75]

CONCLUSIONES

En resumen, en este capítulo no hemos hecho un cuestionamiento de los puntos de vista dominantes de la historiografía en cuanto a la continuidad económica y el cambio político propiciados por la repercusión de la Gran Depresión en el Perú. Hemos argumentado, no obstante, que la crisis contribuyó de formas importantes y claramente discernibles a la consolidación de los desarrollos de las funciones del Estado que, asimismo, reflejaron procesos ideológicos transnacionales más amplios que vincularon al Perú con otros países de la región y de otras partes del mundo, y, a su vez, ofrecieron respuestas a las circunstancias económicas y políticas peruanas en particular (como la necesidad de encontrar nuevas fuentes crediticias para el sector exportador, o de hacer frente a la amenaza que las nuevas fuerzas políticas de izquierda significaban para el orden social establecido). Dichos desarrollos en la

construcción del Estado, tanto en el ámbito económico como en el social, ayudaron por una parte a fortalecer a las élites y al poder económico y político que obtenían a través de la economía peruana impulsada por las exportaciones y, por otra parte, a consolidar todavía más esa orientación económica exportadora del país. Asimismo, ayudaron también a fortalecer la idea, que formó la base del proyecto poscolonial de construcción nacional, de que las fuentes del "progreso" de Perú, e incluso del carácter "nacional" peruano predominante, no se encontraban en las montañas ni entre la población indígena mayoritaria del país, sino en la costa (y sus anexos mineros) y entre las minorías de blancos y mestizos. Si bien esta idea fue constantemente cuestionada a lo largo del siglo XX por diferentes actores sociales, indígenas y no indígenas, y por los intelectuales indigenistas, ha demostrado ser resistente y, en muchas formas, sigue alimentando los proyectos de construcción del Perú actual.

[*] Los autores deseamos agradecer a dos lectores anónimos y a Rory Miller por sus comentarios a una versión preliminar de este capítulo.

[1] Rosemary Thorp y Carlos Londoño, "The Effect of the Great Depression on the Economies of Peru and Colombia", en Rosemary Thorp (ed.), *Latin America in the 1930s: The Role of the Periphery in the World Crisis,* Macmillan, Londres, 1984. Véase también Heraclio Bonilla (ed.), *Las crisis económicas en la historia del Perú,* Centro Latinoamericano de Historia Económica y Social / Fundación Friedrich Ebert, Lima, 1986.

[2] Carlos Díaz Alejandro, "Latin America in the 1930s", en Thorp, *Latin America in the 1930s*, *op. cit.*, pp. 23-25.

[3] Aníbal Quijano, "El Perú en la crisis de los años treinta", en Pablo González Casanova (ed.), *América Latina en los años treinta,* Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1977; Julio Cotler, *Clases, Estado y nación en el Perú,* 1978, reimpresión, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1992; Steve Stein, *Populism in Peru: The Emergence of the Masses and the Politics of Social Control,* University of Wisconsin Press, Madison, 1980.

[4] Al invocar la idea de "manejo" económico y social del Estado, hacemos referencia a una bibliografía muy abundante que trata sobre la formación del Estado y sigue dos vertientes generales: la institucionalista (cuyos orígenes se remontan hasta Weber) y la culturalista (influida por el trabajo de Foucault sobre el poder del Estado o la soberanía y la gubernamentabilidad). El argumento general es que, a diferencia del periodo anterior, cuando el Estado se centró principalmente en sus funciones de orden público e intervino sólo marginalmente en la economía y la sociedad, hacia los años veinte el Estado peruano había comenzado a expandir sus funciones y desempeñar un papel más directo en la formación de la economía y la sociedad. A saber, el Estado, bajo la forma de burocracia o de proyectos de infraestructura dirigidos por el gobierno, ya antes había experimentado fases de expansión bajo los gobiernos de Castilla (décadas de 1840 y 1860), Pardo (decenio de 1870) y Piérola (década de 1890). Sin embargo, el crecimiento del Estado en los años veinte fue cuantitativa y cualitativamente distinto, reflejando una nueva *idea* del Estado como el actor principal en el manejo de la economía y "lo social". Éste fue un proceso transnacional que se desarrolló de manera particular en el caso de Perú, como mostramos en este capítulo. Para un análisis de esa bibliografía, véase Paulo Drinot, *The Allure of Labor: Workers, Race and the Making of the Peruvian State,* Duke University Press, Durham, 2011, pp. 7-11.

[5] Algunas partes de este capítulo se basan en el ensayo de Paulo Drinot, "O advento do social: política, Estado e a Grande Depressao no Peru", en Flavio Limoncic y Francisco Palomanes Martinho (eds.), *A Grande Depressão: Política e economia na década de 1930-Europa, Américas e Asia,* Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2009, pp. 143-170.

[6] Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram, *Peru 1890-1977: Growth and Policy in an Open Economy,* MacMillan, Londres, 1978. Véase también Paulo Drinot, "Peru, 1884-1930: A Beggar Sitting on a Bench of Gold?", en Enrique Cárdenas, José Antonio Ocampo y Rosemary Thorp (eds.), *An Economic History of Twentieth-Century Latin America,* vol. 1. *The Export Age: The Latin American Economies in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries,* Palgrave, Basingstoke, 2000, pp. 152-187.

[7] Thorp y Bertram, *Peru 1890-1977, op. cit.;* Alfonso W. Quiroz, *Banqueros en conflicto: Estructura financiera y economía peruana, 1884-1930,* Universidad del Pacífico, Lima, 1989.

[8] Thorp y Bertram, *Peru 1890-1977, op. cit.* Véase también varios capítulos del estudio de Rory Miller, *Empresas británicas, economía y política en el Perú,* Banco Central de Reserva / Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2011.

[9] Paul W. Drake, *The Money Doctor in the Andes: The Kemmerer Missions 1923-1933,* Duke University Press, Durham, 1989, p. 216. Sobre las inversiones de los Estados Unidos en el periodo de Leguía y en los años treinta, véase F. O'Brien, *The Revolutionary Mission: American Enterprise in Latin America, 1900-1945,* Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 109-159. Véase también Baltazar Caravedo Molinari, *Clases, lucha política y gobierno en el Perú (1919-1933),* Retama Editorial, Lima, 1977.

[10] Thorp y Bertram, *Peru 1890-1977…, op. cit.,* p. 115. Véase también Alfonso W. Quiroz, *Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Peru,* Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2008, pp. 229-244.

[11] Roxanne Cheesman, "La crisis de 1929 y la reactivación", en Bonilla, *Las crisis económicas…, op. cit.,* p. 267.

[12] El arquitecto intelectual de "Patria Nueva" fue el filósofo Mariano Cornejo, miembro de una generación de académicos influidos por el positivismo y en particular por las enseñanzas de Javier Pardo en la Universidad de San Marcos. El término "Patria Nueva" indicaba la ruptura con la llamada República Aristocrática, 1895-1919, caracterizada por el gobierno del Partido Civil. Reflejaba el surgimiento de nuevos sectores sociales, en particular las clases medias y trabajadoras, pero también un número creciente de profesionales en puestos de influencia dentro de la sociedad y el Estado, y la idea de que dichos sectores conducirían al Perú en una dirección diferente. Sobre estos procesos, véase, entre otros, Manuel Burga y

Alberto Flores Galindo, *Apogeo y crisis de la República Aristocrática: Oligarquía, aprismo y comunismo en el Perú, 18951932,* Ediciones Rikchay Perú, Lima, 1980.

[13] Drake, *Money Doctor in the Andes…, op. cit.,* p. 221.

[14] Sobre levantamientos campesinos, véase Alberto Flores Galindo, *In Search of an Inca: Identity and Utopia in the Andes,* Cambridge University Press, Cambridge, 2010, cap. 8.

[15] Sobre los militares, véase Víctor Villanueva, *Ejército peruano: del caudillaje anárquico al militarismo reformista,* Editorial Juan Mejía Baca, Lima, 1973.

[16] Drake, *Money Doctor in the Andes…, op. cit.,* p. 220.

[17] Daniel T. Rodgers, *Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age,* Harvard University Press, Cambridge, 1998.

[18] Cuestiones como la influencia del catolicismo social en la construcción del Estado y, en particular, las formas en que Estados como el peruano abordaron la problemática social a principios del siglo XX no han recibido la atención necesaria. El pensamiento social católico europeo, desarrollado a partir del *Rerum Novarum* de León XIII de 1892, tuvo influencia en intelectuales peruanos como Andrés Belaúnde. Como en Europa y otras partes de América Latina donde la cuestión social se había convertido en un tema central del momento, Belaúnde y otros argumentaron en favor de un tercer camino entre el capitalismo y el marxismo (aunque en el Perú el catolicismo social se enfocó no sólo en los trabajadores urbanos, como ocurrió, digamos, en Argentina, sino también en la población indígena) que habría abordado los excesos del capitalismo y ayudado a prevenir una revolución social; de tal manera argumentaron en favor de una participación más activa del Estado en lo social. Dichos argumentos, como señalamos más adelante, son claramente identificables en las justificaciones discursivas de las políticas sociales implementadas por los gobiernos de los años treinta, en particular las de Benavides (19331939); no obstante, el grado de influencia directa del catolicismo social en Benavides y sus consejeros requiere ser estudiado más a fondo. Sobre el catolicismo social, véase Ricardo Cubas Ramaciotti, "The Politics of Religion and the Rise of Social Catholicism in Peru (1884-1935)", tesis de doctorado, Cambridge University, 2011. Véase también Drinot, *The Allure of Labor…, op. cit.,* pp. 22-24.

[19] Paul Gootenberg, *Imagining Development: Economic Ideas in Peru's 'Fictitious Prosperity' of Guano,* University of California Press, Berkeley, 1993.

[20] Felipe Portocarrero Suárez y Luis Camacho, "Impulsos moralizadores: el caso del Tribunal de Sanción Nacional 1930-1931", en Felipe Portocarrero Suárez (ed.), *El pacto infame: estudios sobre la corrupción en el Perú,* Red de Ciencias Sociales, Lima, 2005, pp. 35-73, y Quiroz, *Corrupt Circles…, op. cit.,* pp. 238-246.

[21] Stein, *Populism in Peru…, op. cit.* La Ley de Conscripción Vial (1920) obligaba a todos los hombres de entre 18 y 60 años de edad a trabajar en la construcción de carreteras en sus provincias. A los hombres de entre 18 y 21, y 50 y 60 años de edad les exigía trabajar una semana al año, mientras que los que tenían entre 21 y 49 debían trabajar dos semanas anuales. Existía la posibilidad de ser eximidos de estos trabajos mediante el pago del salario que habrían debido recibir. De hecho, esto convirtió a la ley en un impuesto para los trabajadores urbanos y mestizos y una forma de tributo para los indígenas. La escasez de mano de obra, que en Perú fue una constante a principios del siglo XX, explica el motivo de la introducción de la ley. En 1930 era fácil revocar la ley, pues con la crisis la escasez de mano de obra desapareció. Véase Nelson Pereyra Chávez, "Los campesinos y la conscripción vial", en Carlos Contreras y Manuel Glave (eds.), *Estado y mercado en la historia del Perú,* Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, pp. 334-350.

[22] Carlos Contreras, "La crisis mundial de 1929 y la economía peruana", en Óscar Dancourt y Felix Jimenez (eds.), *Crisis internacional: Impactos y respuestas de política económica en el Perú,* PUCP, Lima, 2009, pp. 30-35.

[23] Michael Gonzales, *Plantation Agriculture and Social Control in Northern Peru, 1875-1933,* University of Texas Press, Austin, 1985, pp. 147.

[24] AGN/MI/325/Fomento, Prefectura de Piura, Censo de los campamentos, 30 de junio, 1932.

[25] Gonzales, *Plantation Agriculture and Social Control…, op. cit.,* p. 148.

[26] De hecho, los historiadores han demostrado que la idea de ciudades "blancas" es en gran parte un mito que expresa cómo los grupos urbanos no blancos se vuelven invisibles en las representaciones de la ciudad. Véase, entre otros, Jesús Cosamalón Aguilar, *Indios detrás de la muralla,* Fondo Editorial PUCP, Lima, 1999.

[27] La idea de la agroexportación o de unidades de producción de minerales, como los estados cañeros de la costa norte de Perú o las minas de Cerro de Pasco, desvinculados de las economías locales, regionales e incluso nacionales, tuvo la influencia de la historia económica de América Latina en el contexto de los enfoques inspirados en la teoría de la

dependencia, no obstante, las invesigaciones emprendidas por varios académicos han demostrado que estas unidades desarrollaron vínculos significativos y estimularon la actividad económica local y más general. Véase, entre otros, Peter Klarén, *Modernization, Dislocation and Aprismo: Origins of the Peruvian Aprista Party, 18701932*, University of Texas Press, Austin, 1973; Gonzales, *Plantation Agriculture and Social Control…*, *op. cit.*

[28] Sobre el crecimiento urbano de Lima en este periodo, véase Augusto Ruiz Zevallos, *La multitud, las subsistencias y el trabajo: Lima: 1890-1920*, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2001, y Juan Carlos Callirgos, "Reinventing the City of Kings: Postcolonial Modernizations of Lima, 18451930", tesis de doctorado, University of Florida, 2005.

[29] Stein, *Populism in Peru…*, *op. cit.*, p. 65.

[30] Stein, *Populism in Peru…*, *op. cit.*, p. 70.

[31] Wilma Derpich, José Luis Huiza y Cecilia Israel, *Lima años 30, salarios y costo de vida de la clase trabajadora*, Fundación Friedrich Ebert, Lima, 1985, pp. 14-15.

[32] David S. Parker, *The Idea of the Middle Class: White-Collar Workers and Peruvian Society, 1900-1950*, Penn State University Press, University Park, 1998.

[33] Noble David Cook, *Demographic Collapse: Indian Peru 1520-1620*, Cambridge University Press, Cambridge, 1981.

[34] El proceso estuvo sujeto a variaciones regionales. En el sur del altiplano, como Nils Jacobsen ha demostrado, la crisis del sector exportador de lana a principios de los años veinte frenó la expansión de las haciendas y, como consecuencia, provocó un cambio en el equilibrio del poder entre los terratenientes y los campesinos indígenas. Por el contrario, en las montañas del norte y en el centro, y en la costa donde los campesinos migraron en busca de trabajo, existe evidencia de un proceso de acelerada proletarización en los años treinta conforme los campesinos se fueron volviendo cada vez más dependientes para su subsistencia de los sectores exportadores minero y azucarero. Véase, entre otros, Nils Jacobsen, *Mirages of Transition: The Peruvian Altiplano, 17801930*, University of California Press, Berkeley, 1993; Florencia Mallon, *The Defense of Community in Peru's Central Highlands, 1860-1940*, Princeton University Press, Princeton, 1983; Gavin Smith, *Livelihood and Resistance: Peasants and the Politics of Land in Peru*, University of California Press, Berkeley, 1989; Gonzales, *Plantation Agriculture and Social Control…*, *op. cit.;* Carmen Diana Deere, *Household and Class Relations: Peasant and Landlords in Northern Peru*, University of California Press, Berkeley, 1992; Vincent Peloso, *Peasants on Plantations: Subaltern Strategies of Labor and Resistance in the Pisco Valley, Peru*, Duke University Press, Durham, 1999.

[35] Contreras, "La crisis mundial…", *op. cit.* p. 36.

[36] Perú, Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social, *Boletín de Trabajo y Previsión Social*, año 1, núm. 1, Lima, 1935, s. p.

[37] Stein, *Populism in Peru…*, *op. cit.*, 80. Como Derpich, Huiza e Israel han argumentado, el conteo realizado por los censistas fue particularmente deficiente, no se tomó en cuenta a las mujeres y, como los propios censistas reconocieron, muchos de los que se declararon desempleados, como empleados de gobierno y del sector privado, habían encontrado trabajo en otras áreas, como vendedores o trabajadores manuales. Además, muchos de los trabajadores considerados como desempleados en el censo trabajaban en industrias donde el trabajo era irregular o temporal, como la construcción. Huiza e Israel, *Lima años 30…*, *op. cit.*, pp. 32-35.

[38] Diana Dávila Apolo, "Talara, los petroleros, y la huelga de 1931", tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1976, p. 158; Humberto Núñez Borja, *Legislación social peruana*, Tipografía Cuadros, Arequipa, 1934, pp. 300-301. Sobre salarios, véase Thorp y Londoño, "Effect of the Great Depression…", *op. cit.*, p. 102, y Contreras, "La crisis mundial…", *op. cit.*, p. 38.

[39] PC / B4 / 19ª de la Peruvian Corporation (Lima) al Director de Obras Públicas y Vías de Comunicación, 26 de noviembre, 1930.

[40] Como Drinot ha sugerido, los "trabajadores" y los "indios" fueron categorías inconmensurables en el Perú de principios del siglo XX. Si bien su fenotipo tal vez no fue muy diferente del de los indios contratados para remplazarlos, los trabajadores se veían a sí mismos, y eran vistos por sus patronos, como no indígenas en virtud de su estatus de trabajadores. Véase Drinot, *The Allure of Labor, op. cit.*, cap. 1.

[41] *La Tribuna*, 8 y 13 de diciembre, 1931.

[42] Charles Bergquist ha estudiado este desarrollo en detalle en cuatro casos sudamericanos. Véase Charles Bergquist, *Labor in Latin America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela and Colombia*, Stanford University Press, Stanford, 1986.

[43] Drinot, *The Allure of Labor…*, *op. cit.*

[44] Sobre las huelgas en las montañas del centro, véase Alberto Flores Galindo, *Los mineros de Cerro de Pasco, 1900-1930,* en *Obras completas,* vol. 1, SUR, Lima, 1993; Mallon, *Defense of Community…*, *op. cit.* Sobre huelgas en Lima, véase Alan Dawson, "Politics and the Labour Movement in Lima, 19191931", tesis de doctorado, University of Cambridge, 1981.

[45] Vale la pena notar, no obstante, la creciente literatura que hace hincapié en la participación popular en la política antes de la década de 1930. Véase, entre otros, Carmen McEvoy, *La utopía republicana: Ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana (1871-1919),* Fondo PUCP, Lima, 1997, e Íñigo García-Bryce, *Crafting the Republic: Lima's Artisans and Nation Building in Peru, 1821-1879,* University of New Mexico Press, Albuquerque, 2004.

[46] Stein, *Populism in Peru…*, *op. cit.*

[47] Margarita Giesecke, *La insurrección de Trujillo: jueves 7 de julio de 1932,* Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, 2010. Véase también ÍñigoGarcíaBryce, "A Revolution Remembered, a Revolution Forgotten: The 1932 Aprista Insurrection in Trujillo, Peru", *A Contracorriente* 7, núm. 3 (2010), pp. 277-322.

[48] Díaz Alejandro, "Latin America in the 1930s…", *op. cit.,* p. 23.

[49] Thorp y Londoño, "Effect of the Great Depression…", *op. cit.*

[50] Drake, *Money Doctor in the Andes…*, *op. cit.,* p. 245.

[51] *Idem.*

[52] Thorp y Bertram, *Peru 1890-1977…*, *op. cit.,* p. 127.

[53] Cheesman, "La crisis de 1929…", *op. cit.,* p. 267.

[54] Decreto Ley 7103 del 10 de abril de 1931, *Anuario de la Legislación Peruana,* tomo XXV, 1930-1931.

[55] Sobre la política fiscal a fines del siglo XIX y principios del XX, véase Carlos Contreras, *La economía pública en el Perú después del guano y del salitre: Crisis fiscal y élites económicas durante su primer siglo independiente,* Banco Central de Reserva / Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2012.

[56] FO 371 / 18720, Forbes a Simon, 25 de abril, 1935.

[57] *Memoria de la Junta Departamental de Lima Pro-Desocupados, 1942, 1943 y 1944,* Tipografía Peruana, Lima, 1946, s. p.

[58] *El Comercio,* 5 de abril, 1933.

[59] *Memoria al 31 de diciembre de 1934 de la Junta Departamental de Lima Pro-Desocupados,* Imprenta Torres Aguirre, Lima, 1935, xxv; *Memoria de la Junta Departamental de Lima Pro-Desocupados, 1935-1936,* Imprenta Torres Aguirre, Lima, 1937, p. xix; *Memoria de la Junta Departamental de Lima ProDesocupados, 1937-1938,* Sanmartí, Lima, 1939, p. xxiv; *Memoria de la Junta Departamental de Lima Pro-Desocupados, 1939, 1940 y 1941,* Empresa Gráfica T. Scheuch, Lima, 1943, p. 23.

[60] Fuera de Lima, sin embargo, las juntas operaban de formas algo diferentes, como lo muestra David Nugent en Chachapoyas. Véase *Modernity at the Edge of Empire: State, Individual, and Nation in the Northern Peruvian Andes, 1885-1935,* Stanford University Press, Stanford, 1997, pp. 284-285.

[61] Pedro Ugarteche, *Sánchez Cerro: Papeles y recuerdos de un presidente del Perú,* vol. 4, Editorial Universitaria, Lima, 1969, pp. 58-59, 62-64. El efecto de esta última medida no está claro y depende de si tomamos como ciertas las versiones que describen a las escuelas de los campos como muy superiores a las del resto del país, o bien las que las retratan como poco más que pocilgas, como se afirmaba en el periódico del APRA *La Tribuna,* y en otros diarios de la oposición.

[62] FO 371/17819, Las negociaciones comerciales con Perú, Resumen del caso del Reino Unido, p. 249.

[63] FO 371/18724, Forbes a Simon, 18 de marzo, 1935. Las modificaciones subsiguientes a la ley en gran medida buscaron sofocar las protestas de los intereses comerciales extranjeros no asiáticos, y en julio de 1934 se introdujo un artículo para exentar a los "especialistas expertos" de las previsiones de la ley. Queda claro en los documentos de la Peruvian Corporation que las compañías extranjeras (normalmente estadunidenses y británicas) se unieron para presionar al gobierno para que modificara la formulación original de la ley, que de ser aplicada al pie de la letra, en su opinión, socavaría gravemente sus intereses. Los diplomáticos japoneses también ejercieron presión considerable en contra de la ley del 80%, y las modificaciones a la ley también se hicieron para favorecer los intereses japoneses. Véase PC/B3/43, borrador de una carta que habría de ser firmada por "comerciantes británicos y representantes de los intereses británicos establecidos en el Perú" y dirigida al ministro británico en Lima, 31 de enero, 1933; Balfour a Cecil, 28 de mayo, 1932.

[64] Véase Antonio Zapata, "Control, tributos y supervisión bancaria: Historia económica e institucional', en Carlos Contreras, Cristina Mazzeo y Francisco Quiroz (eds.), *Guerra, finanzas y regiones en la historia económica del Perú*, Banco Central de Reserva/Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2010, pp. 373-410.

[65] Sobre el Banco del Perú y Londres, véase Alfonso W. Quiroz, *Banqueros en conflicto: Estructura financiera y economía peruana, 1884-1930*, Universidad del Pacífico, Lima, 1989.

[66] Agradecemos a Rory Miller por plantear esta cuestión.

[67] Sobre las propuestas del APRA, véase Robert J. Alexander, *Aprismo: The Ideas and Doctrine of Víctor Raúl Haya de la Torre*, Kent State University Press, Kent, 1973; Stein, *Populism in Peru…*, *op. cit.*, y Heraclio Bonilla y Paul W. Drake (eds.), *El APRA de la ideología a la praxis*, Nuevo Mundo, Lima, 1989.

[68] *El general Benavides a la nación, mensaje del 25 de marzo de 1939*, Oficina de Informaciones del Perú, Lima, 1939, p. 4.

[69] *El general Benavides…*, *op. cit.*, p. 55.

[70] *Ibid.*, pp. 56-57.

[71] Estas medidas se analizan a detalle en Drinot, *The Allure of Labor…*, *op. cit.*

[72] *El general Benavides…*, *op. cit.*, p. 57.

[73] La Constitución de 1933 y el congreso constitutivo que la creó son el tema de Carmen Rosa Balbi y Laura Madalengoitia, *Parlamento y lucha política: Perú 1932*, DESCO, Lima, 1980.

[74] "Constitución Política del Perú (29 de marzo de 1933)", <http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1933.pdf>.

[75] Este punto es analizado ampliamente en Drinot, *The Allure of Labor…*, *op. cit.*

V. EL PROTECCIONISMO EXPORTADOR Y LA GRAN DEPRESIÓN

Compañías multinacionales, élite doméstica y políticas de exportación de Colombia[*]

MARCELO BUCHELI
LUIS FELIPE SÁENZ

LOS ESTUDIOS académicos de la globalización en el siglo XX han señalado a la primera Guerra Mundial y la Gran Depresión como los sucesos que marcaron el fin del sistema económico de *laissez-faire* y su gradual remplazo por un proteccionismo de la producción interna.[1] En la esfera política, se ha argumentado que los efectos de la Gran Depresión abrieron las puertas a los gobiernos nacionalistas y populistas que, orillados por la incertidumbre de los mercados internacionales y las decisiones de las potencias mundiales, buscaron la independencia económica y política de sus países.[2] Las interpretaciones tradicionales del caso latinoamericano no difieren mayormente. El ampliamente aceptado paradigma desarrollado por investigadores de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en la década de 1960 afirma que la Gran Depresión terminó abruptamente con la economía *laissez-faire* en el continente, abriendo las puertas al sistema proteccionista que permitió alcanzar la recuperación económica a través de un proceso de industrialización por sustitución de importaciones.[3] Asimismo, muchos autores afirman que la Gran Depresión reactivó las fuerzas sociales y políticas que condujeron al surgimiento de un populismo nacionalista en la mayor parte del continente, manifestado, entre otras cosas, en políticas que aumentaron el control doméstico de la economía y redujeron el poder de las empresas multinacionales extranjeras.[4] Varios historiadores económicos han cuestionado la interpretación de la CEPAL argumentando que los gobiernos de América Latina ya habían comenzado a desarrollar mecanismos proteccionistas años antes de la Gran Depresión, en particular después de la crisis de las exportaciones generada por la primera Guerra Mundial.[5] De hecho, afirman que la recuperación de los años treinta y la subsiguiente industrialización fueron resultado del fortalecimiento y la recuperación del sector exportador.[6]

Este capítulo busca contribuir a los debates existentes sobre los efectos de la Gran Depresión en las economías nacionales mediante el desarrollo del concepto de

proteccionismo exportador. Definimos este término como una serie de políticas establecidas por un gobierno para intervenir activamente en la economía con el fin de proteger a las principales industrias de exportación del país. Las políticas de proteccionismo exportador pueden ser consecuencia del cabildeo de una industria de exportación determinada o un grupo de ellas, de presiones sobre el gobierno por actores domésticos o extranjeros involucrados en la industria de exportación, o como parte de un programa político a cargo de un gobierno o gobernante que desea favorecer a un sector determinado del electorado cuyas fuentes de empleo, bienestar o riqueza dependen del destino de un sector exportador específico. Consideramos el proteccionismo exportador como un modelo nacionalista que no entra en conflicto con el proteccionismo a las importaciones. De hecho, las dos políticas pueden ir de la mano y beneficiarse recíprocamente. Por ejemplo, una política de devaluación de la moneda nacional en relación con las extranjeras beneficia tanto a los productores orientados a los mercados internacionales como a aquellos que orientan sus actividades al mercado interno.

Este capítulo estudia la evolución de las políticas dirigidas al sector exportador de Colombia entre 1922 y 1934. Hemos elegido Colombia porque, contrario a lo ocurrido en otros países de América Latina, la Gran Depresión no hizo surgir en ese país un gobierno populista que emprendiera la expropiación de las propiedades extranjeras.[7] A lo largo de la mayor parte del siglo XX, Colombia conservó un sólido sistema bipartidista electoral que no dejó espacio para otras fuerzas políticas ni ideologías económicas alternas.[8] Al término de la Guerra de los Mil Días (1899-1902) entre los liberales federalistas *laissezfaire* y los conservadores centralistas proteccionistas, con el triunfo final de éstos últimos, Colombia se consolidó como un país altamente centralizado con un fuerte intervencionismo económico del gobierno.[9]

Observamos que el gobierno colombiano mantuvo una continua política de proteccionismo exportador antes y después de la irrupción de la Gran Depresión. El principal efecto de la Gran Depresión fue profundizar e institucionalizar el modelo proteccionista exportador existente. Durante ese periodo, el café, el petróleo y el banano constituyeron el grueso de las exportaciones colombianas, con predominio del café sobre los otros dos. Igual a lo ocurrido en otros países de América Latina, las exportaciones desempeñaron un papel importante en lograr que los efectos de la Gran Depresión en Colombia fuesen breves y de poca repercusión.[10] Mientras que en los años veinte las exportaciones se consideraron como el motor principal para el crecimiento, después de 1929 el gobierno las consideró el motor fundamental para la recuperación, por lo que orientó sus políticas en esa dirección. Esto explica la consistencia del gobierno para mantener el modelo proteccionista exportador antes y después del inicio de la Gran Depresión.

Una política proteccionista exportadora consistente no significa que el gobierno se haya comportado de la misma manera con todos los sectores exportadores. Observamos que en el sector cafetalero la política se tradujo en la creación de una creciente relación simbiótica

entre el Estado colombiano y los productores de café; en el sector del petróleo pasó de una actitud hostil con el capital extranjero a un cambio gradual hacia una relación amistosa, y en el sector bananero se manifestó en una política de apoyo continuo a los inversionistas extranjeros.

Argumentamos que la adopción de un enfoque distinto por el gobierno colombiano hacia las exportaciones de café, petróleo y banano obedeció a una combinación de dos factores: *1)* las barreras de entrada tecnológica que enfrentó la burguesía en cada una de estas industrias y *2)* la capacidad de cada una de esas industrias para desarrollar mecanismos de acción colectiva para defender sus intereses. La industria del café tuvo barreras de entrada muy bajas que permitieron a la burguesía controlar la producción. Además, la burguesía cafetalera desarrolló una organización muy eficiente para defender sus intereses, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNCC), encabezada por personas de gran influencia con vínculos cercanos al gobierno y a otras industrias. Las barreras de entrada de la industria bananera fueron mayores que las del café. Los cultivadores locales no tuvieron la capacidad para invertir en las plantaciones y en la infraestructura de transportación, cuya solución corrió a cargo de la empresa estadunidense United Fruit Company (UFC).[11] Gracias a esa inversión, los productores domésticos fueron proveedores confiables para la UFC. A lo largo del periodo que estudiamos, los cultivadores colombianos hicieron intentos para desarrollar mecanismos de acción colectiva para reducir el enorme poder de la UFC, pero por su relativa debilidad económica y política en el ámbito nacional fracasaron en sus esfuerzos por influir en la política nacional. Por último, la industria del petróleo tuvo las mayores barreras de entrada de todos los sectores. Antes de la década de 1960, los únicos actores con la capacidad y los medios para hacer las inversiones necesarias en la exploración y producción petrolera fueron las compañías multinacionales.[12] Por carecer de esta capacidad, en la Colombia de los años veinte la burguesía nacional y el Estado no tuvieron otra opción sino abrirse a la participación de compañías extranjeras, caso opuesto al de las industrias del café y el banano, por lo que la participación doméstica en esta industria fue mínima. Para esa década, la principal multinacional petrolera que operaba en Colombia fue la Standard Oil Company de New Jersey (SONJ).[13] En estas circunstancias, el único papel al que la élite local pudo aspirar en esta industria fue el de especuladores de tierras, de trabajadores calificados, o como cabilderos en el gobierno local.[14] El principal mecanismo desarrollado por las compañías petroleras estadunidenses para influir en la política fue recurrir al apoyo del Departamento de Estado y aprovechar su influencia en los círculos financieros internacionales. Si bien esta estrategia rindió frutos, tuvo sus riesgos, pues despertaba los sentimientos nacionalistas y ponía en peligro los derechos de propiedad de las compañías petroleras. La limitada presencia de la burguesía doméstica en el sector y las estrategias empleadas por las compañías petroleras explican por qué en los años veinte el gobierno no cesó en su intento de reducir el control económico de las compañías petroleras en el sector. El cambio del gobierno y la burguesía de

Colombia hacia una relación más amistosa después de 1930 fue consecuencia del interés en mantener activo al sector del petróleo. La nueva élite industrial también estuvo interesada en obtener fuentes de energía barata, sin importar quién la produjera.

CUADRO V.1. *Propiedad, barreras de entrada, mecanismos de acción colectiva y políticas gubernamentales en las industrias del café, el banano y el petróleo en Colombia (1910-1934)*

Industria	*Tipo de propiedad*	*Barreras de entrada*	*Mecanismo de acción colectiva*	*Proteccionismo exportador*
Café	Doméstica	Bajas	Asociación nacional	Relación simbiótica
Banano	Extranjera con proveedores domésticos	Intermedias	Asociación regional	Apoyo al capital extranjero
Petróleo	Extranjera	Altas	Diplomacia; presión financiera	Hostilidad hacia los inversionistas extranjeros (1919-1929); apoyos al capital extranjero (1930-1934)

En resumen, si bien las políticas dirigidas a cada uno de los principales sectores exportadores colombianos difirieron, todas fueron consistentes con una política general de proteccionismo exportador, en el que el gobierno intervino de manera activa para maximizar la producción sin importar a quién correspondieran los derechos de propiedad. El cuadro V.1 muestra los puntos generales analizados en este capítulo.

Las características políticas de Colombia hacen de ese país un caso interesante. Contrario a lo ocurrido en otros países latinoamericanos, Colombia no experimentó un incremento serio del populismo antes ni después de la Gran Depresión.[15] Esto suele explicarse como consecuencia de un poder sólido de los dos principales partidos tradicionales (Liberal y Conservador) y por su éxito en utilizar métodos clientelares para conservar el poder. Durante la mayor parte del siglo XX (en particular durante el periodo estudiado), no hubo diferencias sustanciales entre liberales y conservadores en cuanto a la economía política y, por lo mismo, los dos partidos compartieron una visión común en materia de política económica.[16]

Nuestro estudio hace las siguientes contribuciones al tema. Primero, mediante la introducción del concepto de *proteccionismo exportador* deseamos aportar un nuevo enfoque

a los estudios sobre economía política para entender la política económica. Como lo demuestra este capítulo, la política económica durante la Gran Depresión fue más allá de la dicotomía entre la economía de *laissez-faire* y el proteccionismo de la sustitución de importaciones. Segundo, hasta donde sabemos, ningún historiador ha hecho una comparación sistemática de esos tres sectores de Colombia. El argumento utilizado para justificar esta omisión es simple: por ser el café de propiedad nacional y mucho más importante que el banano y el petróleo, la política económica se enfocó en ese sector.[17] No negamos que el peso relativo del café en la economía haya movido al gobierno a considerarlo como el producto más importante; sin embargo, esto no explica las diferentes estrategias seguidas en cada sector para influir en la política económica, como tampoco explica por qué si el banano y el petróleo estaban en manos de extranjeros, el gobierno siguió dos enfoques distintos para cada uno de esos sectores. Asimismo, si bien las exportaciones de banano y petróleo fueron menos importantes que la del café, aun así representaron un nada despreciable 20% del total en un país que basaba su desarrollo económico en la exportación de productos básicos. Varios estudios han demostrado también que durante el periodo estudiado existió un acalorado debate político e intelectual sobre las políticas a seguir en cada uno de esos sectores, debate que desempeñó un papel central en las cruciales elecciones presidenciales de 1930.[18] Tercero, nuestra comparación contribuye a los estudios sobre los mecanismos de acción colectiva en América Latina.[19] En estudios anteriores se ha hecho un análisis de la FNCC bajo el marco teórico desarrollado por Mancur Olson.[20] De hecho, el propio Olson señaló a la FNCC como un caso de prueba para su teoría sobre la acción colectiva.[21] Una comparación de las iniciativas de acción colectiva en la industria del café con las de los sectores del petróleo y el banano nos ofrece un contrapunto para entender a las industrias que carecieron de ese tipo de organización.

Proteccionismo exportador y choques externos en Colombia

Los historiadores económicos argumentan que el intervencionismo económico del gobierno colombiano no comenzó con la Gran Depresión, sino que tuvo una larga historia que se remonta a la época colonial.[22] La legitimación y consolidación del intervencionismo económico posterior a la Independencia como paradigma aceptado, no obstante, vinieron después de la conmoción causada por la Guerra de los Mil Días. En ese sangriento conflicto, los conservadores centralistas y de tendencias católicas que favorecían al proteccionismo derrotaron a los liberales federalistas, seculares y partidarios del libre mercado en una guerra que dejó en ruinas la infraestructura y la economía del país.[23] Ansioso por recuperar la economía cuanto antes, el gobierno conservador se esforzó en promover las exportaciones de café y en abrir las puertas a las compañías extranjeras para invertir en otros sectores

exportadores (como el petrolero y el bananero) y en la infraestructura de transporte y comunicaciones, con la imposición simultánea de algunos aranceles para proteger la incipiente industria colombiana.[24] Después de la guerra, el café, el petróleo y el banano fueron las principales exportaciones colombianas (véase cuadro V.2).

El país sufrió una segunda conmoción con la primera Guerra Mundial, cuando la creciente importancia de la industria del café enfrentó una crisis y, a la vez, la caída de las importaciones provocada por la guerra condujo a un inesperado *boom* industrial en la ciudad de Medellín. La guerra también aumentó la conciencia de la élite nacional sobre la importancia estratégica internacional de la industria del petróleo y manifestó su preocupación sobre la dependencia del país en un solo producto de exportación y el subdesarrollo de sus instituciones económicas.[25] Durante los años veinte, el gobierno incrementó drásticamente su gasto en la infraestructura y modernización de la economía mediante el establecimiento del primer Banco Central del país en 1923.[26] Esto fue posible gracias a una bonanza de crédito barato en los mercados internacionales que incrementó el flujo de préstamo externo a Colombia de 24 millones de dólares en 1923 a 200 millones anuales en 1928, más el pago compensatorio de los Estados Unidos por la pérdida de Panamá de 25 millones de dólares.[27] El Banco Central siguió una política monetaria ortodoxa y se adhirió firmemente al patrón oro.[28] Los años veinte también vieron un incremento en la organización laboral y de la burguesía mediante el establecimiento de la FNCC en 1927.

El tercer efecto que acompañó a la Gran Depresión comenzó con lo que se ha definido como un "intervencionismo gubernamental moderno" en Colombia.[29] A lo largo de los años treinta el país adoptó nuevos mecanismos intervencionistas, como el establecimiento de instrumentos para regular las variables macroeconómicas, la creación de instituciones para la promoción de la industrialización manufacturera, y el fortalecimiento y la modernización de los sectores financiero y del servicio público.[30] En 1931 el país abandonó el patrón oro, lo que le permitió seguir una política monetaria más independiente y menos restrictiva.

CUADRO V.2. *Exportaciones colombianas de café, petróleo y banano en toneladas, pesos y porcentajes, 1920-1945*

	Café			Petróleo			Banano		
Año	Tonelaje bruto	Valor (miles de pesos actuales)	Tasa total de las exportaciones (%)	Tonelaje bruto	Valor (miles de pesos actuales)	Tasa total de las exportaciones (%)	Tonelaje bruto	Valor (miles de pesos actuales)	Tasa total de las exportaciones (%)
1922	105.869	36292	68.8				162.273	3572	6.8
1923	123.697	45089	74.8				170.395	3704	6.1
1924	132.950	68793	79.8				202.488	4459	5.2
1925	116.808	66524	78.4				221.369	5563	6.6
1926	147.257	85884	76.9	643.682	9437	8.4	238.820	5302	4.7
1927	141.391	70916	65.1	1874.96	22343	20.5	186.952	5475	5.0
1928	159.575	88171	66.0	2488.173	25809	19.3	223.684	8636	6.5
1929	170.147	76886	60.6	2577.203	27016	21.3	230.322	8850	7.0
1930	190.381	61654	54.4	2656.193	26292	23.2	226.078	8741	7.7
1931	182.015	55180	56.1	2375.601	15863	16.1	97.203	4858	4.9
1932	191.135	42910	61.1	2211.339	16329	23.3	133.552	6007	8.6
1933	199.610	49276	67.1	1695.363	9924	13.5	136.905	4908	6.7
1934	185.053	82459	54.1	2350.608	28162	18.5	144.030	6124	4.0
1935	226.134	79222	55.5	2278.647	29099	20.4	155.541	8939	6.3
1936	236.531	91968	58.3	2356.390	28269	17.9	159.684	8207	5.2
1937	250.670	99172	53.8	2546.437	35079	19.0	153.172	6983	3.8
1938	256.417	88775	54.4	2650.871	37206	22.8	195.241	8864	5.4

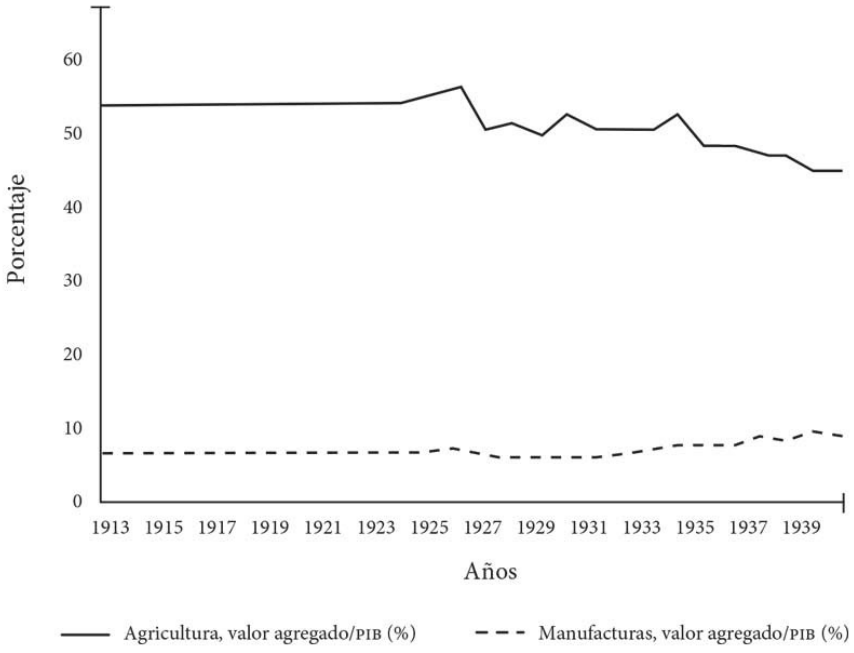
FUENTE: Armando Samper, *Importancia del café en el comercio exterior de Colombia*, FNCC, Bogotá, 1928.

CUADRO V.3. *Tasas de crecimiento para indicadores económicos agregados y sectoriales de Colombia, 1923-1936*

Año	Producto doméstico bruto (%)	Consumo privado (%)	Inversión (%)	Agricultura y minería (%)	Industria y manufacturas (%)	Construcción (%)
1925	5.3					
1926	10.0	6.0	24.0	13.0	10.0	100.0
1927	8.2	3.8	18.5	1.8	–1.8	1.0
1928	7.6	0.0	22.4	9.6	0.9	60.9
1929	3.9	8.2	–15.6	1.6	3.7	–24.3
1930	–0.8	–8.4	–34.9	4.7	–5.3	–33.7
1931	–1.5	3.7	–18.2	–5.2	–1.9	–14.7
1932	6.2	–2.7	42.0	4.7	14.3	2.9
1933	5.8	20.0	–17.4	4.5	16.7	23.8
1934	6.2	15.9	0.0	3.6	6.4	–10.2
1935	2.6	–3.3	18.9	1.4	10.1	27.0
1936	5.0	4.1	8.0	6.2	9.1	6.9

FUENTE: Cálculo hecho con datos de Andrés Fernández, "Essays on Business Cycles in Emerging Economies", tesis de doctorado, Rutgers University, 2010, p.41.

CUADRO V.1. *Colombia, porcentaje de participación del valor agrícola y manufacturero al PIB, 1913-1940*



FUENTE: Montevideo-Oxford Latin American Economic History Database <http://oxlad.qed.ox.ac.uk>, consultado el 9 de noviembre de 2011.

Los efectos de la Gran Depresión en la economía colombiana fueron relativamente suaves y breves en comparación con otros países, pero en el corto plazo fue un asunto serio.[31] En 1930 Colombia tuvo un crecimiento negativo del PIB de 0.9%, seguido por otra contracción de 1.6% en 1931. Las inversiones cayeron a la mitad y la construcción sufrió la caída más grande y significativa, seguida por el consumo doméstico, la agricultura y la industria. Después de 1931, no obstante, la tendencia se revirtió y la economía alcanzó una tasa de crecimien to de 6.2% en 1932 y buen desempeño en los años subsiguientes (véase cuadro V.3). Si bien algunos estudios argumentan que la recuperación fue resultado de políticas expansivas a través del gasto gubernamental, el subsidio de créditos y el proteccionismo industrial,[32] otros afi rman que la recuperación y la capacidad de las políticas expansionistas fueron consecuencia del buen desempeño de las exportaciones, en particular del café.[33] En la gráfi ca V.1 mostramos que, aunque después de 1931 la estructura económica del país cambió, pues la producción industrial se volvió cada vez más importante en cuanto a su contribución al valor agregado del PIB, la agricultura se mantuvo siempre por encima de 44% en el periodo 1913-1939. Esto muestra cómo el proteccionismo exportador del sector primario también fue consistente con una política de industrialización.

Las políticas expansionistas posteriores a 1931 también fueron posibles gracias al abandono del patrón oro, que dio al Banco Central de Colombia mayor libertad para emitir más circulante de acuerdo con las necesidades, y también dio al gobierno mayor flexibilidad para promover las exportaciones (e incluso, finalmente, la sustitución de importaciones) a través de mecanismos como el tipo de cambio y la emisión de circulante, y no simplemente

mediante la imposición de aranceles a las importaciones.[34] Como veremos en la siguiente sección, estas políticas se relacionaron con la capacidad del sector del café para influir en la política económica.

La industria del café: barreras de entrada bajas, acción colectiva fuerte

Antes del café, Colombia atravesó por una serie de auges y caídas de diferentes productos de exportación. El café fue el primer producto que tuvo un crecimiento estable y duradero, proporcionando décadas de la estabilidad deseada por la élite colombiana.[35] Este producto básico ha desempeñado un papel prominente en la política colombiana desde fines del siglo XIX. La Guerra de los Mil Días comenzó en parte como un conflicto en torno a las exportaciones de café. Mientras que los liberales pretendían que el gobierno no interviniese en este sector, los conservadores deseaban gravarlo y utilizar esa recaudación en otras áreas.[36] Tras el término de la guerra, las exportaciones de café representaron alrededor de la mitad de las exportaciones colombianas, y los nuevos gobernantes del país pusieron sus esperanzas de recuperación en manos del destino de la industria de café.[37] No obstante, de acuerdo con Marco Palacios, el verdadero crecimiento impulsado por las exportaciones de café comenzó a principios de la década de 1910.[38]

Barreras de entrada bajas y producción a pequeña escala

En regiones que cuentan con condiciones climáticas y de suelo propicias, la producción de café no requiere de alta tecnología ni grandes montos de inversión inicial. Durante las dos primeras décadas del siglo XX, la producción se repartía entre algunas zonas de cultivo de pequeños productores y las de las grandes haciendas. Los académicos estudiosos de la industria posterior a la década de 1970 están en contra de aquella interpretación romántica que ve en la producción parcelaria la idea del pequeño cafeticultor representante de una próspera clase media rural. Al contrario, autores como Marco Palacios y Absalón Machado afirman que el hecho de que existiesen pequeños cultivos familiares no significa que los campesinos no fuesen explotados. En las áreas donde la propiedad rural estaba repartida entre numerosas familias, los campesinos no tuvieron otra opción sino vender sus granos de café a un reducido grupo de trilladores, quienes descascaraban los granos, seleccionaban los mejores para la exportación y los empacaban para ser vendidos a las casas exportadoras.[39] En zonas donde existía una alta concentración de la propiedad, las trilladoras también estuvieron bajo el control de los hacendados, quienes por lo general exportaron su propio café hasta 1923, cuando una crisis financiera doméstica y problemas en el mercado internacional del café

hicieron quebrar a muchos de ellos y fueron remplazados por las compañías exportadoras estadunidenses.[40]

El estrecho control que un reducido número de compañías comerciales y de grandes hacendados ejercía sobre las trilladoras y el mercado permitía pagar precios relativamente bajos a los cultivadores. Estos intermediarios sacaron provecho del hecho de que la mayoría de los cultivadores de café combinaba sus sembradíos con los cultivos de subsistencia, lo que les permitía sobrevivir al margen de sus actividades cafetaleras. De hecho, Palacios ha argumentado que la expansión cafetalera de los años veinte se basó en la existencia de extensos cultivos tradicionales con baja tecnología que mantuvieron muy bajos los costos de producción debido a que la mayoría de los cultivadores de café apenas subsistía.[41] Estas características posibilitaron la acumulación de capital entre los grandes hacendados y los intermediarios que permitió la creación de una poderosa burguesía cafetalera que finalmente conformó y dirigió a la FNCC.[42]

Matrimonio indisoluble: la burguesía cafetalera y el Estado colombiano

La mayoría de los estudiosos concuerda con la comparación de Marcos Palacios sobre la relación entre la FNCC y el Estado colombiano como la de un "matrimonio católico indisoluble".[43] Después de 1931, argumentan estos estudiosos, la FNCC tuvo una fuerte influencia en las políticas agrarias, laborales, monetarias, fiscales y de mercado externo.[44] Incluso los estudios más afines con la FNCC que resaltan el hecho de que en algunos casos existieron desacuerdos entre la FNCC y el gobierno, reconocen en ésta a la organización más influyente y poderosa en el país durante décadas.[45]

La intervención gubernamental en el sector del café comenzó antes de la creación de la FNCC. La primera Guerra Mundial provocó la caída del precio internacional del café y sobrevino una crisis en el sector que permitió a algunas compañías estadunidenses asumir el control de las actividades de exportación. Esto generó preocupación entre los cafetaleros nacionales, que se reunieron en el Primer Congreso Nacional de Cultivadores de Café (1920) con el fin de buscar soluciones y solicitar apoyo del gobierno.[46] En 1923 y 1924, el gobierno emprendió sus primeras iniciativas para controlar la calidad del café colombiano, su principal ventaja competitiva en los mercados internacionales, mediante la prohibición de importar semillas de café.[47] En 1923 el gobierno nacional también respaldó y financió el Primer Congreso Internacional de Cultivadores de Café y autorizó fondos para bodegas exentas de impuestos.[48]

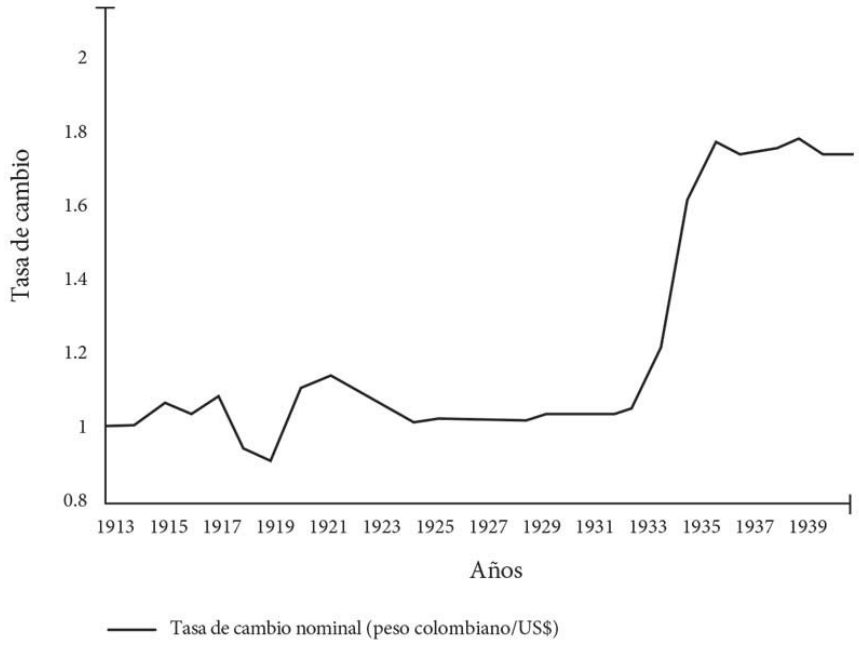
Después de 1927, el tipo de intervencionismo gubernamental en el sector del café cambió gradualmente del proteccionismo arancelario y la financiación de algunas actividades de planificación a una relación simbiótica entre el gobierno y la industria cafetalera. El proceso

comenzó a raíz de la alarma provocada por la caída de los precios internacionales del café en 1927, que llevó al gobierno a convocar a una nueva reunión con los representantes de los cultivadores de café y a la creación de la FNCC.[49] Los objetivos de este nuevo organismo fueron convertirse en el principal defensor de los intereses del sector, supervisar la aplicación de las disposiciones legales correspondientes, promover medidas para la reducción de costos, mejorar la transportación, y promover y vender el café colombiano en el extranjero.[50] En 1928, tras una serie de negociaciones, la FNCC acordó aceptar un nuevo gravamen a las exportaciones para financiar a la asociación, y el gobierno se comprometió a no utilizar dicho impuesto para ningún otro propósito.[51] El gobierno tuvo presencia en la asociación a través de un delegado en su consejo.[52] En las décadas subsiguientes, la FNCC también tuvo sus propios delegados en los principales órganos de las políticas económicas gubernamentales.

Acción colectiva y la Gran Depresión en la industria del café

Entre 1928 y 1930, dos sucesos externos golpearon al sector cafetalero y contribuyeron a acelerar la creciente influencia de la FNCC. El primero fue la caída de los precios internacionales a raíz de una producción brasileña excepcionalmente grande, y el segundo y más fuerte, la Gran Depresión.[53] Estos dos sucesos movieron a la FNCC a presionar al gobierno para hacer un cambio en la política monetaria. A pesar de que los cafetaleros estaban involucrados en las exportaciones, no se opusieron a la sobrevaluación del peso, ya que la mayoría de sus deudas eran en moneda extranjera y tenían muy bajos costos de producción.[54] Por otra parte, la adhesión del país al patrón oro antes de 1931 imposibilitaba al gobierno a hacer cualquier tipo de devaluación. Si bien con el inicio de la Gran Depresión muchos países industrializados abandonaron el patrón oro, el gobierno colombiano hizo enormes esfuerzos por mantener el valor existente del peso mediante controles cambiarios. Sin embargo, debido al estado crítico en que se encontraba el sector del café y siendo la única forma para sobrevivir a la crisis, la FNCC hizo drásticos llamados para la devaluación del peso.[55] En septiembre de 1931, ante la imposibilidad de sostener el valor del peso debido a las continuas pérdidas de divisas extranjeras y con la presión constante de la FNCC, Colombia abandonó el patrón oro. Poco después, en marzo de 1932, el gobierno finalmente devaluó el peso 10%, y esa tendencia continuó en los años subsiguientes (véase gráfica V.2), situación que la FNCC consideró como altamente benéfica.[56]

GRÁFICA V.2. *Colombia. Tasa de cambio nominal del peso frente al dólar estadunidense, 1913-1940*



FUENTE: The Montevideo-Oxford Latin American Economic History Database <http://oxlad.qeh.ox.ac.uk> (consultada el 9 de noviembre de 2011).

Además de influir en las políticas monetarias, la FNCC desempeñó también un papel importante en la creación de nuevas instituciones financieras. En 1931, tras una campaña encabezada por la FNCC, el gobierno de Colombia estableció la Caja Agraria, banco destinado a proporcionar préstamos al sector agrícola en condiciones favorables. La FNCC contribuyó con 4% del capital para la creación de la Caja Agraria, cuyos principales beneficiarios fueron los cultivadores de café.[57] Asimismo, el gobierno subsidió 40% de la deuda que los cultivadores tenían con el Banco Agrícola Hipotecario, el banco hipotecario agrario del gobierno. Como consecuencia de estas políticas, el sector cafetalero atravesó los años treinta con muy bajos niveles de deuda, mientras que la Caja Agraria sobrevivió mediante la emisión de circulante por el Banco Central hasta la década de 1940.[58]

Una preocupación importante de la FNCC desde el momento de su creación fue el control que las compañías extranjeras ejercían sobre las exportaciones cafetaleras colombianas. Durante los años treinta y cuarenta, la FNCC, en una acción concertada con el gobierno colombiano, logró reducir la participación extranjera en las exportaciones de 47.30% en 1933 a 27.75% en 1944.[59] El gobierno también participó activamente en la promoción del café colombiano como una marca específica en los mercados de consumo y proporcionó financiamiento para la creación de una flotilla para transportar el café y construir bodegas, aumentando el control colombiano de la cadena de valor del café.[60] Al mismo tiempo, la FNCC invirtió en algunas áreas ajenas al negocio estricto del café, como infraestructura de transportación y viviendas en las zonas productoras.[61]

Los intentos del gobierno para reducir el poder de la FNCC en los años treinta no tuvieron

éxito. Durante la guerra colombo-peruana de 1932-1933, el presidente de Colombia, Enrique Olaya Herrera (liberal), intentó aumentar los impuestos al sector cafetalero, algo a lo que la FNCC se opuso con éxito.[62] De hecho, durante el resto del siglo XX los cafetaleros disfrutaron de un impuesto mínimo.[63] En 1933 Olaya Herrera también intentó aumentar el número de delegados gubernamentales en la FNCC con el fin de que la asociación tuviese un control del gobierno más estrecho, pero se topó con la resistencia de la federación. Un nuevo intento de aumentar el control gubernamental vino con el presidente Alfonso López Pumarejo (liberal, 1934-1938), con el fin de lograr un acuerdo sobre la producción de café con Brasil. Incluso antes de su ascenso al poder, López Pumarejo se acercó como presidente electo en 1933 a la FNCC como parte de su esfuerzo para llegar a un acuerdo con Brasil. Los cafetaleros se opusieron a cualquier acuerdo para controlar la producción, ya que preferían beneficiarse de las fluctuaciones de la producción brasileña que era mucho mayor a la colombiana: en caso de crisis en el sector del café de Brasil, los cafetaleros colombianos se beneficiarían de mayores precios mundiales.[64] Según la mayoría de los autores (tanto los críticos como los apologistas de la FNCC), el éxito de la oposición de la FNCC a López Pumarejo, antes y después de su ascenso al poder, marca la consolidación de la relación simbiótica inducida por la Gran Depresión entre el gobierno y la asociación que continuó durante las décadas subsiguientes.[65]

La industria bananera: barreras de entrada medias, acción colectiva débil

La UFC dominó la industria colombiana desde 1899 combinando la producción en sus propias plantaciones con la subcontratación de los cultivadores domésticos. La producción se concentró en unos cuantos municipios del Magdalena (en el Caribe colombiano) y el transporte estuvo a cargo de los ferrocarriles, telégrafos y la flota de buques a vapor de la UFC. La compañía tenía grandes inversiones similares en Centroamérica (donde su presencia económica y política fue más importante que en Colombia) y canales de distribución en los Estados Unidos.[66]

Barreras de entrada medias en la industria bananera

A raíz del drástico incremento en la demanda del banano en los Estados Unidos después de la década de 1880, muchos empresarios de la región del Magdalena vieron un negocio promisorio en ese sector.[67] Estos sueños precursores se vieron sacudidos por una sucesión de fracasos para llevar la fruta a tiempo al mercado de los Estados Unidos. Los cultivadores locales carecían de una buena infraestructura de transporte y de mercado, cuestión crucial en la comercialización de un fruto que se pudre rápidamente. No fue sino hasta la llegada de la

UFC, y sus inversiones en flotas de buques a vapor, infraestructura de telecomunicaciones y ferrocarriles, que la exportación del sector bananero del Magdalena finalmente arrancó.[68] En sus inicios, la UFC produjo la mayor parte de la fruta que exportaba, pero la participación doméstica en la fruta exportada por la multinacional pronto escaló de 20% en 1910 a 80% en 1930.[69] En breve, una vez que la barrera inicial de la infraestructura de transporte y del mercado fue salvada por la UFC, los cultivadores locales pudieron tener una participación importante en el mercado bananero internacional.

Iniciativas fallidas de acción colectiva en la industria bananera

Conforme se incrementó la participación de los cultivadores locales en la producción, algunos de ellos intentaron independizarse del poder monopsónico de la UFC buscando otros compradores. Con el fin de evitar la independencia de los cultivadores, la UFC diseñó un mecanismo contractual que dificultó inmensamente a los cultivadores locales desarrollar sus propios negocios. Los contratos con los cultivadores locales establecían que la fruta pertenecía a la UFC desde el momento en que era cortada del árbol. En cambio, si la fruta presentaba algún defecto, pasaba a ser propiedad del cultivador, quien no recibía pago alguno. El contrato también estipulaba que la fruta rechazada por la compañía no podía ser vendida a ningún otro comprador. Además, si un cultivador decidía vender sus tierras, estaba obligado a transferir el contrato de compra establecido con la UFC al nuevo propietario.

Algunos cultivadores locales, inconformes por su dependencia de la UFC, intentaron desarrollar sus propios negocios; sin embargo, estos intentos fracasaron debido a los mecanismos establecidos por la UFC para hacer cumplir los contratos existentes. La compañía calculó con precisión que los contratos se renovaran en épocas distintas para evitar que varios cultivadores “libres” pudiesen unir fuerzas y crear sus propias compañías exportadoras. Cuando algunos de ellos lograban exportar la fruta, la compañía recurría a los tribunales de justicia en los puertos de destino para expropiarla. En última instancia, la UFC fue la principal institución financiera en los municipios en los que operaba y sujetó los préstamos a contratos de compra a largo plazo.[70]

Las estrategias seguidas por la UFC indujeron a algunos cultivadores locales a desarrollar mecanismos de acción colectiva para reducir el poder de la compañía. En 1927 algunos cultivadores locales crearon la Sociedad de Productores de Ciénaga y Santa Marta (SPCSM), vinculada con el Partido Liberal de oposición, para negociar con el gobierno nacional la apertura de una sucursal del Banco Agrícola Hipotecario y romper el monopolio de servicios financieros de la UFC. Los primeros intentos para quebrar el poder de la UFC como el único prestamista en la región habían comenzado en 1924, pero una vez que el Banco Agrícola Hipotecario abrió una sucursal en la zona bananera, los miembros de la SPCSM quedaron

desilusionados. El banco imponía condiciones de préstamo incluso más difíciles de cumplir que las exigidas por la UFC y con intereses más altos. La UFC también logró neutralizar los propósitos del banco recompensando a los cultivadores que no se unieran al grupo de presión representado por la SPCSM mediante una cantidad de préstamos baratos sin precedentes. Los beneficiados con estos préstamos de la UFC crearon su propia asociación (vinculada al Partido Conservador gobernante) que rivalizó con la SPCSM y debilitó su organización.[71]

Desde la llegada de la UFC al caribe colombiano, varios políticos liberales locales estaban en desacuerdo con la generosa exención de impuestos de que gozaba la multinacional. No obstante, el gobierno siguió favoreciendo con todo su apoyo a la UFC. Durante los años veinte, las autoridades colombianas (la Suprema Corte inclusive) declararon ilegal cualquier intento de las autoridades locales de aplicar impuestos a las exportaciones bananeras o las operaciones ferroviarias de la UFC. No sólo el gobierno se opuso a estas medidas tributarias sino también los proveedores locales de la UFC, quienes temían que la multinacional les traspasara el costo del nuevo impuesto.[72]

La Gran Depresión y continuidad de las políticas en el sector bananero

La Gran Depresión no propició el surgimiento de políticas populistas nacionalistas en el sector bananero. Como se demostrará en el caso del petróleo, el gobierno liberal que asumió el poder en 1930 buscó la manera de asegurar a la UFC que sus operaciones en el sector bananero no corrieran riesgo alguno. Con el fin de la concesión a la UFC de los ferrocarriles en la región bananera del Magdalena en 1930, los políticos locales esperaban que la región pudiese beneficiarse con la operación de los ferrocarriles una vez que su propiedad pasara a manos del gobierno local. Para su frustración, el presidente Olaya Herrera decidió ampliar la concesión por otros 30 años, a pesar de la oposición local. El gobierno local también se decepcionó cuando Olaya Herrera dio por terminada la exención de impuestos a la UFC, pero, en lugar de destinar la recaudación, relativamente baja, a los bananeros del Magdalena, decidió que los ingresos irían a parar al gobierno nacional. Los delegados de la asamblea departamental del Magdalena habían apoyado la abolición de la exención y, debido a la inutilidad del Banco Agrícola, respaldaban la imposición de un impuesto a la exportación destinado a financiar a la industria bananera local, de manera que la decisión de Olaya Herrera les causó gran conmoción.[73] Vale la pena destacar que Olaya Herrera tomó estas medidas después de la infame “masacre de las bananeras” perpetrada en diciembre de 1928, cuando el ejército colombiano reprimió a los trabajadores bananeros en huelga, acción que contribuyó al surgimiento del ala de izquierda del Partido Liberal, representada por Jorge Eliécer Gaitán.[74]

Los cambios más importantes hacia la UFC no provinieron de iniciativas locales en las

regiones productoras de banano, sino de arriba. Tras ser electo en 1934, López Pumarejo apoyó a los trabajadores bananeros (elemento importante en su circunscripción electoral) y forzó a la UFC a aceptar las demandas de los trabajadores. No obstante, López Pumarejo no hizo nada para mejorar la capacidad de negociación de los cultivadores locales, ni cuestionó los derechos de propiedad de la UFC.[75]

LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO: BARRERAS DE ENTRADA ALTAS, ESTRATEGIA POLÍTICA DIPLOMÁTICA

Las corporaciones multinacionales del petróleo fueron algunos de los principales objetivos de los gobiernos populistas de los años treinta. Su sola presencia había sido la fuente de sentimientos nacionalistas en los países que las albergaban y sus operaciones se consideraban parte de un esquema imperialista para explotar a los países ricos en petróleo.[76] El caso de Colombia muestra una historia distinta: tras enfrentar el nacionalismo del gobierno conservador durante los años veinte, las compañías petroleras disfrutaron de un mejor entorno después de la Gran Depresión. Las cosas se dieron de manera similar a lo ocurrido en otros casos, pero el poder diplomático de los Estados Unidos en Colombia fue una de las principales ventajas competitivas de la SONJ.

Barreras de entrada altas en la industria del petróleo

Durante las primeras dos décadas del siglo XX, los costos excesivamente altos, la complejidad tecnológica y los altos niveles de incertidumbre respecto a la instalación de una compañía de producción de petróleo no dejaron otra alternativa a los empresarios colombianos que buscar negocios en tres etapas de la cadena de valor: exploración, refinamiento y distribución. Los esfuerzos de exploración estuvieron estrechamente vinculados con la especulación de la tierra. Los exploradores del petróleo, como el novelista Jorge Isaacs, estudiaron las tierras con potencial para su producción con el fin de firmar contratos de concesión con el gobierno y posteriormente venderlos a multinacionales extranjeras. Llevar a cabo un estudio técnico del potencial petrolífero de una región específica no era una labor sencilla, y una vez que se había realizado el estudio, obtener la concesión dependía más de los contactos políticos que del mérito técnico.[77] En 1916, uno de esos concesionarios locales, Roberto De Mares, se asoció con la compañía estadunidense Tropical Oil Company para explotar un territorio que había obtenido en concesión. La concesión fue transferida por completo a Tropical en 1919, y esta compañía fue adquirida finalmente por SONJ en 1920.[78]

Los empresarios que intentaron entrar al sector refinador triunfaron en sus primeros intentos. En 1905, Diego Martínez firmó un contrato con el gobierno colombiano para

construir una planta refinadora de petróleo importado en Cartagena. La planta se construyó en 1909 y la compañía (la Cartagena Oil Refining Company) disfrutó del monopolio hasta 1922, cuando SONJ comenzó a producir petróleo local, provocando una caída en los precios que llevó a Martínez a la bancarrota. Durante varios años, la principal refinadora de Colombia fue la planta propiedad de la SONJ en la ciudad de Barrancabermeja.[79] Ninguna compañía colombiana intentó ni habría sido capaz de competir con las multinacionales en las décadas siguientes.

Compañías petroleras, política extranjera y estrategias de negociación

Durante las décadas de 1910 y 1920, el principal poder de negociación de las multinacionales petroleras estadunidenses frente al gobierno colombiano residió en el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Esta ventaja, no obstante, fue una espada de doble filo. Las problemáticas relaciones históricas entre Colombia y los Estados Unidos, y el hecho de que hubiese una participación tan escasa de la burguesía nacional en la industria convirtieron con frecuencia el mencionado apoyo de los Estados Unidos en una carga que se tradujo en acciones gubernamentales hostiles en contra de las compañías extranjeras. Con la Gran Depresión cambió la relación entre las multinacionales petroleras y el gobierno debido a que tanto el gobierno como la burguesía nacional consideraban que era favorable mantener una buena relación con los Estados Unidos y las compañías extranjeras. Los involucrados en el incipiente sector industrial estaban más interesados en obtener fuentes de energía barata que en la enajenación del capital extranjero.[80]

El gobierno de los Estados Unidos apoyó a las compañías estadunidenses en Colombia no sólo por un sentido de ciudadanía corporativa. La historia de ese apoyo se vincula estrechamente con los sucesos en torno a la separación de la provincia de Panamá de Colombia en 1903. Inmediatamente después de la devastadora Guerra de los Mil Días, los colombianos sufrieron la desmoralizante y humillante pérdida de una parte de su territorio a raíz de que el gobierno de los Estados Unidos apoyó el movimiento separatista de la provincia de Panamá, donde se construiría un canal interoceánico. Ese acto empañó las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos durante varios años y legitimó el argumento de los gobernantes conservadores en favor del beneficio de un sistema político fuertemente centralizado.[81] En 1909, el presidente colombiano Rafael Reyes, mediante una decisión pragmática y con la firme intención de normalizar las relaciones con los Estados Unidos, firmó un tratado en el que reconoció la independencia de Panamá y aceptó una indemnización de 2.5 millones de dólares del gobierno estadunidense. Esta iniciativa, no obstante, fue considerada por muchos como una traición; el Congreso colombiano rechazó el acuerdo y Reyes fue obligado a renunciar y exiliarse.[82] En 1910, los Estados Unidos ofrecieron 10 millones de dólares a cambio del

reconocimiento de la independencia de Panamá, además de otorgar privilegios a los barcos colombianos para el cruce del canal, pero el Congreso colombiano rechazó también esa propuesta.[83]

El asunto relacionado con el reconocimiento de Panamá como un Estado independiente afectó a la industria petrolera después de 1913. En ese año, la compañía británica Pearson and Son inició negociaciones con el gobierno de Colombia para obtener concesiones para la exploración petrolera. Justo cuando los inversionistas británicos y el gobierno colombiano estaban cerca de alcanzar un acuerdo, la SONJ irrumpió en las negociaciones para convencer al gobierno de los Estados Unidos de que el verdadero objetivo de Pearson and Son no era otro sino construir un canal que compitiese con el de Panamá. Para agravar la situación, el gobierno de los Estados Unidos no simpatizaba con la compañía británica debido a su supuesto involucramiento en la Revolución mexicana. Preocupado por la posibilidad de que Pearson and Son adquiriese una fuerte influencia en Colombia, el gobierno de los Estados Unidos advirtió a Colombia que un trato con Pearson afectaría el acuerdo de indemnización por la pérdida de Panamá. En tales circunstancias, Pearson se retiró de las negociaciones y dejó el camino abierto para los inversionistas estadunidenses. Al año siguiente los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia firmaron el Tratado Urrutia-Thompson, por el cual los Estados Unidos se comprometían a pagar la cantidad de 25 millones de dólares a cambio del reconocimiento de Panamá. No obstante, el tratado aún estaba a la espera de ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos.[84]

Las compañías estadunidenses utilizaron la ratificación del tratado Urrutia-Thompson como una carta de negociación. Tropical Oil adquirió la prometedora concesión de De Mares en 1916, inició las perforaciones en 1918 y descubrió los primeros yacimientos en 1919.[85] En cuanto la Tropical comenzó a extraer petróleo, el gobierno cambió la legislación vigente por una más nacionalista, mediante la cual declaraba el subsuelo del país como propiedad del Estado.[86] Los inversionistas estadunidenses consideraron esa nueva ley como una amenaza potencial y el gobierno de los Estados Unidos decidió posponer la ratificación del tratado Urrutia-Thompson hasta que Colombia revisara la legislación.[87] Finalmente, en diciembre de 1919 la Suprema Corte de Colombia allanó el camino declarando inconstitucional la legislación del subsuelo.[88] Al año siguiente, la SONJ adquirió Tropical Oil e inició el cabildeo ante el Congreso de los Estados Unidos para la ratificación del tratado Urrutia-Thompson.[89] Parte del interés de la SONJ en la ratificación del tratado era obtener del gobierno colombiano la concesión de un oleoducto. La SONJ tuvo éxito en sus negociaciones y en 1922 el Congreso de los Estados Unidos ratificó el tratado, garantizando el pago de los 25 millones.[90]

La Gran Depresión y el establecimiento de políticas amistosas hacia el sector petrolero

Las relaciones entre las multinacionales petroleras y el gobierno cambiaron después de 1926. En ese año, las exportaciones de crudo colombiano (la mayor parte en manos de la SONJ) se dispararon de 4 642 249 barriles en 1926 a 13 679 199 en 1927, con lo cual las exportaciones de petróleo crecieron de 8.4% a 20% del total de exportaciones (véase la cuadro V.2).[91] Hasta ese año, la compañía había informado que mantenía relaciones favorables con el gobierno.[92] Esto terminó en 1926 cuando el ministro de industria José Antonio Montalvo se acercó a la empresa británica Anglo-Persian buscando una alianza con ella para la explotación de la concesión Barco que previamente había anulado a la compañía estadunidense Carib Syndicate. El intento fracasó cuando las actividades de Montalvo se filtraron a la prensa, por lo que Anglo-Persian optó por retirarse de las negociaciones para evitar una confrontación con los estadunidenses.[93] Tras ese suceso, no obstante, los miembros de la élite colombiana, entre ellos el dirigente conservador Laureano Gómez, propusieron una nueva legislación para nacionalizar la industria del petróleo, idea que fue apoyada por miembros de los partidos Liberal y Conservador, quienes consideraban que el control de la industria por las compañías extranjeras era excesivo y cuya intención no era simplemente remplazar a los estadunidenses por los británicos.[94] En este contexto, Montalvo propuso al Congreso un aumento en los impuestos y las regalías pagadas por la SONJ y una nueva Ley de Emergencia, que otorgó al gobierno poderes ilimitados sobre la industria del petróleo hasta la redacción de una nueva legislación más detallada.[95] Además, Montalvo expuso ante el Congreso y la prensa documentos que probaban las irregularidades de la concesión Barco de la SONJ y proporcionaban motivos para su anulación. La SONJ cuestionó la legalidad de la ley y los argumentos de Montalvo sobre la concesión Barco, nuevamente con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que alentaba a los inversionistas a no comprar acciones colombianas. Frente a este reto, en 1929 Montalvo buscó formar una alianza con la élite colombiana, pero su esfuerzo fue decepcionante. A pesar de que los representantes de la élite inicialmente habían simpatizado con la idea de una política nacionalista, respondieron a Montalvo que no deseaban alejar a las compañías extranjeras ni antagonizar con el gobierno de los Estados Unidos.[96]

Las iniciativas nacionalistas de Montalvo de ninguna manera coincidieron con las acciones de los gobiernos populistas de otros países latinoamericanos en las décadas siguientes. En 1927, cuando los sindicatos del petróleo iniciaron una huelga en contra de la SONJ durante su propia campaña nacionalista, Montalvo contactó personalmente a la SONJ, suplicándole no ceder ante las demandas de los trabajadores, declaró la huelga ilegal y apoyó abiertamente la represión militar.[97] De hecho, la huelga prácticamente no afectó las operaciones de la compañía.[98] Al contrario de lo que hicieron otros líderes populistas, Montalvo rechazó los ofrecimientos del ala izquierda del Partido Liberal para apoyar su causa.[99] Por lo tanto, incluso en los momentos en los que el gobierno desarrolló su iniciativa nacionalista más agresiva en contra de las multinacionales, Colombia no siguió el camino populista que en

aquellos años imperaba en muchos lugares.[100]

La crisis económica global también incrementó el poder de negociación de la SONJ. El precio de los bonos colombianos cayó drásticamente cuando el país decidió suspender el pago de su deuda externa en 1930.[101] En ese momento, la SONJ aprovechó la situación para comprar un porcentaje considerable de esos bonos a muy bajos precios, algo que le dio a la compañía una fuerte ventaja con la cual presionar al gobierno para la formulación de una legislación favorable.[102]

Al inicio de la Gran Depresión, la élite colombiana reforzó la visión que tenía sobre el tipo de política que debía aplicarse a las multinacionales del petróleo. En 1930, con el triunfo en las elecciones del opositor Partido Liberal, el gobierno del presidente Olaya Herrera de inmediato propuso cambios en la legislación del petróleo para convencer a las compañías petroleras estadunidenses de la seguridad que les brindaba Colombia.[103] Además, varios bancos de Nueva York habían aconsejado a Olaya Herrera que, de no cambiar la legislación del petróleo, los préstamos en el futuro se verían comprometidos.[104] La nueva ley eliminaba el requisito de que 25% de fuerza laboral en la industria petrolera fuera local, así como la obligación de aplicar rigurosamente la legislación colombiana sin arbitraje diplomático y la posibilidad de dar por terminadas las operaciones antes de la expiración del plazo de la concesión. También reducía las regalías de 12.5-6% a 11.2-2%, los impuestos de la propiedad privada de 8-4% a 8-1% y los impuestos de operación del gasoducto en 50%.[105] Asimismo, Olaya Herrera invalidó la anulación que hiciera Montalvo de la concesión Barco, permitiendo a la South American Gulf Company operarla.[106] Tras abandonar su antiguo flirteo con la idea de la nacionalización de la industria petrolera, la élite, en particular la burguesía industrial de Medellín, cada vez más importante, celebró esta nueva legislación.[107]

CONCLUSIONES

El presente capítulo propone el concepto de *proteccionismo exportador* para entender el tipo de políticas aplicadas por el gobierno colombiano al sector exportador y a los inversionistas extranjeros durante el periodo 1922-1934. Observamos una continuidad en este modelo antes y después del comienzo de la Gran Depresión, con la ampliación del modelo proteccionista exportador por parte del gobierno durante la Depresión. Esto significa que la llegada de la Gran Depresión no se tradujo en la adopción de un modelo económico proteccionista, sino que proporcionó al gobierno los argumentos para reforzar el modelo ya existente de intervención gubernamental en la economía con el objetivo de proteger al sector exportador. Igual que en otros países de América Latina, en Colombia el sector exportador fue crucial para la recuperación económica después del efecto de la Gran Depresión, y con estas políticas, el gobierno buscó optimizar el desempeño del sector exportador. No obstante, el gobierno adoptó

distintos enfoques en relación con las tres principales industrias exportadoras colombianas (café, petróleo y banano). El grado de participación de la burguesía nacional en cada sector específico determinó la política gubernamental, como también las barreras de entrada tecnológicas que afectaron a cada una de estas tres industrias. Mientras que en el sector cafetero con barreras de entrada bajas la burguesía local se las ingenió para controlar la producción, los cultivadores de banano dependieron de la infraestructura de transportación de los inversionistas extranjeros, y, en la industria del petróleo, la burguesía local tuvo una presencia tecnológica más allá de la especulación de tierras. El tipo de participación de la burguesía nacional condicionó también la forma en la que cada una de estas industrias defendió sus intereses. El sector del café logró crear una relación simbiótica con el gobierno colombiano y se convirtió en un organismo paralelo de política económica. El sector bananero no contó con la participación de la burguesía nacional, sino más bien con una élite regional débil que prácticamente no logró influir en la política económica. Asimismo, estos cultivadores de banano, políticamente débiles, que proveían la fruta a las multinacionales extranjeras, buscaron el objetivo relativamente contradictorio de que el gobierno detuviese los abusos de las compañías extranjeras, abogando a la vez por un control limitado de la propia industria. La ayuda del gobierno a los cultivadores locales fue muy poca, mientras que proporcionó todo el apoyo a los inversionistas extranjeros antes y después de 1929. Por último, la falta de participación de la burguesía nacional en la industria petrolera permitió a las compañías petroleras ejercer presión diplomática con la intención de influir en la política económica. Debido a la escasa participación de la élite colombiana, el gobierno conservador anterior a 1929 aplicó medidas agresivas para aumentar los beneficios domésticos de la industria petrolera mediante impuestos y regalías más altos y leyes que permitían la expropiación, algo parecido a lo que hicieron otros gobiernos populistas de Latinoamérica, pero sin buscar una alianza con la clase obrera.

El efecto más importante de la Gran Depresión fue la creación de una política consistente para los tres sectores de exportación. El gobierno desarrolló políticas para proteger los intereses de la FNCC y las compañías multinacionales del petróleo y el banano. A pesar de que la élite nacional no participaba todavía en la explotación del petróleo, la naciente burguesía industrial deseaba fuentes de energía barata y respeto a los derechos de propiedad de las multinacionales petroleras. En resumen, a pesar de que el gobierno colombiano en 1930 pasó a manos de un Partido Liberal apoyado por la clase obrera, la Gran Depresión mostró la consolidación del sistema de proteccionismo exportador instituido antes de la crisis.

[*] Los autores agradecen a Rory Miller, Tetsuji Okazaki, Walter Friedman y Sergio Castellanos, quienes participaron en la European Business History Conference (París, 2012), así como a dos lectores anónimos por sus observaciones sobre las primeras versiones de este ensayo. También agradecemos a Ishva Minefee por su asistencia en investigación.

[1] Ronald Findlay y Kevin O'Rourke, "Commodity Market Integration, 1500-2000", en Michael Bordo, Alan Taylor y Jefrey Williamson (eds.), *Globalization in Historical Perspective,* University of Chicago Press, Chicago, 2003, pp. 43-49; Geoffrey Jones, *Multinationals and Global Capitalism,* Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 16-42.

[2] Dietmar Rothermund, *The Global Impact of the Great Depression, 19291939,* Routledge, Nueva York, 2003.

[3] Luis Bértola y Jeffrey Williamson, "Globalization in Latin America before 1940", en Victor Bulmer-Thomas, John Coatsworth y Roberto Cortés Conde (eds.), *The Cambridge Economic History of Latin America,* vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 47.

[4] Robert Kaufman y Barbara Stallings, "The Political Economy of Latin American Populism", en Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards (eds.), *The Macroeconomics of Populism in Latin America,* University of Chicago Press, Chicago, 1991, p. 15; Jolle Demmers, Alex Fernández y Barbara Hogenboom, *Miraculous Metamorphoses: The Neo-Liberalisation of Latin American Populism,* Palgrave, Nueva York, 2001, p. 4; Michael Monteón, *Latin America and the Origins of Its Twenty-First Century,* ABC-CLIO, Santa Barbara, 2010, pp. 90-93; Robert Levine, *Father of the Poor? Vargas and His Era,* Cambridge University Press, Cambridge, 1998, p. 8; Thomas O'Brien, *The Century of US Capitalism in Latin America,* University of New Mexico Press, Albuquerque, 1999, pp. 73-99.

[5] Michael Clemens y Jeffrey Williamson, "Why Were Latin America's Tariffs So Much Higher than Asia's before 1950?", *Revista de Historia Económica* 30, núm. 1 (2012), pp. 11-44; John Coatsworth y Jeffrey Williamson, "Always Protectionist? Latin American Tariffs from Independence to Great Depression", *Journal of Latin American Studies* 36, núm. 2, pp. 205-232; Eliana Cardoso y Ann Helwege, *Latin America's Economy: Diversity, Trends, and Conflicts,* MIT Press, Cambridge, 1995, pp. 47-48; Enrique Cárdenas, José Antonio Ocampo y Rosemary Thorp, "Introduction", en Enrique Cárdenas, José Antonio Ocampo y Rosemary Thorp (eds.), *An Economic History of Twentieth-Century Latin America,* vol. 1, Palgrave, Nueva York, 2000, pp. 5-10; Stephen Haber, "The Political Economy of Industrialization", en Bulmer-Thomas, Coatsworth y Cortés Conde, *Cambridge Economic History…, op. cit.,* pp. 537-584.

[6] Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence,* Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. 213-216; Cárdenas, Ocampo y Thorp, "Introduction", *op. cit.,* p. 25.

[7] Dentro del Partido Liberal se creó un movimiento populista bajo el liderazgo de Jorge Eliécer Gaitán en los años treinta. Sin embargo, Gaitán nunca resultó electo y fue asesinado en 1948 cuando se encontraba en el apogeo de su carrera política.

[8] Colombia estuvo gobernada brevemente por un dictador militar entre 1953 y 1957, lo que es una anomalía dentro de los parámetros latinoamericanos del siglo XX. Esto de ninguna manera significa que la política colombiana del siglo XX fuese estable. Liberales y conservadores lucharon una guerra civil no declarada de 1948 a 1957, año en el que acordaron un sistema de poder compartido (el Frente Nacional) que duró 16 años (1958-1974). En las décadas siguientes, la mayor parte de la inestabilidad política fue provocada por grupos rebeldes de izquierda, la mafia del narcotráfico y los paramilitares de derecha.

[9] Para una buena revisión de estos conflictos en el siglo XIX, véase Marco Palacios, *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994,* Norma, Bogotá, 2003.

[10] José Antonio Ocampo, "The Colombian Economy in the 1930s", en Rosemary Thorp (ed.), *Latin America in the 1930s: The Role of the Periphery in World Crisis,* MacMillan, Londres, 1984, p. 120; José Antonio Ocampo, "Crisis mundial y cambio estructural (1929-1945)", en José Antonio Ocampo (ed.), *Historia económica de Colombia,* Siglo XXI, Bogotá, p. 219.

[11] En la actualidad, la United Fruit Company lleva el nombre de Chiquita Brands. Su producto de mayor venta en los Estados Unidos y Europa es Chiquita Bananas.

[12] Edith Penrose, *The Large International Firm in Developing Countries: The International Petroleum Industry,* MIT Press, Cambridge, 1968, pp. 53-87.

[13] Al momento de escribir este ensayo, y tras varios cambios en su estructura y propiedad, a la Standard Oil Company of New Jersey se le conoce con el nombre de ExxonMobil.

[14] En el caso de Venezuela esto fue claro. Véase Miguel Tinker Salas, *The Enduring Legacy: Oil, Culture, and Society in Venezuela,* Duke University Press, Durham, 2009.

[15] Usamos la definición de *populismo* como un conjunto de políticas económicas destinadas a alcanzar objetivos políticos

particulares como *a)* movilización de apoyo dentro de las clases bajas y obreras, *b)* obtener apoyo de negocios con enfoque doméstico, *c)* aislar políticamente a las multinacionales extranjeras y la oligarquía terrateniente, y *d)* incrementar los salarios nominales. Véase Kaufman y Stallings, "The Political Economy…", *op. cit.,* pp. 15-16.

[16] Miguel Urrutia, "On the Absence of Economic Populism in Colombia", en Dornbusch y Edwards, *The Macroeconomics of Populism…*, *op. cit.,* pp. 369-391.

[17] Palacios, *Entre la legitimidad…*, *op. cit.,* p. 134.

[18] Para una revisión detallada de los debates políticos en el sector del petróleo, véase Jorge Villegas, *Petróleo, oligarquía e imperio,* Ancora, Bogotá, 1968; René de la Pedraja Tomán, *Historia de la energía en Colombia, 1537-1930,* Ancora, Bogotá, 1985; René de la Pedraja Tomán, *Petróleo, electricidad, carbón y política en Colombia,* Ancora, Bogotá, 1993; Marcelo Bucheli, "Negotiating under the Monroe Doctrine: Weetman Pearson and the Origins of US Control of Colombian Oil", *Business History Review* 83, núm. 3 (otoño de 2008), pp. 529-553. Para los debates políticos sobre la industria bananera, véase Catherine LeGrand, "El conflicto de las bananeras", en Alvaro Tirado Mejía (ed.), *Nueva historia de Colombia,* vol. 3, Planeta, Bogotá, 1989; Marcelo Bucheli, *Bananas and Business: The United Fruit Company in Colombia, 1899-2000,* New York University Press, Nueva York, 2005, pp. 92-95; Judith White, "The United Fruit Company in the Santa Marta Banana Zone: Conflicts of the '20s", tesis de maestría, Oxford University, 1971; Richard Sharpless, *Gaitán of Colombia: A Political Biography,* University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1978, p. 59.

[19] Para una aplicación de la teoría de la acción colectiva en América Latina, véase Ben Ross Schneider, *Business Politics and the State in Twentieth-Century Latin America,* Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

[20] Rosemary Thorp, "Has the Coffee Federation Become Redundant? Collective Action and the Market in Colombian Development", en Judith Heyer, Frances Stewart y Rosemary Thorp (eds.), *Group Behaviour and Development: Is the Market Destroying Cooperation?,* Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 145-160; Schneider, *Business Politics…*, *op. cit.,* pp. 131-139. El argumento de Mancur Olson se desarrolla en *The Logic of Collective Action,* Harvard University Press, Cambridge, 1965.

[21] Mancur Olson, "The Exploitation of Agriculture", en Diego Pizano y José Chalarca (eds.), *Coffee, Institutions, and Economic Development,* FNCC, Bogotá, 1997, pp. 25-34.

[22] Algunos historiadores encuentran una continuación del intervencionismo gubernamental en la economía desde la época colonial hasta el siglo XX. Véase Palacios, *Entre la legitimidad…*, *op. cit.,* p. 133; José Antonio Ocampo, "Crisis mundial…", *op. cit.,* p. 217.

[23] Charles Bergquist, *Coffee and Conflict in Colombia, 1886-1910,* Duke University Press, Durham, 1978; Jesús Antonio Bejarano, "El despegue cafetero (1900-1928)", en Ocampo, *Historia económica…*, *op. cit.,* pp. 137, 176; Palacios, *Entre la legitimidad…*, *op. cit.,* pp. 65-69.

[24] Salomón Kalmanovitz, *Economía y nación,* Siglo XXI, Bogotá, 1985, pp. 251-254; Bejarano, "El despegue cafetero…", *op. cit.,* pp. 186-190.

[25] Bejarano, "El despegue cafetero", *op. cit.,* pp. 186-190; Kalmanovitz, *Economía y nación, op. cit.,* pp. 258-59; Bucheli, "Negotiating under the Monroe Doctrine…", *op. cit.*

[26] Robert Bates, *Open-Economy Politics: The Political Economy of the World Coffee Trade,* Princeton University Press, Princeton, 1997, pp. 57-58; Roberto Junguito y Hernán Rincón, "La política fiscal en el siglo XX en Colombia", en James Robinson y Miguel Urrutia (eds.), en *Economía colombiana del siglo XX,* Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 2007, pp. 246-248; Alfonso Patiño Roselli, *La prosperidad a debe y la gran crisis, 1925-1935,* Banco de la República, Bogotá, 1981; Bejarano, "El despegue cafetero…", *op. cit.,* pp. 195-200. Para una descripción detallada de la misión extranjera encabezada por Edwin Kemmerer que condujo a la creación de las instituciones económicas modernas de Colombia, véase Paul Drake, *The Money Doctor in the Andes: US Advisors, Investors, and Economic Reform in Latin America from World War I to the Great Depression,* Duke University Press, Durham, 1989.

[27] Bates, *Open-Economy Politics, op. cit.,* pp. 57-58.

[28] Kalmanovitz, *Economía y nación, op. cit.,* pp. 275-282.

[29] Ocampo, "Crisis mundial…", *op. cit.,* p. 217.

[30] José Antonio Ocampo *et al.,* "La consolidación del capitalismo moderno (1945-1986)", en Ocampo, *Historia económica…*, *op. cit.,* pp. 243-48; Ocampo, "Crisis mundial…", *op. cit.,* pp. 218-220.

[31] Mientras que de 1929 a 1931 el PIB real en Colombia cayó 2.4%, en el caso de Argentina, Chile y México, cayó 14, 27 y 16% respectivamente; véase Fabio Sánchez, "Aspectos monetarios de la gran depresión en Colombia: Política y evidencia

empírica 1928-1936", *Cuadernos de Economía* 10, núm. 14 (1990), pp. 195-232.

[32] Miguel Urrutia, "Cincuenta años de desarrollo económico", en Miguel Urrutia (ed.), *Ensayos sobre historia económica*, Fedesarrollo, Bogotá, 1980, pp. 181-194; Ocampo, "Crisis mundial…", *op. cit.*, pp. 220-222.

[33] Andrés Fernández, "Essays on Business Cycles in Emerging Economies", tesis de doctorado, Rutgers University, 2010; Ocampo, "The Colombian Economy…", *op. cit.*, pp. 117-143.

[34] Fabio Sánchez, Andrés Fernández y Armando Armenta, "Historia monetaria de Colombia en el siglo XX: Grandes tendencias y episodios relevantes", en Robinson y Urrutia, *Economía colombiana…*, *op. cit.*, pp. 335-340.

[35] Para las expansiones y contracciones en la época anterior al café, véase Jorge Orlando Melo, "Las vicisitudes del modelo liberal (1850-1899)", en Ocampo, *Historia económica…*, *op. cit.*, pp. 119-172; Kalmanovitz, *Economía y nación*, *op. cit.*, pp. 174-177.

[36] Bergquist, *Coffee and Conflict…*, *op. cit.*

[37] José Antonio Ocampo y María Mercedes Botero, "Coffee and the Origins of Modern Economic Development in Colombia", *op. cit.*, en Cárdenas, Ocampo y Thorp (eds.), *An Economic History…*, *op. cit.*, p. 181.

[38] Palacios, *Entre la legitimidad…*, *op. cit.*, pp. 82-83.

[39] Absalón Machado, *El café: de la aparcería al capitalismo*, Punta de Lanza, Bogotá, 1977, pp. 82-83.

[40] *Ibid.*, pp. 222-226.

[41] Marco Palacios, *El café en Colombia: Una historia económica, social y política*, Planeta, Bogotá, 2002, p. 408.

[42] Machado, *El café*, *op. cit.*, p. 227.

[43] Palacios, *El café en Colombia*, *op. cit.*, p. 413.

[44] Mariano Arango, *El café en Colombia, 1930-1958: producción, circulación y política*, Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1982; Mariano Arango, *Política económica e intereses cafeteros*, Universidad de Antioquia, Medellín, 1979; Machado, *El café*, *op. cit.;* Bates, *Open-Economy Politics*, *op. cit.*

[45] Roberto Junguito y Diego Pizano, *Instituciones e instrumentos de la política cafetera en Colombia*, Fondo Cultural Cafetero, Bogotá, 1997, pp. 28-32.

[46] Silverio Pérez Gómez (ed.), *Los propósitos de la industria cafetera colombiana, 1850-1986*, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Bogotá, 1987, pp. 124-125. Como muestra Pérez Gómez en los principales documentos que reproduce, aparte del Congreso del Café, durante los años veinte los cafetaleros solicitaron reiteradamente apoyo gubernamental, p. 132.

[47] *Ibid.*, pp. 147-150, 172-173.

[48] Ibid., pp. 155-156, 160. En inglés, el término *mild coffee* se refiere a la mayoría de los granos de café cultivados fuera de Brasil, cuyo grano de café se conoce como "robusta". Véase Vernon D. Wickizer, *Coffee, Tea, and Cocoa: An Economic and Political Analysis*, Food Research Institute of Stanford University, Stanford, 1951, p. 45.

[49] Bates, *Open-Economy Politics*, *op. cit.*, p. 60; Schneider, *Business Politics…*, *op. cit.*, pp. 131-132; Thorp, "Has the Coffee Federation…?", *op. cit.*, pp. 147-148.

[50] *Ibid.*, p. 148.

[51] Junguito y Pizano, *Instituciones e instrumentos…*, *op. cit.*, pp. 6-8.

[52] *Ibid.*, pp. 28-30.

[53] Palacios, *El café en Colombia*, *op. cit.*, pp. 417-418.

[54] *Ibid.*, pp. 402-403.

[55] Bates, *Open-Economy Politics*, *op. cit.*, p. 64.

[56] Arango, *Política económica…*, *op. cit.*, pp. 60-63; Bates, *Open-Economy Politics*, *op. cit.*, p. 64.

[57] Fidel Cuéllar, *El crédito cafetero en Colombia*, Universidad Nacional y Universidad de los Andes, Bogotá, 2004, pp. 46-48.

[58] *Ibid.*, pp. 50-57.

[59] Palacios, *El café en Colombia*, *op. cit.*, p. 438.

[60] *Ibid.*, pp. 426-445; Junguito y Pizano, *Instituciones e instrumentos…*, *op. cit.*, pp. 1-33.

[61] *Ibid.*, pp. 42-67.

[62] Silverio Pérez Gómez, *Los jefes de Estado ante al industria cafetera*, FNCC, Bogotá, 1994, pp. 3-4; Arango, *Política económica…*, *op. cit.*, p. 65.

[63] Palacios, *El café en Colombia, op. cit.*, p. 440.

[64] Bates, *Open-Economy Politics, op. cit.*, p. 70; Palacios, *El café en Colombia, op. cit.*, pp. 426-430.

[65] Junguito y Pizano, *Instituciones e instrumentos…*, *op. cit.*, p. 69; Palacios, *El café en Colombia, op. cit.*, pp. 430-445; Arango, *El café en Colombia, 19301958, op. cit.*, pp. 237-268; Arango, *Política económica…*, *op. cit.*, pp. 60-73.

[66] Para un análisis de las operaciones continentales de la UFC, véase Marcelo Bucheli, "Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975", *Business History* 50, núm. 4 (2008), pp. 433-454; Marcelo Bucheli, "United Fruit Company in Latin America", en Steve Striffler y Mark Moberg (eds.), *Banana Wars: Power, Production, and History in the Americas*, Duke University Press, Durham, 2003, pp. 80-101.

[67] Marcelo Bucheli e Ian Read, "Banana Boats and Baby Food: The Banana in US History", en Steven Topik, Carlos Marichal y Zephyr Frank (eds.), *From Silver to Cocaine*, Duke University Press, Durham, 2006, pp. 204-227; John Soluri, *Banana Cultures*, University of Texas Press, Austin, 2005.

[68] Bucheli, *Bananas and Business, op. cit.*, pp. 150-151.

[69] Eduardo Posada-Carbó, *The Colombian Caribbean: A Regional History, 1850-1970*, Oxford University Press, Oxford, 1996, pp. 53-54.

[70] Marcelo Bucheli, "Enforcing Business Contracts in South America: The United Fruit Company and the Colombian Banana Planters in the Twentieth Century", *Business History Review* 78, núm. 2 (verano de 2004), pp. 181-212.

[71] Bucheli, *Bananas and Business, op. cit.*, pp. 93, 156-157.

[72] Bucheli, *Bananas and Business, op. cit.*, pp. 91-92.

[73] *Ibid.*, pp. 96-98.

[74] LeGrand, "El conflicto de las bananeras", *op. cit.;* Gabriel Fonnegra, *Bananeras: un testimonio vivo*, Círculo de Lectores, Bogotá, 1986; White, "The United Fruit Company…", *op. cit.*

[75] Bucheli, *Bananas and Business, op. cit.*, pp. 98-100. El gobierno de Colombia finalmente apoyó a los cultivadores de banano colombianos en la década de 1960, en el momento en que la tecnología disminuyó las barreras de entrada de la industria y los cultivadores se beneficiaron de mejores mecanismos de acción colectiva por pertenecer al sector industrial de Antioquia; véase Bucheli, "Enforcing Business Contracts…", *op. cit.* Durante la Gran Depresión encontramos un tipo de políticas opuestas con respecto a estas multinacionales, tiempo en el que la Standard Fruit and Steamship Company (la segunda multinacional bananera a nivel mundial después de la UFC) fue obligada a otorgar mayores concesiones a nivel regional en México tras su confrontación con el tan implacable como carismático Tomás Garrido Canabal, gobernador de Tabasco. Véase Stan Ridgeway, "Monoculture, Monopoly, and the Mexican Revolution: Tomás Garrido Canabal and the Standard Fruit Company in Tabasco (1920-1935)", *Mexican Studies/Estudios Mexicanos* 17, núm. 1 (2001), pp. 143-169. En Centroamérica, una iniciativa intergubernamental concertada para restringir las operaciones de las multinacionales bananeras se llevó a cabo en la década de 1970; véase Marcelo Bucheli y Min-Young Kim, "Political Institutional Change, Obsolescing Legitimacy, and Multinational Corporations: The Case of the Central American Banana Industry", *Management International Review* 52, núm. 6 (2012), pp. 847-877; Bucheli, "Multinational Corporations…", *op. cit.*

[76] Para un análisis del papel de la SONJ en la creación del nacionalismo económico en América Latina, véase Jonathan Brown, "Jersey Standard and the Politics of Latin American Oil Production, 1911-1930", en John Wirth (ed.), *Latin American Oil Companies and the Politics of Energy*, University of Nebraska Press, Lincoln, 1985, pp. 1-50.

[77] Xavier Durán, "El petróleo en Colombia, 1900-1950: especuladores y empresas multinacionales", en Juan Benavides (ed.), *Ecopetrol: energía limpia para el futuro*, Villegas, Bogotá, 2011, pp. 31-36.

[78] *Ibid.*, p. 46.

[79] María Teresa Ripoll, *La actividad comercial de Diego Martínez Camargo, 1890-1937*, Banco de la República, Cartagena, 1999; Durán, "El petróleo en Colombia…", *op. cit.*, pp. 26-30.

[80] Esto es particularmente claro después de la creación de la ANDI, la principal asociación industrial colombiana. Eduardo Sáenz Rovner, *Colombia años cincuenta: industriales, política y democracia*, Universidad Nacional, Bogotá, 2002, pp. 55-56.

[81] Kalmanovitz, *Economía y nación, op. cit.*, pp. 250-251.

[82] Alfonso López Michelsen, "La cuestión del canal desde la secesión de Panamá hasta el Tratado de Montería", en Tirado Mejía, *Nueva Historia de Colombia, op. cit.,* pp. 154-159; Stephen Randall, *Colombia and the United States: Hegemony and Interdependence,* University of Georgia Press, Athens, 1992, p. 90.

[83] Durán, "El petróleo en Colombia…", *op. cit.,* p. 39.

[84] Peter Calvert, "The Murray Contract: An Episode in International Finance and Diplomacy", *Pacific Historical Review* 35 (1966), pp. 203-224; Richard Lael, *Arrogant Diplomacy: US Policy Toward Colombia, 1903-1922,* Scholarly Resources, Wilmington, 1987, p. 88; Bucheli, "Negotiating under the Monroe Doctrine…", *op. cit.*

[85] George Gibb y Evelyn Knowlton, *The Resurgent Years: History of Standard Oil Company (New Jersey), 1911-1927,* Harper and Brothers, Nueva York, 1956, pp. 39-370.

[86] López Michelsen, "La cuestión…", *op. cit.,* p. 164.

[87] Mira Wilkins, "Multinational Oil Companies in South America in the 1920s: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, and Peru", *Business History Review* 48, núm. 3 (1974), p. 430; Mira Wilkins, *The Maturing of Multinational Enterprise: American Business Abroad from 1914 to 1970,* Harvard University Press, Cambridge, 1974, p. 27; López Michelsen, "La cuestión…", *op. cit.,* p. 164.

[88] Germán Colmenares, "Ospina y Abadía: La política en el decenio de los veinte", en Tirado Mejía, *Nueva historia de Colombia, op. cit.,* pp. 243-251.

[89] Tras la adquisición de Tropical, la Standard rápidamente aceleró sus nuevas actividades subsidiarias en Colombia. Véase, "Standard Oil Co. Has Acquired Tropical Oil", *Wall Street Journal,* 20 de enero, 1920, p. 10; "Large South American Oil Merger Completed", *Wall Street Journal,* 23 de agosto, 1920, p. 2; "Develop South American Oil", *Wall Street Journal,* 21 de octubre, 1920, p. 3; "Standard Oil to Drill Twenty Wells in Colombia", *Wall Street Journal,* 30 de noviembre, 1920, p. 9; "International Petroleum Progresses in Colombia", *Wall Street Journal,* 2 de febrero, 1921, p. 3.

[90] Durán, "El petróleo en Colombia…", *op. cit.,* pp. 41-42.

[91] Colombia, Ministerio de Minas y Petróleos, *Memoria 1944,* Imprenta Nacional, Bogotá, 1944, pp. 44-88.

[92] Marcelo Bucheli, "Canadian Multinational Corporations and Economic Nationalism: The Case of Imperial Oil Limited in Alberta (Canada) and Colombia, 1899-1938", *Entreprises et Histoire* 54 (abril de 2009), pp. 80-81.

[93] Fred Rippy, *The Capitalists and Colombia,* Vanguard, Nueva York, 1931, p. 135; George Philip, *Oil and Politics in Latin America,* Cambridge University Press, Cambridge, 1982, p. 35; De la Pedraja Tomán, *Petróleo…, op. cit.,* pp. 23-25.

[94] James Henderson, *Modernization in Colombia: The Laureano Gómez Years,* University Press of Florida, Gainesville, 2001, pp. 147-148; Villegas, *Petróleo, oligarquía e imperio, op. cit.,* pp. 129-132.

[95] Villegas, *Petróleo, oligarquía e imperio…, op. cit.,* pp. 123-125.

[96] De la Pedraja Tomán, *Petróleo…, op. cit.,* pp. 28-33.

[97] Colombia, Ministerio de Industrias, *Memoria Presentada al Congreso de 1927,* Imprenta Nacional, Bogotá, 1927, pp. 48-54; Efraín Estrada, *Sucesos Colombianos 1925-1950,* Universidad de Antioquia, Medellín, p. 173.

[98] Bucheli, "Canadian Multinational Corporations…", *op. cit.,* p. 83.

[99] Estrada, *Sucesos Colombianos 1925-1950, op. cit.,* pp. 229, 243.

[100] Para una comparación entre las políticas colombianas y las más agresivas políticas de negocios en México y las amistosas en Venezuela, véase Marcelo Bucheli y Ruth Aguilera, "Political Survival, Energy Policies, and Multinational Corporations: A Historical Study for Standard Oil of New Jersey in Colombia, Mexico, and Venezuela in the Twentieth Century", *Management International Review* 50, núm. 3 (2010), pp. 347-378.

[101] Drake, *The Money Doctor in the Andes, op. cit.,* pp. 33-34.

[102] De la Pedraja Tomán, *Petróleo…, op. cit.,* 54; "Teagle Denies Conflict of Interests of SO, Colombian Bond Group", *Wall Street Journal,* 4 de marzo, 1937, p. 12.

[103] La elección de Olaya fue vista en Washington como algo positivo. Véase Wilkins, *The Maturing of Multinational Enterprise, op. cit.,* p. 223; "Colombian Good Sense", *Wall Street Journal…, op. cit.,* 20 de febrero, 1930, p. 1.

[104] De la Pedraja, *Petróleo,* pp. 40-46.

[105] Jorge Villegas, *Petróleo colombiano ganancia gringa,* Tigre de Papel, Bogotá, 1971, p. 68.

[106] Estrada, *Sucesos Colombianos 1925-1950, op. cit.,* pp. 348-359; "Criticizes Colombia for Its Policy on Oil: Olaya Says

Firm Line Is Needed to End Impression of Hostility to Foreign Capital", *New York Times*, 31 de enero, 1930, p. 9; "Bogotá Clears Way for Big Oil Trade: New Legislation and Contract for Barco Concession Are Signed in Colombia", y "Old Dispute Is Settled: American Company Wins", *New York Times*, 5 de marzo, 1931, p. 10; "Colombia Hails Oil Deal", *New York Times*, 6 de marzo, 1931, p. 11; "Colombia Takes Up Barco Contract", *Wall Street Journal*, 7 de abril, 1931, p. 3; "Terms of Gulf 's Barco Oil Pact", *Wall Street Journal*, 24 de junio, 1931, p. 13. La compañía británica Lobitos Oilfields Co. también adquirió algunas tierras concesionadas en la región del Santander, pero más adelante las transfirió a Tropical. Véase Colombia, Ministerio de Industrias, *Memoria*, vol. 1, Imprenta Nacional, Bogotá, 1933, p. 103.

[107] Palacios, *Entre la legitimidad…*, *op. cit.*, p. 183.

VI. TRANSICIÓN POLÍTICA EN UNA ÉPOCA DE EXTREMOS: VENEZUELA EN LOS AÑOS TREINTA

DOUG YARRINGTON

LOS EFECTOS estrictamente económicos de la Gran Depresión fueron menos severos en Venezuela que en la mayor parte del continente. Mientras que la depresión mundial aceleró la contracción del sector agrícola exportador del país, la relativamente rápida recuperación del mercado global del petróleo ayudó a Venezuela a rescatar su economía y sus finanzas públicas. Mientras que los gobiernos de América Latina fueron cayendo uno tras otro a principios de los años treinta, Venezuela permaneció en pie durante el gobierno de Juan Vicente Gómez (19081935). A pesar de las denuncias en su contra por represión, corrupción y sumisión a los intereses extranjeros, Gómez puso fin a un siglo de guerra civil y sentó los fundamentos de un Estado moderno mucho antes de la irrupción de la crisis global. Su manejo eficaz del aparato estatal, junto con la buena fortuna de las enormes reservas petroleras del país, le permitieron sobrevivir a las repercusiones negativas de la crisis económica de principios de los años treinta y gobernar hasta su muerte.

Si bien logró evitar una crisis económica a gran escala, Venezuela no pudo permanecer intacta a los procesos globales desatados por la depresión. La polarización ideológica que se agudizó en gran parte del mundo tuvo en particular una fuerte reverberación en el debate político relativamente libre desatado en el país tras la muerte de Gómez. Durante el periodo crucial de la transición posterior a Gómez, de fines de 1935 a 1937, y tras un cuarto de siglo de censura y represión, Venezuela se sumió en la tormenta de ideologías opuestas que para entonces se había desencadenado en gran parte del mundo. Recayó entonces en el sucesor de Gómez, el general Eleazar López Contreras, un hombre de tendencias conservadoras en el estilo liberal del siglo XIX, el intento de conducir a Venezuela hacia la democracia durante los años que caracterizaron al siglo XX como una "época de extremos".[1]

Según el historiador Steve Ellner, las interpretaciones de esta transición tienden a caer en dos categorías. Un grupo de estudiosos, inclinados por el argumento expresado por Rómulo Betancourt en su trascendente libro *Venezuela, política y petróleo* (1956), considera el gobierno de López como una continuación del sistema de Gómez debido a su alianza con los intereses económicos conservadores y sus restricciones a los grupos opositores. Los

revisionistas, por el contrario, hacen hincapié en el éxito de López por haber erradicado los peores abusos de la dictadura de Gómez y por su adherencia a las normas constitucionales, argumentando que inició la transición de Venezuela hacia la democracia. En su ensayo historiográfico de mediados de la década de 1990, Ellner sostiene que cada interpretación conlleva un trasfondo político. Los partidarios del análisis de Betancourt, quien fue un prominente dirigente de la izquierda en los años treinta, hacen una crítica implícita a López por haber detenido la "verdadera" democratización de las décadas anteriores. Por el contrario, quienes están en favor de López suelen externar su decepción por la democracia "pactada", que comenzó en 1958 con el Pacto de Punto Fijo: el sistema que se estaba derrumbando, como destaca Ellner.[2]

Este capítulo busca situar la transición venezolana de mediados de los años treinta más directamente en el contexto de su propio tiempo, sin ignorar la más amplia perspectiva alcanzada con los desarrollos recientes.[3] Un análisis de la manera en la que los venezolanos entendieron y debatieron sobre la época de cambio de los años treinta requiere, antes que nada, conocer su experiencia en relación con la forma de gobierno del régimen de Gómez. Argumento que muchos de quienes vivieron bajo la dictadura de Gómez la consideraron principalmente como una época de corrupción y terror político. Al suprimir la práctica de esos abusos e iniciar reformas graduales, López pudo satisfacer las demandas básicas para el cambio y creó un sentido de ruptura con el pasado. Entretanto, para la segunda mitad de 1936, las tácticas de confrontación cada vez más frecuentes de la izquierda en su intento por lograr una transformación más radical comenzaron a generar la inquietud de que podrían llevar al país a una crisis, inquietud que se acentuó con el estallido de la Guerra Civil española. De tal manera, a principios de 1937 muchos venezolanos estaban dispuestos a aceptar la decisión tomada por López de excluir a la izquierda de la política nacional con el fin de asegurar la transición pacífica hacia una democracia limitada. Como sugiero al final del capítulo, la intención de López de consolidar la democracia excluyendo a sus opositores más decididos sugiere que tenía más en común con los demócratas posteriores de lo que sus detractores o defensores han reconocido. La transición posterior al gobierno de Gómez, profundamente marcada por las disputas ideológicas de los años treinta, inició un patrón duradero de regímenes democráticos excluyentes.

La política económica del régimen de Gómez

A la llegada de Gómez al poder en 1908, Venezuela era un país agropecuario dependiente de las exportaciones de café, cacao y pieles de ganado, que seguían bajo control de coaliciones de caudillos. El ejército nacional carecía de entrenamiento profesional y equipo, y en la hacienda pública imperaba el desorden perpetuo. Las reformas de esas instituciones durante la

siguiente década y media proporcionaron dos de los pilares más importantes del Estado gomecista y se mantuvieron como fundamento del poder del dictador hasta su muerte. Es notable que la modernización del ejército nacional (1910-1913), así como las reformas hacendarias (1913-1922), se llevaran a cabo antes del inicio definitivo del auge del petróleo en 1925, primer año en el que las exportaciones de petróleo sobrepasaron a las del café. De tal manera, Gómez y sus aliados establecieron inicialmente el poder del Estado central sin la ayuda de los ingresos del petróleo.[4]

Muchos venezolanos experimentaron la formación del Estado gomecista principalmente como un proceso caracterizado por la corrupción predatoria y la represión política. Si bien estas prácticas no eran algo nuevo en Venezuela, se volvieron cada vez más sistemáticas y difíciles de evitar a partir de que el gobierno formó un Estado centralista que sometía a los detentadores del poder en las regiones. En particular, las prácticas a las cuales me refiero como corrupción predatoria —el uso del poder público para el enriquecimiento personal mediante la obtención de recursos de los gobernados— consolidaron alianzas entre Gómez y sus principales aliados, a la vez que definieron gran parte de las relaciones cotidianas entre el Estado y la sociedad.[5]

El control gomecista de la industria del ganado se convirtió en uno de los ejemplos más emblemáticos de la especulación del régimen. Gómez, ganadero de corazón y comerciante de ganado antes de dedicarse a la política, utilizó su poder político para controlar el mercado nacional de ganado y el mercado urbano de carne. Como presidente mantuvo la lealtad de sus principales colaboradores facilitando su participación en el sector del ganado y otros negocios monopólicos. Los gobernadores estatales y oficiales militares con frecuencia se volvieron socios comerciales de Gómez, dedicándose a la compra de ranchos y cabezas de ganado en asociación con el dictador, y utilizando su control de los mataderos municipales para monopolizar los mercados y vender sus productos a precios elevados. Además de defraudar a los consumidores, Gómez y sus aliados obligaban a los rancheros y comerciantes a venderles sus tierras y ganado por debajo de su valor de mercado.

Otros fraudes gomecistas implicaron también monopolios, transacciones coercitivas y colaboración entre funcionarios en diferentes niveles administrativos. Por ejemplo, a pesar de las reformas hacendarias, el régimen siguió recaudando impuestos sobre las bebidas alcohólicas a través de un sistema de arrendamiento de los impuestos que redituó jugosas ganancias para los principales gomecistas, por lo general gobernadores estatales y funcionarios de distrito designados. Igual que los beneficiarios de las rentas públicas a lo largo de la historia, los venezolanos que gozaron de estas concesiones no sólo obtuvieron el beneficio de percibir ingresos muy superiores a los montos declarados ante Hacienda, sino que les fue permitido abusar de su autoridad para monopolizar la producción y venta de alcohol en su jurisdicción, forzar a los competidores a abandonar el negocio y vender sus productos a precios inflados. Mientras tanto, las localidades padecieron otras formas de

corrupción predatoria a manos de varias autoridades, como los funcionarios de distrito que imponían multas no autorizadas, alcaldes que controlaban los mercados locales de comida o redes de funcionarios que se apropiaban de las tierras públicas cultivadas por campesinos colonizadores. Estas formas predatorias de enriquecimiento consolidaron vínculos entre los gomecistas y alejaron a los ciudadanos del creciente poder del Estado.

El *boom* petrolero que inició en los años veinte dio al régimen una nueva fuente de ingresos y desfalco, uno que no requería obtener recursos directamente de la población. El petróleo era explotado mediante un sistema de concesiones otorgadas a ciudadanos venezolanos, quienes después las vendían a compañías petroleras extranjeras. Los receptores de estas concesiones fueron hombres poderosos del régimen y amigos y parientes de Gómez que no ocupaban puestos políticos prominentes.[6] El beneficio financiero de concesiones particularmente productivas podía ser desorbitante, pero no necesariamente eclipsaba las ganancias de otras fuentes de especulación. Un análisis cuidadoso de la fortuna personal de Gómez sugiere que sólo de 10 a 15% provenía directamente del petróleo.[7] De la misma manera, un gobernador estatal que exprimía todo el beneficio potencial del arrendamiento del impuesto de licores durante un determinado número de años quizá podía ganar más a través de esta fuente que con una concesión de petróleo.[8] No obstante, el dinero proveniente del petróleo benefició a Gómez y sus asociados de varias maneras, no sólo a través de concesiones. El Ministerio de Relaciones Interiores administraba un fondo especial con el que hacía pagos regulares a partidarios y amistades y que se fue elevando drásticamente conforme se incrementaron los ingresos del petróleo.[9] De tal manera, el sistema de malversación de fondos, que en gran medida cohesionó al Estado gomecista, combinó las prácticas predatorias —mediante las cuales extraían recursos directamente de la población— y las manipulaciones financieras, como concesiones petroleras y sobornos a los partidarios que privatizaron la riqueza nacional, pero no tomó los recursos directamente de los ciudadanos, una diferencia que retomaremos en el análisis de la transición posterior a Gómez.

Otro sello distintivo del Estado gomecista fue el sistema de vigilancia y los presos políticos. A través de una red de espías e informantes, el ejército y la policía persiguieron a los opositores reales e imaginarios del régimen. Los transgresores políticos normalmente fueron confinados en la prisión La Rotunda de Caracas o en el Castillo Libertador en Puerto Cabello, comúnmente encadenados con grilletes en los tobillos; algunos fueron torturados o asesinados. Las prisiones también desempeñaron un papel importante dentro del sistema de corrupción predatoria. Quienes se rehusaban a vender sus propiedades a Gómez a los precios por él establecidos en ocasiones eran encarcelados y las familias de los prisioneros políticos debían sobornar a los oficiales a cargo para que les fuera permitido llevarles incluso una miserable ración de comida. Conforme las historias de humillación y horror se fueron filtrando fuera de las prisiones a principios de la década de 1910, se desató una “psicosis de terror” en Venezuela.[10]

A partir de 1913 comenzaron a brotar movimientos de oposición esporádicos —levantamientos de caudillos, protestas estudiantiles y conspiraciones de oficiales jóvenes del ejército—, y entre 1928 y 1929 se concentraron los disturbios más importantes. En febrero de 1928, los estudiantes afiliados a la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV) de Caracas transformaron un festival universitario en una protesta demandando libertad política y económica.[11] Tras la detención de los líderes por parte de la policía, surgieron protestas estudiantiles mayores y alrededor de 200 estudiantes fueron arrestados. Hombres y mujeres de todas las clases sociales tomaron las calles en apoyo a los estudiantes, y Gómez, sorprendido ante este desafío, optó por liberar a los jóvenes presos.[12] Es así como nació la Generación de 1928, un extraordinario grupo estudiantil —conformado, entre otros, por Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Jóvito Villalba, Rodolfo Quintero y Miguel Otero Silva— que ejerció una profunda influencia en la vida política e intelectual durante más de cuatro décadas. Los ideólogos de Gómez etiquetaron a los disidentes como "comunistas" e hicieron una revisión de la constitución para prohibir la propaganda comunista, aunque en ese tiempo muy pocos estudiantes estaban adheridos a una ideología formal. Algunos se unieron al levantamiento de abril dirigido por oficiales jóvenes del ejército al que las fuerzas militares derrotaron por un escaso margen, mientras otros participaron en sublevaciones caudillistas que fueron abatidas severamente a fines de 1929. Afortunadamente para Gómez y sus aliados, el punto más alto de este conflicto político pasó cuando sobrevino la crisis económica mundial.

La Gran Depresión golpeó severamente a la economía agropecuaria de exportación, el medio de subsistencia de muchos venezolanos.[13] La caída del precio del café en 70% entre 1928 y 1934 resultó catastrófica para muchos productores venezolanos. El gobierno otorgó créditos a los hacendados a través del nuevo Banco Agrícola y Pecuario, pero muchos de ellos invirtieron los fondos en bienes raíces urbanos o en el comercio, y permitieron al banco confiscar sus haciendas hipotecadas. Los cultivos de exportación siguieron en su mayor parte en manos de grandes y pequeños productores, pero la rentabilidad de estos negocios jamás logró recuperarse. Economías de café similares, como las de Costa Rica y Colombia, lograron sortear la depresión con mayor éxito que Venezuela, donde los cultivadores enfrentaron obstáculos particulares que agravaron los efectos del desplome del mercado.[14] Desde fines del siglo XIX, los observadores han señalado que los cafetos venezolanos producían cosechas considerablemente menores que las de Centroamérica y otras regiones sudamericanas, debido en parte a las técnicas deficientes de cultivo, pero principalmente a causa de que las tierras de cultivo venezolanas no son del todo propicias para el café. Asimismo, los desarrollos asociados con la depresión incrementaron el valor del bolívar venezolano, lo que causó más daño a los exportadores agropecuarios. La devaluación del dólar estadunidense y la relativamente rápida recuperación de las exportaciones venezolanas de petróleo se combinaron para incrementar el valor de cambio del bolívar, que el gobierno de Gómez decidió en 1934 mantener a una tasa cambiaria de 3.93 bolívares por dólar, una revaluación

sustancial en comparación con la tasa de 5.24 bolívares de 1928-1929.[15] Esto tuvo sentido dentro de la creciente dependencia del Estado en la recaudación impositiva en moneda nacional de las compañías petroleras, pero aumentó la carga a los exportadores y redujo los incentivos para la industrialización por la contención de los precios de los productos importados.[16] Incluso sin las repercusiones de la Gran Depresión, la agricultura tarde o temprano habría tenido que enfrentar las consecuencias de una productividad baja y de la reorientación de la economía nacional hacia el petróleo; sin embargo, la crisis concentró los efectos de esos desarrollos en pocos años.

La fuerza del sector del petróleo así como la administración fiscal de Gómez evitaron una crisis económica de grandes dimensiones en el país. El *boom* petrolero que comenzó a mediados de los años veinte había permitido al régimen acumular reservas por 100 millones de bolívares para 1929, lo que proporcionó un colchón en el momento de la crisis.[17] El precio de exportación por barril de petróleo cayó de 1.97 dólares en 1929 a 0.78 en 1933, pero tuvo una ligera recuperación en 1936 al llegar a 1.11 dólares por barril. Más importante aún, el volumen de las exportaciones de petróleo, que en 1934 recuperó el nivel anterior a la depresión, aumentó a 139 millones de barriles en 1935, el nivel más alto en la historia de Venezuela, y posteriormente a 150 millones de barriles en 1936.[18] De tal manera, a pesar de que los ingresos de exportación y los ingresos públicos sufrieron una disminución sustancial a principios de los años treinta, el régimen logró manejar la situación. Gómez también impuso diversos recortes en las finanzas del Estado a principios de los años treinta, eliminando incluso algunos de los privilegios de sus colaboradores. Los funcionarios gomecistas, quizá buscando la manera de compensar esas restricciones para su enriquecimiento ilícito, comenzaron a forcejear en los negocios privados en los que antes gozaban de impunidad.[19] Como consecuencia, el ministro británico no tardó en escuchar “ciertos rumores” en contra del régimen entre los principales empresarios “que incluso se habían vuelto más o menos del conocimiento público”[20] hacia fines de 1933, aunque no surgieron nuevas revueltas.

La oposición en el exilio

Los efectos económicos inmediatos de la Gran Depresión, entonces, fueron considerables pero no transformadores. Las consecuencias más importantes de la Depresión en el largo plazo fueron políticas y, en cierto sentido, indirectas, ya que al principio se manifestaron fuera de Venezuela. La polarización ideológica intensificada por la crisis en la mayor parte del mundo no pudo ser debatida públicamente dentro de Venezuela en vida de Gómez, pero los activistas en el exilio exploraron libremente las ideologías radicales a partir de los años veinte y, tras la muerte del dictador, las inyectaron a la política nacional. Dos grupos venezolanos de izquierda en particular, uno aliado con la Internacional Comunista y otro independiente de ella,

absorbieron la influencia de las corrientes marxistas y nacionalistas que circulaban por América Latina. Gustavo Machado, el venezolano más prominente que mantenía vínculos con la Internacional Comunista, había sido exiliado por Gómez en su adolescencia; más adelante participó en el establecimiento del Partido Comunista cubano y estuvo al servicio de Augusto César Sandino en Nicaragua. Junto con otros exiliados venezolanos fundó el Partido Revolucionario Venezolano (PRV) en México en la década de 1920; en 1931, sus aliados en Venezuela fundaron el Partido Comunista de Venezuela (PCV), más reducido, que se convirtió en miembro de la Internacional Comunista en 1935.[21] Algunos de los estudiantes que participaron en las protestas de 1928, como Rodolfo Quintero y Miguel Otero Silva, se convirtieron en miembros dirigentes de la facción comunista venezolana.

Un segundo grupo de jóvenes en el exilio se inclinó por un análisis marxista de Venezuela, pero se mantuvo independiente de la Internacional Comunista y, por lo mismo, separado del PRV de Machado y del PCV. Este grupo giró en torno a Rómulo Betancourt y otros veteranos de las protestas de 1928, como también con activistas e intelectuales más viejos.[22] Con el nombre de Agrupación Revolucionaria de Izquierda (ARDI), se reunieron en Colombia en marzo de 1931 para emitir su primer manifiesto, el Plan de Barranquilla. Betancourt —hombre provocador que portaba gafas y fue el principal autor del plan— argumentaba que Venezuela no ganaría mucho derrocando a Gómez a menos que también desarraigase la configuración de los intereses en los que se fundamentaba su régimen. El gomecismo no era un simple sistema de gobierno personal, recalcaba la ARDI, sino más bien una alianza estructural de latifundistas, caudillos y capital extranjero capaz de sobrevivir sin Gómez. El plan, por lo tanto, demandaba una reforma agraria, el empoderamiento del proletariado y reformas para poner fin a los efectos nocivos de la "penetración capitalista extranjera".[23] Haciendo hincapié en la formación estructural del poder gomecista, la declaración marcó un claro avance sobre las proclamaciones de oposición que jamás se habían aventurado más allá de diatribas en contra de Gómez. Asimismo, el análisis de la ARDI estableció también un estándar muy alto para una transición aceptable posterior a Gómez. Cualquier otra medida menor a una transformación de las estructuras de poder quedaba excluida por considerarse la perpetuación del gomecismo.

En los años de exilio subsiguientes, Betancourt y su círculo continuaron absorbiendo diversas influencias —el aprismo peruano, el desarrollo de la Revolución mexicana y varias tendencias de marxismo europeo— cada vez más inclinadas por la izquierda. Betancourt se instaló en Costa Rica, donde colaboró con la organización del Partido Comunista, que en ese tiempo no estuvo afiliado a la Internacional Comunista. En un panfleto de 1932, abordó uno de los temas que habían quedado sin resolver en el Plan de Barranquilla, la relación entre la ARDI y la burguesía. Betancourt confesó que la ARDI había titubeado en denunciar a los empresarios porque algunos de ellos habían apoyado a los estudiantes en 1928, pero ahora afirmaba que los revolucionarios verdaderos debían proclamar una "franca y concreta declaración de guerra" en contra de la burguesía como clase con el fin de crear un "nuevo tipo de Estado,

antiimperialista y socialista, un instrumento de la población para alcanzar la justicia social".[24] Para fines de 1935, Betancourt y sus asociados exploraban activamente la posibilidad de una alianza de frente popular con Machado y los comunistas.[25] La muerte de Gómez el 17 de diciembre de 1935 interrumpió esos planes y los exiliados comenzaron a planear su regreso.

López Contreras y las protestas de 1935-1936

El ministro de Guerra de Gómez, el general Eleazar López Contreras, se convirtió en presidente interino por votación del gabinete poco después del fallecimiento del dictador. De educación católica, caballeroso y, como Gómez, oriundo del estado de Táchira, López tenía la virtud de ser aceptable tanto para los generales gomecistas veteranos como para los oficiales jóvenes más profesionalizados del ejército.[26] En 1899, a los 16 años de edad, López se unió al levantamiento dirigido por Cipriano Castro y Gómez para después continuar su carrera en el ejército. A diferencia de muchos oficiales gomecistas, López apoyó el entrenamiento profesional y la promoción de oficiales jóvenes. Se forjó también una reputación por su administración honesta en medio de la corrupción del régimen y elevó su imagen pública cuando en abril de 1928 actuó con moderación para sofocar la rebelión de los militares jóvenes y los estudiantes, impidiendo una matanza de los rebeldes derrotados. A pesar de su inconformidad manifiesta por las acciones más abusivas del régimen, jamás titubeó en su lealtad personal al dictador, de manera que Gómez, al nombrarlo ministro de Guerra en 1931, lo favoreció como su posible sucesor. Al asumir la presidencia a fines de 1935, no se le identificaba con ninguna facción o ideología; de hecho, a lo largo de su gestión, López se abstuvo de unirse o establecer un partido político formal, afirmando que sus políticas se inspiraban solamente en los ideales de Simón Bolívar.[27] Clichés aparte, López había desarrollado los agudos instintos políticos necesarios para sobrevivir en un ejército altamente politizado, que por su parte le prestó buen servicio durante su gestión presidencial.

El país que López presidió se encontraba prácticamente sin organización política o laboral a fines de 1935. Debido a que Gómez había prohibido todos los partidos políticos, en Venezuela sólo operaba el reducidísimo y clandestino PCV. Asimismo, el dictador había eliminado prácticamente toda organización laboral, de manera que, salvo por disturbios ocasionales entre campesinos, trabajadores del petróleo y urbanos, bajo el régimen de Gómez sólo existieron algunos sindicatos pequeños. David y Ruth Berins Collier han demostrado que el grado de sindicalismo de Venezuela en 1935 fue más bajo que los niveles alcanzados años antes en México, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Cuba, Perú y Colombia.[28]

Esta falta de organización política y laboral subraya la naturaleza espontánea y popular de las protestas que sacudieron a toda Venezuela a fines de 1935 y principios de 1936.[29] Dos días después de la muerte de Gómez se desataron disturbios en Caracas y pronto se extendieron a

otras ciudades. La muchedumbre saqueó los negocios y las casas de los principales funcionarios gomecistas. Decidido a evitar fatalidades, López fue cauteloso en el uso de la policía y el ejército para reprimir a los manifestantes, quienes normalmente dirigían su rabia hacia las propiedades y no hacia las personas.[30] En las áreas rurales, campesinos y trabajadores atacaron las fincas de los gomecistas, quemaron cultivos, mataron ganado, destruyeron bardas e invadieron tierras de cultivo.[31] Los manifestantes, por lo general, arremetieron en contra de los frutos de las prácticas corruptas, como las propiedades de Gómez en los estados centrales de Aragua, Carabobo y Guárico. Asaltos similares ocurrieron en contra de las propiedades de gomecistas en el estado occidental de Lara, donde la transferencia de tierras públicas a los aliados del régimen había desposeído a los campesinos.[32] Los actos de violencia más graves ocurrieron en las zonas petroleras del estado occidental de Zulia y su capital, Maracaibo, donde murieron decenas de personas y las propiedades de las compañías fueron atacadas, obligando a los ingenieros extranjeros a refugiarse en los barcos fuera de la costa.[33] Conforme las protestas barrían a todo el país, Venezuela parecía estar maduro para la organización de un movimiento populista multiclasista, o quizá para una guerra civil.

UN CONSENSO PRECARIO

López de inmediato subrayó su disposición para llevar a cabo un cambio ordenado. Mediante una serie de reformas simbólicas y sustanciales se disoció del viejo régimen. Permitió el regreso de los exiliados políticos, liberó a los presos políticos y ordenó la demolición de La Rotunda, la infame prisión de Caracas. Por orden suya, 15 toneladas de cadenas y grilletes del igualmente infame Castillo Libertador en Puerto Cabello fueron cargadas en una barcaza y sumergidas en el fondo del mar, mientras que en la costa una multitud escuchaba el discurso pronunciado por el poeta y ex prisionero Andrés Eloy Blanco.[34] López también puso fin a las formas más viles de corrupción con el desmantelamiento de los monopolios gomecistas que habían controlado desde la carne y el pescado hasta la lotería.[35] A principios de febrero, de acuerdo con los diplomáticos británicos, corrían “rumores de inconformidad entre los oficiales del ejército que habían sido privados de sus privilegios ilegales y hoy se ven obligados a vivir con magros niveles de sueldo”.[36] La corrupción financiera sin duda continuó, pero la obtención coercitiva de recursos directamente de los ciudadanos por los abusivos funcionarios —una de las características distintivas del sistema de Gómez— se redujo sensiblemente.[37] Al restringir la corrupción predatoria y cerrar las prisiones políticas, López creó un sentido de ruptura con el pasado. Los venezolanos que se pronunciaron en favor del nuevo presidente denunciaron simultáneamente la “terrible tiranía” del régimen al que fielmente había servido.[38] Si bien algunas figuras odiadas del viejo régimen continuaron

prestando servicios en su gobierno, López en lo personal dejó de ser "gomecista" en el léxico de la política de principios de 1936.

Conforme el presidente se fue distanciando de sus otrora aliados, removiendo gradualmente a muchos de ellos de los puestos oficiales, en la prensa abundaron las especulaciones sobre la ideología o el grupo político naciente por el cual podría inclinarse. Lo cierto es que López claramente buscó identificarse con la tradición liberal que había dominado el discurso político venezolano desde Bolívar; sin embargo, el liberalismo del siglo XIX se consideraba anacrónico, desacreditado por la depresión e incapaz de responder a la evidente necesidad de modernización económica y política del país. El socialismo, el fascismo italiano y el New Deal de Roosevelt ofrecieron puntos de referencia para el debate político, y cada uno tuvo sus partidarios. Ramón Díaz Sánchez, ex juez, político moderado y cauto observador de la transición, señaló que en 1936 Venezuela era repentinamente objeto del "fanatismo político que había cobrado intensidad y velocidad en el mundo mientras que los venezolanos gemían bajo el puño de hierro de Juan Vicente Gómez".[39]

Las presiones para que López definiese la dirección de su gobierno pronto alcanzaron su punto más alto. En la mañana del 14 de febrero, la policía disparó contra una multitud reunida en la Plaza Bolívar de Caracas que protestaba por las medidas de censura impuestas por el gobernador del distrito federal. Esa tarde, Jóvito Villalba, veterano de las protestas estudiantiles de 1928 y presidente de la recientemente reorganizada FEV, encabezó a una furiosa multitud de 50 000 personas hasta el palacio presidencial. Para calmar su indignación, López prometió destituir al gobernador de Caracas, ampliar las libertades políticas e implementar reformas sociales y económicas. Una semana más tarde, publicó el Programa de Febrero, en el que describía "las reformas requeridas para desarraigar gradualmente los vicios del pasado".[40] López prometió en específico promover los derechos laborales, la honestidad administrativa, la educación, el desarrollo económico, asistencia técnica a la agricultura, salud pública y bienestar social. López incluso ordenó que se realizara un "estudio de los problemas relacionados con las grandes propiedades de la tierra, su división y distribución".[41] El Programa de Febrero, de tal manera, abordó muchas de las reformas demandadas por la FEV y otras agrupaciones civiles desde la muerte de Gómez.

La organización política de la izquierda, la derecha y el centro se disparó en las semanas siguientes. A pesar de la prohibición constitucional de la propaganda comunista, se le permitió a Rodolfo Quintero y a otros comunistas fundar el Partido Republicano Progresista (PRP). El programa de partido demandaba la confiscación de las propiedades de Gómez, la redistribución de la tierra, impuestos más altos para las compañías petroleras, una refinería propiedad del Estado, la cancelación de las concesiones de petróleo obtenidas mediante sobornos, y derecho a voto para hombres y mujeres mayores de 18 años, así como reformas menores que replicaban el Programa de Febrero de López. Con la misma línea política de la Internacional Comunista para la formación de alianzas de frente popular, el PRP anunció su

deseo de aliarse con todos los grupos entregados a la erradicación del gomecismo.[42] Por su parte, Betancourt y otros ex integrantes del ARDI fundaron la Organización Venezolana (ORVE), que proclamaba su intención de "unir a los venezolanos y no dividirlos".[43] El manifiesto de la ORVE se retractaba de las declaraciones militantes de sus dirigentes antes de la muerte de Gómez. Los principales puntos de su plataforma eran prácticamente idénticos a los del Programa de Febrero de López, aunque muchos conservadores sospechaban que la ORVE así como el PRP albergaban ambiciones más radicales. En el centro de la política, los miembros progresistas de la burguesía formaron la Unión Nacional Republicana (UNR). De tono reformista moderado, partidaria del Programa de Febrero y abierta a la colaboración con la izquierda, la UNR representaba "la opinión más ilustrada de la clase alta caraqueña".[44] La derecha, indignada por la tolerancia oficial de la izquierda y alarmada ante la perspectiva de su reconciliación con López, formó varios partidos pequeños dedicados a denunciar al marxismo. No obstante, las nuevas organizaciones confluyeron en su mayoría en torno a la promesa de reforma y modernización del Programa de Febrero. De hecho, durante los vertiginosos días de fines de febrero y principios de marzo, parecía que si la ORVE y el PRP formaban organizaciones masivas, bien podrían obligar a López a cumplir sus promesas reformistas.

Resurgimiento conservador y democracia elitista

Finalmente, el PRP, la ORVE y otras fuerzas de izquierda no lograron, por varias razones, controlar la dirección de la transición posterior a Gómez. Los dirigentes de la izquierda cometieron varios errores tácticos que desviaron el debate de las reformas requeridas para la erradicación del gomecismo —un enfoque impulsado por su deseo de lograr un cambio más radical— hacia un debate altamente polarizado sobre el anticomunismo, un tema que unificaba a los conservadores y a muchos moderados, entre quienes crecía el temor de los efectos desestabilizadores de la movilización política desenfrenada. Los estudiantes católicos sin vínculos con el régimen de Gómez desempeñaron un papel importante en este resurgimiento conservador; su versión del anticomunismo, basada en la doctrina social reformista de la Iglesia más que en una reacción en contra del gomecismo, ayudó a López a diseñar un nuevo espacio, diferente tanto del viejo régimen como de la izquierda. Asimismo, los acontecimientos internacionales intensificaron las sospechas de los venezolanos sobre las ideas radicales de la derecha y la izquierda, y permitieron a López posicionarse como el único garante de una transición política hacia un régimen constitucional.

El primer error de cálculo de los dirigentes de la ORVE y el PRP fue aceptar la reagrupación del Congreso existente, formado principalmente por gomecistas, como se programó en abril de 1936.[45] Los dirigentes de la izquierda, quienes habían adquirido una gran popularidad después

de sus triunfos de febrero, aceptaron el argumento de López sobre la necesidad de reunir nuevamente al Congreso con el objetivo de elegir a un nuevo presidente para el periodo de gestión que comenzaría a fines de abril y, con ello, preservar el "hilo constitucional". Algunos izquierdistas presionaron a sus dirigentes para demandar nuevas elecciones al Congreso y una elección presidencial directa; sin embargo, la ORVE y el PRP (como también la más moderada UNR) decidieron que no había tiempo suficiente para organizar las elecciones antes del término de la gestión presidencial en curso. También pensaron que la elección de López era inevitable en cualquier caso y que una ruptura en el orden constitucional podría acarrear una desestabilización política que abriría paso a los gomecistas de línea dura (quienes estaban manifiestamente inconformes con López) para asumir el poder. Entre estos gomecistas radicales mencionados constantemente en los medios de prensa estaban José María García, León Jurado, Vincencio Pérez Soto y Félix Galavís, quienes habían servido a Gómez como comandantes militares y gobernadores estatales, habían participado de lleno en los atropellos de corrupción del régimen y seguían ejerciendo influencia en el ejército. Puesto que López era el único hombre capaz de mantener a raya a los gomecistas de línea dura, los dirigentes de la izquierda aceptaron la reagrupación del Congreso para elegirlo a él para un periodo presidencial completo, con la esperanza de que los legisladores se inclinasen ante la opinión pública y presentasen su renuncia para convocar a nuevas elecciones.[46]

Empero, el Congreso hizo lo opuesto. Una vez electo López, permaneció en sesión y promulgó una legislación con medidas reformistas que favorecían abiertamente los intereses conservadores. Más importante quizá, redactó la Constitución de 1936, que restringía drásticamente los derechos electorales. Mientras que bajo la Constitución anterior todos los hombres mayores de 21 años tenían derecho a voto, la nueva Carta introdujo una condición de alfabetismo obligatorio, lo que inhabilitaba a las dos terceras partes de la población masculina, a la vez que mantenía el sistema de elecciones presidenciales indirectas y la prohibición de las actividades comunistas.[47] Así, la moderación mostrada por los dirigentes de la izquierda al aceptar el Congreso gomecista facilitó la creación de las bases institucionales para el dominio de los conservadores.

El intento de la ORVE de recuperar la iniciativa política a través de la propuesta de reformas educativas demostró ser otro error de cálculo, pues abrió paso a la reagrupación de la derecha y el aumento de su influencia. A fines de abril de 1936, el senador recientemente electo, Luis Beltrán Prieto Figueroa, maestro, activista de la ORVE y organizador de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), organización "militante anticlerical", propuso una ley educativa nacional.[48] La legislación establecería el principio del control del Estado sobre todas las escuelas, las católicas inclusive, que representaba una proporción considerable de alumnos venezolanos matriculados en el nivel secundario. Prieto explicaba que la ley propuesta establecería la educación como "una función exclusiva del Estado (…) que no puede quedar a merced de instituciones privadas ni personas particulares" dentro de una

sociedad moderna.[49] La propuesta desencadenó una serie de feroces críticas en el Congreso (donde no tenía posibilidad alguna de ser aprobada) y en la prensa católica. La izquierda fue acusada de pretender el establecimiento de una educación "socialista" copiada de México.[50] A decir verdad, el anticlericalismo de la izquierda se basaba principalmente en el liberalismo del siglo XIX, pero los conservadores aprovecharon la oportunidad para retratar la iniciativa como una maniobra para privar a los padres y a la Iglesia de su papel en la formación moral e intelectual de sus hijos.[51] Poco después del rechazo de la ley por parte del Senado, el debate se encendió de nuevo cuando un equipo de educadores chilenos, contratado por partidarios de la ORVE que trabajaban en el Ministerio de Educación, formularon recomendaciones que replicaron en su mayor parte la propuesta de Prieto. Los conservadores venezolanos habían intentado antes tachar de comunistas a Betancourt y la ORVE señalando sus actividades en el exilio y argumentando que su colaboración con López encubría intenciones más radicales y de largo plazo; el debate educativo otorgó a dichas acusaciones una inmediatez de la que había carecido años atrás y condujo a la movilización de los católicos laicos. Miles de mujeres católicas de clase media y alta marcharon y firmaron pliegos petitorios en defensa de la educación religiosa a lo largo de 1936. Díaz Sánchez observó que la campaña anticlerical de la izquierda proporcionó "el elemento más eficaz para la cohesión de los sectores reaccionarios dispersos".[52]

Los estudiantes católicos sin filiación gomecista asumieron un papel particularmente prominente en el movimiento anticomunista. La Iglesia católica venezolana, aunque históricamente débil comparada con gran parte de América Latina, había ganado fuerza institucional bajo el gobierno de Gómez, a pesar de las riñas esporádicas que sostuvo con el dictador. Las crecientes escuelas católicas de Caracas y otras ciudades se convirtieron en importantes centros de actividad para la acción católica, el movimiento organizado por el Vaticano para fortalecer el compromiso religioso y social laico en un mundo cada vez más secular donde las ideologías de izquierda supuestamente constituían una poderosa amenaza latente para la fe. Juventud Católica, una rama de Acción Católica organizada en Venezuela en 1933, resultó ser un medio eficaz para la divulgación de la doctrina social católica, que abogaba por la implementación de reformas moderadas para aliviar los efectos más severos del capitalismo irrestricto, rechazaba los conflictos de clase y minaba la influencia socialista en la clase trabajadora.[53] Rafael Caldera Rodríguez, de mente brillante y devoto alumno de una escuela jesuita de Caracas, fungió como primer secretario de Juventud Católica; en 1936, a los 20 años de edad, era un estudiante de leyes afiliado a la FEV. Cuando la FEV apoyó la legislación de Prieto y demandó también la expulsión de la orden jesuita, cuyos miembros habían denunciado públicamente la ley educativa propuesta, Caldera y otros estudiantes católicos se separaron de la FEV y fundaron la Unión Nacional Estudiantil (UNE).[54]

Para los estudiantes de ambas facciones, los temas internos que provocaron su división estaban enmarcados dentro del contexto internacional acaparado cada vez más por los

acontecimientos en España. El triunfo electoral de la izquierda española en 1936, unida en un frente popular, desencadenó a principios de ese año una ola de ataques contra las iglesias, el clero y los íconos religiosos en todo el país, reproduciendo el patrón de violencia que había surgido periódicamente desde la declaración de la República en 1931. Muchos miembros de la FEV respaldaron de manera entusiasta a la izquierda española y provocaron el rechazo total de los estudiantes católicos venezolanos, entre ellos Caldera, quien seguía de cerca los acontecimientos españoles. Caldera fue admirador de José María Gil Robles, un prominente dirigente católico de la derecha moderada española en cuya opinión el país no se encontraba ya dividido entre monarquistas y republicanos, sino más bien entre marxistas y sus opositores.[55] La certeza de Caldera sobre una lucha internacional entre el catolicismo y el comunismo se había agudizado a partir de su asistencia a fines de 1933 a un congreso de Acción Católica en Roma de dirigentes estudiantiles españoles y latinoamericanos, entre ellos el futuro presidente chileno Eduardo Frei Montalva.[56] Las autoridades gomecistas, si bien simpatizaron con los objetivos anticomunistas del movimiento social católico, se mostraron recelosos de su mensaje reformista, por lo que censuraron la correspondencia de Caldera a su regreso al país y lo interrogaron con respecto a una carta vagamente sospechosa de un estudiante peruano.[57] Tras la muerte de Gómez y el reinicio del debate ideológico sobre la dirección y el grado de cambio en Venezuela, los estudiantes católicos encabezados por Caldera estaban determinados a emprender un camino reformista que reflejara las enseñanzas de la Iglesia. Igual que Betancourt y la ORVE, Caldera y la UNE respaldaron el Programa de Febrero, pero los temas de la educación, la expulsión de los jesuitas y la crisis española hicieron imposible la colaboración.

Caldera se convirtió en una voz de autoridad en la definición de la postura reformista conservadora, denunciando a la izquierda como inherentemente revolucionaria y al gomecismo como reaccionario. A fines de mayo publicó un artículo ampliamente divulgado en el que denunció la colaboración entre el PRP y la ORVE, con la acusación de que conduciría a una alianza de frente popular tal como lo proponía la Internacional Comunista. Argumentaba que dicha alianza estaría controlada por los comunistas, como en el caso de Francia y España, y buscaría una revolución total. Caldera instó a López a que organizara un partido multiclasista que propugnase por una reforma moderada. De tal manera, Venezuela tuvo la opción de elegir entre “una revolución total, y con ella la guerra civil y la muerte de la República, o bien una evolución gradual mediante un progreso eficaz que sólo podría lograrse a través de orden, justicia y estabilidad”.[58] Aunque López jamás formó el partido propuesto por Caldera ni abrazó el catolicismo social como ideología de gobierno, lo que sí hizo fue cultivar el apoyo católico mediante el subsidio de las publicaciones de la UNE y asistiendo ocasionalmente a sus asambleas.[59] El propio Caldera fue contratado en la Oficina Nacional del Trabajo para ayudar en la redacción de la nueva ley laboral.

Si bien la advertencia de Caldera acerca de la revolución izquierdista y la guerra civil fue

tomada por muchos como una exageración, los acontecimientos no tardaron en dar cierta credibilidad a su predicción. El 9 de junio, la izquierda convocó a una huelga general de un día como protesta por la aprobación de la Ley Lara por parte del Congreso, que restringía la organización política, y para exigir elecciones para una asamblea constituyente. El éxito inicial de la huelga llevó a los dirigentes de la ORVE y el PRP a cometer un error fatal: extendieron la huelga, escribe Ellner, "por otras 24 horas y después indefinidamente (…) Al no haber una fecha previsible para el fin de la huelga, la maniobra fue interpretada como un llamado a la insurrección popular".[60] Los dirigentes de izquierda recapacitaron y levantaron la huelga el 13 de junio, pero el fantasma de la insurrección ya había alejado a importantes aliados. La moderada UNR cesó su colaboración con la izquierda, y la prensa centrista de Caracas, que en ocasiones había simpatizado con la ORVE, le dio la espalda. Algunos moderados, como Mariano Picón Salas, renunciaron a la ORVE, que había iniciado una confrontación más abierta con López, una jugada aplaudida por el PRP.[61]

La polarización de mediados de 1936 se profundizó con la reacción de los conservadores en contra del creciente activismo de las mujeres progresistas. Aunque los dirigentes varones de la ORVE mostraban un rezago con respecto a sus contrapartes del PRP en cuanto a las cuestiones de género, las activistas femeninas vinculadas con todos los principales grupos de izquierda demandaban igual derecho a voto, protección legal, incorporación a los sindicatos, mayor acceso a la educación e incluso información sobre planificación familiar. El grupo de mujeres más destacado, la Agrupación Cultural Femenina (ACF), se había organizado poco antes de la muerte de Gómez y pronto incorporó a mujeres afiliadas tanto con la ORVE como con el PRP. La ACF contaba con muchas maestras que trabajaban en un plan de reforma educativa y apoyó la huelga de junio. De acuerdo con Ana Senior, veterana activista de la ACF, algunos venezolanos reaccionaron negativamente cuando ella y sus colegas "tomaron las calles para luchar en favor de los derechos de las mujeres, ayudaron a los sindicatos, apoyaron a la República española; de manera que nos etiquetaron como un grupo de mujeres locas, prostitutas".[62] Los conservadores, en especial la jerarquía católica, sentían espanto ante esta creciente manifestación de las mujeres de izquierda que cuestionaban las relaciones tradicionales de poder basadas en el género.

Entre estas profundas divisiones, López siguió combinando reformas con restricciones de las actividades políticas. A mediados de julio aprobó la nueva Constitución, que excluía a los votantes iletrados, no obstante, la carta proporcionaba bases para la confiscación legal de las propiedades de Gómez, satisfaciendo así una demanda popular. Hacia fines de 1936, el gobierno había comenzado a parcelar algunas de las tierras de cultivo confiscadas y a repartirlas entre los campesinos.[63] A mediados de julio, López firmó la nueva ley laboral, que fortalecía claramente los derechos de los obreros para organizarse, negociar y emplazar a huelga. En los meses restantes de ese año, 109 sindicatos nuevos con 56 000 afiliados recibieron reconocimiento legal. No obstante, como argumentan los Collier, la legislación se

inclinó hacia un control del trabajo de arriba abajo, considerando las "limitaciones" por encima de los "beneficios".[64] Los requerimientos de la ley resultaron particularmente difíciles para los sindicatos campesinos, pues a pesar de la intensa movilización desplegada durante las protestas tras el fallecimiento de Gómez, sólo tres obtuvieron reconocimiento legal en 1936.[65] Una parte de los sindicatos campesinos y obreros establecidos en 1936 se alió con la ORVE y el PRP, en la izquierda, mientras que otra parte se asoció con la conservadora Unión General de Trabajadores (UGT), que propugnaba por un "sindicalismo apolítico" a la vez que denunciaba el comunismo.[66] Así, tanto en contenido como en efecto, la ley laboral de 1936 reflejaba el camino conservador de la incorporación del trabajo defendida por Caldera, quien, a pesar de su juventud, colaboró en la redacción de la legislación.[67]

Pocos días después de que López firmó la ley, los generales nacionalistas españoles se rebelaron en contra de su gobierno de frente popular e iniciaron una guerra civil impulsada por tensiones sociales y políticas que se habían vuelto mucho más violentas desde la caída de la monarquía en 1931. La mayor parte del mundo occidental percibía la Guerra Civil española como una lucha transnacional entre el fascismo y el comunismo, ya que tanto Alemania como Italia proporcionaron ayuda a los nacionalistas, mientras que la Unión Soviética apoyó a los republicanos. No obstante, como Mark Falcoff ha observado, muchos latinoamericanos vieron la confrontación en términos más generales como "la disputa entre dos caminos con rumbo a la modernización", que en un sentido amplio reflejó las opciones políticas que se encontraban en debate en las otrora colonias españolas; es decir, si la modernización podía alcanzarse en el contexto de las instituciones existentes o si requería de transformaciones revolucionarias del Estado y la sociedad.[68]

Durante la segunda mitad de 1936, los venezolanos de todo el espectro político se preguntaban si el conflicto español podría presagiar su propio futuro. Observaron que las cuestiones que dividían a la "madre patria" —el anticlericalismo, la educación, la reforma agraria, el sindicalismo, el papel político de los militares y los derechos de la mujer— polarizaban la política en Venezuela. En sus artículos para el diario gráfico *Ahora,* Antonio Arraiz, veterano de las protestas de 1928 y entonces alineado con el socialismo, argumentaba que la política en Venezuela "ha venido siguiendo una curva paralela a la marcha de los sucesos en España. Ya lo habíamos predicado muchos de nosotros: esa guerra habría de tener consecuencias inmediatas sobre nuestras nacionalidades hispanoamericanas, y muy particularmente sobre nosotros".[69] Betancourt, en uno de los comentarios más militantes sobre la Guerra Civil española, argumentó que sólo se trataba del conflicto más reciente en demostrar que "Las libertades se pelean y se conquistan en recia batalla, al precio de cuotas no regateadas de sacrificios de todo orden […] España, desangrada y heroica, batalladora e inmensa, le está dando un ejemplo al mundo entero, de cómo se muere y de cómo se lucha por la Libertad".[70]

En la derecha moderada, el periódico estudiantil católico de la UNE también retrató a la

guerra como relevantemente vital para Venezuela. Pero más que celebrar el conflicto como un ejemplo inspirador, las editoriales del periódico sugerían que la experiencia española constituía una advertencia para Venezuela:

> España, repetimos, sigue siendo todavía nuestra madre. Sus problemas, aparte necesarias diferencias específicas, son en gran parte nuestros mismos problemas. Con excelsitud maternal padece en su propio cuerpo los dolores de graves experiencias, para que esa experiencia sirva a sus hijos para evitar tremendas sacudidas.

Asimismo, los editores advertían: "El triunfo de Rusia o su fracaso en la tierra española significa el triunfo o el fracaso de Rusia en tierra americana".[71] El apoyo de la UNE a Francisco Franco en ocasiones se moderaba por el rechazo a sus aliados de la Alemania nazi y la falange española; no obstante, la organización respaldó con entusiasmo su cruzada anticomunista. Los estudiantes católicos advirtieron reiteradamente sobre los peligros que una victoria republicana podría tener tanto para España como para Venezuela.[72]

El interés por el conflicto español no se limitó a la prensa o los pequeños círculos de activistas políticos. En los cines de Caracas, los cortos noticiosos con imágenes de Franco y su ejército arrancaban aclamaciones en las plateas y silbidos de desaprobación en las galerías. El intercambio de opiniones llegó a ser tan estrepitoso que la policía debía intervenir.[73] Asimismo, los partidarios de los republicanos y los nacionalistas realizaban colectas de fondos para enviar a la Península. El fervor anticomunista en los eventos conservadores incitaba a algunos participantes a hacer el saludo fascista con el brazo en alto, como recordó con desaprobación Caldera años más tarde.[74]

El historiador Víctor Sanz, a pesar de su simpatía por la izquierda española, argumenta que "un sector muy amplio" de los venezolanos no se inclinaba por ninguno de los dos bandos españoles.[75] La derecha española les recordaba su propia historia de caudillismo y temían que la izquierda española fuese demasiado radical. De tal manera, su reacción primordial ante la guerra fue de tristeza por el "fratricidio" y el deseo de evitar una tragedia parecida en Venezuela.[76] Aunque Sanz se abstiene de argumentar que las percepciones sobre España moldearon la transición venezolana de los años treinta, su análisis sugiere que, en última instancia, dichas percepciones obraron en contra de la izquierda, al grado de convertirse para los venezolanos en un referente para interpretar su propia política.[77] Para los venezolanos que se cuestionaban si la política de masas y el debate ideológico libre podían reconciliarse con la búsqueda pacífica de la modernización, en España encontraban una historia aleccionadora.[78] Pocos siguieron a Betancourt en su adopción del prospecto de una lucha política violenta, que cada vez más parecía ser el único camino para que la izquierda venezolana alcanzase el poder.

En agosto, puesto que los gomecistas radicales demandaban medidas más fuertes en contra de la izquierda, López dio nuevos pasos para aislar aún más al PRP, la ORVE y otros grupos progresivos.[79] Comenzó por denunciar a los dirigentes de la izquierda como "agitadores

profesionales", y después, el 12 de septiembre de 1936, hizo un llamado a "las personas honorables de Venezuela" para organizarse "en defensa de los sagrados intereses de la madre patria".[80] El 20 de septiembre, López brindó una cálida acogida a los dirigentes de la recién formada Liga para la Defensa Nacional en el palacio presidencial y elogió su orientación anticomunista. El dirigente principal de la Liga fue Juan Bautista Araujo, un caudillo antigomecista, y Caldera, el joven letrado, fungió como su principal vocero. Dirigiéndose directamente al presidente, Caldera descartó la opinión generalizada de que López podía contener a la izquierda sólo con la ayuda de los gomecistas. Destacando que "el pueblo de Venezuela integralmente se humilló (ante el despotismo)" bajo la dictadura y que se oponía a que los gomecistas volviesen al poder, Caldera le aseguró a López: "A los comunistas puede usted combatirlos con el grueso de la población de Venezuela, de la población verdaderamente honrada y patriota de nuestro país".[81] El periódico del PRP, *El Popular,* buscó desacreditar a la liga tildando a sus miembros de "servidores de la barbarie gomecista, viejos y adolescentes con las conciencias hipotecadas a la Compañía de Jesús, vociferantes mercenarios de Wall Street, lidercillos traidores a la clase obrera, latifundistas y caudillos".[82] A pesar de todo, con el apoyo de López la liga se convirtió en una de las principales organizaciones del movimiento anticomunista. Igual que la UNE, señalaba a España como un ejemplo del daño causado por la "gangrena social" del comunismo, que amenazaba con crear en Venezuela el mismo "estado de duelo, desolación y ruina" que prevalecía en la madre patria.[83]

La decisión de López de asumir una firme postura personal con la causa anticomunista obviamente puso a la izquierda a la defensiva. A fines de octubre, en busca de seguridad en la unidad, los dirigentes de la izquierda formaron un solo partido integrado por el PRP, la ORVE, grupos obreros aliados y la FEV, pero el gobierno se mostró imperturbable. Previsiones de la Ley Lara y la prohibición constitucional de la actividad comunista sirvieron para negar el registro legal al Partido Democrático Nacional (PDN), nombre del pretendido partido de la izquierda unida. El PDN apeló la decisión ante las cortes argumentando que en su dirigencia no había comunistas y subrayando esta distinción de las alianzas de frente popular europeas. En un tono menos conciliador, la apelación hacía referencia a los opositores del PDN como gomecistas y agentes del papa que conspiraban para la creación de "un régimen teocrático".[84] A mediados de diciembre, las cortes denegaron la apelación del PDN.[85]

La izquierda tuvo una última oportunidad para movilizar el apoyo popular. A lo largo de 1936, activistas asociados con el PRP y la ORVE colaboraron en la formación de sindicatos entre los trabajadores venezolanos del petróleo en Zulia. Presentaron un emplazamiento a huelga para mediados de diciembre argumentando la negativa de las compañías a reconocer los sindicatos y emprender negociaciones colectivas. Conformado por alrededor de 20 000 obreros, el movimiento de huelga despertó una solidaridad nacionalista prácticamente uniforme en todo el espectro político.[86] Incluso la UNE de Caldera reconoció la lucha de los obreros en contra del "imperialismo" extranjero, aunque criticó a la izquierda por su intento

de imponer “una dictadura absoluta de los sindicatos sobre los trabajadores”.[87] López permitió que la huelga se prolongara durante más de un mes antes de terminarla el 22 de enero de 1937, al amparo de una previsión de la ley del trabajo de 1936. Ordenó un incremento salarial de un bolívar diario para los trabajadores que ganaran nueve bolívares o menos, pero no obligó a las compañías a reconocer a los sindicatos de la izquierda. Los trabajadores del petróleo, temerosos de una intervención militar en el caso de rechazar el arreglo, regresaron a sus trabajos.[88]

Al advertir que la solidaridad pública por los trabajadores huelguistas no había generado un mayor respaldo para la izquierda, López hizo un movimiento decisivo en contra de sus opositores. A principios de febrero, el gobierno revocó el estatus legal de las principales organizaciones políticas de izquierda y obreras, entre ellas el PRP, la ORVE, el ala política de la FEV y las confederaciones laborales de oposición, aludiendo a la prohibición de las actividades comunistas.[89] Los miembros de los grupos proscritos que habían obtenido escaños en el congreso en las elecciones de enero de 1937 fueron despojados de sus puestos.[90] En marzo, López ordenó el arresto y exilio de 47 dirigentes de oposición, una vez más aludiendo a la prohibición legal en contra del comunismo. Este ataque en contra de las organizaciones políticas y laborales que habían formado parte importante de la transición posterior a Gómez, sorprendentemente, tuvo muy escasa oposición. La prensa destacó un aire de intranquilidad pública generalizada, pero un intento de la FEV y un grupo de obreros de Caracas para organizar una huelga tuvo poca resonancia.[91] López había calculado meticulosamente los límites de represión aceptables para la opinión pública. Continuó con la implementación de reformas moderadas adicionales dentro de un marco económico liberal, a la vez que seguía acallando a la izquierda. En 1941 delegó el poder en un sucesor de su elección, Isaías Medina Angarita, otro oficial militar y ministro de Guerra oriundo de Táchira, confirmado mediante el sistema de sufragio restringido y elecciones indirectas creado en 1936.[92]

Conclusiones

La aceptación pasiva por parte de los venezolanos de las medidas severas de 1937 en contra de las organizaciones populares representó un contraste drástico en comparación con la movilización generalizada desatada tras la muerte de Gómez que culminó con las demandas de democracia y reforma económica en febrero de 1936.[93] En parte, el debilitamiento del movimiento popular fue consecuencia de los errores de sus dirigentes —como sus iniciativas anticlericales, el mal manejo de la huelga de junio y el discurso cada vez más radical— que finalmente dieron credibilidad a la percepción de que Venezuela seguía los pasos de España por el camino de la polarización y el conflicto, una analogía que obró en favor de los conservadores. De tal manera, la derecha aprovechó la oportunidad para reconstituirse, no

bajo la desacreditada bandera del gomecismo ni como defensores de los intereses económicos oligárquicos, sino como guardianes de la estabilidad, la religión y la reforma ordenada.

Resulta significativo que López haya unido a los venezolanos conservadores y moderados bajo la causa del anticomunismo justo cuando dejó de ser el grito de guerra del viejo régimen. Durante 1936, el anticomunismo se identificó cada vez más con actores no gomecistas, como los estudiantes católicos que se movilizaron a raíz de los acontecimientos que se desarrollaron en Venezuela y el extranjero tras la muerte de Gómez. Mientras tanto, López se distanció de los gomecistas al poner fin a la corrupción predatoria y el terror político de la dictadura y emprendiendo acciones dirigidas a implementar la promesa de modernización del Programa de Febrero. Así, cuando finalmente lanzó su ofensiva decisiva en contra de la izquierda, tras meses de incitación de los conservadores, muchos de sus compatriotas lo siguieron considerando como un reformista, lo que algunos militantes de la izquierda reconocieron con evidente amargura. Un editorial de la ORVE de fines de noviembre de 1936 observó con remordimiento que la mayoría de los venezolanos estaban "casi agradecidos" de tener un gobernante que simplemente se abstenía de "explotarlos o vejarlos", y que aceptaban el gobierno de López sencillamente porque "había dejado de ser la organización de pillaje y peculado a gran escala" de antaño.[94] Incluso la exclusión que hizo López de los líderes más identificados con las demandas de cambio tras el gobierno de Gómez no cambió la opinión de muchos venezolanos de que él claramente había establecido una política más equilibrada, democrática y digna. Para los venezolanos, ya que habían vivido una brutal dictadura y desconfiaban de las ideologías extremistas de su tiempo, la democracia elitista se alzó como un camino aceptable.[95]

EPÍLOGO

Al término de su segundo periodo como presidente el 2 de febrero de 1999, la última responsabilidad oficial de Rafael Caldera, de edad muy avanzada y notablemente frágil, fue asistir a la toma de posesión de Hugo Chávez Frías. El veterano antiizquierdista no pudo ocultar su evidente aprehensión en el momento en el que su sucesor tomó juramento al cargo.[96] Existieron obvias diferencias entre el populista Chávez y López, el presidente bajo el que Caldera inició su carrera política, pero también hubo similitudes. Los dos fueron militares que invocaron a Bolívar para justificar su orientación política; los dos adoptaron modelos económicos que los críticos de su tiempo echaron al cajón del olvido de la historia, y ambos hombres, tras asumir la presidencia con amplio apoyo popular, finalmente gobernaron desde una base más estrecha, satanizaron a la oposición y llevaron a la práctica una forma de política democrática que sus adversarios consideraron muy excluyente.

Durante años los estudiosos tendieron a criticar a López como un autócrata o bien a

elogiarlo como un demócrata que evitó los errores de la época del Punto Fijo. Hoy, tras la exitosa carrera de Chávez, normalmente entendida como una reacción en contra de la elitista "democracia pactada" del puntofijismo, podríamos ver a López más bien como el iniciador de una tradición exclusivista y antipluralista en la democracia moderna de Venezuela, que ha sido practicada, modificada y denunciada por diferentes actores a través del espectro político a lo largo del tiempo. Este impulso exclusivista adoptó formas distintas en los regímenes democráticos subsiguientes —en ocasiones con la marginación de los partidos de oposición, como en 1945-1948, o con la restricción de presiones populares por una "dictadura" de partidos centristas en 1958-1998, o bien con el intento de establecer un partido hegemónico de izquierda en años más recientes—, sin embargo, ha sido una característica recurrente de la democracia venezolana desde la coyuntura crucial de 1935-1937.[97]

[1] Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991,* Pantheon, Nueva York, 1994.

[2] Steve Ellner, "Venezuelan Revisionist Political History, 1908-1958: New Motives and Criteria for Analyzing the Past", *Latin American Research Review* 30, núm. 2 (1995), pp. 100-103.

[3] No obstante, me baso ampliamente en las obras criticadas por Ellner.

[4] Ángel Ziems, *El gomecismo y la formación del ejército nacional,* Ateneo de Caracas, Caracas, 1979; Yolanda Segnini, *La consolidación del régimen de Juan Vicente Gómez,* Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1982, y Miriam Kornblith y Luken Quintana, "Gestión fiscal y centralización del poder político en los gobiernos de Cipriano Castro y de Juan Vicente Gómez", *Politeia,* núm. 10 (1981), pp. 145-155. Algunas de las reformas fiscales de este periodo consistieron de preparación profesional de los burócratas fiscales, métodos modernos de contabilidad y una creciente recaudación de impuestos domésticos para reducir la dependencia del Estado de los ingresos aduanales. El incremento de los ingresos permitió al gobierno retomar el pago de la deuda externa, que fue liquidada en su totalidad en 1930. Las reformas de la época de Gómez no incluyeron la creación de un banco central, lo que no ocurrió sino hasta 1930-1940.

[5] Los dos siguientes párrafos se basan en Doug Yarrington, "Cattle, Corruption, and State Formation in Venezuela during the Regime of Juan Vicente Gómez, 1908-1935", *Latin American Research Review* 39, núm. 2 (2003), pp. 9-33.

[6] Brian S. McBeth, *Juan Vicente Gómez and the Oil Companies in Venezuela, 1908-1935,* Cambridge University Press, Cambridge, 1983, pp. 45-48, 67-108.

[7] Tomás Polanco Alcántara, *Juan Vicente Gómez: aproximación a una biografía,* Grijalbo, Caracas, 1990, pp. 472-473.

[8] Para las ganancias del alcohol, véase "Memorandum para el Sr Dn Emile Sauer", adjunto en "Data for the World's Anti-Alcoholic Congress", 7 de mayo de 1919, United States National Archives (en adelante USN), Registros Consulares de Maracaibo, 1919, vol. 114, sección 811.4. Véase también McBeth, *Juan Vicente Gómez…, op. cit.,* 91.

[9] "Texto íntegro de la sensacional demanda del Procurador General de la Nación", *El Universal,* 4 de mayo de 1936, en *Gobierno y época del Presidente Eleazar López Contreras: la versión de la prensa, 1936-1941,* vols. 25-30, o *Pensamiento político venezolano del siglo XX*: *documentos para su estudio,* Congreso de la República, Caracas, 1986, 26, pp. 63-79. A menos que se indique otra cosa, todos los periódicos citados fueron publicados en Caracas.

[10] José Pareja Paz Soldán, *Juan Vicente Gómez, un fenómeno telúrico,* Ávila Gráfica, Caracas, 1951, p. 88.

[11] John Martz, "Venezuela's 'Generation of '28': The Genesis of Political Democracy", *Journal of Inter-American Studies* 6, núm. 1 (1964), pp. 17-32.

[12] Para la participación de las mujeres en los sucesos de 1928, véase Carmen Clemente Travieso, *Mujeres venezolanas y otros reportajes,* Ávila Gráfica, Caracas, 1951, pp. 17-25.

[13] A menos que se indique otra cosa, la información de este párrafo proviene de William Roseberry, *Coffee and Capitalism in the Venezuelan Andes,* University of Texas Press, Austin, 1983, pp. 128-133; Marie Price, "Hands for the Coffee: Migration, Settlement, and Trade in Western Venezuela, 1870-1930", tesis de doctorado, Syracuse University, 1991, pp. 332-345, y Doug Yarrington, *A Coffee Frontier: Land, Society, and Politics in Duaca, Venezuela, 1830-1936,* University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1997, pp. 161-176.

[14] Mario Samper Kutschbach, "Colombian and Costa Rican Coffee Growers from Prosperity to Crisis, 1920-1936", en William Roseberry y Lowell Gudmundson (eds.), *Coffee, Society and Power in Latin America,* Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1995, pp. 151-180.

[15] Ramón Veloz, *Economía y finanzas de Venezuela, 1830-1944,* Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1984, pp. 364, 382. Con el nuevo sistema cambiario, las compañías debían vender los dólares sobrantes (es decir, los que no compraban los bancos) al gobierno venezolano a una tasa de 3.03 bolívares.

[16] Terry Lynn Karl, *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States,* University of California Press, Berkeley, 1997, p. 81.

[17] Jorge Salazar-Carrillo y Bernadette West, *Oil and Development in Venezuela during the Twentieth Century,* Praeger, Westport, 2004, p. 58.

[18] *Ibid.,* pp. 75-82.

[19] Emilio Pacheco, *De Castro a López Contreras,* Editorial Domingo Fuentes, Caracas, 1984, pp. 100-101.

[20] "Memorandum on the Present Conditions, Economic and Commercial, in Venezuela", adjunto en Keeling a Simon, 2 de marzo de 1934, Public Record Office (en adelante FO), 371/17618.

[21] Robert J. Alexander, *The Communist Party of Venezuela,* Hoover Institution, Stanford, 1969, pp. 3-5, 197.

[22] Arturo Sosa y Eloi Lengrand, *Del garibaldismo estudiantil a la izquierda criolla: los orígenes marxistas del proyecto de A. D., 1928-1935*, Centauro, Caracas, 1981.

[23] "Plan de Barranquilla", en Sosa y Lengrand, *Del garibaldismo estudiantil…*, *op. cit.*, pp. 459-467; cita, 465.

[24] Rómulo Betancourt, "Con quién estamos y contra quién estamos", en Sosa y Lengrand, *Del garibaldismo estudiantil…*, *op. cit.*, pp. 499, 501.

[25] Robert J. Alexander, *Rómulo Betancourt and the Transformation of Venezuela*, Transaction Books, Nuevo Brunswick, 1982, pp. 64-65.

[26] Winfield Burggraaff, *The Venezuelan Armed Forces in Politics, 19351959*, University of Missouri Press, Columbia, 1972, pp. 28-32; E. López Contreras, *Páginas para la historia militar de Venezuela*, Tipografía Americana, Caracas, 1944, pp. XVI-XX.

[27] Luis Ricardo Dávila, *El Estado y las instituciones en Venezuela, 1936-1945*, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1988, pp. 87-89.

[28] Ruth Berins Collier y David Collier, *Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America*, Princeton University Press, Princeton, 1991, pp. 97, 99; véase también pp. 80-82, y John Duncan Powell, *Political Mobilization of the Venezuelan Peasant*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, pp. 47-49.

[29] José Manuel Hermoso, *1936: Programas vs poder*, Kinesis, Caracas, 1991, pp. 41-44.

[30] Gumercindo Torres, *Memorias de Gumercindo Torres*, Jose Agustín Catalá (ed.), Presidencia de la República, Caracas, 1996, pp. 138-139, 165.

[31] E. López Contreras, *Proceso político social, 1928-1936*, Ancora, Caracas, 1955, pp. 91-115.

[32] Yarrington, *Coffee Frontier…*, *op. cit.*, pp. 181-192; Rómulo Betancourt, *Problemas venezolanos*, Futuro, Santiago, 1940, pp. 257-260.

[33] Charles Bergquist, *Labor in Latin America*, Stanford University Press, Stanford, 1986, p. 228.

[34] Naudy Suárez, "U.N.E.: Gestión de una idea revolucionaria", en Naudy Suárez (ed.), *Por los legítimos ideales del estudiante venezolano*, Arte, Caracas, 1973, p. 14.

[35] Nicholson al State Department, 30 de diciembre de 1935, USNA, State Department Records, Box 5785, 831.00/1557.

[36] MacGregor a Eden, 11 de febrero de 1936, PRO/FO, 371/19845.

[37] Blas Bruni Celli, "Rómulo Betancourt frente a la corrupción administrativa", en Ramón J. Velásquez (ed.), *Betancourt en la historia de Venezuela del siglo XX*, Centauro, Caracas, 1980, pp. 312, 316; véase también Bernard Mommer, *Global Oil and the Nation State*, Oxford University Press, Oxford, 2002, pp. 111-114.

[38] "Nuestro rumbo", *El Relator* (Trujillo), 1º de febrero de 1936.

[39] Ramón Díaz Sánchez, *Transición (política y realidad en Venezuela)*, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1983, p. 85; véase también Luis Barrios Cruz, "Por qué el venezolano es refractario al comunismo?", *El Universal*, 1º de mayo de 1936, en *El debate político en 1936*, vols. 14-16, *Pensamiento político venezolano del siglo XX*: *documentos para su estudio*, Congreso de la República, Caracas, 1983, 14, p. 451. Para comentarios interesantes sobre el liberalismo en este periodo, véase Fernando Coronil, *The Magical State: Nature, Money, and Modernity in Venezuela*, University of Chicago Press, Chicago, 1997, pp. 84-89.

[40] "Programa de Febrero del Presidente Eleazar López Contreras", en Naudy Suárez Figueroa (ed.), *Programas políticas venezolanos de la primera mitad del siglo XX*, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1977, pp. 123-134; cita, p. 125.

[41] "Programa de Febrero…", *op. cit.*, p. 130.

[42] "Proyecto de Programa del Partido Republicano Progresista", en Suárez Figueroa, *Programas políticas venezolanos…*, *op. cit.*, pp. 134-141. Gustavo Machado, debido a su celebridad, evitó afiliarse al PRP para no poner en riesgo su situación legal.

[43] "Manifiesto-Programa del Movimiento de Organización Venezolano", en Suárez Figueroa, *Programas políticas venezolanos…*, *op. cit.*, pp. 141-145; cita, p. 143.

[44] Martz, "Venezuela's 'Generation of '28'…", *op. cit.*, p. 25.

[45] Arturo Sosa y Eloi Lengrand, "Prólogo", en *El debate político*, 14, pp. 35-36.

[46] Díaz Sánchez, *Transición…, op. cit.*, p. 63.

[47] Martz, "Venezuela's 'Generation of '28'…", *op. cit.*, p. 30.

[48] Daniel H. Levine, *Conflict and Political Change in Venezuela*, Princeton University Press, Princeton, 1973, p. 32; véase también Alexander, *Rómulo Betancourt…, op. cit.*, p. 98, y Guillermo Luque, *Educación, pueblo y ciudadanía: la educación venezolana en la primera mitad del siglo XX*, Ministerio de la Cultura, Caracas, 2006, pp. 45-47, 87-99.

[49] Luis B. Prieto Figueroa, "¿Qué se pretende con el Ante-proyecto de Ley Orgánica de Educación Nacional?", *Ahora*, 3 de mayo de 1936, en *El debate político*, 14, p. 453.

[50] Luque, *Educacion, pueblo y ciudadanía…, op. cit.*, p. 46.

[51] Sosa y Lengrand, *Del garibalidismo estudiantil…, op. cit.*, pp. 105-106; Levine, *Conflict and Political Change…, op. cit.*, pp. 66-69, y Guillermo Luque, *Educación, Estado y nación: una historia política de la educación oficial en Venezuela, 1928-1958*, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1999, pp. 104-153.

[52] Díaz Sánchez, *Transición…, op. cit.*, p. 55.

[53] Guillermo Luque, *De la Acción Católica al partido COPEI, 1933-1946*, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1986, pp. 34-43.

[54] Kirk A. Hawkins, "Sowing Ideas: Explaining the Origins of Christian Democratic Parties in Latin America", en Scott Mainwaring y Timothy R. Scully (eds.), *Christian Democracy in Latin America: Electoral Competition and Regime Conflicts*, Stanford University Press, Stanford, 2003, pp. 104-106. Caldera y otros activistas de la UNE dirigieron la formación de COPEI en 1946, el partido demócrata socialcristiano de Venezuela.

[55] Luque, *De la Acción Católica…, op. cit.*, pp. 65-123, 247-251; Fredrick B. Pike, *Hispanismo, 1898-1936: Spanish Conservatives and Liberals and Their Relations with Spanish America*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1971, pp. 280-283.

[56] Donald Herman, *Christian Democracy in Venezuela*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1980, pp. 10-11, 18-22, y Suárez, "U.N.E.: Gestión…", *op. cit.*, pp. 35-36.

[57] Rafael Caldera, *De Carabobo a Punto Fijo*, 4ª ed., Libros Marcados, Caracas, 2008, pp. 67-68n5.

[58] Rafael Caldera, "Hacia la definición electoral en Venezuela", *El Universal*, 31 de mayo de 1936, en *El debate político…, op. cit.*, 14, p. 613.

[59] Luque, *De la Acción Católica…, op. cit.*, pp. 78-79, 101, 153-154; Suárez, "U.N.E.: Gestión…", *op. cit.*, p. 28, y Antonio Arraiz, "Nubes sobre el Pacífico", *Ahora*, 6 de octubre de 1936, en *El debate político*, 15: pp. 402-403. López también invitó a Caldera a una reunión de dos horas en su casa después de la publicación del artículo mencionado en este párrafo, del cual Caldera hizo una versión radiofónica. Véase Rafael Caldera, *Al ciudadano presidente Eleazar López Contreras, en el centenario de su nacimiento, 1883-1983*, Fondo Editorial del Estado Táchira, 1983, pp. 109-113.

[60] Steve Ellner, "Acción Democrática-Partido Comunista de Venezuela: Rivalry on the Venezuelan Left and in Organized Labor, 1936-1948", tesis de doctorado, University of New Mexico, 1979, p. 29.

[61] Ellner, "Acción Democrática…", *op. cit.*, pp. 30-38; Sosa y Lengrand, "Prólogo", *op. cit.*, pp. 54-56, 89; Alexander, *Rómulo Betancourt…, op. cit.*, pp. 106-109.

[62] Citado en Elisabeth J. Friedman, *Unfinished Transitions: Women and the Gendered Development of Democracy in Venezuela, 1936-1996*, Penn State University Press, University Park, 2000, p. 69. Este párrafo se basa en Friedman, *Unfinished Transitions, op. cit.*, pp. 60-73, y Alexander, *Rómulo Betancourt…, op. cit.*, p. 106.

[63] "La distribución de la tierra", *Ahora*, 29 de octubre, 1936, en *El debate político…, op. cit.*, 15, pp. 525-526.

[64] R. Collier y D. Collier, *Shaping the Political Arena…, op. cit.*, p. 253.

[65] Powell, *Politcal Mobilization…, op. cit.*, pp. 59-61.

[66] Ellner, "Acción Democrática…", *op. cit.*, pp. 41-42; Luque, *De la Acción Católica…, op. cit.*, pp. 80-81.

[67] En respuesta a los conservadores que criticaron la ley por ser demasiado favorable para los trabajadores, Caldera argumentó que "la Ley del Trabajo constituye la más sana protección del cuerpo social en contra del virus de la lucha de clases". Citado en Gerhard Cartay Ramírez, *Caldera y Betancourt, constructores de la democracia*, Centauro, Caracas, 1987, pp. 62-63.

[68] Mark Falcoff, "Prefacio", en Mark Falcoff y Fredrick B. Pike (eds.), *The Spanish Civil War, 1936-1939: American Hemispheric Perspectives*, University of Nebraska Press, Lincoln, 1982, p. xiv.

[69] Antonio Arraiz, "Nubes sobre el Pacífico", *Ahora,* 6 de octubre de 1936, en *El debate político,* 15, pp. 402-403.

[70] Rómulo Betancourt, "¡No pasarán! Madrid será la tumba del fascismo", ORVE, 16 de noviembre de 1936, en *El debate político…,* 15, p. 641.

[71] "El Día de la Raza", UNE, 12 de octubre de 1936, en Suárez, *Por los legítimos ideales…, op. cit.,* pp. 106-107.

[72] Luque, *De la Acción Católica…, op. cit.,* pp. 104-108, y Suárez, "U.N.E.: Gestión…", *op. cit.,* pp. 68-69.

[73] Díaz Sánchez, *Transición…,* pp. 114-115.

[74] Luque, *De la Acción Católica…, op. cit.,* p. 251; véanse también pp. 104-108.

[75] Víctor Sanz, *Venezuela ante la república española, 1931-1939,* Centauro, Caracas, 1997, p. 367.

[76] *Ibid.,* pp. 470-473.

[77] Para el concepto del cultivo de la tierra, véase David Snow, "Framing Processes, Ideology, and Discursive Fields", en David Snow *et al.* (eds.), *The Blackwell Companion to Social Movements,* Blackwell, Oxford, 2004, pp. 380-412.

[78] Sanz, *Venezuela ante la república…, op. cit.,* p. 384.

[79] Burggraaff, *Venezuelan Armed Forces…, op. cit.,* pp. 43-44.

[80] Sosa y Lengrand, "Prológo"…, *op. cit.,* p. 56, y "Añadimos unas palabras al margen de las expresiones del Presidente de la República", *Ahora,* 22 de septiembre de 1936, en *El debate político,* 15, p. 336.

[81] Rafael Caldera, "Discurso en la audiencia del Presidente de la República a La Liga de Defensa Nacional", *El Universal,* 22 de septiembre de 1936, en *El debate político,* 15, p. 334.

[82] "La Liga de Defensa Nacional", *El Popular,* 7 de noviembre de 1936, en *El debate político,* 15, pp. 571-573.

[83] Tomado de un manifiesto de la Liga citado en Manuel Vicente Magallanes, *Los partidos políticos en la evolución histórica venezolana,* sin editor, Caracas, 1973, p. 319.

[84] "Alegatos ante corte a favor de la legalización del PDN", *El Popular,* 2 de diciembre de 1936, en *El debate político…, op. cit.,* 16, pp. 19-31; cita, p. 24.

[85] John Martz, *Acción Democrática: Evolution of a Modern Political Party in Venezuela,* Princeton University Press, Princeton, 1966, pp. 34-38; Alexander, *Rómulo Betancourt…, op. cit.,* pp. 112-13.

[86] Ellner, "Acción Democrática…", *op. cit.,* pp. 45-46; Bergquist, *Labor in Latin America…, op. cit.,* pp. 233-236.

[87] "Cómo vemos nosotros la huelga petrolera", UNE, 23 de enero de 1937, en Suárez, *Por los legítimos ideales…, op. cit.,* p. 156.

[88] Ellner, "Acción Democrática…", *op. cit.,* p. 47; Edwin Lieuwen, *Petroleum in Venezuela: A History,* Russell and Russell, Nueva York, 1954, p. 82.

[89] Alexander, *Rómulo Betancourt…, op. cit.,* pp. 113-114.

[90] Martz, *Acción Democrática…, op. cit.,* pp. 39-41.

[91] "La expulsión de los comunistas", UNE, 3 de abril de 1937, en Suárez, *Por los legítimos ideales…, op. cit.,* p. 184; Suárez, "U.N.E.: Gestión…", *op. cit.,* p. 27.

[92] Venezuela no abandonó el desarrollo de políticas liberales sino hasta mediados de la década de 1940, como se analiza en Karl, *Paradox of Plenty…, op. cit.,* pp. 83-85.

[93] Hermoso, *1936: Programas vs poder…, op. cit.*

[94] "Ante el actual gobierno, a la izquierda no le queda sino un sitio: la oposición", ORVE, 29 de noviembre de 1936, en *El debate político…, op. cit.,* 15, pp. 735-736.

[95] Término tomado de Karen Remmer, "Exclusionary Democracy", *Studies in Comparative International Development* 20, núm. 6 (1985-1986), pp. 64-85. Se utiliza aquí como referencia a un sistema político formalmente democrático, pero diseñado o manejado con el fin de evitar que un grupo determinado alcance el poder.

[96] Cristina Marcano y Alberto Barrera Tyszka, *Hugo Chávez,* Random House, Nueva York, 2007, pp. 124-125.

[97] Michael Coppedge, *Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Partyarchy and Factionalism in Venezuela,* Stanford University Press, Stanford, 1994, pp. 1-46, y Javier Corrales y Michael Penfold, *Dragon in the Tropics: Hugo Chávez and the Political Economy of Revolution in Venezuela,* Brookings Institution, Washington, 2011. Sobre "coyunturas críticas" como periodos que crean patrones políticos de largo plazo, véase R. Collier y D. Collier, *Shaping the Political Arena…, op. cit.,* pp. 27-39. Su énfasis en la "incorporación" del trabajo en la política lleva a estos autores a destacar la importancia de la década de 1940 en Venezuela.

VII. DICTADORES INDIGENISTAS Y LOS ORÍGENES PROBLEMÁTICOS DE LA DEMOCRACIA EN CENTROAMÉRICA

JEFFREY L. GOULD

DURANTE la década de 1930, las dictaduras de derecha tomaron el poder en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Todos estos regímenes reaccionaron a las protestas y los desplazamientos sociales causados por la caída rápida y severa de los ingresos por exportación, especialmente en la industria del café. Los regímenes intentaron, con gran éxito, interrumpir la naciente alianza entre la izquierda y los indígenas: abatieron la primera y cooptaron a los segundos. Las ideologías de mestizaje e indigenismo ayudaron al proceso de consolidación del régimen y el aislamiento de la izquierda de su antiguos (potenciales) aliados.

Durante la década de 1920, en toda América Central (con salvedades importantes en el caso de Nicaragua), hubo una tendencia general, aunque moderada, hacia la democratización de la sociedad, la política y el gobierno.[1] Por tanto, es difícil imaginar el triunfo de los regímenes militares de derecha a principios y mediados de la década de 1930 sin los desplazamientos sociales provocados por los primeros años de la Gran Depresión. Antes de abordar la repercusión de la Gran Depresión en las relaciones étnicas, revisemos los datos económicos, las políticas y sus consecuencias en esa época. El efecto de la Gran Depresión en América Central tuvo mucho que ver con el descenso drástico de los precios del café y el banano a finales de la década de 1920 y principios de la de 1930. En El Salvador, el café representaba 90% del valor de las exportaciones, y en Costa Rica y Guatemala el banano y el café representaban la misma proporción de las exportaciones (el café representaba 50% de los ingresos de exportación en Nicaragua). Los precios mundiales del café bajaron de 0.22 dólares en 1929 a 0.08 en 1931. Como consecuencia directa de la caída de los precios, el valor de las exportaciones declinó precipitadamente. En El Salvador, el valor de las exportaciones de café se redujo de 22.7 millones de dólares en 1928 a 10.8 millones en 1931 y hasta a un mínimo de 6.4 millones en 1932. En 1935, las exportaciones de café se habían recuperado lo suficiente como para representar 12.1 millones de dólares en ingresos. En Guatemala, el valor de las exportaciones se redujo 40% entre 1928 y 1932. El volumen de las

exportaciones también se redujo en América Central en su conjunto, de 369 000 quintales en 1928 a 285 000 en 1932; Guatemala y El Salvador registraron las fluctuaciones más intensas.[2]

Las consecuencias sobre los asalariados fueron devastadoramente severas. Los cafeticultores respondieron a la crisis en la región reduciendo drásticamente los salarios en 50% en promedio. Aunque la caída en el costo de vida probablemente mitigó un tanto su situación, al menos durante los primeros años de la Gran Depresión, los recortes salariales disminuyeron los ingresos de los trabajadores hasta por debajo de los niveles de subsistencia.[3] La fuerte caída en la producción del café se tradujo directamente en una disminución de la fuerza de trabajo estacional, y la desaceleración de la economía global creó más desempleo urbano.[4] Del mismo modo, la disminución de los ingresos públicos procedentes de los impuestos a la exportación y los aranceles condicionó un descenso en el empleo gubernamental y los salarios de los empleados públicos en toda la región. En Guatemala, el caso más extremo, el gasto público se recortó a la mitad entre 1928 y 1932. Durante esos mismos años, los gastos en El Salvador cayeron casi en la misma medida, y en Nicaragua se redujeron en un tercio.

Los gobiernos centroamericanos respondieron de forma proactiva ante la crisis. Como señala Bulmer-Thomas,

> La producción de café podía estar influenciada por las variaciones en los derechos de exportación, la disponibilidad de crédito, el tipo de cambio y los fondos especiales. Todos estos instrumentos fueron utilizados por una u otra república durante la Gran Depresión y el efecto de los bajos precios mundiales sobre la rentabilidad también se vio atenuado por la reducción de los costos laborales.[5]

Este apoyo gubernamental de la industria del café condicionó también una recuperación bastante rápida y, como señala Bulmer-Thomas, sentó un precedente para intervenciones futuras (y para las expectativas populares que generaron). En Guatemala y El Salvador, el valor de las exportaciones agrícolas durante la década de 1930 superó el de finales de la década de 1920.

Varios países del istmo suspendieron los pagos de su deuda externa e impusieron una moratoria de la deuda interna, medidas que aliviaron las crisis en el gasto del gobierno, permitiendo en el caso de El Salvador, por ejemplo, el pago de los empleados del gobierno en 1932, e impidiendo directamente las ejecuciones hipotecarias en las fincas de café. Los gobiernos de El Salvador, Costa Rica y Nicaragua (en 1936) devaluaron su moneda para ayudar a los exportadores de café, y el gobierno de Guatemala redujo su impuesto a la exportación.

Las políticas gubernamentales de toda la región buscaban promover la sustitución de importaciones en la industria manufacturera y la agricultura. A diferencia de otros países del hemisferio, sólo había un éxito limitado con la industrialización. Sin embargo, el fuerte incremento en la agricultura de uso doméstico en la segunda mitad de los años treinta sirvió

para reducir la dependencia de alimentos importados (20% de las importaciones en la década de 1920). Aquí, las tarifas impuestas por el gobierno y los proyectos de construcción de caminos rurales (en Guatemala con trabajo forzoso) sirvieron para aumentar la producción nacional en 400% durante la década.[6]

Bulmer-Thomas argumenta en favor de una visión revisionista de la Gran Depresión cuando sugiere que, en parte debido a la intervención del gobierno, su impacto fue "menos severo de lo que se había pensado anteriormente".[7] Probablemente pisa terreno firme al menos en un aspecto fundamental: la recuperación en términos de indicadores macroeconómicos fue bastante rápida y, a mediados de la década de 1930, la producción agrícola nacional era alta y el volumen y el valor de las exportaciones se habían recuperado significativamente. BulmerThomas subraya correctamente la importancia de las respuestas gubernamentales en favor del café ante la crisis. Sin embargo, esta visión subestima los efectos devastadores sobre las clases trabajadoras, en particular durante los primeros años de la Gran Depresión. Ese duro efecto está ampliamente documentado en los informes consulares británicos y estadunidenses en toda la región y en una serie de documentos gubernamentales y laborales. Por ejemplo, el cónsul británico en Nicaragua escribió en 1932 que la población, "en su mayoría, se encuentra en el margen de la existencia".[8] Mientras que el ascenso al poder de los regímenes militares fue una respuesta profiláctica a las consecuencias sociales y políticas de aquel rápido empobrecimiento, la recuperación financiera y económica posterior de profundidades tan dramáticas pudo haberle quitado a los caudillos cierto grado de apoyo popular. Los esfuerzos de los gobiernos autoritarios para apoyar a la élite cafetalera también implicaron la ampliación y el fortalecimiento del poder centralizador del Estado y su mayor intrusión en la vida de sus ciudadanos.[9]

La Gran Depresión fue también una época de cambio cultural, íntimamente conectada con los cambios económicos y políticos antes mencionados. Sin embargo, las continuidades también marcaron los discursos y prácticas nacionalistas de la época. Desde los albores del siglo, el mestizaje, entendido como un mito fundacional de la nación a partir de la mezcla de razas y como un proceso cultural de *desindigenización*, contribuyó de manera sustancial a las ideologías nacionalistas de América Central y desempeñó un papel clave en la conformación de la cultura política. El discurso del mestizaje cultural y las prácticas asociadas a éste, en especial la pérdida de emblemas étnicos, continuaron durante la década de 1930, lo que provocó tensiones dentro de las comunidades y, al mismo tiempo, tendieron a dividir las fuerzas democráticas de los indígenas seguidores de las formas culturales y políticas tradicionales.

Durante las décadas de 1920 y 1930, la promoción de la élite centroamericana del mestizaje no rompió con los preceptos liberales fundamentales, sino que silenció algunas de sus formas más flagrantes de racismo antiindígena y facilitó la incorporación de algunos grupos subalternos en la política nacional. Además del mestizaje, el obrerismo, lenguaje

democrático radical de los trabajadores artesanales, también expandió el poder y el alcance del liberalismo. En general, estas ideologías relativamente nuevas desafiaron y amenazaron las ideologías de clase tradicionales, así como el privilegio y la exclusión racial. Más significativamente, la aceptación de una nación mestiza imaginada hizo que formas explícitas y públicas de racismo fueran menos aceptables y coincidieran con un cambio de la sociedad del racismo biológico al cultural.[10] Sin embargo, había costos políticos y culturales ocultos en este componente de construcción nacional en el siglo XX, en particular, los orígenes problemáticos del discurso democrático.

La crisis mundial, como se señaló anteriormente, tuvo consecuencias devastadoras para la mayoría de los centroamericanos, especialmente para los indígenas que participaban en la economía cafetalera como pequeños propietarios o trabajadores. En momentos decisivos durante la década, especialmente en El Salvador, los indígenas protestaron contra los impuestos sobre la tierra, el trabajo forzoso, los bajos salarios, la expropiación de tierras y los ataques percibidos a su religión. Pese a la frecuente y bárbara represión, como la que ocurría en El Salvador, se trató de una época en la que las corrientes mexicanas del indigenismo hicieron su entrada en el istmo y, en ciertos casos, influyeron en la política de Estado. Aquí seguimos el uso común del término, como un discurso generado por los no indígenas que se centra en los indígenas y en su integración en la sociedad nacional, con el objetivo de superar las formas extremas de explotación, segregación y pérdida de tierras. Hubo una variación significativa en el indigenismo, que va desde una agenda estrictamente educativa y asimilacionista hasta un reconocimiento de la necesidad de acabar con formas especiales de explotación de los indígenas.[11] Sin embargo, incluso en su forma más radical, en México Cárdenas hizo hincapié en la integración de los indígenas a la cultura dominante, la *mexicanización* de los indígenas en lugar de la *indigenización* de los mexicanos.[12] Al mismo tiempo, el indigenismo en todas sus variantes era compatible con las diversas formas de mestizaje como componente clave de la ideología nacionalista.

Un estudio comparativo de mestizaje y relaciones étnicas en Centroamérica debería tener en cuenta las múltiples formas en que las políticas de un país influyeron en las de otro. En este ensayo sólo podemos ofrecer un ejemplo sugerente. Clemente Marroquín Rojas, periodista guatemalteco y líder de las fuerzas revolucionarias democráticas, escribió en 1945:

> […] las agrupaciones indígenas que eran fuertes […] han desaparecido casi por completo, y allí tienen ustedes que El Salvador es una nación de mestizos; hay unos pocos centenares de indios puros. Ya en El Salvador casi ha desaparecido el problema indígena, y por esta razón El Salvador, una nación con un millón menos de habitantes que Guatemala, económica y físicamente es más fuerte que Guatemala […] porque ha resuelto este problema de que el indio, o desaparece o se civiliza […] El problema sólo puede ser resuelto con la mezclas de razas (ladinos e indios) y apartándolos de su cultura indígena para insertarlos en una cultura más avanzada.[13]

Es notable que Marroquín Rojas, un líder democrático, pudiera pronunciar estas palabras, sin hacer la más mínima referencia a las matanzas de 1932 que aceleraron de manera

significativa el proceso de mestizaje. Esta omisión es un síntoma de la profunda separación entre las fuerzas democráticas en América Central y los pueblos indígenas. El homenaje de Marroquín Rojas al mestizaje salvadoreño también emanaba de una de las corrientes más reaccionarias del indigenismo: Marroquín abogaba por la solución del *problema de los indígenas* como la supresión de la cultura indígena.

En todos los países, el porcentaje de habitantes indígenas seguía siendo significativo a la llegada del nuevo siglo (se estima 35% en Nicaragua, 25% en Salvador, 20-25% en Honduras, y cerca de 70% en Guatemala). Para la década de 1920, el mestizaje cultural ya había avanzado notablemente en el istmo central. Hacia el cambio de siglo, en el oeste de Honduras y el oeste de Nicaragua prácticamente todos los habitantes habían dejado de hablar las lenguas indígenas. Del mismo modo, en 1930, el náhuatl había dejado der ser la lengua principal de la mayoría de los indígenas salvadoreños. Además, sólo una minoría significativa hablaba español. La prominencia de otros rasgos étnicos tales como la vestimenta también estaba disminuyendo en algunas microrregiones (por ejemplo, Jinotega y Boaco en Nicaragua, Intibucá y Gracias en Honduras, y La Libertad en El Salvador). Existía un continuo de identidades indígenas y prácticas comunales en todo el istmo central, que, por lo general, abarcaba desde hablantes monolingües de náhuatl en Santo Domingo de Guzmán en El Salvador hasta la gente ubicada a 15 kilómetros de distancia en Sonzacate, sin rasgos étnicos identificables, pero que todavía eran considerados como indígenas por sus vecinos ladinos. Esta enorme variación no sólo complica el análisis, sino que también facilita en gran medida el avance del mestizaje como discurso y práctica, como un ejemplo de *civilización* tanto para las poblaciones indígenas más tradicionales como para ideólogos y antropólogos del mestizaje.

El Salvador

La movilización rural, la insurrección y la matanza de 1932 fueron algunos de los acontecimientos más importantes en la historia moderna de América Central. Como se ha discutido en otro lugar, la movilización y la insurrección se derivaron de las respuestas militantes y contradictorias de los campesinos salvadoreños occidentales al discurso y la práctica del mestizaje. A diferencia del resto del istmo, en El Salvador, los indígenas combativos vivían entre quienes participaban en un proceso de mestizaje cultural. En el oeste de Guatemala, también hubo signos de combatividad étnica, pero los procesos de homogeneización étnica habían avanzado mucho menos que en otros lugares del istmo (incluido el altiplano oriental de Guatemala). En el oeste de Nicaragua y Honduras, a principios del siglo XX, cuando su tierra, trabajo y autonomía comunal se encontraban sitiados, los indígenas habían perdido gran parte de sus rasgos étnicos: lengua y vestimenta. La

combatividad étnica era menos que una opción, pues tanto para los indígenas como para los ladinos esos rasgos casi extintos eran sinónimo de identidad indígena. Por otra parte, las comunidades indígenas de Nicaragua y Honduras estaban mucho más dispersas que en El Salvador o Guatemala. Para los salvadoreños, como veremos, tanto los indígenas orgullosos de serlo como quienes hacía mucho tiempo habían perdido su identidad indígena unieron fuerzas en una movilización por la redistribución de la tierra, los derechos laborales y la autonomía política.

La movilización salvadoreña de 1930 y 1931 fue notable precisamente porque se trataba de trabajadores rurales y campesinos de identidades tan variadas, que iban desde hablantes de náhuatl hasta los que consideraban a los indígenas, en el mejor de los casos, como sus ancestros lejanos. Fundamentalmente, los campesinos aceptaron los mensajes izquierdistas más fácilmente debido a un recorte salarial de 50% y una pérdida sustancial de tierra durante los primeros años de la crisis.

La movilización y la insurrección se llevaron a cabo principalmente en los tres departamentos occidentales del país: Ahuachapán, La Libertad y Sonsonate. Aunque a los ojos de la élite y los diplomáticos la mayoría de los habitantes rurales de la región eran *indios*, la composición étnica de la parte occidental del país era bastante compleja. En La Libertad y Ahuachapán, por ejemplo, la inmensa mayoría de la población rural no se consideraba a sí misma como indígena, a pesar de la identidad indígena de muchos de sus abuelos.[14] De hecho, como Salomé Torres, sobreviviente de la matanza, recordó, "Los únicos indígenas vivían en Izalco y Nahuizalco. Ellos eran los únicos que hablaban náhuatl y utilizaban la vestimenta indígena".[15]

La expansión de la industria del café afectó gravemente a la población indígena residente en La Libertad en el siglo XIX. Muchos (incluyendo a los abuelos de Torres) perdieron su tierra y se convirtieron en peones en las plantaciones de café. En 1930, la gran mayoría de los trabajadores del café compartía la perspectiva de Torres: los *indios* vivían en las municipalidades de Nahuizalco e Izalco en el departamento de Sonsonate y no tenían nada que ver con ellos. Aquéllos a quienes entrevisté a finales de la década de 1990, que habían sido niños o adolescentes en 1930, admitieron que tal vez sus abuelos habían sido *indios* o *naturales*.

Como señalé en *El mito de la Nicaragua mestiza y la resistencia indígena, 1880-1980*, las comunidades del altiplano de Nicaragua que la industria del café había transformado o absorbido se convirtieron en centros del movimiento obrero radical cuatro décadas más tarde.[16] Parece probable que en La Libertad, al igual que en las comunidades nicaragüenses, el recuerdo de la acumulación primitiva —la apropiación ladina de inicios del siglo XX de antiguos terrenos comunales— y los códigos culturales compartidos con los artesanos urbanos, especialmente el lenguaje, facilitaron la circulación y aceptación de ideas de izquierda. A lo largo de 1930 y 1931, la organización en sindicatos se expandió por las plantaciones

cafetaleras de La Libertad, y las grandes huelgas estallaron allí en diciembre de 1931 y enero de 1932.

El sindicalista comunista Jorge Fernández Anaya comparó la situación en Guatemala con la de El Salvador. En una entrevista de 1988, él recordó que en este último país "los peones eran indios sólo en algunas partes. No todos los indígenas hablaban español, pero había gente que traducía y, en todo caso, era más fácil hablar con los indios de El Salvador que con los de Guatemala".[17] Para Fernández Anaya, los trabajadores rurales ladinos y los indígenas salvadoreños tenían una capacidad altamente desarrollada para la comprensión de sus intereses de clase.

Las relaciones e identidades étnicas en Ahuachapán eran similares a las de La Libertad. Un proceso análogo de café y mestizaje había transformado las áreas de la capital departamental y sus alrededores, de manera que la mayoría de los residentes carecía de una identidad indígena al inicio de la movilización.[18] La única presencia indígena se encontraba en el municipio de Tacuba, donde representaba 60% de la población. En el este de Ahuachapán, los ladinos constituían la gran mayoría de la población, muchos de los cuales eran fenotípicamente *mulatos*. Según la leyenda local, los cimarrones que habían escapado de Guatemala fundaron la ciudad de Atiquizaya (con una población de 15 000 habitantes en 1915).[19]

En Sonsonate, las relaciones e identidades étnicas fueron muy diferentes, y fue allí donde circuló el discurso de la combatividad étnica, en parte como respuesta al avance del mestizaje cultural que, entre sus efectos, colocó a la lengua náhuatl como un rasgo de categoría inferior. La religión y el conflicto religioso condicionaron el surgimiento de la revitalización étnica. El padre Conte, un misionero paulista y agudo observador de las relaciones étnicas durante las primeras décadas del siglo XX, relató varios incidentes que revelaban cómo la religión acentuó un profundo abismo entre indígenas y ladinos.[20] Para citar un ejemplo, en 1912, un grupo de indígenas de las tierras altas de Jayaque detuvo a un sacerdote que se había apropiado de una imagen sagrada y lo entregaron a las autoridades municipales para su arresto. [21]

Del mismo modo, en la década de 1920, en el municipio de Nahuizalco surgieron conflictos agudos entre los sacerdotes locales y los indígenas sobre las prácticas religiosas de estos últimos. Al igual que en otras partes de América Central, los sacerdotes, por razones de lucro y pureza, intentaron apropiarse de imágenes religiosas indígenas. Además de los conflictos religiosos, indígenas y ladinos se enfrentaron por el control político local. A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, los dos grupos se enfrentaron por el control del municipio de Nahuizalco (entre 80 y 90% indígena) e Izalco (50% indígena). Debido a la condición de minoría de los ladinos en Nahuizalco, su control político dependía de alianzas con los indígenas no tradicionalistas, por un lado, y las élites políticas nacionales, por otro. Además, los propietarios de tierras dependían en cierta medida de las relaciones clientelares. Las luchas políticas tradicionalistas de la década de 1920 se cruzaron con la organización basada en clases entre los trabajadores del café indígenas y ladinos.

Este lenguaje de la combatividad indígena fue parte de un discurso oculto y, por lo tanto, difícil de rastrear.[22] Un ejemplo es la declaración hecha por un nahuizalqueño ebrio a un periodista italiano durante una boda: "Nosotros, los verdaderos indios, ¡los indios reyes! Los puros… nosotros sabemos lo que no saben los blancos. Esperamos nuestra hora. Somos los dueños de las montañas, los valles, los cafetales, las casas… todo lo que se puede ver".[23] La izquierda pudo apropiarse, de alguna manera, de estas formas de militancia étnica, principalmente porque su lenguaje igualitario y emancipador resonó como un reproche a la arrogancia y falta de respeto ladinas. En 1931, cuando el Socorro Rojo Internacional (SRI) se convirtió en su vehículo organizador principal, las banderas de la reforma agraria se engranaron fácilmente con la visión de los derechos de los indígenas a la tierra. Por último, la izquierda forjó alianzas electorales con la dirigencia indígena local que trató de derrocar el dominio ladino de la zona.

Por lo tanto, la movilización de izquierda se benefició de las respuestas contradictorias al mestizaje esbozadas anteriormente. Sin embargo, el movimiento tenía serias limitaciones, incluso en los departamentos occidentales, los cuales eran, por mucho, su base de apoyo más fuerte. Particularmente en el municipio de Izalco, en cantones donde residían tanto indígenas como campesinos ladinos, las tensiones culturales impidieron el crecimiento de un movimiento unido. Los indígenas resentían fuertemente a los ladinos como inmigrantes recientes que habían ocupado tierras ancestrales y que, en general, los habían excluido a ellos de sus organizaciones sindicales y del SRI. Los campesinos ladinos experimentaron la movilización y la insurrección como amenazas, por lo que participaron voluntariamente en el movimiento contrarrevolucionario, incluidas las matanzas.[24] Muchos de los ladinos eran pequeños propietarios, pero también trabajaban en las plantaciones de café. A pesar del enorme crecimiento del movimiento obrero rural entre 1929 y 1931, es probable que no abarcara la mayor parte de la fuerza laboral estacional de las plantaciones de café. Los ladinos de los cantones biétnicos de Izalco y Juayúa conformaban una parte sustancial de la fuerza de trabajo no organizada.

Para los activistas sindicales indígenas, sin embargo, no fue difícil asociarse con los trabajadores cafetaleros ladinos en las plantaciones. Con referencia a su trabajo de organización en dos cantones izalqueños en 1930, un carpintero ladino y organizador sindical declaró: "Los indígenas eran bien comprensivos. Juan Hernández y otros compañeros de Cuyagualo iban ellos mismos a San Julián para organizar a los trabajadores".[25] En otras palabras, en las grandes plantaciones de café (San Julián, por ejemplo), las divisiones étnicas eran mucho menos significativas que en Nahuizalco o Izalco.

A pesar de la notable capacidad de los militantes de izquierda indígenas y ladinos de trascender las marcadas divisiones étnicas, éstas se volvieron relevantes una vez más en la reconstrucción de los hechos por los indígenas sobrevivientes de la matanza de 1932. Así, por citar un ejemplo crítico, los informantes exoneraron a los indígenas de cualquier participación

en la insurrección, y culparon por cualquier saqueo y violencia a los mulatos de la región de Atiquizaya.[26]

Seis décadas de gobierno militar condicionaron estos recuerdos. Los sobrevivientes revisaron la participación de habitantes no indígenas de Atiquizaya y Turín en el movimiento, de tal manera que se pudo ocultar la participación indígena en la insurrección (y no la movilización). Las élites ladinas, los comunistas ladinos y los militares ladinos fueron considerados igualmente culpables de la autoría de la matanza. La omisión de la participación indígena en las memorias colectivas fragmentadas de los sobrevivientes tuvo graves consecuencias para el desarrollo de la cultura política local.[27]

La insurrección, sucedida el 22 de enero de 1932, fue en gran medida una respuesta al fraude electoral (así como a la anulación de las elecciones) y a la violenta represión. El 2 de diciembre de 1931 se depuso al presidente reformista Arturo Araujo mediante un golpe de Estado. Su gobierno, hasta ese momento de nueve meses, había sido incapaz de lidiar con el alto nivel de movilización rural. Dos días más tarde, el general Maximiliano Hernández Martínez, vicepresidente y ministro de Guerra, asumió el poder. Tras realizar algunas acciones iniciales que buscaban apaciguar el movimiento sindicalista de izquierda, hacia finales del año estaba alineado con la élite terrateniente. Frustró las aspiraciones electorales de la izquierda y posteriormente reprimió sus protestas.

Las matanzas militares de enero y febrero de 1932 no se dirigieron a la población indígena de El Salvador en general, pero sí ejecutaron a miles de indígenas en las áreas alrededor de las ciudades en las que la insurrección había triunfado (especialmente Nahuizalco, Juayúa, Tacuba e Izalco). Las sublevaciones, que involucraron ente 5 000 y 7 000 indígenas y ladinos en una proporción similar, habían triunfado allí debido a los resentimientos causados por el rechazo fraudulento de las victorias izquierdistas indígenas en las elecciones municipales del 3 y 4 de enero. En otras zonas indígenas, como Santo Domingo de Guzmán (ubicado fuera del cinturón cafetalero), donde la movilización no prosperó, no hubo represión. En otra zona al sur de San Salvador, donde los indígenas habían participado en un ataque fallido contra la capital, los militares participaron en represión selectiva y optaron por no participar en asesinatos masivos.[28] En los meses y años que siguieron a la matanza, el ejército y la Iglesia orquestaron cuidadosamente un recuento de la historia que culpaba a los comunistas de los asesinatos y exculpaba a los *inocentes* indígenas. El refrán que dice “pagan justos por pecadores”, arraigado en el discurso militar, se convirtió en un tropo que sintetizaba el relato de los supervivientes de la matanza; sugería que los indígenas no habían participado en el movimiento y, al mismo tiempo, se habían negado a revelar el nombre de los autores de la matanza.

A través de esta reconstrucción de la historia en la mente traumatizada de los supervivientes, el ejército fue capaz de trazar un camino por medio del cual se convertía en el protector de los indígenas contra aquellos que buscaran fomentar la desestabilización social,

ya fuera a través de la apropiación de tierras o por medio de la oposición democrática a la dictadura. El mestizaje como discurso a nivel nacional y las formas cotidianas de la reproducción cultural continuaron ganando fuerza después de la matanza. Por otra parte, el régimen de Martínez intentó establecer una alianza con los indígenas sobrevivientes. Por ejemplo, el teniente de la Guardia Nacional que estaba a cargo de la escuela indígena para los huérfanos de la matanza impulsó sin éxito la enseñanza del idioma náhuatl. También intentó instituir la enseñanza de este idioma en todas las escuelas de la zona, pero fracasó debido a la falta de recursos.[29] Siguiendo un camino similar, el régimen de Martínez promulgó en 1935 una ley que hacía ilegal que un municipio cambiara su nombre autóctono por otro. Ésta fue una respuesta a la tendencia ejemplificada por parte del municipio, predominantemente indígena, de Cuisnahuat, que deseaba cambiar su nombre indígena por el de San Lucas.[30] Aunque no merezca demasiada atención, este decreto resulta, al menos, paradójico: un régimen cuya conducta puede ser legítimamente descrita como genocida intentó *rescatar* a un pueblo indígena de su propia tendencia hacia la ladinización. El régimen también favoreció a los indígenas con un apoyo más concreto, en particular, en los conflictos de tierras con los ladinos. Martínez también respaldaba a pequeños propietarios que enfrentaban una ejecución hipotecaria y repartía parcelas muy pequeñas en Ahuachapán y La Libertad.[31] Los derrotados y traumatizados indígenas resultaban buenos aliados para un régimen militar dispuesto a exonerarlos de actividades pasadas y a ofrecerles un apoyo limitado en su lucha diaria por la supervivencia.

Como ya se mencionó, antes de la Gran Depresión ya existían divisiones étnicas marcadas, así como un discurso y prácticas culturales de mestizaje. Esas tendencias habrían continuado en alguna forma, independientemente de la crisis económica, tal vez de forma análoga a las que se describen a continuación con respecto a Nicaragua. Los inevitables conflictos étnicos habrían seguido siendo locales y probablemente insignificantes frente a las grandes corrientes de mestizaje que convirtieron, de alguna manera, a los indígenas en no indígenas. No obstante, la Gran Depresión creó las condiciones para el rápido crecimiento de un movimiento obrero y campesino radical que se alió con los tradicionalistas indígenas. El Estado, por su parte, respondió con medidas cada vez más represivas que culminaron en la tragedia de enero de 1932.

NICARAGUA

A principios del siglo XX, el empleo del mestizaje como discurso nacional nicaragüense que hacía hincapié en la homogeneidad étnica facilitó enormemente los triunfos ladinos sobre las comunidades indígenas. Por lo general, las élites locales utilizaron ese discurso, así como la evidencia del sentido común acerca de la falta de rasgos étnicos destacados, con el objetivo

de impugnar la autenticidad de las comunidades indígenas. Aunque la élite regional de la Zona Central no fue de gran importancia política durante la década de 1920, una serie de conflictos por la tierra, el trabajo y la política tuvo lugar en un área económica estratégica, especialmente en la zona cafetalera de Matagalpa. La batalla por el control de sus recursos tuvo consecuencias devastadoras para la población indígena. En 1920, en el oeste y centro de Nicaragua, los pueblos indígenas habían perdido el control de todos los gobiernos municipales. Mucho antes de esa fecha, la identidad indígena nicaragüense se había enfocado en la institución de la Comunidad Indígena y en la oposición a los ladinos, quienes intentaban expropiar sus tierras e impedir su autonomía política.

Aunque la resistencia nacionalista de Augusto César Sandino a la intervención de la Marina de los Estados Unidos tuvo un importante efecto en la población indígena de la región, no apoyó directamente las demandas indígenas. El silencio de Sandino respecto de las comunidades indígenas se derivó de su proyecto nacionalista. Sandino estaba elaborando un discurso popular nacionalista. En realidad, reinventaba una nación que se había convertido en el "patrimonio de oligarcas y traidores".[32] Fundamentalmente, Sandino era un producto y productor del discurso del mestizaje. A pesar de su compromiso sincero con la raza *indohispana*, y más concretamente, de su ayuda a los miskitos y sumos, Sandino no pudo liberarse de su misión civilizadora "para hacer lo posible por civilizar a estos pobres indios que son el tuétano de nuestra raza".[33]

El *indohispanismo* de Sandino sin duda facilitó el reclutamiento tanto de indígenas como de no indígenas. Del mismo modo, la difuminación de las fronteras étnicas entre las bases sociales de apoyo de Sandino impidió, sin duda, que a su asesinato en 1934 siguiera el tipo de represión antiindígena que había arrasado el campo salvadoreño dos años antes.

Sin embargo, es importante reconocer el costo político y cultural de su proyecto. Parte de éste seguramente no fue intencional: el debilitamiento político de las comunidades indígenas que acompañó la caída del Partido Conservador, deslegitimado durante el curso de la lucha sandinista. Su falta de apoyo a las comunidades fue particularmente problemática en aquella coyuntura única en la que los grupos indígenas estaban en condiciones de recuperarse de décadas de pérdidas políticas, culturales y económicas.

Durante la década de 1930, el mito del mestizaje en Nicaragua favoreció la consolidación del régimen de Somoza en varios aspectos. Somoza, quien era mestizo, pudo combinar fácilmente la retórica nacionalista obrerista de inclinación mestiza y, con ello, reforzar su propia legitimidad como líder popular. En 1936, Somoza apoyó el primer movimiento huelguista urbano en la historia de Nicaragua y, al hacerlo, obtuvo un apoyo importante para su ascenso al poder ese mismo año. Más de 10 000 trabajadores iniciaron una huelga de solidaridad con los choferes de taxis (la población de Managua era de 80 000). En lugar de llevar a cabo las órdenes del presidente Sacasa para reprimir la huelga, Somoza negoció con éxito con los líderes sindicales.[34] Del mismo modo, los trabajadores huelguistas de las

plantaciones y fábricas azucareras en el ingenio San Antonio, la empresa más grande del país, gritaban “Viva Somoza” al organizar mítines.[35]

El mestizaje contribuyó a la fragmentación de la oposición al régimen somocista. Irónicamente, fue durante la década de 1930 que el indigenismo, como un programa más o menos coherente para promover los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, surgió como un discurso político serio. Al igual que en México, el indigenismo formó parte de una agenda fundamentalmente asimilacionista, pero, en comparación con periodos anteriores, los indígenas nicaragüenses finalmente se hicieron visibles con valores positivos, ya no totalmente subsumidos dentro del discurso del mestizaje. Como respuesta a la potencia del discurso indigenista, así como a la necesidad de votos potenciales y apoyo político, Somoza ofreció ayuda limitada a las comunidades indígenas en conflicto con los ladinos. En 1934, el gobierno, bajo la influencia de Somoza, promulgó una ley que finalmente abolió el peonaje por deuda estacional, que todavía se practicaba en Matagalpa (poco después de la aprobación de una ley similar en Guatemala). En 1935, el gobierno prohibió formalmente la venta de tierras ejidales y comunales y, en 1937, promulgó un impuesto a las tierras de las haciendas para promover la educación indígena.[36] Por otra parte, el régimen de Somoza ofreció apoyo limitado a los grupos de liderazgo de las comunidades indígenas sobrevivientes, con lo que cultivó un apoyo político que en algunos casos duraría décadas. Cabe señalar que estas victorias políticas de los pueblos indígenas tuvieron lugar a raíz de la desarticulación del movimiento sandinista, y décadas después de que la mayoría de las comunidades hubiera perdido todo nivel significativo de autonomía política, cultural y económica.

Además, como en otras partes de Latinoamérica, los defensores más ardientes de los indígenas, intelectuales nacionales que valoraban a estos pueblos retórica e incluso políticamente, tenían muy pocos conocimientos específicos de sus relaciones con los ladinos. Los indigenistas progresistas no tenían ningún contacto real con los restos aislados de las comunidades que carecían de los medios para forjar alianzas con otros grupos indígenas o con el naciente movimiento obrero que adquiriría importancia durante la siguiente década.

Las intervenciones de los Estados Unidos en Nicaragua marcaron las diferencias históricas de este país con respecto a sus vecinos. Así, la Gran Depresión afectó su desarrollo político y cultural de manera menos directa. Si bien la crisis indudablemente contribuyó al ascenso de Somoza al poder, éste ya estaba bien posicionado como jefe de la Guardia Nacional desde antes, y gracias a los Estados Unidos. Y el caudillo liberal era, a su vez, el único capaz y decidido a ampliar sus bases de apoyo popular (clientelar) para incluir a las comunidades indígenas. A diferencia de El Salvador antes de 1932, o Guatemala durante gran parte del siglo XX, los grupos indígenas del centro y oeste de Nicaragua no representaban una amenaza para el Estado o para los grupos locales de poder ladino. La derrota de la rebelión de 1881 en Matagalpa y en otros lugares, junto con el fracaso del movimiento de Sandino para movilizar a las comunidades, impidió el crecimiento de un movimiento indígena unificado en defensa de

su tierra y trabajo. Fue precisamente la falta de esa amenaza lo que le permitió al gobierno de Nicaragua hacer concesiones a comunidades y grupos indígenas individuales.

GUATEMALA

Las raíces de las diferencias entre el mestizaje en Guatemala y en los demás países de América Central están relacionadas con sus diferentes patrones de colonización. Para Christopher Lutz y George Lovell (basados en Murdo MacLeod), la Guatemala colonial, desde la perspectiva de los intereses de España, podría dividirse en una región central y zonas periféricas.[37] La mayor parte de la zona este y costera era adecuada para el cultivo de la caña de azúcar y del añil, por lo que formaba parte de la región central, un área de amplios asentamientos españoles y de castas. Por la falta de incentivos económicos, los españoles no solían instalarse en el altiplano occidental.[38] Por último, por razones climáticas, la zona del altiplano tenía una población relativamente densa que se vio menos afectada por las enfermedades que acompañaron la conquista. Por otra parte, los indígenas no fueron sometidos a la esclavitud (y la muerte en su traslado a Perú) que diezmó a las poblaciones indígenas de Honduras y Nicaragua. Cualquiera que sea la relación precisa entre los factores anteriores, no hay duda de que, con excepción del oeste de El Salvador, en los albores de la época de la Independencia, sólo Guatemala se mantuvo como una región indígena con una población abrumadoramente densa (el oeste de Honduras era indígena en su mayor parte pero no estaba densamente poblado).[39]

No se puede exagerar la importancia de la gran mayoría indígena en Guatemala cuando se trata de entender sus discursos divergentes de mestizaje y políticas indígenas en contraste con el resto de América Central. Más allá del enorme factor demográfico, se debe resaltar que los indígenas guatemaltecos no sufrieron las derrotas político militares que sí tuvieron que soportar los indígenas en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Debido a la permanencia constante de una amenaza estratégica (ejemplificada por la rebelión de Carrera en 1837), el Estado de Guatemala y la élite cafetalera perpetuaron un *pacto colonial* que permitió cierto grado de autonomía cultural y política de los indígenas a cambio de deferencia política y una mayor coacción económica en las relaciones laborales.

Con el fin de fomentar el suministro de mano de obra para la industria del café después del triunfo de la Revolución liberal de 1871, la élite guatemalteca diseñó una serie de medidas que, según argumenta Arturo Taracena, equivalía a una política de "segregación solapada".[40] Al retomar el poder, los liberales se enfrentaron a una contradicción aparentemente insoluble. Por un lado, su ideología exigía políticas de homogeneización, integración e igualdad de trato a ciudadanos universales. Por otro, la necesidad de una "mano de obra estacional barata y abundante para el café", junto con las realidades culturales, dictó el menester de una

"segregación solapada".[41] Esa política hizo que fuera prácticamente imposible construir un discurso de mestizaje similar al de México o el istmo central. El régimen liberal decretó una serie de *leyes secundarias,* un conjunto de prácticas discriminatorias y segregacionistas más o menos formales que garantizaban tanto el dominio militar sobre una amenaza estratégica como un suministro constante de mano de obra indígena.[42] Estas leyes y prácticas se relacionaban con el trabajo, la tierra, la educación, el servicio militar obligatorio y la ciudadanía. Taracena argumenta con energía que los liberales socavaron sus propios principios universalistas con el fin de "garantizar la mano de obra indígena y la distribución de las tierras comunales" en beneficio de la industria del café. Sin embargo, tal vez había una dimensión más estratégica en términos políticos en la "segregación solapada", ya que en Guatemala los pueblos indígenas no habían sido sometidos políticamente en la misma medida ni habían sido derrotados militarmente de forma tan decisiva tras las rebeliones como en el caso de las poblaciones indígenas minoritarias de los otros países: las rebeliones en el occidente de El Salvador (en alianza con los ladinos pobres, 1932), en Intibucá, Honduras (1926) y en Matagalpa, Nicaragua (1881). En Guatemala, entonces, el Estado y sus aliados de la élite agraria necesitaban prolongar lo que David McCreery denomina el "pacto colonial", por medio del cual las comunidades indígenas mantuvieron un alto nivel de autonomía política y cultural, a cambio de aceptar las reglas del juego político y económico.[43] Tal vez se podría añadir que esto incluía una prohibición implícita de unidad intraétnica más allá de los límites municipales.

El sistema anterior, que combinaba las leyes secundarias con el "pacto colonial", continuó hasta la Gran Depresión, cuando el régimen de Ubico (1931-1944) comenzó a hacer concesiones a los grupos indígenas en cuestiones laborales clave y a representar políticamente su gobierno dentro de las comunidades a través de los intendentes. Al hacerlo, Ubico debilitó en lo económico la élite de ladinos locales mediante la eliminación del papel de los habilitadores, y en lo político a través del desplazamiento de los políticos locales. Estas medidas tomaron forma a raíz de una serie de eventos que tuvieron lugar al principio de la década.

Alrededor del mediodía del 28 de julio 1930, unos 2 000 indígenas se reunieron en la plaza de Totonicapán, una capital departamental en el altiplano occidental, para protestar por una revisión que incrementaba el impuesto a la tierra. Las autoridades locales informaron que los indígenas "participaron en un ataque armado contra los cuarteles del ejército". Los soldados abrieron fuego, "matando a tres personas e hiriendo a varias".[44] Los manifestantes se dispersaron y llegaron refuerzos de Quetzaltenango y la capital. El gobierno denunció el ataque armado contra los cuarteles perpetrado por "turbas indígenas", pero no hubo ninguna verificación independiente de tal hecho. Se utilizó la protesta como pretexto para suspender las garantías constitucionales de reunión pacífica y la libertad de expresión. Aunque admitieron que la amenaza armada en Totonicapán había sido "risible", las autoridades

suspendieron las garantías, ya que "tenían información de la existencia de movimientos sediciosos […] [que] amenazaban con provocar un levantamiento en otras ciudades". El embajador de los Estados Unidos, Sheldon Whitehouse, transmitió las palabras del presidente Chacón al Departamento de Estado y concluyó que la suspensión de las garantías buscaba "controlar la prensa y enfrentar mejor la sensación de malestar y descontento con el gobierno que existe en todo el país en la actualidad".[45]

No hay evidencia alguna de que existiera una amenaza seria para el gobierno y mucho menos algún tipo de coordinación entre las diferentes comunidades indígenas o entre éstas y el naciente movimiento obrero. Aunque el minúsculo Partido Comunista (300 miembros) sí trató de establecer vínculos de organización en el campo. En 1931, Jorge Fernández Anaya, el organizador comunista mexicano, pasó un mes en una hacienda en el departamento de Totonicapán. Durante ese periodo, gracias a la asistencia de un intérprete multilingüe, se las arregló para organizar una huelga a fin de abolir el pago con vales. Según Fernández Anaya, en una entrevista en la década de 1980, en la huelga participaron trabajadores de varias haciendas y de varios grupos lingüísticos. Aunque "hubo muchos 'indios' presos", los huelguistas prevalecieron y los hacendados, en lo sucesivo, pagaron con dinero. Las reflexiones del comunista mexicano sobre su experiencia en la organización en la hacienda son reveladoras. En primer lugar, afirma que el nivel de represión interna en la hacienda era tan intenso que, con el fin de evitar su captura, se convirtió en un prisionero virtual en "un especie de un jacalón grande". El organizador / intérprete "buscó gente para que, lo que yo les dijera a ellos, se lo dijeran a diversos núcleos que estaban en las haciendas […] Y se hablaba y ellos les decían a los peones lo que uno quería".[46] En efecto, Fernández Anaya se situó en la cúspide de una organización celular preexistente que aparentemente no tenía nada que ver con una estructura sindical formal. Supo escuchar a los trabajadores indígenas: "Luego, me di cuenta de que lo que quería la gente era encontrar una forma de salvación de ellos y lo veían en el pago en dinero".[47] También reflejó algunos de los prejuicios ladinos urbanos que predominaban en las filas de los trabajadores organizados. Refiriéndose a los trabajadores indígenas como *indios* (como lo hacía el gobierno), lamentó su "atraso cultural", que al parecer los llevaba a no tener ninguna otra preocupación más allá del pago en efectivo. Fernández Anaya, como se ha señalado antes, sugirió que los indígenas salvadoreños eran mucho más avanzados, accesibles y por lo tanto dispuestos para la organización sindical.

Aunque el comunista mexicano tenía razón en que las barreras lingüísticas eran innegablemente más sustanciales en Guatemala que en El Salvador, sus declaraciones pueden interpretarse de otra manera: los izquierdistas ladinos en El Salvador superaron con éxito prejuicios étnicoculturales significativos durante el periodo de movilización. El ascenso de Jorge Ubico al poder en 1931 aplastó toda posibilidad para sus contrapartes guatemaltecas de lograr una transformación personal y colectiva similar en el campo.[48] Su régimen arrestó sistemáticamente a los activistas sindicales y militantes del Partido Comunista en 1931. Con el

pretexto de la insurrección salvadoreña, completó el trabajo en febrero de 1932, cuando arrestó a más de 200 militantes.[49] Sin embargo, como se sugirió antes, Ubico promovió políticas que le ganaron algo de apoyo entre la población indígena. En Momostenango, en el departamento de Totonicapán, los indígenas lo llamaban *tatanol* (gran padre).[50]

La abolición del régimen de servidumbre por deudas en 1934 (derogado en cierta medida por la crítica internacional e indigenista) le permitió a Ubico afirmar que había "rescatado [a los indios] de la esclavitud".[51] La repercusión de la abolición fue atenuada por la imposición de estrictas leyes contra la vagancia que obligaban a los campesinos sin tierra y a los minifundistas a trabajar entre 100 y 150 días al año en las plantaciones o en la construcción de carreteras. Al parecer algunos trabajadores indígenas veían estas medidas como algo más justo que el peonaje por deudas, en parte porque los ladinos pobres también se vieron afectados y porque los odiados habilitadores resultaban perdedores. David McCreery argumenta que, en un sentido más amplio, la ley contra la vagancia de Ubico "aceleró un proceso de diferenciación socioeconómica entre la población indígena, que ya había sido acelerado por la participación forzosa en la economía cafetalera".[52] McCreery señala la disponibilidad de mano de obra local más barata para campesinos indígenas con más recursos, ya que muchos de sus vecinos más pobres preferían quedarse en casa en lugar de viajar a la costa a las cosechas de café, azúcar o algodón. Esta accesibilidad probablemente contribuyó al aumento de la producción de alimentos en la última parte de la década de 1930, como señala Bulmer-Thomas.[53] Por otra parte, la eliminación de los habilitadores y sus asociados abrió nuevas posibilidades económicas para los indígenas.

Aunque la abolición del peonaje por deudas puede haber beneficiado políticamente a Ubico, la ley contra la vagancia encontró algo de resistencia. El embajador estadunidense en Guatemala informó, en 1936, que en Nebaj, Quiché, los indígenas reaccionaron a los esfuerzos de la policía para hacer cumplir la ley atacando la estación de policía. En respuesta, "Se enviaron refuerzos desde pueblos cercanos y, como castigo, se ejecutó sumariamente a ocho de los líderes indígenas".[54] El embajador predijo nuevos disturbios por parte de los indígenas, pero dudaba que pudiera surgir "un movimiento de oposición realmente serio" debido a la falta de liderazgo cohesivo entre los indígenas. En el departamento fronterizo de San Marcos, Cindy Forster descubrió evidencia sustancial de la resistencia pasiva durante la década de 1930 y de la voluntad de los trabajadores indígenas para unirse a los sindicatos en la década de 1940, aún bajo el gobierno de Ubico.[55]

A pesar de la recepción desigual de la ley contra la vagancia, Ubico fue capaz de consolidar un grado importante de apoyo entre los indígenas del altiplano a través de un estilo político populista que se caracterizaba por visitas relámpago (a menudo en motocicleta) que le permitieron intervenir en los problemas locales.[56] Antes de la instalación del sistema de intendencias, los líderes indígenas locales tenían que trabajar como subordinados de los ladinos locales, que invariablemente eran elegidos como alcaldes. Los intendentes, hombres

ajenos a la localidad que eran nombrados directamente por Ubico, tenían la tendencia de socavar la autoridad ladina local. El régimen de Ubico también instituyó políticas para expedir cédulas (documentos de identidad) que le dieron una base material a la idea de la ciudadanía indígena al igual que un mayor reclutamiento en las fuerzas armadas.

Si bien Ubico tuvo un éxito moderado al forjar una base política clientelar entre los pueblos indígenas, tuvo menos éxito en la creación de un discurso coherente sobre los indígenas y su lugar en la sociedad guatemalteca o en el imaginario nacional. Estudios recientes sugieren que durante las décadas de 1920 y 1930, el mestizaje en sus variantes mexicanas y nicaragüenses se mantuvo en gran medida ausente en Guatemala. Arturo Taracena y Ramón González sugieren que se utilizó el discurso del mestizaje para integrar ladinos no blancos en la nación todavía controlada por criollos y para fomentar así una alianza estratégica no indígena.[57] Sin embargo, al parecer sí hubo cambios ideológicos menores en la década de 1930 que acompañaron las políticas clientelares de Ubico. Cuando antropólogos y arqueólogos estadunidenses comenzaron a establecer la presencia maya, la noción de grandeza de esta cultura y el valor de lo *indígena puro* comenzaron a circular entre la clase media y la élite. Asimismo, se convocó una mayor inmigración europea con la esperanza vaga y contradictoria de crear descendencia mestiza (los alemanes en Alta Verapaz y San Marcos estaban muy avanzados en este sentido).[58]

Ubico quería fomentar un sector fuerte de pequeños productores de alimentos, así como proporcionar mano de obra para las plantaciones de café. Sin embargo, también tenía la visión de expandir el poder del Estado, y con ese objetivo puso fin a las prerrogativas de intermediarios ladinos (y de algunos indígenas), quienes se habían beneficiado de las políticas de segregación solapada. Por lo tanto, la política del régimen de Ubico hacia los indígenas combinó un programa de centralización estatal con una forma *sui generis* de indigenismo.

La Gran Depresión influyó en estos acontecimientos políticos y culturales, aunque de una manera algo indirecta. Como se sugirió anteriormente, es dudoso que Ubico hubiera llegado al poder si no hubiera sido por la amenaza de la movilización popular provocada en parte por las dificultades económicas. Del mismo modo, los trastornos económicos probablemente afectaron la capacidad de los grupos ladinos locales para resistir su desplazamiento por parte del régimen. Por último, inspirado por los ejemplos fascistas y por el temor a la revolución, el nuevo régimen buscó nuevas formas de integrar la nación, lo que lo distinguió de sus predecesores liberales oligárquicos. Un indigenismo modesto con sus correspondientes ideologías étnicas formó parte del nuevo autoritarismo de Ubico.

Conclusión: Consecuencias políticas del indigenismo de la década de 1930

A pesar de la ausencia de una política indígena a escala nacional, durante la década de 1930

los gobiernos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador hicieron maniobras y gestos tácticos que favorecieron a individuos o pequeños grupos en los conflictos con los ladinos locales. Estas formas limitadas de intervención estatal en favor de las comunidades indígenas fueron particularmente consecuentes en El Salvador, donde, como se ha señalado, a raíz de las matanzas traumáticas de 1932 el régimen militar fue capaz de cambiar discursivamente la culpa para tornarla hacia los comunistas e inventarse a sí mismo como protector de los indígenas. La retórica y las políticas indigenistas reforzaron los regímenes dictatoriales de la región y tuvieron ramificaciones políticas significativas.

En 1944, las políticas guatemaltecas y salvadoreñas hacia los grupos indígenas pagaron costos políticos. Tras el derrocamiento de Jorge Ubico encabezado por estudiantes, el general Federico Ponce asumió la presidencia interina y anunció elecciones supuestamente libres, que se celebrarían en diciembre. Ponce intentó movilizar la base de apoyo de Ubico entre los indígenas como estrategia contra su opositor demócrata en la carrera presidencial, Juan José Alvarado. En algunas zonas del altiplano, el régimen de Ponce anunció una *abolición* del sistema de libreto, que exigía a los trabajadores entregar sus tarjetas de trabajo a cambio, muchas veces, del registro como miembros del Partido Liberal Progresista (ubiquista). Del mismo modo, el régimen hizo circular la creencia de que el gobierno distribuiría las plantaciones recientemente nacionalizadas (expropiadas a ciudadanos alemanes) a los trabajadores y campesinos indígenas. Advirtieron, sin embargo, de la oposición ladina y arevalista a esa política redistributiva. El 15 de septiembre de 1944, unos 4 000 indígenas, armados con machetes, desfilaron por las calles de la capital en apoyo a Ponce y en contra de la oposición democrática.[59] Durante semanas, el régimen mantuvo a los indígenas acuartelados en las afueras de la ciudad. El creciente resentimiento contra la manipulación del proceso electoral por parte del régimen, incluyendo su provocación potencial de una rebelión indígena, culminó con el derrocamiento revolucionario del gobierno el 20 de octubre. Oficiales jóvenes, estudiantes, maestros y trabajadores participaron en el exitoso movimiento armado. Ponce renunció y el liderazgo revolucionario convocó a elecciones que inauguraron un periodo de 10 años de democracia.

El 22 de octubre, en el municipio de Patzicía, Chimaltenango, indígenas simpatizantes de Ponce se levantaron en rebelión y mataron a una docena de hombres ladinos. En respuesta, vigilantes y tropas locales ejecutaron aproximadamente a 300 indígenas. Aunque la chispa local específica se desconoce, parece probable que la derrota de Ponce habría simbolizado el fin de las esperanzas indígenas para la reforma agraria. La evidencia de esta tesis la proporciona la agitación de movimientos similares en otros lugares del altiplano occidental.[60]

Es intrigante, si no irónico, que la promesa de la reforma agraria haya sido, probablemente, lo que provocó esas rebeliones frustradas en contra de una revolución que ocho años más tarde llevaría a cabo una importante reforma agraria que beneficiaría directamente a los indígenas del altiplano. Aunque la reforma agraria, *per se,* no se encontraba

en ese momento en la vanguardia de la agenda revolucionaria, hubo algunos elementos dentro de la coalición democrática que promovieron ese objetivo.[61]

La disyuntiva política entre las fuerzas democráticas y la población indígena revelada por la revolución democrática de 1944 fue una constante en toda la historia moderna de América Central. En El Salvador, durante el mismo año, se desarrolló una historia similar. Tras el derrocamiento de Martínez en la primavera de 1944 surgió un movimiento democrático dirigido por Arturo Romero, quien ganó un seguimiento masivo entre los estudiantes y, en menor medida, entre los trabajadores y el campesinado pobre ladino. Al día siguiente del triunfo de la revolución democrática en Guatemala, los sectores conservadores del ejército liderado por Osmín Aguirre derrocaron al gobierno provisional que había estado guiando el proceso electoral. Este termidor salvadoreño contaba no sólo con el apoyo de la élite terrateniente, sino también de los indígenas. Arraigados en una década de alianza informal con los militares contra la élite ladina local, algunos indígenas occidentales, armados con machetes, aterrorizaron a las poblaciones ladinas locales con amenazas de venganza por las masacres de 1932.[62] Aún no está claro en qué medida el apoyo indígena al régimen resultó decisivo en su victoria contra las fuerzas democráticas progresistas. Del mismo modo, en Nicaragua las alianzas indígenas con los conservadores fueron parte integral de su supervivencia bien entrado el siglo XX. Con base en esa alianza, los indígenas del altiplano central frustraron con éxito los numerosos esfuerzos por abolir sus comunidades y, en algunas ocasiones, lograron resistir la apropiación de tierras por parte de la élite. Durante ese mismo periodo, sin embargo, los ladinos desplegaron el discurso de la democracia y el liberalismo para asaltar las tierras indígenas. En la década de 1930, con las comunidades derrotadas en gran medida en sus luchas por la tierra y la autonomía política, el régimen de Somoza fue capaz de cooptar a los líderes indígenas de Matagalpa a Subtiava (León). Su apoyo al liberalismo somocista condujo a la derrota histórica de Emiliano Chamorro, el caudillo conservador, en su elección senatorial en Matagalpa en 1934. Todavía en la década de 1970, el movimiento sandinista tuvo que librar fuertes batallas políticas con el liderazgo somocista y su amplia base de apoyo dentro de las comunidades indígenas de Subtiava, Matagalpa y Jinotega.[63]

Las drásticas transformaciones políticas de las comunidades indígenas de toda América Central durante la primera mitad del siglo XX están relacionadas con los orígenes problemáticos de la democracia en Centroamérica. Para los ladinos izquierdistas del siglo XX, el apoyo indígena para Somoza y su participación en los movimientos antidemocráticos de 1944 corresponden al mismo motivo: los indígenas son conservadores, oportunistas o *gobiernistas*. Sin embargo, esos mismos momentos históricos deben ser vistos desde el otro lado, como parte del silenciamiento masivo de las voces indígenas que condicionó los orígenes de la política democrática en la región. Esos orígenes, rodeados de mala fe e ignorancia, han actuado como un virus latente que ha brotado precisamente en los momentos en

que las poblaciones indígenas y la izquierda han tenido mayores posibilidades para alcanzar sus objetivos comunes, como en Nicaragua y Guatemala a finales de 1970 y principios de 1980. Hoy la relación no es más saludable.

[1] Este ensayo no se enfoca en Costa Rica, un país que sufrió por igual la Gran Depresión, pero que tenía un marco institucional democrático más fuerte para resistir sus efectos políticos. Sus relaciones étnicas tan distintas justificaron su exclusión de este análisis. Honduras también se excluye debido principalmente a la relativa falta de investigación sobre las relaciones entre indígenas y ladinos en sus departamentos occidentales durante la década de 1930. Para la investigación preliminar, véase Darío Euraque, *Estado, poder, nacionalidad, y raza en la historia de Honduras,* Subirana, Tegucigalpa, 1996, y Jeffrey Gould, "Proyectos del Estado-nación y la supresión de la pluralidad cultural: perspectivas históricas", en Darío Euraque, Jeffrey L. Gould y Charles R. Hale (eds.), *Memorias del mestizaje: cultura política en Centroamérica de 1920 al presente,* CIRMA, Antigua, 2004, pp. 388-391.

[2] Edelberto Torres-Rivas, *Interpretación del desarrollo social centroamericano,* EDUCA, San José, 1977, pp. 283-284. Torres-Rivas deriva sus datos de Vernon Wickizer, *The World Coffee Economy,* Stanford University Press, Stanford, 1943, y del Pan American Coffee Bureau. Victor Bulmer-Thomas presenta un cuadro basado en datos de la Liga de las Naciones que sugiere sólo reducciones menores en la producción durante este mismo periodo.

[3] Jeffrey L. Gould y Aldo Lauria, *To Rise in Darkness: Revolution, Repression, and Memory in El Salvador, 1920-1932,* Duke University Press, Durham, 2008, pp. 20-31.

[4] Embajador Sheldon Whitehouse al Secretario de Estado, 12 de marzo de 1930, US State 814:00/1007, informa sobre la "crítica situación económica actual y […] la falta de trabajo".

[5] Victor Bulmer-Thomas, "Central America during the Inter-War Period," en Rosemary Thorp (ed.), *An Economic History of Twentieth-Century Latin America: Latin America in the 1930s,* vol. 2, Palgrave, Nueva York, 2000, p. 257. Naturalmente, la reducción de salarios requirió del apoyo del gobierno, en especial para reprimir cualquier forma de resistencia.

[6] Bulmer-Thomas, "Central America…", *op. cit.,* p. 260.

[7] *Ibid.,* p. 265.

[8] Citado en Jeffrey Gould, *To Lead as Equals: Rural Protest and Political Consciousness in Chinandega, Nicaragua, 1912-1979,* University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1990, p. 38; en El Salvador, en agosto de 1931, el cónsul de los Estados Unidos señaló: "Es evidente que el poder adquisitivo de las clases trabajadoras, especialmente en los distritos rurales, ha sido claramente restringido. La mellada experiencia de los trabajadores es notable". Citado en Gould y Lauria, *To Rise in Darkness…, op. cit.,* p. 20.

[9] Véase Eric Ching, "Patronage and Politics under General Maximiliano Martínez, 1931-1939: the Local Roots of Military Authoritarianism in el Salvador," en Aldo Lauria y Leigh Binford, *Landscapes of Struggle: Politics, Society, and Community in el Salvador,* University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2004.

[10] Véase Etienne Balibar e Immanuel Wallerstein, *Race, Nation, Class: Ambiguous Identities,* Verso, Londres, 1991, y Clara Arenas, Charles Hale, Gustavo Palma, *Racismo en Guatemala?: Abriendo el debate sobre un tema tabú,* AVANCSO, Guatemala, 1999.

[11] Sobre indigenismo, véase Alan Knight, "Racism, Revolution, and Indigenismo: Mexico 1910-1940", en Richard Graham *et al.* (ed.), *The Idea of Race in Latin America, 1870-1940,* University of Texas Press, Austin, 1990, p. 77.

[12] *Idem.*

[13] Citado en Arturo Taracena, *Etnicidad, Estado y Nación en Guatemala, 19441985,* vol. 2, CIRMA, Antigua, 2004, p. 39.

[14] Jeffrey L. Gould y Aldo Lauria, *To Rise in Darkness…, op. cit.,* pp. 99-131.

[15] Entrevista con Salomé Torres, El Cacao, Sonsonate, 2001.

[16] Gould, *To Die in This Way: Nicaraguan Indians and the Myth of Mestizaje, 1880-1965,* Duke University Press, Durham, 1998, pp. 56-57.

[17] Carlos Figueroa Ibarra, "El 'bolchevique mexicano' de la Centroamérica de los veinte" (entrevista con Jorge Fernández Anaya), *Memoria* 4, núm. 31, (septiembre-octubre de 1990), p. 217.

[18] Gobernador de Ahuachapán al ministro de Gobernación, 1892 y 1931, Archivo General de la Nación, Colección Gobernación.

[19] Antonio Conte, *Treinta años en tierras salvadoreñas,* vol. 2, El Progreso, San Miguel, 1934, p. 190.

[20] *Ibid.,* p. 97.

[21] Gould y Lauria, *To Rise in Darkness…, op. cit.,* pp. 109-110.

[22] James Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts,* Yale University Press, New Haven, 1990.

[23] Mario Appelius, *Le Terre Che Tremano,* A. Mondadori, Verona, 1929, pp. 113-114. Durante la insurrección, los residentes de Nahuizalco reportaron que los rebeldes gritaban "¡Viva los indios de Nahuizalco!"

[24] Entrevista con Sotero Linares, Las Higueras, Izalco, 2001.

[25] Entrevista con Fabián Mojica, Sonzacate, 1999.

[26] Entrevista con Andrés Pérez, Pushtan, Nahuizalco, 2001.

[27] Jeffrey L. Gould, "Revolutionary Nationalism and Local Memories in El Salvador", en Gilbert Joseph (ed.), *Reclaiming the Political in Latin American History: Essays from the North,* Duke University Press, Durham, 2001, pp. 147-157.

[28] Véase Gould y Lauria, *To Rise in Darkness…, op. cit.,* pp. 209-239.

[29] *El Heraldo de Sonsonate,* 13 de agosto de 1932. Es muy dudoso que se enseñara náhuatl sistemáticamente en las escuelas.

[30] San Lucas supuestamente había salvado a un líder izquierdista de la ejecución y también salvó al pueblo.

[31] Everett Wilson, *La crisis de integración nacional en El Salvador, 19191935,* Concultura, San Salvador, 1935, pp. 228-229. El régimen distribuyó unos 300 lotes para viviendas en La Libertad y 60 caballerías para los pobres rurales.

[32] *Augusto C. Sandino: el pensamiento vivo,* T. I, Sergio Ramírez (ed.), Nueva Nicaragua, Managua, 1981, pp. 151, 168. Véase especialmente el importante trabajo de Michael Schroeder, "To Defend Our Nation's Honor': Toward a Social and Cultural History of the Sandino Rebellion in Nicaragua, 19271934", tesis de doctorado, University of Michigan, 1993. También, véase el trabajo de Volker Wunderich, por ejemplo *Sandino en la Costa,* Nueva Nicaragua, Managua, 1989.

[33] José Román, *Maldito país,* Ediciones El Pez y la Serpiente, Managua, 1983, p. 104.

[34] Véase Gould, *To Lead as Equals…, op. cit.,* p. 39.

[35] *Idem.,* Ellos gritaban la consigna junto con "Abajo O'Reardon", el administrador que ellos buscaban remplazar con un empleado a favor del sindicato. También luchaban por un alza del 50%. Finalmente, Somoza no apoyó directamente a los huelguistas a pesar de que ellos lo apoyaron sobremanera y perdieron.

[36] Véase Gould, *To Die in This Way…, op. cit.,* pp. 181-192.

[37] Christopher Lutz y George Lovell, "Core and Periphery in Colonial Guatemala", en Carol A. Smith (ed.), *Guatemalan Indians and the State: 15401988,* University of Texas Press, Austin, 1990, pp. 38-45.

[38] Además, esta división también reflejó una distinción fundamental en el ámbito de la conquista espiritual. Las órdenes religiosas en las tierras altas, como los dominicos y franciscanos, por lo general más sensibles a la cultura indígena, tendían a trabajar en las regiones periféricas.

[39] Véase especialmente el argumento de Richard Adams en "The Conquest Tradition of Mesoamerica", *The Americas,* octubre de 1989, sobre cómo las distintas tradiciones de la conquista en Mesoamérica (como en Guatemala y el este de El Salvador) relacionadas con las formas de asentamientos previos a la conquista dieron forma al desarrollo y la sobrevivencia de las poblaciones indígenas.

[40] Taracena, *Etnicidad, Estado y Nación en Guatemala, 1808-1944,* vol. 1, CIRMA, Guatemala, 2002, pp. 267-337.

[41] *Ibid.,* pp. 37-38.

[42] *Idem.*

[43] David McCreery, *Rural Guatemala,* Stanford University Press, Stanford, 1994, p. 326.

[44] Embajador Sheldon Whitehouse al secretario de Estado, 29 de julio de 1930, US State: 814.00/1014; 31 de julio de 1930, US State 814:00/1015.

[45] Embajador Sheldon Whitehouse al secretario de Estado, 31 de julio de 1930, US State 814:00/1015.

[46] Carlos Figueroa Ibarra, "El 'bolchevique mexicano'…", *op. cit.,* p. 221.

[47] *Idem.*

[48] Sobre los esfuerzos de organización entre trabajadores del café en San Marcos a inicios de la década de 1930, véase Cindy Forster, *The Time of Freedom: Campesino Workers in Guatemala's October Revolution,* University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2001, pp. 22-23.

[49] Carlos Figueroa Ibarra, "Marxismo, sociedad y movimiento sindical en Guatemala", *Anuario de Estudios Centroamericanos,* vol. 16, núm. 1 (1990), pp. 77-78.

[50] Robert Carmack, *Rebels of Highland Guatemala: The Quiche-Maya of Momostenango,* University of Oklahoma

Press, Norman, 1995, p. 193.

[51] Victor Bulmer-Thomas, *La crisis de la economía de agroexportación (1930-1945)*, FLACS, Madrid, 1993, vol. 4, p. 367; Chester Jones, *Guatemala: Past and Present*, University of Minnesota Press, Mineápolis, 1940, p. 162, señala la objeción de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra en 1932 a las leyes existentes.

[52] David McCreery, "Wage Labor, Free Labor, and Vagrancy Laws: The Transition to Capitalism in Guatemala, 1920-1945", en William Roseberry, Lowell Gudmundson y Mario Samper (eds.), *Coffee, Society and Power in Latin America*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1995, p. 223.

[53] Victor Bulmer-Thomas, "Central America during the Inter-War Period…", *op. cit.*, pp. 259-262.

[54] Carta del embajador Fay Allen Des Portes al secretario de Estado, 17 de agosto de 1936, US State Dept. 814.504/33.

[55] Forster, *Time of Freedom…*, *op. cit.*, pp. 80-81, 138-141. Véase también Chester Jones, *Guatemala: Past and Present*, University of Minnesota Press, Mineápolis, 1940, p. 165. Jones señala una forma de resistencia pasiva que exigía el reconocimiento de la condición de *comerciante*, ya que únicamente la mano de obra agrícola estaba afectada por la ley. También sugiere que la ley condujo a un aumento en los salarios rurales.

[56] "El estilo político populista" no implica discursos populistas o políticas características de Perón o incluso de Somoza, sino un estilo de campañas políticas no elitista.

[57] Véase Ramón González Ponciano, "La visible invisibilidad de la blancura y el ladino como no blanco en Guatemala", en Darío Euraque, Jeffrey L. Gould y Charles R. Hale (eds.), *Memorias del mestizaje: Cultura política en Centroamérica de 1920 al presente*, pp. 111-132; Arturo Taracena, "Guatemala: el debate historiográfico en torno al *mestizaje*, 1970-2000", en Darío Euraque, Jeffrey L. Gould y Charles R. Hale (eds.), *Memorias del mestizaje*, pp. 79-110.

[58] Véase el documental *Los Civilizadores: Alemanes en Guatemala*, dirigido por Uli Stelzner, Alemania, 1998.

[59] Sergio Tischler Visquerra, *Guatemala 1944: Crisis y revolución*, Universidad de San Carlos, Guatemala, 1998, p. 251.

[60] Véase Charles R. Hale, *Más que un indio: Racial Ambivalence and Neoliberal Multiculturalism in Guatemala*, School of American Research, Santa Fe, 2006, pp. 146-147. Hale señala que los recuerdos de la supuesta vida licenciosa y la barbarie indígena entran en un reino de temores atávicos en el núcleo de lo que él llama el "imaginario político" ladino. El imaginario político se refiere a "los pensamientos, premisas e imágenes que se separan de los reinos explícitos analíticos y sensoriales, aunque potencialmente presentes en ambos". Para Hale, este imaginario ha dado forma por mucho tiempo a las respuestas ladinas a los movimientos indígenas.

[61] Cindy Forster, *The Time of Freedom…*, *op. cit.*, pp. 76-81.

[62] Patricia Alvarenga, "Los indígenas y el Estado: alianzas y estrategias políticas en la construcción del poder local en El Salvador, 1920-1944", en Darío Euraque, Jeffrey L. Gould y Charles R. Hale (eds.), *Memorias del mestizaje*, *op. cit.*, pp. 388-391.

[63] Véase Gould, *To Die in This Way…*, *op. cit.*, pp. 245-266.

VIII. CARÁCTER Y REPERCUSIONES DE LA GRAN DEPRESIÓN EN MÉXICO

ALAN KNIGHT

UNA INTERPRETACIÓN más o menos generalizada y, lo que es más importante, correcta, es que la evolución de la economía política en México durante los años treinta obedeció a la interacción de dos fuerzas concomitantes, una endógena y otra exógena: la Revolución y la Gran Depresión. El fortuito entrecruzamiento de estas dos corrientes (pido disculpas por el cambio abrupto a esta metáfora) creó la economía política distintiva de la década, de la cual formó parte importante la administración / proyecto / ideología generalmente conocida como cardenismo.[1] No obstante, incluso esta formulación consensuada exige un preciso esclarecimiento, pues las dos corrientes, la Revolución y la depresión mundial, son en sí ferozmente complejas (y el tema de un vivo debate aún presente).[2] Además, la distinción endógena/exógena no es de ninguna manera una división precisa, en particular para quienes han optado por ver a la Revolución en sí como consecuencia de la penetración, opresión, instigación o manipulación extranjera.[3] Puesto que no comparto esa interpretación, considero analíticamente útil la distinción endógena / exógena, aunque sea aproximada, en lo que, sin duda, se asemeja a un vasto número de conceptos históricos y científico-sociales.

Asimismo, resulta de particular utilidad en el contexto de este libro en el que se hace un comparativo de diferentes países de América Latina. Puesto que sólo en México se llevó a cabo una revolución social importante a principios del siglo XX, su experiencia en ese sentido fue única, y en la medida en que la Revolución tuvo una dimensión económica, como en realidad ocurrió (no se trató de una simple revolución política), hay una historia económica para ser contada, una historia que en muchas maneras difiere de la del resto del continente. En este sentido, la comparación entre México y el resto de América Latina es un ejercicio de contrastes que, en particular, involucra las respuestas políticas mexicanas. Por otra parte, como un fenómeno internacional cuyas causas fueron externas a México y por lo mismo afectaron a toda Latinoamérica, la Gran Depresión presentó amenazas y retos comunes, de ahí que sea factible establecer una comparación entre México y los países latinoamericanos en general o, más estrictamente, entre algunos países, regiones o sectores de América Latina.[4] Las similitudes son más evidentes, argumentaría, en términos de las estructuras económicas

anteriores (exportaciones, manufacturas, agricultura de subsistencia, etc.) y la manera en la que la fuerza (exógena) de la Depresión repercutió en ellas. Pero cuando de política se trata, México es un caso particular.

Si reformulo la metáfora hidráulica antes propuesta, el escenario se describiría de esta manera: en 1929 un terremoto en Wall Street (al que siguieron réplicas importantes en Europa en 1931) desató un tsunami a lo largo de Latinoamérica. Los diferentes países —y regiones y sectores— resintieron los embates de distintas maneras, dependiendo de su topografía particular. Las islas bajas se inundaron; algunas tierras altas sobrevivieron y, con el paso del tiempo, incluso quizá resultaron beneficiadas por la fortuita reconformación de la línea costera. Así, nuestra primera tarea es rastrear esa topografía económica que, en muchos sentidos, fue una estructura dada. No obstante, la reacción humana a la inundación también contó, de manera que en segundo lugar debemos considerar las respuestas políticas —lo que nos desvía de los supuestos estructurales (económicos) y nos lleva hacia las decisiones más voluntariosas (políticas)—. En el caso mexicano, estas decisiones fueron algunas veces, aunque no siempre, peculiares por la virtud de ser "revolucionarias", hechas por "revolucionarios" que gobernaron un Estado "revolucionario" y experimentaron con políticas "revolucionarias".

El beneficio analítico de esta investigación es dual. Por una parte, un estudio del caso mexicano puede ayudarnos a formular conclusiones generales sobre la crisis mundial (tanto de las repercusiones como de las respuestas) en toda la región latinoamericana.[5] No obstante, como mexicanista que soy, preferiría hacer hincapié en un beneficio distinto, quizá más original. Las evaluaciones de la Revolución mexicana —que por supuesto abundaron en 2010, año del centenario— suelen abordarse en términos estrechos, e incluso nacionalistas. Con ello no me refiero a que la Revolución se celebre jubilosamente (de hecho, la celebración jubilosa fue un faltante notable en 2010, en particular entre los círculos oficiales), sino más bien a que suele analizarse de manera aislada, con escasa referencia a otros países latinoamericanos (o a otros países del mundo, podría decirse).[6] Normalmente esto no es importante, pero todo estudio general de la Revolución, en particular el que persiga abordar tanto las causalidades como las repercusiones, requiere de parámetros comparativos, y en América Latina es posible encontrar parámetros útiles. Después de todo, la mayor parte de las causas de la Revolución frecuentemente citadas (gobierno autoritario, centralización política, acaparamiento de tierras, reducción de salarios reales, depresión económica, crecimiento de las ciudades y la clase media) la encontramos en muchas partes de Latinoamérica en ese periodo, con la diferencia de que no generaron revoluciones sociales. Asimismo, en cuanto a los resultados, los mexicanistas deben ser muy cautelosos de no presuponer que todos los procesos posteriores a 1910 (o posteriores a 1917 y 1920) fueron necesariamente resultado del poder taumatúrgico de la Revolución, ya que algunos —como el combate al analfabetismo, urbanización, sindicalismo, industrialización y consumismo— es posible encontrarlos también en otras

partes de Latinoamérica, donde no existió ese poder taumatúrgico. La comparación entre México y el resto de América Latina, por lo tanto, debería al menos ayudar a los mexicanistas a distinguir entre lo que es genuinamente revolucionario y lo que no lo es, evitando así la arraigada falacia historiográfica de *post hoc ergo propter hoc*, o atribuir a la Revolución, la fuerza endógena, un poder causal que vino del exterior (exógeno) o bien derivó de caminos duraderos, sean endógenos o exógenos, que precedieron a la Revolución de 1910.

De tal manera, el texto siguiente se divide de modo claro en *1)* efecto de la Depresión mundial (que requiere un enfoque en los primeros años de 1930 y hace hincapié en las estructuras socioeconómicas) y *2)* respuestas políticas del gobierno revolucionario mexicano, una historia de "agencia", subdividido en *a)* respuestas de corto plazo relacionadas con la gestión económica y *b)* políticas de mediano plazo, que implican la reforma social y económica. Esta historia nos lleva a fines de los años treinta y, como destaco en las conclusiones, más lejos incluso.

Si bien el crac de Wall Street señaló el inicio de la depresión mundial, existieron en México claras advertencias —o debilidades estructurales, si se prefiere— antes de 1930, como las hubo también en otras economías de producción primaria de Latinoamérica y el resto del mundo.[7] Tras haberse recuperado relativamente rápido del colapso económico (y demográfico) provocado por la revolución armada —para 1920, el PIB había superado los niveles de 1910—, México aguantó la severa recesión de la posguerra de 1920-1921 y retomó una trayectoria de crecimiento respetable a mediados de los años veinte.[8] El régimen era más estable habiendo derrotado la grave rebelión militar de 1923, las finanzas gubernamentales tenían bases más seguras y, durante el gobierno del presidente Calles (1924-1928), estadista implacable y capaz, el régimen emprendió una serie de reformas institucionales e infraestructurales (la creación de un banco central, de comisiones nacionales de irrigación y caminos, y de un amplio sistema de arbitraje del trabajo).[9] En el ámbito externo, México hizo esfuerzos para reanudar los pagos de la deuda externa, pero resultaron ser pasajeros y susceptibles a las vicisitudes del comercio internacional, que todavía proporcionaba la mayor parte del ingreso del gobierno (y, por supuesto, de divisas).[10] Desde la suspensión de pagos en 1913, México, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, no tenía acceso al crédito externo, por lo que quedó excluido de la "danza de los millones" de los años veinte (lo que a la luz de los acontecimientos de los años treinta, probablemente fue bueno). Sin embargo, la inversión directa extranjera no se detuvo. Sufrió un revés debido a la Revolución y el declive de la industria del petróleo después de 1921, pero incluso mientras que la producción petrolera cayó y la minera se estancó, fluyeron hacia México nuevas inversiones en los sectores bancario y manufacturero, casi en su totalidad en manos estadunidenses.[11]

Mientras tanto, la estructura del mercado externo no fue "revolucionada" por la Revolución; México se mantuvo como exportador de productos primarios, de minerales en particular. No obstante, esta relativa continuidad en términos del comercio internacional,

subrayado acertadamente por los historiadores económicos recientes, no significó que la Revolución, antes de los años treinta, careciese de una dimensión económica.[12] Cierto es que el cambio más llamativo fue en el ámbito político: el remplazo del viejo régimen porfiriano de criterio estrecho, oligárquico, autoritario y personalista por un régimen de criterio más amplio, popular, populista y nacionalista, montado por políticos advenedizos, muchos de los cuales habían surgido de las filas del ejército revolucionario, y que, fuera por razones de idealismo o de *Realpolitik*, buscaron forjar alianzas con las nuevas organizaciones de masas obreras y campesinas. La naturaleza del nuevo régimen —un asunto político por definición— con el paso del tiempo tuvo importantes repercusiones económicas, en particular después de 1930, pero debemos señalar que, también en términos más estrictamente económicos, la Revolución ya había tenido repercusiones, aunque hayan sido menos evidentes. La estructura del comercio exterior prácticamente no cambió, pero sí se transformó el flujo de la inversión externa —a la vez que decreció la inversión privada directa— y, en cierta medida, cambió su curso de la minería a la industria manufacturera; entre tanto, como ya hemos señalado, los préstamos al gobierno mexicano cesaron por completo. En el ámbito interno hubo un cambio sustancial en las relaciones de clase, aunque muchas veces de naturaleza informal, un cambio que algunos estudios revisionistas de la Revolución han optado por obviar o subestimar seriamente. Si bien la reforma agraria oficial fue limitada y fragmentada (con excepción, por ejemplo, del estado zapatista de Morelos, donde fue rápida y de gran alcance), los efectos del reparto, tanto actual como potencial, fueron significativos: una cantidad considerable de terratenientes había quebrado o atravesaba por malos momentos, mientras que muchos campesinos, que a la sazón contaban con organización colectiva y armamento, tenían la posibilidad de exigir sus demandas en formas inimaginables una década antes. También en el sector industrial la rápida y precoz aparición de sindicatos representó una diferencia radical con el Porfiriato tardío (cuando los obreros de Cananea y Río Blanco fueron asesinados); asimismo, a la par de una reforma laboral moderada (evidente bajo Madero y pronunciadamente acelerada por Obregón y Calles, también por razones de idealismo y, más probablemente, de *Realpolitik*), existió una militancia obrera más radical, notable por ejemplo en la industria textil —lo que Jeffrey Bortz ha llamado la "revolución dentro de la revolución"—.[13] Se podría argumentar que la revolución política sustancial necesariamente tuvo repercusiones sociales y económicas, pero estas últimas fueron mucho más evidentes en el ámbito interno (por ejemplo, en las relaciones de clase industriales y agrarias) que en el externo, en cuanto al comercio internacional y la inversión externa. Cuando los observadores externos denunciaron el *bolchevismo* mexicano, normalmente pensaban (si es que pensaban) en obreros y campesinos militantes y en el aliento que recibían de los políticos demagogos. De hecho, con la importante excepción de las compañías petroleras, no fueron muchas las quejas que podían tener en cuanto a las relaciones comerciales externas de México o el trato que recibieron de los intereses internacionales *per se*.[14] No obstante, el bolchevismo fue, dentro

de Latinoamérica, un fenómeno casi exclusivo de México, de ahí la preocupación de que este país pudiese contagiar a regiones seguras y sensatas como Centroamérica.[15]

Dentro de este panorama general vale mencionar dos aspectos coyunturales de finales de los años veinte, uno global y otro específico de México. A finales de esa década, los precios relativos fueron desfavorables para los productores primarios; una causa importante parece haber sido la distorsión creada por la primera Guerra Mundial que condujo a una sobreproducción de productos primarios, sobre todo trigo, azúcar y algunos minerales no preciosos.[16] Una repercusión fue el reavivamiento del proteccionismo agropecuario, evidente en la desastrosa ley arancelaria Smoot-Hawley de 1930.[17] Mientras tanto, en México Calles irreflexivamente provocó la Guerra Cristera (1926-1929), que devastó la región centrooccidental del país, a la vez que incrementó el gasto gubernamental en el ejército (que, debido al legado de la Revolución, ya era muy elevado).[18] Para 1927, la economía mexicana se había estancado; la Guerra Cristera estaba en pleno, el gobierno enfrentaba un déficit y los conflictos en torno al petróleo, el anticlericalismo y Centroamérica amargaron las relaciones entre México y los Estados Unidos. Éstos, entonces representados en México por el caballeroso y astuto banquero Dwight Morrow, optaron por una conciliación y la respuesta de Calles también fue pragmática e incluso conservadora. Aunque no logró poner fin al conflicto cristero, su sucesor inmediato, el presidente interino Portes Gil, lo hizo en 1929. Mientras tanto, Calles y Morrow mantuvieron buenas relaciones, la disputa del petróleo fue "resuelta" por una maniobra diplomática y se hizo un nuevo esfuerzo para reanudar los pagos del servicio de la deuda externa.[19] En las cuestiones internas del país, Calles frenó la reforma agraria, a la que declaró como un fracaso costoso (de hecho, el presidente Ortiz Rubio la declaró muerta en 1930); el Estado también limitó a los sindicatos y reprimió al relativamente pequeño Partido Comunista.[20] Los observadores extranjeros aplaudieron la nueva muestra de moderación del *bolchevique* Calles.[21]

Así, en 1930, cuando Ortiz Rubio asumió la presidencia como el primer candidato electo del nuevo partido oficial revolucionario, la política mexicana mostraba una tendencia a virar hacia la derecha. Las promesas iniciales de la Revolución, implementadas fragmentariamente durante los años veinte, aparentemente comenzaron a perder su encanto, y tras un breve momento de calma tras el fin de la Guerra Cristera en 1929, el Estado —que seguía bajo el control informal del jefe máximo Calles— reinició su arremetida sobre la Iglesia católica a principios de los años treinta. En México, como en los Estados Unidos, el cambio de mentalidad seguía teniendo mayor prioridad que el cambio de modo de producción.

La llegada de la Gran Depresión lo transformó todo. No es posible explorar el escenario contrafáctico de manera confiable, pero parece verosímil que, de haberse advertido el desplome de Wall Street y la Depresión, el curso de la evolución política y económica mexicana habría continuado en la dirección de una política generalmente favorable a la empresa privada, la "diplomacia de *ham and eggs*", y un enfoque oficial en lo cultural en vez

de en la política económica (de tal manera, anticlericalismo en lugar de la reforma agraria y laboral).[22] En términos sencillos, México habría mantenido la línea callista en lugar de la cardenista. Sin embargo, en México, como en los Estados Unidos, la crisis provocó un cambio radical: de Hoover a Roosevelt e —incluso quizá de forma más consecuente— de Calles a Cárdenas.

Ese cambio se llevó a cabo principalmente en la política nacional, y, evidentemente, Cárdenas no asumió el cargo sino hasta fines de 1934. La primera tarea es, entonces, examinar el efecto de la Depresión sobre una economía que llevaba varios años de sufrir un crecimiento lento. Al respecto puedo apegarme, en gran medida, al excelente análisis de Enrique Cárdenas (sin relación alguna con el estadista, por cierto).[23] Puesto que, repetimos, "la depresión" es un fenómeno complejo, es preciso desagregarlo. Primero analizaremos la contracción del comercio exterior y sus consecuencias en México, en cuanto al trabajo, el bienestar y las finanzas gubernamentales. Después abordaremos las reacciones de corto plazo del gobierno, en particular respecto de las políticas presupuestaria y monetaria. Por último, esto nos llevará a un análisis más amplio de las repercusiones sociales y políticas, abordando las protestas y movilizaciones de abajo arriba y las respuestas del régimen de arriba abajo.[24] En un principio, México aparece como una víctima de efectos exógenos (aquí es importante la comparación con el resto de Latinoamérica con el fin de evaluar la magnitud y el carácter de esos efectos); no obstante, conforme vayamos exponiendo las reacciones de corto plazo del gobierno y las repercusiones sociopolíticas de largo plazo, veremos a un México más creativo, en el despliegue —para utilizar el cliché— de agencia colectiva, y dentro de Latinoamérica, de agencia colectiva tanto distinta como exitosa.

El efecto de la Depresión en México fue "temprano y fuerte", principalmente debido a su cercana relación con los Estados Unidos, donde la crisis repercutió de manera repentina, severa y prolongada.[25] Así, una experiencia mexicana distintiva fue la repatriación masiva de más de 300 000 trabajadores migrantes de los Estados Unidos.[26] Por supuesto que otros países latinoamericanos recibieron también flujos de migración laboral (con sus tensiones sociales consecuentes, como por ejemplo en Cuba y la República Dominicana), pero en México ocurrió a mucho mayor escala.[27] Entre 1928 y 1932, además, el valor de las exportaciones cayó 63% (más que en Brasil [44%] o Argentina [40%], pero menos que en Chile [83%]).[28] Por otra parte, las exportaciones representaban una parte menor del PIB en México que en Argentina o Chile (12% comparado con 27 y 30%, respectivamente), y México también contó con buena fortuna en la llamada "lotería de mercancías". [29] En primer lugar, México no dependía en exceso de un solo producto de exportación volátil; segundo, la variada canasta de exportación de México incluía dos productos primarios que lograron soportar la depresión bastante mejor que otros: la plata y el petróleo.[30] La plata constituía el producto de mayor exportación de México, y mientras que los minerales industriales —como el cobre— sufrieron un fuerte efecto, la plata se benefició de su calidad de metal acuñable como también de los esfuerzos de

los Estados Unidos por sostener el precio de la plata y beneficiar con ello a los productores del occidente del país.[31] México logró así beneficiarse del apoyo estadunidense al precio de la plata (así como Colombia se benefició de los esfuerzos de Brasil para apoyar el precio del café). Los precios del petróleo se mantuvieron estables en el ámbito mundial gracias a la gran demanda, producto de la revolución automotriz, y mientras que la producción mexicana de petróleo había disminuido tras su repunte de 1921, hubo un modesto resurgimiento en los años treinta gracias, principalmente, a los pozos descubiertos por la compañía El Águila en Poza Rica.[32]

Además, como lo demuestra Cárdenas, la naturaleza del vínculo del sector exportador con el resto de la economía tuvo un efecto amortiguador. La plata y el petróleo no fueron industrias de trabajo intensivo, de manera que una caída en los ingresos externos no se tradujo en una aguda disminución del ingreso (la comparación obligada sería el café brasileño o el azúcar de Cuba).[33] Asimismo, la naturaleza de "enclave" de estas dos industrias significó que la caída en las exportaciones no produjo una caída drástica en la demanda interna de México.[34] Así, se combinaron dos afortunadas circunstancias: la disminución de las exportaciones, aunque severa, no fue tan profunda ni prolongada como en algunos casos latinoamericanos, y los efectos de la caída se vieron limitados por la falta de vínculos, nuevamente en comparación con otros casos. La otra cara de la moneda del enclave, podría decirse, fue el amplio sector de subsistencia de México. En 1930, dos terceras partes de los habitantes vivían en comunidades con menos de 2 500 habitantes, y 69% de la población económicamente activa trabajaba en la agricultura.[35] La agricultura comercial —café, henequén, algodón— sufrió con la depresión mundial, pero la agricultura de subsistencia se mantuvo parcialmente aislada de las vicisitudes del ciclo comercial.[36] Los obreros desempleados —su número aumentó por los 300 000 migrantes llegados de los Estados Unidos— podían ser absorbidos hasta cierto punto por el sector de subsistencia (como se decía en ese entonces, podían "regresar al quelite"), regresando a los 70 000 pueblos esparcidos a lo largo del país, donde, por falta de sistemas de seguridad social del Estado, la ayuda de sus vecinos y sus familias constituyó la principal fuente de bienestar.[37] El sector de subsistencia, evidentemente, fue vulnerable a un tipo de efecto muy distinto: las condiciones, como heladas, inundaciones y sequías, por ejemplo, que constituyeron la amenaza perpetua de la agricultura mexicana de temporal y que siguieron siendo cruciales en las décadas de 1920 y 1930. En cuanto al alimento básico, el maíz, 1929 y 1930 fueron malos años, por lo que se requirieron importaciones compensatorias; sin embargo, las condiciones mejoraron bastante durante el inicio de la década de los treinta.[38]

Así, quizá por última vez en su larga historia, el campo mexicano actuó como una esponja para absorber el desempleo y compensar la disminución de la economía de exportación industrial y urbana.[39] México contaba con una última ventaja estructural para enfrentar la depresión mundial: una base industrial razonablemente desarrollada, que principalmente producía bienes para satisfacer la demanda nacional (en particular los textiles). Tras la

disminución de los ingresos de exportación, y con ello del valor del peso, la capacidad de importación del país se contrajo para beneficio de la industria doméstica. Al principio, por supuesto, la disminución de la demanda golpeó a las industrias productoras de bienes de consumo (textiles, cerveza, cigarrillo), mientras que los productores de materias primas (como acero y cemento) fueron menos afectados; sin embargo, después de 1932, conforme la demanda nacional se fue recuperando, México entró en un proceso significativo de sustitución de importaciones y la industria manufacturera se convirtió en el principal motor de crecimiento.[40] En este aspecto, México difirió sustancialmente de los Estados Unidos: en términos estructurales, México se encontraba preparado para explotar las oportunidades (industrialización por sustitución de importaciones) que ofrecía la Depresión, mientras que los Estados Unidos se encontraban en un punto distinto (más avanzado) de su trayectoria económica, lo que los hacía vulnerables a una recesión prolongada.[41] En ese país, el ciclo comercial y la tendencia de largo plazo se combinaron para producir desempleo y deflación; en México, la tendencia (la industrialización incipiente) fue acelerada por la desaceleración cíclica.

Todos los efectos de la Depresión mencionados hasta ahora se relacionan con los aspectos estructurales de la economía mexicana; podría decirse que fueron "ciegos al régimen" y políticamente neutros. Por lo mismo, puede hacerse una comparación bastante confiable con otras economías latinoamericanas: México fue vulnerable debido a su dependencia de los Estados Unidos; sin embargo, respecto de las compras de plata, esta dependencia fue ventajosa, como también la fortuna del país en la "lotería de las mercancías" (en comparación, digamos, con Chile). La naturaleza de enclave del sector exportador (minería y petróleo), combinada con las dimensiones del sector de subsistencia, protegió a la economía de los efectos exógenos (incluso en casos como la repatriación masiva de los trabajadores migrantes mexicanos). En este sentido, México era parecido a las economías campesino/agrarias como Perú; no obstante, a diferencia de éstas y más como Argentina o Brasil, México contaba con una importante base industrial que podía rápidamente poner en marcha la producción de sustitución de importaciones.[42]

Hasta aquí nos hemos referido a lo estructural, no hemos mencionado a nadie ni ninguna política importante. Vayamos ahora a las reacciones del gobierno ante la Depresión. Las separaremos en dos categorías generales. La primera trata sobre las reacciones de corto plazo y quizá "tácticas" relacionadas con la política monetaria y fiscal. En este campo, México nuevamente enfrentó problemas que, *mutatis mutandis*, fueron evidentes en otras partes de Latinoamérica. No obstante, existe el indicio de una política heterodoxa, quizá derivada del pensamiento "revolucionario". La segunda, más clara aún, se relaciona con las medidas socioeconómicas y tal vez "estratégicas" de mediano plazo, que se vieron fuertemente influidas por la postura revolucionaria distintiva de México; así, por su naturaleza inusual, destacan en el contexto latinoamericano. Estas medidas abarcan tres áreas de la política: la

reforma agraria, la reforma laboral y el nacionalismo económico.

Por ser el país latinoamericano que tenía las relaciones económicas más estrechas con los Estados Unidos (salvo Cuba, quizá), México resintió rápidamente el efecto de la recesión estadunidense que, como hemos mencionado, apareció cuando el país llevaba a cuestas varios años de un estancamiento económico relativo. Los ingresos de las exportaciones cayeron más de 60%; sin embargo, por motivos ya antes sugeridos, el PIB descendió sólo 18%.[43] Los ingresos del gobierno, que todavía dependían en gran medida del comercio internacional, decrecieron 34%.[44] Las medidas adoptadas por la administración de Ortiz Rubio —una administración débil encabezada por un presidente títere sujeto de mala gana a la voluntad del jefe máximo Calles— fueron políticas ortodoxas y procíclicas. Entre 1929 y 1932, el gasto gubernamental fue recortado 23%; esto evitó un déficit presupuestario y permitió tener excedentes sustanciales en 1930 y 1931, y un presupuesto equilibrado en 1932 (los déficits ocurrieron en 1933 y 1936-1940, como veremos más adelante).[45] México abandonó efectivamente el patrón oro en julio de 1931; no obstante, durante varios meses luchó por mantener un vínculo con el oro, lo que provocó un fuerte —y "asfixiante"— efecto deflacionario; entre 1929 y 1931 la oferta monetaria se redujo 60%.[46] En este sentido, la administración de Ortiz Rubio/Calles emuló las políticas "ortodoxas" claramente visibles en la mayoría de los países: frente a la depresión, los gobiernos se aferraron con determinación al oro, recortaron los gastos públicos y se esforzaron para alcanzar un equilibrio presupuestario.[47] Estas medidas obviamente agravaron la situación.

Sin embargo, México hizo un rápido viraje hacia políticas más heterodoxas en 1932. El cambio fue implementado por Alberto J. Pani —quien había fungido como embajador de México en España— tras su regreso a la Secretaría de Hacienda a principios de 1932.[48] Pani, miembro de una familia acaudalada que había atravesado por momentos algo difíciles a causa de la Revolución (a la que apoyó), contaba con una excelente formación y amplia cultura, y estaba dotado con una "sonrisa de un millón de dólares" y "una particular afición por las pinturas al óleo".[49] Fue también un líder político-técnico "revolucionario"; había servido como secretario de Industria bajo Carranza en los angustiantes años de 1917-1918, como canciller en 1921-1923 y como secretario de Hacienda en 1923-1927, hasta que un extraño y posiblemente falso escándalo sexual le costó el puesto.[50] Como secretario de Hacienda a mediados de los años veinte, durante la presidencia de Calles implementó una serie de reformas financieras y económicas que, como él mismo afirmó, su sucesor más conservador, Montes de Oca, torpemente abandonó.[51] Pani viajó de Madrid a México confiado en la dirección que seguiría: por una parte revivir su viejo proyecto, por otra hacer frente —como bien afirmó, una acción inmediata— a los problemas provocados por la Depresión.[52] En el curso de 1932, con el apoyo de Calles, Pani abandonó definitivamente el patrón oro, aumentó el circulante de pesos de plata y utilizó la acumulación de reservas de plata de México para respaldar una nueva emisión de papel moneda. El convenio Montes de Oca-Lamont para

reconformar el pago de la deuda externa, que Pani consideraba como una medida desastrosa conducente a una mayor deflación, jamás entró en vigor.[53] Pani también fortaleció el Banco de México al transformarlo en un banco central que operaba en el núcleo del sistema bancario. La oferta de dinero creció rápidamente, pero no hubo un efecto inflacionario inmediato. El crédito fluyó mejor y el peso se estabilizó. En el curso de 1932, por lo tanto, la economía mexicana emergió del fondo y comenzó a tener una rápida recuperación.[54] Las políticas reflacionistas de Pani no fueron la única razón, por supuesto, pues los factores estructurales previamente mencionados también desempeñaron un papel importante; en conjunto lograron una recuperación rápida y sostenida, que contrastaba con el comportamiento más lento de la economía estadunidense y de varias economías importantes de Latinoamérica.[55]

Dos aspectos de las políticas de Pani son de particular interés, aunque, puesto que no han sido investigadas sistemáticamente, hasta donde puedo saber, no existen respuestas precisas. Primero, ¿cómo y por qué Pani acertó en encontrar estas clarividentes políticas keynesianas (aumentar el circulante y capacitar al gobierno para incrementar el gasto público)?[56] Es evidente que era inteligente —al mismo tiempo arrogante— y tenía una enorme experiencia en políticas financieras. Pero también contaron con esas características muchos de los arquitectos de la Gran Depresión, como Montague Norman y Josiah Clung, quienes se aferraron tenazmente a las políticas ortodoxas procíclicas.[57] Como embajador en Francia y España de 1927 a 1931, Pani conocía de primera mano los acontecimientos europeos, lo que sin duda amplió su ya amplio horizonte. En esos años había estado meditando cuidadosamente sobre el deterioro de la economía mexicana (de ahí sus largas cartas a Calles en 1931), por lo que a su regreso como secretario de Hacienda estaba listo para actuar. Las circunstancias financieras de México también eran muy relevantes. Como consecuencia de la Revolución (y Pani, quien se ubicaba a la derecha de la "familia revolucionaria", fue un genuino veterano revolucionario), México tenía cerrado el camino del crédito internacional desde 1914, y los esfuerzos para pagar tanto la deuda externa como las reclamaciones externas por los daños causados por la Revolución en gran parte habían fracasado —debido a la falta de compromiso, argumentaron los disgustados acreedores extranjeros—. El propio Pani había echado a la basura el último convenio de breve duración. Por todo esto, México carecía por completo de crédito internacional y —a diferencia de Argentina, por ejemplo, que tenía una gran escuela en las virtudes de finanzas sólidas— sentía menor obligación para pagar el servicio de su deuda externa (o cumplir con otras obligaciones, como los reclamos extranjeros exagerados por los daños causados por la Revolución).[58] Esto no sólo salvo a México de gastos de esta índole, sino que también hizo al país menos vulnerable a las devaluaciones del peso, ya que la deuda externa en dólares había sido postergada.[59] En un sentido más general, podríamos conjeturar que el trastorno financiero de la Revolución hizo a los formuladores de políticas, como Pani, más creativos y menos temerosos del riesgo. El México posrevolucionario estaba condenado a no ser ortodoxo, entonces, ¿por qué no hacer de la no

ortodoxia una virtud?

El segundo aspecto interesante del keynesianismo mexicano fue el rápido y, al parecer, tranquilo cambio a papel moneda. Durante la Revolución, México se había ahogado bajo una marejada polícroma de papel moneda emitido por los gobiernos y bandos rivales.[60] Para 1916, el papel moneda había perdido todo su valor y las transacciones —cuando no se hacían mediante trueque— requerían de dólares o de los escasos pesos de plata. Conforme la economía comenzó a recuperarse a principios de los años veinte, los pesos de plata volvieron a circular, aunque con una oferta de dinero insuficiente, mientras que los billetes de papel fueron prácticamente inexistentes. Por lo mismo, Pani buscó reactivar la economía con la emisión de billetes respaldados en el valor de las reservas de plata; como resultado, la oferta de dinero a fines de 1932 era 31% mayor que el año anterior, y el cociente de monedas y billetes era de 47:11. Para 1936 la oferta de dinero había crecido otro 76% y el cociente era de 28:38.[61] Los nuevos pesos en billetes al parecer fueron ampliamente aceptados, a diferencia de algunas emisiones monetarias anteriores en la historia de México, que provocaron serias protestas.[62] ¿Por qué, dada la hiperinflación de la década de 1910 y las sospechas que generaba el papel moneda, los mexicanos aceptaron los nuevos billetes sin dificultades?[63] ¿Por qué este viraje significativo hacia el papel moneda difícilmente aparece en los textos de historia convencionales y, más sorprendentemente aún, en los estudios antropológicos locales?[64] La respuesta lógica es que el cambio no fue tan contencioso. Puesto que su aceptación dependía de la confianza, parece probable que haya habido suficiente confianza en el momento en *1)* las reservas del Banco de México, que respaldó la emisión de los billetes; *2)* la estabilidad y actitud congruente del gobierno (se utilizaron los billetes para pagar a los empleados públicos y fueron obligatorios para el pago de los recibos gubernamentales), y *3)* el renovado vigor de la economía mexicana que generó no sólo confianza en el consumo y la inversión sino también una fuerte demanda de pesos.[65] También parece probable que, si bien las monedas de baja denominación seguían utilizándose para las compras al menudeo —por ejemplo, en los bulliciosos mercados de Oaxaca y Michoacán—, los nuevos billetes impulsaron la creciente economía urbana y comercial.[66] Es obvio que los campesinos y los obreros no llevaban un montón de monedas resonando en los bolsillos de sus pantalones de manta, por lo que podemos asumir que el cambio de plata a papel no afectó de inmediato a gran parte de la población en lo que se refiere a sus transacciones diarias.[67] Cualesquiera que hayan sido las causas, la aparente calmada aceptación del papel moneda fue un voto tácito de confianza para el régimen, un conspicuo tributo implícito a su creciente estabilidad e incluso legitimidad.

Sin importar las causas, el cambio a papel moneda fue exitoso. A partir de principios de 1932, México atravesó por cuatro años de rápido crecimiento y baja inflación, que a la vez incrementaron notablemente el ingreso del gobierno y facilitaron la implementación de las reformas ambiciosas de mediados de los años treinta; a pesar de una recesión menor en 1937 y

los problemas derivados de la expropiación petrolera de 1938 y el estallido de la segunda Guerra Mundial, la economía se recuperó en 1939 y 1940.[68] Ahora la inflación se convirtió en un problema más serio, aunque de ninguna manera inmanejable. No obstante, el Estado mexicano demostró tener voluntad y capacidad para adoptar una política contracíclica sin enfrascarse —como muchos han argumentado— en un "populismo económico" irresponsable.[69] Así, el desempeño económico de México durante la "década de la depresión" fue, dentro de los parámetros internacionales, positivo y sostenido. En comparación con sus iguales de Latinoamérica, tuvo mejor desempeño que Argentina y Uruguay y fue casi tan bueno como Brasil, donde, es preciso destacar, también floreció una política contracíclica "protokeynesiana", aunque tal vez por razones muy distintas.[70] Es claro que el hecho de tener un régimen "revolucionario" no logró por sí mismo obrar milagros económicos; el crecimiento requería de inversión, que a su vez dependía en un cierto grado de confianza empresarial; por lo tanto, el Estado revolucionario tuvo que encontrar, por una parte, un equilibrio entre las reformas sociales y la legitimidad popular y, por otra, mantener la confianza en una economía principalmente, todavía, de mercado capitalista, situada en el umbral del país de mercado capitalista más grande del mundo.[71] El balance entre, como en ocasiones suele decirse, "legitimación" y "acumulación", es sin duda un aspecto de todas las sociedades y los regímenes capitalistas, pero es particularmente agudo en aquellos que reivindican su origen revolucionario y deben responder a las clamorosas demandas populares. Nótese, por ejemplo, el declive y la caída del régimen revolucionario de Bolivia en los años cincuenta, un régimen que, desde la perspectiva de los actores como de los analistas históricos, es comparable con el México revolucionario.[72] Son precisamente estas demandas y resultados que, para concluir, abordaremos a continuación.

Las reformas socioeconómicas de México en los años treinta fueron inusuales dentro del contexto latinoamericano. En términos de su naturaleza "inusual" se pueden mencionar tres, en orden de importancia y radicalismo: reforma agraria, reforma laboral y nacionalismo económico. La primera fue, para un país latinoamericano, una medida tan insólita como sin precedentes en la región; ningún otro país emuló el reparto de tierras cardenista hasta los años cincuenta, cuando Bolivia hizo un intento más tibio y Cuba se embarcó en una experiencia socialista y colectiva más radical. Por lo mismo, para la década de 1930, la reforma agraria mexicana fue sumamente insólita, y mientras que la depresión le dio el impulso definitivo, sus orígenes fueron claramente revolucionarios y, por ello, distintivos de México. Esta historia crucial es bien conocida y puede resumirse con facilidad. La demanda por la tierra impulsó la Revolución de 1910, y la Constitución de 1917 (artículo 27) creó un compromiso formal con la reforma agraria, que abrió paso a una lucha larga, compleja y en ocasiones violenta que los agraristas sostuvieron por sus derechos, ante la oposición y resistencia de los terratenientes y sus aliados políticos conservadores. A lo largo de los años veinte se llevó a cabo un reparto agrario fragmentado —más radical y rápido en algunos estados—, lo que generó tensión e

incertidumbre constantes en la agricultura.[73] En 1930, cuando Calles y su presidente títere Ortiz Rubio comenzaron a frenar el reparto, alrededor de 673 000 ejidatarios habían recibido tierras; estos ejidatarios representaban quizá 20% de la población económicamente activa en la agricultura y generaban 11% de la producción agrícola.[74] Este reparto inicial bastó para debilitar y preocupar a la clase terrateniente, pero no para satisfacer las demandas campesinas frustradas. Algunos observadores, por lo mismo, abogaron por poner fin inmediato a la reforma agraria; otros demandaron una rápida y radical aceleración. Como lo demuestra de forma experta Eyler Simpson, la consecuencia fue un estancamiento que no dejó satisfecha a ninguna de las dos partes (y, podríamos agregar, fue un juego suma-cero en el que fue imposible que ambos lados pudiesen ganar).[75]

El inicio de la Depresión aceleró un reparto renovado por varias razones. El desempleo, la contracción de los salarios reales y la repatriación masiva de obreros mexicanos de los Estados Unidos contribuyeron al crecimiento de la miseria y las tensiones sociales.[76] Como protesta por la política gubernamental se llevaron a cabo tomas de tierras *de facto:* en Tamaulipas, por ejemplo, la postura oficial establecía que "no se harán más dotaciones agrarias". Sin embargo, ni por primera ni por última vez en la historia de México la política formal difería de la práctica informal; por ello, un observador comentó a fines de 1931 sobre "la presencia continua de agraristas (algunos de ellos armados) cuyas peticiones de ejidos han sido rechazadas, pero a los que las autoridades competentes o no pueden o no quieren expulsar forzosamente de las tierras por las que reclaman derechos ilegales".[77] Fuera por razones de idealismo desinteresado (y, aunque historiográficamente esté pasado de moda, deberíamos otorgar a parte del liderazgo revolucionario sus inclinaciones idealistas) o por motivos políticos de base (el deseo de relajar las tensiones sociales construyendo una base política entre los ejidatarios), los políticos vieron entonces las grandes ventajas de abanderar la causa agraria. En algunos casos, como el de Cárdenas, es posible detectar el grado de idealismo; en otros, probablemente dominaba la *Realpolitik* (una decisión oportunista para abordar el carro agrarista).[78] Esto fue particularmente claro conforme Cárdenas, como nuevo presidente, comenzó a confrontar a su viejo mentor, Calles, en 1935-1936, pues el agrarismo era una orgullosa bandera del cardenismo, un medio para atraer el favor presidencial y obtener el apoyo popular.

Por otra parte, la clase terrateniente, debilitada a lo largo de los años veinte, atravesaba por una situación difícil, pues los mercados internacionales se agotaron y los precios agrícolas cayeron. Algunos terratenientes quebraron y sólo unos cuantos estuvieron preparados para ofrecer el tipo de resistencia tenaz (en su caso suicida) que Rosalie Evans sitúa en los años veinte.[79] Así, algunos de los cultivadores de algodón de la región de La Laguna sucumbieron al gran reparto de 1936 con resignación estoica. Otros, como William Jenkins, el barón del azúcar de Atencingo, esquivaron el golpe, efectuaron un reparto controlado de arriba abajo y salvaguardaron sus fortunas a cambio de renunciar a sus vastas tierras.[80] Así, una repercusión

importante de la reforma agraria de los años treinta fue el marcado cambio del capital y el comercio de la agricultura a la industria y los servicios. Lejos de destruir al capitalismo, la reforma agraria (del tipo mexicano) lo benefició potencialmente. De hecho, esto fue observado por los políticos sagaces del momento. Es importante destacar que el renovado compromiso con la reforma agraria precedió a la llegada de Cárdenas. Como creyente verdadero en la causa, Cárdenas aceleró y radicalizó el reparto de manera expedita, impulsándolo personalmente y fomentando el nuevo ejido colectivo; así, estimuló nuevas demandas y movilizaciones agrarias.[81] Su predecesor, Abelardo Rodríguez, mucho más conservador y simpatizante de la empresa privada, ya había marcado un cambio en la política, en particular con el nuevo Código Agrario de 1934, que por primera vez otorgaba a los peones de las haciendas el derecho a solicitar tierras.[82] Rodríguez sin duda deseó aplacar las tensiones sociales; sin embargo, como astuto hombre de negocios, también fue perfectamente consciente de la debilidad del mercado nacional mexicano, tanto estructural como contingentemente: una reforma agraria controlada, sobre todo cuando la agricultura atravesaba por una recesión, impulsaría el poder de compra para ventaja de la industria mexicana.[83] Y la industria fue precisamente el sector más dinámico de la economía, el motor que impulsaría a México para salir de la recesión y alcanzar las soleadas tierras altas de la prosperidad.

La reforma agraria fue el tema más importante de la política gubernamental en los años treinta, pues afectó a la mayoría de la población y, por lo mismo, a toda la economía. Sus resultados han sido objeto de calurosos debates. Los ejidos que producían cosechas rentables y recibían apoyo gubernamental adecuado (crédito, capacitación, educación) prosperaron bien; el ejemplo clásico sería La Laguna. Los que debían lidiar con la fluctuación de los mercados, un gobierno indiferente (o difícil) y un entorno local hostil, como en Yucatán, fueron mucho menos exitosos. La reforma agraria, en general, fue un triunfo político pero una historia económica mixta. Por encima de todo, una vez terminada la gestión cardenista, su suerte favorable declinó rápidamente. Para los años cuarenta, el agrarismo había pasado de moda y estaba mal financiado; se convirtió cada vez más en una estratagema populista oficial y se alejó del proyecto radical para la transformación socioeconómica de la sociedad.

Una historia parecida vivió la reforma laboral: es decir, el reconocimiento de los derechos sindicales, los aumentos salariales y otros beneficios. Esta situación no fue privativa de México, ya que durante los años treinta encontramos políticas favorables al trabajo en otras partes: con Vargas en Brasil, Batista en Cuba e incluso Somoza en Nicaragua.[84] Sin embargo, la variante mexicana fue más radical, pues los sindicatos mexicanos surgieron de la Revolución con vigor adelantado; de tal manera que, dentro del sector sindicalizado (minoritario), se volvieron comunes las demandas tanto por aumentos salariales (beneficios monetarios y "sociales") como por poderes sustanciales respecto de las contrataciones y los despidos, lo que debilitó la autonomía empresarial y provocó alarma en los grandes negocios. Una vez más la depresión mundial aceleró un proceso *a priori* ("revolucionario"), y ese

proceso significó que la versión mexicana de la reforma laboral tuviese una militancia inusual dentro de los parámetros latinoamericanos.

Nuevamente, la Depresión catalizó las demandas socioeconómicas anteriores. La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la organización del trabajo dominante en los años veinte, cuya suerte decayó tras el asesinato de Obregón en 1928, fue remplazada por la más radical Confederación de Trabajadores de México (CTM), cuyo lema oficial promovía "una sociedad sin clases" (la rivalidad entre las dos organizaciones siguió provocando serios actos de violencia durante los años treinta, principalmente en los pueblos textiles de Veracruz).[85] De esta manera, los factores políticos nacionales conspiraron con la depresión mundial para generar este cambio en la organización y la ideología laboral.[86] Después de 1930 se intensificó notablemente la militancia laboral; las cifras oficiales sobre las huelgas, reflejo de la política gubernamental así como del arraigado activismo, son engañosas en este sentido, pues no toman en cuenta el aumento significativo de la militancia, por ejemplo, en el importante sector minero.[87] No obstante, las cifras oficiales demuestran cómo a partir de finales de 1934 el gobierno cardenista dio luz verde para las acciones de huelga, que en 1935 se volvieron masivas e intensas, creando intranquilidad en las empresas y la clase media urbana.[88] La lucha por el poder entre Calles y Cárdenas aceleró este proceso. Por lo tanto, en mayor grado que en otros países latinoamericanos, el sindicalismo se movilizó y obtuvo importantes logros no sólo respecto de los salarios (beneficios monetarios y "sociales") sino también en cuanto al poder sindical, que en algunas industrias clave, como la petrolera, logró traspasar las prerrogativas administrativas y adquirió un peso político sustancial.[89] Asimismo, los sindicatos forjaron vínculos cercanos con las organizaciones campesinas, que desempeñaron un papel importante en la movilización rural, por ejemplo, en La Laguna.[90]

Vemos así cómo, una vez más, la experiencia previa de la Revolución, que había generado un movimiento obrero particularmente militante, imprimió un carácter particularmente radical muy peculiar a la reacción de México ante la Depresión mundial. Es preciso señalar que, incluso antes de que Cárdenas asumiera la presidencia, la política oficial había virado hacia una dirección que favorecía el trabajo, aunque de manera moderada. La vieja alianza entre el Estado y los sindicatos había quedado bien establecida bajo los auspicios de Calles y Morones en los años veinte; así, tanto en términos laborales como agrarios, los años treinta fueron el escenario de una reformulación radical del *statu quo* político, impulsado en gran medida por las tensiones de la depresión mundial. Sin embargo, hubo también una razón económica y, en el caso de la reforma agraria, existieron claros indicios de sindicalismo económico (como también de agrarismo económico) antes de diciembre de 1934. La nueva Ley Federal del Trabajo, diseñada para lograr un mayor control central de las relaciones laborales, fue promulgada en 1931 en el punto más bajo de la Depresión. Estableció un sistema nacional de arbitraje laboral tripartito para evitar conflictos e incrementar los salarios; poco después, el presidente Rodríguez emprendió acciones para aumentar y reforzar

el salario mínimo, en un intento deliberado para estimular el poder de compra del país. A pesar de ser un exitoso empresario, Rodríguez consideraba que las empresas podían pagar mayores salarios, lo que a su vez incrementaría la demanda y, con ello, se beneficiarían los negocios.[91] Una vez más, Cárdenas radicalizó y amplió la política existente mediante la introducción de un séptimo día pagado (lo que implícitamente representaba un incremento salarial de 17%), respaldando así, al menos de manera parcial, las demandas sindicales de mejores salarios y condiciones de trabajo. Como hemos mencionado antes, el régimen, incluso en su encarnación radical cardenista, no podía incrementar los salarios reales significativamente de la noche a la mañana. No obstante, existe evidencia sustancial del crecimiento de los salarios reales, en particular dentro de los sectores sindicalizados de la economía, a principios y mediados de los años treinta (igual que había ocurrido a mediados de los años veinte). Después de 1937, cuando la inflación aumentó, las cosas adquirieron un matiz mixto.[92] No obstante, en términos generales, los años treinta fueron un periodo relativamente bueno para los salarios reales y el consumo popular, lo que resulta más evidente al compararse con la década inflacionaria de 1940, cuando las administraciones más conservadoras de Ávila Camacho y *(a fortiori)* Alemán contuvieron las demandas salariales y emprendieron medidas enérgicas en contra de la militancia sindical.[93] Los niveles salariales alcanzados en 1939 no se recuperaron sino hasta principios de los años cincuenta, cuando se puso en marcha el "desarrollo estabilizador" y comenzó el "milagro económico".[94]

Finalmente, la década de 1930 fue a nivel mundial una época de nacionalismo económico, cuando el aumento de los aranceles, la detención del flujo de inversión extranjera y el desarrollo hacia adentro se convirtieron en la norma (fuera por oportunidad o por planeación y decisión consciente). Hemos señalado previamente un fuerte proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) en México; en parte como consecuencia de las circunstancias (la devaluación del peso, el cierre del crédito internacional, el colapso de las empresas extranjeras en otro tiempo rentables), las decisiones políticas también influyeron en el desarrollo de este proceso. El nacionalismo económico sin duda podía cohabitar con modelos e ideologías políticas contrastantes: fascismo, comunismo, capitalismo corporativo reglamentado e imperialismo liberal británico. México participó en el desarrollo mundial, pero, nuevamente, su proceso estuvo condicionado por su pasado revolucionario inmediato. La Revolución de 1910 no fue, como suele creerse, un movimiento impulsado por poderosos sentimientos xenofóbicos ni, particularmente, contra los estadunidenses. Aparte de algunos signos específicos de xenofobia (en los que las víctimas tendieron a encontrarse entre las comunidades empresariales inmigrantes: españoles, chinos y más adelante judíos, más que en los grandes negocios angloestadunidenses), el principal impulso de la Revolución, ejemplificado por la dinastía sonorense de los años veinte, fue alcanzar una mejor y más equilibrada relación con el capital extranjero (el estadunidense en particular), en lo referente a las cuestiones impositivas, de soberanía y regulación.[95] Como Calles declaró en más de una

ocasión, no se pretendía expulsar el capital extranjero productivo, sino reajustar los términos en los que dicho capital ingresaba en México y obtenía beneficios: era preferible la inversión productiva (como en manufactura) a la inversión parásita.[96]

Incluso en el clima más radical de los años treinta, ésta fue también la postura que tomó el presidente Cárdenas, la cual fue aceptada en general por el sindicalismo.[97] Por lo tanto, la "nacionalización" de la economía mexicana de los años treinta fue resultado, más que de un sentimiento virulento, de las inevitables circunstancias. Donde la inversión extranjera se consideraba como productiva, fue bien recibida por el régimen, y mientras que los antiguos enclaves de la minería y el petróleo decayeron, inversión nueva —Colgate-Palmolive, Ford, GM, IT&T— ingresaba en México, anticipándose al auge de las décadas de 1950 y 1960.[98] Sobra decir que hubo un caso sobresaliente de nacionalismo económico: la expropiación petrolera de marzo de 1938. No obstante, como ya hemos señalado (y no creo que sea un argumento tan debatible), el petróleo constituyó un caso particular (el sector minero, que era mucho más importante, prácticamente continuó sin sufrir cambios notables), y lo fue debido a la militancia de los trabajadores petroleros y, podría decirse, de la contramilitancia de las compañías petroleras que, conforme a su política característica, decidieron mantener su posición en México, enfrentar tanto al sindicato como al gobierno y, finalmente, burlar la soberanía del país anfitrión y cuestionar el honor personal del presidente (algo realmente insensato si se considera que el presidente era Lázaro Cárdenas).[99] Además, cabe señalar que la expropiación de los Ferrocarriles Nacionales, entonces en quiebra, provocó mucho menos protesta y pasión; pero el petróleo era especial por su alta rentabilidad y prominencia política. La expropiación de marzo de 1938 fue tanto una afirmación de voluntad política —una valiente respuesta a la pregunta ¿quién gobierna en México?— como un cálculo económico racional. Fue también una decisión respaldada en la segura convicción de que Gran Bretaña y los Estados Unidos no estaban en una posición que les permitiera adoptar represalias severas; el contexto internacional de los años treinta abrió una ventana de oportunidad que no existió en los años veinte y que, con el inicio de la Guerra Fría, se cerraría con un ruidoso golpe.[100]

La expropiación resultó en la formación de Pemex, la primera compañía petrolera importante del tercer mundo. Puesto que la expropiación fue una situación fuera de lo común, consecuencia de circunstancias particulares tanto políticas como económicas, no puede considerarse como algo típico de la época. De hecho, incluso considerando el radicalismo cardenista, el papel del Estado en la economía estuvo cuidadosamente circunscrito. El Estado definitivamente buscó regular la economía —véanse el Código Federal del Trabajo, el Plan Sexenal, el Código Agrario, las comisiones estatales para los caminos y la irrigación, así como el cada vez más importante Banco Central— y emprendió también un amplio programa de obras públicas (nuevamente, centradas en caminos e irrigación), de ahí las exageradas acusaciones de "comunismo" del gobierno cardenista que reciclaron los viejos alegatos del "bolchevismo" callista. No obstante, la planeación estatal fue ineficaz y el Estado desempeñó

un papel más bien modesto en la economía: los impuestos del gobierno central representaron tan sólo 5.0% del PIB en 1930 y aumentaron a 5.7% en 1940 (compárense estas cifras con Argentina, de 7.2 a 9.0%; Brasil, de 8.9 a 9.8%, y en promedio para Francia, Italia y el Reino Unido, de 17.2% a 17.5%).[101] Como consecuencia, el gobierno de Cárdenas, inclinado hacia las ambiciosas reformas agraria, laboral y educativa, no tardó en toparse con limitaciones financieras. Para 1936-1937, el déficit gubernamental iba en aumento (lo que, considerando la recesión de 1937, no fue algo malo), y tras el impacto de la expropiación petrolera, Cárdenas recortó el gasto público. De hecho, durante el periodo de insolvencia de finales de su presidencia realizó esfuerzos parcialmente exitosos para frenar la inflación y el déficit, incluso a expensas de perjudicar a sus antiguos partidarios. El cardenismo no fue de tintes comunistas y ni siquiera "populistas económicos".

De tal manera, como argumenta convincentemente Nora Hamilton, hacia finales de los años treinta el régimen había alcanzado "los límites de la autonomía estatal" —es decir, los topes estructurales que inhibieron la continuación de la reforma social y el gasto gubernamental que la acompañaba.[102] Es evidente que el maquinista podría haber acelerado el paso del tren para tumbar los topes y chocar con la Gran Estación del capitalismo, pero ni Cárdenas ni su pragmático secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, como tampoco la mayoría de la élite política "revolucionaria" estaban preparados para emprender tan arriesgado descarrilamiento. Finalmente, tanto en lo nacional como en lo mundial, el régimen se mantuvo dentro de los límites del capitalismo, imponiendo impuestos, reglamentos y reformas, pero siempre dentro de las amplias y muchas veces exigentes disciplinas del mercado. Cárdenas no fue Stalin, y el Estado mexicano no fue ningún leviatán totalitario; de hecho, no comenzó a adquirir sus características leviatanescas sino cuatro décadas después con los excesos "neopopulistas" del presidente Echeverría y el hiperatrofiado Estado impulsado por el petróleo y la deuda en la década de 1970.[103] El avance del régimen mexicano por el camino de la reforma social impulsada por el gobierno fue mucho mayor que el de cualquier otro país latinoamericano de la época, sobre todo en el ámbito de la reforma agraria; esto fue posible, sin duda, por su experiencia previa de la Revolución y las continuas demandas populares —y oportunidades políticas— que ésta trajo consigo.[104] Así, mientras que el desempeño macroeconómico de México en esa década admite comparaciones cercanas con otros países de Latinoamérica —y, por lo mismo, puede hacerse un análisis fructífero en términos de los conceptos conocidos (efectos externos, reparto de bienes, ISI, intervención estatal)—, las políticas internas difirieron y fueron más distintivas, en particular en lo relativo al trabajo y, por encima de todo, a la reforma agraria. Si bien estas políticas se vieron estimuladas en gran medida por la depresión mundial, sus orígenes se remontan a la Revolución y, por lo mismo, en otros países latinoamericanos fueron más débiles o por completo inexistentes. Esta combinación también determinó la trayectoria política-económica distintiva de México durante los años de la posguerra, un época en la que, incluso cuando existieron patrones generales de crecimiento

económico compartidos, por ejemplo con Argentina y Brasil (ISI, urbanización, reactivación de la inversión extranjera), el modelo mexicano fue diferente gracias a su régimen estable, civil y "populista institucional", consecuencia de la Revolución épica (lo que el régimen siempre insistió en dejar claro). Lo que quiere decir, en otras palabras, y frente a interpretaciones revisionistas erróneas, que la Revolución fue clave debido no solamente a la destrucción en la década de 1910, sino también a los logros constructivos —y, para muchos, positivos— en los años treinta.[105]

[1] Sin embargo, como argumento más adelante, la depresión mundial y las reacciones políticas radicales que desató precedieron a la toma del poder de Cárdenas en 1934, y el abandono del radicalismo cardenista, de igual manera, precedió a la salida de Cárdenas del poder a fines de 1940.

[2] La complejidad de la Revolución es algo en lo que todos los estudiosos del proceso coinciden; aceptar esta complejidad (y negar que la Revolución fue monolítica) es, por lo tanto, un punto de partida necesario y casi ritual, no un nuevo punto de vista audaz. Lo mismo aplica, sin duda, para la Gran Depresión, que, como observa Garraty, fue "un fenómeno mundial conformado por un número infinito de sucesos separados pero relacionados"; John A. Garraty, *The Great Depression*, Anchor Books, Nueva York, 1987, p. 2.

[3] John Mason Hart es quizás el autor de mayor peso y más insistente en este enfoque tradicional; véase *Revolutionary Mexico,* University of California Press, Berkeley, 1987, y *Empire and Revolution,* University of California Press, Berkeley, 2002, tercera parte.

[4] En las palabras de Daniel Díaz Fuentes, la Gran Depresión en América Latina "fue un producto importado"; Daniel Díaz Fuentes, *Las políticas fiscales latinoamericanas frente a la Gran Depresión*, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1993, p. 25. El lector atento se percatará de que aquí he cambiado de "América" a "Latinoamérica" el enfoque de la mayor parte de este libro, ya que la Depresión en los Estados Unidos —"y en esto muchos autores concuerdan"— fue endógena ("casi en su totalidad hecha en casa"), y no provocada por efectos externos; Michael A. Bernstein, *The Great Depression: Delayed Recovery and Economic Change in America, 1929-1939*, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, p. 3, la segunda cita corresponde a Gottfried Haberler. En lo sucesivo, hago referencia a los países principalmente como unidades de análisis, pero es preciso tener en mente que a la llegada de la depresión mundial muchos países, entre ellos México, estaban integrados parcialmente y tenían una importante diversidad y divergencias regionales que, por cuestiones de espacio, no es posible abordar en un solo ensayo. Este tema es tratado en Alan Knight, "Export-Led Growth in Mexico, c. 1900-1930", y Paulo Drinot, "Peru, 1894-1930: A Beggar Sitting on a Bench of Gold", en Enrique Cárdenas, José Antonio Campo y Rosemary Thorp (eds.), *An Economic History of Twentieth-Century Latin America*, vol. 1, *The Export Age: The Latin American Economies in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, Palgrave, Basingstoke, 2000, pp. 119-121, 152-153. Sobre México, véase también Susan M. Gauss, *Made in Mexico: Regions, Nation, and the State in the Rise of Mexican Industrialism, 1920s-1940s*, Penn State University Press, University Park, 2010, capítulos 2, 4 y 6.

[5] Algunos autores —quizá los economistas más que los historiadores— tal vez desearían argumentar también que un estudio de la depresión mundial de los años treinta sería de gran utilidad para los formuladores de políticas actuales, pues tendrían una mejor perspectiva para enfrentar las recesiones recientes. Si bien tengo mis dudas sobre la utilidad práctica de la historia, incluso de la historia económica, no negaré que un conocimiento sólido y no superficial de "coyunturas" del pasado podría al menos alertar a los formuladores de políticas y ampliar sus horizontes; de hecho, la reciente administración de la Reserva Federal de los Estados Unidos bajo Ben Bernanke puede aportar una prueba interesante de una formulación de políticas basada en la historia.

[6] La comparación obvia sería entre México y otros Estados revolucionarios, en particular los contemporáneos que vivieron la depresión a lo largo de los años treinta. Claro, no hubo ningún equivalente en Latinoamérica y el ejemplo soviético es radicalmente distinto (abordo esos dos puntos más adelante). Una mejor comparación, pero que rebasa por mucho el alcance de este ensayo, podría ser con China bajo el Guomidang (GMD).

[7] Destaco *señaló* en vez de *causó,* porque hay un debate extenso acerca de las causas de la Gran Depresión y el papel que desempeñó el crac de Wall Street entre estas causas, y que gira en torno a profundas cuestiones de la teoría y de la historia económicas; resúmenes útiles en Garraty, *Great Depression…, op. cit.,* capítulo 1, y Charles P. Kindleberger, *Manias, Panics and Crashes,* 4ª ed., John Wiley, Nueva York, 2000, pp. 62-68. No obstante —y mi observación es acertada—, el debate gira en torno a los países desarrollados y sus interrelaciones y, sobre todo, se enfoca en el papel central de los Estados Unidos ("muchos autores concuerdan en que los Estados Unidos arrastraron al resto del mundo a la depresión"; Bernstein, *The Great Depression…, op. cit.,* p. 3.

[8] Sandra Kuntz Ficker, "De las reformas liberales a la gran depresión", en Sandra Kuntz Ficker (coord.), *Historia ecónomica general de México,* El Colegio de México, México, 2010, pp. 301-311. Durante el auge de 1921-1926, el PIB creció a razón de 2.68 anual; Graciela Márquez, "Evolución y estructura del PIB, 1921-2010", en Kuntz Ficker, *Historia económica general de México,* p. 553.

[9] Un buen resumen se encuentra en Enrique Krauze, Jean Meyer y Cayetano Reyes, *Historia de la Revolución mexicana, 1924-1928: La reconstrucción económica,* El Colegio de México, México, 1977.

[10] Véase Luis Aboites, *Excepciones y privilegios: Modernización tributaria y centralización en México, 1922-1972,* El Colegio de México, México, 2003, pp. 37, 40, donde se muestra que en 1925, 94% de los impuestos federales fueron indirectos. Entre éstos, el comercio internacional (principalmente los impuestos de exportación) contribuyó con 39% (que aumentó a 48% en 1930); no obstante, los impuestos sobre los "recursos naturales" (petróleo y minerales principalmente de exportación) también contribuyeron con 16%. Los ingresos por impuestos, introducidos en 1924 bajo una enérgica oposición, generaron solamente 5%; véase Aboites, *Excepciones y privilegios…, op. cit.,* cap. 4. Sobre los esfuerzos intermitentes de México para reanudar los pagos de la deuda, véase Robert Freeman Smith, *The United States and Revolutionary Nationalism in Mexico, 1916-32,* University of Chicago Press, Chicago, 1972, caps. 8 y 9, y Carlos Marichal, *A Century of Debt Crises in Latin America,* Princeton University Press, Princeton, 1989, pp. 224-226.

[11] Krauze, Meyer y Reyes, *Historia de la Revolución mexicana, op. cit.,* pp. 289-290; Paolo Riguzzi, "México y la economía internacional, 1870-1930", en Kuntz Ficker, *Historia económica general de México, op. cit.,* p. 404. Díaz Fuentes, *Las políticas fiscales…, op. cit.,* p. 22, con fundamento en H. E. Peters ofrece cifras ilustrativas de los flujos de inversión estadunidenses hacia Latinoamérica en los años veinte; Argentina recibió 808 millones de dólares, México 694 millones y Brasil 557 millones. No obstante, mientras que la inversión en Argentina y Brasil fue directa e indirecta (en la proporción 44:56 y 38:62, respectivamente), la inversión en México fue directa en su totalidad; por lo mismo, México fue el mayor receptor de inversión directa de los Estados Unidos durante la década.

[12] Sandra Kuntz Ficker, "The Export Boom of the Mexican Revolution: Characteristics and Contributing Factors", *Journal of Latin American Studies* 36, núm. 2 (2004), pp. 267-296.

[13] Jeffrey Bortz, *Revolution within the Revolution,* Stanford University Press, Stanford, 2008.

[14] Cuando se le preguntó al director de la Compañía de Luz y Fuerza Mexicana, una importante empresa británica asentada en la Ciudad de México, si le preocupaban las "aparentes amenazas de nacionalización", respondió que "no estaba muy alarmado y que su postura era compartida por la mayoría de las compañías extranjeras que operan en el país", Monson a FO, 24 de agosto de 1933, FO371/16580, A6750.

[15] Jürgen Buchenau, *In the Shadow of the Giant: The Making of Mexico's Central American Policy, 1876-1930,* University of Alabama Press, Tuscaloosa, 1996, cap. 7.

[16] Derek W. Aldcroft, *From Versailles to Wall Street, 1919-29,* Penguin Books, Londres, 1977, cap. 9.

[17] Charles P. Kindleberger, *Comparative Political Economy: A Retrospective,* MIT Press, Cambridge, 2000, p. 409. Sobre el efecto de la ley arancelaria SmootHawley en México, véase Paolo Riguzzi, *¿Reciprocidad imposible? La política del comercio entre México y Estados Unidos, 1857-1938,* El Colegio Mexiquense, México, 2004, pp. 243-244.

[18] En 1910 el gobierno de Díaz destinó al ejército 20% del gasto gubernamental; para 1921, había alcanzado su nivel máximo de 53%, después de lo cual tuvo un decrecimiento irregular: 31% en 1925; 37% en 1929, y 25% en 1933. El nivel "bajo" del régimen porfiriano finalmente fue rebasado, a la baja, en 1936. Véase James W. Wilkie, *The Mexican Revolution: Federal Expenditure and Social Change since 1910,* University of California Press, Berkeley, 1973, p. 109.

[19] Smith, *The United States and Revolutionary Nationalism…, op. cit.,* pp. 244-259.

[20] Lorenzo Meyer, *Historia de la Revolución mexicana, 1928-1934: El conflicto social y los gobiernos del maximato,* El Colegio de México, México, 1978, pp. 210, 216-217, 222-223; véase también Daniela Spenser, *The Impossible Triangle: Mexico, Russia and the United States in the 1920s,* Duke University Press, Durham, 1999, pp. 187-190, quien señala que el "temor rojo" de México de 1930 era "totalmente desproporcionado de la realidad" (dicho de otro modo, se parecía a la mayoría de los "temores rojos").

[21] Arnaldo Córdova, *La ideología de la Revolución mexicana,* Era, México, 1973, pp. 394-401.

[22] Lo contrafáctico suele exasperar a los historiadores, sin embargo, puede resultar útil no porque ofrezca "mundos alternos", imaginarios, sino más bien porque nos permite distinguir lo "estructural" de lo "contingente" —lo que en cierto modo era inamovible, "sobredeterminado", reacio al control humano y, al contrario, susceptible a un manejo político inteligente—. Aldcroft, *From Versailles to Wall Street…, op. cit.,* p. 284, lo resume bien: "en 1929-1930 fue imposible evitar los efectos de la depresión; el que haya evolucionado en una crisis global de tal magnitud puede atribuirse no sólo a la convergencia de una combinación de circunstancias poco favorables, sino también el hecho de que los gobiernos hayan recurrido a políticas que empeoraron la situación". Véase también Córdova, *La ideología de la Revolución mexicana, op. cit.,* p. 379.

[23] Enrique Cárdenas, *La industrialización mexicana durante la gran depresión,* El Colegio de México, México, 1987. Deseo agradecer a Enrique Cárdenas por algunos valiosos comentarios sobre este capítulo (comunicación personal en febrero de 2012).

[24] "Arriba abajo" y "abajo arriba" se han convertido en conceptos comunes en la historia mexicana moderna, sobre todo porque el análisis del Estado y de la construcción del Estado ha tendido a remplazar a otros viejos enfoques basados en las clases.

[25] Stephen H. Haber, *Industry and Underdevelopment: The Industrialization of Mexico, 1890-1940*, Stanford University Press, Stanford, 1989, p. 169. En 1928, los Estados Unidos recibieron 70% de las exportaciones de México, cifra sólo superada por Cuba (75%) y Colombia (78%) entre las principales economías de Latinoamérica; Sandra Kuntz Ficker, *El comercio exterior de México en la era del capitalismo liberal, 1870-1929*, El Colegio de México, México, 2007, p. 153.

[26] Víctor Urquidi, *Otro siglo perdido*, FCE, México, 2005, p. 71, consigna la cifra estándar de 312 000. Para un desglose más detallado, véase Abraham Hoffman, *Unwanted Mexican Americans in the Great Depression*, University of Arizona Press, Tucson, 1974, pp. 174-175. Igual que los estadunidenses obligaron a los mexicanos a cruzar a su país por la frontera sur, los mexicanos expulsaron a los inmigrantes chinos hacia el norte (aunque en un número mucho más reducido, pues la población china era menor).

[27] Durante los años treinta, los haitianos en Cuba fueron "atacados […] perseguidos y expulsados", pero al menos la mayoría logró sobrevivir. Sin embargo, en la República Dominicana, Trujillo "ordenó una matanza" en la que fallecieron alrededor de 12 000 haitianos; César J. Ayala, *American Sugar Kingdom*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1999, p. 240. Por supuesto, la comparación más clara con México sería Haití, que tuvo que reabsorber a un número considerable de migrantes repatriados.

[28] Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, p. 207.

[29] Urquidi, *Otro siglo perdido, op. cit.*, p. 70, fundamentado en Angus Maddison, *Two Crises: Latin America and Asia 1929-1938 and 1973-1983*, Development Center Studies, OCDE, París, 1985, tabla 6. Estas cifras colocan a México a la par con Brasil. Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America…, op. cit.*, p. 195, consigna la más elevada cifra de 31% para México (1928). B. R. Mitchell, *International Historical Statistics: The Americas and Australasia*, Gale Research Co., Detroit, 1983, pp. 545, 889, consigna las cifras de 18% para 1928 y 21% para 1929, que más o menos cuadran con Kuntz Ficker, *El comercio exterior…, op. cit.*, p. 75, con un promedio de 19% para 19201929. La principal discrepacia surge porque Bulmer-Thomas se basa en los precios de 1970, mientras que Maddison y Mitchell utilizan los precios actuales. Sin embargo, esto no justifica la discrepancia (menor) entre Maddison y Mitchell.

[30] Cárdenas, *La industrialización mexicana…, op. cit.*, p. 37.

[31] Riguzzi, *¿Reciprocidad imposible?…, op. cit.*, pp. 260-263.

[32] La producción mexicana de petróleo repuntó en 1921 con 193 millones de barriles; para 1929, la producción había caído a 45 millones, y en 1932 —casualmente en el punto más bajo de la crisis— llegó a 33 millones. A partir de entonces siguió un crecimiento anual estable que, para 1937, el año anterior a la expropiación, había alcanzado 47 millones; Lorenzo Meyer, *Mexico and the United States in the Oil Controversy*, University of Texas Press, Austin, 1977, p. 9.

[33] La fuerza laboral total en el sector minero (no sólo en la plata) era de 90 000 en 1927 y decreció a 45 000 en 1932; en el sector del petróleo era de 14 000. Meyer, *Historia de la Revolución mexicana…, op. cit.*, pp. 44, 55.

[34] Cárdenas, *La industrialización mexicana…, op. cit.*, pp. 24-28, determina la naturaleza de enclave de la minería y el petróleo, y demuestra que la minería (con 81% de valor de retorno en 1926) tuvo vínculos más estrechos con la economía nacional (a través de salarios, ingresos e impuestos) que el petróleo (con 39%).

[35] *Ibid.*, p. 16.

[36] Urquidi, *Otro siglo perdido, op. cit.*, p. 71, con "la vuelta al quelite" se hace referencia a una expresión popular mexicana que se utiliza cuando las malas condiciones económicas llevan a la necesidad de alimentarse con plantas silvestres como el quelite. La cifra para las comunidades rurales (con menos de 200 habitantes) proviene de Eyler N. Simpson, *The Ejido: Mexico's Way Out*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1937, p. 587. Haber, *Industry and Underdevelopment…, op. cit.*, p. 173, señala que el efecto potencial de "mitigación" del sector de subsistencia había sido reforzado con la reforma agraria de los años veinte, reducida pero significativa.

[37] Como señala el economista agrario ruso Alexander Chayanov (*On the Theory of the Peasant Economy*, editado por Daniel Thorner, Basile Kerblay y R. E. F. Smith, University of Wisconsin Press, Madison, 1986), la producción campesina, mediante la explotación del trabajo familiar no pagado, podía aguantar dificultades económicas que aruinarían a los agricultores comerciales. Así, a principios de 1933, en Tamaulipas hubo un "notable aumento en la agricultura […], en

particular, más de los pequeños que de los grandes agricultores. El bajo valor de los productos agropecuarios ha golpeado al gran agricultor, pero ha alentado al pequeño para cultivar productos de autoconsumo"; informe de Tampico en Monson a FO, 9 de marzo, 1933, FO371/16580, A2367.

[38] La producción de maíz en México en millones de toneladas métricas: 2.1 en 1927; 2.2 en 1928; 1.5 en 1929; 1.4 en 1930; 2.1 en 1931, 2.0 en 1932, y 1.9 en 1933 (cifras de Simpson, *The Ejido…*, *op. cit.*, p. 673). El informe del Banco Nacional de México, *Examen de la situación ecónomica de México*, núm. 63, diciembre 31 de 1930, corrobora la mala cosecha del año, pero, un poco al estilo de la reina María Antonieta, escribió de manera optimista que la disminución de la producción del maíz reflejaba en parte los patrones de consumo urbanos: "Gracias a los salarios más altos, los obreros ahora tienen la posibilidad de comer pan en lugar de tortillas".

[39] De tal manera que, durante la severa estanflación de la década de 1980, "volver al quelite" dejó de constituir una opción sistémica para los mexicanos que enfentaban malos momentos; más bien, dependieron del autoempleo urbano, la migración, las remesas de los migrantes y, hasta cierto punto, de la seguridad social del Estado.

[40] Entre 1932, el punto más bajo del ciclo, y 1940, el PIB de México creció 55% (5% anual), mientras que la industria creció 118% (10.2% anual) y la agricultura sólo 24% (2.8% anual); Cárdenas, *La industrialización mexicana…*, *op. cit.*, p. 40 y caps. 5 y 6, y Haber, *Industry and Underdevelopment…*, *op. cit.*, pp. 156-170, 176-189.

[41] Éste es el argumento central de Bernstein, *The Great Depression…*, *op. cit.*, pp. 2, 31, 39 y cap. 2.

[42] De tal manera, la trayectoria de la economía mexicana en los años treinta se asemeja muy cercanamente a la de Brasil; véase Marichal, *Century of Debt Crises…*, *op. cit.*, p. 209, en relación con las exportaciones, y Díaz Fuentes, *Las políticas fiscales…*, *op. cit.*, p. 28, para cifras del PIB.

[43] Cárdenas, *La industrialización mexicana…*, *op. cit.*, p. 34.

[44] *Ibid.*, p. 225.

[45] *Idem; cfr.* Wilkie, *The Mexican Revolution…*, *op. cit.*, p. 22.

[46] Alberto J. Pani, *Apuntes autobiográficos*, vol. 2, 1950; reimpreso, INEHRM, México, 2003, p. 146. Pani, quien tuvo una participación importante en la solución de la crisis, difícilmente pudo ser objetivo, pero estaba muy bien informado y, como los acontecimientos lo demuestran, estuvo en lo correcto. Véase también Cárdenas, *La industrialización mexicana…*, *op. cit.*, p. 34.

[47] Garraty, *The Great Depression*, *op. cit.*, pp. 18, 23, 36-37, 42-43, 47.

[48] Es significativo que su llamado no haya sido hecho por el presidente Ortiz Rubio sino por el jefe máximo Calles; pocos días después, el presidente títere le envió un telegrama oficial. Estando en funciones, rememora Pani, siempre que proponía una acción importante el presidente le preguntaba, "¿lo has consultado ya con el general Calles?", Pani, *Apuntes autobiográficos*, *op. cit.*, vol. 2, pp. 148-149.

[49] J. W. F. Dulles, *Yesterday in Mexico*, University of Texas University Press, Austin, 1961, pp. 60-61. Rosalie Evans, en su lucha por salvar su hacienda de agraristas y "bolcheviques", coincidía, en su clásica manera ácida: para ella Pani era un "mexicano pequeño, empalagoso, muy próspero (desde la Revolución) y negro *[sic]* con buenos modales"; Rosalie Evans, *Cartas desde México*, Colección Testimonio, México, 1986, p. 249.

[50] Roderic A. Camp, *Mexican Political Biographies, 1884-1935*, University of Texas Press, Austin, 1991, p. 164; véase también Gauss, *Made in Mexico…*, *op. cit.*, pp. 28-32. Durante las negociaciones de la reanudación de la deuda externa de México en los Estados Unidos en 1927, Pani fue arrestado supuestamente por contravenir la Ley Mann, puesto que había cruzado límites estatales en compañía de dos atractivas jóvenes muchachas catalanas, quienes al parecer no iban en contra de su voluntad; es posible que el arresto haya sido arreglado por enemigos políticos de Pani, entre quienes estaba Adolfo de la Huerta. El presidente Calles aceptó la renuncia de Pani y pronunció ante el Congreso su famosa frase en la que les preguntó si preferían tener "un gabinete de eunucos"; Dulles, *Yesterday in Mexico*, *op. cit.*, p. 286.

[51] Durante su servicio en Europa mantuvo una activa correspondencia con Calles en la que expresó abiertamente sus puntos de vista; Dulles, *Yesterday in Mexico*, *op. cit.*, pp. 507-508; Pani, *Apuntes autobiográficos*, *op. cit.*, vol. 2, pp. 142-147.

[52] La historia sobre las políticas de Pani en 1932 se basa en Cárdenas, *La industrialización mexicana…*, *op. cit.*, pp. 55-59; Pani, *Apuntes autobiográficos*, *op. cit.*, vol. 2, pp. 149-161, y Dulles, *Yesterday in Mexico*, *op. cit.*, pp. 515-517.

[53] En su mensaje pronunciado ante el Congreso en septiembre de 1933 en relación con la deuda externa, Pani se jactó de que su "política (…) había sido —se complacía en decir— diametralmente opuesta a las implementadas por las administraciones previas"; Farquhar a FO, 14 de septiembre de 1933, FO371/16580, A7187.

[54] Cárdenas, *La industrialización mexicana…, op. cit.,* p. 190; Díaz Fuentes, *Las políticas fiscales…, op. cit.,* p. 38, consigna cifras que muestran que el PIB de México descendió a 81 en 1932 (en 1929 había sido de 100); para 1935, había recuperado el nivel de 1929 y para 1936 lo superó claramente con 111.

[55] Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America…, op. cit.,* p. 212, incluye a México entre el "grupo de rápida recuperación" (de ocho países latinoamericanos); en la p. 219 consigna los índices anuales de crecimiento de 1932-1939: 6.5% en Chile; 6.2% en México; 4.8% en Brasil y Colombia; 4.4% en Argentina, y 0.1% en Uruguay.

[56] Puesto que el "keynesianismo clarividente" puede ser cuestionado (Haber, *Industry and Underdevelopment…, op. cit.,* p. 170), advierte que "deberíamos […] ser cautelosos en no hablar de keynesianismo antes de Keynes […] el gobierno mexicano implementó esas políticas porque tuvo muy pocas opciones"); vale la pena citar el largo mensaje de Pani al Congreso en septiembre de 1933, en el que, haciendo un resumen de la política desde 1925, criticaba duramente la reanudación de los pagos de la deuda, los fuertes recortes salariales en el gobierno y el ejército, y "el fracaso del Banco de México para colocar en circulación una cantidad suficiente de papel moneda", lo cual produjo una "seria deflación monetaria", que Pani —en un cambio deliberado (véase n. 53)— remedió en 1932; Farquhar a FO, 14 de septiembre de 1933, FO371/16580, A7187. Encuentro aquí sólida evidencia de lo que Díaz Fuentes, *Las políticas fiscales…, op. cit.,* p. 43, llama "keynesianismo *avant la lettre*", es decir, "keynesianismo antes de Keynes": si bien es cierto que la *Teoría General* de Keynes (1936) no se publicó en México sino hasta 1942 (véase Sarah Babb, *Managing Mexico,* Princeton University Press, Princeton, 2001, pp. 57-58), eso no significa que algunos individuos inteligentes —como Alberto J. Pani— no hayan vislumbrado los rudimentos del keynesianismo; para lograrlo, no fue nunca necesario conocer la *Teoría general,* ya que Keynes con anterioridad había escrito serias críticas sobre el patrón oro y sus ortodoxias relacionadas. Véase John Maynard Keynes, *Essays in Persuasion,* 1931; reimpresión, W. W. Norton, Nueva York, 1963.

[57] Liaquat Ahamed, *Lords of Finance: The Bankers Who Broke the World,* Penguin Books, Londres, 2009.

[58] Para un análisis empático de las prioridades de Argentina en los años treinta, véase H. S. Ferns, *The Argentine Republic, 1516-1971,* Davis and Charles, Newton Abbot, 1973, pp. 120, 138; Marichal, *A Century of Debt Crises…, op. cit.,* p. 211, hace una referencia más crítica a "la locura del leal deudor"; véase también Díaz Fuentes, *Las políticas fiscales…, op. cit.,* p. 48.

[59] Asimismo, cuando la deuda y los daños finalmente quedaron establecidos en la década de 1940, en una atmósfera de cooperación solidaria en tiempos de guerra México obtuvo un trato muy ventajoso en el que las cargas se redujeron en 90%; de acuerdo con Marichal, esos fueron "los beneficios de la procrastinación"; Marichal, *A Century of Debt Crises…, op. cit.,* pp. 224, 227.

[60] Edwin W. Kemmerer, *Inflation and Revolution: Mexico's Experience of 1912-1917,* Princeton University Press, Princeton, 1940.

[61] Cárdenas, *La industrialización mexicana…, op. cit.,* pp. 77, 212.

[62] Las vicisitudes de la moneda de cobre habían provocado serias protestas y violencia a mediados de la década de 1830, y nuevamente, durante la presidencia de Manuel González (1880-1884), la emisión de papel moneda causó pánico y provocó el retorno a la plata.

[63] Robert Redfield, *The Folk Culture of Yucatan,* Chicago University Press, Chicago, 1941, pp. 164-165.

[64] Todo *argumentum ex silentio* histórico siempre es riesgoso: presupone que las fuentes primarias son una justa reflexión de la realidad y que las fuentes primarias relevantes han pasado por un meticuloso escrutinio (en busca de "sonidos" que pudieran romper el "silencio"). No obstante, en este caso, incluso cuando los estudios locales se enfocan de cerca en los mercados y las transacciones en pequeña escala (véase la nota 66), no he encontrado ninguna perturbación provocada por los cambios de moneda posteriores a 1932.

[65] Cárdenas, *La industrialización mexicana…, op. cit.,* p. 77. La confianza en Pani fue evidente tanto en la eufórica acogida que recibió por parte del Congreso en septiembre de 1933 como en el estremecimiento que sacudió al sistema bancario cuando repentinamente dejó el cargo un mes después; no obstante, su sucesor de peso completo —nada más y nada menos que el propio jefe máximo Calles— no tardó en estabilizar los mercados; Monson a FO, 6 de septiembre y 5 de octubre de 1933, FO371/16580, A7052, A7711.

[66] Estudios detallados sobre los mercados de los años treinta se encuentran en Ralph L. Beals, *Cherán: A Sierra Tarascan Village,* 1946; reimpresión, Nueva York, Cooper Square, 1973, pp. 58-91; y Bronislaw Malinowski y Julio de la Fuente, *Malinowski in Mexico: Thee Economics of a Mexican Market System,* Routledge and Kegan Paul, Londres, 1982, cap. 7.

[67] Un maestro de escuela rural recordaba que si bien en los años treinta las cosas eran baratas, finalmente nadie tenía mucho dinero: "sólo los ricos tenían de esos pesos de plata 0.720"; *Los maestros y la cultura nacional, 19201952*, vol. 4, *Centro*, SEP, México, 1987, p. 134.

[68] Cárdenas, *La industrialización mexicana…*, *op. cit.*, pp. 59-65.

[69] Cf. Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards, The Macroeconomics of Populism in Latin America, University of Chicago Press, Chicago, 1991, donde sin pensarlo bien se menciona a Cárdenas (y a otros populistas "clásicos" de los años treinta y cuarenta, entre ellos Vargas y Perón) en una acusación de "populismo económico" de despilfarro. Para una refutación convincente, véase Enrique Cárdenas, "El mito del gesto público deficitario en México (1934-56)", El Trimestre Económico 75, núm. 4 (octubre-diciembre de 2008), pp. 809-40.

[70] Igual que México, Brasil buscó la adopción de políticas anticíclicas, con déficits sustanciales durante los años treinta. No obstante, fueron distintos en al menos dos factores: Brasil canalizó fondos al sector crucial cafetalero para beneficio de los terratenientes cafetaleros, y, como una federación fiscal genuina, en el régimen brasileño participaron múltiples actores oficiales. El sistema fiscal mexicano, por el contrario, fue altamente centralizado (y se centralizó más aún con Pani; Gauss, *Made in Mexico…*, *op. cit.*, pp. 47-50), y mientras que el gobierno de Vargas subsidió las plantaciones de café, el gobierno de Cárdenas las expropió.

[71] Alan Knight, "La Revolución mexicana: su dimensión económica", en Kuntz Ficker, *Historia económica general de México*, *op. cit.*, p. 490.

[72] Alan Knight, "The Domestic Dynamics of the Mexican and Bolivian Revolutions", en Merilee S. Grindle y Pilar Domingo (eds.), *Proclaiming Revolution: Bolivia in Comparative Perspective*, Harvard University Press, Cambridge, 2003, pp. 54-90.

[73] De tal manera, en Morelos, 59% de las propiedades agrícolas (por superficie) y 62% (por valor) correspondían al sector ejidal en 1930. Si bien estas fueron cifras insólitamente elevadas, otros estados del centro de México poseían ejidos de dimensiones considerables (por ejemplo: Tlaxcala, 19 y 21%; Puebla, 18 y 16%; Guerrero, 10 y 18%). En otros estados —principalmente del norte— la reforma agraria oficial prácticamente no se sintió. Véase Meyer, *Historia de la Revolución mexicana…*, *op. cit.*, pp. 190-191. Los informes mensuales del Banco Nacional de México contienen reiteradas referencias sobre la incertidumbre generada por las demandas y los conflictos agrarios en el periodo comprendido entre fines de 1920 y la década de 1930; *Examen de la situación económica de México, 1925-76*, Banamex, México, 1978, pp. 32, 35, 45, 46, 82, 100, 109.

[74] Aunque Calles y Ortiz Rubio (por poco que importara) estaban comprometidos a acabar con la reforma agraria, algunos gobernadores/jefes estatales —como Cárdenas (Michoacán) e, incluso más claramente, Tejeda (Veracruz)— siguieron promoviendo el agrarismo, y, como México fue una federación en términos políticos (que no fiscales), esos actores estatales gozaron de un amplio margen de libertad; *Examen de la situación económica…*, *op. cit.*, pp. 93, 100. Véase también Simpson, *The Ejido…*, *op. cit.*, pp. 613, 700. He calculado *grosso modo* que la población agrícola económicamente activa fue de alrededor de 3.5 millones.

[75] Simpson, *The Ejido…*, *op. cit.*, cap. 24.

[76] Así, las regiones donde la actividad económica ya era bastante débil, quizá particularmente en el norte, tuvieron que lidiar con un influjo de migrantes desempleados: por ejemplo, la importante región algodonera de la Comarca Laguna atravesaba en 1930 por una sequía y "un gran número" de migrantes repatriados "vagaba por la ciudad (Torreón) y las estaciones de tren pidiendo ayuda"; Maria Vargas Lobsinger, *La Comarca Lagunera*, UNAM, Mexico, 1999, pp. 128-129. No es coincidencia que la Laguna haya sido el sitio de mayor movilización popular —de comunistas inclusive—, que condujo a la reforma agraria radical de octubre de 1936.

[77] Informe del cónsul Macy, Tampico, 6 de enero de 1932, State Department Records, Internal Affairs of Mexico, 1930-39, 812.5200/960; o bien, informe del cónsul Hinke, Mazatlán, 15 de septiembre de 1932, 812.5200/908, donde señalan que las peticiones ejidales se duplicaron en 1931-1932. Los registros británicos de asuntos externos contienen varios ejemplos similares.

[78] Por ejemplo, en Tlaxcala; Raymond Buve, "State Governors and Peasant Mobilization in Tlaxcala", en D. A. Brading (ed.), *Caudillo and Peasant in the Mexican Revolution*, Cambridge University Press, Cambridge, 1980, pp. 233-244.

[79] Timothy Henderson, *The Worm in the Wheat: Rosalie Evans and Agrarian Struggle in the Puebla-Tlaxcala Valley of Mexico, 1906-1927*, Duke University Press, Durham, 1998.

[80] David Ronfeldt, *Atencingo*, Stanford University Press, Stanford, 1973.

[81] Había, en otras palabras, un claro "efecto de demostración" conforme los activistas agraristas —incluso en entornos poco propicios, como los Altos de Jalisco— veían lo que ocurría en otras partes y se percataban de que "el centro" (el gobierno federal) era solidario con su causa; véase Ann L. Craig, *The First Agraristas,* University of California Press, Berkeley, 1983, cap. 4.

[82] Simpson, *The Ejido…, op. cit.,* pp. 455-462; Francisco Javier Gaxiola, *El presidente Rodríguez (1932-1934),* Cvltvra, México, 1938, pp. 450-464; Farquhar a FO, 28 de julio de 1933, FCO371/16580, A6244.

[83] Abelardo Rodríguez, *Autobiografía,* Novaro Editores, México, 1962, p. 153. La preocupación sobre la "debilidad congénita" del mercado doméstico estaba fuertemente arraigada; *Examen de la situación ecónomica…, op. cit.,* 122. Como sugiere el adjetivo *congénito,* no fue sólo una cuestión coyuntural de la depresión mundial, por importante que ésta haya sido; los problemas de las escasa demanda y, como consecuencia, de la sobreproducción industrial (por ejemplo, de textiles), antecedieron a la Revolución.

[84] Hobart Spalding, *Organized Labor in Latin America,* New York University Press, Nueva York, 1977, p. 94.

[85] Informe del cónsul Willson, Veracruz, 16 de abril de 1937, State Department Records, 812.504/1652. Como señaló acertadamente un lector anónimo de este ensayo, nuestra suposición de que la CTM (y Lombardo) fue más radical que la CROM (y Morones), como suele pensarse, quizá debería cuestionarse, ya que la teoría y la práctica muchas veces divergieron; asimismo, la CROM de los años veinte por lo general tuvo un impulso genuinamente radical y popular (véase Bortz, *Revolution within the Revolution…, op. cit.*). No obstante, preferí apegarme a la visión convencional de que la transición de la hegemonía cromista a la cetemista en el movimiento sindical (una transición que coincidió con la recesión mundial, 1928-1936) representó una radicalización no sólo en términos retóricos.

[86] El embajador de los Estados Unidos, Josephus Daniels, quien simpatizaba con el gobierno de Cárdenas, opinaba que la CTM favorecía "una forma de gobierno extremadamente socialista"; informe del 16 de mayo de 1936, State Department Records, 812.504/1584. Por supuesto que el discurso público de la CTM (cuyo vocal era Lombardo Toledano) y su práctica real (llevada a cabo por gente al estilo de Fidel Velázquez) tendieron a diferir.

[87] Marcos Tonatiuh Águila M., *Economía y trabajo en la minería mexicana,* UAM, México, 2004, pp. 85-106.

[88] *Examen de la situación económica…, op. cit.,* pp. 146-147 (marzo de 1935: ferrocarrileros, tranviarios, petroleros, mineros y una "huelga general" en Puebla), pp. 149-151 (mayo de 1935: tranviarios, luz y fuerza, mineros, ferrocarrileros), pp. 151-152 (junio de 1935: telefonistas, papeleros, en breve, una "epidemia de huelgas"). Las cifras oficiales de huelga son engañosas, pues sólo registran las huelgas "legales" o reconocidas oficialmente (y en ocasiones no abarcan todo el país); no obstante, las cifras se dispararon en 1934-1935 a causa del creciente conflicto industrial y la postura prosindicato del gobierno; véase Guadalupe Rivera Marín, *El mercado de trabajo, FCE,* México, 1955, p. 226. En la p. 230 de la misma fuente se muestra la tendencia a resolver las huelgas en favor de los sindicatos más que de las compañías.

[89] Joe C. Ashby, *Organized Labor and the Mexican Revolution under Lázaro Cárdenas,* University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1963, sigue siendo uno de los mejores estudios.

[90] Informe del cónsul Park, Torreón, 13 de mayo de 1936, State Department Records, 812.504/583.

[91] *Examen de la situación económica…, op. cit.,* pp. 128-129; Rodríguez, *Autobiografía, op. cit.,* pp. 152-154, donde narra cómo los patrones textiles —*con sus ventas débiles y sus bodegas llenas— se opusieron al aumento del salario mínimo, sin embargo, "seis u ocho meses después de elevar los salarios, los almacenes textiles estaban vacíos y empezaron a trabajar a su capacidad las fábricas", así que "los mismos industriales, los más renuentes, los que más se oponían a la elevación del salario, me dieron un banquete para […] darme las gracias por lo que se había hecho, con tan buenos resultados para todos".*

[92] El estudio más meticuloso de la producción industrial, la productividad y los salarios en la época revolucionaria es el de Aurora Gómez-Galvarriato sobre la industria textil, donde muestra que el equilibrio del poder se inclinó de manera decisiva en favor del sindicalismo, lo que tuvo como resultado el aumento del 131% de los salarios en los años veinte; Aurora Gómez-Galvarriato, "Measuring the Impact of Institutional Change in Capital-Labor Relations in the Mexican Textile Industry, 1900-1930", en Jeffrey L. Bortz y Stephen Haber (eds.), *The Mexican Economy, 1870-1930,* Stanford University Press, Stanford, 2002, p. 315. Desafortunadamente, su estudio se detiene en 1930. No obstante, las dinámicas subyacentes (sindicatos fuertes y protección arancelaria), si acaso, se reforzaron durante los años treinta; no fue sino hasta los años cuarenta que dichas dinámicas se revirtieron definitivamente, al menos en lo referente al poder sindical. Águila, *Economía y trabajo…, op. cit.,* p. 132, muestra el incremento de los salarios reales en la minería al menos hasta 1937, seguido por una breve estabilidad y un fuerte declive después de 1940. Los informes consulares estadunidenses con

frecuencia reconocen el poder de los sindicatos y los aumentos salariales derivados; véase, por ejemplo, Macy, Tampico, 22 de agosto de 1936, y Blohm, Chihuahua, 3 de noviembre de 1937, State Department Records, 812.504/1617, 1687. No obstante, es preciso notar que estos casos se relacionan con sectores —textil, minero, petróleo— que contaban con sindicatos fuertes; al trabajo no sindicalizado, que abundaba, quizá no le haya ido tan bien.

[93] Como el cónsul estadunidense de Chihuahua observó, con el estallido de la Guerra Civil española, que provocó temores de que algo parecido pudiese ocurrir en México, "el obrero mexicano (…) no (…) se levantará en armas mientras el gobierno laboral se mantenga en el poder, pues le complace la buena situación que atraviesa bajo el régimen nacional actual"; informe del cónsul Blohm, Chihuahua, 19 de octubre de 1936, State Department Records, 812.504/1627. Deberíamos agregar que los trabajadores se beneficiaron gracias a que la industria, en particular la manufacturera, estaba en crecimiento y retribuía un buen retorno a los inversionistas; Haber, *Industry and Underdevelopment…*, *op. cit.*, p. 183. Además de los salarios reales, existe también cierta evidencia (lejos de ser clara) de que los mejores niveles de vida de los años treinta comenzaron a producir efectos biométricos; Moramay López-Alonso, "Living Standards of the Mexican Laboring Classes, 1850-1950: An Anthropometric Approach", en Ricardo D. Salvatore, John H. Coatsworth y Amílcar E. Challú (eds.), *Living Standards in Latin American History,* Harvard University Press, Cambridge, 2010, p. 91.

[94] Jeffrey M. Bortz, *El salario en México,* El Caballito, México, 1986, proporciona cuadros sobre el declive sostenido de los salarios reales (en la Ciudad de México) durante los años cuarenta. Véase también Rivera Marín, *El mercado de trabajo, op. cit.*, p. 141, quien consigna una caída de la tercera parte de los salarios reales entre 1940, el año final de la administración de Cárdenas, y 1944.

[95] Informe del cónsul Smale, Ensenada, 31 de agosto de 1937, State Department Records, 812.504/1671. Esto, utilizando la terminología de los estudios sobre el imperialismo, podría reformularse diciendo que la "élite colaboradora" de México buscó redefinir los términos de la negociación colaborativa, entre ellos los "anfitriones" locales y el capital extranjero, cada vez más estadunidense.

[96] Córdova, *La ideología de la Revolución mexicana, op. cit.*, p. 385; Gauss, *Made in Mexico…*, *op. cit.*, p. 41.

[97] Aunque "radicales", los sindicatos no fueron estrictamente xenofóbicos: buscaron obtener los beneficios para ellos sin necesariamente expulsar de México a los gringos; informe del cónsul Blohm, Chihuahua, 3 de noviembre de 1937, State Department Reports, 812.504/1687. Aun cuando los gringos fueron expulsados —con la expropiación petrolera de marzo de 1938—, se logró con sorprendentemente escasa confrontación o violencia.

[98] Gauss, *Made in Mexico…*, *op. cit.*, pp. 35-36. Para finales de los años treinta, conforme el gobierno fracasaba en su intento de dar solución a las demandas de crédito agrícola (ejidal), la compañía Anderson Clayton se convirtió en un importante organismo de crédito con el respaldo tácito oficial; Nicole Mottier, *What Agricultural Credit and Debt Can Tell Us about the State in Mid-century Mexico,* American Historical Association Meeting, Chicago, enero de 2012.

[99] Alan Knight, "The Politics of the Expropriation", en Jonathan C. Brown y Alan Knight (eds.),*The Mexican Petroleum Industry in the Twentieth-Century,* University of Texas Press, Austin, 1992, pp. 90-128.

[100] De ahí el destino de Mossadegh y Arbenz en 1953 y 1954.

[101] Gauss, *Made in Mexico…*, *op. cit.*, pp. 15-16, 48-51; Aboites, *Excepciones y privilegios…*, *op. cit.*, p. 397 (he incluido a estos tres países europeos debido a que sus cifras individuales son muy próximas). Si algo dejan en claro las cifras mexicanas es que el crecimiento del papel del Estado en la economía durante los años treinta tuvo que ver esencialmente con la regulación más que con la propiedad. Aun cuando el Estado pagó por la construcción de caminos y presas, las obras estuvieron a cargo de compañías privadas (algunas, en efecto, cercanamente vinculadas con políticos prominentes).

[102] Nora Hamilton, *The Limits of State Autonomy: Post-Revolutionary Mexico,* Princeton University Press, Princeton, 1982.

[103] Alan Knight, "Cárdenas and Echeverría: Two 'Populist' Presidents Compared", en Amelia M. Kiddle y María L. O. Muñoz (eds.), *Populism in Twentieth-Century Mexico,* University of Arizona Press, Tucson, 2010, pp. 15-37.

[104] Carleton Beals, *America South,* J. B. Lippincott, Filadelfia, 1937, p. 265. Colombia ensayó una especie de reforma agraria en los años treinta, pero a mucho menor escala que la reforma mexicana; Albert O. Hirschman, *Journeys towards Progress,* Doubleday, Nueva York, 1965, cap. 2. En la República Dominicana, Trujillo también inició una "campaña de distribución de tierras" en 1934 como parte de un más amplio proyecto procampesino, populista y nacionalista (xenofobia incluida). Los resultados, en términos de la adquisición de tierras por los campesinos, fueron reales, pero menos radicales y más fragmentados que el reparto cardenista contemporáneo; además, después de la segunda Guerra Mundial, Trujillo cambió su postura y se volvió, desde el punto de vista del campesino dominicano, "un agente de su despojo, dislocación y

desilusión"; véase el excelente análisis de Richard Lee Turits, *The Foundations of Despotism: Peasants, the Trujillo Regime and Modernity in Dominican History,* Stanford University Press, Stanford, 2003, pp. 90-143, 245.

[105] La celebración del centenario en 2010 produjo una cosecha considerable de ese revisionismo, a veces bajo el formato de la revista ilustrada cursi, que optó por conmemorar la Revolución de 1910 explotando mitos y, con ello, desinflando el fenómeno; un ejemplo representativo, quizá no peor que muchos otros, es Alejandro Rosas (coord.), *Las dos caras de la historia: Revolución mexicana: el tiempo del caos,* Grijalbo, México, 2010, que en la página 11 muestra las cartas del juego cuando afirma que el libro "es un ejercicio de investigación histórica *e imaginación literaria*" (cursivas del autor).

IX. CUBA: DEPRESIÓN, IMPERIALISMO Y REVOLUCIÓN, 1920-1940

GILLIAN MCGILLIVRAY

PARA LOS inversionistas, el desplome del mercado de materias primas en octubre de 1929 quizá sólo significó una pendiente más pronunciada de la montaña rusa en la que los precios del azúcar viajaban desde hacía más de una década. En Cuba, la economía y la sociedad dependían principalmente de los fluctuantes precios del azúcar porque ésta representaba 80-90% de la producción agraria y de las exportaciones nacionales.[1] La primera Guerra Mundial y la prohibición en los Estados Unidos condicionaron a canalizar más inversiones (junto con el azúcar y el tabaco) hacia el turismo, los juegos de apuestas y los círculos de prostitución, pero los beneficios de esos giros también se desplomaron a raíz de la recesión económica. En este capítulo se destacan algunos de los cambios culturales y políticos significativos que comenzaron en los años veinte y se profundizaron con las repercusiones de la Gran Depresión en los años treinta, y se consideran también la adopción nacionalista de la cultura afrocubana, la concesión del sufragio femenino, la creación a nivel nacional de asociaciones de terratenientes, agricultores de caña de azúcar y obreros, y, en términos más generales, el aumento de la intervención del Estado en la economía y la sociedad bajo el ejemplo de la creación de un instituto nacional del azúcar y un ministerio del trabajo.[2]

Muchos de estos cambios guardaron relación con los ocurridos en otras partes del mundo: en lo cultural, la *vogue nègre* comenzó a prosperar en Europa; el estilo femenino de los años veinte *(flappers),* el jazz y el renacimiento de Harlem florecieron en los Estados Unidos; la samba y el *mestiçagem* adquirieron prominencia en Brasil; México y otros países latinoamericanos adoptaron el indigenismo-mestizaje como una "mezcla" racial alterna al darwinismo y el positivismo social que habían condenado a toda la población, excepto franceses, alemanes y anglosajones, a ocupar el estamento más bajo de la escala social.[3] En el ámbito político, la creciente intervención del Estado cubano en la economía y la sociedad fue similar al *New Deal* de Franklin Roosevelt y a la nacionalización cardenista del petróleo y la creación de organismos corporativistas de sindicatos y campesinos en México. Dos rasgos cubanos específicos de las décadas de 1920 y 1930 fueron: *1)* el alto grado de intervención del Estado cubano en la economía, que inclinó el equilibrio del poder de las compañías

azucareras en manos de estadunidenses hacia los propietarios de ingenios azucareros, agricultores y trabajadores cañeros cubanos, y *2)* el grado en el que la influencia de los Estados Unidos siguió limitando las políticas formales de la isla.

El régimen inicialmente popular nacionalista de Machado (1925-1933) introdujo protección para el campesinado y los industriales cubanos, así como proyectos masivos de obras públicas. El régimen aspiró a colaborar con otros países para tener un mayor control sobre los precios del azúcar y crear medios alternos de desarrollo aparte de este producto. El régimen, en particular, implementó la sustitución de importaciones de bienes de consumo ligeros y buscó la creación de un oasis isleño para los turistas, utilizando los ingresos del sector para realizar mejoras públicas en instalaciones portuarias, drenaje y suministro de agua para beneficio de los barrios acaudalados y los clubes campestres, y para casinos y hoteles.[4] Incluso antes de que el desplome del mercado de 1929 desarticulara severamente estos esfuerzos, la fraudulenta reelección de Gerardo Machado como presidente en 1928, en combinación con una corrupción generalizada —alimentada por los préstamos cada vez mayores de bancos estadunidenses—, provocó el surgimiento de una oposición masiva a un gobierno que se había transformado en una dictadura.

Tras el desplome de 1929, los precios del azúcar cayeron a un promedio de 1.47 centavos de dólar por libra, la mitad del ya bajo precio de 2.96 centavos en 1927. En 1930, los Estados Unidos, que compraban alrededor de 75% del azúcar cubana, aprobaron la ley arancelaria Smoot-Hawley, que desvió de Cuba gran parte del mercado de los Estados Unidos hacia los productores nacionales de azúcar de remolacha y los territorios insulares de Puerto Rico, Hawái y Filipinas. El intelectual cubano Herminio Portell Vilá expresó este proteccionismo en un lenguaje que reflejaba elocuentemente el sentimiento nacionalista cubano:

> Una diferencia de medio centavo en el arancel […] representa la diferencia entre una tragedia nacional en la que todo se recorta, desde el presupuesto nacional hasta […] las limosnas que recibe el mendigo, y al así llamado estado de prosperidad, cuyos beneficios jamás llegan a la mayoría de las personas ni benefician a Cuba como nación.[5]

Las cuotas estrictas de la caña limitaron la producción total de azúcar en Cuba, mientras que en otros países la producción se incrementó, anulando los penosos esfuerzos de la isla para restringir la oferta mundial. Los precios entraron nuevamente en una espiral descendente y, para 1930, la restricción de la zafra perjudicaba tanto a los dueños de los ingenios azucareros como a los trabajadores y cultivadores cañeros. Puesto que se vendía menos azúcar a precios más bajos, los trabajadores perdieron trabajos, los agricultores perdieron ingresos y los propietarios de centrales azucareras perdieron ganancias. Los simultáneos recortes de las obras públicas y el descenso de la afluencia turística contribuyeron a una escasez en las opciones de trabajo.

Para reprimir a los grupos de oposición surgidos de la frustración económica y política, Machado recurrió al financiamiento de los Estados Unidos, la policía secreta y los soldados

de la Guardia Rural. Veteranos de la segunda Guerra de Independencia de 1895-1898 intentaron derrocar el gobierno en 1931, pero el ejército de Machado sofocó el movimiento. Estudiantes y profesionales de la clase media organizaron un Directorio Estudiantil Universitario (DEU) y células secretas del ABC que enfrentaron la represión de Machado con manifiestos y actos terroristas; líderes comunistas (seguidores de las directrices de la Rusia de José Stalin) y trotskistas (fieles a los principios bolcheviques y leninistas del ruso exiliado) organizaron clandestinamente a los trabajadores. Las bien organizadas fuerzas de la policía secreta y el ejército de Machado los rastrearon a todos. La "ley de fuga" se convirtió en una táctica común cuando el servicio secreto o la policía arrestaban sospechosos para ser interrogados, argumentando que habían sido abatidos por intento de fuga. Los soldados en el campo fueron igualmente brutales con todo trabajador o profesional sospechoso de organizar sindicatos o grupos de oposición: la Guardia Rural los sacaba de sus casas, los encarcelaba y en ocasiones los torturaba y linchaba.

Una crítica editorial aparecida en el diario estadunidense *The Nation* el 19 de abril de 1933 afirmaba acertadamente que

> Machado se ha mantenido en el poder en contra de la evidente voluntad del pueblo cubano con el apoyo económico de nuestras grandes corporaciones. Con una carga de deuda per cápita más pesada que en cualquier otro país de América Latina, Cuba […] ha sido incapaz de manifestarse u oponerse. Machado sin duda habría caído en 1930 de no ser por el préstamo de 50 millones de dólares recibido del Chase Bank.

Una caricatura que retrata elocuentemente la crítica acompaña al artículo: la imagen de Machado como un títere se posa sobre una "Cuba Libre" encadenada, se ve amenazado por una ametralladora que pende de los hilos de Wall Street. La corrupción y la represión en diversos grados fue común entre los presidentes cubanos desde 1902, pero ninguno antes de Machado llegó a tal grado de corrupción bajo condiciones económicas tan adversas ni ejerció un terrorismo de Estado tan feroz, asesinando periodistas, estudiantes y activistas políticos.

La política nacionalista no logró sobrevivir a la Gran Depresión, ni tampoco el bienestar capitalista que había reinado en el campo.[6] Grandes compañías estadunidenses, como la Cuban-American Sugar Company y la Cuba Company, que habían logrado salvar los años veinte sin déficit, comenzaron a perder dinero en 1930. El barón del azúcar, Manuel Rionda, escribió en 1929 al administrador de su ingenio azucarero de Tuinucú, Oliver Doty:

> Afortunadamente, las ventas del último verano arrojan una ganancia de 194 000 dólares […] pero ni siquiera esta cantidad nos permite continuar pagando dividendos, de manera que: *1)* no se realizarán otros pagos a los cultivadores de caña fuera de los que tienen derecho a recibir; *2)* debemos recortar gastos; *3)* debemos recortar personal […] Tuinucú debe cambiar sus métodos o dejar de pagar dividendos, ¿qué camino deberíamos seguir?[7]

Se trata de una cuestión retórica: para Rionda resultaba obvio que el bienestar capitalista no era sino un lujo. Entre otras cosas, sus ingenios suspendieron el pago de pensiones en 1932 y redujeron 82% los salarios de sus trabajadores más afortunados, es decir, aquellos que tenían

trabajo durante el “tiempo muerto” entre las zafras.

Los trabajadores del campo padecieron los peores recortes durante la depresión mundial. En un informe de septiembre de 1932, la Punta Alegre Sugar Company de la Provincia de Oriente observaba que “el promedio de paga diaria en 1932 es 40% menor que los promedios de 1910, y alrededor de 30% menores que durante el periodo de siete años entre 1910 y 1917”.[8] Un año después, la embajada británica en La Habana afirmó que los salarios habían descendido continuamente desde 1929, asegurando que “quizá no sea exagerado decir que, en algunos aspectos, los trabajadores agrícolas están peor hoy que en los tiempos de la esclavitud. Deben trabajar 10 u 11 horas diarias por 25 centavos, y normalmente tienen menos de cien días de trabajo por año”.[9]

Las compañías también utilizaron la estrategia sistemática de recortar la temporada de la zafra: de un promedio de casi cinco meses al año en 1925, se redujo a poco más de dos meses en 1933. Los ingenios mantuvieron este intenso sistema de zafra hasta la década de 1950, provocando subempleo, que fue la causa subyacente de las revoluciones cubanas. Muchos ingenios tuvieron que cerrar por completo: de los 163 ingenios activos en 1929, quedaron sólo 125 para 1933.[10]

En toda la isla, los ingenios recortaron trabajos, salarios, la temporada de la zafra y los presupuestos para escuelas, servicios médicos y energía. Los gastos educativos en las inmensas plantaciones de Chaparra y Delicia, propiedad de la CubanAmerican Sugar Company, descendieron de 41 690 dólares en 1929-1930 a 9 050 dólares en 1933-1934. La compañía otorgó menos descuentos para servicios médicos y suspendió el pago a los doctores y maestros de las áreas más rurales. Los trabajadores y agricultores inundaron las oficinas administrativas con cartas y peticiones suplicando por el retorno de médicos, maestros y escuelas a sus comunidades en los ingenios y molinos azucareros. Uno de ellos solicitaba tierras para “cultivar maíz, papa y frijol, etc. en el antiguo ‘Campo Sport’. Soy un viejo empleado de la oficina central del Departamento de Análisis y tengo seis hijos pequeños que alimentar”.[11] Los archivos de la compañía revelan el increíble contraste entre la vida de estos trabajadores y la de sus administradores. Mientras que un nuevo administrador solicitaba el envío de una relación de mobiliario de lujo de los Estados Unidos y que su perro fuera enviado desde su antiguo lugar de trabajo, otro era convocado a una reunión en La Habana para discutir sobre los preparativos para una regata de vela en el Club de Yates.

A lo largo de este capítulo veremos cómo estas injusticias, magnificadas por la Gran Depresión, formaron parte esencial de los motivos que desataron la Revolución de 1933 en contra de Machado. Comunidades rurales de todo el país manifestaron su claro rechazo al gobierno local por su sistema de represión, control y forma caprichosa de procurar bienestar. De la misma manera, los habitantes de las ciudades —choferes de autobuses, estudiantes, maestros, soldados y feministas, entre otros— protestaron en contra de un sistema de gobierno nepotista (en la política, los negocios y el ejército), dependiente de la intromisión de los

Estados Unidos y en el que imperaban las desigualdades de género, raciales y económicas. Los detractores rurales y urbanos precipitaron un cambio fundamental en Cuba: "nuevos elementos, representados por estudiantes, profesionales jóvenes y mujeres heroicas, por primera vez se lanzaron sin temor a una lucha política", y junto con los agricultores y trabajadores rurales, aceleraron el inicio de la política nacionalista de clases que ensombreció las redes del caudillo que había reinado desde la segunda Guerra de Independencia cubana de 1895-1898.[12] En 1940, las presiones por los derechos sociales y las reformas democráticas emanadas de influencias como el republicanismo español y el populismo mexicano, junto con la estrategia del frente popular de la Internacional Comunista, llevó a Fulgencio Batista —quien ascendió, primero, de soldado a superior del ejército y después a candidato a la presidencia— a institucionalizar las reformas de 1933 mediante una de las constituciones más progresistas del hemisferio.[13]

Azúcar, turismo y afrocubanismo

La firma de los tratados recíprocos de 1902-1903 entre la naciente república cubana y los Estados Unidos no sólo provocó que la economía de la isla dependiera casi exclusivamente de la exportación de un solo producto, el azúcar no refinada, y de un solo mercado, los Estados Unidos, sino también que los aranceles de prácticamente todos los productos de importación de ese país se mantuvieran muy bajos. La competencia de los productos estadunidenses producidos en masa inhibió el desarrollo de las industrias nacionales, como la del jabón y el calzado, en la nueva nación independiente, y las inversiones de los Estados Unidos se centraron prácticamente en la producción de azúcar y la infraestructura relacionada. Cuando la primera Guerra Mundial provocó la salida del azúcar de remolacha del mercado mundial, los inversionistas incrementaron más aún las plantaciones de caña de azúcar en regiones de bosques vírgenes. En 1925, Cuba producía casi la cuarta parte del azúcar mundial, cinco millones de toneladas, en comparación con un millón en 1904.[14]

Como ya hemos mencionado, las compañías azucareras, incluso las que eran propiedad de empresas estadunidenses, proporcionaban vivienda, escuelas, clínicas de salud y parques recreativos de acuerdo con las necesidades de los trabajadores y agricultores de la caña y sus familias, favoreciendo a los empleados de alta jerarquía y realizando ajustes de los beneficios año con año dependiendo de los niveles de rentabilidad. Mientras los precios mundiales del azúcar se mantuvieron altos, como ocurrió durante la primera Guerra Mundial, los cubanos de las ciudades y el campo se vieron beneficiados por una economía pujante. Por lo mismo, toleraron el alto grado de inversión e intervención de los Estados Unidos en los ámbitos político y económico. Sin embargo, la especulación que provocó la caída de los precios del azúcar en 1920-1921 derivó en importantes recortes salariales y de gasto social y detonó un

creciente nacionalismo y movilizaciones populares de protesta en toda la isla. Los más perjudicados con esta situación fueron los cubanos, tanto los trabajadores y agricultores de la caña como los pequeños propietarios de ingenios, no las empresas estadunidenses, que tenían acceso al crédito de los bancos norteamericanos y a grandes economías que les permitían resistir mejor los embates de la tormenta económica.

Los agricultores de la caña organizaron una exitosa campaña de protección gubernamental esgrimiendo argumentos nacionalistas de género y raza. Tras las muertes del poeta José Martí y el general mulato Antonio Maceo en la segunda Guerra por la Independencia de Cuba (1895-1898), la imagen del cubano que ellos concibieron como hombre "más que blanco, más que mulato, más que negro" fue borrada por una élite deseosa de "blanquear" a la isla.[15] Los nacionalistas cubanos tendieron a idealizar a Cuba como una mujer blanca hispana necesitada de protección; los caricaturistas personificaron al "cubano típico" como un pueblerino blanco y barbudo llamado Liborio.[16] A pesar de la insistente búsqueda para implantar el sufragio universal para varones incluyente de la población afrocubana, Cuba optó por seguir la pauta de prohibición en contra de los inmigrantes no-blancos establecida por los Estados Unidos en 1902; al término de la guerra permitió a los españoles permanecer en suelo cubano y conservar sus recursos, y entre 1900 y 1929, la isla aceptó la llegada de más de 900 000 inmigrantes españoles.[17]

Los agricultores de la caña —muchos de ellos habían sido propietarios de ingenios que no lograron consolidar ni modernizar tras la destrucción de 1895-1898, y otros eran los inmigrantes españoles más recientes— fueron personificados como padres cubanos blancos sin la posibilidad de alimentar y vestir a sus esposas e hijos a causa de los codiciosos ingenios azucareros de propiedad estadunidense que subpagaban la caña, o de los bancos norteamericanos que incautaban sus tierras. La categoría del agricultor de la caña se extendía desde los muy acaudalados terratenientes, muchas veces ausentes, que contrataban aparceros y administradores para manejar sus fincas, hasta las más humildes familias arrendatarias: los ricos tuvieron en su favor una preparación escolar que les daba acceso a la prensa y el parlamento de La Habana, donde se destacaba la imagen colectiva del padre cañero pobre necesitado de protección. Este nacionalismo guajiro (campesino hispánico) podía aprovechar la romantización que la clase media de Europa Occidental hacía de "el pueblo", bajo la forma del arte Biedermeier y los héroes campesinos de los ballets y las óperas.[18]

En marzo de 1922, el gobierno aprobó una ley para regular los contratos entre los agricultores cañeros y los propietarios de ingenios con respecto al arrendamiento de la tierra y la venta y molienda de la caña. Según el código civil, los productos cultivados en tierras arrendadas o de aparcería pertenecían oficialmente al terrateniente, pero con las nuevas leyes, la caña y sus derivados se volvían independientes de la tierra, fortaleciendo la postura de los agricultores cañeros para solicitar créditos y préstamos con la caña como garantía. Esto permitió a los agricultores cañeros (la mayor parte de ellos cubanos o inmigrantes españoles)

solicitar préstamos y crédito directamente de los bancos, en lugar de seguir dependiendo eternamente de los dueños de los ingenios, muchos de los cuales eran extranjeros (las compañías estadunidenses fueron dueñas de 13 de los 19 ingenios azucareros más grandes, que producían 48% del azúcar en 1921).[19] El aspecto más importante de la nueva ley de 1922 fue que fijaba un número limitado de años para los contratos con el fin de que los agricultores cañeros no permaneciesen atados a los ingenios por periodos indefinidos.

Una medida incluso más perentoria implementada por el gobierno en la economía anteriormente *laissez-faire* del azúcar fue la aprobación en 1923 de la Ley Tarafa o de Consolidación Ferroviaria, que prohibía la construcción de nuevos puertos y ferrocarriles privados para la transportación del azúcar: esto frenó la atolondrada expansión de las compañías azucareras que arrasaron con los bosques cubanos para construir alrededor de 45 nuevos ingenios entre 1914 y 1920.[20]

La primera Guerra Mundial y la prosperidad de la posguerra en los Estados Unidos, además de provocar los altibajos en la economía del azúcar que dieron inicio a la primera ola de protección antiimperialista para los agricultores cubanos, generaron un auge en la afluencia de turistas a Cuba. Los operadores hoteleros estadunidenses, los comerciantes minoristas y los intereses portuarios y ferrocarrileros organizaron la Asociación Comercial Cubana en 1914, mientras que el gobierno cubano creó la Comisión Nacional de Turismo en 1919. Los viajes a la isla se facilitaron con las mejoras en ferrocarriles, barcos a vapor y, después de 1921, con la transportación aérea. La Habana se jactaba de tener uno de los primeros aeropuertos internacionales, que recibía cientos de vuelos semanales provenientes de ciudades como Miami, Nueva York, Houston y Chicago. Una clase media estadunidense de la posguerra, más numerosa, con mejores ingresos y tiempo libre, viajó a Cuba para disfrutar de los pasatiempos populares prohibidos por los legisladores conservadores de los Estados Unidos, como las apuestas en carreras de caballos en la década de 1910, y del consumo de alcohol en los años veinte. Para los estadunidenses, Cuba se convirtió en un lugar en el que podían hacer todo aquello que en su país se consideraba moralmente reprobable.[21]

El creciente número de turistas de los Estados Unidos que visitó la isla —de alrededor de 33 000 en 1914 a 90 000 en 1928, y un total superior a los dos millones entre 1920 y 1940— contribuyó a forjar una imagen de "Cuba" drásticamente distinta de la mujer blanca hispana de la élite cubana, o del agricultor de caña pueblerino, blanco e hispano, retratado por los caricaturistas. En los Estados Unidos, los caricaturistas caracterizaron sistemáticamente a la nación cubana como un niño negro necesitado del consejo de la figura blanca y de elevada estatura del Tío Sam, mientras que los promotores del turismo y la música comercializaron la imagen de la sensual mujer hispana y mulata rodeada de hombres afrocubanos bailando al ritmo exótico y primitivo de los toques de tambor.[22]

Hasta los años veinte, las élites cubanas, inspiradas en el darwinismo social, además de impulsar la inmigración blanca, se apropiaron e imitaron la "alta cultura" francesa y

anglosajona, minimizando las influencias africana, indígena e ibérica. Ante la invasión de productos culturales de los Estados Unidos llevados a la isla por meseros, cocineros, propietarios de hoteles y turistas estadunidenses, un movimiento científico y artístico cubano conocido como afrocubanismo buscó erigir una cultura cubana auténtica.[23] Como otros estudiosos han señalado, la "exaltación de los símbolos culturales autóctonos no puede separarse de la relación antagónica entre los Estados Unidos y Cuba en su primera república".[24] Igual que las élites cubanas habían aceptado al danzón, a pesar de sus elementos africanos, como reacción ante la ocupación estadunidense de 1898-1902, la corriente central de la cultura nacional abrazó al son cubano, la poesía mulata y la pintura y escultura de vanguardia que incorporaban "motivos negros" a la cultura cubana como una forma compleja de reacción ante las presiones del turismo estadunidense y la comercialización de la radio y los gramófonos. Robin Moore hace hincapié en cómo los blancos de la clase media se apropiaron de la música y la danza afroamericanas a través de un proceso de "estilización" que las "purificaba" para volverlas "respetables" y las distanciaba de las interpretaciones afrocubanas auténticas.[25]

Vera Kutzinski interpreta la creación poética y literaria del mestizaje como "el sitio en el que los hombres con ancestros europeos y africanos reconcilian retóricamente sus diferencias (…) y crean la ficción política paternalista de una nación multicultural", a la vez que refuerzan las jerarquías raciales.[26] Alejandro de la Fuente afirma acertadamente que a pesar de estas ambigüedades, el afrocubanismo "fue poco menos que una revolución cultural e ideológica": el discurso dominante abrazó a la mulata y a la mestiza como elementos esenciales de la identidad cubana, y muchos artistas e intelectuales afrocubanos políticamente progresistas recurrieron a ese discurso para señalar las desigualdades raciales, sociales y de género.[27]

Aunque Machado no suprimió la legislación de 1922 del régimen de Zayas que prohibía las representaciones de danzas y música con influencia africana, el presidente invitó abiertamente a músicos soneros a la celebración de su cumpleaños y legalizó la música de son, que acabó por ser "el arma [cubana] en contra del jazz [estadunidense]".[28] El régimen también invirtió más recursos en la educación, con lo que logró reducir el abismo educativo entre blancos y negros, y contribuyó a elevar el nivel general de la alfabetización en la isla. Mientras que en 1899 sólo 30% de la población negra sabía leer y escribir (y 39.7% de la población blanca), para 1931 el nivel de alfabetización en la población negra ascendía a 71.5%, cifra muy cercana a 74.3 de la población blanca.[29]

Además de este nacionalismo "cultural", el régimen de Machado coqueteó con el nacionalismo económico. La reforma arancelaria de Machado en 1927 estimuló la sustitución de importaciones y la diversificación, pero debido al tratado de 1902 con los Estados Unidos, afectó principalmente los bienes de consumo ligero de origen europeo. La producción de huevo, pollo, carne, mantequilla, queso y leche condensada se incrementó, y compañías como Ford, Coca-Cola y Armour establecieron cada vez más plantas subsidiarias en La Habana; no

obstante, la dependencia del azúcar persistió.[30] El régimen intentó elevar el precio del azúcar limitando el suministro: la Ley Verdeja de 1926 restringió la cosecha de 1927 a 4 500 000 toneladas y asignó cuotas a los ingenios y agricultores cañeros, evidentemente para proteger a los propietarios cubanos de pequeños y medianos ingenios y plantaciones. El precio del azúcar aumentó durante algunos meses, pero decayó nuevamente en 1928 a raíz del retorno del azúcar de remolacha europea a los niveles anteriores a la primera Guerra Mundial y de la drástica expansión del suministro proveniente de Java y la Unión Soviética.[31]

Al menos en sus primeros años, el régimen de Machado buscó contener la movilización de obreros y agricultores mediante el nacionalismo cultural, la diversificación económica y las cuotas del azúcar. El presidente alternó entre represión y cooptación: un día enviaba a la Guardia Rural para poner fin a una huelga, mientras que otro día enviaba a un mediador para convencer a los obreros de volver al trabajo a cambio de unas reformas menores. Machado sin duda desvió dinero para sí mismo y sus compinches, pero también canalizó impuestos de exportación, sobornos de capitalistas en busca de contratos y préstamos extraordinariamente grandes de los bancos de Wall Street hacia programas de educación y obras públicas, como el sistema nacional de caminos y un nuevo edificio del congreso en La Habana. Estos esfuerzos demuestran su intención de establecer un papel estatal más prominente en la economía y la política. La importancia simbólica arquitectónica de un nuevo edificio del Congreso es más que explícita. Puesto que prácticamente todos los ferrocarriles eran de propiedad extranjera, los caminos daban a los cubanos un medio para transportar el azúcar sin tener que sacrificar ganancias en favor de las compañías extranjeras.

Machado extendió su periodo presidencial en 1928 en aras de la estabilidad política y económica. Intentó mantener su legitimidad mediante el apoyo a los “negros” como categoría política a través de la música, la educación y las Sociedades de Color, y prometiendo a los grupos de mujeres el sufragio femenino si apoyaban su reelección.[32] El problema fue que no existió una elección real y su prolongación en el cargo privó a los cubanos de un medio de protesta política. Crecieron los movimientos clandestinos urbanos y rurales de oposición, pero el régimen de Machado respondió con violencia.

Depresión y dictadura en el campo y la ciudad

Las adversidades de la Gran Depresión influyeron para que representantes de pequeños agricultores y trabajadores del campo y las fábricas de 32 ingenios a lo largo de la isla se reunieran en Santa Clara en diciembre de 1932 para conformar el Sindicato Nacional de Obreros de la Industria Azucarera (SNOIA), a pesar de la represión militar del régimen de Machado. Para la segunda reunión del SNOIA, celebrada en el mes de mayo en Camagüey, el número de ingenios representados había crecido a 102. Los manifiestos obreros hicieron

hincapié en la necesidad de la solidaridad en todos los sectores: los trabajadores ferrocarrileros podían rehusarse a conducir los trenes que transportaban soldados para reprimir una huelga; los trabajadores portuarios podían negarse a mover cargamentos de azúcar hecha por esquiroles; los soldados podían rehusarse a reprimir a los obreros; los agricultores podían realizar bloqueos a la producción de una compañía; los comerciantes, agricultores y otros vecinos de los ingenios podían proporcionar medios de subsistencia para los obreros en huelga. También alentaban a los obreros industriales de los ingenios azucareros y a los trabajadores agrícolas a formar comités conjuntos para coordinar las huelgas en los ingenios y el campo, y hacían un llamado especial a las mujeres, solicitando que formasen "comités de ayuda" para resolver las necesidades básicas, y "comités antidesalojo" para proteger a los huelguistas y sus familias.[33]

En esos años, sólo un grupo selecto estuvo dispuesto a afiliarse a un sindicato porque, según un obrero, "significaba perder el trabajo, y la mayoría de los obreros tenían familias y no contaban con otros medios para vivir".[34] Con la ayuda de la Guardia Rural o guardias privados, las compañías expulsaban de sus casas a quienes participaran en la organización de un sindicato, junto con sus familias. Así, el beneficio de vivienda sirvió como un eficaz medio de control. Los informes de actividades ilícitas en los ingenios de la Cuban-American revelan que los obreros optaron por la seguridad del sabotaje anónimo durante 1932 y 1933. Los obreros robaron y destruyeron cables telefónicos, madera, puentes y otros materiales; colocaron obstáculos en las vías férreas de las compañías, dejaron abiertas las puertas de los trenes para que las cañas cayesen y, entre otras cosas, incendiaron los cuarteles de la guardia privada, los puentes de las vías férreas y un rastro. En marzo de 1933, intentaron asesinar al gerente general de la compañía. La maniobra más común y efectista fue incendiar los cañaverales. La prensa estadunidense informó en marzo de 1933 que 200 000 000 de libras de caña habían sido incendiadas tan sólo en la provincia de Oriente.[35] Los cubanos idearon ingeniosas maneras de iniciar los incendios clandestinamente, por ejemplo, infiltrándose en los campos por la noche para colocar bolas de fósforo cubiertas con cera; al día siguiente, el sol derretía la cera e incendiaba el fósforo sin que hubiese rastro alguno del autor del atentado. Otros dos métodos fueron atar un hierro candente a una serpiente y dejarla escapar a través del cañaveral, o embadurnar con petróleo a una rata y soltarla entre las cañas con el pelo en llamas.[36]

Pero el sabotaje no llenaba los estómagos hambrientos: el embajador español en La Habana describió las "caravanas de hambre" que deambulaban por la capital en busca de trabajo, comida y un lugar para instalarse con sus familias.[37] No obstante, los empresarios urbanos también recortaron trabajos y salarios. Puesto que el azúcar era la base de la economía cubana, la venta de la mayor parte de los productos de consumo y los servicios dependía de las ganancias y los salarios derivados del azúcar. De alrededor de 26 millones de dólares en 1928-1929, el ingreso por el turismo se desplomó a cinco millones en 1933-

1934.[38] De tal manera que la Gran Depresión devastó por completo a la economía cubana. El ingreso nacional estimado cayó de 708 millones de pesos en 1925 a 294 millones en 1933.[39] En las ciudades y en el campo, los cubanos respondieron con huelgas y marchas en contra del desempleo.

Los obreros de todo el país hicieron una huelga general el 5 de agosto de 1933 en apoyo de los conductores de autobuses de La Habana, que se negaban a pagar los impuestos al transporte decretados por Machado. Las masas paralizaron la economía cubana y merecen el crédito por la caída de Machado. Pero antes de que la huelga lograse su meta última de destituir a Machado y a los miembros del Congreso y el ejército, el 12 de agosto varios oficiales del ejército lo escoltaron al aeropuerto y nombraron como sucesor a otro caudillo, Carlos Manuel De Céspedes. Los oficiales actuaron por consejo de un mediador de los Estados Unidos, el subsecretario de Estado Sumner Welles, y su designación de un nuevo presidente dejó intacto al Congreso, junto con gran parte del ejército. A pesar de la masiva participación del pueblo en la huelga, los acontecimientos de principios de agosto se asemejaron más a un golpe palaciego que a un cambio revolucionario para Cuba. Esto ocurrió principalmente por la intromisión diplomática de los Estados Unidos.

Los obreros y la gente de clase media, a pesar de la situación, no perdieron la oportunidad para invadir las calles y celebrar la partida de Machado. Las descripciones contemporáneas de la prensa estadunidense sirven a los historiadores para hacer un análisis de la economía moral de la Gran Depresión en La Habana. La muchedumbre no tardó en arremeter en contra de los miembros más destacados de la élite que habían apoyado a la dictadura, así como de las fuerzas represivas a su servicio, la policía secreta. Empobrecido y hambriento, el pueblo cubano aprovechó la celebración para saquear comida y bienes de las residencias de la élite asociada con la dictadura. Finalmente, obreros y estudiantes renovaron las huelgas y protestas cuando descubrieron que no había habido un cambio significativo en el gobierno.

La turba, conformada principalmente por cubanos de clase media, arremetió en contra de los símbolos de la dictadura. Los estudiantes destruyeron los letreros de Avenida del Presidente Machado y los remplazaron con otros que ostentaban el nombre de algún estudiante que había sido víctima del machadato. Otros robaron máquinas de escribir y destrozaron las oficinas centrales del periódico que divulgaba la propaganda y las calumnias del régimen, *El Heraldo de Cuba*. La peluquería en la que Machado se cortaba el cabello fue asaltada porque su dueño también administraba una cadena de teatros de *burlesque* del propio Machado. La turba “no estaba interesada principalmente en el saqueo. Si veían a alguien cargando un mueble intacto, gritaban, ‘no, no, está sucio, sucio’, y lo destrozaban con un hacha”. Por medio de escaleras la gente logró entrar por la fuerza al palacio de gobierno, donde destrozó muebles y árboles y plantas del jardín. Alguien colgó un cartel de “Se alquila” en la entrada principal. En las residencias de los seguidores del régimen de Machado, la turba destruyó muebles y porcelanas, arrojaron naranjas y mangos a las pinturas, tiraron los libros por las ventanas,

rompieron las puertas y lanzaron los escombros a la calle. Estas acciones revelan que al menos los habitantes de la clase media en La Habana deseaban denunciar y poner fin a las mentiras, los lujos excesivos y la corrupción de los ricos.[40]

En medio de estas manifestaciones populares, algunos claramente buscaban venganza, mientras que otros necesitaban desesperadamente sustento. Hubo muchas "represalias de la turba" en contra de los líderes de las "porras" o escuadrones de la muerte de Machado. Un periodista estadunidense escribió: "El alivio sentido por un pueblo que sufrió durante mucho tiempo se expresó con sangre (…) los porristas se lo merecieron, pues habían asesinado impunemente".[41] Un artículo del *Time* del 28 de agosto de 1933 describe cómo una multitud enardecida colocó un cigarro en la boca del cadáver del jefe de la policía, Antonio Ainciart, le puso una soga alrededor del cuello y lo colgó de un poste de luz; después, encendieron una pira debajo del cadáver y danzaron alrededor del cuerpo en llamas. Cuando una ambulancia llegó a recoger el cadáver, la multitud gritaba "¡arrojen a Ainciart al mar! No merece sepultura junto a los seres humanos en el cementerio". Esto es una muestra de las aclamaciones que el pueblo gritaba frente a las residencias de los machadistas: evidentemente, los cubanos reprobaban la violencia excesiva, el poder y el lujo que gozaron unos cuantos "sucios" en el contexto de la depresión y la dictadura política.

Hudson Strode, periodista del progresista diario estadunidense *New Republic*, señaló que mientras que los cubanos de clase media ondeaban hojas de palma robadas del jardín presidencial frente a la embajada de los Estados Unidos, agradeciendo a Sumner Welles por ayudarlos a librar a la isla de Machado, otro grupo "menos exaltado" saqueaba comida del palacio y las residencias machadistas. Robaron un cerdo y lo destazaron en piezas pequeñas que distribuyeron entre la gente hambrienta que pasaba, "quienes corrían por las calles con los trozos de carne ensangrentada en busca de (…) carbón para cocinarlos". Muchos pobres sin duda tenían interés genuino en apropiarse de algunos de los muebles y enseres que los cubanos de clase media se daban el lujo de destruir bajo la afirmación "no, está sucio". Al menos en un caso, una mujer afrocubana pobre encontró un argumento para justificar ante los manifestantes de la clase media algo que llevaba consigo: mientras ondeaba en el aire las sábanas de Machado que había tomado del palacio presidencial gritaba que "las merecía porque pagaba impuestos".[42]

¿Un *New Deal* para Cuba?

El presidente De Céspedes no procuró un alivio inmediato a la pobreza extrema, ni tampoco reformó significativamente las bases políticas y militares de la dictadura de Machado. Como sugerían algunos de los que ondeaban hojas de palma, muchos cubanos sabían que De Céspedes había llegado al poder principalmente por la mediación de Welles. Según un dicho

popular, De Céspedes llevaba un letrero que decía “Hecho en los Estados Unidos”. Por lo tanto, las clases populares continuaron las huelgas y protestas durante el mes de agosto para exigir justicia rápida, venganza y una distribución más equitativa de los bienes. Aprovechando esta ola de protestas populares, el sargento Fulgencio Batista, junto con otros soldados y un grupo radical de estudiantes, profesores y periodistas dirigió el golpe de Estado sin derramamiento de sangre en contra de los oficiales ex machadistas y del presidente De Céspedes el 5 de septiembre de 1933. Este grupo heterogéneo constituyó la primera coalición nacionalista-popular de Cuba, no reconocida por el poder de los Estados Unidos. El profesor Ramón Grau San Martín asumió la presidencia provisional mientras que el sargento Batista iniciaba su meteórico ascenso.

Grau y sus conspiradores —el Directorio Estudiantil Universitario y los sargentos— transmitieron un mensaje en inglés a los estadunidenses en el *New York Times* el 8 de octubre de 1933, en el que explicaban que deseaban para Cuba un *New Deal* como el que Roosevelt había implementado en los Estados Unidos.

> No podemos tolerar más a los gobiernos títeres nacidos de los monopolios y las concesiones —declaró Grau—, porque hacen de Cuba una simple tienda de golosinas para los pocos privilegiados […] Nuestro éxito significará una nueva Cuba nacida de nuevos ideales […] Nos llaman radicales porque seguimos de cerca los caminos marcados en su propia Ley de Recuperación Nacional, nos llaman comunistas porque nos esforzamos en devolver al pueblo cubano su poder adquisitivo.

El discurso del Directorio Estudiantil fue más amenazante, pues proclamaba la meta revolucionaria de “conquistar la libertad económica y política”.[43]

Si bien el desarrollo de los acontecimientos cubanos perturbó a los políticos estadunidenses, éstos no deseaban poner en riesgo su nueva política del Buen Vecino. Tras ayudar a Cuba a liberarse de España en 1898, los políticos estadunidenses habían insistido en la inclusión de la Enmienda Platt en la Constitución cubana para permitir la intervención de los Estados Unidos en caso de que una lucha política a gran escala amenazara el orden de la isla. Esta justificación había permitido a los marines ocupar la isla durante o después de las controversiales elecciones de 1906, 1912, 1917 y 1921, pero en 1933 la administración de Roosevelt reunió a los embajadores de América Latina en Washington para decirles que esta vez no habría “intervención”. Irónicamente, Roosevelt anunció que los Estados Unidos no reconocerían el régimen de Grau hasta que demostrara su popularidad y capacidad para mantener el orden, y apostó 29 barcos alrededor de la isla. Los Estados Unidos lanzaron así un reto autoritario a los cubanos que deseaban un cambio nacionalista significativo: el desconocimiento del régimen minó la legitimidad de Grau, mientras que la presencia naval alentó a los grupos de oposición a considerar la posible intervención de los Estados Unidos.

El régimen de Grau avanzó pese a todo e implementó una serie de reformas que abordaron directamente las demandas populares de las masas en movilización. Grau revocó la Enmienda Platt, al menos por la parte cubana, pues los Estados Unidos no reconocieron su iniciativa.

Otorgó a las mujeres el sufragio universal para las siguientes elecciones, que se habrían de llevar a cabo en 1940. Bajó las tasas de interés y el costo de los servicios públicos, una medida nacionalista, ya que la mayor parte de los servicios públicos y los bancos estaban en manos de capitalistas estadunidenses. Otorgó autonomía a las universidades que la dictadura había cerrado.[44] El gobierno también favoreció la creación de la Asociación Nacional de Colonos de Cuba (agricultores cañeros) y un programa de reforma agraria que garantizaba a los agricultores cañeros el derecho a ocupar de manera permanente las tierras que cultivaban.[45] Esta medida también fue significativa porque la mayoría de los agricultores eran cubanos, y muchos de los propietarios de los ingenios azucareros a quienes rentaban las tierras fueron estadunidenses. Los cubanos no obtuvieron la propiedad completa de la tierra, pero al menos tuvieron mayor seguridad, pues los terratenientes no podían desalojarlos.

Para los obreros, el régimen estableció un Ministerio del Trabajo para asistirlos en cuestiones de arbitraje de huelgas, compensaciones, salario mínimo, jornada laboral de ocho horas y semana laboral de 48 horas. Las reformas significaron mucho para los obreros. Por primera vez el Estado se comprometía a intervenir sin represión entre los capitalistas y el trabajo. La jornada laboral de ocho horas puso fin al brutal régimen de 12 horas en el que hombres y mujeres tenían que trabajar seis horas, perder una hora de camino hasta su casa para comer, y dormir cuatro horas, para después regresar al trabajo antes de que la campana señalase el comienzo de otro turno de seis horas.

El régimen de Grau también aprobó un decreto de nacionalización del trabajo por medio del cual quedaba establecido que 50% de la mano de obra del país debía ser de nacionalidad cubana, y asignó a los cubanos 50% de los salarios totales de la industria, el comercio y la agricultura. Este decreto inmensamente popular prometía poner fin a la práctica que permitía a los miembros de las familias extranjeras o a los profesionales extranjeros obtener puestos que podían ser ocupados por cubanos, y dejaba al pueblo de Cuba los trabajos más difíciles y peor pagados. Un número considerable de afrocubanos —quienes fueron víctimas de la peor discriminación— se manifestó en apoyo al decreto y para exigir que la proporción se elevase de 50 a 80%.

Una legislación conjunta establecía que sólo los cubanos tenían derecho a la dirigencia sindical en la isla, no los ciudadanos extranjeros. La clase obrera cubana participó con entusiasmo en el esfuerzo para librar a la isla de los extranjeros, a quienes veían como competencia para los escasos trabajos. Esto confundió a los sindicalistas comunistas y trotskistas. Muchos de ellos eran de hecho ciudadanos españoles que deseaban forjar una solidaridad de clases sin importar las barreras nacionales y étnicas. Cuando estos sindicatos publicaron manifiestos y artículos de prensa en los que condenaban a las leyes como intentos fascistas para dividir a las clases trabajadoras, el pueblo tomó por asalto los periódicos y atacó verbalmente las sedes sindicales.[46]

A pesar de los esfuerzos del régimen para satisfacer las aspiraciones populares, fuerzas en

ambos extremos del espectro político amenazaban su existencia. Desde la izquierda, los sindicatos antes mencionados, el comunista Congreso Nacional de Obreros de Cuba (CNOC) y la trotskista Federación de Obreros de La Habana (FOH) acusaron al régimen de clasemediero, nacionalista y fascista bajo la línea de la Alemania de Adolf Hitler; esta interpretación sin duda tuvo algunos elementos de verdad. El joven y radical ministro del Interior de Grau, Antonio Guiteras, introdujo varias reformas sociales concretas, que muchos miembros de la coalición de Grau no apoyaron. Conforme el gobierno se aproximó a su centésimo día en el poder, el entonces jefe del ejército, Fulgencio Batista, sus aliados de los Estados Unidos y los políticos tradicionales cubanos retaron al régimen desde la derecha. Batista, quien había consolidado el control de las fuerzas armadas, logró que los soldados dejasen de fraternizar con los obreros y los estudiantes.[47] La negación del reconocimiento oficial del régimen por el Departamento de Estado de los Estados Unidos desestabilizó su política económica; la embajada de los Estados Unidos alentó en secreto a Batista para que encontrase una alternativa política más tradicional para remplazar a Grau.

INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL REVOLUCIONARIA EN EL CAMPO

A pesar de sus divisiones internas, la Revolución de 1933 ofreció una apertura significativa para la movilización obrera. Al menos durante un breve periodo, las fuerzas armadas y los líderes de Estado prometieron lealtad a las clases populares y la nación cubana. Los obreros no tardaron en responder. Los trabajadores del azúcar de toda la isla ya habían participado en las huelgas de junio, julio y agosto que forzaron la salida de Machado; algunos de ellos eran miembros del sindicato comunista de trabajadores del azúcar antes mencionado, el SNOIA. La partida de Machado el 12 de agosto provocó levantamientos en las ciudades menores y en los pueblos de los ingenios en toda la isla, como los que tuvieron lugar en La Habana, con una mezcla de júbilo, saqueo y destrucción de las oficinas de los periódicos y las residencias de los machadistas prominentes. Sin embargo, en la mayoría de los ingenios no estallaron movilizaciones revolucionarias en gran escala hasta que Batista dirigió la rebelión de los sargentos en el mes de septiembre. Sólo entonces los obreros aprovecharon el colapso del poder de las fuerzas represivas: la Guardia Rural.

Tras el exilio de Machado, los obreros forzaron la salida de muchos de los administradores de los ingenios, mientras que diferentes grupos políticos se disputaban la organización y dirección de las movilizaciones de los trabajadores del azúcar, entre ellos los estudiantes “guiteristas” y los nuevos funcionarios del Ministerio del Trabajo que apoyaban el ala izquierda del régimen de Grau San Martín, la FOH “bolchevique-leninista” (trotskista) y la CNOC comunista. A pesar de la guerra de manifiestos entre esos partidos, los obreros de la mayoría de los ingenios parecían mantener la unidad necesaria para ganar sus demandas.

En términos generales, ante la caída de Machado, los trabajadores del azúcar reaccionaron igual que los pobres y la clase obrera de las ciudades, con ironía, humor y dignidad en contra de los detentadores del poder local. Los obreros del ingenio de Tacajó idearon un acto de venganza de lo más creativo: en la esquina de la calle en donde se encontraba la residencia del administrador instalaron un altavoz en el que sonaba una campana, para que sintiera lo que era ser obligado a dormir poco.[48] Inspirados en ejemplos de la Revolución rusa de 1917, obreros del campo y las fábricas, junto con algunos pequeños agricultores de la caña, organizaron *soviets* para ocupar, proteger y administrar varios ingenios de septiembre de 1933 a enero de 1934. Estos *soviets* constituyeron experimentos elaborados de la vida política, jurídica y económica. Los comités de huelga tomaron en sus manos las reservas de petróleo y azúcar refinada y las vendieron para pagar salarios a los obreros, comprar comida para las familias que habitaban en los ingenios y aprovisionarse de rifles para armar grupos de autodefensa. En el caso del ingenio de Mabay, los comités distribuyeron herramientas, maquinaria y más de 250 acres de tierra entre campesinos y obreros. Los obreros llevaron las operaciones del ingenio sin la supervisión de un administrador, abrieron escuelas y establecieron un tribunal de justicia.[49] Un aspecto notable de esta ocupación de los ingenios azucareros es que una de las metas principales de los comités de huelga y de los miembros de la "guardia roja" obrera y campesina fue proteger a los ingenios de toda forma de destrucción o sabotaje. Al parecer deseaban probar que no eran salvajes, sino ciudadanos cubanos merecedores de una mayor participación en las ganancias del azúcar. Durante los meses de otoño de septiembre a diciembre prepararon los cañaverales e ingenios para la zafra de enero.

Quienes no necesitaban trabajo en los ingenios marcharon con las brigadas de un ingenio a otro para dar apoyo a sus compañeros y ganar demandas para otros ingenios. Por ejemplo, más de 3 000 obreros y campesinos armados con palos y machetes marcharon de los ingenios de Tacajó y Baguanos a Santa Lucía para liberar a los obreros de la tiranía de la compañía y de la Guardia Rural en el enclave oriental de la isla. Un guardia rural se reunió con un grupo de marchistas para pedirles que formaran un comité de 15 personas para hablar con los administradores del ingenio. El líder le dijo que "debía consultarlo con los otros" para ver si estaban de acuerdo. Cuando el sargento trepó a un árbol y vio gente hasta donde la mirada alcanzaba, se hizo a un lado y les permitió romper las cadenas y tumbar las puertas que simbolizaban el control absoluto de la compañía sobre sus residentes. Los obreros de los tres ingenios marcharon a través del pueblo ondeando la bandera cubana y la bandera roja; conforme marchaban iban cantando el himno nacional cubano y la Internacional comunista.[50]

Igual que los obreros de Santa Lucía, Tacajó y Baguanos, los obreros de los ingenios propiedad de Manuel Rionda rompieron el sistema de control de la compañía. Como respuesta a la "ola de comunismo", el sobrino de Rionda, Higinio Fanjul sugirió repartir dinero, pues la causa fundamental de los problemas era el hambre, y "nadie merece más la culpa que [el presidente Herbert] Hoover y Smoot [la ley arancelaria SmootHawley]".[51] En un admirable

gesto, considerando su extrema pobreza y hambre, los obreros rechazaron los 1 000 pesos semanales ofrecidos por Rionda y pidieron que se repartieran entre "los fieles viejos empleados que se encuentran sin trabajo sin tener la culpa de ello".[52] El comité de huelga ordenó que la matrona filantrópica de Tuinucú, Isidora Rionda, de 87 años de edad, y el sistema de dependencia y caridad que representaba abandonaran el ingenio. Ante su negativa a partir, les quitaron a todos sus sirvientes.[53] "En todos los ingenios", escribió Higinio Fanjul, "todos los cerdos, gallinas y provisiones se están acabando".[54] La mayoría de los ingenios contaban con comités de huelga que establecieron comedores para distribuir equitativamente esos alimentos a todos los residentes que permanecían en los ingenios ocupados. El retiro de los sirvientes y la redistribución de alimentos y bienes, aunque fueron acciones de breve duración, constituyeron un verdadero esfuerzo revolucionario para crear una sociedad más equitativa.[55]

Con el fin de evitar daños, Rionda asumió que las compañías bien podrían conceder todas las demandas que sus sobrinos consideraran razonables. En lo que a él concernía, ninguno de los contratos valía el papel en el que estaban escritos "mientras que Cuba no tenga un gobierno fuerte".[56] Dos días más tarde, recibió una carta de su sobrino José informándole sobre su reunión con los representantes de la huelga de Tuinucú en las nuevas oficinas del Ministerio del Trabajo de La Habana. La poderosa carta muestra el cambio radical que la Revolución de 1933 trajo a la isla:

> Fueron mucho más duros de lo que pensé y uno podría decir que el sentimiento del viejo Tuinucú se ha perdido. Cuba ha cambiado. Los obreros están perfectamente organizados y unidos en todas partes y denotan tendencias comunistas. El gobierno es débil y las garantías al capital y la propiedad que ofrece son mínimas. Se ha puesto de lado de los obreros para tener su apoyo y es por eso que los obreros se sienten tan fuertes, gobiernan e imponen condiciones […] éstos son los hijos de quienes trabajaron con nosotros en armonía y que tantos favores recibieron de Tuinucú.[57]

Los favores no bastaron; los obreros querían contratos y una legislación gubernamental que estableciera derechos sociales y económicos específicos, y la Revolución de 1933 les ofreció la oportunidad para ganarlos. En una reunión celebrada en Holguín, el ministro del Interior, Guiteras, dijo al obrero de Tuinucú Agustín Valdivia "apriete a esta gente", refiriéndose a la familia Rionda y a sus intereses en la isla, que en ese tiempo eran muy grandes.[58] Para evitar que los obreros de todos sus ingenios se unieran en su contra, Manuel Rionda aconsejó a sus sobrinos programar reuniones en La Habana con los obreros de cada ingenio en diferentes días. Aunque fueron separados, los obreros de todos los ingenios lograron ganar la mayoría de sus demandas, por ejemplo salarios más altos que el salario mínimo establecido más adelante por el presidente Carlos Mendieta en enero de 1934. De tal manera que Tuinucú tenía que pagar 1.20 pesos por día, cuando el salario establecido para las ciudades y los ingenios fue de 1.00.[59]

A pesar de las constantes alusiones al comunismo por parte de los dueños de los ingenios,

los manifiestos obreros que se encuentran en los archivos provinciales en la ciudad oriental de Santiago muestran la lucha por el liderazgo entre varias facciones políticas. La CNOC, afiliada al sindicato comunista SNOIA, dirigió el sindicato de Delicias y del puerto Juan Claro, mientras que la FOH, afiliada al Partido Bolchevique Leninista trotskista, dirigió a los obreros de Chaparra y Puerto Padre. El Partido Comunista de Cuba (PCC) mantuvo una postura sumamente sectaria, acusando de "burgués" al régimen Grau-Guiteras-Batista y a los trotskistas de divisionistas y oportunistas. Por otra parte, los manifiestos trotskistas de la FOH hicieron más referencia a los acontecimientos de La Habana y Europa que a los de Puerto Padre; criticaban al Partido Comunista de Cuba y a la CNOC por sus ataques en contra de la ley de 50% a través de manifiestos en lugar de huelgas. A pesar de sus diferencias, las batallas de manifiestos entre la CNOC y la FOH indican en concreto que las dos organizaciones rechazaron categóricamente las reformas populistas del régimen de Grau.

En el interregno de Grau, los obreros tuvieron que decidir entre negociar con la compañía o con el gobierno. La organización guiterista, de quien los oficiales de la marina al parecer pensaban que dirigía a los obreros de Puerto Padre, fue la única que apoyó al régimen populista y propugnó por aplicar su nueva legislación. El radical ministro del Interior Guiteras se esforzó en establecer más vínculos con los obreros para contrarrestar el poder creciente de Batista, pero la CNOC rechazó sus solicitudes de apoyo. La FOH matizó sus ataques en contra del régimen cuando los líderes españoles fueron expulsados y remplazados con cubanos, en acatamiento de la nueva ley laboral de Grau.

Es comprensible que comunistas y trotskistas no reconocieran la sinceridad de Guiteras: todas las acciones que promovía en favor de los obreros podían ser revertidas por Batista. Por ejemplo, si Guiteras liberaba de prisión a los obreros, Batista los encarcelaba de nuevo. A fines de 1933, mientras que el Ministerio del Trabajo recientemente creado por Guiteras en favor de los obreros mediaba en las huelgas y ayudaba a los obreros milicianos en la defensa de sus gobiernos, Batista y sus soldados recorrían el país rompiendo las huelgas en las plantaciones de propiedad estadunidense para ganar el apoyo del embajador de los Estados Unidos, Sumner Welles.[60]

A pesar del decreto del salario mínimo, la enorme CubanAmerican Sugar Company determinó que no otorgaría reformas y seguiría pagando en 1933-1934 los mismos salarios que había pagado en 1932-1933. El 19 de diciembre, la compañía declaró que no estaba en posibilidades de llevar a cabo la temporada de la zafra de 1933-1934. Cerró el hospital, la panadería, la carnicería y otros expendios de comida. Solicitó a los jefes de departamentos abandonar sus puestos y cerró los servicios de telégrafo, teléfono y otros servicios públicos. Los obreros respondieron a través de un manifiesto en el que llamaban a la solidaridad con el bloqueo a los obreros de Chaparra y Delicias, y al boicot en contra de la Compañía de Luz y Fuerza de Chaparra, que había seguido operando durante la huelga. El mismo manifiesto hacía un llamado explícito al régimen de Grau para cumplir con su retórica: "Será nuestro verdadero

defensor cuando no permita que los obreros seamos pisoteados, como ahora".[61]

El ministro del Interior Guiteras aceptó el reto. El 22 de diciembre de 1933 ordenó a las autoridades principales y locales de Puerto Padre tomar posesión de la planta de electricidad, el hospital y los departamentos comerciales de Chaparra y Delicias. Esto incluía las tiendas generales, el matadero, la fábrica de hielo, carnicerías y panaderías. Un diplomático de los Estados Unidos transmitió el mensaje del Departamento de Agricultura de Cuba que justificaba las acciones "por la necesidad popular, *ya que eran las únicas fábricas existentes en las tierras de esta compañía, de las que entre 40000 y 60000 personas podían obtener servicios y productos para satisfacer sus necesidades*".[62] Dos días antes había enviado una carta en la que informaba que "el doctor Carlos Hevia, secretario de Agricultura del gobierno de facto […] dijo al respecto: 'Si no ceden y nosotros no hacemos nada al respecto, fácilmente comprenderá que los 100 000 habitantes del distrito tomarán las cosas en sus propias manos' ". En informe confidencial de seguimiento de fecha 11 de enero de 1934 se afirmaba acertadamente: "Las recientes dificultades en Chaparra y Delicias […] obedecen al hecho de que los salarios promedio de los campesinos de la compañía son de alrededor de 15 centavos diarios".[63]

Los informes británicos ofrecen un panorama más amplio de las relaciones entre las compañías y el Estado durante el régimen de Grau y ayudan a identificar claramente la intervención de Guiteras de diciembre. En un informe de fecha 1º de noviembre de 1933 se afirma que muchas compañías habían dejado de pagar impuestos, presuponiendo que, sin el reconocimiento de los Estados Unidos, el régimen caería pronto. Esas compañías se negaron a aceptar los decretos de Grau en favor de los obreros y esperaron expectantes una contrarrevolución. La astuta conclusión del informe fue que "la cosecha del azúcar es la prueba suprema de la administración".[64] Un memorándum de diciembre indica que la administración podía triunfar. Las acciones de Guiteras en Chaparra, señala,

> han provocado que los propietarios de otros ingenios azucareros cambien su actitud hacia el gobierno […] algunos de ellos estaban por emitir un ultimátum señalando que se verían obligados a cerrar a menos que la Ley de Seguridad de los obreros fuese enmendada de manera satisfactoria.[65]

La intervención de Guiteras en Chaparra fue un fuerte mensaje para los propietarios de los ingenios: si no adoptan las reformas, pierden su compañía.

Contención e institucionalización de la Revolución: 1934-1940

Un informe emitido a principios de enero por el cónsul estadunidense en las Antillas demuestra que éste no había logrado entender lo que el autor británico del memorándum de octubre había querido decir, principalmente, que la lucha social y política en Cuba tendía a

centrarse en la zafra. El informe dice literalmente que

> las diferentes huelgas que han estallado en los ingenios azucareros de todo el país han dado como resultado un alza en los salarios, la cual no se ha aplicado ya que la zafra de 1934 todavía no ha comenzado. En este momento se cree que la mayoría de los ingenios no operará en este año, no sólo debido a las demandas salariales exigidas por los sindicatos, sino también por el caos político y económico que hoy existe en Cuba.[66]

Cuba dependía demasiado del azúcar como para permitir que esta profecía se hiciese realidad. Batista y sus soldados aguardaban y estaban deseosos de observar e incluso de unirse a los trabajadores del azúcar en septiembre y octubre, pero optaron por la represión en noviembre y diciembre, conforme se acercaba el tiempo de la zafra.

Batista cambió su apoyo de Grau San Martín a Carlos Mendieta el 15 de enero como una manera de alentar a los ingenios a iniciar la zafra, de evitar una invasión de los Estados Unidos y de responder a los ruegos de paz y orden en la isla por parte de los capitalistas cubanos y estadunidenses. Casi de inmediato, los Estados Unidos otorgaron su reconocimiento al nuevo presidente conservador (y a Batista) y reconocieron oficialmente la anulación de la Enmienda Platt. La clase media nacionalista obtuvo lo que buscaba, pero para los obreros fueron momentos muy difíciles. Inmediatamente después de asumir el poder, el régimen Mendieta-Batista comenzó a reprimir a los obreros física y legalmente bajo el lema "Habrá zafra o habrá sangre". Uno de los primeros decretos del nuevo régimen devolvió los ingenios de Chaparra y Delicias a la CubanAmerican Sugar Company. El ejército y la Guardia Rural asaltaron las sedes sindicales de Puerto Padre, y a todo lo largo de la isla confiscaron documentos y mobiliario, encarcelaron o desalojaron a los líderes obreros de los ingenios azucareros y declararon ilegales a los sindicatos.

No obstante, debido a la movilización popular masiva que tuvo lugar durante la Revolución de 1933, incluso estas medidas represivas tuvieron que llevarse a cabo mediante una legislación disfrazada como "compromisos" entre el capital y el trabajo. Por ejemplo, el Decreto núm. 3, aprobado el 7 de febrero de 1934, permitía a los obreros emplazar a huelga, pero los obligaba a dar aviso con ocho días de anticipación. Este giro de la ley suprimió el elemento de espontaneidad que hacía que las huelgas fuesen eficaces; también daba tiempo a las compañías para reunir esquiroles y desalojar o exiliar a los líderes de la huelga antes de su inicio. Comunistas, trotskistas y guiteristas por igual manifestaron su rechazo a esta legislación de control social, pero no tuvieron más remedio que modificar su postura tras el fracaso de la huelga general de marzo de 1935. El gobierno reprimió la huelga con violencia desmedida y poco después el SNOIA, para evitar más violencia, comenzó a defender el trabajo desde dentro del sistema. El SNOIA emitió circulares en las que explicaba a los obreros cómo formar sindicatos legales y les enseñó recursos para combatir la jerga legal que las compañías utilizaban para dar vuelta a la legislación.

El gobierno Mendieta-Batista aprobó una serie de decretos para salvar a los agricultores

de la caña, entre ellos la moratoria del 17 de agosto de 1934 para ayudarles a pagar sus deudas. Las directrices se complementaron mediante la implementación de una serie de leyes de salario mínimo para obreros agrícolas e industriales. Finalmente, la Ley de Coordinación Azucarera de 1937 estableció de manera permanente un nuevo sistema de protección de tierras para los cañeros arrendatarios y de reparto de utilidades entre trabajadores, cultivadores cañeros y dueños de ingenios sobre una escala variable que dependía del precio del azúcar. A través de nuevas regulaciones se establecieron fechas para el comienzo de la molienda, cuotas mínimas sobre la producción de caña para agricultores e ingenios (lo que daba protección a pequeños y medianos agricultores y a los pequeños propietarios de ingenios), el tamaño de los sacos, los puertos de embarque, tasas salariales para todas las categorías de empleo y un alto porcentaje fijo de azúcar para los agricultores a cambio de su caña (47% de la producción de azúcar cuando se obtenía más de 12% de sacarosa de la caña, y 48% si era superior a 13%). Entre 1939 y 1949, los propietarios de los ingenios se quejaron de que los costos de mano de obra y de los agricultores había aumentado 300%, pero gracias a la nueva cuota para el azúcar establecida por los Estados Unidos en 1934, los precios promedio oficiales también se incrementaron 290%; el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo informó que “bajo presión”, la mayoría de los propietarios de ingenios admitía que, si bien las ganancias eran menores que los niveles anteriores a 1939, todavía valía la pena continuar con la producción de azúcar.[67]

Conclusión

Al final, la Gran Depresión y los movimientos reformistas sociales y nacionalistas que impulsó sirvieron para que afrocubanos, mujeres, obreros y agricultores cañeros crearan una Cuba nueva. El rompimiento con la tradición queda demostrado tanto en el ámbito político nacional como en el de las comunidades locales atadas a los ingenios. Al menos a nivel simbólico, la cultura afrocubana dejó de estar completamente desprotegida, y los derechos de los afrocubanos y las mujeres quedaron plasmados en la Constitución de 1940.[68] El Estado, conformado por el presidente y su gabinete, jueces, fiscales, militares y el nuevo Ministerio del Trabajo, se volvió un mediador que buscó asegurar que obreros, agricultores cañeros y propietarios de ingenios azucareros obtuviesen una participación justa de las ganancias de la industria azucarera. En todo el país, cada grupo creó su propia asociación de gestión, cuyos representantes locales —o representantes sindicales en el caso de los obreros— acudieron a los mediadores del Estado (abogados, jueces, representantes del Ministerio del Trabajo y gobernadores). De tal manera que la intervención del Estado en los ingenios azucareros alcanzó un nivel sin precedentes, y los soldados de Batista, al menos hasta su golpe de Estado de 1952, no sólo actuaron como fuerzas opresivas, sino que se volvieron actores importantes

en la escena local: solicitaron sobornos, emparentaron con las familias locales a través del matrimonio y enseñaron en las escuelas, entre otras actividades.

Los revolucionarios de 1933 no tuvieron la intención de suprimir la producción de azúcar en la isla, simplemente no estaban de acuerdo con el *statu quo* que le daba prioridad sobre todos los aspectos políticos, sociales y económicos de la vida. Los participantes en la economía azucarera —agricultores y obreros cañeros— deseaban una mayor participación de las ganancias, mientras que los estudiantes, industriales, profesionales, afrocubanos y feministas perseguían una economía más diversa y una sociedad más igualitaria. Por encima de todo, quienes participaron en la Revolución de 1933 deseaban tener mayor acceso al poder político y económico.

El cambio de la base del poder de Batista a finales de los años treinta trajo consigo reformas nacionalistas populares más profundas, en parte debido a las preocupaciones suscitadas por la Guerra Civil española, y en parte siguiendo el ejemplo cardenista en México. Los cubanos y españoles de la isla protagonizaron manifestaciones masivas de frente popular para exigir la liberación de los presos políticos y en contra de la dictadura de Francisco Franco. Los líderes sindicales cubanos y el jefe de las fuerzas armadas, Batista, también visitaron y recibieron la visita de personalidades populistas mexicanas en 1938 y 1939. La Guerra Civil española y el modelo cardenista mexicano alentaron la formación de una alianza populista entre el presidente Batista, los agricultores cañeros y los obreros comunistas cubanos a finales de los años treinta, que modificó de manera significativa las estructuras políticas, sociales y económicas. El sindicalismo, las mujeres y los agricultores cañeros finalmente ganaron un lugar en el ámbito político cubano a la par de militares, políticos y capitalistas cubanos y estadunidenses.

La eficaz legislación obrera aprobada a finales de los años treinta y principios de los cuarenta es prueba de ese triunfo, como también lo son las elecciones democráticas cubanas celebradas en 1940 y 1944. La transformación se reflejó también en la nueva postura adoptada por las confederaciones de trabajadores más importantes, que pasaron del rechazo a las instituciones del gobierno cubano a la búsqueda de compromisos y negociaciones dentro de ellas. Este solo hecho demuestra la transformación provocada por la movilización popular masiva en el Estado cubano: de una dictadura represiva abierta en 1932 a los regímenes "populistas democráticos" de 1933 a 1952. El concepto de la *democracia populista* debe ser relativizado debido a la variada participación de los grupos populares durante el periodo. En los primeros años, el gobierno combinó una legislación del trabajo ejercida de arriba abajo con una represión excesiva. Tras el viraje de Batista a la izquierda en el periodo de 1937-1944, los grupos populares tuvieron una participación más importante. El cambio de Batista obedeció al rechazo popular de la dictadura militar en la isla, evidente en las manifestaciones populares en contra de Franco, sus visitas a México (junto con líderes sindicales), que ofrecía un ejemplo funcional del populismo de izquierda en América Latina, y a las presiones de la

Internacional Comunista y sus aliados para la formación de frentes populares de "clase media, obreros y campesinos" en contra del fascismo durante la segunda Guerra Mundial. El adversario político de Batista, Grau San Martín y su Partido Auténtico, que gobernó de 1944 a 1952, introdujo una forma insidiosa de populismo que dividió internamente a los sindicatos y minó parte del poder que los obreros habían alcanzado.[69] Finalmente, el golpe de Estado perpetrado por Batista en 1952 en contra de los "auténticos", derivó en una dictadura reminiscente de los años de Machado en cuanto a su dependencia de la represión militar, el turismo y los préstamos de los Estados Unidos.

En cuanto al campo, la duración del paternalismo y de los mínimos beneficios capitalistas se limitaron al tiempo en el que hubo buenas ganancias. Los propietarios y administradores de los ingenios subestimaron los recortes que los residentes de los ingenios podían tolerar. Cuando la Gran Depresión puso al descubierto la fragilidad del bienestar capitalista, los obreros y agricultores cañeros de Cuba, igual que sus contrapartes de las clases bajas y medias en todo el hemisferio occidental, demandaron al Estado mayor protección y reformas más formales y duraderas. La transición de programas capitalistas de bienestar al bienestar legislado bajo los gobiernos populistas de los años treinta y cuarenta fue inestable; pero Cuba no estaba sola. La isla encaja en el amplio patrón del hemisferio americano más de lo que la mayoría de los estudios reconoce. La diferencia estribó en el nivel de intervención estatal en la industria azucarera, que hizo de ella "una de las industrias más meticulosamente controladas en el mundo", como también el nivel de intromisión de los Estados Unidos que, al parecer, obedeció en gran medida a los intransigentes imperialistas estadunidenses que en ese tiempo aconsejaban desde Cuba al Departamento de Estado (primero el embajador Sumner Welles, seguido por Jefferson Caffrey, representante personal de Franklin Roosevelt).[70]

El presente capítulo hizo hincapié en los cambios importantes iniciados por los cubanos durante y después de la Gran Depresión, sin embargo, no se debe pasar por alto la injerencia de los Estados Unidos para impedir una reforma nacional más extensa. Podemos leer la ironía de la imagen histórica de Batista divulgada en 1934 por *Literary Digest*, el órgano de la prensa convencional de los Estados Unidos:

> Nada en el temperamento del pequeño hombre de tez oscura justifica apelativos como "Pequeño Napoleon" o "Emperador Batista". Es astuto, pero, en lo que a la ambición política concierne, carece de los signos distintivos del dictador […] Su larga experiencia en el contacto cercano con los líderes militares le enseñó […] el peligro que entraña escalar demasiado alto en una república latinoamericana. Pertenece al pueblo y, como tal, su inclinación es la de apoyar al gobierno que haga más por las masas populares.[71]

Por el contrario, Charles A. Thompson, de *Foreign Policy Review*, anticipó el surgimiento de la "dictadura de Batista" con certera visión profética. En un análisis impresionante, plasmó la etiqueta de dictador casi 20 años antes de que se convirtiese en un lugar común en el discurso político cubano. La retrospectiva escrita por Thompson en enero de 1936 señala que la

postura de no reconocer a los gobiernos había sido una poderosa estrategia de la administración de Roosevelt. La negativa a reconocer el régimen de Grau, argumenta, "contribuyó a destruir, como ahora vemos, la oportunidad más promisoria de una solución constructiva para el problema cubano […] Las fuerzas de oposición han sido relegadas a la clandestinidad […] y, si habrán de desaparecer o resurgir de forma más agresiva, sólo el futuro tiene la respuesta".[72] Y, en efecto, reaparecieron para cobrar venganza en 1959. Tras el triunfo de esa segunda Revolución, que inició también como un movimiento de la clase media, los obreros llevaron a cabo una extensa reforma agraria y nacionalización.[73] Igual que en 1933, sus acciones precedieron y sentaron las bases de la legislación reformista subsiguiente.

[1] Las exportaciones de tabaco excedieron a las del azúcar justo después de las guerras de independencia de 1899; sin embargo, para 1919, el tabaco representó tan sólo 8.3% del valor total de las exportaciones. Cuba, Dirección General del Censo, *Censo de la República de Cuba, 1919,* Maza Arroyo y Caso, La Habana, 1920, p. 231. Para mayor información sobre el tabaco, véase la obra de Jean Stubbs, *Tobacco on the Periphery: A Case Study of Cuban Labour History,* Cambridge University Press, Cambridge, 1985.

[2] La Corporación Exportadora Nacional de Azúcar fue el "único vendedor" en 1929 y comenzó a regular las cuotas internas en la isla y para las exportaciones entre 1931 y 1935, antes de que el Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar (ICAE) adoptara estas funciones en 1935. Véase Alan Dye, *Cuban Sugar in the Age of Mass Production, 1899-1929,* Stanford University Press, Stanford, 1998, y Óscar Zanetti Lecuona, *Las manos en el dulce,* Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2004.

[3] Véase Robin D. Moore, *Nationalizing Blackness: Afrocubanismo and Artistic Revolution in Havana, 1920-1940,* University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1997; Gregory T. Cushman, "¿De qué color es el oro? Race, Environment, and the History of Cuban National Music, 1898-1958", *Latin American Music Review* 26, núm. 2 (2005), pp. 164-194; Hermano Vianna, *The Mystery of Samba: Popular Music and National Identity in Brazil,* trad. de John Charles Chasteen, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1999.

[4] Véase Rosalie Schwartz, *Pleasure Island: Tourism and Temptation in Cuba,* University of Nebraska Press, Lincoln, 1997.

[5] Herminio Portell Vilá, citado en "By Way of Prologue", en Fernando Ortiz, *Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar,* A. A. Knopf, Nueva York, 1947, p. XIX. Edición española: *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar,* Jesús Montero, La Habana, 1940.

[6] El "bienestar capitalista" puede considerarse como el predecesor del bienestar social que muchos Estados comenzaron a proporcionar a sus ciudadanos en los años treinta; consistía de una combinación de elementos paternalistas tradicionales e iniciativas fordistas por medio de las cuales las compañías proporcionaban atención a la salud, educación y vivienda para sus trabajadores.

[7] Manuel Rionda a Oliver Doty, 31 de enero de 1929. Braga Brothers Collection, Special Collections, Smathers Library, University of Florida, Gainesville (en adelante BBC), Record Group (RG) 2, Serie (s) 10, archivo: Tuinucú, Colonos-A&L.

[8] Punta Alegre Sugar Company a R. B. Wood, 15 de septiembre de 1932, Archivos Provinciales de Las Tunas, Cuban American Sugar Company Collection (en adelante, APLT, CASC), leg. 7, exp. 77.

[9] Public Records Office, Foreign Office, Londres (en adelante, PRO, FO) 371/ 16575, documento núm. 304.

[10] Barry Carr, "Mill Occupations and Soviets: The Mobilisation of Sugar Workers in Cuba 1917-1933", *Journal of Latin American Studies* 28 (1996), p. 132.

[11] La carta original está escrita en un inglés muy pobre. Chaparra, Cándido Fernández a Mr. H. M. Hicks, Auxiliary General Manager, 20 de julio, 1932, Chaparra, APLT, CASC, leg. 50, exp. 558.

[12] La cita proviene de un informe sorprendentemente progresista de la Comisión de Asuntos Cubanos de los Estados Unidos llamada *Problems of the New Cuba,* Foreign Policy Association, 1935, p. 11.

[13] Samuel Farber, *Revolution and Reaction in Cuba, 1933-1960: A Political Sociology From Machado to Castro,* Wesleyan University Press, Middletown, 1976, p. 94; Robert Whitney, "The Architect of the Cuban State: Fulgencio Batista and Populism in Cuba, 1937-1940", *Journal of Latin American Studies* 32 (2000), pp. 435-459.

[14] El nivel de producción mantuvo una participación en el mercado global de entre 20 y 25% hasta 1931, año en el que descendió por debajo de 12%, y conservó este nivel hasta después de la segunda Guerra Mundial. Brian Pollitt, "The Cuban Sugar Economy in the 1930s", en Bill Albert y Adrian Graves, Routledge (eds.), *The World Sugar Economy in War and Depression, 19141940,* Londres, 1988, p. 97; Manuel Moreno Fraginals, *El Ingenio,* Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1978, vol. 3, pp. 39-40.

[15] Véase Ada Ferrer, *Insurgent Cuba: Race, Nation, and Revolution, 18681898,* University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1999; Alejandro de la Fuente, *A Nation for All: Race, Inequality, and Politics in Twentieth-Century Cuba,* University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2001; Aline Helg, *Our Rightful Share,* University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1995; Frank Guridy, *Forging Diaspora: Afro-Cubans and African Americans in a World of Empire and Jim Crow,* University of North Carolina, Chapel Hill, 2010.

[16] Cushman, "De qué color es el oro?…", *op. cit.,* p. 169.

[17] Aline Helg, "Race in Argentina and Cuba, 1880-1930: Theory, Policies, and Popular Reaction", en Richard Graham (ed.), *The Idea of Race in Latin America*, University of Texas Press, Austin, 1990. La población total de Cuba aumentó de 1 572 797 en 1899 a 3 962 344 en 1931. Informe de la Comisión de Asuntos Cubanos, *Problems of the New Cuba, op. cit.*, 25.

[18] Moore, *Nationalizing Blackness…, op. cit.*, p. 131.

[19] Muriel McAvoy, *Sugar Baron: Manuel Rionda and the Fortunes of Pre-Castro Cuba*, University of Florida Press, Gainesville, 2003, p. 162.

[20] Zanetti Lecuona, *Las manos en el dulce…, op. cit.*, pp. 53-54; Reinaldo Funes, "El *boom* azucarero durante la primera Guerra Mundial y su impacto sobre zonas boscosas de Cuba", en Martín Rodrigo (ed.), *Cuba: de colonia a república*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2006, p. 230.

[21] Louis A. Pérez Jr., *On Becoming Cuban: Identity, Nationality, and Culture*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1999, p. 167.

[22] *Ibid.*, pp. 166-167, y Schwartz, *Pleasure Island…, op. cit.* Robin Moore sugiere que los dramaturgos en pro de la independencia ya habían recurrido al término *mulata* como símbolo de la nación cubana hacia finales del siglo XIX, pero con un concepto simbólico más crítico y sutil que el utilizado por los promotores estadunidenses de la música y el turismo; Moore, *Nationalizing Blackness…, op. cit.*, p. 44.

[23] De la Fuente, *Nation for All…, op. cit.*, p. 180.

[24] Vera Kutzinski, *Sugar's Secrets: Race and the Erotics of Cuban Nationalism*, en De la Fuente, *Nation for All…, op. cit.*, p. 180. Véase también Jules R. Benjamin, "The Machadato and Cuban Nationalism, 1928-1932", *Hispanic American Historical Review* 55, núm. 1 (febrero de 1975), pp. 66-91.

[25] Moore, *Nationalizing Blackness…, op. cit.*, p. 135.

[26] Vera M. Kutzinski, *Sugar's Secrets: Race and the Erotics of Cuban Nationalism*, University Press of Virginia, Charlottesville, 1993, pp. 12-13.

[27] De la Fuente, *Nation for All…, op. cit.*, pp. 182-185.

[28] Moore, *Nationalizing Blackness…, op. cit.*, pp. 31, 104-105.

[29] De la Fuente, *Nation for All…, op. cit.*, pp. 141-142.

[30] Julio Le Riverand, *Historia económica de Cuba*, Instituto Cubano del Libro, La Habana, s. f., p. 597; McAvoy, *Sugar Baron…, op. cit.*, p. 183.

[31] Informe de la Comisión de Asuntos Cubanos, *Problems of the New Cuba*, p. 241.

[32] Lynn Stoner, *From the House to the Streets: The Cuban Woman's Movement for Legal Reform, 1898-1940*, Duke University Press, Durham, 1991, pp. 6574; Alejandra Bronfman, *Measures of Equality: Social Science, Citizenship, and Race in Cuba, 1902-1940*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, p. 139. Frank Guridy señala que los afrocubanos pagaron un alto precio por el supuesto apoyo que otorgaron a Machado. Describe la violenta reacción racista en el pueblo de Trinidad en " 'War on the Negro': Race and the Revolution of 1933", *Cuban Studies* 40 (2009), pp. 49-73.

[33] "SNOIA: Proyecto de Resolución para la II Conferencia Nacional", 16 de junio de 1933, Instituto de Historia, Fondo: 1er Partido Marxista-Leninista y otros, leg.: Organización de los Trabajadores Sindicales Nacionales, exp.: SNOIA (en adelante IH, SNOIA), documento 1/8.87/3.1/1-6.

[34] Luis Merconchini, entrevistado por Víctor Marrero, Delicias, 21 de agosto de 1990. El archivo de audio de la entrevista se encuentra en la Oficina de Historia de Las Tunas.

[35] Los obreros adoptaron las mismas estrategias de sabotaje durante la segunda Guerra de Independencia (1895-1898) y en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1959). Charles W. Hackett, nota al pie sobre Cuba en su artículo sobre los cambios constitucionales en México, "Mexican Constitutional Changes", *Current History*, mayo de 1933, p. 214. Véase también Gillian McGillivray, *Blazing Cane: Sugar Communities, Class, and State Formation in Cuba*, Duke University Press, Durham, 2009.

[36] Los tres métodos se describen, respectivamente, en el "Informe" del agente secreto de la policía Francisco Micó Urrutia sobre la quema de cañaverales en Chaparra y Delicias, remitido por Rafael Balart Perera, jefe de la Policía Secreta de Santiago al gobernador de Santiago, remitido el 22 de marzo de 1936, Santiago de Cuba, Archivos Provinciales, leg. 312, exp. 16; The Mapos Sugar Co. Case 121, en Departamento de Justicia, informe especial de William E. Fuller, p. 47; George Atkinson Braga, "A Bundle o Relations", manuscrito mecanografiado Typed Manuscript, BBC, RG 4, s. 24

(adicional), p. 47.

[37] Carr, "Mill Occupations and Soviets…", *op. cit.*, p. 133.

[38] Schwartz, *Pleasure Island…*, *op. cit.*, pp. 88-89.

[39] *Les Années Trente à Cuba: Actes du colloque international organizé à Paris en novembre 1980 par le Centre Interuniversitaire d'études Cubaines et L'Université de la Sorbonne-Nouvelle, Paris III*, Editions L'Harmattan, París, 1982, p. 34.

[40] Hubert Herring, "The Downfall of Machado", *Current History*, octubre de 1933, pp. 17-18.

[41] Edwin Lefevre, "Soldier and Student Control in Cuba", *(Philadelphia) Saturday Evening Post*, 6 de enero de 1934, p. 36.

[42] Hudson Strode, "Behind the Cuban Revolt", *New Republic*, 4 de octubre de 1933, pp. 204-207.

[43] Citado en McAvoy, *Sugar Baron…*, *op. cit.*, p. 256.

[44] Para mayor información sobre la fuerza impresionante de los movimientos estudiantiles y de mujeres, véase Stoner, *From the House to the Streets…*, *op. cit.*, y Jaime Suchliki, *University Students and Revolution in Cuba, 1920-1968*, University of Miami Press, Coral Gables, 1969.

[45] Louis A. Pérez Jr., *Cuba: Between Reform and Revolution*, 2ª ed., Oxford University Press, Nueva York, 1995, p. 268.

[46] Esta misma ley fue también causa de injusticias y violencia en el campo. Los objetivos ahí fueron el gran número de obreros ingleses, franceses y de las Antillas Holandesas que llegaron a Cuba durante las épocas de auge para cortar la caña y que permanecieron en la isla con sus familias en los años treinta. La Guardia Rural hacía redadas junto con cazarrecompensas, que identificaban a los extranjeros para deportarlos, por lo general sin sus pertenencias y salarios. Barry Carr, "Identity, Class, and Nation: Black Immigrant Workers, Cuban Communism, and the Sugar Insurgency 1925-1934", *Hispanic American Historical Review* 78, núm. 1 (1998), pp. 103-109.

[47] Robert Whitney, *State and Revolution in Cuba: Mass Mobilization and Political Change, 1920-1940*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2001, pp. 105-107.

[48] Octaviano Portuondo Moret, *El soviet de Tacajó: experiencias de un estudiante de los 30*, Santiago de Cuba, 1979, p. 69, citado en Carr, "Mill Occupations and Soviets…", *op. cit.*, p. 153.

[49] *Ibid.*, p. 155.

[50] *Ibid.*, pp. 139-158; Jacobo Urbino Ochoa, Gabriel Milord Ricardo y Dionisio Estévez Arenas, *Datos para la historia. Movimiento Obrero y Comunista, Holguín 1918-1935*, Ediciones Holguín, Holguín, 1983, pp. 120-137.

[51] Fanjul a Aurelio Portuondo, 14 de septiembre, 1933, BBC, RG 2, s. 11, archivo: Correspondencia con Higinio Fanjul, Manuel Rasco y Cuban Trading Co., La Habana.

[52] Rionda, presidente, Tuinucú Sugar Company a Tuinucú [Comité Central], 11 de septiembre de 1933, BBC, RG 2, s. 4, vol. 3.

[53] Rionda a Bernardo Braga, Londres, 15 de septiembre de 1933, BBC, RG 2, s. 4, vol. 3.

[54] Higinio Fanjul a Aurelio Portuondo, 25 de septiembre de 1933, BBC, RG 2, s. 11.

[55] Ursinio Rojas, ex trabajador de Fanjul, recordaba la simple comida popular que consumían los huelguistas que desempeñaban puestos de administración y de alta jerarquía. Uno casi puede sentir su sonrisa de satisfacción cuando escribió: "El señor Hernández perdió bastante peso porque no le gustaba el 'rancho' de la cocina común del sindicato". Ursinio Rojas, *Las luchas obreras en el Central Tacajó*, Editora Política, La Habana, 1979, p. 83. También, PRO, FO 371. A 7120/255/14. Grant Watson a Foreign Office, Londres, carta de A. Hopton Jones, fechada el 16 de septiembre de 1933, citado en Carr, "Mill Occupations and Soviets…", *op. cit.*, p. 153.

[56] Manuel Rionda, Nueva York, a José Rionda, La Habana, 18 de septiembre de 1933, BBC, s. 2, vol. 78.

[57] José Rionda a Manuel Rionda, 30 de septiembre, 1933, BBC, s. 10, RG 2, s. 10, archivo: Tuinucú, Problemas Laborales.

[58] Arquímedes Valdivia Hernández, entrevistado por la autora, 1º de febrero de 2000, Tuinucú.

[59] Oliver Doty al Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Azucarera, Sección del Central Tuinucú, Tuinucú, 11 de enero de 1935, BBC, RG 2, S. 10, archivo: Tuinucú, Problemas Laborales.

[60] José Tabares del Real, *Guiteras*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973, pp. 197, 282-283.

[61] Capítulo "Chaparra" del manifiesto del SNOIA, s. f., Santiago de Cuba, Archivos Provinciales, Archives, "Tribunal de Defensa Nacional: Juicios establecidos por propaganda subversiva".

[62] Encargado de Asuntos Internacionales de los Estados Unidos, Samuel S. Dickson, al secretario de Estado, 30 de diciembre, 1933, United States National Archives (en adelante USNA), RF 59, Stack 250, Row 26, Decimal file 19001939, Box 1339, 337.115 SM/665 a 37.1153 CU [Re: 1933 nationalization of Cuban-American sugar mills]. (Cursivas de la autora.)

[63] El diplomático recibió esta información del corresponsal de un periódico estadunidense quien a su vez la había obtenido confidencialmente de uno de los contadores de la compañía. Jefferson Caffery al secretario de Estado, 11 de enero, 1934, USNA, RG 59, Stack 250, Row 26, Decimal file 1900-1939, Box 1339, 337.115 SM/665 a 37.1153 CU.

[64] Mr. Grant Watson a Sir John Simon, PRO, FO 371/16575 y documentos adyacentes.

[65] "Memorandum for the Minister re: the Situation at Chaparra", Grant Watson a Sir John Simon, 30 de diciembre de 1933, PRO, FO, 277/226.

[66] "Current Wages in the Antilla Consular District", 8 de enero de 1934, en USNA, *RG* 59, 837.5041/63.

[67] Irving P. Pflaum, "Aspects of the Cuban Economy Part II", *American Universities Field Staff Reports Service Mexico and Caribbean Area Series* 5, núm. 8 (agosto de 1960), p. 2.

[68] Véase Stoner, *From the House to the Streets…, op. cit.;* Bronfman, *Measures of Equality…, op. cit.*, y de la Fuente, *Nation for All…, op. cit.*

[69] Véase Whitney, "Architect of the Cuban State…", *op. cit.*

[70] Pflaum, "Aspects of the Cuban Economy Part II", *op. cit.*, p. 2; y Philip Dur y Christopher Gilcrease, "U.S. Diplomacy and the Downfall of a Cuban Dictator: Machado in 1933", *Journal of Latin American Studies* 34, núm. 2 (mayo de 2002), pp. 255-282.

[71] "Cuba's Procession of Presidents", *Literary Digest*, 27 de enero de 1934, p. 14.

[72] Charles A. Thompson, "The Cuban Revolution: Reform and Reaction", *Foreign Policy Reports*, 1º de enero, 1936, p. 276.

[73] Véase Juan Martínez Alier, "The Peasantry and the Cuban Revolution from the Spring of 1959 to the End of 1960", cap. 5 de *Haciendas, Plantations, and Collective Farms*, Fran Cass, Londres, 1977, pp. 127-147.

X. PANORAMA GENERAL DE LA GRAN DEPRESIÓN EN AMÉRICA LATINA

ALAN KNIGHT

ESTE capítulo plantea la difícil tarea de extraer algunas conclusiones generales sobre la Gran Depresión en América Latina a partir del contenido de los capítulos que lo preceden y de otras fuentes secundarias.[1] La tarea no es fácil debido, en primera instancia, a la complejidad particular de los procesos históricos —que abarcan una década y, más importante aún, corresponden a cerca de 20 países, la mitad de los cuales son abordados directamente en esta obra— y, en segundo lugar, a los enfoques tan diversos del tema, que se hacen evidentes en estas páginas; algunos son estrictamente económicos o político económicos, otros sociopolíticos (no tan económicos) y otros más socioculturales.[2] Tal diversidad plantea dos cuestiones iniciales, familiares para los historiadores y los científicos sociales —teóricamente al menos—, y que en ocasiones son ignoradas en la práctica. Las dos se relacionan con el vuelo de nuestras flechas causales: dicho en un lenguaje más llano, ¿qué causa qué? Primero, ¿en qué medida la Gran Depresión, un fenómeno "económico" por definición, tuvo repercusiones políticas, sociales e incluso culturales (más allá de las consecuencias económicas más evidentes)?[3] En otras palabras, ¿hasta qué grado los fenómenos políticos de los años treinta —entre ellos la inestabilidad política, la pronunciada construcción del Estado, el dirigismo económico, el autoritarismo, el corporativismo, los frentes populares, el nacionalismo, etc.— fueron consecuencia de la crisis mundial? Si la crisis no hubiese ocurrido, ¿esas manifestaciones políticas habrían surgido, o al menos, habrían surgido en una forma tan clara? Preguntas similares pueden plantearse, vagamente, sobre los fenómenos sociales y culturales: migración, urbanización, xenofobia y, nuevamente, nacionalismo.

El segundo problema común que surge de inmediato es el bien conocido *post hoc ergo propter hoc* (después del hecho, y, por lo tanto, debido al hecho); dicho de otro modo, el riesgo de atribuir a la crisis mundial repercusiones que de hecho obedecieron a una causalidad muy diferente.[4] En Venezuela, por ejemplo, la liberalización parcial a finales de los años treinta obedeció principalmente a la muerte de Juan Vicente Gómez y la disolución de su régimen, no a las presiones económicas derivadas de la depresión mundial (que, gracias al petróleo, tuvo un efecto bajo).[5] Augusto César Sandino lanzó su ofensiva en contra de los

marines de los Estados Unidos en la región segoviana de Nicaragua en 1927; con la depresión, lo más que pudo obtener fueron nuevos reclutas provenientes del "campesinado empobrecido" de la región.[6] Las reformas radicales de Lázaro Cárdenas a mediados de los años treinta sin duda recibieron un estímulo parcial del efecto de la depresión mundial en México, pero habrían sido impensables sin la Revolución mexicana y las fuerzas y expectativas que ésta desató.[7] Tendencias a largo plazo, como la urbanización, la industrialización y el crecimiento demográfico, fueron claramente afectadas por la crisis; sin embargo, jamás fueron iniciadas *de novo*; si su efecto fue de aceleración o retraso es una cuestión empírica cuya respuesta varía, según el caso, de un país a otro.

De tal manera que en algunos casos la crisis mundial quizá no haya sido crucial, ya que prevalecía una causalidad diferente. En otros, la depresión aceleró tendencias previas (y, por supuesto, medir la aceleración —y el combustible agregado que impulsa la aceleración— no es una cuestión sencilla; lo mismo ocurre con el "retardo": ¿quién pisa el freno y con cuánta fuerza?). Las conexiones causales son particularmente difíciles de establecer cuando se pasa, digamos, del mundo de la economía política al de la cultura.[8] La secuencia político económica (caída de las exportaciones / disminución de los ingresos / déficit presupuestario / recortes y despidos gubernamentales / protestas y fracasos electorales) es demostrable empíricamente en casos determinados y congruentes con los patrones generales de causalidad (lo que llanamente podríamos llamar "modelo nomológico deductivo").[9] Mucho más difícil resulta establecer estos vínculos entre las tendencias político-económicas y los fenómenos culturales; suponer que dichos vínculos existen y son obvios es incurrir en la falacia de Harry Lime.[10] Jorge Luis Borges, quien comenzó a forjar un nombre como escritor en la década de 1930, difícilmente fue producto de la reacción nacionalista de la década, mientras que Gilberto Freyre, quien tiene mayores motivos para encarnar el nacionalismo brasileño (o "lusotropical"), no fue un gran admirador, ni colaborador, del régimen de Vargas.[11] Evidentemente, la economía política y la cultura no ocupan compartimentos herméticos separados, pero más allá de subrayar que —cambiando a una mejor metáfora— estas dos corrientes históricas confluyen, es difícil identificar las conexiones causales con plena certeza. Por lo mismo, este resumen es una visión prudente y somera sobre la cultura.

Con estas advertencias en mente, ofrezco un breve resumen de los años treinta, que aborda inicialmente el efecto económico de la depresión mundial para después centrarse en las reacciones políticas a corto y mediano plazo. Por "mediano plazo" me refiero llanamente a toda la década de 1930, en tanto que "corto plazo" se refiere específicamente a los años de crisis, aproximadamente de 1930 a 1933. Esto no significa un simple apego a la "hectohistoria", la historia burdamente dividida en décadas (o siglos), sino que también refleja el hecho de que, para la segunda mitad de la década, la mayor parte de las economías latinoamericanas había logrado salir de la Depresión, mientras que el estallido de la guerra —al final de la década— provocó nuevos efectos y reacciones.[12] Es evidente que a lo largo de

los años cuarenta, e incluso después, perduraron “legados” importantes de los años de la depresión, como bien destaco; sin embargo no es fácil atribuir a la depresión mundial los nuevos fenómenos ocurridos a finales de los años cuarenta y durante la década de 1950 —como el populismo—, tal y como señalo en las conclusiones. Si bien es cierto que muchos de los factores de la depresión mundial influyeron en los años subsiguientes, es preciso reconocer que, en el mejor de los casos, su efecto fue distante y muy indirecto.

La economía en la Gran Depresión

Ya que Latinoamérica “fue una de las regiones subdesarrolladas más estrechamente integradas a la división internacional del trabajo” el efecto de la depresión fue, según el punto de vista de Celso Furtado, “catastrófico”.[13] De hecho, quizá la economía chilena haya sido la “más gravemente afectada que ninguna otra en el mundo”.[14] La premisa de Furtado parece ser más convincente que su conclusión. Latinoamérica tuvo en efecto altos coeficientes de comercio exterior que la volvieron sumamente vulnerable al drástico desplome del mercado mundial después de 1929, una vulnerabilidad agravada por el hecho de que, a partir de 1927, el mercado alcista de Wall Street había estado absorbiendo inversiones estadunidenses en la región (véase el cuadro x.1).[15]

Chile recibió un duro impacto por su fuerte dependencia de un par de minerales de exportación (cobre y nitrato), los dos sumamente sensibles a la demanda mundial, de ahí el “contundente” colapso de los ingresos de exportación en cuatro años y sus importantes repercusiones sociopolíticas, como se menciona más adelante.[16] Cuba también era altamente vulnerable a la disminución de los precios del azúcar, predicamento agravado por el proteccionismo emprendido por los Estados Unidos. Tras prácticamente haber alcanzado la cifra de cinco centavos por libra durante la primera Guerra Mundial, el precio cayó a 1.94 centavos en 1929 y 1.23 centavos en 1930; tres años después, la industria azucarera cubana operaba a 35% de su capacidad, y el valor de la zafra había caído tres cuartas partes (1929-1933).[17] Como lo ejemplifica el caso del azúcar, los precios de algunos de los productos básicos habían sido débiles desde el final del auge de la posguerra en 1921; de tal manera que los efectos de 1929-1930, lejos de aparecer de la nada (como ocurrió, por así decirlo, con los precios de las acciones estadunidenses), agravaron de manera seria las tendencias existentes: el cacao y el azúcar habían decrecido durante los años veinte dentro de las exportaciones ecuatorianas; Bolivia sufrió con la caída de los precios del estaño después de 1927, y, en ese mismo año, Argentina se vio afectada por la disminución del precio del trigo.[18] Los países centroamericanos productores de café y banano —economías abiertas y pequeñas normalmente dependientes de un solo producto de exportación— también fueron golpeados duramente (el banano recibió la peor parte, para perjuicio de Honduras y Nicaragua), mientras que México,

Bolivia y Chile padecieron a causa del declive pronunciado de los precios de los minerales.[19]

CUADRO X.1. *Coeficientes de comercio exterior y disminución de las exportaciones*

País	*Coeficiente de comercio exterior (exportaciones + importaciones/PIB, precios de 1970) 1928*	*Caída en el poder de compra de exportaciones 1928-1932 (%)*	*Coeficiente de comercio exterior (precios de 1970) 1938*
Venezuela	120	0	56
Costa Rica	110	35	81
El Salvador	81	62	62
Colombia	63	35	43
Argentina	60	40	36
Chile	57*	83	45
Perú	53*	57	43
México	48	63	26
Brasil	39	44	33

* Datos de 1929.

FUENTE: Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence,* Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. 195, 197.

No obstante, en muchos casos la recuperación fue rápida y sostenida. Como suele ocurrir en la historia económica, los juicios dependen en gran medida de las comparaciones que se establezcan. En comparación con los Estados Unidos, por ejemplo, Latinoamérica salió bastante bien librada.[20] Pero utilizar a los Estados Unidos como parámetro de comparación no es necesariamente lo más adecuado. Por lo general se utiliza para denigrar el desempeño (excesivamente lento) de Latinoamérica en el largo plazo; en este caso, por el contrario, una comparación coyuntural tiende a ser halagadora.[21] No obstante, el desempeño de Latinoamérica fue mejor que el de la India y que —no es de extrañar— de China, devastada por la guerra.[22] Mejores puntos de comparación podrían ser el sur o el oriente de Europa; sin embargo, ese estudio ha sido muy raro, excepto por el análisis perceptivo de Love sobre el pensamiento económico.[23]

La comparación es, por lo tanto, un asunto delicado y, puesto que nuestro enfoque es en Latinoamérica, amerita hacer una distinción entre dos factores: la "severidad" inicial de la depresión y el "ritmo" de la recuperación. Los Estados Unidos, por ejemplo, recibieron un duro golpe y su recuperación fue lenta (obviamente, la peor de las combinaciones; es difícil encontrar un equivalente en Latinoamérica). En Alemania el efecto fue severo, pero tuvo una rápida recuperación.[24] Gran Bretaña, que venía de una recesión estructural en los años veinte, experimentó un golpe menos severo y una recuperación menos robusta. El patrón

latinoamericano fue variable, pero encontramos tonos distintivamente “alemanes”, es decir, una pronunciada caída y una rápida recuperación.

Si aplicamos en Latinoamérica la tipología de recuperación rápida, mediana y lenta de Victor Bulmer-Thomas, encontramos ocho países dentro de la categoría “rápida” (con un crecimiento del PIB superior a 50% entre el punto más bajo de la depresión —normalmente 1931 o 1932— y 1939), tres en la categoría de “mediana” recuperación (por encima de 20%), y otros tres en la categoría de “lenta” recuperación (menor a 20%; México y Brasil entran en la categoría “rápida”, por lo que representan la mayor parte de América Latina en población y PIB).[25] No obstante, el asunto de la comparación (cronológica) es nuevamente relevante. En el esquema de Bulmer-Thomas encontramos una clara correlación entre la profundidad de la depresión y la “velocidad” de la recuperación: en primer lugar, entre los ocho países de “rápida” recuperación se encuentran las economías más golpeadas por la crisis (México, Chile y Cuba que, entre 1932 y 1939 alcanzaron índices anuales de crecimiento del PIB de 6.2, 6.5 y 7.2%, respectivamente), mientras que “los países con mediana recuperación” tendieron a ser los menos afectados (Argentina y Colombia, cuyas tasas de crecimiento en el mismo periodo fueron de 4.4 y 4.8%, respectivamente).[26] Esto se debe a que Bulmer-Thomas define a la recuperación en términos comparativos del PIB en los años más duros de la depresión (1931-1932) y el PIB de 1939, como se mencionó antes. No sorprende, pues, que los países notablemente golpeados por la depresión hayan tendido a alcanzar un crecimiento de 50% o mayor siete u ocho años después, ya que partieron de una línea de base más baja, con mayor capacidad de ahorro. En cambio, si en lugar del punto más bajo de la depresión de 1931-1932 comparamos el PIB anterior a 1930 (tomando en consideración el nivel de la depresión anterior a 1932), el panorama es un poco distinto: Chile y Cuba —que fueron golpeados severamente— tardaron más en recuperarse (no recuperaron el PIB anterior a la crisis sino hasta los años cuarenta; podríamos hablar, entonces, de una “década perdida”), mientras que Brasil y Colombia lograron su recuperación en 1933, y México y Argentina en 1935.[27]

Tanto la profundidad de la crisis como la rapidez de recuperación dependieron de diversos factores económicos. Existieron aspectos comunes. En toda la región el mercado internacional decreció y sus términos cambiaron; las economías nacionales se contrajeron (aunque mucho menos); los ingresos públicos cayeron y aumentó la inestabilidad política, como lo señalo más adelante. La mayoría de los países abandonaron el patrón oro (que recién habían adoptado, por lo general de manera parcial), y todos, excepto Argentina, Honduras, Nicaragua y Haití, suspendieron el pago del servicio de la deuda externa.[28] En México, cabe aclarar, el servicio de la deuda desde la Revolución había sido esporádico, en el mejor de los casos, mientras que Venezuela había saldado su deuda con motivo de la conmemoración del centenario de la muerte de Bolívar.[29] De acuerdo con la lógica arbitraria de la “lotería de los bienes”, unas exportaciones tuvieron mejor desempeño que otras, en términos de volumen o precio.[30] Los países latinoamericanos exportadores de minerales sin duda fueron afectados más seriamente

por las fluctuaciones de esa "lotería". Las exportaciones de estaño en Bolivia, que representaban las tres cuartas partes de las exportaciones del país, cayeron de 47 000 a 14 400 toneladas entre 1929 y 1933; aunque el acuerdo de la Asociación de Productores del Estaño de 1933 estabilizó los precios, su costo fue la limitación de la producción.[31] En Chile, las exportaciones de cobre se redujeron a la mitad entre 1929 y 1933, y los precios cayeron 60%; de manera simultánea, "la depresión asestó un *coup de grace* a las ya debilitadas salitreras", cuyas exportaciones cayeron más de 90% y su fuerza de trabajo se recortó de 60 000 a 8 000. Esto provocó "un abandono del norte, como si las personas estuvieran huyendo de un lugar apestado"; entre estos migrantes había bolivianos que fueron obligados a regresar a su país, donde no era fácil encontrar trabajo.[32] Por el contrario, los productores de plata —México en particular— se vieron beneficiados con la política de compras de plata de los Estados Unidos (y, en 1938, con las inquietudes geopolíticas de ese país), a la vez que el precio del oro se mantuvo, para beneficio de Colombia y Perú.[33] Así, las exportaciones de minerales de Perú contribuyeron a su "vigorosa recuperación impulsada por las exportaciones".[34] Sin embargo, el billete más afortunado en la lotería de los bienes lo tuvo el petróleo, cuya demanda siguió al alza, con el mayor beneficio para Venezuela (véase el cuadro x.1) y, en menor grado, Perú.[35]

La historia de las exportaciones agrícolas también fue mixta. Los precios del trigo habían decrecido en los años veinte a consecuencia de la sobreproducción de la primera Guerra Mundial, y permanecieron "abismalmente bajos" entre 1930 y 1933, periodo en el que los excedentes fueron introducidos a un mercado deprimido.[36] No obstante, Argentina impulsó la producción del maíz (cuyo volumen creció 48% entre 1933 y 1937, a la vez que las exportaciones aumentaron 67%), y el tan controvertido pacto Roca-Runciman de 1933 hizo repuntar las exportaciones y los precios de la carne, para beneficio de los grandes terratenientes.[37] Tras la recesión de 1932, por tanto, Argentina tuvo una vigorosa y sostenida recuperación.[38] David Rock afirma razonablemente que "Argentina sufrió relativamente poco con la Gran Depresión".[39]

El café también había experimentado una sobreproducción antes de la depresión mundial y la oferta era relativamente poco flexible (los cafetos seguían produciendo sin importar la crisis mundial, mientras que los campos de trigo podían dejarse ociosos o rotarse para la siembra de maíz o pastura); no obstante, esta misma inelasticidad de la oferta podía inducir entre los productores de café "una tendencia a formar un poderoso grupo de intereses comunes que ejercería presión al Estado para la implementación de esquemas de apoyo a los precios en tiempos de inestabilidad".[40] El caso clásico fue Brasil, donde el Estado había tratado de resolver el problema creativamente con el esquema de valorización del café a principios de siglo.[41] La disminución de los precios —alrededor de dos terceras partes entre 1929 y 1931— provocó un aumento de almacenamiento y los excedentes fueron destruidos; así, los precios se estabilizaron entre 1933 y 1937, a la vez que la devaluación mitigó el impacto en los

productores de café brasileños.[42] Otros países latinoamericanos exportadores de café lograron en cierta medida sobrellevar la estabilización brasileña de los precios: Colombia (que también tenía una oferta de café importante) se recuperó rápidamente, pero los países centroamericanos, junto con Venezuela, fueron golpeados de manera más severa.[43] De nuevo, los intereses del café buscaron negociar apoyo, pero los países centroamericanos carecían de la voluntad o la capacidad para respaldar dichos intereses, salvo en la forma tradicional del brazo fuerte: reprimiendo las protestas obreras y campesinas.[44] Así, en El Salvador y Guatemala, quizá los casos más extremos de "represión del trabajo" agrícola, los cultivadores de café desplazaron la carga de la disminución de los ingresos a los hombros de sus trabajadores mediante recortes de puestos de trabajo, salarios y raciones.[45]

Entretanto, de la misma manera que Colombia logró en cierta medida beneficiarse de Brasil, los productores de algodón de la costa peruana se beneficiaron del esquema de apoyo a los precios implementado por los Estados Unidos.[46] El azúcar, por el contrario, languideció en Perú y en el resto de los países; ningún productor dominante logró impulsar los precios, y en el caso particular de Cuba, la lucha por el acceso al mercado de los Estados Unidos conllevó a la competencia con los productores nacionales de azúcar y su poder de negociación (es claro que en los Estados Unidos no hubo un cabildeo de productores de café equivalente).[47] La perversa ley arancelaria Smoot-Hawley, en particular, penalizó a Cuba, y el Estado cubano —en 1933 asolado por la agitación política— tuvo que negociar con un poderoso e inquebrantable monopsoniso. Es casi seguro que los exportadores argentinos negociaron un mejor trato con sus clientes británicos en 1933 que el alcanzado por los productores azucareros cubanos un año después gracias a su Tratado de Reciprocidad con los Estados Unidos.[48] Asimismo, el Estado cubano limitó la producción azucarera y reguló estrictamente la industria nacional. Como consecuencia de la depresión mundial, por lo tanto, Cuba implementó un "Estado regulador" extendido, como señalo más adelante.[49]

Así, el peor de los casos fue la fuerte dependencia de un solo producto cuya demanda y precios habían sufrido un declive pronunciado (como el estaño, el cobre o el azúcar); por el contrario, una canasta diversa de productos de exportación, algunos respaldados con apoyo de los precios y favorecidos por una demanda poco cambiante, ayudó a inhibir la depresión. Los grandes productores —como el sector cafetalero de Brasil— tuvieron cierto poder de negociación; Brasil también se vio favorecido por el hecho de que compraba a quienes vendía (principalmente los Estados Unidos y, cada vez más, Alemania). Argentina, en comparación, siguió vendiendo a la Gran Bretaña en una época en la que las importaciones de los Estados Unidos aumentaban rápidamente, ya que los Estados Unidos tuvieron el poder de desplazar a Inglaterra en los productos de la segunda Revolución industrial (automóviles, químicos, herramientas para maquinarias).[50] El desequilibrio consecuente contribuyó a la pérdida del dinamismo económico a largo plazo de Argentina.[51] También hubo repercusiones políticas: los inversionistas británicos pudieron obtener concesiones (por ejemplo, respecto de los ingresos

de ferrocarriles y tranvías) debido al estatus calificado de Argentina como "miembro honorario del Imperio británico", situación que avivó el resentimiento de los consumidores y la crítica nacionalista, convirtiéndolo en tema candente del debate político argentino.[52] Podría decirse que los años treinta oyeron el "canto del cisne" del viejo vínculo económico angloargentino antes de que ambos países entrasen (relativamente) en una espiral económica descendente, acompañada de recriminaciones recíprocas. No obstante, los registros económicos de los años treinta sugieren que ese canto todavía ejercía atracción, al menos en sectores determinados, y a partir de mediados de la década el desempeño agregado de la economía argentina, estimulada por una eficaz política monetaria, fue muy decorosa y permaneció así hasta finales de la década de 1940.[53]

Así, las relaciones contrastantes entre las "metrópolis" económicas (las otras partes significativas en el ámbito mundial, podría decirse), en combinación con la crucial "lotería de los bienes", produjo resultados muy distintos, que pueden resumirse en dos categorías: profundidad y duración. En algunos países (como Brasil y Colombia) los efectos de la crisis mundial fueron relativamente superficiales y de corta duración (en el mejor de los casos).[54] En otros (como México) fueron severos (una caída del PIB de 18%) pero también de corta duración (logró la recuperación en 1935).[55] En el peor de los casos fueron profundos y de una duración considerable: el PIB de Chile cayó hasta en 46% entre 1929 y 1932 y no recuperó su nivel anterior a la crisis sino hasta 1940; en Cuba —cuyas cifras del PIB son notoriamente imprecisas— el PIB quizá cayó en 40%, y la recuperación no llegó sino hasta fines de los años cuarenta.[56] Por ello, no es de sorprender que estos países hayan reaccionado ejerciendo acciones políticas más radicales ante las severas condiciones económicas del momento: con la Revolución de 1933 en Cuba, y la breve República Socialista de 1932 en Chile y el más relevante Frente Popular de 1938-1941.[57] Por muy distintas razones, los Estados Unidos, una economía industrial relativamente cerrada, sufrió una seria y prolongada doble recesión, con una caída de 25% en el PIB y una muy lenta recuperación, que dependió de la demanda inducida por la guerra y el gasto público a principios de los años cuarenta.[58]

A pesar de la relativa apertura de Latinoamérica, no es posible limitar la naturaleza y magnitud de las repercusiones al sector externo. Dos importantes aspectos estructurales de las economías de Latinoamérica también fueron cruciales en la medición de los efectos externos. Primero, algunos países todavía contaban con amplios sectores de campesinado de subsistencia, que en cierto grado fueron resistentes a las fluctuaciones del ciclo de negocios. Esto no significa que fuesen invulnerables: para 1930, la mayoría de los campesinos de Latinoamérica estaban hasta cierto punto vinculados al mercado económico como consumidores, proveedores de trabajo y productores (de bienes agrícolas y productos artesanales). Como consumidores (modestos), quizá se beneficiaron un poco con los precios bajos; como obreros —migrantes, jornaleros, aparceros— su ingreso cayó a la par de los salarios reales en general (un ejemplo extremo fue el de los trabajadores rurales del sector

cafetalero de El Salvador).[59] No obstante, incluso con la caída del ingreso (los términos del comercio tendieron a favorecer a los bienes manufacturados sobre los productos agrícolas, para su desventaja), los campesinos que tenían acceso a las tierras y producían alimentos básicos —maíz, chile, frijol, papa, mandioca e incluso café—, fuera para su consumo personal o para su venta en los mercados nacionales relativamente estables, sufrieron menos que los agricultores que cultivaban otro tipo de productos, en particular de exportación volátil (piénsese en los más pobres de Cuba).[60] En la mayor parte de Centroamérica los alimentos básicos fueron al parecer "muy abundantes" durante los años de la depresión mundial. En Nicaragua —a diferencia de El Salvador—, el sector del café era pequeño y la tierra más abundante; de tal manera que los trabajadores del azúcar despedidos "regresaron al sector campesino, como siempre habían hecho" en tiempos difíciles.[61] Durante su campaña en las Segovias, Sandino descubrió que a los campesinos no les faltaba comida (como ocurría entre los habitantes urbanos de las comunidades controladas por el gobierno).[62] En México, la supuesta caída de la producción agrícola (básica) y la subsiguiente inflación de los precios —por las que los consumidores urbanos tildaban a los campesinos de flojos (ejidatarios que ya poseían sus propias tierras de cultivo)— al parecer incrementó el consumo por parte de los propios campesinos.[63]

De este modo, en algunos casos la agricultura de uso local logró sacar provecho de la coyuntura de los años treinta, como Bulmer-Thomas afirma.[64] Los campesinos de subsistencia, por definición, producen para el consumo propio, y cuando el trabajo escasea o los salarios reales decaen, se refugian parcialmente en la producción de subsistencia.[65] De hecho, como Chayanov argumenta, mediante la explotación del trabajo familiar, los campesinos podían sobrevivir (si bien no prosperar) en circunstancias que habrían llevado a la quiebra a los agricultores comerciales.[66] Este fenómeno fue evidente en México, como hemos mencionado; en Honduras, donde los trabajadores del banano que habían sido despedidos podían subsistir en las "todavía extensas tierras ejidales" del país, o en Colombia, donde "la base campesina de la industria del café absorbió el costo de la caída de los precios de la tierra y los salarios, y enfrentó la baja en los precios del café mediante el incremento de la producción".[67] En particular en Mesoamérica y la región andina, amplios sectores del campesinado mitigaron los efectos de la crisis, algo que no ocurrió en El Salvador o Chile, donde dominaban las propiedades privadas y las masas de obreros desempleados (más de 50 000 trabajadores del nitrato en Chile, por ejemplo) no pudieron ser absorbidas de inmediato en las comunidades campesinas densamente pobladas.[68] Las familias campesinas —incluso los migrantes que daban la espalda a los mercados laborales urbanos contraídos— pudieron, dicho con la frase mexicana característica, "volver al quelite".[69] En parte de Centroamérica, el sector campesino también se volvió "un refugio para las masas de trabajadores rurales desempleados"; así, la "decadencia parcial del sector monetario del mercado interno" pudo resistir "sin consecuencias catastróficas".[70]

Tenemos aquí un ejemplo de cómo la desvinculación entre la economía y el dinero de exportación —como las más simples teorías de la dependencia proponen— tuvo la capacidad para reforzar el bienestar, al menos en tiempos difíciles. Evidentemente, la agricultura atravesó por sus propias crisis, generadas por condiciones climáticas adversas —heladas, sequías, inundaciones y plagas—, pero estos ecos de la antigua economía rural colonial (y precolombina) siguieron un ritmo muy distinto y aleatorio, en comparación con las fluctuaciones (relativamente nuevas) del ciclo de los negocios.[71] La producción ecuatoriana del cacao, ya mermada por la plaga "escoba de bruja", se desplomó en los años veinte, antes de la crisis mundial; en la década siguiente, la plaga del banano provocó más despidos y dificultades en Centroamérica que la propia depresión.[72] En algunos casos, no obstante, desastres naturales —como la prolongada sequía en el nordeste de Brasil en 1930-1932 o el terremoto que devastó Chillán (Chile) y sus alrededores en 1939— requirieron de la inmediata intervención e inversión del gobierno.[73] Aunque "exógenos" en términos de causalidad, tales desastres, en circunstancias adecuadas, podían contribuir a una mayor intervención estatal.

El segundo aspecto estructural es, en cierto sentido, el reflejo del primero. Para 1930, varias economías latinoamericanas habían adquirido sectores industriales significativos, alimentando el mercado doméstico y sacando provecho de una sustancial protección arancelaria. El ejemplo más obvio se encuentra en la industria textil, que en los países más grandes y ricos (México, Brasil, Argentina, Chile) había tenido un rápido crecimiento, sobre todo desde la década de 1890, y había recibido un mayor impulso con la primera Guerra Mundial.[74] Los países que contaban con plantas industriales textiles, pudieron incrementar la producción y sustituir las importaciones tras el agotamiento del intercambio internacional. En muchos casos, fue posible intensificar la capacidad de reserva (aumentando turnos de trabajo, por ejemplo), de manera que la inversión fresca no fue esencial.[75] Fue así que en los años treinta tuvo lugar un incremento rápido de la producción, no sólo en el ramo textil y de otros bienes de consumo, sino también, en algunos casos, de bienes de producción, como el cemento.[76] Entre 1932 y 1939, la producción manufacturera creció notablemente en las grandes economías latinoamericanas, superando —e impulsando— el crecimiento del PIB y, al mismo tiempo, cambiando el equilibrio de la producción nacional hacia las dinámicas regiones industriales, como São Paulo (Brasil) y Monterrey (México) (véase cuadro X.2).[77]

CUADRO X.2. *Crecimiento del* PIB *y producción manufacturera*

País	Crecimiento del PIB 1932-1939 (por año)	Crecimiento de la producción manufacturera, 1932-1939 (por año)
Argentina	4.4	7.3
Brasil	4.8	7.6
Chile	6.5	7.7
Colombia	5.8	11.8
México	6.2	11.9

FUENTE: Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence,* Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. 219, 226.

Es posible comparar estos casos —donde la combinación de una base industrial y un mercado nacional más amplio hicieron posible implementar la medida de industrialización por sustitución de importaciones (ISI)— con aquellos en los que el ISI tuvo un papel muy secundario en la recuperación, y donde dicha recuperación dependía de exportaciones renovadas o de la agricultura por sustitución de importaciones. Entre estos países se encuentran Perú, Cuba, Venezuela, Ecuador, El Salvador, Honduras y Nicaragua.[78] En Nicaragua, por ejemplo, el cónsul británico en Managua comentó acerca de la superficialidad del mercado nacional: el valor de las exportaciones de café se desplomó, los recortes salariales y despidos se generalizaron y "la población vive en los márgenes mismos de la subsistencia".[79] Cabe destacar que, en lo que respecta al ISI, el "volumen" constituyó una función del mercado (y, por lo mismo, de los ingresos disponibles), no sólo de la producción agregada o la población: tanto Costa Rica como Uruguay —aunque "pequeños"— implementaron el ISI a un nivel no alcanzado por los países centroamericanos (ni por Bolivia ni Paraguay); Venezuela, impulsada por las exportaciones de petróleo, tampoco emprendió el camino del ISI; tampoco Perú, donde "la reorientación de la (…) economía en los años siguientes a la crisis mundial fue ligera en comparación con otros países latinoamericanos".[80]

Si relacionamos esta historia de la industrialización con las comparaciones de otras naciones del mundo arriba mencionadas, queda claro que, dada la estructura de sus economías en 1930, la posición de los países latinoamericanos más grandes fue favorable para aprovechar las repercusiones externas de 1930, ya que la caída de los ingresos de las exportaciones impulsó un proceso de ISI, al menos hasta donde la capacidad y la demanda lo permitieron. Esta respuesta positiva reflejó a la vez una industrialización incipiente significativa —notable en la década de 1890—, que había sido estimulada más todavía por la primera Guerra Mundial.[81] Así, la crisis mundial aceleró un proceso ya existente (no creó algo de la nada). Asimismo, Latinoamérica encontró la oportunidad para implementar la etapa "sencilla" del ISI, para lo cual los aportes de capital y tecnología se limitaron a partir de entonces al ámbito de los empresarios nacionales.[82] La economía de los Estados Unidos, por

el contrario, se encontraba en una etapa más avanzada del desarrollo industrial; por lo mismo, se ha argumentado, acertadamente, que fue mucho más difícil para el país sacar a esa economía de la ciénaga de la depresión.[83] El ISI, acelerado o inducido de nuevo por la depresión, constituyó así otro ejemplo de desvinculación de la economía mundial, lo que produjo —en cierta medida— beneficios económicos, al menos para algunos sectores (amplios) de la sociedad en algunos países (grandes). Una vez más, los teóricos de la dependencia, hoy ampliamente ignorados o reprobados, no parecen estar tan equivocados.[84]

POLÍTICA DE LA GRAN DEPRESIÓN (COYUNTURAL)

Este tema "económico" general es bastante conocido, y los capítulos de este libro en realidad no cambian sustancialmente la interpretación existente (de la historia económica). Pero, ¿cómo se acomodan las reacciones "políticas" y "sociales" ante la crisis mundial?, algo que este libro en efecto aborda. En primer lugar, dichas acciones están sujetas a un mayor rango de variación y divergencia. Existen muchas formas de cultivar el trigo o de manufacturar, aunque los mercados del trigo y los productos fabriles son bastante uniformes a nivel mundial.[85] La política, tanto de la élite como popular, de arriba abajo o de abajo arriba, tiende a ser más agitada e idiosincrásica, susceptible a la toma de decisiones individual o de un grupo reducido. El concepto de *Natura non facit saltem* (la naturaleza no procede por saltos) podría tener relevancia en los procesos económicos, sobre todo en los grandes procesos estructurales del cambio demográfico, innovación tecnológica e inversión directa; pero la política en ocasiones salta —algunas veces hacia la oscuridad—, y los políticos con frecuencia disfrutan de retozar como "liebres de marzo" en cortejos de apareamiento.[86]

La historiografía política de los años treinta está impregnada, pues, por giros y vuelcos políticos repentinos y aparentemente estocásticos, algunos de los cuales, no obstante su aparente contingencia, tuvieron consecuencias decisivas. El golpe militar de 1930 en Argentina, el primer golpe exitoso del siglo XX en ese país, que puso fin a 14 años de democracia representativa, tuvo "sorprendentemente poca planeación" y "sólo fuerzas reducidas", la mayoría cadetes noveles.[87] La muerte de Juan Vicente Gómez cinco años después provocó un cambio rápido y sustancial en la política venezolana. La decisión del presidente Daniel Salamanca de declarar la guerra a Paraguay en 1932 fue en esencia una decisión personal y política, tomada "a pesar de la clara oposición de su propio alto mando", en un momento en el que el agobiado presidente se encontraba en un "estado de ánimo casi histérico".[88] La subsiguiente Guerra del Chaco (1932-1935), que afectó profundamente al Estado y a la sociedad de Bolivia —dominando "cualquier otro asunto […] durante toda la década de 1928 a 1938"— fue en esencia una tirada individual de los dados políticos, no un destino económico inevitable.[89] En ese mismo año, el presidente Sánchez Cerro —"quizá para

desviar la opinión pública" de los enemigos políticos del país— movilizó al ejército peruano para combatir contra Colombia por Leticia; en este caso, no obstante, no se desató una guerra.[90] Incluso la celebrada expropiación de las compañías petroleras angloestadunidenses en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, un supremo ejemplo de nacionalismo económico que tuvo consecuencias significativas en el largo plazo para la economía política mexicana y la mitología nacionalista de izquierda, obedeció principalmente a consideraciones de decoro nacional y de soberanía política; no fue una respuesta directa a la crisis mundial, ni fue una decisión económica calculada de coste-beneficio.[91]

Estas decisiones políticas individuales, con todas sus indudables repercusiones, podrían haber sido distintas: es decir, podríamos imaginar que el golpe en Argentina hubiese fracasado (muchos fracasaron en Chile en los años treinta), que Gómez hubiese fallecido antes o vivido más tiempo, que Salamanca hubiese prestado oídos a su alto mando y evitado la guerra con Paraguay, que Perú y Colombia hubiesen optado por la guerra, o que Cárdenas hubiese adoptado una política de "seguridad ante todo" hacia las intransigentes compañías petroleras, como algunos miembros de su gabinete le aconsejaron.[92] Éstos son contrafácticos "políticos" verosímiles que advierten en contra de adoptar una causalidad inevitable —o "predeterminada"—. Por el contrario, podría decirse que muchos resultados "económicos" fueron "predeterminados", es decir, contrafácticos fundamentalmente inverosímiles (por ejemplo, que Paraguay y Honduras hubiesen dependido del ISI para sacar a sus economías de la depresión, o que Brasil y México hubiesen evitado el ISI y optado por una recuperación impulsada por las exportaciones). Por naturaleza propia, esta *histoire événementielle* política no acepta modelos rigurosos ni generalizaciones cruzadas entre naciones.[93] Después de todo, el trigo y los productos fabriles son más susceptibles a ser medidos y comparados entre las naciones que los golpes militares o las decisiones presidenciales para iniciar una guerra.[94] Por eso comparto el escepticismo de Díaz Alejandro sobre la posibilidad de encontrar en la región latinoamericana patrones políticos comunes impulsados por la crisis mundial; más bien, vemos una "desconcertante variedad de caminos políticos", incluso entre países "con similares ingresos per cápita y cierto grado de apertura al comercio".[95] Esto es otra manera más simple de aceptar la "autonomía relativa" de lo político, la negativa de la política —sobre todo de las políticas coyunturales de corto plazo— para actuar como un mero reflejo del acontecer económico (incluso "en el análisis final").

No obstante, es posible plantear algunas reflexiones tentativas. La generalización más segura, cuya ventaja es que vincula claramente las repercusiones políticas y la causalidad económica (y es más o menos cuantificable), es que la depresión provocó seria inestabilidad política, manifiesta en un rápido cambio, muchas veces anticonstitucional, de gobierno —y de régimen—, no sólo en Latinoamérica sino en otras partes del mundo como España, Alemania, Grecia y Austria. Suelen citarse estadísticas crudas: 13 golpes de Estado exitosos en Latinoamérica en los años 1930-1934, seguidos por otros siete durante el resto de la década.[96]

Se dice que Ecuador sufrió 14 golpes de Estado en 10 años.[97] De forma más esquemática, en orden ascendente de importancia, podemos señalar tres categorías: *1)* cambios de gobierno constitucionales/graduales; *2)* cambios de gobierno anticonstitucionales (normalmente mediante un golpe militar), y *3)*, cambios de "régimen" anticonstitucionales.[98] Dentro de la primera categoría entrarían Colombia —donde los liberales regresaron al poder en 1930 y gobernaron (en algunos aspectos de manera innovadora) durante 16 años (por lo tanto, la crisis mundial condujo a la "república liberal")— y México —donde el régimen nacido de la Revolución perduró (e incluso adquirió más fuerza) y aun viró a la izquierda con Lázaro Cárdenas, adoptando políticas radicales respecto de las reformas agraria y laboral—.[99] En Colombia, el cambio se logró mediante las urnas; en México, aunque se recurrió a las urnas (éstas fueron robadas y llenadas con votos fantasma), el cambio derivó de una concatenación más general de luchas políticas de élite y populares, principalmente dentro de las filas del régimen (ejército, partido y organizaciones masivas aliadas). El resultado, en ambos casos, fue una innovación política significativa (y un giro a la izquierda), pero dentro de los términos del *statu quo ante*. Las reglas de juego anteriores a 1930 se modificaron, pero sin subvertirse.

La segunda categoría abarca lo que podría llamarse el golpismo clásico: cambios de administración (aunque no de régimen, por lo que hubo permanencia de las "reglas de juego" básicas) por medios anticonstitucionales (no electorales), lo que significa uso de la fuerza, por lo general la fuerza militar, pero en ocasiones también la violencia popular.[100] La destitución de Leguía por Sánchez Cerro en Perú en agosto de 1930 pudo ser indicio de que "Perú estaba en el umbral de una nueva era política", pero el resultado inmediato fue el remplazo de un líder y gobierno autoritarios por otros.[101] Asimismo, el propio Sánchez Cerro fue obligado a dejar el poder en 1931, aunque regresó en ese mismo año gracias a unas elecciones que "los historiadores en general han considerado (…) fraudulentas".[102] Tras su asesinato dos años después, el poder pasó a manos del conservador moderado Óscar Benavides.[103]

La sublevación de Getúlio Vargas de 1930 representó también una toma anticonstitucional del poder, consecuencia de las rivalidades de la élite y los estados principales de la Federación y en combinación con "la presión de la crisis económica mundial".[104] Sin embargo, no produjo un cambio inmediato de régimen; en ese tiempo, se veía "simplemente como otro capítulo en la historia de las querellas entre la lentamente cambiante élite", seguido por otros "siete años de agitada improvisación" antes de que el Estado Novo trajese un cambio de régimen genuino en 1937.[105] En 1930 Bolivia vivió también un cambio violento de gobierno con el derrocamiento del presidente Siles por el ejército; sin embargo, el cambio real de régimen —el advenimiento del "socialismo militar"— ocurrió seis años después, tras el revés decisivo de la Guerra del Chaco.[106] El primero de los (presuntos) 14 golpes de Estado ocurridos en Ecuador, en 1931, culminó con el violento —aunque no "demasiado" violento— derrocamiento del gobierno de Ayora, que fue seguido por la inmediata caída de su sucesor militar, Larrea Alba.[107] A esto siguió una sucesión de elecciones, golpes de Estado y

guerras civiles (la de agosto de 1932 fue particularmente severa); no obstante, si bien el primero y breve gobierno de Velasco Ibarra (1934-1935) marcó el advenimiento "del sobresaliente fenómeno de la política ecuatoriana del siglo XX", el populismo velasquista no logró un cambio de régimen definitivo, un Estado Novo ecuatoriano.[108]

El Estado Novo y el "socialismo militar" boliviano significaron violentos cambios de "régimen", no sólo de "administración". También ocurrieron en un periodo en el que los efectos inmediatos de la depresión habían retrocedido (particularmente en Brasil). Sin embargo, las tensiones de la crisis provocaron cambios de régimen de la tercera categoría en varios países.[109] Identificamos en primer lugar un síndrome característico del Cono Sur (Argentina y Uruguay): el derrocamiento por la fuerza de los regímenes constitucionales civiles y democráticos establecidos (y de la socialdemocracia, en el caso de Uruguay) y su sustitución por regímenes más conservadores y "oligárquicos", vinculados al ejército y en cierto modo representativos de las viejas élites terratenientes y exportadoras —lo que Paul Drake denomina "recuperación oligárquica".[110] En Argentina, en particular, este cerramiento político —o regresión— fue muy significativo, pues el uso de la fuerza militar para los cambios de regímenes (y, al mismo tiempo, para eliminar y proscribir a la oposición: a los radicales en los años treinta y a los peronistas en la década de 1960 y más adelante) se convirtió en un rasgo recurrente de la perversa "cultura" política del país. De manera indirecta, la crisis mundial y sus repercusiones políticas contribuyeron a "revertir el desarrollo" del país.[111] Por otra parte, Chile siguió un patrón muy distinto. El efecto inmediato de la depresión, en términos políticos, fue la caída del presidente autoritario Carlos Ibáñez y, tras un confuso hiato en 1931-1932, la restauración de la democracia electoral. Tras sofocar los "constantes complots" de sus oponentes políticos, principalmente Arturo Alessandri, "el general Ibáñez fue derrotado […] por el desplome de Wall Street y el inicio de la crisis mundial".[112] La democracia electoral permaneció intacta hasta 1973, aunque inicialmente estuvo amenazada. De tal manera que la depresión mundial tuvo repercusiones políticas definitivas aunque antitéticas.

En otra región latinoamericana encontramos el síndrome centroamericano, que también implicó cambios de régimen; en este caso, los regímenes oligárquicos civiles abrieron paso a los caudillos autoritarios provenientes del ejército o, en Nicaragua, de la recién creada Guardia Nacional (una sucesión que demuestra la importancia de la política de los Estados Unidos en la determinación de los acontecimientos políticos del Istmo).[113] El modelo no es uniforme (si es que puede permitirse el término), pero en cuatro de seis repúblicas prevaleció este cambio, aunque con ciertas variantes. Ubico (Guatemala) y Carías (Honduras) llegaron inicialmente al poder bajo la protección de una oligarquía constitucional, pero pronto se entregaron a la tarea de crear regímenes autoritarios severos y duraderos (Ubico, 1931-1944; Carías, 1931-1946); Somoza elaboró su elección de 1936 y, de la misma manera, creó un régimen y una dinastía prolongada.[114] Ubico, Somoza y Trujillo cultivaron también un estilo

político populista —vagamente demótico y sin ser remotamente democrático—. Fueron presidentes activistas e itinerantes que se acercaron al pueblo y coqueteaban con la reforma social, al menos como una acción inicial.[115] El Salvador representa un interesante caso *sui generis:* 1927-1931 representó "la primera época, y para algunos la última, de una democracia genuina en la historia del país" (al menos antes de la década de 1990), y el presidente Arturo Araujo, elegido democráticamente en 1931, fue un reformista progresista.[116] Sin embargo, fue derrocado por el ejército a fines de ese año, y la breve democracia cedió el paso a un régimen salvaje y represivo bajo el general Maximiliano Hernández Martínez.[117] Así, aunque el punto de partida fue distinto —el derrocamiento de un gobierno progresista y democrático—, el resultado fue similar: regímenes autoritarios perdurables, individualistas, en algunos casos populistas y, finalmente, "sultanísticos". La década de los años treinta fue testigo, en palabras de Bulmer-Thomas, "del surgimiento del caudillismo autoritario", un fenómeno cuya "causa principal […] fue la depresión en sí".[118]

En gran parte de Centroamérica la vieja oligarquía perdió terreno frente a hombres duros, individualistas y autoritarios, mientras que en el Cono Sur (fuera de Chile), la oligarquía recuperó el poder, colaborando en el derrocamiento de regímenes democráticos y en su remplazo por coaliciones militares y conservadoras. Así, en términos políticos puros, la depresión tendió a establecer un rumbo conservador y autoritario; Drake, por lo mismo, se refiere a los años treinta como una "década dictatorial", un capítulo clave en "la primera contraola" (19221942) de Huntington, esto es, el primer retroceso sistemático de la democracia después de los avances democráticos alcanzados antes de 1914.[119] Sin embargo, el proceso fue en parte aleatorio. No existió una regla estricta respecto del cambio político inducido por la depresión mundial; es decir, pudo implicar tanto una apertura como un cerramiento político, virajes a la izquierda o a la derecha. En Colombia, como ya hemos visto, la crisis contribuyó al ascenso de los liberales al poder (constitucionalmente), y, bajo López Pumarejo, los liberales no sólo adoptaron políticas socioeconómicas progresistas sino que además movilizaron amplios sectores de la población (dicho de otro modo, encontramos una apertura política —algunos quizá gustarían de llamarlo "empoderamiento"— y no un cerramiento).[120] Si los liberales hubiesen estado en el poder en 1930, quizás un cambio conservador habría estado al acecho (como en Argentina y Uruguay).

En Cuba, el derrocamiento por la fuerza de Machado, que claramente fue impulsado por el fracaso del régimen para enfrentar los serios problemas provocados por la crisis mundial, también estimuló una movilización popular generalizada, en la que participaron estudiantes, campesinos y obreros que, por primera vez en 1933, amenazaron con la formación de una revolución social.[121] Aun cuando Batista y su ejército lograron sofocar esta amenaza, el régimen subsiguiente, no obstante su corrupción, encarnó cierto grado de reforma populista, la cual Batista continuó cuando resultó electo como presidente en 1940.[122] En Chile, la crisis también derrocó al presidentedictador Carlos Ibáñez e impulsó un proceso de

redemocratización, pero en un contexto de gran agitación y polarización política —de ahí la breve república socialista de 1932 y el más relevante Frente Popular de 1938-1941.[123] Como mencionamos antes, no es coincidencia, sin duda, que los dos países que salieron peor librados en la lotería de los bienes —Chile y Cuba— hayan tenido que enfrentar las mayores protestas de izquierda y populares. Fueron también los dos países en los que la tensión económica tuvo un efecto democratizante, resultado que, por supuesto, se desprendió del hecho de que la crisis golpeó a Chile y Cuba en una época en la que el poder estaba en manos de regímenes autoritarios. En el único país latinoamericano que había pasado por una revolución social, México, la crisis definitivamente empujó al régimen a la izquierda (de manera bastante pacífica), garantizando la destitución de Calles y las reformas cardenistas radicales de mediados de los años treinta.

La explicación más simple y parca de estas circunstancias es que las crisis fiscales, pérdidas de trabajo y adversidades provocadas por la depresión mundial minaron a los gobiernos y regímenes en cuestión. Que el resultado haya sido, nuevamente en términos políticos, conservador (¿y desempoderante?) o progresista (¿y empoderante?) dependió en gran medida del carácter de *statu quo ante* político. En el Cono Sur (Argentina y Uruguay), antes de 1930, existieron regímenes civiles representativos competitivos; su descrédito y derrocamiento marcó el retroceso a un gobierno oligárquico más cerrado. En Centroamérica, al otro extremo de Latinoamérica, no sólo geográficamente sino también en términos de desarrollo económico y bienestar social, el *statu quo ante* normalmente involucraba oligarcas civiles, que ahora cedían el paso —en relación con el poder político al menos— a los caudillos autoritarios, algunos con sorprendente longevidad política. En Cuba, donde la depresión fue particularmente severa, la caída del régimen oligárquico —y neocolonial— de Machado dejó abiertas varias opciones, entre ellas la revolución social y la renovada intervención de los Estados Unidos; el resultado final fue un régimen más populista y reformista, y, de acuerdo con Domínguez, trajo un cambio del imperialismo a la hegemonía estadunidense.[124] En Colombia y México no ocurrió un cambio abrupto de régimen, sino un viraje a la izquierda entre las filas del propio régimen.

Una generalización segura, que no es nueva ni reveladora, es que la depresión mundial puso en tela de juicio, y a veces derrocó, a los regímenes/gobiernos en funciones, y que el rumbo político de cada país dependió en gran medida de la naturaleza de su *statu quo ante*.[125] Nuevamente, encontramos un paralelismo pertinente reciente: la crisis de la deuda de la década de 1980 ha recibido, acertadamente, el crédito de haber estimulado la diseminación de la democracia en Latinoamérica; en ocasiones, el vínculo causal se encuentra en la supuesta "afinidad electiva" entre el adelgazamiento del Estado neoliberal (presionado por la crisis de la deuda) y la democracia liberal (o "burguesa"). No obstante, un vínculo más sólido, aunque en cierta medida estocástico, quizá se encuentra en la deslegitimación de los regímenes en funciones, que en muchos países latinoamericanos fueron autoritarios en el momento (por

ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y México).[126] Parece menos probable que la Depresión mundial de los años treinta y la crisis de la deuda de los años ochenta ejercieran una discriminación; simplemente tuvieron un efecto negativo en los gobiernos en el poder.

Si bien la inestabilidad política provocada por la Depresión fue en muchos casos coyuntural y exógena (más que estructural y endógena), eso no significa que no tuvo consecuencias importantes. Los acontecimientos coyunturales pueden tener consecuencias perdurables e incluso estructurales.[127] Algunos cambios inducidos por la depresión —por ejemplo el derrocamiento de los radicales en Argentina— tuvieron consecuencias de largo aliento, como la injerencia del ejército en la política y la promoción de una política más dividida y exclusivista que perduró hasta bien entrado el periodo de la posguerra.[128] Por el contrario, el derrocamiento de Ibáñez en 1931 y la elección de Alessandri en 1932 inauguraron más de 40 años de gobiernos civiles democráticos en Chile.[129] Aparte de estas consecuencias institucionales perdurables, los años de la depresión generaron también algunos mitos y símbolos de largo alcance. El levantamiento revolucionario en Cuba —aunque no se tradujo en una revolución social exitosa— dejó un legado que los radicales cubanos subsiguientes, hasta Castro y el Movimiento 26 de Julio, supieron explotar a su favor.[130] En Centroamérica, la violenta represión del levantamiento izquierdista indígena de 1932, en El Salvador y la construcción del régimen-dinastía de Somoza después de 1936 constituyeron parteaguas decisivos en la historia política, y cuando los sistemas autoritarios impuestos se vieron sometidos a constantes ataques en las décadas de 1970 y 1980, resulta significativo que la oposición armada haya combatido bajo los nombres de Sandino y Farabundo Martí, héroes y mártires de los años treinta.[131] Incluso en los países en que prevaleció una mayor continuidad, como en México, el cambio del callismo al cardenismo también fue consecuente, ya que el cardenismo trajo consigo una reforma agraria contundente, una reformulación de la alianza entre el Estado y el sindicalismo, la nacionalización del petróleo y una cierta relajación entre la Iglesia y el Estado; el cardenismo también se convirtió en un punto de referencia fundamental para la izquierda nacionalista mexicana, tanto de élite como popular.[132] Para la izquierda, en particular, los años treinta fueron un fértil semillero para mitos y recuerdos heroicos.

Pero no olvidemos: *post hoc ergo propter hoc*. Resulta claro que es imposible atribuir a la depresión mundial algunos de los cambios políticos importantes. Juan Vicente Gómez no murió por causas económicas, y Venezuela, bendecido por el petróleo, no sufrió problemas macroeconómicos serios; por lo tanto, la movilización política de los años treinta presupone un reto para la explicación en términos económicos. Sin embargo, en el resto de la región latinoamericana, parte de la inestabilidad política de principios de los años treinta derivó, al menos parcialmente, en tensiones y problemas económicos. La secuencia causal —muy "estilizada", como suelen decir los economistas— es clara. Los trabajadores del sector exportador —mineros bolivianos y mexicanos, jornaleros de las plantaciones bananeras y

cafetaleras de Centroamérica, trabajadores chilenos de los campos salitreros— enfrentaron despidos y recortes salariales.[133] A todo lo largo de Latinoamérica, el descenso de las exportaciones y de los ingresos por la exportación redujo el ingreso gubernamental, que seguía dependiendo fuertemente de los impuestos del mercado externo, aunque ligeramente menos que una generación anterior (véase el cuadro X.3).[134]

CUADRO X.3. *Porcentaje del ingreso gubernamental derivado de los derechos de importación y exportación, 1929*

Argentina	47	Costa Rica	65	Nicaragua	60
Bolivia	46	Cuba	55	Paraguay	59
Brasil	44*	El Salvador	63	Perú	35
Chile	54	Guatemala	61	Uruguay	41
Colombia	55	México	41	Venezuela	51

* Ingreso federal.

FUENTE: Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence,* Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. 182, 110.

Cortos de fondos, los gobiernos tuvieron dificultades para pagar el servicio de la deuda pública y se vieron obligados a recortar el gasto público, lo que repercutió en menos obras públicas y trabajos. En algunos casos las penurias públicas alcanzaron un punto tal que a los empleados de gobierno no se les pagaba el salario o, en el caso de Honduras, recibían un supuesto pago en sellos postales. Cuando los empleados públicos sin paga pertenecían al ejército, como en Perú, el estímulo de rebelión fue todavía más grande: en el golpe de Estado que derrocó al presidente Leguía en agosto de 1930 estuvieron implicados oficiales jóvenes del ejército perjudicados por "el abrupto descenso de sus salarios a causa de la depresión".[135] Como ya hemos señalado, Argentina, bien entrenada en los principios de la ortodoxia y preocupada por mantener su valor crediticio, pagó sus deudas interna y externa con, como dice Marichal, "puntualidad suiza".[136] El servicio de la deuda argentina incrementó el gasto gubernamental de 6 a 16%, pero esta tendencia deflacionaria fue neutralizada con una política monetaria heterodoxa que impulsó la confianza interna y estimuló el resurgimiento.[137] En otros países de la región latinoamericana, la suspensión del pago fue la norma, comenzando por Perú y Bolivia; en México, la moratoria no significó gran cosa, pues había sido la norma desde 1913.[138] Respecto de la política monetaria, la mayoría de los gobiernos se esforzaron por apegarse al patrón oro, incluso con "empecinamiento mal dirigido", como en el caso de Chile; pero esta ortodoxia fue insostenible, en particular cuando Gran Bretaña abandonó el patrón oro en 1931, por lo que la cuestión clave fue entonces cómo los gobiernos, libres de

sus “grilletes dorados”, habrían de responder a esta nueva época de libertad.[139]

En las pequeñas repúblicas de Centroamérica, los recortes presupuestarios de los gobiernos fueron tan severos que, hacia mediados de los años treinta, Guatemala y El Salvador lograron atesorar pequeños excedentes presupuestarios. Sin embargo, puesto que dichos presupuestos se destinaron principalmente al mantenimiento de un Estado opresivo y de sus fuerzas represivas (así como a la distribución de recompensas patrimoniales para clientes favorecidos), es probable que los recortes tuvieran menos repercusión del que hubieran tenido si se hubiesen tratado de la educación, el bienestar y las obras públicas útiles.[140] Estas reacciones “pasivas” ante la depresión —los recortes públicos y, para bien o para mal, la continuada dependencia en las exportaciones para la recuperación— caracterizaron las economías más pobres de “Indoamérica”.[141]

Por el contrario, México adoptó políticas heterodoxas que implicaron la suspensión de los pagos de la deuda (que de todas maneras habían sido intermitentes) y la implementación de políticas reflacionarias (¿proto?)-keynesianas, al menos después de 1932.[142] La oferta de dinero se expandió, las reformas sociales (agraria y laboral) estimularon la demanda y las obras públicas (principalmente la construcción de caminos) crearon fuentes de trabajo. Brasil recurrió también al financiamiento deficitario, no porque Vargas fuese un protokeynesiano no ortodoxo, que no lo fue, sino porque las circunstancias políticoeconómicas favorecieron dichas políticas.[143] Una medida inmediata disponible fue la compra de los excedentes del café por parte del Estado, lo que tuvo un poderoso efecto reflacionario; asimismo, el sistema político brasileño permitió inyectar financiamiento tanto a nivel estatal como federal.[144] No es coincidencia que Brasil y México, favorecidos por el volumen de sus mercados nacionales, hayan logrado recuperaciones más rápidas y sostenidas.[145] En Colombia la oferta de dinero también se incrementó, y para finales de los años treinta, el ministro de Hacienda, Carlos Lleras Restrepo, se adhirió abiertamente a la “herejía keynesiana”: “el déficit público no era necesariamente negativo […] podía ayudar a la reactivación de la economía”.[146] Un elemento crucial de estrategia “[re]activa” —crucial aunque difícil de evaluar con precisión— fue el compromiso del gobierno para experimentar e intervenir, lo que contrarrestó el fatalismo y generó cierta confianza, incluso entre los empresarios.[147] Cárdenas no fue del agrado de las grandes empresas mexicanas, pero no puede negarse que sus políticas —que implicaron un equilibrio sensato entre la reforma social y el respeto a los mercados— se inclinaron en su favor.[148] Lo mismo aplicó para Roosevelt: su alcance económico fue débil, su política a menudo inconsistente, pero, haciendo hincapié en el papel creativo del gobierno, logró contrarrestar la idea de que todo estaba perdido, y en lugar de temor, fatalismo e inactividad, ofreció “acción, acción”.[149]

Hablamos ya de las reacciones coyunturales, ahora toca en turno tomar en consideración los cambios estructurales asociados con la depresión mundial.[150] Evidentemente, la distinción coyuntural-estructural no es definida. Los cambios coyunturales en el incremento en ocasiones pueden sumarse a las transformaciones estructurales. El ejemplo más obvio es el papel del Estado. Suele argumentarse que la depresión mundial marcó un cambio radical en el papel del Estado, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo.[151] En términos simples, el *laissez-faire* abrió paso al dirigismo. Existe evidencia, sin duda, de un cambio en el pensamiento oficial. El plan sexenal mexicano de 1934 destacó "el papel […] central del Estado en la reorientación y reestructuración de la sociedad", mientras que en Brasil el incremento de la intervención del Estado en la economía —las políticas heterodoxas antes mencionadas inclusive— también fue preámbulo de la ampliación más general y propositiva del Estado bajo el Estado Novo, que, a imitación del totalitarismo europeo, se extendió más allá de la economía hacia la cultura y la identidad nacionales.[152] En Bolivia, los militares tomaron el poder en 1936, comprometiéndose —en palabras del general y presidente David Toro— "a implantar un socialismo de Estado".[153] Incluso en Argentina, donde fueron mayores el compromiso por el *laissez-faire* y la sospecha de la élite de un Estado fuerte, los planes económicos promovidos en los años treinta y principios de la década de 1940 implicaron una mayor protección arancelaria y regulación de la economía por parte del Estado, particularmente en el ámbito de la política monetaria, mientras que el Plan Pinedo de 1940, redactado por el entonces ministro de Hacienda, comprometía al Estado a "un ambicioso esquema para promover la industria nacional" mediante un banco de desarrollo industrial, la comercialización estatal de los excedentes agrícolas y la compra de los ferrocarriles de propiedad británica. Aunque vetado por la Cámara de Diputados, el plan claramente prefiguraba la política peronista posterior.[154] En Cuba, la regulación estatal de la economía azucarera creció rápidamente en los años treinta, mientras que la Constitución de 1940 otorgó al Estado amplios poderes, en particular respecto de las relaciones laborales y la negociación salarial.[155] El proyecto de desarrollo del Estado más radical, aunque efímero, quizá fue el emprendido por el gobierno socialista chileno de 1932, proponiendo "reorganizar la economía chilena a través de un fuerte dirigismo", con un consejo económico nacional para coordinar una serie de organismos públicos responsables de los asuntos de "agricultura, minería, industria, transportación y comercio exterior".[156]

Este breve resumen de las iniciativas de Estado, que bien podría ampliarse, sugiere dos conclusiones inmediatas: primero, el compromiso de dirigismo se extendió a través de todo el espectro político e involucró a regímenes democráticos, autoritarios, militares y "revolucionarios", y, segundo, la retórica normalmente excedió a la realidad: independientemente de las promesas discursivas y los ambiciosos proyectos en papel, los Estados latinoamericanos no podían volverse leviatanes de la noche a la mañana (por el

contrario, sus capacidades fiscales y administrativas fueron en general bastante limitadas, como veremos más adelante), mientras que los grupos poderosos de la sociedad civil, entre ellos los empresarios y la Iglesia, desconfiaron de los compromisos oficiales con el fortalecimiento del Estado y con el "socialismo", por lo que estuvieron más que dispuestos a rechazarlos.[157]

No obstante, hubo una tendencia marcada de crecimiento en el papel del Estado tanto en regímenes de izquierda como de derecha. La tendencia fue más clara, casi por definición, en los países en los que, en términos de Díaz Alejandro, prevalecieron políticas "reactivas" y donde el volumen de la economía y del mercado hizo más factible la promoción estatal de la industria, como en México, Brasil, Chile y Argentina. Por el contrario, los Estados centroamericanos fueron principalmente "pasivos", aunque Somoza coqueteó con el sindicalismo e introdujo modestas reformas sociales.[158] Perú también fue una excepción (en parte, quizá, por el colapso y descrédito del régimen desarrollista de Leguía en 1930): las exportaciones revivieron, el ISI fue muy limitado y se evitaron los incrementos arancelarios. El liberalismo económico retuvo su atractivo en los círculos de formuladores de políticas, principalmente conservadores; la intervención estatal, mediante la promoción industrial y los bancos de desarrollo, tuvo que esperar hasta los años cuarenta, e incluso entonces fue poco entusiasta, breve y "pésima" en su actuación.[159] Aun en los países donde el Estado desplegó una retórica aparatosa, el compromiso práctico de intervención fue generalmente fragmentado y pragmático, inducido tanto por presiones políticas como por una visión política (Vargas representa el ejemplo por antonomasia; Cárdenas fue mucho más prudente y pragmático de lo que su imagen radical suele sugerir).[160] Sin embargo, es posible discernir, en medio de la experimentación pragmática y la retórica exagerada, un cambio (llamarlo paradigmático es tentador, pero probablemente resulte equivocado) hacia una mayor intervención del Estado en la economía, hacia el ISI, y, debido al creciente pesimismo en cuanto a las exportaciones, alejado de la vieja dependencia en el desarrollo hacia afuera (crecimiento impulsado por las exportaciones). En Argentina, Prebisch y Pinedo fueron tal vez los mejores exponentes de este cambio político, que no tardó en cristalizar en la ortodoxia del cepalismo de la posguerra.[161] Una vez más, la depresión mundial no indujo esta nueva mezcla política *ex nihilo*: existía una muy antigua tradición de protección arancelaria e intervención estatal en Latinoamérica, y, más cerca en el tiempo, la primera Guerra Mundial había subrayado la fragilidad del desarrollo hacia afuera.[162] No obstante, probablemente sería justo decir que la depresión, precedida por una guerra mundial y sucedida por otra, tuvo una influencia fundamental en la aparición de este nuevo enfoque de control "estructuralista" del Estado.

No se debe exagerar el efecto inmediato de este nuevo enfoque.[163] El crecimiento de los poderes del Estado durante los años treinta es claro en términos muy generales, pero la tasa de crecimiento y su efecto son difíciles de medir. En teoría, debería ser posible trazar la trayectoria ascendente del Estado: por ejemplo, rastreando el gasto público como porcentaje

del PIB. De hecho, las cifras suelen ser difíciles de obtener y tal vez no sean del todo confiables.[164] Lo que sí muestran, en algunos casos destacados, es un crecimiento en el gasto público relativo (véase cuadro X.4).[165]

CUADRO X.4. *Gasto del gobierno central en porcentaje del* PIB

País	*1900*	*1910*	*1920*	*1930*	*1940*	*1950*	*1960*
Estados Unidos	2.8	2.0	6.9	3.7	9.1	14.0	18.2
Cuba	–	7.3[a]	5.0[b]	10.3	12.7	11.6	14.8[c]
México	4.7	3.6	4.1	6.0	7.4	8.8	13.0
Guatemala	–	–	6.2[d]	11.5	10.7	7.3	8.9
Perú	3.6	4.4	4.5	11.5[e]	6.6	11.3	13.3
Venezuela	–	–	10.3	10.7	12.1	18.2	26.1
Argentina	10.6	8.9	5.2	11.4	11.0	14.0	12.5
Brasil	14.0	13.0	12.5[d]	11.4	9.6	8.7	9.5

[a] 1911; [b] 1919; [c] 1958; [d] 1925; [e] 1928

FUENTE: Cifras calculadas a partir de la Base de Datos de Historia Económica de América Latina Montevideo-Oxford (http://moxlad.fcs.edu.uy/ en.html).

Precisiones aparte, estas cifras pueden ser engañosas en varios aspectos: indican el gasto público, no el ingreso del Estado, y además reflejan el gasto del gobierno central, que, sobre todo en sistemas genuinamente federales como los Estados Unidos y Brasil, sólo representan una parte de la historia.[166] Sin embargo, ofrecen una guía aproximada, de la que podemos sacar algunas conclusiones sólidas (una vez más, conclusiones que tal vez no sean nuevas ni reveladoras). Primero, como lo demuestran las cifras de los Estados Unidos, la guerra, y en particular la "guerra total", incrementó significativamente el gasto gubernamental (de ahí el aumento de 2.8 a 6.9% en 1900-1920 y de 9.1 a 14.0% en 1940-1950). Los países latinoamericanos no reflejan ese incremento inducido por la guerra; incluso los que participaron en la segunda Guerra Mundial lo hicieron a una escala militar muy limitada, mientras que las guerras internas de Latinoamérica fueron pocas y relativamente menores (la Guerra del Chaco fue la mayor excepción). En la misma medida, el tipo de incremento en el gasto de armamento "antes de la guerra" —en ocasiones conocido como "keynesianismo militar"—, que, por ejemplo, impulsó la producción en Alemania y Japón, desempeñó un papel menor en Latinoamérica.[167] Las guerras totales también pueden inducir nuevos "pactos sociales", uniendo al gobierno y los ciudadanos en un esfuerzo conjunto, lo que sienta las bases de estados de bienestar perdurables, como en Europa Occidental y, en menor grado, en los Estados Unidos. Este fenómeno no existió en Latinoamérica, lo que ayuda a explicar los niveles relativamente bajos de gasto público (y tributario) y la correspondiente debilidad de

los regímenes de bienestar latinoamericanos.[168]

Segundo, las guerras serían menos significativas si en el periodo de la posguerra hubiese un "regreso a la normalidad", como Calvin Coolidge expresa elocuentemente; pero, de hecho, por lo general el gasto público "tiende a la alza"; de tal manera que una vez que se ha incrementado es difícil detenerlo (lo mismo ocurrió con los salarios después de la primera Guerra Mundial). Después de 1945, evidentemente, los países más beligerantes cambiaron su economía de guerra a economía de paz, pero el gasto público jamás regresó a los niveles anteriores a la guerra: el estado de bienestar y la Guerra Fría —esos extraños primos íntimos — lo prohibieron. De la misma manera, en Latinoamérica, donde el crecimiento del gasto público fue más gradual y no inducido por la guerra, los incrementos en rara ocasión se revirtieron. Por lo tanto, los incrementos de los años treinta tendieron a ser permanentes.

No obstante, es preciso considerar dos factores adicionales importantes. Primero, los incrementos de los años treinta fueron bastante modestos y continuaron los incrementos anteriores del gasto público. Como podemos observar en el cuadro x.4, el aumento del gasto público no fue repentino; así, tomando dos buenos ejemplos, es erróneo considerar a Cárdenas y Vargas como populistas despilfarradores de su economía, inclinados hacia la construcción de inmensos Estados híper atrofiados, pues equivaldría a usar y abusar de la historia en pro de debates económicos contemporáneos.[169] La preeminencia del Estado en los años treinta fue claramente gradual. Al contrario de lo que afirman algunos mitos vetustos, los Estados latinoamericanos jamás establecieron un compromiso consistente con los principios y políticas de *laissez-faire*; su "liberalismo" por lo general fue bastante antiliberal (por ejemplo, subsidios gubernamentales para infraestructura y el control coercitivo de la fuerza de trabajo), y debido a que la mayor parte de su ingreso dependía de los impuestos del mercado externo, el compromiso con un libre comercio exhaustivo habría significado un suicido fiscal. Por lo tanto, incluso durante el así llamado apogeo liberal de América Latina (de 1860 a 1914, aproximadamente), los Estados mantuvieron altos aranceles e intervinieron en la economía en otros aspectos.[170] Intervinieron en parte para crear las supuestas condiciones previas de liberalismo económico (acabando con la propiedad corporativa e induciendo, e incluso obligando, a los trabajadores a entrar en el mercado laboral). Estos medios no liberales tendieron a perdurar pues favorecieron a intereses poderosos (al mismo gobierno inclusive). Los medios se volvieron los fines. Si bien en los años treinta hubo un alejamiento de los principios de *laissez-faire*, esto no representó un cambio repentino ni drástico, sino más bien la continuación de un liberalismo económico para entonces ya fallido. Los aranceles subieron, pero no tuvieron que ser introducidos nuevamente; de hecho, puesto que los aranceles estaban aumentando en todo el mundo, parece probable que, en términos relativos, el proteccionismo latinoamericano, haya disminuido.

Para ofrecer una explicación de este cambio no es necesario recurrir a ningún identificador de tipo empresarial, católico, paternalista o patrimonial oculto bajo el superego superficial

del liberalismo.[171] Las circunstancias cambiaron y el desarrollo hacia afuera fue visto como una apuesta menos atractiva; el cabildeo doméstico clamaba protección y, por supuesto, las élites gobernantes suelen preferir las políticas que realzan al Estado sobre las que implican la renuncia de su poder y patronazgo. Así, el recurso de una mayor intervención del Estado fue fácil de asimilar (existía un paralelismo a nivel mundial, más allá de la cultura empresarial y católica de Latinoamérica), y además fue gradual, basado en políticas preestablecidas de protección e intervención gubernamental; también fue bastante modesto. El México revolucionario, del que se esperaba que emprendiera el camino del estatismo, impulsó gradualmente el papel del Estado en la economía de 4.1% del PIB en 1920 a 6.0% en 1930 y 7.4% en 1940.[172] El crecimiento gradual continuó durante décadas, incluso después de que la Revolución perdió su impulso radical: el verdadero hinchamiento del Estado, que condujo al surgimiento del leviatán del Partido Revolucionario Institucional tardío, no llegó sino hasta la década de 1970 y principios de los años ochenta.[173] Se aprecia también un modesto crecimiento gradual en casos tan disímiles como Venezuela y Guatemala; en Argentina, el gasto público del gobierno central permaneció más o menos estático, mientras que en Brasil tuvo una ligera caída y en Perú disminuyó de manera importante, cuando el gasto pródigo de Leguía tuvo su triste fin en 1930. En términos de crecimiento del Estado, por lo tanto, la década de 1930 fue un episodio importante, sin embargo no fue sino un solo episodio de una larga historia; el cacharro del dirigismo —todavía lejos de ser una aplanadora— ganó ímpetu, pero no tuvo que hacer un cambio de dirección de 180 grados.[174]

Resulta obvio que las cifras del gasto público con respecto al PIB sólo muestran parcialmente la historia, una parte que al menos es posible de medir y, por lo mismo, susceptible de evaluaciones que van más allá de las comparaciones semánticas: “mayor”, “creciente”, “más fuerte”, y así sucesivamente. Muchos elementos del aumento del poder estatal no se reflejan en el balance financiero; involucraron creciente control y regulación de la política fiscal y monetaria, de los intereses extranjeros y del movimiento sindical (lo que explica, en el caso de Cuba, el “Estado regulador” de Domínguez).[175] De hecho, los militares socialistas emprendieron la construcción de un régimen radical, nacionalista y reformista, a la vez que prometieron, paradójicamente, “un presupuesto equilibrado y una administración frugal”.[176] Los Estados desempeñaron entonces un papel mucho mayor en la regulación de las tasas cambiarias, el comercio exterior y, en cierta medida, en las inversiones extranjeras. Los bancos centrales —varios de ellos creados en los años veinte— adquirieron y ejercieron poderes adicionales.[177] En Latinoamérica, como en el resto del mundo, los aranceles aumentaron, como ya hemos mencionado; sin embargo, conforme los gobiernos y los crecientes sectores manufactureros abrazaron la causa de la industrialización, las tarifas arancelarias fiscales cedieron el paso a la protección de la industria (estilo ISI), y a cuotas y subsidios en favor de la industria nacional. La conferencia de Chapultepec de 1945 en México confirmó que los aranceles y el ISI habían llegado para quedarse.[178] Los Estados Unidos, si

bien fueron reacios a la intervención gubernamental en Latinoamérica, podían tolerar barreras arancelarias más altas, siempre y cuando las empresas estadunidenses pudiesen acometerlas estableciendo subsidios rentables dentro de los mercados nacionales protegidos. Así, el ISI adquirió un cierto impulso autosuficiente que produjo cambios en el poder económico (a grandes rasgos, de lo rural a lo urbano, de los terratenientes a los industriales), así como cambios geográficos congruentes de centros de actividad: el surgimiento de Monterrey y São Paulo, la hipertrofia de Buenos Aires y Santiago, la migración en Argentina del interior al litoral.[179]

El segundo elemento de la intervención estatal fue la regulación, y en ocasiones la expropiación, de los intereses extranjeros. Como sugieren las estadísticas de la intervención estatal en la economía, la regulación fue mucho más común que la expropiación: ningún Estado adquirió la propiedad a gran escala de empresas extranjeras. La mayor transferencia de propiedad fue la reforma agraria mexicana de los años treinta: aunque los terratenientes extranjeros padecieron, la mayoría de las víctimas fueron mexicanos, y puesto que los bonos agrarios que recibieron resultaron ser inútiles, la transformación de sus propiedades en ejidos representó una pérdida sustancial.[180] No obstante, dicha pérdida fue más consecuencia de la Revolución mexicana que de la Gran Depresión. La expropiación más drástica de intereses extranjeros también ocurrió en México: la nacionalización, en 1938, de las compañías petroleras angloestadunidenses, por lo cual después se pagó una modesta compensación. Por su prominencia política y económica, se trató de un caso poco común, sin paralelo en el resto de Latinoamérica en términos tanto de magnitud como de consecuencias. Cierto es que Bolivia nacionalizó la Standard Oil en 1937, pero en comparación fue una iniciativa y suceso menor.[181] En México, la fuerza que impulsó la nacionalización fue la militancia sindicalista, sin igual en Latinoamérica en el momento, sumado a una administración "revolucionaria" que —no es de sorprender a la luz de la historia mexicana— fue sumamente sensible al menosprecio de los Estados Unidos por su soberanía.[182] El petróleo fue un caso especial (la minería mexicana, un sector mucho más amplio, no resultó afectado); en otras partes de Latinoamérica, el petróleo fue el blanco de la política económica nacionalista, con una creciente regulación e imposición tributaria y la creación de nuevas compañías petroleras estatales. Sin embargo, "el nacionalismo del petróleo" afectó a los países importadores de crudo (como Argentina, Chile y Uruguay) más que a los exportadores (como México, Perú y Venezuela).[183] Fuera de México, el movimiento obrero tuvo menos presencia: las huelgas en la próspera industria venezolana del petróleo fueron contenidas con éxito.[184] México constituyó un caso especial debido a la Revolución precedente, el elevado nacionalismo y el consecuente impulso del movimiento obrero.[185] En Perú, las compañías petroleras extranjeras permanecieron prácticamente intactas; en Colombia, el gobierno, con el ánimo de promover las exportaciones, de hecho redujo los impuestos; en Ecuador, el "nacionalismo del petróleo" se extinguió y las compañías "fueron de nuevo dejadas en paz"; mientras que en Venezuela, las

alzas impositivas y la reforma laboral no llegaron sino hasta el triunfo de Acción Democrática en la posguerra.[186]

Una forma menos drástica pero más extendida de nacionalismo económico agrario moderado caracterizó a los años treinta. Los Estados buscaron modificar el equilibrio del poder y el ingreso entre los agricultores, por lo general pequeños agricultores, y las grandes compañías extranjeras. Este cambio obedeció tanto a las presiones ejercidas por los agricultores como a la percepción de que las compañías extranjeras se comportaban como enclaves independientes, física y políticamente, por lo que debían ser controladas.[187] Así, incluso a pesar de que la reforma agraria radical no formó parte de los planes de gobierno, excepto en México, las políticas de protección agrícola se generalizaron: en Cuba, a los colonos —"la clase más cubana"— les fue otorgada la seguridad de la tenencia, control de la renta y prioridad en la asignación de la cuota del azúcar, con lo cual, la "caña de la administración", el azúcar producido directamente por los grandes productores, la mayoría estadunidenses, descendió de 30% en 1930 a 10% en 1948.[188] En la República Dominicana, Trujillo también favoreció a los productores, campesinos y aun a los invasores de tierras, por encima de las grandes compañías extranjeras, haciendo referencia a Cuba como el ejemplo negativo de un perverso latifundismo antinacional.[189] Por otra parte, como ya hemos mencionado, las presiones ejercidas por los grupos cafetaleros nacionales, tanto en Colombia como en Centroamérica, se intensificaron durante los años treinta, en busca del apoyo del Estado en su relación con los exportadores extranjeros.[190]

Los Estados supervisaron y mediaron más sistemáticamente las disputas laborales, lo que, repetimos, no significó una innovación: la llamada cuestión social había preocupado a los pensadores y políticos desde principios de siglo; los años veinte, en particular, vieron el impulso de una serie de iniciativas al respecto: Leguía en Perú; Alessandri en Chile; y Calles en México.[191] Sin embargo, los tiempos difíciles y el conflicto industrial de los años treinta estimularon la adopción de nuevos códigos de trabajo y procedimientos de arbitraje industrial. En 1931, tanto México como Chile implementaron códigos nacionales de trabajo (países que contaban con movimientos laborales robustos y de gran magnitud), pero también aparecieron, más atenuadamente, en Costa Rica, Nicaragua y Ecuador, mientras que en Colombia la legislación hizo al presidente —el progresista liberal López Pumarejo en 1934-1938— "el árbitro supremo de la resolución de conflictos laborales".[192] El arbitraje laboral colombiano se extendió incluso al campo a través del Ministerio Nacional del Trabajo, que amplió su alcance para mediar en las disputas entre invasores de tierras y terratenientes.[193] Sin embargo, en general, la legislación laboral tuvo un enfoque urbano, normalmente fue acompañada por la represión estatal (el palo fue más largo que la zanahoria), y en algunos países prácticamente no existió. El embajador estadunidense en Honduras se regocijaba de que en el país "no hay (…) comunistas, sindicatos, leyes salariales o de seguridad social ni impuestos al salario", sino más bien una confianza en las "virtudes antiguas y ortodoxas del trabajo duro y la

frugalidad".[194]

En el extremo opuesto, no es de sorprender que en el México revolucionario haya emergido el sector laboral más militante y eficaz de todos, aliado, al menos con reservas, a la administración radical de Cárdenas y, como ya hemos señalado, capaz de disparar la crisis y expropiación del petróleo de 1938.[195] En Cuba, la alianza de Batista con el sindicalismo y el Partido Comunista Cubano también dio al movimiento obrero bastantes ventajas: en los años treinta, un observador estadunidense lamentó tiempo después que "las administraciones sucesivas aprobaron muchas leyes que otorgaban todo el apoyo al trabajo"; de tal manera, a principios de los años cuarenta, "todo el engranaje de la maquinaria gubernamental giraba en favor de los obreros".[196] En Argentina y Brasil —sobre todo en el Estado Novo brasileño— el poder del sindicalismo fue menor y la represión mayor. Pero incluso el "peleguismo" brasileño demostró que el trabajo no podía ser ignorado y debía ser apaciguado y controlado.[197] En el proceso, la vieja tradición anarquista latinoamericana se marchitaba: resultaba imposible, o al menos muy poco político, mantener una acérrima independencia del Estado en una época en la que éste se fortalecía, especialmente en el terreno de las relaciones laborales y la administración económica.[198]

Política de la Gran Depresión (social)

El creciente papel del Estado en las relaciones laborales, que contrastó —notablemente en Centroamérica— con su relativa indiferencia ante los problemas del campesinado,[199] ejemplifica un aspecto importante de la economía política de los años treinta, que constituye el tema final del presente texto. Los Estados se involucraron más sistemáticamente con una sociedad que transitaba por tensiones y cambios significativos, algunos coyunturales, otros estructurales. El involucramiento del Estado fue en parte una reacción a la presión de abajo arriba o, si se prefiere, a la militancia del pueblo.

Las tensiones coyunturales incluyeron altos niveles de desempleo y una caída de ingresos. En Chile, quizás el peor de los casos, el trabajo en el sector del nitrato colapsó, dejando a más de 50 000 obreros desempleados; el trabajo en el sector minero también descendió abruptamente.[200] Las consecuencias en México, similares pero menos severas, se agravaron con la repatriación de los Estados Unidos de más de 300 000 trabajadores migrantes.[201] En otras partes de la región, la recesión provocó la expulsión de los trabajadores migrantes extranjeros, sobre todo en Cuba, donde, en 1937 el nacionalismo económico se volcó hacia una marcada xenofobia en contra de los trabajadores migrantes haitianos y de las Antillas Británicas, quienes fueron despedidos y repatriados en masa.[202] En el mismo año, Trujillo, en la República Dominicana, fue más lejos todavía al emprender un brutal pogromo de los migrantes haitianos en el país. Alrededor de 15 000 fueron expulsados y otros 15 000

asesinados, la mayoría muertos a palos, acuchillados o destazados con machetes; muchos de ellos incluso cuando intentaban huir por la frontera hacia el occidente.[203]

La consecuencia demográfica más importante de la depresión mundial, aunque menos drástica, fue el cese de la migración europea al Cono Sur (Argentina, Uruguay y el sur de Brasil), que puso fin a un largo ciclo de movimientos poblacionales masivos de Europa a la "neo-Europa" de América del Sur, un ciclo que fue crucial no sólo para los países receptores sino también para Europa, en particular para el sur.[204] De tal manera, los años treinta fueron un parteaguas demográfico que "terminó con una época en la que la inmigración contribuyó notablemente al crecimiento de la población latinoamericana y condujo a un periodo de incremento por causas naturales".[205] En Argentina, en particular, esto eliminó uno de los pilares clave del crecimiento anterior a 1930 (los otros fueron la inversión británica y el desarrollo hacia afuera). La migración interna, del interior a Buenos Aires, adquirió fuerza a partir de finales de los años treinta; de tal modo que el fortalecimiento subsiguiente del movimiento obrero argentino y su importante alianza con Perón fue, si no directamente provocado, sin duda posibilitado por este giro demográfico.[206]

Ante el desempleo generalizado, los gobiernos, al menos en el corto plazo, carecieron de la voluntad o los recursos para crear trabajos y ofrecer una asistencia social eficaz; de hecho, los recortes presupuestales se reflejaron en una reducción de las obras públicas. La construcción de caminos, una prioridad estratégica y económica, finalmente se retomó conforme las economías revivieron y el ingreso público se recuperó; de tal manera que en los años treinta se aceleró la transición del transporte en ferrocarril (y en caballo y burro) al de los automóviles, camiones y autobuses.[207] El principal recurso de los desempleados fue la ayuda familiar, que, dependiendo de las circunstancias, en ocasiones significó el retorno a las faenas campesinas (como ya hemos mencionado), o, en sentido inverso, en la migración del campo deprimido a las florecientes ciudades. Vemos entonces corrientes de migración opuestas, tanto fuera de, como hacia, las ciudades: en el Cono Sur, donde las comunidades campesinas de subsistencia eran escasas, el flujo se dirigió hacia las grandes ciudades (Santiago, Buenos Aires, São Paulo); en "Indoamérica" (México, Guatemala, Perú, Bolivia), la agricultura de subsistencia, fortalecida por la reforma agraria en México, todavía logró contener el flujo y, por lo mismo, restringir una urbanización rampante.

Las adversidades generaron protestas, por supuesto. La Revolución cubana de 1933, que combinó penurias económicas, oposición a la dictadura corrupta de Machado y nacionalismo, fue quizá la tempestad política perfecta.[208] Protestas menos focalizadas ocurrieron a lo largo del continente: disturbios y huelgas en São Paulo en 1930-1931; tomas de tierras en Sumpaz, Quindío y el Valle del Cauca en Colombia; manifestaciones masivas de trabajadores desempleados del café en San Salvador el 1º de mayo de 1930.[209] En el campo chileno, destaca Loveman, la "resistencia" fue generalizada pero rudimentaria: tomó la forma de "robos, sabotajes, huelgas, disminución del ritmo de trabajo y actos individuales de

violencia"; dicho de otro modo, todas las "armas de los débiles".[210] No obstante, la concertación de acciones colectivas en lo más profundo de la depresión fue difícil de lograr y las autoridades generalmente estaban preparadas para recurrir a la represión. La severidad de los actos represivos varió según la naturaleza del régimen en cuestión. Las formas más extremas ocurrieron en El Salvador, donde un régimen autoritario y una élite en pánico optaron por aplastar los levantamientos populares, indígenas y de izquierda ("comunistas").[211] En Brasil, el régimen de Vargas también estuvo listo para emplear puño de hierro, oculto bajo una piel de oveja.[212] Por el contrario, como ya hemos señalado, los regímenes de izquierda y populistas fueron más condescendientes: en México, la CROM, corrupta organización callista, fue remplazada por la CTM, más radical y cardenista (y Luis Morones cedió el paso al agitador marxista Vicente Lombardo Toledano); en Chile, la afiliación sindical se duplicó entre 1935 y 1940; un crecimiento similar ocurrió en Colombia bajo el presidente López (1934-1938), donde el cardenismo quizá "sirvió como modelo" para la revolución en marcha.[213] En cada caso, un fuerte Partido Comunista tuvo un papel —dependiente y colaboracionista— en la movilización y reforma de izquierda, aprovechando otro "efecto de demostración" (global): el supuesto éxito de la Unión Soviética para superar las economías capitalistas estancadas de Europa y los Estados Unidos.

En la mayoría de los países, las movilizaciones políticas rurales quedaron rezagadas, o, como en El Salvador, fueron severamente reprimidas. Las principales excepciones fueron México, donde la reforma agraria radical de Cárdenas reflejó en cierto modo la presión de abajo arriba, y en menor grado Cuba, Chile y Colombia.[214] Hemos visto cómo en Cuba, los colonos (pequeños agricultores) presionaron para demandar seguridad en la tenencia de la tierra y mejor acceso al mercado invocando el sentimiento nacionalista. En Argentina se introdujo también una modesta legislación para proteger a los agricultores propietarios, mientras que los cultivadores de algodón del norte de Perú, respaldados por los socialistas, también aseguraron mejores términos, un indicador de la "creciente fuerza de los propietarios y su consecuente independencia de los grandes terratenientes".[215] Éstos quizás hayan sido cambios poco vistosos, de ahí tal vez la escasa atención que han recibido. En cuanto al radicalismo más llamativo de los años treinta, los campesinos y trabajadores rurales carecieron de una organización colectiva eficaz, al menos fuera de México y, con ciertas reservas, Cuba y Colombia. En los países donde las identidades étnicas rebasaron las divisiones de clase, y quizá las borraron, el radicalismo urbano no se diseminó fácilmente en el campo.

En Chachapoyas, ubicada al norte de los Andes peruanos, vieron en los años treinta "una desintegración del orden político basado en castas" cuando nuevas fuerzas populares —mas o menos los "sectores medios"— arrebataron el control local a las élites criollas establecidas, ya en declive.[216] Estos políticos advenedizos hicieron un llamado a los trabajadores (urbanos), artesanos, estudiantes y empleados pequeñoburgueses para demandar un gobierno

democrático, progresista y honesto; incluso emularon el jacobinismo francés al reorganizar el calendario: 1930 se volvió el "año uno de la Redención".[217] Sin embargo, estos movimientos urbanos radicales, inclusivos respecto de sus vecinos, por lo general fueron desconfiados respecto de la movilización de campesinos e indígenas, y al mismo tiempo permanecieron resueltamente patriarcales: los mestizos urbanos varones adoptaron el papel protagónico (igual que hicieron con los florecientes equipos locales de futbol); los campesinos, jornaleros e indígenas fueron en su mayoría excluidos, mientras que las mujeres, a lo mucho, tuvieron un papel secundario "inactivo".[218] Incluso en Chile, donde se realizaron esfuerzos radicales para ampliar las previsiones del Código de Trabajo de 1931 al campo, la élite terrateniente —y su influyente representante, la Sociedad Nacional de Agricultura— libraron una tenaz acción de retaguardia, desafiando el empuje de las intervenciones del Estado y de la izquierda. De hecho, en 1939, la izquierda acordó tácitamente detener la movilización campesina y "sacrificó la fuerza de trabajo rural con el fin de apoyar al Frente Popular".[219] La élite terrateniente logró comprar para sí 20 años o más de preeminencia rural y beneficio antes de que la movilización popular se reactivara a finales de la década de 1950, con drásticas consecuencias.[220] De hecho, esta cronología aplica también, *grosso modo*, a Bolivia y Brasil: en Bolivia, el activismo campesino se aceleró en los años cuarenta y logró importantes resultados con la Revolución de 1952, con la reforma agraria y la formación de poderosos sindicatos campesinos; en Brasil, como en Chile, la movilización rural generalizada, y por lo mismo amenazante, permaneció fuera de la agenda política hasta la década de 1960, cuando sirvió como catalizador para la intervención militar.[221]

El radicalismo popular de los años treinta —evidente, por ejemplo, en la breve República Socialista chilena de 1932, la ola contemporánea de huelgas de São Paulo y en la protesta universitaria de Bolivia— tendió a ser un fenómeno urbano en el que, además de obreros y artesanos, la organización sociopolítica relativamente nueva de estudiantes universitarios en ocasiones desempeñó también un papel de apoyo.[222] El activismo estudiantil tuvo raíces más antiguas, pues remontaba sus orígenes al menos a la época del movimiento de reforma universitaria argentina de 1918, y evidentemente siguió creciendo a partir de la década de 1940, reflejando en parte el crecimiento —"masificación", si se prefiere— continuo de la educación superior en Latinoamérica.[223] Se trató de un proceso gradual poco vinculado con la economía de la depresión (o la recuperación); en Venezuela, el activismo estudiantil en contra del régimen de Gómez antecedió a la depresión, mientras que en el lugar de nacimiento del movimiento estudiantil, Argentina, el activismo decayó durante los años del desacelere económico.[224]

Las mujeres también tuvieron un importante papel en las movilizaciones populares de principios de los años treinta: participaron en las "grandes huelgas de los trabajadores del tabaco" en Cuba y fueron prominentes tanto en el movimiento de las fábricas textiles de São Paulo como en las protestas, hoy prácticamente olvidadas, que resistieron el control

paternalista de la industria textil de Medellín en los años treinta.[225] Cuando el ejército arremetió en contra de los trabajadores huelguistas de la fundidora Asarco en Monterrey, "50 mujeres enardecidas ondeando banderas del sindicato" lideraron la resistencia.[226] Sin embargo, no queda claro si estas manifestaciones tuvieron repercusiones importantes. Si bien las mujeres tuvieron salarios sustancialmente menores que los hombres, por lo que una feminización de la fuerza laboral habría significado un recorte del gasto, la tendencia de contratación se dirigió en el sentido opuesto.[227] Es decir, la dirigencia sindical, abrumadoramente masculina, se inclinó principalmente a favor de la protección de los trabajos de los hombres, y por lo general fomentó el papel tradicional de la mujer (vinculada al hogar), sobre todo en tiempos de escasez de trabajos. Por su parte, la política gubernamental, fuera por razones ideológicas o por pragmatismo político, se alineó con los sindicalistas varones, situación particularmente clara en el Estado Novo.[228] Vargas ciertamente otorgó a las mujeres el derecho al voto en 1932, sin embargo, durante su gobierno, los votos no fueron realmente importantes. Un examen del mapa electoral de Latinoamérica en los años treinta revela que el sufragio femenino no tuvo un avance significativo, lo que sí representó una historia esencial en las décadas de 1940 y 1950.[229]

En términos estructurales de largo plazo, la depresión de los años treinta fue más relevante por su repercusión en la economía política de las ciudades y la industria, donde los gobiernos —algunos comprometidos con el ISI y la mayoría perfectamente conscientes de las ventajas de la "incorporación" del sindicalismo— se entregaron a la tarea de establecer, o reforzar, los vínculos con el trabajo urbano, normalmente masculino.[230] Dichos vínculos generaron a veces un empoderamiento "de abajo arriba", a veces una amenaza del control de "arriba abajo" y del estilo del liderazgo sindical o "peleguismo" brasileño. En cualquier caso, se manifestó el deseo del Estado para involucrarse en el movimiento obrero, a la vez que prevenía o aplastaba las movilizaciones más radicales de la clase obrera. Un resultado de este involucramiento fue la desaparición del anarquismo, cuya postura de rechazo al Estado se volvía anacrónica en una época en la que el gobierno comenzaba a otorgar concesiones, aunque fuesen modestas.[231] Al mismo tiempo, en el ámbito mundial, la Unión Soviética parecía demostrar la superioridad del Estado socialista, y, después de 1935, el surgimiento del frentismo popular se alzó como una alternativa claramente opuesta al fascismo. Así, tanto el populismo nacionalista como el comunismo internacional terminaron por destruir la vieja tradición anarquista.[232] Ningún proceso similar de movilización popular en combinación con la participación del Estado ocurrió en el campo (fuera de México y, de manera limitada en Cuba y Colombia). La población rural dispersa, que seguía conformando la mayoría de la población latinoamericana, carecía tanto de organización (sobre todo supralocal) como de influencia política; asimismo, en muchos países, marcados por profundas diferencias étnicas, los radicales urbanos, con toda su retórica nacionalista de clase, no lograron forjar vínculos de solidaridad inmediatos con sus camaradas campesinos. Por su parte, las élites

evidentemente trataron de evitar la creación de dichos vínculos.[233]

Como ya hemos mencionado, la política de la época de la depresión mundial estuvo impregnada de una fuerte carga de nacionalismo. Pero, una vez más, esto no fue nada nuevo; la principal contribución del nacionalismo de los años treinta, construido sobre antiguos cimientos, se enfocó en el nacionalismo económico. Bien racional y respetable, este nacionalismo económico podía justificarse mediante argumentos complejos ("estructuralistas") en relación con los términos del mercado y la protección de las industrias nacientes.[234] Sin embargo, el nacionalismo de esos años se volcaba fácilmente hacia la franca xenofobia en contra de intereses "extranjeros" y algunas comunidades, algunas de las cuales, como los indígenas de El Salvador o los judíos del Cono Sur, no tenían nada de "extranjero".[235] Las comunidades chinas en México, que ya habían sido perseguidas desde los años veinte, fueron expulsadas del país masivamente, mientras que, como ya hemos mencionado, los migrantes haitianos fueron expulsados de Cuba y República Dominicana (cuando no fueron asesinados, en el segundo caso, antes de que pudiesen huir).[236] El desempleo y las penurias económicas contribuyeron a esta reacción xenofóbica, que gobiernos como el de Trujillo explotaron sin vergüenza alguna. Los migrantes que competían por trabajo fueron victimizados, pero también lo fueron los empresarios extranjeros, o presuntamente extranjeros, que, como en el caso de los judíos o de algunos chinos en México, fueron acusados de abusar de los obreros nacionales. El extremismo y la violencia asociada con estos episodios contrastan drásticamente con la forma pacífica en la que México, por ejemplo, expropió las compañías anglo-estadunidenses.[237] Esto en parte reflejó la debilidad política-diplomática de los judíos y los chinos (y también de los haitianos), pero el contraste sugiere también que la proximidad social (los judíos y los chinos eran comúnmente pequeños comerciantes dedicados al menudeo o a la manufactura en pequeña escala) provocó mayor hostilidad popular, que los políticos oportunistas supieron explotar, sobre todo en tiempos difíciles. En el caso de los judíos, además, los antiguos sones del antisemitismo católico se combinaron aquí con el canto de sirena del fascismo europeo para generar un discurso seductor.

No es de sorprender que, en muchos casos, el nacionalismo de los años treinta haya asumido un carácter fascistoide que combinó actitudes antiextranjeras (como también antisemitas) y un discurso antiimperialista. En gran medida se trató de una suerte de espuma retórica, una imitación de la moda impuesta por los regímenes autoritarios aparentemente dominantes de Italia y Alemania. Una vez más, por lo tanto, tenemos aquí un "efecto de demostración" mundial, que por lo general se basaba en mala información proveniente de Italia, Alemania y la Unión Soviética, donde el denominador común fue más bien el desencanto desesperado por un orden capitalista liberal en bancarrota. La influencia del "fascismo", importado en el contexto radicalmente distinto de Latinoamérica, adoptó características variadas y diferentes. El antisemitismo mexicano arremetió en contra de los

judíos, que conformaban una comunidad reducida y socialmente marginal; pero, más importante aún, los conservadores clericales —como los sinarquistas— se inspiraron en el nacionalismo de Franco.[238] Los nazis chilenos fueron brutalmente reprimidos, siendo su principal logro ayudar al Frente Popular a llegar al poder, mientras que los integralistas brasileños —el mayor movimiento fascista de Sudamérica en los años treinta— fueron primero explotados y después sometidos por el astuto Getúlio Vargas, quien, podríamos decir, desempeñó el papel de Franco frente a la falange brasileña.[239] En Bolivia, el incipiente Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) ostentó inclinaciones fascistas, pero en el contexto de un país retrógrado —¿feudal?—, gobernado por una estrecha oligarquía, su programa nacionalista fue, en comparación con sus principales contrapartes fascistas europeas, indudablemente popular, progresivo e incluso empoderante.[240]

Con respecto al cambio social en general —urbanización, industrialización, migración interna—, la depresión mundial no fue sino un episodio dentro de una larga historia, un episodio distinto, aunque no necesariamente crucial y formativo. De la misma manera, la depresión afectó la construcción de los Estados en los años treinta en las formas antes descritas, sin embargo, muchos aspectos del proceso —mayor presupuesto y nómina públicos, mejores sistemas de comunicación (los caminos en particular), bancos centrales más sólidos, mayor intervención en la economía y, al menos en el ámbito urbano, mayor "penetración" del Estado en la sociedad— fueron graduales e implicaron la aceleración de tendencias previas, más que innovaciones radicales o cambios drásticos de dirección. Esto no sorprende, pues tendencias de esta índole obedecen a iniciativas súbitas. No obstante, en el mundo más volátil de la política, donde las vicisitudes son más comunes y en ocasiones pueden tener repercusiones importantes, hubo cambios en los años treinta, tanto en los gobiernos como en los regímenes, que en gran medida se debieron a causas económicas y cuyas consecuencias fueron perdurables (como el colapso de la democracia competitiva en Argentina o su recuperación en Chile). Esto ocurrió en un clima que parecía propicio para el activismo del Estado (que, una vez más, no fue nada nuevo, sino una simple cuestión de dirigir el activismo del Estado hacia fines distintos). Sin embargo, los subsiguientes cambios fueron notablemente diversos, quizá —subrayando lo obvio— debido a la diversidad intrínseca de Latinoamérica.[241] La coyuntura internacional también tuvo que ver con la diversidad y la experimentación: los Estados Unidos se encontraban distraídos con sus retos internos y las amenazas internacionales, y esas amenazas —en los años treinta, a diferencia de los años cincuenta— indujeron un cierto grado de restricción y tolerancia, representadas por la política del Buen Vecino. Los Estados latinoamericanos, incluso los del área circuncaribe que se encontraban bajo la influencia directa de los Estados Unidos, tuvieron un alto grado de autonomía, lo que permitió la implementación de políticas innovadoras nacionalistas, progresivas e incluso radicales; esto fue más claro en México, aunque también ocurrió en Cuba y Colombia.[242]

Considerando esta diversidad, no me convence que tenga sentido referirnos a los años treinta como una década en la que, digamos, el "populismo" haya sido la forma "preponderante" de la política latinoamericana, ya sea en forma democrática o autoritaria.[243] Esta tesis exagera el poder de explicación del concepto de *populismo,* además de que homogeniza la diversidad de las historias políticas del periodo.[244] También anticipa, por una o dos décadas, el florecimiento de populismos importantes, como el peronismo y el getulismo (tardío). Asimismo, los movimientos y los gobiernos agrupados bajo el encabezado de "populismo" —el cardenismo y el getulismo, quizás el batistismo, el somocismo e incluso el ubiquismo— fueron sustancialmente distintos; surgieron en contextos diferentes y tuvieron consecuencias distintas. En Chile, donde las reacciones políticas ante la depresión mundial fueron más abiertamente radicales, el populismo fue débil, y en Argentina, fue mantenido a raya por las élites conservadoras durante la Década Infame. Ningún historiador intentaría agrupar a toda la Europa de los años treinta —Hitler y Stalin, la Francia del Frente Popular y la Gran Bretaña de Stanley Baldwin— bajo una rúbrica política común; por el contrario, la década tuvo una marcada polarización y divergencia, sobre todo debido a las consecuencias de la depresión mundial. Lo que fue cierto en "Occidente" fue también cierto, *mutatis mutandis*, en "el extremo Occidente" *(l'extrême occident)*, es decir, América Latina.[245] Una conclusión prudente —por no decir cobarde— de este resumen de los efectos de la Gran Depresión en el Continente Americano podría, por lo tanto, ser la siguiente: que los efectos fueron muy diversos; que las aceleraciones (y retardamientos) de las tendencias existentes fueron mucho más comunes que los nuevos puntos de partida repentinos; que las tendencias comunes (caída de las exportaciones, presupuestos restringidos, inestabilidad política, intervencionismo estatal) se refractaron a través de diversos prismas nacionales, y que, aun si mantenemos algo de escepticismo respecto de su repercusión, la depresión mundial fue un episodio crucial en la evolución a largo plazo de los sistemas político y económico.

En comparación con Europa y los Estados en los años treinta, fue también un episodio más positivo y creativo. En este respecto, al menos, es comparable con la reciente recesión mundial posterior a 2008. Tal y como lo expresó una mujer de la clase trabajadora del sórdido y lodoso pueblo de inmigrantes, Berisso, Argentina: "En ese tiempo las cosas en Berisso iban muy mal, pero —recuerda— Berisso en los años treinta era lindo", era una comunidad joven atareada y animada "con mucha vida social", que no tardó en convertirse en un bastión del peronismo.[246] En el extremo opuesto de América Latina, en México, "comunidades en formación" comparables formaron la columna vertebral del cardenismo popular de los años treinta.[247] Así, mientras que "los treinta fueron sin duda años de crisis y penurias", las respuestas tanto de la élite como del pueblo podían ser creativas ("reactivas", en los términos de Díaz Alejandro) y constructivas. En Europa, durante esos mismos años, la depresión provocó guerra, regresión política y exclusión social; fue, de acuerdo con las célebres palabras de Auden, "una década baja y deshonesta"; en Gran Bretaña, Richard Overy ha

argumentado que se trató de una "década mórbida", en la que imperaba "una atmósfera de desesperación, impotencia o serio pesimismo".[248] No obstante la verdad acerca de Gran Bretaña o Europa, tal descripción no serviría para América Latina en los años treinta, donde, a pesar de la diversidad de la región como de los desastres que sufrieron muchos de sus habitantes, podría argumentarse que el balance final de la Gran Depresión fue mixto, que los retos indiscutibles de esos años muchas veces acarrearon acciones creativas y exitosas, y que Tom Payne quizá sólo haya exagerado un poco cuando observó que las crisis "tienen su utilidad: generan tanto bien como el daño que producen".[249]

[1] Debo señalar que el principal objetivo de este capítulo no es resumir los capítulos precedentes; hago referencia a ellos sólo en la medida en que lo requiere este resumen general.

[2] Podríamos comparar esta selección bastante ecléctica con el enfoque esencialmente económico abordado en Rosemary Thorp (ed.), *América Latina en los años treinta: el papel de la periferia en la crisis mundial*, FCE, México, 1988, que en algunos aspectos es el punto de partida de este volumen. Esta diversidad de enfoques refleja en parte los puntos de vista historiográficos de los últimos 30 años. Evidentemente, categorías como *económico, político, social* y *cultural* son conceptos generales y "controversiales"; no obstante, es difícil evitarlos (los participantes en recientes debates sobre la historia de la *cultura* asumen por definición la existencia de dichas categorías; véase la nota 8 en este cap.), por lo que *general* y *controversial* son aspectos comunes de muchos conceptos que nosotros, como historiadores o científicos sociales, utilizamos con frecuencia y por necesidad.

[3] Las decisiones políticas, en el sentido de las decisiones tomadas por los gobiernos y las élites políticas, tuvieron sin duda consecuencias importantes: consideremos la ortodoxia financiera prevaleciente en el momento, o ese "punto de retorno en la historia mundial", la ley arancelaria Smoot-Hawley de 1930; Charles Kindleberger, *The World in Depression: 1929-39*, Penguin, Londres, 1973, p. 134.

[4] Para un breve resumen, véase David Hackett Fischer, *Historians' Fallacies*, Harper and Row, Nueva York, 1970, pp. 166-167.

[5] Charles W. Anderson, *Politics and Economic Change in Latin America*, D. Van Nostrand, Princeton, 1967, p. 211; véase también el capítulo VI de este libro.

[6] Edelbert Torres-Rivas, "Crisis and Conflict, 1930 to the Present", en Leslie Bethell (ed.), *Central America since Independence*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, p. 77; Robert G. Williams, *States and Social Evolution, Coffee and the Rise of National Governments in Central America*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1994, p. 258, propone más bien una cercana conexión entre la depresión mundial, las tomas de tierras por parte del campesinado, la represión de la Guardia Nacional y la ofensiva de Sandino.

[7] Alan Knight, "The Rise and Fall of Cardenismo, c.1930-1946", en Leslie Bethell (ed.), *Mexico since Independence*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, pp. 245-246.

[8] Regresamos a la cuestión de las categorías analíticas, donde la de *cultura* es una de las más escurridizas y atractivas (una combinación peligrosa). De acuerdo con el robusto pensamiento científico, el antropológico inclusive, por *cultura* se entiende toda la información y prácticas que no se transmiten genéticamente y, por lo tanto, abarca todo el vasto universo de la *Historia* y de la historia *económica*. No obstante, como la mayoría de los historiadores, utilizo el concepto de *cultura* en el sentido común más estrecho que se refiere llanamente al arte, la literatura, la música, la recreación, la religión, etc. La historia de la cultura, igual que su historia social precursora, es normalmente una mezcolanza que, aún así, alcanza a distinguirse de la historia política (que se ocupa del Estado en sus diversas ramificaciones) y de la historia económica (que trata sobre la producción y el intercambio de bienes materiales). Existen, sin duda, importantes entrecruzamientos (el Estado está involucrado en la economía; la demanda de bienes materiales está parcialmente determinada por la cultura), pero las concatenaciones conceptuales son normales en el análisis histórico y no descalifican los conceptos usados *per se*, que son, en este caso, conceptos de la vida cotidiana del trabajo que son difíciles de evitar.

[9] Basado en Carl Hempel; para un resumen útil, aunque crítico, véase Fischer, *Historians' Fallacies, op. cit.*, pp. 128-129. La "versión reducida" es más cercana a la revisión probabilística de Hempel, donde las "leyes" inalterables se convierten en tendencias sólidas; así, como tendencia general, aunque no inevitable ni invariable, los gobiernos que dependen de los impuestos del mercado exterior pierden ingresos en tiempos de recesión, y los gobiernos que por ello optan por recortar presupuestos y trabajos también pierden apoyo político. Omito toda discusión sobre el escepticismo humeano sobre la causalidad que, aplicado a la historia, debilitaría todo el proyecto.

[10] Por esto me refiero a la falacia —como lo expresa Harry Lime en su famosa declaración en el filme *The Third Man* [El tercer hombre]— de que política, guerra, sociedad y cultura avanzan pie con pie estrechamente unidos, respondiendo a un ritmo común. Sobra decir que podemos afirmar la "autonomía relativa" de, digamos, la historia cultural, sin llegar al extremo de negar las conexiónes entre cultura, política y economía. Dickens es un comentarista elocuente sobre la industrialización, pero su obra no es una consecuencia de la industrialización como lo es la locomotora.

[11] Arthur Whitaker, "An Overview of the Period", en Mark Falcoff y Ronald *H. Dolkart* (eds.), *Prologue to Perón: Argentina in Depression and War, 19301943*, University of California Press, Berkeley, pp. 25-26; Peter Burke y María Lucía Burke, *Gilberto Freyre: Social Theory in the Tropics*, Peter Lang, Oxford, 2008, pp. 114-115. En relación con la

cultura popular, los autores comentan que las mordaces letras de los tangos de Enrique Santos Discépolo "destilan la amarga esencia del desencanto, la frustración de la década de la depresión argentina", pero los mismos autores señalan que Discépolo ya escribía letras similares en los más prósperos años veinte; Gustavo Sosa-Pujato, "Popular Culture", en Falcoff y Dolkart, *Prologue to Perón*, *op. cit.*, pp. 143-144.

[12] Como Whitaker observa, "la periodización por décadas es altamente artificial; sin embargo, en la historia argentina de la década de los años treinta" —atrapada entre el inicio de la depresión mundial y el estallido de la segunda Guerra Mundial — "lo es menos que en la mayoría de los casos"; Whitaker, "An Overview of the Period", *op. cit.*, p. 29. En el extremo opuesto del continente, en un contexto político muy diferente, el final de los años treinta supuestamente puso fin a la fase radical de la Revolución mexicana (una fase que fue iniciada por la depresión mundial); Alan Knight, "The End of the Mexican Revolution? From Cárdenas to Ávila Camacho (1937-1941)", en Paul Gillingham y Ben Smith (eds.), *Dictablanda: Politics Work and Culture in Mexico, 1938-1968*, Duke University Press, Durham, 2014, cap. 1.

[13] Celso Furtado, *Economic Development of Latin America*, Cambridge University Press, Cambridge, 1970, p. 39; James Dunkerley, *Power in the Isthmus: A Political History of Modern Central America*, Verso, Londres, 1988, p. 90, usa el mismo adjetivo para Centroamérica utilizado por Whitaker para Argentina; Whitaker, *op. cit.*, p. 29.

[14] Gabriel Palma, "External Disequilibrium and Internal Industrialization: Chile, 1914-1935", en Christopher Abel y Colin M. Lewis (eds.), *Latin America, Economic Imperialism and the State: The Political Economy of the External Connection From Independence to the Present*, Athlone Press, Londres, 1985, p. 328; véase también Albert O. Hirschman, *Journeys toward Progress: Studies of Policy-Making in Latin America*, Anchor Books, Nueva York, 1965, p. 240.

[15] Heywood Fleisig, "The United States and the World Periphery during the Early Years of the Great Depression", en Herman van der Wee (ed.), *The Great Depression Revisited: Essays on the Economics of the Thirties*, Nijhoff, La Haya, 1973, pp. 149-151. Los siguientes datos de mercado provienen de Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. 195, 197. Si utilizáramos los precios de 1929 en lugar de los precios deflactados de 1970, los coeficientes de mercado serían menores, particularmente en México; compárese Víctor L. Urquidi, *Otro siglo perdido: Las políticas de desarrollo en América Latina (1930-2005)*, El Colegio de México, México, 2005, p. 70, con Angus Maddison, *Two Crises: Latin America and Asia 1929-1938 and 1973-1983*, Development Center Studies, París, OCDE, 1985. Es interesante notar que el grado de cierre indicado por la caída del coeficiente exportaciones-PIB en los años treinta es la imagen opuesta al proceso de apertura experimentado en la década de 1970 y principios de la década de 1980; Eliana Cardoso y Ann Helwege, *Latin America's Economy: Diversity, Trends and Conflicts*, MIT Press, Cambridge, 1995, pp. 76, 93.

[16] Simon Collier y William F. Sater, *A History of Chile, 1808-1994*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 221-222; Michael Monteón, *Chile and the Great Depression: The Politics of Underdevelopment, 1927-1948*, Arizona State University Press, Tempe, 1998, pp. 36-37, 65-66.

[17] Alan Dye, "Why Did Cuban Cane Growers Lose Autonomy? 1889-1920", en John H. Coatsworth y Alan M. Taylor (eds.), *Latin America and the World Economy since 1800*, Harvard University Press, Cambridge, 1998, p. 326; Óscar Zanetti Lecuona y Alejandro García Álvarez, *Sugar and Railroads: A Cuban History, 1837-1959*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1998, p. 322-326.

[18] Herbert S. Klein, *Parties and Political Change in Bolivia, 1880-1952*, Cambridge University Press, Cambridge, 1969, p. 108; Enrique Ayala Mora, "Ecuador since 1930", en Leslie Bethell (ed.), *The Cambridge History of Latin America*, vol. 7, *Latin America since 1930: Spanish South America*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, p. 689; Bulmer-Thomas, *Economic History of Latin America*, *op. cit.*, p. 196; A. J. H. Latham, *The Depression and the Developing World, 1914-1939*, Croom Helm, Londres, 1981, p. 176, señala una "desastrosa" tendencia al descenso de los precios mundiales del trigo alrededor de 1925, lo que Derek H. Aldcroft, *From Versailles to Wall Street, 1919-1929*, Allen Lane, Londres, 1977, pp. 226-227, atribuye al incremento del volumen de producción durante la guerra, argumentando que el azúcar sufrió una sobreabundacia similar en la posguerra.

[19] Victor Bulmer-Thomas, "Economic Development over the Long RunCentral America since 1929", *Journal of Latin American Studies* 15 (1983), p. 273; Marcos Tonatiuh Águila M., *Economía y trabajo en la minería mexicana*, UAM , México, 2004, p. 53-58.

[20] El contraste es más claro en cuanto a la recuperación; así, la cuestión clave en relación con los Estados Unidos es "que fue causa de la duración excepcional de la depresión en los años treinta"; Michael A. Bernstein, *The Great Depression: Delayed Recovery and Economic Change in America, 1929-1939*, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, p. 3.

Véase también Robert Higgs, *Depression, War, and Cold War,* Oxford University Press, Oxford, 2006, cuyo primer capítulo se titula "Regime Uncertainity: Why the Great Depression Lasted So Long…". En los Estados Unidos, el PIB cayó 29% entre 1929 y 1932/ 1933; para 1937, la economía se había recuperado 29% de su nivel más alto anterior (1929), pero retrocedió 4% en 1938 debido a la "recesión de Roosevelt". Es así que la economía tardó una década entera (1929-1939) para recuperarse, e incluso entonces el desempleo siguió siendo persistentemente alto; Higgs, *op. cit.,* p. 6. Como señalo más adelante, la mayoría de las economías latinoamericanas recuperaron su estado anterior a la depresión mucho antes: Brasil en 1933; México en 1934; Argentina en 1935.

[21] El *locus classicus* es Stephen Haber, (ed.), *How Latin America Fell Behind: Essays on the Economic Histories of Brazil and Mexico, 1880-1914,* Stanford University Press, Stanford, 1993.

[22] Latham, *Depression and the Developing World…, op. cit.,* pp. 156, 168.

[23] Joseph L. Love, "Economic Ideas and Ideologies in Latin America since 1930", en Leslie Bethell (ed.), *The Cambridge History of Latin America,* vol. 6, *Latin America since 1930: Economy, Society and Politics,* parte 1, *Economy and Society,* Cambridge University Press, Cambridge, 1994, pp. 419-420. H. Rauspach, "The Impact of the Great Depresion on Eastern Europe", en Van der Wee, *Great Depression Revisited…, op. cit.,* no es muy útil.

[24] La producción industrial cayó 17% en el Reino Unido entre 1929 y 1932, pero 42% en Alemania y 46% en los Estados Unidos. No obstante, para 1937/ 1938, la producción del Reino Unido fue 31% más alta que en 1928/1929, y la producción alemana fue 22% más alta; por su parte, en los Estados Unidos la cifra fue de 4%. David Landes, *The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe From 1750 to the Present,* Cambridge University Press, Cambridge, 1972, pp. 391-394; W. Arthur Lewis, *Economic Survey, 1919-1939,* Allen and Unwin, Londres, 1953, p. 61, ofrece datos similares.

[25] Bulmer-Thomas, *Economic History of Latin America…, op. cit.,* p. 212. Los datos que ofrece el análisis abarcan 14 países.

[26] *Ibid.,* p. 219.

[27] Ibid., p. 231. Con respecto a Chile, véanse también los comentarios de Monteón, Chile and the Great Depression…, op. cit., pp. 124, 129, 131.

[28] Durante los años veinte se establecieron bancos centrales en varios países latinoamericanos, que adoptaron el cambio basado en el patrón oro; Furtado, *Economic Development of Latin America…, op. cit.,* pp. 71-72; BulmerThomas, *Economic History of Latin America…, op. cit.,* p. 116; Carlos Marichal, *A Century of Debt Crises in Latin America: From Independence to the Great Depression, 1820-1930,* Princeton University Press, Princeton, 1989, p. 204. Es evidente que no existe un patrón causal común entre estos heterogéneos países: Honduras, Nicaragua y Haití se encontraban bajo el tutelaje financiero de los Estados Unidos, por lo que no fueron actores económicamente independientes. Argentina, por el contrario, fue un actor independiente y el único de los países grandes de Latinoamérica que no interrumpió el pago de su deuda.

[29] Edgar Turlington, *Mexico and Her Foreign Creditors,* Columbia University Press, Nueva York, 1930; véase también el capítulo VI de este libro.

[30] Carlos Díaz Alejandro, "América Latina en los años treinta", en Rosemary Thorp (ed.), *América Latina en los años treinta: El papel de la periferia en la crisis mundial,* FCE, México, 1988, p. 34.

[31] Laurence Whitehead, "Bolivia since 1930", en Bethell, *The Cambridge History of Latin America,* vol. 7, …, *op. cit.,* pp. 515-516.

[32] Collier y Sater, *History of Chile…, op. cit.,,* pp. 218, 221; Whitehead, "Bolivia since 1930", …, *op. cit.,* p. 514, quien señala que "la depresión afectó más severamente a quienes estuvieron más cercanamente involucrados en la economía internacional".

[33] John Morton Blum, *From the Morgenthau Diaries: Years of Crisis, 19281938,* Houghton Miflin, Boston, 1959, pp. 199-204, 493-495; Frank Safford y Marco Palacios, *Colombia: Fragmented Land, Divided Society,* Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 275; Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram, *Peru, 1890-1977: Growth and Policy in an Open Economy,* MacMillan, Londres, 1978, pp. 157-159.

[34] Peter Flindell Klarén, *Peru: Society and Nationhood in the Andes,* Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 278.

[35] Thorp y Bertram, *Peru, 1890-1977…, op. cit.,* pp. 163-165; Ecuador también se vio beneficiado con una modesta exportación de petróleo; Osvaldo Hurtado, *El poder político en el Ecuador,* Editorial Planeta, Quito, 2003, p. 100.

[36] Latham, *Depression and the Developing World…, op. cit.,* p. 176-178; Kindleberger, *World in Depression…, op. cit.,*

pp. 83, 90; Dieter Rothermund, *The Global Impact of the Great Depression, 1929-1939*, Routledge, Londres, 1996, pp. 38-40.

[37] David Rock, *Argentina, 1516-1987: From Spanish Colonization to Alfonsín*, University of California Press, Berkeley, 1987, p. 232; Peter H. Smith, *Politics and Beef in Argentina: Patterns of Conflict and Change*, Columbia University Press, Nueva York, 1969, pp. 142-147; Roy Hora, *The Landowners of the Argentine Pampas: A Social and Political History, 1860-1945*, Oxford University Press, Oxford, 2001, 192-193, señala que la administración de Justo, quien ascendió al poder en 1932, "salvó al ganado al otorgarle más alta prioridad en el mercado".

[38] Para Roberto Cortés Conde, la recuperación de la depresión fue el comienzo de una alza sostenida, con un crecimiento del PIB per capita de 3% entre 1933 y 1947, un porcentaje muy superior que el anterior al periodo de la crisis (19121927), cuando el crecimiento mostró una ligera tendencia negativa, y mayor que los siguientes periodos del peronismo y el posperonismo (1947-1974), cuando el crecimiento descendió a 1.6%; Roberto Cortes Conde, *La economía argentina en el largo plazo*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, pp. 18-19.

[39] Rock, *Argentina…*, *op. cit.*, p. 231. Roy Hora, en el cap. I de este libro, argumenta que el principal beneficiario fue la próspera clase media urbana, que disfrutaba de movilidad social y un creciente poder de consumo; la clase obrera urbana del litoral, cuyo número se incrementó con migrantes del interior, no fue tan beneficiada (sino hasta la llegada de Perón al poder a fines de los años cuarenta).

[40] Albert O. Hirschman, *A Bias for Hope: Essays on Development in Latin America*, Yale University Press, New Haven, 1971, p. 11. La demanda de café en los países desarrollados tendió también a ser relativamente inflexible durante la recesión (los bebedores de café seguían necesitando su dosis de cafeína); de tal manera que los precios del café en los Estados Unidos tuvieron una caída de sólo 33%, mientras que en Brasil fue de 66%; Celso Furtado, *The Economic Growth of Brazil: A Survey From Colonial to Modern Times*, University of California Press, Berkeley, 1968, p. 204.

[41] Steven Topik, *The Political Economy of the Brazilian State, 1889-1930*, University of Texas Press, Austin, 1987, pp. 74, 86.

[42] Furtado, *Economic Growth of Brazil…*, *op. cit.*, pp. 203-213.

[43] Safford y Palacios, *Colombia…*, *op. cit.*, p. 275; Charles Bergquist, *Labor in Latin America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela and Colombia*, Stanford University Press, Stanford, 1986, pp. 308-309. Doug Yarrington, en el capítulo VI de este libro, hace referencia a la mala situación del café venezolano; no obstante, en términos agregados, el crecimiento de las exportaciones de petróleo compensó la situación con creces. En Colombia, el aumento de las exportaciones de oro también ayudó a compensar la contracción del precio del café.

[44] Victor Bulmer-Thomas, *The Political Economy of Central America since 1920*, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, pp. 59-60.

[45] Jeffery M. Paige, *Coffee and Power: Revolution and the Rise of Democracy in Central America*, Harvard University Press, Cambridge, 1997, p. 107; David McCreery, *Rural Guatemala, 1760-1940*, Stanford University Press, Stanford, 1994, pp. 312-316, quien también hace referencia a algunas previsiones de crédito estatal para las fincas cafetaleras en aprietos. El calificativo *represión del trabajo* es mencionado por Barrington Moore Jr., *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*, Penguin, Harmondsworth, 1967, pp. 433-434.

[46] Thorp y Bertram, *Peru, 1890-1977…*, *op. cit.*, pp. 175-176.

[47] Bill Albert, "The Peruvian Sugar Industry 1918-1939: Response to World Crisis", en Bill Albert y Albert Graves, (eds.), *The World Sugar Economy in War and Depression, 1914-1940*, Routedge Londres, 1988, pp. 71-84; Brian Pollitt, "The Cuban Sugar Economy in the 1930s", en Albert y Graves, *World Sugar Economy*, pp. 97-108, ofrece un buen resumen sobre el caso de Cuba.

[48] Zanetti Lecuona y García Álvarez, *Sugar and Railroads…*, *op. cit.*, p. 322; Juan Martínez Alier, *Haciendas, Plantations and Collective Farms*, Frank Cass, Londres, 1977, pp. 107-108; César J. Ayala, *American Sugar Kingdom: The Plantation Economy of the Spanish Caribbean, 1898-1934*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1999, pp. 239-241. Para una evaluación revisionista y, por mucho, positiva de los efectos del tratado Roca-Runciman, véase Peter Alhadeff, "Dependency, historiography and objections to the Roca Pact", en Abel y Lewis, *Latin America, Economic Imperialism…*, *op. cit.*, pp. 367-378.

[49] Jorge I. Domínguez, *Cuba: Order and Revolution*, Harvard University Press, Cambridge, 1978, pp. 84-87; Martínez Alier, *Haciendas, Plantations and…*, *op. cit.*, p. 93, observa "el comienzo de una muy severa interferencia gubernamental en la economía", a fines de los años veinte, con el colapso de los precios del azúcar; la recesión posterior a

los años treinta aceleró intensamente este incipiente proceso.

[50] Sobre el rápido crecimiento del comercio entre Alemania y Brasil en los años treinta (una gran parte bajo la forma de tratados bilaterales), véase Marcelo de Paiva Abreu, "The External Context", en Victor Bulmer-Thomas, John H. Coatsworth y Roberto Cortés Conde (eds.), *The Cambridge Economic History of Latin America,* vol. 2, *The Long Twentieth Century,* Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pp. 113-114. El comercio entre Alemania y Centroamérica (el café incluido) también se disparó en los años treinta, principalmente a expensas de los Estados Unidos; Bulmer-Thomas, *Political Economy of Central America…, op. cit.,* pp. 78-79.

[51] Éste es un capítulo crucial en la gran historia de la hegemonía comercial y financiera global que abre paso a la estadunidense, una transición que, en el contexto latinoamericano de los años treinta que nos ocupa, fue tan significativa como negativa, en tanto que los préstamos e inversiones británicos de ultramar tendieron a ser contracíclicos (se realizaron en tiempos de recesión doméstica), mientras que los préstamos estadunidenses fueron procíclicos, con lo cual su efecto fue de recesión en las exportaciones; Kindleberger, *World in Depression…, op. cit.,* 292-293.

[52] Rock, *Argentina…, op. cit.,* pp. 225-226; Raúl García Heras, "Foreign Business-Host Government Relations: The Anglo-Argentine Tramways Co. Ltd of Buenos Aires, 1930-1966", *Itinerario* 19, núm. 1 (1995), pp. 85-96.

[53] Cortés Conde, *La economía argentina…, op. cit.,* pp. 18-19. Sobre la política monetaria, véase Gerardo Della Paolera y Alan M. Taylor, "Economic Recovery from the Argentine Great Depression: Institutions, Expectations and the Change of Macroeconomic Regimes", *Journal of Economic History* 59, núm. 3 (1999), pp. 567-599.

[54] Brasil perdió 4% del PIB, Colombia 2.5%, y los dos países recuperaron los niveles de producción anteriores a la recesión en 1933. Estas cifras provienen de la Oxford Latin America Economic History Database (http://oxlad.qeh. ox.ac.uk). Otras fuentes concuerdan ampliamente. En el raro caso de Ecuador, la misma base de datos indica que la recesión no tuvo efecto alguno en el país, mientras que Ayala Mora, "Ecuador since 1930"…, *op. cit.,* p. 690, afirma que "la recesión mundial de 1929-1932 tuvo repercusiones devastadoras en la economía ecuatoriana". Cuando los estimados cuantitativos y cualitativos difieren a tal grado, ¿qué es lo que el investigador "profano" (no especialista en Ecuador) debe concluir? A pesar de mi lealtad a mi ciudad natal, me inclino por la versión de Ayala Mora, que es confirmada en cierto modo por Hurtado, *El poder político en el Ecuador…, op. cit.,* pp. 98-99, 317. Bulmer-Thomas, *Economic History of Latin America,* cap. 7, es breve e indefinido en lo que se refiere a Ecuador (e. g., 213).

[55] Enrique Cárdenas, *La industrialización de México durante la gran depresión,* El Colegio de México, México, 1987, pp. 34, 190.

[56] Las cifras de Chile provienen de la base de datos OXLAD (http://oxlad.qeh. ox.ac.uk); para Cuba, utilicé la información de Marianne Ward y John Devereux, "The Road Not Taken: Prewar Cuban Livings Standards in Comparative Perspective" (2010), en http://econweb.umd/~davis/eventpapers/CUBA.pdf

[57] Chile fue el único país no europeo que eligió un gobierno de frente popular; Collier y Sater, *History of Chile…, op. cit.,* pp. 224-225, 234, 240-243; Louis A. Pérez Jr., *Cuba under the Platt Amendment,* University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1986, capítulos 10 y 11; véase también el capítulo IX de este libro.

[58] Higgs, *Depression, War, and Cold War…, op. cit.*

[59] Paige, *Coffee and Power…, op. cit.,* p. 107.

[60] Pollitt, "Cuban Sugar Economy…", *op. cit.,* p. 102.

[61] Torres-Rivas, "Crisis and Conflict…", *op. cit.,* p. 74; Jeffrey L. Gould, *To Lead as Equals: Rural Protest and Political Consciousness in Chinandega, Nicaragua, 1912-1979,* University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1990, pp. 37-38.

[62] Gregorio Selser, *Sandino: General of the Free,* Monthly Review Press, Nueva York, 1981, p. 142 (Sandino sin duda señalaba un tema político).

[63] E. Alanís Patiño y E. Vargas Torres, "Observaciones sobre algunas estadísticas agrícolas", *Trimestre Económico* 12 (1945-1946), pp. 57-86.

[64] Bulmer-Thomas, *Economic History…, op. cit.,* pp. 224, 229.

[65] Un caso mucho más claro fue el de Asia, en el cual, argumenta Latham, *Depression and the Developing World…, op. cit.,* p. 185, "la recesión mundial tuvo mucho menor efecto (…) que el que habría producido un retraso en la llegada del monzón".

[66] Un buen ejemplo fundamental es ofrecido por Vincent C. Pelosi, *Peasants on Plantations: Subaltern Strategies of*

Labor and Resistance in the Pisco Valley, Peru, Duke University Press, Durham, 1999, pp. 138-149, quien describe cómo, tras el descenso temporal de la producción de algodón, los campesinos del valle de Pisco recurrieron a la agricultura de subsistencia, en particular a la producción de vegetales. Sin embargo, no era una opción fácil de seguir, pues debían depender del "trabajo no remunerado de sus hijos y esposas" para "encontrar consuelo en una escasa producción de granos". En todo Perú, argumenta Florencia Mallon, la recesión, al "obligar a las comunidades a regresar a la dependencia de sus propios recursos" y a los migrantes a volver a sus lugares de origen (las mismas comunidades), intensificó los procesos internos de "mercaderización" y diferenciación; Florencia Mallon, *The Defense of Community in Peru's Central Highlands*, Princeton University Press, Princeton, 1983, pp. 295, 305.

[67] Dunkerley, *Power in the Isthmus…*, *op. cit.*, p. 101; Safford y Palacios, *Colombia…*, *op. cit.*, p. 275. Hirschman, Journeys toward Progress…, op. cit., p. 141, señala también que, con la recesión y el recorte de las obras públicas, "los desempleados se movilizaron en masa para reintegrarse a sus familias en el campo". En la costa del Atlántico, los trabajadores del banano despedidos de la zona de Santa Marta también "se instalaron en los campos ociosos de la United Fruit Company, donde limpiaron pequeñas parcelas para sembrar"; Catherine Legrand, *Frontier Expansion and Peasant Protest in Colombia, 18301936*, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1986, p. 115.

[68] Paige, *Coffee and Power…*, *op. cit.*, p. 107; Collier y Sater, *History of Chile…*, *op. cit.*, p. 221; no obstante, como señala Monteón, *Chile and the Great Depression…*, *op. cit.*, pp. 75, 88, 178, el gobierno promovió el "lavado" de oro como solución para los desempleados, medida que provocó "cínicas carcajadas" en el Congreso cuando fue propuesto, pero que proporcionó alrededor de 34 000 empleos e impulsó de manera importante las exportaciones chilenas de oro. En relación con el sector rural, Chile y El Salvador son comparables con otras economías con exceso de mano de obra. En Turquía y Egipto, por ejemplo, ante el desgaste del colchón de la agricultura de subsistencia, el Estado descapitalizado recurrió a la explotación física de los campesinos pobres; Rothermund, *Global Impact of the Great Depression…*, *op. cit.*, pp. 80-81. Por el contrario, los países latinoamericanos, en general, carecieron de la voluntad o la capacidad para aumentar las presiones fiscales de sus habitantes, tanto ricos como pobres.

[69] Víctor L. Urquidi, *Otro siglo perdido: Las políticas de desarrollo en América Latina (1930-2005)*, FCE, México, 2005, p. 71, el "quelite" o chenopodium es una planta silvestre, semejante a la espinaca, con un valor nutritivo considerable.

[70] Torres-Rivas, "Crisis and Conflict…", *op. cit.*, p. 74. Nótese que incluso en los Estados Unidos, tan avanzado industrialmente, el presidente Roosevelt "soñaba con poner a un millón de familias en la agricultura de subsistencia, una idea quijotesca que incluso mencionó en su famoso discurso de toma de posesión; John A. Garraty, *The Great Depression*, Anchor Books, Nueva York, 1987, p. 131; David M. Kennedy, *The American People in the Great Depression: Freedom From Fear*, primera parte, Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 134. Por supuesto, cuando analizamos la recesión mundial de hoy, este colchón de subsistencia existe aún en partes de África y Asia (y podría volverse un factor crucial en caso de que la recesión golpee a China y revierta la migración masiva del campo a las ciudades ocurrida en décadas recientes), pero en la mayor parte del Continente Americano, como en Europa, ha perdido todo su relleno. En otras palabras, no queda más "quelite" para alimentarse.

[71] Las ciudades sin duda no fueron inmunes a las catástrofes naturales, que en ocasiones —como el "devastador" terremoto que azotó a Managua (Nicaragua) en 1931 y el que destruyó Chillán (Chile)— desempeñaron un papel importante en la historia político económica de los años treinta, aún cuando obedecieron a causas exógenas azarosas; Gould, *To Lead as Equals…*, *op. cit.*, p. 38; Collier y Sater, *History of Chile…*, *op. cit.*, p. 241.

[72] Hurtado, *El poder político en el Ecuador…*, *op. cit.*, p. 97; Steve Striffler, *In the Shadows of State and Capital: The United Fruit Company, Popular Struggle and Agrarian Restructuring in Ecuador, 1900-1995*, Duke University Press, Durham, 2002, p. 23. Por otra parte, Striffler señala que los estragos provocados por la llamada enfermedad de Panamá en Centroamérica fue lo que indujo a la United Fruit Company a expandir sus propiedades en la costa sur de Ecuador en los años treinta; Striffler, *op. cit.*, p. 55. Véase también BulmerThomas, *Political Economy of Central America*, p. 59.

[73] Hirschman, *Journeys toward Progress…*, *op. cit.*, pp. 63-64; Collier y Sater, *History of Chile…*, *op. cit.*, p. 241; Jody Pavilack, *Mining for the Nation: The Politics of Chile's Coal Communities From the Popular Front to the Cold War*, Pennsylvania State University Press, University Park, 2011, pp. 109-112.

[74] Bulmer-Thomas, *Economic History of Latin America…*, *op. cit.*, pp. 134135; Stephen A. Haber, "The Political Economy of Industrialization", en Bulmer-Thomas, Coatsworth y Cortés Conde, *The Cambridge Economic History of Latin America*, vol. 2, pp. 539-562; Stephen A. Haber, *Industry and Underdevelopment: The Industrialization of Mexico, 1890-1940*, Stanford University Press, Stanford, 1989, cap. 3; Gabriel Palma, "De una economía de exportaciones a una

economía sustitutiva de importaciones: Chile, 1914-1939", en Thorp, *América Latina en los años treinta…, op. cit.,* pp. 71, 73-74.

[75] Por otra parte, en los países con una fuerte demanda, la capacidad podía incrementarse con la compra de equipo de manufactura de segunda mano de los países industrializados fuertemente golpeados por la recesión; Furtado, *Economic History of Brazil…, op. cit.,* pp. 217-218; véase también Haber, *Industry and Underdevelopment,* pp. 166-167, 177.

[76] Werner Baer, *The Brazilian Economy: Its Growth and Development,* Grid, Columbus, 1979, pp. 93-96; Palma, pp. 43, 47; Haber, *Industry and Underdevelopment,* p. 176; y Haber, "Political Economy of Industrialization…", *op. cit.,* p. 562 ff.

[77] Bulmer-Thomas, *Economic History of Latin America,* pp. 219, 226, fuente de la que se tomaron los datos del cuadro X.2.

[78] Bulmer-Thomas, *Economic History of Latin America,* p. 212, 214.

[79] Gould, *To Lead as Equals…, op. cit.,* p. 38 (el informe consular data de noviembre de 1932).

[80] Thorp y Bertram, *Peru, 1890-1977…, op. cit.,* p. 147; Alfonso W. Quiroz, *Domestic and Foreign Finance in Modern Peru, 1850-1950,* MacMillan, Basingstoke, 1993, pp. 178-181, demuestra que en Perú la política monetaria y el crédito gubernamental tendieron a favorecer los intereses agroexportadores, en particular en el sector del algodón. Véase también Hurtado, *El poder político en Ecuador…, op. cit.,* pp. 99-100; y, sobre el auge petrolero venezolano de los años treinta (interrumpido brevemente en 1935 por la muerte de Gómez), B. S. McBeth, *Juan Vicente Gómez and the Oil Companies in Venezuela, 1908-35,* Cambridge University Press, Cambridge, 1983, pp. 209-210.

[81] Así, "el crecimiento de la industria manufacturera después de 1930 fue la ampliación y elaboración de un proceso que llevaba un tiempo en marcha…", al menos desde la década de 1890; Haber, "Political Economy of Industrialization…", *op. cit.,* p. 562. Palma, "De una economía de exportaciones…", *op. cit.,* pp. 70, 96-97, hace hincapié también en la industrialización anterior, en particular la impulsada en el caso de Chile por la primera Guerra Mundial.

[82] Por el contrario, en la década de 1960, varias economías latinoamericanas habían entrado en una etapa "difícil" de ISI, misma que, de acuerdo con el conocido argumento de Guillermo O'Donnell, estuvo relacionada con el inicio de los "regímenes autoritarios burocráticos" (evito intencionalmente delinear los procesos causales implícitos); véase David Collier, "Overview of the Bureaucratic-Authoritarian Model", en David Collier (ed.), *The New Authoritarianism in Latin America,* Princeton University Press, Princeton, 1979, pp. 25-26. Es sin duda completamente razonable aceptar la distinción del ISI sencillo/difícil sin tener que aceptar la tesis completa de O'Donnell. Para un análisis más completo, véase Hirschman, *Bias for Hope…, op. cit.,* pp. 85-123.

[83] Éste es el argumento central —que me parece persuasivo— de Bernstein, *Great Depression:* la economía de los Estados Unidos fue particularmente vulnerable a las vicisitudes del ciclo de negocios porque "se estaban gestando cambios drásticos en la demanda de los consumidores, la demanda de la inversión y los requisitos para la tecnología y el empleo"; Bernstein, *Great Depression…, op. cit.,* p. 36. Los cambios estructurales apreciables en, digamos, las economías contemporáneas de Brasil o México ("drásticos" o no) fueron mucho más conducentes a una recuperación rápida y sostenida de la demanda interna y el empleo, que en los Estados Unidos, donde hubo que esperar al auge inducido por la guerra y el gobierno en los años cuarenta. Conforme las circunstancias, las implicaciones teleológicas de "avanzados" son justificadas.

[84] No me disculpo por recurrir nuevamente a Hirschman, *Bias for Hope…, op. cit.,* pp. 25-26, quien en su análisis comparativo de las ventajas de las economías abiertas y cerradas (es decir, del desarrollo hacia afuera y el desarrollo hacia adentro) sugiere que una estrategia idónea podría ser "una alternancia adecuada de contacto y aislamiento, de apertura al comercio y el capital de los países desarrollados, seguida por un periodo de nacionalismo e introspección". Un análisis igualmente perspicaz de "vinculación" y "desvinculación" es propuesto por Carlos F. Díaz Alejandro, "Open Economy, Closed Polity?", en Diana Tussie (ed.), *Latin America in the World Economy,* Gower, Aldershot, 1983, pp. 21-53.

[85] Desde el siglo XIX, la globalización tuvo el efecto decisivo de integrar a los mercados y crear una convergencia del factor de precios (sujeta, claro está, a intervenciones políticas sobre aranceles, tributos y política monetaria); véase Kevin H. O'Rourke y Jeffrey G. Williamson, *Globalization and History,* Cambridge, MIT Press, Cambridge, en particular el capítulo 3.

[86] Aquí discrepo de Schumpeter, que hace mayor hincapié en la aceleración repentina, relacionada con la creatividad empresarial (en otras palabras, una especie de evolución económica "puntuada"). Estos saltos políticos —motivados, entre otras cosas, por consideracciones electorales— pueden tener repercusiones políticas importantes (normalmente negativas), por ejemplo la ley arancelaria Smoot-Hawley (véase la nota 3 de este capítulo).

[87] Rock, *Argentina, 1516-1987…*, *op. cit.*, p. 215. El hecho de que los golpistas hayan enfrentado "sólo una resistencia simbólica" fue sin duda significativo, lo que sugiere un desencanto generalizado por el *stau quo* político; no obstante, el hecho es que el derrumbe de dicho *statu quo* fue obra de una minoría reducida y no representativa. Paul W. Drake, *Between Tyranny and Anarchy: A History of Democracy in Latin America, 1800-2006*, Stanford University Press, Stanford, 2009, p. 168, generaliza este fenómeno —de cambio político violento llevado a cabo por las élites en lugar de la "gente común"— a todo el Cono Sur, Brasil incluido, entre las décadas de 1930 y 1970. Edgar J. Dosman, *The Life and Times of Raúl Prebisch, 1901-1986*, McGill-Queen's University Press, Montreal, 2008, p. 68, describe cómo el golpe militar argentino fue bienvenido con "una orgiástica aclamación pública espontánea", pero que su fuente principal era el "joven, y en rápido ascenso oficial del ejército", coronel Juan Perón.

[88] Klein, *Parties and Political Change…*, *op. cit.*, p. 179.

[89] Whitehead, "Bolivia since 1930…", *op. cit.*, pp. 517-518, quien agrega que "la guerra (…) no fue planeada deliberadamente para desviar la atención de la recesión"; de manera que no debemos presuponer de manera simplista que la recesión "provocó" la guerra.

[90] Klarén, *Peru…*, *op. cit.*, p. 276.

[91] Alan Knight, "The Politics of the Expropriation", en Jonathan C. Brown y Alan Knight (eds.), *The Mexican Petroleum Industry in the Twentieth Century*, University of Texas Press, Austin, 1992, cap. 4. Para 1938, el punto más bajo de la recesión había quedado seis años atrás, y si bien es cierto que la recesión de "Roosevelt" de 1937 (la segunda mitad del "clavado doble") había afectado a México, esto, si acaso, sólo tuvo efectos negativos en medidas riesgosas como la expropiación petrolera.

[92] Collier y Sater, *History of Chile…*, *op. cit.*, pp. 223, 224, 225-226, 233; algunas de estas decisiones fueron el fallido golpe de Estado "nacista" de 1938 y el intento de golpe militar de 1939 ("el ariostazo"), bien descrito por Joaquín Fernández, "El Ariostazo: la política por otros medios", en *XX. Historia del siglo XX chileno*, Vergara, Santiago, 2008, pp. 185-230.

[93] Esto, podríamos agregar, a pesar de los grandes esfuerzos de ingeniosos científicos políticos, desesperados por realizar estudios políticos tan rigurosos, cuantitativos y positivistas como los estudios económicos —o, tal vez deberíamos decir, como los economistas afirman hacer.

[94] Las elecciones y los votos del congreso son una cuestión aparte, y los científicos políticos de hoy cuentan con la gran ventaja de estudiar una Latinoamérica en su mayor parte democrática, que proporciona grano suficiente para la molienda estadística; hace 80 años, las elecciones fueron menores en número y menos limpias, mientras que los datos cuantitativos secundarios —como las encuestas de opinión— fueron muy escasos.

[95] Díaz Alejandro, "Open Economy, Closed Polity?…", *op. cit.*, p. 31. (la observación hace referencia particular a Chile, Cuba y Uruguay).

[96] Drake, *Between Tyranny and Anarchy…*, *op. cit.*, p. 165.

[97] Charles W. Anderson, *Politics and Economic Change in Latin America*, Van Nostrand, Princeton, 1967, pp. 219-220.

[98] Existe, claro está, una categoría conceptual (4): cambios constitucionales de régimen, no sólo de gobierno. El mejor ejemplo podría ser Brasil y la nueva Constitución de 1934, de breve duración; no obstante, si bien el proceso fue constitucional, la nueva carta no representó un rompimiento radical con el pasado; véase Thomas E. Skidmore, *Politics in Brazil, 1930-1964: An Experiment in Democracy*, Oxford University Press, Nueva York, 1967, pp. 19-20. La Constitución cubana de 1940 —momento en el que Cuba "se convirtió en una democracia formal"— fue más significativa, pero esto ocurrió una década después del inicio de la recesión mundial, una década en la que Cuba experimentó cambios políticos importantes; por lo mismo, es difícil atribuir la Constitución de 1940 a la recesión de manera directa o aproximada; véase Robert Whitney, *State and Revolution in Cuba: Mass Mobilization and Political Change, 1920-1940*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2001, p. 180.

[99] Safford y Palacios, *Colombia…*, *op. cit.*, p. 288; Knight, "Rise and Fall of Cardenismo…", *op. cit.*

[100] Como se menciona en la nota 98, sería debatible cuando ocurre un cambio de régimen (a diferencia de un gobierno). Se trata de "juicios subjetivos" que requieren de un conocimiento más detallado de las políticas en cuestión, de manera que me alegra diferir de los expertos que saben, mejor que yo, cuándo las reglas del juego realmente cambiaron o no.

[101] Steve Stein, *Populism in Peru: The Emergence of the Masses and the Politics of Social Control*, University of Wisconsin Press, Madison, 1980, p. 18. Véase también Paulo Drinot, *The Allure of Labor: Workers, Race and the Making of the Peruvian State*, Duke University Press, Durham, 2011, p.125.

[102] Stein, *Populism in Peru*, p. 189. Stein, debemos aclarar, cuestiona que la elección de 1931 haya sido todo lo fraudulenta

que suele suponerse.

[103] Klarén, *Peru…*, *op. cit.*, pp. 274-278.

[104] Skidmore, *Politics in Brazil…*, *op. cit.*, p. 7.

[105] *Ibid.*, p. 7-8.

[106] Whitehead, "Bolivia since 1930…", *op. cit.*, pp. 511, 513, 521. Como señala Klein, *Parties and Political Change…*, *op. cit.*, pp. 227-228, los militares pusieron fin a 50 años de un gobierno civil oligárquico; asimismo, a diferencia de muchos golpes de Estado en Latinoamérica (véase la nota 87), éste no sólo se desarrolló sin derramamiento de sangre, sino que además fue "aceptado con gusto por la mayoría de los bolivianos", quienes vieron en el ejército "el único instrumento viable para la creación de una nueva atmósfera política y la 'justicia social' que todos exigíamos". No se ofrece ninguna evidencia específica; posiblemente se trata de una inferencia sacada de los acontecimientos de ese año.

[107] Ayala Mora, "Ecuador since 1930…", *op. cit.*, p. 693.

[108] *Ibid.*, p. 695.

[109] No es fácil establecer una definición precisa de *inmediato*, pues implica cuestiones tanto temporales como causales. En términos generales, nos referimos al desarrollo de acontecimientos durante el punto más "bajo" de la depresión (que, como hemos mencionado, varió de un país a otro) y que razonablemente puede ser atribuido a factores económicos.

[110] Drake, *Between Tyranny and Anarchy…*, *op. cit.*, p. 158.

[111] Carlos Waisman, "Counterrevolution and Structural Change: The Case of Argentina", *International Political Science Review* 10, núm. 2 (1989), pp. 159174, resume esta tesis; como señala Waisman en las pp. 161-162, en los 50 años subsiguientes a 1930, Argentina estuvo sometida a 19 años de gobierno militar, 13 años de peronismo y 19 años de "democracia limitada", con la proscripción de radicales y peronistas en ésta última.

[112] Collier y Sater, *History of Chile…*, *op. cit.*, p. 221, y para un buen análisis detallado, Monteón, *Chile and the Great Depression…*, *op. cit.*, cap. 2. Francisco E. González, *Creative Destruction? Economic Crises and Democracy in Latin America*, Johns Hopkins University Presss, Baltimore, 2012, p. 53, concluye que "Chile fue el único país latinoamericano capaz de deponer a un régimen autoritario durante la Gran Depresión" —presuntamente en favor de la democracia y no de otro régimen autoritario—. Cuba (1933) también podría entrar en esta categoría.

[113] Sin embargo, como señala Bulmer-Thomas, la influencia de los Estados Unidos sólo afectó de manera significativa a Nicaragua; de hecho, en El Salvador y Guatemala los Estados Unidos se opusieron al resultado de los acontecimientos políticos; Bulmer-Thomas, *Political Economy of Central America…*, *op. cit.*, p. 67. En República Dominicana, no obstante, los Estados Unidos desempeñaron un papel similar con el establecimiento de la Guardia Nacional y el desarme del campesinado para ventaja de Rafael Trujillo; Richard Lee Turits, *Foundations of Despotism: Peasants, the Trujillo Regime, and Modernity in Dominican History*, Stanford University Press, Stanford, 2003, pp. 80, 82.

[114] Knut Walter, *The Regime of Anasatsio Somoza, 1936-1956*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1993, pp. 59-63.

[115] Sobre Trujillo, véase el excelente análisis de Turits, *Foundations of Despotism*. Gould, *To Lead as Equals…*, *op. cit.*, p. 15 y segunda parte; hace hincapié en el "populismo somocista", mientras que Jim Handy, *Gift of the Devil: A History of Guatemala*, South End Press, Boston, 1984, pp. 94-99, retrata a Ubico como un hombre honesto, popular y paternalista (también como represivo y "patológicamente reservado"); si acaso llevó a la práctica el "populismo" (término evitado por Handy), fue en el estilo del "populismo" de los viejos caudillos, un retroceso al siglo XIX. Dunkerley, *Power in the Isthmus…*, *op. cit.*, p. 88, es escéptico sobre el uso del término en la Centroamérica de los años treinta, "donde las políticas locales durante la recesión mundial estuvieron desprovistas de los elementos populistas normalmente adoptados en otras partes" de Latinoamérica. Por otra parte, considera a Somoza como "bonapartista"; Dunkerley, *Power in the Isthmus*, pp. 89, 103.

[116] Paige, *Coffee and Power…*, *op. cit.*, pp. 110-111.

[117] Véase el capítulo VII de este libro.

[118] Bulmer-Thomas, *Political Economy of Central America…*, *op. cit.*, p. 67. A pesar de los "estragos de la recesión", tanto Costa Rica como Panamá (que permanecieron bajo cercano tutelaje político y financiero de los Estados Unidos) evitaron caer en los extremos del caudillismo totalitario, Costa Rica con la adopción de "una versión de caudillismo tico"; Bulmer-Thomas, *Political Economy of Central America*, p. 64; véase también Almon R. Wright, *Panama: Tension's Child, 1502-1989*, Vantage Press, New York, 1990, pp. 215-224.

[119] Hago hincapié en la condición "exclusivamente política" pues, como señalo más adelante, las políticas "económicas" de estos nuevos regímentes autoritarios en ocasiones fueron innovadoras y muy poco "conservadoras". Drake, *Between Tyranny and Anarchy…, op. cit.,* p.165, donde el autor cuantifica también la tendencia dictatorial: entre 1928-1930 y 1932-1934, Latinoamérica pasó de tener 14 democracias (o, en varios casos, "repúblicas oligárquicas") y seis dictaduras, a 10 "democracias" y 10 dictaduras. Sobre la "primera ola de reversión", véase Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century,* University of Oklahoma Press, Norman, 1991, p. 16.

[120] Legrand, *Frontier Expansion…, op. cit.,* en los capítulos 6 y 7 en particular, describe la movilización popular campesina y las reacciones del régimen.

[121] Pérez, *Cuba under the Platt Amendment…, op. cit.,* capítulos 10 y 11; véase también el capítulo IX de este libro.

[122] Whitney, *State and Revolution in Cuba…, op. cit.*

[123] Collier y Sater, *History of Chile…, op. cit.,* pp. 224, 232, 240-242.

[124] Esto es, un cambio de formas directas de control ("imperialistas") a formas más indirectas ("hegemónicas"); Domínguez, *Cuba…, op. cit.,* p. 54.

[125] Observación de Díaz Alejandro, "Open Economy, Closed Polity?…", *op. cit.,*p. 34.

[126] González, *Creative Destruction?…, op. cit.,* pp. 126-239.

[127] Se ha vuelto una moda historiográfica atribuir las guerras de independencia latinoamericanas a la invasión napoleónica de España, como causa coyuntural y exógena. Para un ensayo interesante sobre este (¿recurrente?) fenómeno histórico, véase Emmanuel Le Roy Ladurie, "The 'Event' and the 'Long Term' in Social History: The Case of the Chouan Uprising", cap. 7 de *The Territory of the Historian,* Harvester Press, Hassocks, 1979.

[128] Waisman, "Counterrevolution and Structural Change…", *op. cit.*

[129] Drake, *Between Tyranny and Anarchy…, op. cit.,* pp. 165-166.

[130] Samuel Farber, *Revolution and Reaction in Cuba, 1933-1960,* Wesleyan University Press, Middletown, 1976, pp. 176-178. El MNR de Bolivia también retrocedió a los años treinta, aunque la Guerra del Chaco y el régimen militar socialista fueron puntos de referencia más importantes que la recesión en sí.

[131] Por su parte, Costa Rica no vivió un proceso de división semejante en los años treinta; de tal manera, los caminos políticos divergentes seguidos en Centroamérica, si bien obedecieron a múltiples causas a lo largo del tiempo, al menos fueron determinados en parte por decisiones tomadas en los años treinta. Véase Deborah Yashar, *Demanding Democracy: Reform and Reaction in Costa Rica and Guatemala, 1870s-1950s,* Stanford University Press, Stanford, 1997, cap. 2. Dunkerley, *Power in the Isthmus…, op. cit.,* pp. 340-341, señala tanto las "similitudes superficiales" como las diferencias sustanciales.

[132] Barry Carr, *Marxism and Communism in Twentieth-Century Mexico,* University of Nebraska Press, Lincoln, 1992, pp. 310-312. El lombardismo fue una corriente menor de la izquierda mexicana que enarbolaba los principios del dirigente laboral nacionalista Vicente Lombardo Toledano y cuyo origen se remonta también a los años treinta; Carr, *Marxism and Communism,* pp. 198-199.

[133] Bergquist, *Labor in Latin America…, op. cit.,* ofrece un útil análisis comparativo: véanse pp. 76-77, 95-96, 336. Más adelante abordo las repercusiones sociales de la recesión.

[134] Bulmer-Thomas, *Economic History of Latin America…, op. cit.,* p. 182, y para cifras de años anteriores, p. 110.

[135] Klarén, *Peru… op. cit.,* p. 249. En Brasil, el exitoso golpe de Estado de Vargas en 1930 involucró también un amplio reclutamiento de jóvenes oficiales y suboficiales inconformes, quienes se levantaron en contra de sus superiores. En años subsiguientes "las rebeliones de soldados enlistados plagaron al ejército", por motivos ideológicos y económicos; Shawn C. Smallman, *Fear and Memory in the Brazilian Army and Society, 1889-1954,* University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2002, pp. 41-42.

[136] Marichal, *Century of Debt Crises…, op. cit.,* p. 211; véase también la nota 28. Como ya hemos mencionado, Haití, Nicaragua y República Dominicana también mantuvieron los pagos de su servicio de deuda. Deberíamos recordar el obstinado compromiso del presidente Carlos Pellegrini para respetar la deuda externa argentina durante la crisis de Baring de principios de la década de 1890; H. S. Ferns, *Britain and Argentina in the Nineteenth Century,* Clarendon, Oxford, 1960, pp. 455-484.

[137] Díaz Alejandro, "América Latina en los años treinta…", *op. cit.,* p. 42; Della Paolera y Taylor, "Economic Recovery…", *op. cit.;* Rock, *Argentina, 15161987…, op. cit.,* pp. 222-223.

[138] Klarén, *Peru…, op. cit.,* p. 276; Marichal, *Century of Debt Crises…, op. cit.,* pp. 213-214.

[139] Hirschman, *Journeys toward Progress…, op. cit.,* pp.239-240; Barry Eichengreen, *Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1931-1939,* Oxford University Press, Nueva York, 1992, quien sólo menciona de paso a América Latina, pp. 260-261, 290, pero deja en claro que el rápido abandono del patrón oro (de cambio) fue normalmente ventajoso, ya que permitía, aunque no garantizaba, una política monetaria expansionista.

[140] Torres-Rivas, "Crisis and Conflict…", *op. cit.,* p. 75.

[141] Sobre la distinción entre *pasiva* y *reactiva,* véase Díaz Alejandro, "América Latina en los años treinta…", *op. cit.,* pp. 38, 40. La clasificación activa / reactiva es en cierto modo confusa, ya que podría connotar una "reacción" mecánica instintiva (que de hecho estaría más cercana a la categoría pasiva), mientras que, por supuesto, reactiva, bajo la interpretación de Díaz Alejandro, implica cierto grado de experimentación creativa y heterodoxia. Una solución semántica simple sería elimiar el prefijo *re*.

[142] Daniel Díaz Fuentes, *Las políticas fiscales latinoamericanas frente a la gran depresión,* Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1993, pp. 67-75; véase también el cap. VIII de este libro.

[143] Bulmer-Thomas, *Economic History of Latin America…, op. cit.,* pp. 206-207. Sobre la ortodoxia fiscal/financiera de Vargas, véase J. W. F. Dulles, *Vargas of Brazil,* University of Texas Press, Austin, 1967, pp. 88-89.

[144] Urquidi, *Otro siglo perdido…, op. cit.,* pp. 74-75, 80. Existe un debate —principalmente entre Furtado y Peláez— en lo concerniente al impacto deflacionista de la compra de café por parte del Estado: véase Baer, *Brazilian Economy…, op. cit.,* pp. 43-45, y Díaz-Fuentes, *Las políticas fiscales…, op. cit.,* pp. 59-61.

[145] Bulmer-Thomas, *Economic History of Latin America,* p. 211; Díaz-Fuentes, *Las políticas fiscales,* pp. 75-79.

[146] José Antonio Ocampo, "La economía colombiana en la década de los treinta", en Thorp, *América Latina en los años treinta…, op. cit.,* pp. 155-157; Safford y Palacios, *Colombia…, op. cit.,* pp. 289-290.

[147] Sobre el fatalismo (en la región latinoamericana), véase Garraty, *Great Depression…, op. cit.,* pp. 172-177. La contraparte del fatalismo, aquí descrita, es muy afín al "posibilismo" de Hirschman, *Bias for Hope…, op. cit.,* p. 28.

[148] Alex M. Saragoza, *The Monterrey Elite and the Mexican State, 1880-1940,* University of Texas Press, Austin, 1988, cap. 8.

[149] Kennedy, *American People in the Great Depression…, op. cit.,* p. 135.

[150] Por razones obvias, *asociado* es un término neutral y ambiguo respecto de la causalidad.

[151] Por ejemplo, Rothermund, *Global Impact of the Great Depression…, op.cit.,* cap. 10, donde el apartado dedicado a América Latina se titula "The New Role of the State" [El nuevo papel del Estado].

[152] Nora Hamilton, *The Limits of State Autonomy: Post-Revolutionary Mexico,* Princeton Univerity Press, Princeton, 1982, pp. 120-121. No obstante, como Hamilton señala —y como han confirmado las investigaciones recientes sobre el cardenismo—, los resultados reales distaron mucho de los objetivos retóricos. En Brasil, el órgano oficial *Revista do Serviço Público* declaró en julio de 1938 que "ningún aspecto de la vida nacional debe quedar al margen de la acción del Estado, pues el Estado es la única entidad capaz de imprimir en cada ciudadano una huella nacionalista verdadera"; Daryle Williams, *Culture Wars in Brazil: The First Vargas Regime, 1930-1945,* Duke University Press, Durham, 2001, p. 69. Los logros, repetimos, rara vez igualaron a la retórica; como señala Joel Wolfe en el cap. III de este libro, la construcción del Estado varguista nunca fue tan radical en la práctica como suele afirmarse, o como algunos historiadores han querido creer. En Cuba se manifestó una discrepancia aún mayor, cuando Batista, en su Plan de Tres Años, "prometió repartir lo que todavía no se producía"; Whitney, *State and Revolution in Cuba…, op. cit.,* p. 158.

[153] Klein, *Parties and Political Change…, op. cit.,* p. 230.

[154] Paul H. Lewis, *The Crisis of Argentine Capitalism,* University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1990, p. 92.

[155] Domínguez, *Cuba…, op. cit.,* pp. 88-89; Whitney, *State and Revolution in Cuba…, op. cit.,* p. 180.

[156] Collier y Sater, *History of Chile…, op. cit.,* pp. 225.

[157] Para otros ejemplos de intervencionismo gubernamental más profundo, desde el sector bancario hasta las relaciones laborales, véase Safford y Palacios, *Colombia…, op. cit.,* pp. 275-276; Hurtado, *El poder político en el Ecuador…, op. cit.,* p. 101-102; Klarén, *Peru…, op. cit.,* p. 270; y los caps. IV y VI de este libro. Nótese que estos ejemplos abordan países, como Perú y Ecuador, donde generalmente se ha subestimado el dirigismo.

[158] Gould, *To Lead as Equals…, op. cit.*

[159] Thorp y Bertram, *Peru, 1890-1977…, op. cit.,* pp. 147-149, 190-191.

[160] Véase el cap. III de este libro; Robert M. Levene, *Father of the Poor? Vargas and His Era*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, pp. 43-49, ofrece un "balance general" comprobado del régimen de Vargas antes de 1937. Sobre el cardenismo, véase Alan Knight, "Cardenismo: Juggernaut or Jalopy?", *Journal of Latin America Studies* 26 (1994), pp. 73-107.

[161] Véase Joseph L. Love, "The Rise and Fall o Structuralism", Valpy FitzGerald y Rosemary Thorp (eds.), en *Economic Doctrines in Latin America: Origins, Embedding and Evolution*, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2005, cap. 8, y Enrique V. Iglesias (ed.), *The Legacy of Raúl Prebisch*, Inter-American Development Bank, Washington,1994.

[162] John H. Coatsworth and Jeffrey G. Williamson, "Always Protectionist? Latin American Tariffs from Independence to the Great Depression", *Journal of Latin American Studies* 36, núm. 2 (2004), pp. 205-232.

[163] Recurro a este cliché historiográfico con gran recelo, porque cuando se escribe sobre historia no hay nada peor que exagerar las cosas y llevarlas a un plano desproporcionado con respecto de la realidad. Cuando los historiadores afirman cosas como "no se debe exagerar sobre X", lo que en realidad hacen es recurrir a una forma abreviada de decir "no creo que X sea tan importante como aseguran otros historiadores, pero soy demasiado incapaz y perezoso como para ponerme a evaluar su importancia". Asimismo, debemos agregar que los historiadores —desde los volubles biógrafos hasta los más rigurosos historiadores económicos— tienen una extraña tendencia a magnificar sus temas de estudio; después de todo, mostrar que una persona o un proceso carecen de peso sustancial en la historia no suele ser el mejor camino para adquirir fama y fortuna, aun cuando sea un excelente remedio para curar el hipo de la historiografía.

[164] En una incursión anterior en la historia económica, expresé mi molestia sobre los datos estadísticos poco confiables; Alan Knight, "Export-led Growth in Mexico, c. 1900-1930", en Enrique Cárdenas, José Antonio Ocampo y Rosemary Thorp (eds.), *An Economic History of Twentieth-Century Latin America*, vol. 1, *The Export Age: Latin American Economies in the Late Nineteenth and Twentieth Centuries*, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2000, pp. 137-141. Esta incursión todavía no ha disipado esa molestia inicial (véase por ejemplo la nota 54), como tampoco lo ha logrado una reciente conversación informal con Victor Bulmer-Thomas sobre la informalidad de algunos datos sobre Latinoamérica (octubre 2012).

[165] Cifras obtenidas de la base de datos Oxford Latin American Economic History Database (http://oxlad.qeh.ox.ac.uk).

[166] El gasto parece ser un dato más indicativo del poder y alcance del Estado, ya que implica desembolsos que no necesariamente han sido cubiertos con los ingresos, sino mediante préstamos o la expansión de la oferta monetaria (lo que, dependiendo de las circunstancias y criterios, podría verse como financiamiento creativo del déficit o populismo económico irresponsable). La capacidad para aumentar los ingresos sin duda es también un índice útil del poder del Estado, una acción bastante deficiente de la mayoría de los Estados latinoamericanos de los años treinta. La diferencia entre el gasto del gobierno central y de los gobiernos estatales fue menos crucial en el caso de México, donde el ingreso federal superaba por mucho los ingresos estatales y municipales —y, de hecho, los superaba de manera "creciente"—; véase Luis Aboites Aguilar, *Excepciones y privilegios: Modernización tributaria y centralización en México, 1922-1972*, El Colegio de México, México, 2003, p. 39.

[167] Kindleberger, *World in Depression…*, *op. cit.*, pp. 283-286; Kozo Yamamura, "Then Came the Great Depression: Japan's Interwar Years", en Van der Wee, *Great Depression Revisited…*, *op. cit.*, p. 203. Latinoamérica importaba la mayor parte de su armamento, de modo que el gasto en armas tuvo un efecto multiplicador más débil que en Europa o Japón. Safford y Palacios, *Colombia…*, *op. cit.*, p. 276, sugieren que la tensión con Perú sobre Leticia "contribuyó a la exitosa recuperación [económica]" al aumentar el gasto y los puestos de trabajo y calmar "la agitación social y partidista". El argumento político me resulta mucho más convincente que el económico.

[168] Al menos hasta tiempos muy recientes, en los que el bienestar público ha mejorado ligeramente en varios países. Aun así, Latinoamérica se encuentra muy rezagada (y actualmente en riesgo) de los estados de bienestar de Europa Occidental. Respecto del vínculo histórico entre la guerra total y la reforma social, dos ejemplos latinoamericanos podrían ser la Revolución mexicana (una guerra civil, sin duda) y, nuevamente, la Guerra del Chaco, que estimularon tanto las demandas populares como, en cierta medida, los esfuerzos oficiales de reforma social; de acuerdo con el presidente David Toro en 1936, "Nuestra doctrina social ha nacido en las arenas del Chaco"; Klein, *Parties and Political Change…*, *op. cit.*, p. 233. También en Paraguay los veteranos desempeñaron un papel en la "Revolución Liberadora" de 1936, que combinó brevemente la política autoritaria con un compromiso de reforma social e incluso agraria; George Pendle, *Paraguay: A Riverside Nation*, Oxford University Press, Londres, 1967, pp. 32-33.

[169] Cf. Eliana Cardoso y Ann Helwege, "Populism, Profligacy, and Redistribution", en Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards (eds.), *The Macroeconomics of Populism in Latin America*, University of Chicago Press, Chicago, 1991, pp.

46-47 (así como todo el libro).

[170] Coatsworth y Williamson, "Always Protectionist?…", *op. cit.*

[171] Howard J. Wiarda, *The Soul of Latin America,* Yale University Press, New Haven, 2003; David S. Landes, *The Wealth and Poverty of Nations,* W. W. Norton, Nueva York, 1998, cap. 20.

[172] Rothermund, *Global Impact of the Great Depression…, op. cit.,* p. 108.

[173] Alan Knight, "The Weight of the State in Modern Mexico", en James Dunkerley (ed.), *Studies in the Formation of the Nation State in Latin America,*ILAS, Londres, 2002, p. 218.

[174] Recurro a una vieja metáfora; Knight, "Cardenismo: Juggernaut or Jalopy?…", *op. cit.*

[175] Douglas A. Chalmers establece acertadamente este argumento al señalar que "el Estado es central no por su extremadamente grande participación del PIB (…) sino porque participa en muchas de las decisiones"; Douglas A. Chalmers, "The Politicized State in Latin America", en James M. Malloy (ed.), *Authoritarianism and Corporatism in Latin America,* Pittsburgh University Press, Pittsburgh, 1977, p. 31.

[176] Klein, *Parties and Political Change…, op. cit.,* p. 231.

[177] Safford y Palacios, *Colombia…, op. cit.,* pp. 275-276; Cárdenas, *La industrialización de México…, op. cit.,* pp. 72-84; Della Paolera y Taylor, "Economic Recovery…", *op. cit.*

[178] Daniel Cosío Villegas, *Ensayos y notas,* vol. 1, Editorial Hermes, México, 1966, pp. 73-111.

[179] Michael Snodgrass, *Deference and Defiance in Monterrey: Workers, Paternalism and Revolution in Mexico, 1890-1950,* Cambridge University Press, Cambridge, 2003, pp. 168-169; Eli Diniz, "The Post-1910 Industrial Elite", en Michael J. Connff y Frank D. McCann (eds.), *Modern Brazil: Elites and Masses in Historical Perspective,* University of Nebraska Press, Lincoln, 1989, pp. 105108; véase también el cap. I de este libro. Un cambio similar en el centro de gravedad político-económico se estaba llevando a cabo en Perú (de la sierra a la costa), pero fue menos consecuencia del ISI que del cambio de la suerte en la "lotería de los bienes".

[180] John J. Dwyer, *The Agrarian Dispute: The Expropriation of AmericanOwned Rural Land in Postrevolutionary Mexico,* Duke University Press, Durham, 2008.

[181] "Sólo de importancia simbólica"; George Philip, *Oil and Politics in Latin America,* Cambridge University Press, Cambridge, 1982, p. 57.

[182] Knight, "Politics of the Expropriation…", *op. cit.*

[183] La frase proviene de Philip, *Oil and Politics…, op. cit.,* p. 51. La compañía petrolera estatal argentina (YPF) se encontraba bien establecida en los años treinta, mientras que las de Uruguay (ANCAP, 1931) y Chile (COPEC, 1935) fueron consecuencia de esa década, aunque con mucha menor repercusión que Pemex en México (1938).

[184] Bergquist, *Labor in Latin America…, op. cit.,* pp. 238-241.

[185] El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Sumner Welles, quien conocía bien la región latinoamericana, reconoció que "el desarrollo de los recientes acontecimientos en México obedece principalmente a condiciones que no se presentan en el mismo grado en otros países"; Philip, *Oil and Politics…, op. cit.,* p. 56.

[186] Thorp y Bertram, *Peru, 1890-1977…, op. cit.,* pp. 164-169, señalan que si bien hubo un alza de impuestos durante el auge de las exportaciones de petróleo de fines de los años treinta, éstos seguían siendo "irrisorios" (que 12% de las exportaciones se considere "irrisorio" es un caso aparte); la regulación gubernamental aumentó a principios de la década de 1940, pero para entonces el auge petrolero había terminado. Sobre Colombia, donde el "nacionalismo petrolero" retrocedió en los años treinta, véase el cap. V de este libro; para Ecuador y Venezuela, véase *Oil and Politics…, op. cit.,* pp. 48, 51; y Bergquist, *Labor in Latin America…, op. cit.,* pp. 260, 263.

[187] Al menos en México las compañías petroleras fueron atacadas de manera similar. Los "enclaves" agrarios más ilustres fueron los complejos de plantaciones para exportación del litoral caribeño, controlados en particular por la United Fruit y la Standard Fruit. No obstante, el principal problema en Centroamérica no fue el nacionalismo económico (que el cambio al autoritarismo de los años treinta evitó lo más posible), sino las plagas que atacaron al banano y mermaron severamente la producción, lo que hacia finales de los años treinta aceleró el cambio de las plantaciones hacia las tierras bajas del Pacífico. En Colombia, cuyo "enclave" de Santa Marta había sido escenario de la sangrienta represión de sus trabajadores en 1928, la producción de banano también se desplomó y condujo a la transformación de la fuerza de trabajo en mano de obra campesina; Bulmer-Thomas, *Political Economy of Central America…, op. cit.,* pp. 70, 75-77; Legrand, *Frontier Expansion…, op. cit.,* pp. 114-15.

[188] Martínez-Alier, *Haciendas, Plantations and Collective Farms…, op. cit.*, pp. 93-103.

[189] Richard Lee Turits, *Foundations of Despotism: Peasants, the Trujillo Regime and Modernity in Dominican History*, Stanford University Press, Stanford, 2003, pp. 78-79, 82-83, 135-137.

[190] Bulmer-Thomas, *Economic History of Central America…, op. cit.*, pp. 5960; Safford y Palacios, *Colombia…, op. cit.*, pp. 269-271.

[191] Drinot, *The Allure of Labor…, op. cit.;* Peter de Shazo, *Urban Workers and Labor Unions in Chile, 1902-1927*, University of Wisconsin Press, Madison, 1977, cap. 8; Bergquist, *Labor in Latin America…, op. cit.*, pp. 65-70; Rocío Guadarrama, *Los sindicatos y la política en México: la CROM (1918-1928)*, Era, México, 1981; Barry Carr, *El movimiento obrero y la política en México, 1910-1929*, 2 vols., Sep-Setentas, México, 1976, vol. 2.

[192] Saragoza, *Monterrey Elite…, op. cit.*, pp. 155-167; Brian Loveman, *Struggle in the Countryside: Politics and Rural Labor in Chile, 1919-1973*, Indiana University Press, Bloomington, 1976, p. 72 ff.; Bulmer-Thomas, *Political Economy of Central America*, p. 65; Gould, *To Lead as Equals…, op. cit.*, pp. 39-40; Ayala Mora, "Ecuador since 1930…" *op. cit.*, p. 696; Safford y Palacios, *Colombia…, op. cit.*, p. 289. En Brasil, Vargas aprovechó la inestabilidad laboral de São Paulo para pasar por encima de la autonomía paulista y mostrar al gobierno federal como el único órgano capaz de garantizar la paz y el orden social; Joel Wolfe, *Working Women, Working Men: São Paulo and the Rise of Brazil's Industrial Working Classes, 1900-1955*, Duke University Press, Durham, pp. 51-69.

[193] Legrand, *Frontier Expansion… op. cit.*, pp. 132-33.

[194] Citado en Dunkerley, *Power in the Isthmus…, op. cit.*, p. 85. El embajador John D. Erwin ocupó el cargo de 1937 a 1947; no se proporciona la fecha de esta observación. Incluso en Honduras se hizo un intento de reforma laboral en 1931 bajo el presidente Mejía Colindres, pero el Congreso la echó para atrás; Bulmer-Thomas, *Political Economy of Central America*, pp. 63-64.

[195] Joe C. Ashby, *Organized Labor and the Mexican Revolution under Lázaro Cárdenas*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1963, sigue siendo el mejor estudio general. Como muestra Ashby, en México —incluso más que en Colombia—, las reformas laborales se extendieron al campo, y en algunos casos famosos, como el de La Laguna, las disputas laborales se resolvieron mediante una reforma agraria de gran envergadura, convirtiendo a los trabajadores en ejidatarios.

[196] Whitney, *State and Revolution in Cuba…, op. cit.*, p. 180. Valga aquí nuestra tolerancia de la hipérbole típicamente estadunidense.

[197] Sobre el "peleguismo" —en portugués, *pelego* es el nombre que recibe una piel de borrego que se coloca entre el caballo y la silla de montar; de ahí su referencia al fenómeno de liderazgo sindical que, interpuesto entre el Estado y el sindicato, favorecía más los intereses del Ministerio del Trabajo que los de los obreros sindicalizados—, véase Wolfe, *Working Women, Working Men…, op. cit.*, pp. 74-81.

[198] Sobre el desgaste del anarquismo tradicional de los obreros textiles, véase Wolfe, *Working Women, Working Men*, p. 56. En México hubo un abandono similar del anarquismo, claramente ejemplificado por la trayectoria del líder de la CROM, Luis Morones; Guadarrama, *Los sindicatos…, op. cit.*, pp. 122-124. Mencionemos también otro paralelismo: si bien los obreros textiles gravitaron en torno a los sindicatos oficiales, algunos poderosos sindicatos industriales —como los trabajadores del sector metalúrgico en Brasil o los mineros y ferrocarrileros mexicanos— fueron más recelosos de la acogida del Estado, por lo que durante las décadas de 1920 y 1930 mantuvieron una militancia más independiente; véase Wolfe, *Working Women, Working Men*, p. 57; Hamilton, *Limits of State Autonomy…, op. cit.*, pp. 111-112, 152-161, y Ashby, *Organized Labor*, caps. 6 y 7. El "peleguismo" tuvo su contraparte mexicana en el "charrismo" (del término *charro*, hombre de campo a caballo), aunque éste término se acuñó más tarde.

[199] Dunkerley, *Power in the Isthmus…, op. cit.*, p. 87, señala un fortalecimiento de los grandes terratenientes en Centroamérica en los años treinta, a pesar de que la clase terrateniente perdió parte de su poder político directo.

[200] Collier y Sater, *History of Chile…, op. cit.*, p. 221. Véase también el cap. II de este libro, y para Perú, donde los despidos y recortes salariales en el sector minero fueron también severos, véase el cap. IV de este libro y Mallon, *Defense of Community…, op. cit.*, pp. 292-293, quien señala cómo las compañías mineras recurrieron a los despidos como una forma para purgar de activistas a la fuerza laboral. Por otra parte, los trabajadores migrantes del nitrato —conocidos por su comportamiento revoltoso y su política radical—, inyectaron una militancia fresca en las comunidades de clase trabajadora del resto del país, por ejemplo, en la inmensa mina de cobre El Teniente; Thomas M. Klubock, *Contested Communities: Class, Gender and Politics in Chile's El Teniente Copper Mine, 1904-1951*, Duke University Press,

Durham, 1998, pp. 84-85.

[201] Abraham Hoffman, *Unwanted Mexican Americans in the Great Depression*, University of Arizona Press, Tucson, 1974, cap. 8.

[202] Whitney, *State and Revolution in Cuba…*, *op. cit.*, pp.154-155.

[203] Un número similar de migrantes logró huir hacia Haití. Esta historia, que guarda una clara semejanza con la limpieza étnica balcánica, es narrada con gran maestría por Turits, *Foundations of Despotism…*, *op. cit.*, pp. 161-180.

[204] El término *neo-Europa* proviene de Alfred Crosbie, *Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe…*, *op. cit.*, *900-1900*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 4-5.

[205] Joseph Merrick, "The Population of Latin America, 1930-1990", en Bethell, *Cambridge History of Latin America*, vol. 6, pp. 6, 9. Sin embargo, la recesión no afectó de manera importante el proceso de incremento natural: entre las décadas de 1930 y 1940, las tasas de natalidad son sustancialmente similares, no obstante, a pesar de las dificultades de la época, las tasas de mortalidad siguieron decreciendo, particularmente en Chile, Cuba, México y todos los países de Centroamérica. Por lo mismo, es difícil discernir un decremento demográfico inducido por la recesión mundial, como el ocurrido en los Estados Unidos y en algunos países europeos (debido al descenso de las tasas de natalidad); Garraty, *Great Depression…*, *op. cit.*, p. 108; Kennedy, *American People in the Great Depression…*, *op. cit.*, p. 165.

[206] Rock, *Argentina, 1516-1987…*, *op. cit.*, pp. 234-235. Así, por primera vez, la población rural argentina decreció en números absolutos; véase el cap. I de este libro.

[207] En Argentina, la red de caminos se duplicó, para mayor detrimento de la declinación de los ferrocarriles británicos; Rock, *Argentina, 1516-1987*, p. 227. La construcción de caminos se extendió por todo el continente y puso un reto a la ideología política: avanzó bajo auspicios conservadores en Argentina, de Estado Novo de Brasil, de la administración radical de Cárdenas en México y la dictadura individualista de Ubico en Guatemala. En los tres últimos casos —Vargas, Cárdenas y Ubico—, la construcción de caminos, además de proporcionar fuentes de trabajo, también sirvió para los peripatéticos presidentes que gustaban de recorrer el país (Ubico en su motocicleta); véase el cap. III de este libro; Levene, *Father of the Poor?…*, *op. cit.*, pp. 58, 66; Luis González, *Historia de la Revolución mexicana, periodo 1934-1940: Los días del presidente Cárdenas*, El Colegio de México, México, 1981, pp. 80, 268; Dunkerley, *Power in the Isthmus…*, *op. cit.*, pp. 99, 101.

[208] Whitney, *State and Revolution in Cuba…*, *op. cit.*, cap. 5.

[209] Wolfe, *Working Women, Working Men…*, *op. cit.*, pp. 50-51; Legrand, *Frontier Expansion…*, *op. cit.*, cap. 6; Paige, *Coffee and Power…*, *op. cit.*, pp. 107-110.

[210] Loveman, *Struggle in the Countryside…*, *op. cit.*, p. 145; James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Protest*, Yale University Press, New Haven, 1985. Loveman señala que estas formas de resistencia "no se encuentran registradas sistemáticamente en ninguna fuente"; por lo mismo, es difícil evaluar su magnitud y repercusión. Sin embargo, ofrece varios ejemplos ilustrativos, pp. 146-151.

[211] Así, la represión estatal precedió —y contribuyó— al levantamiento popular de principios de 1932, que fue sofocado con sangre; Paige, *Coffee and Power…*, *op. cit.*, p. 109; Dunkerley, *Power in the Isthmus…*, *op. cit.*, pp. 95-96; cap. VII de este libro.

[212] Véase la nota 197. Sobre la política laboral de Vargas, véase Wolfe, *Working Women…*, *op. cit.* y John D. French, *The Brazilian Workers' ABC: Class Conflict and Alliances in Modern São Paulo*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1992, pp. 55, 68, 77-92.

[213] Ashby, *Organized Labor…*, *op. cit.*, cap. 5; Bergquist, *Labor in Latin America…*, *op. cit.*, p. 73; David Bushnell, *The Making of Modern Colombia: A Nation in Spite of Itself*, University of California Press, Berkeley, 1993, pp. 186-189.

[214] No se diga en la región algodonera de La Laguna, donde el Partido Comunista desempeñó un papel importante; Carr, *Marxism and Communism…*, *op. cit.*, cap. 3.

[215] Rock, *Argentina, 1516-1987…*, *op. cit.*, p. 237; Thorp y Bertram, *Peru, 1890-1977…*, *op. cit.*, p. 175, señalan que una consecuencia fue la división del trabajo más marcada entre la producción descentralizada de algodón en el campo y el desmotado de algodón centralizado por las grandes empresas comerciales, tendencia que continuó hasta bien entrado el periodo de la posguerra; asimismo, conforme las grandes compañías se fueron concentrando cada vez más en el procesamiento y/o la comercialización, y la producción fue quedando en manos de los agricultores locales, dicha tendencia a la división laboral fue replicada en otros sectores de exportación y procesamiento de la producción agrícola, como el sector de la fruta tropical de Centroamérica.

[216] David Nugent, *Modernity at the Edge of Empire: State, Individual and Nation in the Northern Peruviam Andes, 1885-1935,* Stanford University Press, Stanford, cap. 8 ("sectores medios" en pp. 265, 281). Considerada la vaguedad del término *sectores medios,* cabe citar aquí las ocupaciones de estos activistas urbanos mencionadas por Nugent, p. 262: "carpinteros, sastres, herreros, fabricantes de sillas de montar, muleros, hacedores de pan *[sic],* pequeños comerciantes, pequeños tenderos, propietarios de cantinas y empleados públicos de bajo nivel".

[217] *Ibid.*, p. 268, resulta útil para fechar este proceso de renovación política y vincularlo con claridad al inicio de la recesión y la caída de Leguía; no obstante, como muestra Nugent, la dictadura de Leguía ya había debilitado el poder y el estatus de la élite durante los años treinta. Cabe señalar que, a diferencia de los jacobinos originales, estos activistas no fueron anticlericales, pues tuvieron su santo patrono y lucharon por la democratización del acceso a la catedral local.

[218] *Ibid.*, pp. 295-296. En el Valle de Pisco, la "resistencia" de los trabajadores algodoneros rurales también "alcanzó su punto más bajo" a fines de los años treinta, mientras que "la voz política que buscaron en el APRA y el Partido Comunista" se desvaneció cada vez más, ya que "los dos movimientos desviaron su atención hacia las cuestiones industriales"; Pelosi, *Peasants On Plantations…, op. cit.,* p. 153.

[219] Loveman, *Struggle in the Countryside…, op. cit.,* p. 118.

[220] *Ibid.*, pp. 209-210, ilustra de manera gráfica el inicio de la polémica política rural alrededor de 1960. Véase también Maurice Zeitlin y Richard Earl Ratcliff, *Landlords and Capitalists: The Dominant Class of Chile,* Princeton University Press, Princeton, 1988, pp. 190-192.

[221] Whitehead, "Bolivia since 1930…", *op. cit.,* pp. 538-539, 544, 549-550; Philippe Schmitter, *Interest Conflict and Political Change in Brazil,* Stanford University Press, Stanford, 1971, pp. 209-212; Shepard Forman, *The Brazilian Peasantry,* Columbia University Press, Nueva York, 1975, pp. 181-96.

[222] El primer congreso estudiantil de Bolivia, en su reunión inicial de 1928, propuso un programa nacionalista e indigenista radical que se anticipó a la Revolución de 1952, y estudiantes armados apoyaron el golpe militar popular de 1930, acción que fue debidamente recompensada con el otorgamiento de la autonomía universitaria y el derecho para elegir a sus rectores; Klein, *Parties and Political Change…, op. cit.,* pp. 99-101, 111, 116.

[223] Rock, *Argentina, 1516-1987…, op. cit.,* p. 200.

[224] Véase el cap. VI de este libro; Whitaker, "Overview of the Period ", *op. cit.,* p. 15, comenta que el movimiento estudiantil argentino se encontraba "en un estado de animación suspendida" durante los años treinta.

[225] Jean Stubbs, *Tobacco on the Periphery: A Case Study in Cuban Labour History, 1860-1958,* Cambridge University Press, Cambridge, 1985, pp. 129-136; Wolfe, *Working Women, Working Men…, op. cit.,* pp. 54-55; Ann FarnsworthAlvear, *Dulcinea in the Factory: Myths, Morals, Men and Women in Colombia's Industrial Experiment, 1905-1960,* Duke University Press, Durham, 2000, cap. 4. Las mujeres también tuvieron una participación activa en la mayoría de los acontecimientos y procesos descritos en este texto, por lo que no se debe suponer que todas las referencias sin definición de género —huelgas, motines, protestas, despidos, migraciones y otras cuestiones relacionadas— involucran sólo la participación de los hombres. Esta inferencia sólo se justifica en el caso de las fuerzas armadas, el clero católico y la mayor parte de los políticos de la élite.

[226] Snodgrass, *Deference and Defiance in Monterrey…, op. cit.,* pp. 161-162.

[227] Suponemos, por supuesto, que las mujeres podían sustituir a los trabajadores varones; en varios sectores importantes —como el minero, el metalúrgico y el ferrocarrilero— esto no fue factible, al menos según el criterio de las compañías; véase Klubock, *Contested Communities…, op. cit.,* pp. 44-45. Sobre los diferenciales salariales, que podían variar sensiblemente en los diferentes sectores, véase Monteón, *Chile and the Great Depression…, op. cit.,* p. 176.

[228] Wolfe, *Working Women, Working Men…, op. cit.,* p. 57-58, describe la política de la dirigencia masculina en el sindicato textil, que "admitió" en su fuerza de trabajo a un número considerable de mujeres. En la enorme cervecera de Monterrey, incluso el "sindicato blanco" de la compañía excluyó a las mujeres trabajadoras, que representaban un alto número, de los puestos sindicales; Snodgrass, *Deference and Defiance in Monterrey…, op. cit.,* p. 208. Wolfe, *Working Women, Working Men,* pp. 73, 80.

[229] De acuerdo con Teresa Valdés e Indira Palacios, *Participation and Leadership in Latin America and the Caribbean: Gender Indicators,* CEPAL, Santiago, 1999, p. 28, sólo tres países introdujeron una forma de sufragio femenino a lo largo de los años treinta: Uruguay y Brasil en 1932, y Cuba en 1934; esto contrasta con los seis países que lo hicieron en los años cuarenta y otros ocho en la década de 1950. Esta cronología puede ser objeto de debate, en parte debido a las diferentes formas de sufragio femenino introducidas en los diferentes países. En México, el presidente Cárdenas (1934-

1940) prometió otorgar el voto a la mujer, pero la "familia revolucionaria", de la que él fue paterfamilias, se negó a cumplir con la promesa por temor de que las mujeres pudiesen apoyar a la oposición católica. No se trató de un temor infundado, pues debemos señalar que, en Chile, las mujeres "tendieron a favorecer a los candidatos conservadores" en las elecciones (municipales) de 1935; Pavilack, *Mining for the Nation…*, *op. cit.*, p. 77.

[230] No obstante, concuerdo con Colliers en que la recesión, a pesar de su "importancia extrema" en el condicionamiento de las relaciones entre el Estado y el trabajo, no fue sino una de entre varias coyunturas clave dentro de un proceso mucho más largo; el llamado "periodo de incorporación en algunas ocasiones ocurrió antes (…) y en otras después"; en breve, "no existió un patrón regular", conclusión que quizá sea más fácil para un historiador que para un científico político. Véase Ruth Berins Collier y David Collier, *Shaping the Political Arena: Critical Junctures, The Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America*, Princeton University Press, Princeton, 1991, p. 769

[231] Sobre la decadencia del anarquismo en Brasil, véase French, *Brazilian Workers' ABC…*, *op. cit.*, pp. 37-38, 60-61; y Wolfe, *Working Women, Working Men…*, *op. cit.*, pp. 34, 38, 67-68, quien muestra cómo la influencia anarquista perduró en São Paulo —entre los impresores, por ejemplo— cuando ya había sucumbido en la capital federal de Rio. En estudios más generales sobre los movimientos sindicalistas de Latinoamérica, el eclipse del anarquismo suele aparecer como un *argumentum ex silentio;* dicho de otro modo, los anarquistas tendieron a perderse de vista rápidamente después de la primera Guerra Mundial, y para los años treinta casi desaparecieron por completo. No obstante, muy rara vez se explica este acto de desaparición y por lo general, se da por sentado como un hecho teleológico.

[232] Como señala Drinot, *Allure of Labor…*, *op. cit.*, pp. 73-74, el anarquismo fue un movimiento de alta escuela —tuvo gran impacto en la prensa—, pero con raíces sociales algo superficiales; dependía por lo general de grupos reducidos de artesanos urbanos ilustrados (más que de las masas rurales o el proletariado industrial); fue un movimiento cosmopolita e incluso antinacionalista, pero, por encima de todo, tuvo grandes dificultades para resistirse al atractivo pragmático de los gobiernos reformistas, incluso autoritarios, como el de Leguía.

[233] Las barreras étnicas y sectoriales permanecieron incluso en México, donde la Revolución propició una verdadera reforma social y empoderamiento popular, junto con la colaboración obrero-campesina (en ocasiones bajo los auspicios del Partido Comunista); la decisión del gobierno de Cárdenas de separar a las organizaciones obreras y campesinas (la CTM y la CNC, en términos generales) afianzó su institucionalización dentro del partido oficial; véase Ashby, *Organized Labor…*, *op. cit.*, pp. 80, 90.

[234] El nacionalismo económico sin duda favoreció también a los productores nacionales a expensas de los consumidores locales: un mecanismo no tan irracional, desde el punto de vista de las gestiones de los productores, pero poco respetable.

[235] Véase el cap. VII de este libro, y, para el antisemitismo en Argentina, Brasil y Chile, véase Sandra McGee Deutsch, *Las Derechas: The Extreme Right in Argentina, Brazil and Chile, 1890-1939*, Stanford University Press, Stanford, 1999, pp. 167-168, 227-231, 275-276. En México también hubo un resurgimiento de antisemitismo en los años treinta; Alicia Gojman de Backal, *Camisas, escudos y desfiles militares: Los dorados y el antisemitismo en México (19341940)*, FCE, México, 2000.

[236] Alan Knight, *U.S.-Mexican Relations, 1910-1940: An Interpretation*, Center for U.S.-Mexican Studies, San Diego, 1987, pp. 67-69.

[237] Knight, "Politics of the Expropriation…", *op. cit.*, pp. 104-105.

[238] El movimiento sinarquista mexicano, que tuvo su auge hacia finales de los años treinta, adoptó una postura integralista católica (lo que en cierto modo indujo el antisemitismo) distanciada del nazismo y otorgando su cálido apoyo a Franco. Si bien el sinarquismo surgió en los años treinta, no fue una consecuencia particular de la recesión, pues su crecimiento coincidió con la recuperación económica, no con la crisis; recibió la influencia de sucesos políticos mundiales, no económicos, sobre todo de la Guerra Civil española, y representó una continuación de otros medios de la insurrección popular del movimiento Cristero de los años veinte. Véase Pablo Serrano Álvarez, *La batalla del espíritu: El movimiento sinarquista en el Bajío (1932-1951)*, 2 vols, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1992.

[239] Collier y Sater, *History of Chile…*, *op. cit.*, pp. 233-234; Juan Luis Ossa, "El Nacismo en Chile: Auge y caída de una ilusión mesiánica", en *XX. Historia del siglo veinte chileño*, pp. 131-184; Deutsch…, *op. cit., Las Derechas*, cap. 11.

[240] En relación con el movimiento laboral en particular y el campesinado indígena en general, véase Klein, *Parties and Political Change…*, *op. cit.*, pp. 337-338. Hago la comparación con los casos paradigmáticos de Italia y Alemania, donde el fascismo destruyó tanto a la democracia liberal como a los partidos y sindicatos de izquierda; el MNR no tuvo un papel tan negativo pues, de hecho, acogió cada vez más las tendencias demócratas e izquierdistas en sus numerosas filas. Como

en otros casos, resultan pertinentes las comparaciones con Europa Oriental, donde el fascismo en ocasiones adoptó una apariencia más popular y no tan reaccionaria.

[241] R. G. Williams, *States and Social Evolution…*, *op. cit.*, p. 236, adopta la misma postura en relación con Centroamérica, haciendo hincapié en "la sorprendente diversidad de estructuras económicas y políticas", que conlleva a la necesidad de buscar "causas locales" para el cambio, en lugar de atribuirlo a "las fuerzas sistémicas del mundo".

[242] Para el caso mexicano, véase Friedrich Schuler, *Mexico between Hitler and Roosevelt: Mexican Foreign Relations in the Age of Lázaro Cárdenas, 19341940*, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1998. Para plantear un contrafáctico meramente especulativo, si Jacobo Arbenz hubiese hecho el intento de poner en marcha su proyecto socioeconómico en los años treinta en lugar de en los años cincuenta, Guatemala quizás hubiese logrado evitar la intervención de los Estados Unidos y la contrarrevolución.

[243] Drake, *Between Tyranny and Anarchy…*, *op. cit.*, p. 164. Véase también Ian Roxborough, "Unity and Diversity in Latin American History", *Journal of Latin American Studies* 16, núm. 1 (1984), p. 8, quien identifica, y critica, el "patrón modal" (es decir, la interpretación convencional) del desarrollo político y económico de Latinoamérica que considera a los años treinta como el inicio de una etapa de 30 años de formas "bonapartistas" de Estado y de movimientos políticos "populistas".

[244] En otras partes he criticado el uso del término *populista* como un concepto fundamental de organización; Alan Knight, "Populism and Neo-populism in Latin America (especially Mexico)", *Journal of Latin American Studies* 30, núm. 2 (1998), pp. 223-248.

[245] Alain Rouquié, *Amérique latine: Introduction à l'extrême occident*, Seuil, París, 1987.

[246] Daniel James, *Doña María's Story: Life History, Memory and Political Identity*, Duke University Press, Durham, 2000, pp. 37-41.

[247] Mary Kay Vaughan, *Cultural Politics in Revolution: Teachers, Peasants and Schools in Mexico, 1930-40*, University of Arizona Press, Tucson, 1997.

[248] W. H. Auden, "September 1 1939", en Robin Skelton (ed.), *Poetry of the Thirties*, Penguin, Harmondsworth, 1964, p. 280; Richard Overy, *The Morbid Age: Britain and the Crisis of Civilization, 1919-1939*, Penguin, Londres, 2010, p. 360. Aunque este último libro se centra en la Gran Bretaña, parece que quisiera afirmar, al menos en el título, que una enfermedad similar infectó a toda la "civilización" (que, yo esperaría, incluye a América Latina).

[249] Citado en Randolp Starn, "Historians and 'Crisis'", *Past and Present* 52, núm. 1 (1971), p. 6.

ACERCA DE LOS AUTORES

MARCELO BUCHELI (doctor en Stanford University). Profesor asociado de administración de negocios e historia en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Es autor de *Bananas and Business: The United Fruit Company in Colombia, 1899-2000* (2005), así como de artículos diversos sobre las industrias latinoamericanas del petróleo y el banano publicados en revistas académicas y en trabajos colectivos.

CARLOS CONTRERAS. Historiador y profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Instituto de Estudios Peruanos. Obtuvo su doctorado en El Colegio de México con una tesis sobre la economía peruana de finales del siglo XIX y principios del XX, próxima a publicarse. Ha desarrollado investigaciones sobre la minería y la evolución de la economía peruana posterior a su independencia. Es autor de *Mineros y campesinos en los Andes* (1988), *El aprendizaje del capitalismo* (2004) y, en coautoría con Marcos Cueto, *Historia del Perú contemporáneo* (2007).

PAULO DRINOT. Profesor asociado de historia latinoamericana en el Institute of the Americas de University College de Londres. Es autor de *The Allure of Labor: Workers, Race, and the Making of the Peruvian State*, Duke University Press, 2011, así como de artículos diversos y capítulos de libros sobre diferentes aspectos de la historia de Perú, editor de *Che's Travels: The Making of a Revolutionary in 1950s Latin America*, Duke University Press, 2010, y coeditor de *Más allá de la dominación y la resistencia: Estudios de historia peruana, siglos* XVI-XX (2005).

JEFFREY L. GOULD. Profesor de la cátedra de historia James H. Rudy en la Universidad de Indiana. En esa misma institución, ocupó el cargo de director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de 1995 a 2008. Su libro más reciente es *To Rise in Darkness: Revolution, Repression, and Memory in El Salvador, 1920-1932*, en coautoría con Aldo Lauria, Duke University Press (2008). Entre sus libros anteriores se encuentran *To Lead as Equals: Rural Protest and Political Consciousness in Chinandega, Nicaragua, 1912-1979* (1990); *El Mito de Nicaragua mestiza y la resistencia indígena* (1997), y *To Die in This Way: Nicaraguan Indian Communities and the Myth of Mestizaje, 1880-1965*, Duke University Press (1998). Es coautor de *The Twentieth Century: A Retrospective* (2002).

También aparece como coeditor de *Memorias de mestizaje: la política cultural en América Central desde 1900*, un libro que plasma el trabajo de un proyecto colectivo para el National Edowment for the Humanities, codirigido junto con Charles Hale y Darío Euraque. Gould fue coproductor y codirector del documental *Scars of Memory: El Salvador, 1932* (2003), merecedor de un Galardón al Mérito en el Festival de Cine LASA (Latin American Studies Association). Recientemente terminó otro documental titulado *La palabra en el bosque*, que trata sobre las comunidades cristianas de base en Morazán, El Salvador, durante el decenio de 1970 (en colaboración con Carlos Henríquez Consalvi). En 2002, le fue otorgada la beca John Simon Guggenheim.

ROY HORA. Profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, e investigador para Conicet. Obtuvo su doctorado en historia moderna por la Universidad de Oxford (1998). Es autor de *The Landowners of the Argentine Pampas: A Social and Political History, 1860-1945* (2001), *Los estancieros contra el Estado: La Liga Agraria y los orígenes del ruralismo político en Argentina* (2009), e *Historia económica de la Argentina en el siglo* XIX (2010).

ALAN KNIGHT. Profesor de historia de América Latina en la Universidad de Oxford. Su tema principal de estudio es la historia latinoamericana del siglo XX, con enfoque particular en México, la sociedad agraria, la construcción del Estado y las revoluciones. Es autor de *The Mexican Revolution* (2 vols., 1986); *US-Mexican Relations, 1910-1940* (1987); el capítulo sobre México, 1930-1946, en *The Cambridge History of Latin America* (vol. 7, 1990), y dos volúmenes de la historia general de México en tres tomos *Mexico: From the Beginning to the Conquest*, and *Mexico: The Colonial Era* (2002). Es autor de artículos diversos sobre aspectos de México en el siglo XX (construcción del Estado, movimientos populares, educación y cultura, política actual) y fue coeditor de *The Mexican Petroleum Industry in the 20th Century* (1992). En la actualidad trabaja en la fase final del tercer volumen de la historia general *Mexico since Independence*, y en la investigación para un estudio sociopolítico de México en los años treinta. Ex profesor en la Universidad de Essex y la Universidad de Texas en Austin, donde ocupó la cátedra C. B. Smith; en 1986 fungió como miembro honorífico de la junta de gobierno del Center for U.S.-Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego.

GILLIAN MCGILLIVRAY. Profesora asociada en el Glendon College de la Universidad de York en Toronto, Canadá. Comprometida con temas de microhistoria y estudios comparativos, e interesada en los desarrollos tempranos del siglo XX —auge y caída de la guerra a nivel mundial; así como nacionalismo, populismo y revolución a nivel local—, McGillivray plasma estos conocimientos en el libro *Blazing Cane: Sugar Communities, Class, and State*

Formation in Cuba, 1868-1958 (Duke University Press, 2009), así como en su nuevo proyecto de investigación "Sugar and Power in the Brazilian Countryside, 1928-1963" [Azúcar y poder en el campo brasileño]. *Blazing Cane* fue merecedor del galardón Choice Outstanding Academic Title de 2010 y del Glassman Award otorgado por la Universidad de Georgetown a la mejor tesis del área de humanidades en 2003.

LUIS FELIPE SÁENZ. Licenciado y maestro en economía por la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Se desempeñó como becario de investigación para el Banco Interamericano de Desarrollo de Washington. Al momento de la publicación de este libro prepara su doctorado en economía para la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

ÁNGELA VERGARA. Profesora asociada de historia en la Universidad del Estado de California en Los Ángeles. En 2002 se doctoró por la Universidad de California en San Diego. Es autora de *Copper Workers, International Business, and Domestic Politics in Cold War Chile* (2008) y coeditora de *Company Towns inthe Americas*. Ha investigado, presentado y publicado sobre un amplio rango de temas, como relaciones laborales, salud pública, capitalismo paternalista y de bienestar, movimientos sociales, cooperativas rurales e internacionalismo laboral. El capítulo que presenta en este libro forma parte de un proyecto más amplio sobre la historia social y laboral de la Gran Depresión en Chile y las repercusiones de largo aliento del desempleo en la identidad política de los trabajadores.

JOEL WOLFE. Profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Massachusetts en Amherst. Es autor de *Autos and Progress: The Brazilian Search for Modernity* (2010) y *Working Women, Working Men: São Paulo and the Rise of Brazil's Industrial Working Class, 1900-1955* (Duke University Press, 1993). Al momento de la publicación de esta obra se encuentra trabajando en un libro cuyo título provisional es *The Global Twenties: Trade and Society in the Western Hemisphere in the 1920s*.

DOUG YARRINGTON. Profesor asociado de historia en la Universidad Estatal de Colorado. Es autor de *A Coffee Frontier: Land, Society and Politics in Duaca, Venezuela, 1830-1936* (1997) y de artículos para las revistas *Hispanic American Historical Review*, *Journal of Latin American Studies*, *Latin American Research Review* y *The Americas*. En la actualidad trabaja en un libro sobre corrupción, anticorrupción y formación del Estado venezolano entre 1908 y 1948.

ÍNDICE

Sumario
Agradecimientos
*Introducción,*Paulo Drinot

I. *Repercusiones de la Gran Depresión en la sociedad argentina,* Roy Hora
Argentina en el contexto de la Depresión
La búsqueda de movilidad social y las clases medias
Las transformaciones del mundo obrero
La década de 1930 vista en perspectiva

II. *Los trabajadores chilenos y la Gran Depresión,1930-1938,* Ángela Vergara
Cesantía y movilidad geográfica
Ocupación de espacios públicos: albergues y comedores para pobres
Mejores condiciones laborales en medio de la crisis y la inflación
Conclusiones

III. *Cambio y continuidad: Brasil de 1930 a 1945,* Joel Wolfe

IV. *La Gran Depresión en Perú,* Paulo Drinot y Carlos Contreras
Las repercusiones económicas de la Gran Depresión
El surgimiento de la política de masas
Manejo de la economía por parte del Estado
Manejo de lo social por parte del Estado
Conclusiones

V. *El proteccionismo exportador y la Gran Depresión. Compañías multinacionales, élite doméstica y políticas de exportación de Colombia,* Marcelo Bucheli y Luis Felipe Sáenz
Proteccionismo exportador y choques externos en Colombia
La industria del café: barreras de entrada bajas, acción colectiva fuerte
La industria bananera: barreras de entrada medias, acción colectiva débil
La industria del petróleo: barreras de entrada altas, estrategia política diplomática
Conclusiones

VI. *Transición política en una época de extremos: Venezuela en los años treinta,* Doug

Yarrington
La política económica del régimen de Gómez
La oposición en el exilio
López Contreras y las protestas de 1935-1936
Un consenso precario
Resurgimiento conservador y democracia elitista
Conclusiones
Epílogo

VII. *Dictadores indigenistas y los orígenes problemáticos de la democracia en Centroamérica*, Jeffrey L. Gould
El Salvador
Nicaragua
Guatemala
Conclusión: consecuencias políticas del indigenismo de la década de 1930

VIII. *Carácter y repercusiones de la Gran Depresión en México,* Alan Knight

IX. *Cuba: Depresión, imperialismo y revolución, 1920-1940,* Gillian McGillivray
Azúcar, turismo y afrocubanismo
Depresión y dictadura en el campo y la ciudad
¿Un *New Deal* para Cuba?
Intervención gubernamental revolucionaria en el campo
Contención e institucionalización de la Revolución: 1934-1940
Conclusión

X. *Panorama general de la Gran Depresión en América Latina*, Alan Knight
La economía en la Gran Depresión
Política de la Gran Depresión (coyuntural)
Política de la Gran Depresión (estructural)
Política de la Gran Depresión (social)

Acerca de los autores

La década posterior al gigantesco derrumbe del sistema financiero de 1929 estuvo marcada por una de las peores crisis económicas en la historia, cuyos efectos fueron tan devastadores que dejaron en la miseria a millones de personas e influyeron en el ascenso del fascismo en Alemania y en el estallido de la segunda Guerra Mundial. En América Latina el periodo de la Gran Depresión se caracterizó por la consolidación de dictaduras militares y el estallido de guerras civiles, al igual que por la aceleración de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales.

Paulo Drinot y Alan Knight reúnen aquí una decena de ensayos que hacen un recorrido histórico desde el río Bravo hasta la Patagonia, para detallar la forma en que la Gran Depresión transformó la realidad política, social y económica latinoamericana. Con temas como el desempleo masivo de trabajadores en Sudamérica o el fervor nacionalista en México, esta obra repasa uno de los episodios más relevantes del siglo XX y esclarece el lugar que América Latina ocupó en él. Estas miradas trascienden el aspecto económico y explican también las turbulencias políticas, los ímpetus reformistas, las formas del nacionalismo y la colisión de las ideologías de aquel periodo.

www.fondodeculturaeconomica.com